

27m

250

EL MARQUÉS DE SANTA MARTA

ESTUDIO BIOGRÁFICO



S. P. DeGunnary

EL MARQUÉS
DE SANTA MARTA

ESTUDIO BIOGRÁFICO

POR

ENRIQUE VERA Y GONZÁLEZ



MADRID
IMPRENTA DE DIONISIO DE LOS RÍOS
CALLE DEL NORTE, NUM. 21

1894
R. 55.489



Es propiedad.



INTRODUCCIÓN



PODRÍA resumirse la biografía del marqués de Santa Marta con decir que es el tipo perfecto del antiguo caballero español, con todos los idealismos, generosidades, arranques, ensueños, entusiasmos y nobles temeridades de nuestra raza. En su fisonomía, de rasgos á la vez delicados y enérgicos, está impreso el sello de aquellos luchadores valerosos de la Edad Media, que, á la vez que servían de contrapeso á las absorbentes tendencias de la autoridad real peleando como bravos para defender sus fueros y privilegios contra los Monarcas, sabían reservar aún actividad y vigor suficientes para ensanchar más y más los dominios de Castilla, ganando con la punta de su espada territorios y ciudades y mostrándose intrépidos

en los campos de batalla, arrogantes y altivos en los salones de los reyes; afables y dignos con los que, al par que sus vasallos, eran sus hombres de armas; rendidos y amantes con las damas; leales hasta el sacrificio de la vida en empeños de honor; enamorados del peligro, esclavos de su palabra, pródigos de su sangre y nobles con amigos y adversarios. De esos hombres entusiastas y caballerescos que hicieron posible la epopeya de la Reconquista y que oscurecieron los mitos de la Iliada y del ciclo de Carlo Magno con sus hazañas en Granada, en Italia, en América y en Flandes, desciende el marqués de Santa Marta: corre por sus venas la sangre de Guzmán el Bueno, y aun nacido en una época de frío positivismo y de gran postración de ideales, ha sabido demostrar que palpitaban en su alma aspiraciones generosas, que no se amoldaba su espíritu á los mezquinos cálculos que constituyen la moral vulgar de estos tiempos y que sabía renunciar en aras de su conciencia y de su positivo patriotismo, no sólo á esperanzas cortesanas, que siempre consideró mezquinas, sino á toda clase de distinciones públicas, aún cuando las hubiera ganado sobradamente con su abnegación y sus constantes sacrificios en favor de la causa á que dedicó su fortuna y las poderosas energías de su espíritu.

Este apartamiento de las altas posiciones oficiales, nada común aun en aquellos que de abnegación alardean con palabras desmentidas por los hechos, es un dato de verdadera fuerza para juzgar del sincero desinterés con que el marqués de Santa Marta, aristócrata por su sangre, por su educación y por las elevadas tendencias de su sentimiento, se ha consagrado al servicio de las ideas democráticas interpretadas por él como la aplicación rigurosa de la justicia á todas las manifestaciones de la vida política y social. No ha sido el Mirabeau, que reniega de su clase por despecho ó por vengarse de inmerecidas postergaciones, ó por conquistar una popularidad halagadora; no ha sido el ambicioso que, viendo en cada cortesano un rival en la empresa de alcanzar dignidades oficiales, se convierte en agitador para recabar del turbulento apoyo de las masas lo que no pensaba lograr fácilmente por medio de intrigas palaciegas; no ha hecho del pueblo escabel para subir al Gobierno; sino que ha consagrado en aras de la causa democrática cuanto era y cuanto valía, sacrificando intereses cuantiosos, atrayéndose persecuciones y arrostrando peligros, sin querer admitir cuando llegó la hora del triunfo, participación alguna en el poder. Este rasgo de abnegación y modestia honra mucho al marqués de Santa Marta y explica, unido á

otras condiciones estimables de su carácter, el respeto y la simpatía de que le han hecho objeto siempre los que saben honrar las convicciones sinceras.

El espectáculo, bien digno de llamar la atención, que ofrece un hombre aristócrata por su cuna, colocado por sus riquezas entre los privilegiados de la suerte; llamado á ocupar con sólo haberlo deseado, los cargos que más pueden halagar la vanidad y atribuir poderío é influencia y que, sin embargo, cerca ya de la cima social prefiere descender al valle en que se agitan confusamente los dolores y miserias humanas; hace abstracción de los prejuicios y preocupaciones de clase, aprecia más la cualidad de ciudadano que la de noble, y prefiriendo el honor moral á los honores materiales, la dignidad del pensador sincero á las dignidades de cancillería, se declara franca y explícitamente campeón del derecho y partidario de la democracia; ese espectáculo, que se presta á muy hondas reflexiones, bastaría para dar interés á la biografía del marqués de Santa Marta. Pero además esa biografía es una demostración patente de constancia y desinterés que puede y debe servir de ejemplo y es al mismo tiempo una prueba de que no son las posiciones oficiales las que dan más importancia á los hombres políticos dentro de la democracia; sino que

esa importancia se adquiere principalmente por los servicios valiosos, por los esfuerzos continuos realizados en pro de la causa de la libertad, sobre todo, cuando esos esfuerzos y esos servicios se prestan por amor á las ideas y sin la esperanza próxima ni lejana de una recompensa más ó menos brillante.

Aparte de esto, el marqués de Santa Marta, á quien siempre hallaron sus correligionarios dispuesto al sacrificio en los dias de lucha, y voluntariamente alejado de la distribución de premios después de la victoria, ha ejercido, en estos últimos años sobre todo, una influencia aún no bien apreciada, pero de inmenso valor en lo que se refiere á la organización íntima y á la vida de relación de los partidos republicanos. No deja de ser curioso el hecho de que un hombre perteneciente á la aristocracia, haya venido á dar ejemplos de democracia práctica á los que se apresuraban á convertirse en pequeños reyes apenas contaban con un grupo más ó menos numeroso que reconociese su jefatura; pero el hecho es que así ha ocurrido, y que la beneficiosa iniciativa del marqués de Santa Marta al recordar á los jefes republicanos que no eran monarcas absolutos y á los ciudadanos que forman en los partidos democráticos que eran y debían ser algo más que vasallos sumisos ó esclavos

inertes; esa iniciativa fecunda, desarrollada en años de propaganda incesante, ha herido de muerte prácticas abusivas que pugnaban con la tendencia y significación de las agrupaciones republicanas; ha hecho imposibles las dictaduras irresponsables de estas ó las otras personalidades ensoberbecidas, y ha marcado un carácter nuevo á la organización de la democracia militante; pues son ya muchos los persuadidos de que no cabe predicar con autoridad y con fruto doctrinas que representan la más avanzada fórmula de la libertad, si por otra parte se tiene como hábil y provechosa la tiranía en la vida interior de los partidos democráticos.

Nadie podrá disputar al marqués de Santa Marta la gloria de esta campaña regeneradora, ni la que merece por haber procurado con una constancia y energía que se acrecentaban con los obstáculos, que aunasen sus fuerzas, sin menoscabo de sus particulares doctrinas, cuantos de buena fe anhelaban el establecimiento de la República española. El clamoreo de las pasiones concitadas contra estas empresas, ha evidenciado más y más que las iniciativas del marqués de Santa Marta respondían á necesidades muy honradas, y la experiencia de nuevos y sensibles desengaños ha hecho que se reconozca hasta qué punto eran

prácticas y convenientes las soluciones propuestas por ese hombre desinteresado, íntegro y ageno á las mezquinas aspiraciones de los que, más bien que en el triunfo de la República, parecen soñar con el de una parcialidad cualquiera que les reconozca como señores y se imponga al país á pretexto de una democracia fingida, que en tales condiciones no podrá ser más que una máscara.

Comprende, pues, la biografía del marqués de Santa Marta, demasiadas cuestiones importantes para que no sea su publicación del más vivo interés. A más de grandes ejemplos contiene lecciones útiles que deben ser aprovechadas. Es, á la vez, un tributo de simpatía y estimación á un hombre respetable, á un político sincero, honrado y consecuente y una exposición de hechos notables por el mismo realizados ó determinados, y que encierran alto interés, como clave que son muchos de ellos de importantes sucesos políticos que la generalidad de las personas conoce sólo en sus resultados y desconoce en sus orígenes.





PLAN DE LA OBRA



LA biografía del marqués de Santa Marta se relaciona necesariamente con el desarrollo de la política contemporánea española, ya que el biografiado ha tenido intervención muy directa en acontecimientos de la mayor importancia y aún determinado por sí varios de verdadera entidad. Pero esta obra no es una historia general de la política española, y de aquí el que haya de limitarse á someras indicaciones sobre estos puntos, sin perjuicio de estudiar en conjunto las principales transformaciones verificadas en el período que comprende la vida del ilustre hombre público á que está dedicada y de consagrar más detenido examen á los hechos en que directamente ha influido. Desde este punto de vista cabe dividir la biografía del marqués de Santa Marta en siete períodos.

Abarca el primero desde su nacimiento hasta el año 1864, en que hizo pública ostentación de las avanzadas ideas democráticas que profesaba desde los primeros años de su juventud y que ha mantenido con ejemplar consecuencia durante toda su vida. En este primer período se traza, en un rápido bosquejo de la existencia juvenil del biografiado, su simpática y caballeresca personalidad moral; se da idea de su carácter, de sus tendencias y de los hechos más culminantes en que se traducen. Hombre de ardientes pasiones, entre las que ha predominado siempre el amor á la justicia y el entusiasmo por los ideales del progreso, el marqués de Santa Marta, una vez formulada su convicción en el fondo de su conciencia, no podía menos de concluir por exteriorizarla, con tanta más viveza y radicalismo cuanto mayores fueran los obstáculos que el medio ambiente social en que había nacido y vivía opusieran á esta expansión de sus sentimientos. Los penosos incidentes de esta lucha con las preocupaciones de una clase ilustre y respetable, pero en general rezagada en el movimiento de las ideas; los choques continuos y las mortificaciones de amor propio que forzosamente ha de sufrir un espíritu delicado en esta especie de divorcio intelectual entre gloriosas, pero exclusivistas tradiciones, é imperiosos dictados de una conciencia cultivada con el estudio y animada de un ardiente amor á la justicia, serán indudablemente apreciadas en lo que valen por todas las personas rectas y constituyen con su valiente desenlace uno de

los mejores títulos que á la estimación de sus conciudadanos puede presentar el marqués de Santa Marta.

El segundo período comprende desde el año 1864 hasta el 1868 en que se inició la revolución de Septiembre, de que la restauración borbónica es en realidad uno de los episodios y desenvolvimientos, pues nada hay inútil en la historia y las restauraciones suelen ser más bien de personas ó familias que de procedimientos y sistemas incompatibles con el espíritu de los tiempos. En ese período de cuatro años hay en la vida del marqués de Santa Marta episodios de verdadero interés. Es uno de ellos la campaña titánica que sostuvo contra el Banco, que, de igual modo que ahora, tenía á su devoción á los Gobiernos y solía interpretar en contra de los intereses públicos sus Estatutos y aun apartarse de la letra y espíritu de éstos y de las leyes mercantiles, con grave perjuicio del comercio y de los particulares. Esta lucha colosal en que el Banco echó mano de toda clase de influencias y utilizó en su apoyo el dictamen de los más reputados jurisconsultos, duró varios años y terminó con la completa victoria del marqués de Santa Marta, representante de los intereses del público en contra de aquel establecimiento privilegiado, que se atrevía á todo. Sentó así el Marqués un precedente de gran valor y mostró una vez más la entereza de su carácter.

A este período corresponde también la pública filiación del marqués de Santa Marta en la democracia militante, sus esfuerzos y sacrificios valiosísimos para

acelerar el triunfo de la revolución en una época en que estos trabajos se hacían con seria exposición de la fortuna, la libertad y la vida. Los sucesos que inmediatamente precedieron á el movimiento del 22 de Junio de 1866 y esta misma tentativa, la más formidable de cuantas hicieron los revolucionarios, realizáronse con la intervención eficacísima del marqués y le ocasionaron persecuciones y riesgos que, lejos de arredrar su tesón, le avivaron más y más, como se demostró en empresas ulteriores que colocan con justicia al marqués de Santa Marta en las primeras filas de los caudillos de la causa del pueblo.

En el tercer período se examina la intervención del marqués de Santa Marta en los principales acontecimientos de la revolución de Septiembre hasta la abdicación de D. Amadeo de Saboya. Es de alto interés su campaña en las Cortes como diputado de la extrema izquierda federal, su cooperación constante en los trabajos de aquella brillante minoría y su gestión eficaz en los Directorios republicanos.

Comprende el cuarto período los diez agitadísimos meses en que á través de tormentas políticas, de incessantes conspiraciones y de contrariedades penosas, se deslizó la triste existencia de la República española. No quiso el marqués de Santa Marta figurar en ninguno de los Gobiernos que se sucedieron en aquel borrascoso período, y su modestia, que tuvo bien pocos imitadores, fué muy de sentir, pues aquella República que contó en el poder á tantos hombres de extraordi-

nario talento, murió principalmente por anemia de caracteres. Se necesitaban allí grandes arranques, poderosas energías, ardiente fe en la revolución y faltó todo esto. En la historia de la primera República francesa abundan extraordinariamente los rasgos de audacia; en vano se amontonan dificultades y conflictos, tormentas y catástrofes sobre los hombres de la revolución; en vano á la guerra civil y á las conspiraciones interiores se unen tremendas coaliciones de potencias reaccionarias; aquellos caracteres diamantinos arrostran la tempestad y la desafían; á cada peligro se muestran más arrogantes; no hay riesgo á que no opongan un valor estóico que raya lo sobrehumano; la Convención eclipsa al Senado de Roma: Dantón, Robespierre, Saint Just, parecen colosos de granito; la palabra debilidad es sinónimo de traición; la temeridad, el delirio, el atrevimiento sublime salvan aquella República, porque hay fe en sus apóstoles, porque aquella revolución tiene creyentes que llegan hasta el fanatismo. Nuestra República no llegó á durar un año, y sus enemigos eran hartos más débiles que los de la democracia francesa del 93. Los cerebros sirven de poco donde faltan corazones y voluntades.

No tuvo el marqués de Santa Marta participación en las tristes responsabilidades del poder durante aquellos diez meses; se contentó con hacer indicaciones y dar consejos que no fueron seguidos; su fe se mantuvo inquebrantable, y en la azarosa sesión del 3 de Enero demostró con su voto que sus convicciones franca-

mente revolucionarias no se habían entibiado, y que era de los que creían que, para salvar la República, había que mirar adelante y no atrás; crear intereses en el pueblo en vez de arrojarlos en brazos de los hombres del pasado. Desgraciadamente la traición coronó entonces la obra de la debilidad, y el marqués de Santa Marta, que no quiso ostentar el brillo del Poder á que le llamaban su representación, sus méritos y el deseo de sus correligionarios, tiene como recuerdo de aquél período una página honrosísima en su historia: la delegación, con facultades discrecionales, del antiguo Patrimonio de la corona, que ejerció sin admitir sueldo y con una probidad, una rectitud y una laboriosidad que no han sido ni podrán ser superadas.

La situación que conservando el nombre de República, pero revistiendo todos los caracteres de una vergonzosa dictadura, creó un general rebelde el 3 de Enero de 1874 y llevó á su lógico desenlace otro general rebelde el 29 de Diciembre del mismo año, da comienzo al quinto período de esta biografía. En este período que dura diez años, el marqués de Santa Marta, manteniendo siempre vivas sus creencias republicanas y federales, hace cuanto le es dable para que estas ideas se arraiguen y difundan: excita al Sr. Pí y Margall á que las concrete en un libro, y de aquí la publicación de la hermosa obra *Las Nacionalidades*, que le es dedicada. La Asamblea federal eleva una vez más al marqués de Santa Marta al Consejo del partido, y

careciendo éste de un órgano diario en la prensa, funda el biografiado *La República*.

El sexto período llega desde 1884 á 1888, y comprende principalmente la historia interior de los partidos republicanos, sobre todo el federal, y la exposición de las causas que obligaran al marqués de Santa Marta á recabar plena libertad de acción dentro de su partido, manteniendo íntegras sus convicciones de toda la vida.

Por fin, el período séptimo, aunque muy breve en duración, pues apenas abarca tres años, es fecundo en acontecimientos de importancia. Comprende el nacimiento y las vicisitudes de la gran Coalición republicana iniciada por el Marqués, y que vino á determinar una serie de transformaciones importantes en las agrupaciones democráticas y un cambio altamente favorable en el carácter de sus relaciones mutuas. Este período es seguramente el de más vivo interés en esta biografía y contiene revelaciones de tanta mayor importancia cuanto son generalmente desconocidas.

Llega aquí la personalidad del marqués de Santa Marta á revestir una importancia excepcional. Rechazando toda clase de poderes, viene á asumirlos todos por la confianza de los republicanos y las exigencias del momento; alcanza á la vez jurisdicción sobre varios partidos sin aceptar la dirección de ninguno, y afirma vigorosamente su alta significación revolucionaria, terminando con honor la difícil empresa que comenzó con valor y constancia infatigables.

Tal es el plan que ha de seguirse en esta biografía, que encierra interés, no ya para todos los republicanos, sino para todos los hombres de convicciones sinceras, pues es la de un patricio honrado y la de un político severo y digno, que ha procedido siempre de acuerdo con su conciencia.



PRIMER PERIODO



CAPÍTULO I

Carácter é inclinaciones de D. Enrique Pérez de Guzmán el Bueno.—Su genealogía.—Primeros tiempos de su juventud.—Sus estudios universitarios y su vocación por la milicia.—Viajes por Europa y afición que en él determinan hacia las bellas artes.—Sus estudios y tendencias políticas.



NACIÓ D. Enrique Pérez de Guzmán el Bueno en la ciudad de Córdoba el día 14 de Julio de 1826 en el seno de ilustre y aristocrática familia, considerada entre las más nobles del reino por remontarse sus blasones á fines del siglo décimotercero, como descendiente en línea recta del ilustre defensor de Tarifa, D. Alfonso Pérez de Guzmán, al que Sancho IV honró con el sobrenombre de *el Bueno*, en recompensa de la insigne hazaña con que acrisoló su lealtad, traspasando los límites humanos del heroísmo.

Es, pues, la patente de nobleza de D. Enrique Pérez de Guzmán el Bueno de las que nunca podrán ser miradas con desagrado por el pueblo español ni aún desde el punto de vista más igualitario; pues no se funda como muchos otros títulos aristocráticos en vio-

lentas usurpaciones de territorios hechas durante el período de la reconquista, ni menos aún en graciosas concesiones de este ó el otro monarca como pago de servicios* que no siempre podrían confesarse sin rubor, ni resulta de la entrega de una determinada cantidad al Erario en tiempos de estrecheces para el real Tesoro, ni de merced de un ministro de Estado ó Gracia y Justicia, convertido en dispensador de grandezas; ni, por último, de *limosna* más ó menos cuantiosa y arreglada á tarifa, para enriquecer, después de las filtraciones de rigor en la curia eclesiástica, el Tesoro pontificio. El apellido de Guzmán el Bueno tiene siempre eco simpático para todos los corazones españoles; representa y simboliza virtudes cívicas llevadas hasta el sacrificio y que podrán censurarse desde el punto de vista de los deberes naturales, mas nunca desde el de los deberes patrios; pues en materias de lealtad y honor es difícil determinar si cabe exceso y donde comienza éste.

Dígase lo que se quiera y aun aceptando con toda la adhesión que merecen á los espíritus libres de preocupaciones las teorías enaltecedoras que proclaman la igualdad esencial de todos los individuos de la raza humana, siempre recordarán las familias con respeto á sus ascendientes ilustres y se enorgullecerán con sus altos hechos. Este sentimiento de solidaridad entre el sepulcro y la cuna está tan profundamente arraigado en el corazón de todos los hombres que forma la trama de la historia. Las familias antiguas, desde épocas

que escapan á las más atrevidas investigaciones, profesaban el culto de los antepasados; el padre era en vida rey, pontífice, magistrado, legislador y dueño del hogar, y al morir aún parecía enaltecerse, pues pasaba á ser un dios protector de la casa que le había tenido por jefe; sus hijos y nietos le adoraban, celebraban festividades ante el ara en que reposaban sus cenizas, trataban de hacérsele propicio imitando los rasgos más nobles de su conducta y temían su desagrado si llegaban á cometer acciones deshonorosas. Este respeto á los ascendientes ilustres fué la base religiosa y política de todas las sociedades durante muchos siglos y aun hoy sirve de fundamento á la organización de todos los pueblos que no han aceptado el régimen de vida de las ciudades. Aun en aquellos que alcanzan la más refinada civilización, se reputa infame á quien mancha con su torpe conducta los timbres de honradez que heredó de sus mayores. El sentido general, de acuerdo con las indicaciones de la ciencia biológica, cree en la continuidad de las buenas y malas cualidades de la raza á través de sucesivas generaciones, y al decirse que por las venas de un hombre circula la sangre de sus más remotos antepasados, se enuncia algo más que una bonita frase; una innegable verdad científica.

Nobleza obliga; tal es la divisa de los bien nacidos, ya descendan de un emperador poderoso, ya de un artesano honrado, y ese ha sido el emblema que Don Enrique Pérez de Guzmán ha querido realizar en todos

los actos de su vida privada y pública. Tenía en su ilustre ascendiente altos ejemplos que imitar y como él, ha sido leal y caballero y ha sacrificado afecciones é intereses que podían halagar su corazón y sembrar de flores su vida, en aras del escrupuloso dictado de su conciencia. Aristócrata y con un apellido que no puede oírse sin que asalte la memoria el recuerdo de altos hechos, creyó que de ningún modo podía honrar tanto la lealtad del guerrero del siglo XIII como empezando por no hacer traición á su conciencia. Ésta le decía que los actos más grandiosos, las empresas más heróicas, los rasgos más generosos de valor y abnegación no son ni pueden ser patrimonio exclusivo de hombres determinados; que en el fondo todo hombre es y debe ser capaz de conseguir lo que el más alto si sabe inflamar su corazón, cultivar su inteligencia y fortalecer su carácter; que no hay razón alguna para que la humanidad deba estar dividida en castas aun dentro de la misma raza y del mismo pueblo; que lejos de establecer separación radical entre los individuos en quienes concurren facultades sobresalientes de belleza, valor y carácter y el resto de los hombres, debe hacerse cada día más íntima la comunicación para que se perfeccione más cada vez el término medio humano y todo nuestro linaje vaya así depurándose en incesante evolución hasta sobrepajar las condiciones que hoy nos parecen más inaccesibles.

Obedeciendo á estas ideas fué el marqués de Santa Marta demócrata desde su juventud, y como el tiempo

no ha hecho sino arraigar en su espíritu tales convicciones, no ha vacilado en proclamarlas en voz muy alta. No concibe la democracia á la manera de esos niveladores que sueñan con hacer de la humanidad un desierto de arena en que no sobresalga un átomo sobre otro; cree en la igualdad específica y fundamental de los hombres, en la justicia de que el más ínfimo no pueda ver negadas por odiosas trabas legales sus aspiraciones hacia lo más alto, en la necesidad moral y jurídica de que se suponga en todos igual capacidad para la vida del derecho; pero admite y respeta las desigualdades que dentro de la semejanza específica crean la educación, la actividad, el estudio, la perseverancia del carácter, la repetición de actos buenos y en general el adecuado cultivo de las condiciones necesarias para el cumplimiento de los fines racionales de la vida. Estas variedades que afirman la individualidad de cada hombre y le crean una aptitud especial, debida casi siempre á sus propios esfuerzos, no pueden ser desconocidas ni puestas siquiera en duda y determinan en el fondo la constante existencia, no ya de una aristocracia, sino de una serie de aristocracias de individuos caracterizados por su ilustración, su talento, su probidad, su valor, su energía física ó moral y hasta por su riqueza, pues al fin la adquisición de bienes suficientes á cumplir con desahogo el fin económico de la vida será siempre una necesidad y una aspiración de todos los hombres y contra los delirios comunistas que pretenden la miseria universal

haciendo del tiempo la medida del trabajo y recompensando de igual suerte al inventor de una máquina que ahorra fatigas á millones de hombres que al más adocenado de los conductores de ganados, está el sentimiento de justicia que exige se recompense á cada uno en proporción de sus merecimientos.

Pero del concepto de esta aristocracia de que pueden aspirar en cualquier momento á formar parte todos los hombres de buena voluntad y esa otra aristocracia inaccesible, petrificada, estrecha y como definitiva, que se basa solo en prestigios del fundador de la casa, no siempre igualados ni respetados por sus descendientes, media un abismo, y D. Enrique Pérez de Guzmán ha sabido salvarlo, como lo prueba su misma convicción de que nobleza obliga y de que no es digno de ostentar apellidos ó títulos ilustres quien no sabe proceder en todos sus actos de tal modo que el más insigne de sus antepasados pudiera aprobar sin reservas su conducta. «En la época en que Don Alonso Pérez de Guzmán defendió á Tarifa—ha dicho en más de una ocasión el marqués de Santa Marta—las supremas virtudes públicas eran el valor en los combates y la lealtad á los señores. Hoy se conciben ideales más elevados; el sacrificio en aras del pueblo y el culto de la justicia, y yo creo honrar mejor mi apellido trabajando por la libertad de todos mis conciudadanos sin distinción, que por los privilegios de unos cuantos hombres ó los intereses personales de un monarca.»

Para comprender el valor de estas opiniones y la

simpatía que merecen, basta con que cada cual se pregunte con sinceridad absoluta si, poseyendo fortuna cuantiosa y títulos de nobleza que siempre dan consideración y prestigio social y procuran ventajas no despreciables, sabría imitar la conducta del marqués de Santa Marta y hacer públicas sus opiniones favorables á la democracia y la República ó guardaría silencio. Solo se responderán en el primer sentido los que tengan plena convicción de su firmeza y rectitud. Y ha de tenerse en cuenta que el biografiado no sólo desciende de nobles tan caracterizados como Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, sino de Doña Leonor de Guzmán, madre del rey Don Enrique II de Castilla, cuya dinastía continuó reinando sin interrupción hasta los comienzos del siglo XVI, y además lleva entre sus apellidos el de la Cerda que, como es sabido, procede del primogénito de Don Alfonso X el Sabio. Pudiera, pues, afirmar el marqués de Santa Marta que por sus venas corre sangre de reyes; pero á la verdad, nunca se ha preocupado, ni menos envanecido con esta genealogía, que constituiría el orgullo de tantos aristócratas.

Ya quedan trazados en estas indicaciones los principales rasgos del carácter de D. Enrique Pérez de Guzmán el Bueno, apreciado y querido por cuantos se honran con su amistad íntima y conocen su nobleza de pensamiento y los bellísimos arranques de su corazón, pero algunas indicaciones completarán este bosquejo de su fisonomía moral. Nada hay en el marqués de

Santa Marta de esa glacial sequedad que estiman de buen tono muchos advenedizos y que hiere las susceptibilidades ajenas despertando resentimientos y heridas del amor propio. Es digno y severo por educación y por naturaleza; pero afable y sencillo; no se aleja de los hombres de posición modesta, sino que busca y encuentra en ellos amigos á los que concede su mayor confianza; no le gusta imponer su voluntad, sino compulsar las opiniones de todos y estima sinceramente á los que le adviertan con franqueza algún error en que involuntariamente incurra ó le demuestren que alguno de sus propósitos no es acertado; toma en cuenta sin perder la serenidad de ánimo las más vivas contradicciones que se le dirijan y sería difícil buscar un espíritu más tolerante y menos exclusivista, lo que le hace apropiadísimo para encauzar debates y presidir reuniones políticas, como lo demostró en las Asambleas de la Prensa y de la Coalición republicana. Naturaleza de hierro, no se rinde al cansancio físico ni intelectual; duerme pocas horas, hace mucho ejercicio y ha dirigido sin fatigarse empeñadas discusiones en que tomaba parte y que se prolongaban larguísimo tiempo. Nacido bajo el ardiente sol y el hermoso cielo de Andalucía, es fogoso, apasionado y expansivo y desconfía de los caracteres reservados y melancólicos, en los que rara vez hay fondo de bondad. Su corazón es siempre joven y con el mismo ímpetu persigue hoy la realización de sus ideales que cuando tenía veinte años. En suma, D. Enrique Pérez de Guzmán conserva con bri-

llo las caballerescas tradiciones de su raza, y es vehementemente, pundonoroso, arrojado en sus propósitos y empresas y modelo de lealtad y de hidalguía.

Mostró desde los primeros años de su juventud estas condiciones de su carácter. Cuando niño fué inquieto, atrevido, aficionado á los juegos que desarrollan el vigor corporal y ejercitan la agilidad y la destreza y además mostró gran facilidad natural para los trabajos de imaginación y para el estudio. Su educación, en armonía con las exigencias de su clase y la posición de su familia, fué la de un hombre de la mejor sociedad; aprendió filosofía, derecho, literatura, idiomas, esgrima, equitación y gimnasia, llegando á ser, muy jóven aún, un ginete admirable y un diestro tirador de armas. En varios desafíos que mantuvo con tanto valor como fortuna y que hoy recuerda con cierto pesar, mas con la satisfacción legítima de quien supo dejar siempre en el más alto terreno su dignidad, aun cuando su arrogancia juvenil le llevase á extremar algo el puntillo de honor, mostró que era sereno en el peligro, despreciador de la vida cuando creía ver puesta en cuestión su entereza y caballero y galante con sus mismos adversarios. No entra en las condiciones de esta obra dar cuenta minuciosa de esas sus muestras de valor juvenil, que D. Enrique Pérez de Guzmán no ha recordado nunca con vanagloria, sino lamentando que la fogosidad de su carácter le hiciese quizá por aquellos tiempos arrogante y provocativo en demasía; pero de todas suertes los recuerdos de la juventud aparecen

siempre rodeados de un prestigio seductor, pues entonces la sangre circulaba con más fuerza en las venas, el corazón palpitaba con más bríos así ante una mujer hermosa como ante un riesgo que afrontar y más si era determinado por ella; el alma aspiraba á ideales indefinidos, siempre grandes y nobles; había exceso de vida que arriesgar y comunicar, dinero que disipar agradablemente, amigos gallardos y osados á quienes superar en sus alardes juveniles y como en medio de esta vida agitada y tempestuosa había un fondo de caballeridad nunca desmentida, un corazón generoso y bueno, una corrección á toda prueba y un nombre ilustre que mantener y honrar, bien puede decirse que D. Enrique Pérez de Guzmán, si recuerda con melancolía mucho tiempo empleado en los placeres y devaneos del mundo, tiene la satisfacción íntima de no tener que arrepentirse de acción alguna que no pudiera suscribir un cumplido caballero.

En resumen, la juventud del marqués de Santa Marta no fué la de un cenobita; fué la que lógicamente se desprendía de su temperamento apasionado, de su riqueza, de su arrogancia juvenil, de su imaginación fogosa, alimentada en sus ardores por ese hermoso sol de Andalucía que hizo regocijados y joviales á los turdetanos, dulcificó la seca austeridad de los soldados de Roma, fundió el helado corazón de los hombres de Norte, convirtió en voluptuoso delirio la soñadora fantasía de los sectarios del Profeta y dió á los conquistadores cristianos esa caballeridad, esa hidalguía, esa

poética galantería hacia las damas, esa afición á las justas, torneos y pasos honrosos que caracterizan la feliz conjunción realizada mejor que en parte alguna en el bello suelo andaluz entre las cualidades más selectas del paladín de la reconquista y del caudillo árabe.

Hubiera nacido D. Enrique Pérez de Guzmán pocos siglos antes y encajaran perfectamente sus aptitudes en el cuadro de esos caracteres idealizados por la leyenda y que responden en el fondo á un real y perfecto estudio psicológico: los Tenorios, Mañaras, Jacobos de Gracia y Montemares; hombres que al mismo tiempo que convertían sus vidas en una serie de no interrumpidos placeres, haciendo guerra al corazón de las damas con sus protestas de amor y al de los valientes con su espada, sabían cuándo llegaba el caso conquistar reinos, descubrir apartadas tierras y fundar en ellas imperios más vastos que los de Alejandro, Trajano y Omar; pero hijo de su tiempo y sometido mal de su grado á sus nada legendarias realidades, estuvo á pique de ocasionarle serios disgustos el choque con una alta autoridad civil á la que apaleó, respondiendo así á un conato de arbitrariedad insolente y con un jefe militar de alta graduación con el que, siendo casi un niño, tuvo un lance ruidosísimo en el paseo principal de Córdoba: mas quiso su buena estrella que en uno y otro caso, á más de quedar á gran altura, no sufriese contratiempo alguno.

No se dejaba dominar, sin embargo, por los impul-

sos y aficiones de su edad hasta el extremo de descuidar el cultivo de su espíritu. A más de los estudios del bachillerato, que hizo con gran aprovechamiento en Córdoba, y de los de Filosofía y Leyes que cursó en la Universidad de Sevilla, mostró decidida vocación por los idiomas, y al mismo tiempo que aprendía á fondo los que habían de serle más útiles en sus viajes por el extranjero, profundizó el latín, mereciendo sinceras felicitaciones de sus catedráticos y llegando á dominarlo hasta traducir con soltura los clásicos, no obstante las dificultades que el abuso del hipérbaton creó en la construcción latina, especialmente entre los escritores más renombrados que, siguiendo el gusto de su tiempo, miraban como elegantísimas las más extremas trasposiciones. No ha abandonado el Marqués estos difíciles estudios; su excelente y bien surtida biblioteca contiene las mejores obras de los escritores romanos, que consulta con frecuencia, siguiendo así las tradiciones de los que no estimaban completa la educación de un hombre de buena sociedad si no dominaba el idioma del Lacio, y llega en su preferencia, un tanto apasionada por esta lengua, á afirmar que su construcción debiera servir de modelo á los idiomas neo-latinos, y que la principal gallardía del idioma castellano está en el constante uso que del hipérbaton hacen los escritores más espontáneos y fáciles.

También se consagró D. Enrique Pérez de Guzmán con afición decidida á los estudios filosóficos, que cautivaron mucho su atención, y á las cuestiones eco-

nómicas y sociales, en que ha mostrado después gran competencia. Puede añadirse que es un verdadero hombre de administración; no sólo ha sabido llevar con acierto admirable la complicadísima contabilidad de su cuantiosa fortuna, regularizada y aumentada en sus expertas manos, sino que mostró esas mismas dotes de excelente y probo administrador cuando ejerció el cargo de delegado del Gobierno de la República al patrimonio de la Corona, sin sueldo y sin condiciones, trabajo que equivalía a la dirección de dos ó tres Ministerios á la vez.

Esta competencia del marqués de Santa Marta en cuestiones económicas y en administración y contabilidad, forma contraste con el afectado desdén de antiguos personajes de la aristocracia hacia los trabajos relacionados con la gestión de sus bienes. Quedan así éstos á merced de terceras personas, y no hay para qué citar ejemplos de las desastrosas consecuencias de tal descuido, que en el fondo nada tiene de plausible. Hay en en la especie humana, como en los últimos peldaños de la escala zoológica, microbios voraces que se nutren de los organismos en descomposición. Ya se llamen usureros, arbitristas, negociantes ó prestamistas en gran escala, siempre desempeñan el mismo papel de agentes destructores de las fortunas mal administradas. La generosidad y el fausto no deben confundirse con el loco derroche, precursor de la miseria, pues el que dilapida su fortuna, arranca giros de la túnica de su dignidad. Y el marqués de San-

ta Marta, que conoce y practica estas máximas, no sólo ha sabido siempre mantener el brillo de su linaje y mostrarse á la altura de su representación, sino que ha gastado lo que nadie en España para coadyuvar con verdadera abnegación al triunfo de sus ideas políticas, y sin embargo, no sólo ha conservado el caudal de su casa, sino que merced á su personalísima intervención y á su vigilancia y desvelos, ha sabido acrecentarlo y ganar fama de inmejorable administrador, sin necesidad de consagrarse á negocios bursátiles ni de otras especies, que aun sancionados por las leyes y las costumbres, repugnan á su delicadeza.

Cuando terminó D. Enrique Pérez de Guzmán sus estudios de segunda enseñanza, manifestó su decisión de ser militar y de prepararse para el ingreso en el arma de caballería. Su fama de buen ginete era proverbial en Córdoba, donde los hay admirables: además, su temperamento le llevaba á las violentas emociones de la guerra; quería ser útil á su patria en los campos de batalla, y las condiciones de su carácter eran muy apropiadas para la milicia; pero hijo sumiso y amantísimo de los suyos, hubo de plegar su voluntad á indicaciones para él sagradas. No le secundaron tampoco en sus propósitos, influyentes amigos de los que en este sentido esperaba mucho. Al pasar á mediados del año 1843 por Córdoba el general D. Manuel de la Concha, que iba en persecución de las fuerzas del aún regente D. Baldomero Espartero, se detuvo dos ó tres días en la casa del marqués, señor

Pérez de Guzmán, padre del biografiado, y con el que le unía una amistad muy íntima. Se habló, entre otras cosas, de las profesiones á que habían de consagrarse D. Enrique y sus hermanos; manifestó aquél su vocación resuelta por la carrera militar y sus vivos deseos de ser pronto oficial de caballería; mas el general Concha, lejos de fomentar aquellos entusiasmos juveniles, le dijo con acento de profunda convicción que desechara tales ideas, pues la milicia, sobre ser profesión muy amarga y dura, ofrece para los caracteres impetuosos, mortificaciones y violencias que no todos sufren sin decidirse á saltar el estrecho círculo de la disciplina, fuera del cual suele hallarse la muerte. Añadió que, pues D. Enrique era el hermano mayor y había de quedar un día al frente de la casa, debía seguir la carrera de abogado. Quizá el general estaba de acuerdo con la familia del biografiado al pintarle la vida militar con tan negros colores; de todas suertes, este cuadro, por sombrío que fuese, no entibió la vocación de D. Enrique, y más de una vez al cursar Leyes Literatura en la Universidad de Sevilla, debió pensar en los campamentos con el mismo afán con que el monje encerrado en su celda estrecha piensa en los encantos de esa agitación mundana, que condena más bien con los labios que con el corazón.

La muerte de su muy querido padre, modelo de caballeros, dejó á D. Enrique Pérez de Guzmán al frente de su familia cuando apenas tenía dieciocho años, y desempeñó sus deberes con exquisito tacto y gran

madurez de juicio. Cuando así él como sus hermanos hubieron terminado sus estudios, dió comienzo á sus viajes por el extranjero, no sólo por esparcir su espíritu, sino por completar su esmerada educación. Su primera excursión por Europa fué hácia el año 1850, y comprendió Francia, Inglaterra, Bélgica, y Holanda. A la sazón Luis Bonaparte era presidente de la República francesa, y algunos hechos significativos, entre ellos la intervención armada con que puso fin á la República de Roma para devolver el poder temporal al Papa, le hacían sospechoso de conatos cesaristas. Este primer viaje duró varios meses, y cuando el Marqués visitó de nuevo á París, ya se había consumado la usurpación escandalosa que elevó á Bonaparte al Imperio en que, bajo el nombre de Napoleón III, hizo una deplorable parodia de la epopeya que glorificó al fundador de su efímera dinastía.

En sus repetidos viajes al extranjero depuró D. Enrique Pérez de Guzmán su gusto artístico: visitó con asiduidad los museos del Louvre, de Lóndres y de Amsterdam, y no satisfecho con ser un aficionado inteligente y un admirador de las grandes creaciones de la pintura y la escultura, empezó á consagrar respetables cantidades á la adquisición de cuadros de las mejores firmas, dando así comienzo á la soberbia galería que hoy tiene en su palacio y que no reconoce superior entre las formadas por particulares. Durante más de cuarenta años no ha cesado, en efecto, el marqués de Santa Marta de aumentar su museo con

primorosas adquisiciones, entre las que se cuenta parte de la antigua galería particular del rey de Holanda; tiene muchas obras de extraordinario mérito, que han admirado los críticos más inteligentes, y el catálogo de su museo, escrito por el afamado restaurador don Vicente Poleró, muestra la extraordinaria riqueza de esa colección, en que se ha invertido una fortuna incalculable.

También consagró el Marqués gran atención al movimiento económico y social de la nación vecina, y estudió cuidadosamente las obras de los escritores socialistas, sobre todo de Proudhón, que le sedujo mucho por su vigorosa dialéctica y el brío y desenfado de su estilo. Ya por hallar analogía el marqués de Santa Marta entre el carácter que revelan los escritos de Proudhón y el suyo propio; ya por el atractivo que encierra la sinceridad para los espíritus honrados, es el hecho que desde entonces empezó á simpatizar vivamente con las soluciones ámpliamente democráticas que preconizaba el insigne autor de *Las contradicciones económicas* y de *El principio federativo*. Ahora bien; en un carácter como el del marqués de Santa Marta, simpatizar con una idea, es comprometerse á luchar por su realización: no concibe ni aplaude las cómodas transacciones que con su conciencia hacen los que piensan de un modo y se producen en palabras y actos de otro distinto; cree que el hombre se debe á sus convicciones, y no concede su estimación á los que, guiados por móviles siempre poco respetables, hacen

traición á su pensamiento. Tales hombres son, á su juicio, ejemplares tristes de la degradación humana y explicación de la existencia de tiranos y tiranías, pues cree y la experiencia de la vida le ha confirmado en tal creencia, que la mayor parte de los despotismos se basan, no tanto en el orgullo y arrogancia de los opresores, como en la bajeza y pequeñez moral de los oprimidos. El culto incondicional al éxito es la clave de muchas páginas deplorables de la historia.

Realizando una de sus expediciones veraniegas por Europa, se hallaba D. Enrique Perez de Guzmán cuando estalló el movimiento revolucionario de 1854, que le inspiró en sus comienzos viva simpatía. Esta se trocó en disgusto cuando la poquedad de espíritu de los progresistas le hizo desesperar de que por entonces se diese un sólo paso hácia el logro de las verdaderas aspiraciones del pueblo. Esta triste convicción, unida á la escasa simpatía que le inspiraba el programa del naciente partido democrático, que no era más que una avanzada del progresismo y aprovechaba todas las circunstancias para reiterar declaraciones favorables á la monarquía, retrajeron por entonces á D. Enrique Perez de Guzmán de tomar parte en la política militante. Además, el matrimonio que en 1856 contrajo con la bella y virtuosísima señorita doña Concepción Gordon, condesa de Torre-Arias y marquesa de Santa Marta, absorbió su actividad en el goce de los tranquilos afectos de la familia y en la administración de su vasto patrimonio, que ordenó y regularizó, logran-

do aumentar mucho sus rendimientos merced á su infatigable constancia y á su espíritu de arreglo.

Hasta aquí los rasgos generales que sobre el carácter y principales hechos de D. Enrique Pérez de Guzmán en la primera época de su juventud convenía trazar en esta parte de la obra como precedente indispensable para estimar debidamente el valor y trascendencia de la ulterior intervención del biografiado en la política española.





CAPÍTULO II

Desarrollo de la política española durante el primer período de esta biografía.—La libertad y el absolutismo.—Guerra de los siete años.—Moderados y progresistas.—Convicciones democráticas y republicanas de D. Enrique Pérez de Guzmán



PARA apreciar bien la influencia ejercida por el marqués de Santa Marta en la política española, es necesario hacer una breve excursión por los campos de nuestra historia contemporánea, pues mal podría estudiarse la intervención de un hombre en la marcha de su época sin tener noción del medio ambiente que le rodeaba y de las circunstancias en que ha ejercitado su actividad.

No se espere, sin embargo, un largo y enojoso curso de la historia política española durante el presente siglo. Esta obra tiene por objeto principal la exposición de los acontecimientos en que directa é indirectamente ha influido el biografiado, y tenida en cuenta esta condición, ya indicada en el plan, sólo como antecedente indispensable y muy concisamente ha de

presentarse el cuadro de los hechos anteriores á la pública filiación democrática del marqués de Santa Marta.

En la época de su nacimiento estaba próxima á su definitivo término la monarquía absoluta, representada por Fernando VII, uno de los caracteres más abominables de que hace mención la historia de todos los países. La libertad había iluminado ya con sus fulgores el cielo de nuestra patria; mas solo á la manera de los relámpagos, que por su breve duración parecen hacer más profundas las tinieblas de la tempestad. Las Cortes de Cádiz habían dado á España un Código ampliamente democrático, y que entre otras ventajas tenía la de estar de acuerdo con las tendencias descentralizadoras de nuestro país; pero Fernando VII recompensó á los ilustres patricios que discutieron y votaron ese Código fundamental, con las más enconadas persecuciones, el presidio ó el destierro. Transcurrieron seis años de intolerable tiranía, á que abrió un paréntesis la sublevación de Riego, secundada por varias provincias y por el pueblo de Madrid, y que obligó á Fernando á jurar la Constitución de Cádiz en 1820. «*Marchemos todos y yo el primero por la senda constitucional,*» dijo aquel hipócrita, que no dejó de conspirar un solo momento para restablecer el absolutismo. Lo consiguió en 1823 con ayuda de una intervención extranjera, y desde entonces hasta su muerte, acaecida diez años más tarde, los liberales estuvieron sometidos á un verdadero exterminio sistemático. La horca y los

fusilamientos estaban á la órden del día; varones insignes, honra de España por su valor, su patriotismo y su ciencia, murieron á manos del verdugo; el terror absolutista dejó atrás al de Marat y Robespierre, sin tener su justificación ni su grandeza y todos los medios de destruir liberales, la emboscada, la traición, el engaño, se consideraban buenos y meritorios.

Indudablemente, la ferocidad de aquella reacción se debió á causas de carácter económico más bien que político. Las Cortes de 1822 habían votado la desamortización de los bienes del clero y llegaron á expropiarse á las comunidades buen número de fincas. Vió la Iglesia en peligro las inmensas riquezas que había logrado acaparar é hizo á aquella situación una guerra implacable; á influencias teocráticas se debió principalmente la liga reaccionaria de naciones que adoptó el nombre de *Santa Alianza* y que acordó, entre otras medidas, la intervención armada en España con un ejército de cien mil hombres al mando del duque de Angulema. Nuestros absolutistas, para eterna vergüenza suya, acogieron con entusiasmo esta bochornosa intervención, y nuestra patria, despues de la heroica resistencia de un puñado de liberales, hubo de pasar por el bochorno de recibir un gobierno despótico por la fuerza de las bayonetas extranjeras. Riego, el Empecinado, Salvador Manzanares, Torrijos, Flores Calderón, Fernández Golfín, Miyar, Mariana Pineda y tantas otras víctimas ilustres sacrificadas al odio del bando realista, probaron con su glorioso ejemplo que una profunda

convicción política hace arrostrar la muerte con tanto valor al menos como el ciego fanatismo que ha servido de base al martirologio de todas las religiones de la tierra.

Murió en 29 de Septiembre de 1833 Fernando VII, y dejó á España como herencia digna de su execrable reinado, una sangrienta guerra civil. Durante siete años los españoles formaron dos bandos irreconciliables que apenas se daban cuartel y que pretendían dilucidar en centenares de encuentros, notables por su feroz encono, si habían de ser regidos por D.^a Isabel, hija de Fernando VII ó por D. Carlos, hermano de este sanguinario monarca y aún más sometido que él á las sugerencias del partido apostólico, ó sea de la Iglesia, que aspiraba á unir en su mano los poderes espiritual y temporal como en los mas desgraciados períodos de la Edad Media.

La fuerza de la lógica que gobierna al mundo más que la voluntad de los hombres, hizo que esta encarnizada lucha, que habría sido verdaderamente infame sino representase más que un litigio de testamentaria régia, viniese á simbolizar el choque de dos principios: el absolutismo y la libertad. En los comienzos de la guerra, María Cristina, madre y regente de Isabel II, se mostraba tan absolutista como D. Carlos; pero como este contaba con el resuelto apoyo del clero y de casi todos los antiguos voluntarios realistas, hubo la regente de invocar el auxilio del partido liberal, viniendo así el cálculo, como tantas otras

veces, en apoyo de la conveniencia y de la justicia.

Harto conocidas son las peripecias de la guerra civil, que entre muertos é inutilizados privó á España de más de ciento sesenta mil hombres, y supuso una pérdida de dos mil quinientos millones de duros en la fortuna pública.

Durante los primeros años la guerra se llevaba á sangre y fuego; los prisioneros eran sacrificados sin piedad, y fué necesario que interviniesen las potencias de Europa, principalmente Inglaterra, para que en la lucha se respetasen algo las prescripciones del derecho de gentes. El éxito fué indeciso, hasta que Mendizábal, uno de los hombres á quienes más debe la causa de la libertad española, llevó á efecto, con una energía y rapidez de que hay pocos ejemplos, la desamortización de los bienes de las corporaciones eclesiásticas. Arrebató de este modo á los absolutistas la principal fuente de sus recursos, creó intereses en favor de la causa liberal, y dió, á pesar de las imperfecciones de sus leyes desamortizadoras, gran impulso á la vida económica del país.

La venta de los bienes del clero abrió un verdadero abismo entre las dos ramas de la familia borbónica. Hasta entonces María Cristina, asustada ante los progresos de la revolución, habia podido sentirse inclinada á transigir con D. Carlos, y en este sentido mantuvo con él una correspondencia que es uno de los puntos más sombríos de su reinado. Pero desde el momento en que las fincas de la Iglesia hallaban por

todas partes afanosos compradores, dispuestos á defender su adquisición aún á costa de la vida, variaban completamente los términos del problema, y el clero no podía ya fundar su esperanza de predominio en una reconciliación del Pretendiente con su sobrina, sino en el total aniquilamiento de los liberales. Por otra parte, la fortuna empezó á sonreír á éstos en los campos de batalla; Espartero rompió el estrecho cerco en que los carlistas tenían á Bilbao y les derrotó en cien combates; las expediciones de varios ejércitos absolutistas por diversas provincias de España, no tuvieron otro resultado que dar á conocer á sus caudillos la antipatía que su causa inspiraba al pueblo, y aunque Gómez logró entrar en Oviedo, León y Palencia; Cabrera en Córdoba, y Zariátegui en Segovia y Valladolid, los carlistas no pudieron pensar seriamente en poner sitio á la capital de la nación, y retrocedieron bien pronto á las montañas de Valencia, Cataluña, Navarra y las Vascongadas, donde puede decirse que estaba localizada la guerra.

Muy niño aún era el marqués de Santa Marta cuando presenció la entrada de los jefes carlistas Cabrera y Gómez en la ciudad de Córdoba (30 de Septiembre de 1836), y ya entonces aborrecía instintivamente el absolutismo; de modo, que en los recuerdos de su infancia, figura ese día como verdaderamente amargo. Los carlistas permanecieron muy poco tiempo en Córdoba, de donde se alejaron después de haber recogido víveres y dinero, llevándose ademas muchos

prisioneros. De todas suertes, pudieron convencerse de que no era en el suelo andaluz donde habían de reclutar partidarios.

El cansancio de los guerreros absolutistas que iban perdiendo terreno incesantemente y que desesperaban ya del triunfo, contribuyó mucho más que la defección de su general Maroto al acabamiento de aquella desastrosa campaña. Mas de sesenta mil hombres quedaban en armas en el campo de D. Carlos después del abrazo de Espartero y Maroto, y sin embargo, bastaron pocos meses para que cruzaran los Pirineos los últimos defensores de la causa del absolutismo. Quiso entonces María Cristina irlo restaurando gradualmente en su beneficio y en el de su hija Isabel; creyó que después de haber utilizado el sentimiento liberal del país en su provecho, le sería fácil burlar las aspiraciones de los que á costa de su sangre y por el principio que simboliza habían afirmado el trono de su hija. El levantamiento nacional que puso fin á su regencia á los cuatro meses de terminada la guerra civil, debió hacerle comprender que los liberales habían derramado su sangre, no en aras de una persona, sino de una idea.

En los pueblos que han sufrido mucho tiempo el yugo del absolutismo, la implantación del régimen liberal no se logra sino á costa de agitaciones dolorosas. Aunque existan aspiraciones nobles, faltan costumbres acomodadas á la práctica de los nuevos principios; los Gobiernos tienden á extremar su autoridad,

y las muchedumbres, por su parte, suelen mostrarse turbulentas con los poderes débiles y en demasía sumisas con los opresores, siendo frecuentes los casos en que, obedeciendo á las costumbres de la tiranía, no vacilan en investir á sus caudillos con la dictadura. Tal acaeció con el general Espartero, que sucedió á María Cristina en la regencia. Lejos de corresponder á las tendencias revolucionarias del partido que le había elevado á la cumbre del poder, se mostró tan afecto á los procedimientos de violencia, que sus mismos correligionarios hubieron de alzarse en armas contra él, y no vacilaron, para derribarle, en formar coalición con los moderados, de quienes les separaban verdaderos abismos de odio.

La división de los liberales en progresistas y moderados, aunque indicada ya antes de la muerte de Fernando VII, no se realizó hasta que las atrevidas reformas de Mendizábal, á que puso toda clase de obstáculos María Cristina, marcaron rumbo decididamente revolucionario á la situación constitucional. Entonces hubo no pocos liberales partidarios de que se avanzase con creciente rapidez por la senda de las reformas, mientras otros, ó temerosos de que la revolución se acentuara demasiado ó queriendo hacerse simpáticos al trono, se opusieron á las innovaciones. Llamáronse los primeros *exaltados* ó progresistas, y *moderados* los segundos, aunque ni unos ni otros justificaron su nombre, pues la exaltación de los progresistas estuvo más en la forma de expresar sus ideas que en el radicalis-

mo de su programa, y en cuanto á los moderados no lo fueron seguramente en el rabioso encono con que persiguieron toda tendencia revolucionaria y llegaron casi á confundirse con los absolutistas, así en doctrinas como en procedimientos. Aunque nacidas del mismo tronco ambas fracciones liberales y poco distanciadas en la esfera de los principios, llegaron á profesarse una aversión de que hoy, en que no se sabe si por ventura ó por desgracia, se han suavizado las enemistades políticas, apenas podría formarse idea. Espartero hizo fusilar á los generales moderados Montes de Oca, Borso, León y Quiroga, y no trató de igual modo á Concha y O'Donnell porque lograron salvarse por la fuga. A su vez Narváez, jefe de los moderados, ordenó el fusilamiento de Zurbano, héroe de la causa liberal, y pasó comunicaciones á todas las autoridades militares para que, en la previsión de que Espartero intentase volver á España, le detuvieran y diesen muerte apenas se identificara su persona. Cualquier conato de sublevación motivaba el envío de gran número de progresistas á las islas Filipinas ó Marianas, y por su parte los progresistas no dejaban de tomar represalias (aunque por lo general menos duras) en los breves y lejanos períodos en que ocupaban el poder. Parecía que el odio que antes separaba á cristinos y realistas, se había trasplantado ahora á progresistas y moderados.

Los programas de ambos partidos eran casi idénticos. Los moderados fundaban la soberanía en el acuer-

do de las Cortes con el poder real; mas dando á este en todo caso la supremacia, declaraban responsables á los ministros ante la representación del país, y en punto á administración, profesaban el criterio ámpliamente centralizador de la escuela doctrinaria francesa, tendiendo á reducir á los Ayuntamientos y Diputaciones á meras delegaciones del gobierno nacional.

Los progresistas defendían la soberanía de la nación, pero sin basarla en la del individuo; creían, pues, que el voto de las mayorías era la única fuente de derecho, y consideraban anárquico y peligroso el principio de los derechos individuales, anteriores y superiores á toda ley. En la práctica, y de igual manera que los moderados, consideraban requisito necesario para la formación de las leyes la sanción de la Corona, y en caso de que las Cortes se pusieran frente al poder real, los progresistas monárquicos, sin reservas, caían siempre hacia el lado del trono. Se diferenciaban de los moderados en que deseaban el jurado y la milicia nacional y no extremaban tanto la centralización administrativa. Además, querían se ultimase la desamortización de los bienes del clero, que los moderados suspendieron en varias ocasiones, y que no terminó hasta la época de la unión liberal. La reina se mostró siempre esquivá en demasía con los progresistas, nunca les llamó al poder espontáneamente; para llegar al gobierno hubieron de apelar á insurrecciones armadas, y aun así se les sustituía con el partido moderado apenas dejaban de ser temibles.

De todas suertes, ni el partido progresista ni el moderado podían representar dignamente la idea liberal. A lo sumo eran transiciones entre el absolutismo y el régimen democrático, aspectos del constitucionalismo, sistema contradictorio que pone frente á frente dos soberanías. Por esto, los hombres sinceramente liberales rechazaban la ficción monárquica, creían opuesto al derecho de los pueblos el pretendido derecho de esta ó la otra dinastía á gobernarlos por autoridad divina ó tradición feudal, y cifraban sus aspiraciones en la República.

Entre estos hombres se contaba desde antes de la revolución de 1854 el marqués de Santa Marta. Lector asíduo de las obras de Proudhón, Blanc y otros publicistas democráticos; admirador de los grandes hechos de la revolución francesa y convencido en el fondo de su espíritu de que si no hay razón para que los pueblos vivan divididos en castas, tampoco puede haberla para que una familia se atribuya el dominio de un país, imponiéndole una serie de soberanos que lo mismo pueden ser hombres de buena voluntad, que perversos, amigos de la justicia que inclinados á la arbitrariedad y á la tiranía, era resuelto partidario de los poderes amovibles. Miraba también como un verdadero absurdo la irresponsabilidad que todas las Constituciones atribuyen á los monarcas; estaba firmemente persuadido de que todo hombre, por el hecho de ser libre y racional, determina sus actos por la inteligencia y es responsable de ellos, y cuando oía

decir que la estabilidad del principio monárquico inspira esa ficción, no podía menos de decirse que es falso en su esencia un sistema que, como el monárquico, necesita basarse en una mentira. Esto aparte de lo que repugnaba á la rectitud de su conciencia el que un rey no pudiera ser acusado aun cuando cometiese los más graves crímenes, y del escaso respeto que podía imponerle un representante supremo del poder á quien la Constitución, queriendo rodearle de todos los prestigios, colocaba al nivel de los niños, los dementes ó los seres irracionales que carecen de responsabilidad porque no tienen conciencia de sus actos.

Harto comprendía el marqués de Santa Marta que este su modo de apreciar la institución monárquica era poco del agrado de los hombres de la aristocracia á que él pertenece; pero sobre que nunca influyó mucho en su espíritu el criterio de clase, por creerlo estrecho y ocasionado á grandes injusticias y errores, nunca ha sabido explicarse la razón de que la nobleza una incondicionalmente su suerte á la de la monarquía. Entiende que no es esa actitud la más acomodada á las gloriosas tradiciones de la nobleza española, que estuvo durante toda la Edad Media más cerca del pueblo que de los reyes, á los que muchas veces hizo frente con las armas en la mano, así en Castilla como en Aragón. En nuestro país no hubo verdadero feudalismo, y por consiguiente faltaron motivos para el rencor que separaba al estado llano de la nobleza en otras naciones de Europa, pues aquí los hombres de

la aristocracia más bien que opresores del pueblo eran sus jefes de pelea, los caudillos que les guiaban á la guerra contra los musulmanes, no mostrándose tampoco muy tardos en hacer armas frente al rey cuando éste trataba de cercenar sus privilegios. A partir del siglo XIV cuando los monarcas empezaron á tender abiertamente al absolutismo y á concentrar todos los poderes en sus manos, las luchas entre el poder real y la nobleza tomaron proporciones formidables, pues se trataba nada menos que de la vida ó muerte de una ú otra de ambas instituciones. Sabido es que Alfonso XI, el primer monarca que de frente hizo guerra á la aristocracia castellana, no vaciló en apelar muchas veces á la traición para deshacerse de varios nobles á quienes temía; les citaba para ello con muestras de amistad á entrevistas particulares, y cuando acudían, fiados en su lealtad, les hacía dar tormento hasta matarles. No siguió otra conducta su hijo Don Pedro, llamado el Cruel, por los procedimientos que usó con la nobleza, en lucha con la cual perdió la corona y la vida. A la transacción que hizo con los nobles debió Don Enrique de Trastámara el trono y el sobrenombre de *el de las mercedes*. En tiempo de Enrique IV la nobleza era aún soberana en Castilla, y para someterla los Reyes Católicos hubieron de irle arrebatando mañosamente sus prerrogativas y fueros hasta convertirla en una dependencia del poder real, política que siguieron también los monarcas de la casa de Austria. Nacieron entonces los cargos palaciegos conferidos á varios nobles como

muestras de aprecio real, pero fueron muchos los aristócratas que entendieron que lejos de enaltecerse la nobleza aceptando empleos palaciegos, se rebajaba convirtiéndose de señora de dominios en sierva de los reyes, y se retrajeron de semejante humillación retirándose á sus antiguas mansiones señoriales y haciendo verdadera gala de no pisar los salones de la corte. Este retraimiento ha sido honrosa tradición de no pocas familias distinguidas de la aristocracia, y D. Enrique Pérez de Guzmán el Bueno, abundando en esas ideas, creyó siempre que ni por tradición, ni por prestigio, ni aun por interés bien entendido de clase, aunque hubiera de aceptarse este criterio, tenía la nobleza motivo alguno para constituirse, desnaturalizando y empequeñeciendo su historia, en una escolta de los reyes. A lo sumo podía aceptar este papel la aristocracia de nuevo cuño, creada por los reyes frente á la antigua, con la que no tiene comunidad de historia ni de origen.

Nada tiene, pues, de extraño que partiendo de este elevado punto de vista haya ostentado siempre el marqués de Santa Marta, con la frente erguida y el corazón satisfecho, sus firmísimas convicciones republicanas. Ha creído que entre seguir la causa de un rey, que es á lo sumo la de una familia, y la causa del pueblo, que es la de toda la humanidad, no había vacilación posible.





CAPÍTULO III

Actitud del marqués de Santa Marta ante el movimiento de 1854. — Origen y vicisitudes de los partidos democrático y republicano. — Influencia de los trabajos masónicos en el desarrollo de las ideas republicanas. — La unión liberal y sus desastrosas empresas militares. — Fusión de los demócratas con los republicanos. — Ingreso del marqués de Santa Marta en la política activa.



PROFESABA las ideas republicanas D. Enrique Pérez de Guzmán desde su juventud, y por esto no despertó en su espíritu grandes entusiasmos el pronunciamiento que en 1854 realizaron los progresistas en unión de algunos moderados disidentes, entre los que figuraba en primera línea el general O'Donnell. Aquel pronunciamiento, que el pueblo regó con su sangre generosa, no aspiró ni por un solo momento á salir de los cauces de la monarquía doctrinaria. Si algunos de sus iniciadores habían pensado en utilizarlo como base de un cambio de dinastía que hiciera pasar el trono de los Borbones á los Braganzas y facilitase la unión de España con Portugal, no tardaron en abandonar su pensamiento. Se contentaron con imponer á Doña Isabel II la humillación de que decla-

rase en un documento público que hasta aquella fecha había venido incurriendo en una série de lamentables equivocaciones que habían separado al trono del pueblo; atrajéronse con este acto la animadversión de la reina, que les arrojó del poder en cuanto dejó de temerles, y por su parte nada hicieron que justificase las esperanzas fundadas en el movimiento ni la sangre vertida para hacerlo triunfar. La soberanía de la nación, que parecía constituir la aspiración ardiente de los progresistas, continuó siendo un mito; siguió esclavo el pensamiento, amordazada la prensa, limitado á ciertas clases sociales el derecho del sufragio y declarada ilegal la propaganda de los ideales contrarios á la monarquía y á la Iglesia. Habíase discutido y aprobado una Constitución; pero no llegó á ser sancionada por la Corona, y apenas cayó la situación progresista volvió á estar vigente la de 1845, en que el doctrinarismo ahogaba todo gérmen de libertad.

Desde 1812 el retroceso en este sentido era evidente, y los viriles y austeros diputados de Cádiz habrían podido rechazar desdeñosamente como reaccionarios á sus pretendidos sucesores, así moderados como progresistas. Era necesario continuar la tradición gloriosa de aquellos legisladores, que frente al absolutismo del poder real y frente á las bayonetas extranjeras habían sabido dar la libertad á su patria, y esto es lo que se propusieron realizar los republicanos españoles.

No debe ser confundida la historia del partido re-

publicano español con la del llamado democrático, que vino á ser una derivación del progresista, y que nunca hizo afirmaciones concretas acerca de la forma de gobierno, inclinándose más bien á la monarquía constitucional. Ambos partidos tuvieron diverso origen y tendencias distintas, y si por último llegaron á converger y aún á confundirse, es porque los demócratas fueron al fin absorbidos por los republicanos.

Breve y de no gran interés es la historia del partido democrático. Lo constituyeron en las Cortes de 1847 varios diputados progresistas, entre los que descollaban Rivero, Orense y Ordax, y á los que se unieron los periodistas Baralt, Asquerino y Fernández Cuesta. El programa de esta nueva agrupación venía á ser el mismo del partido de que se derivaba, pero agregándole una nota de mucha importancia: la declaración de que los derechos individuales debían ser el supuesto necesario de la Constitución política, por su carácter de innatos y de anteriores y superiores á toda ley. No reconocían los demócratas, por consiguiente, facultad para violar ni limitar esos derechos ni aun al poder representativo de la nación; principio que hoy admiten los liberales de todos matices y que entonces pareció encandaloso y subversivo; pues los moderados miraban como fuente de derecho al rey con la nación, y los progresistas, en teoría al menos, á la nación, pero en modo alguno al individuo. Por lo demas, los demócratas aceptaban la monarquía hereditaria con las prerrogativas del veto, sanción de las leyes y disolución

de las Cortes. El sufragio universal no lo admitían todos, porque se atenían á las distinción, un tanto sofisticada, entre derechos y funciones: también había disparidad de criterios en lo relativo á la abolición de la pena de muerte, á las relaciones entre la Iglesia y el Estado y á la mayor ó menor centralización de los poderes públicos. En resumen, el partido democrático careció siempre de un programa definido; vino á representar en política la extrema izquierda de los progresistas, y la mayor parte de los hombres que en sus filas formaban, reconocieron la monarquía á raíz de la revolución de 1868 y formaron la fracción que se llamó de los cimbrios, que dió ministros á la regencia de Serrano y al gobierno de D. Amadeo, sin perjuicio de dárseles más tarde á la República y á la restauración borbónica.

Para cohonestar tan opuestas actitudes utilizaban los demócratas una frase que, si no hizo fortuna, se la permitió hacer, en el sentido material, á algunos de ellos, y fué la siguiente: *Debe mirarse como detalle sin importancia la forma de gobierno*. Olvidaban ó querían olvidar que en política la forma y el fondo de las instituciones se corresponden y relacionan tan íntimamente que vienen á ser una cosa misma; que la monarquía es la negación de la libertad y soberanía de las naciones, y que el principio de igualdad, base de la democracia, es incompatible con el monopolio del poder supremo en favor de una familia y con la irresponsabilidad de los reyes.

En resumen, el partido democrático perdió su fuerza moral por la indecisión de su programa y por su falta de lógica, que le llevó á aceptar la monarquía. Se dió así el caso singular de que desapareciese como tal partido precisamente á raíz del triunfo de la revolución de 1868.

Harto más gloriosa es la tradición del partido republicano español. Pudiera decirse de él que brotó armado, como Minerva de la cabeza de Júpiter, en el gigantesco alzamiento de 1869, si no tuviera precedentes honrosísimos en nuestra historia contemporánea. Por no ser generalmente conocidos esos precedentes, el hecho de poner en armas los republicanos cincuenta mil hombres á los pocos meses de la revolución, causó general asombro. Los monárquicos de todos matices se preguntaban con la mayor sorpresa de donde arrancaba la fuerza de aquella agrupación, que empezaba su vida política enviando setenta diputados á las Cortes Constituyentes y ponía en seguida en jaque á un gobierno militar en la insurrección más formidable que registran los anales de nuestro siglo.

No eran nuevas, sin embargo, las ideas republicanas en España. La revolución francesa tuvo aquí desde sus comienzos fervientes admiradores, que nunca faltan en este país de valor legendario para lo grandioso y lo terrible: los corazones generosos no podían menos de latir de entusiasmo ante el espectáculo de aquel pueblo que se alzaba en armas contra sus opresores, derruía la Bastilla, abolía los privilegios feudales, mili-

tares y eclesiásticos, dictaba la sublime declaración de los derechos del hombre, hacía caer las cabezas de sus reyes, convictos de inteligencias en el extranjero contra la libertad é independencia de la patria, y aún tenía alientos para sostener una guerra formidable contra casi todas las naciones de Europa y derrotar á sus ejércitos en cien combates. Ciertó es que España estaba entonces en un período de gran postracion intelectual, y que la Iglesia, casi omnipotente, atajaba los más tímidos vuelos del espíritu, pero se engañaría quien creyese que todos los españoles eran entonces católicos y realistas. Desde principios del siglo XVIII existían en nuestro país logias masónicas establecidas por agentes de Francia é Inglaterra y que se multiplicaron á partir de 1760, época de que data la organización seria de la Masonería en nuestra patria. Las doctrinas predominantes á la sazón en esta época, eran las que propagaban en Francia los enciclopedistas: á saber, que el derecho no proviene de la revelación divina, sino de la voluntad humana; que las sociedades deben descansar sobre la base del contrato, que es su fuente legítima; que el mundo debe ser regido por la razón y camina al progreso indefinido, y que todas las instituciones que contraríen ese progreso, monarquía, clero y militarismo, deben ser combatidas como opuestas á la misión de la humanidad. Todo esto se envolvía en alusiones más ó menos transparentes y se presentaba en forma alegórica y disfrazado con el velo de ceremonias simbólicas, capaces de excitar la imaginación

y muy apropiadas al misticismo de aquellos tiempos, en que había más tendencia á fantasear que espíritu de análisis. En 1767, cuando se decreto por el primer ministro conde de Aranda, la expulsión de los jesuítas, había en España más de doscientas logias masónicas, y el Conde fué elevado al cargo de Gran Maestre de la Orden, que ejerció hasta 1795, fecha de su muerte.

Pero la Masonería española no fué republicana en este período. Se contento con hacer frente á la teocracia y herir de muerte al jesuitismo. Quien dió tendencia política, no ya avanzada sino francamente revolucionaria á la Masonería, fué José Bálsamo, extraño personaje, que unas veces se hacia llamar conde de Cagliostro, otras conde del Fénix, marqués de Ana, marqués de Pelegrini ó príncipe de Trebisonda, y que á su talento verdaderamente extraordinario, á su actividad sin ejemplo, á su ciencia y á su profundo conocimiento del corazón humano, unía defectos muy censurables, por lo cual tienen razón los que le miran como un grande hombre y también los que le consideran como un audaz aventurero. Lo indudable es que José Bálsamo llegó á ser uno de los jefes de la Masonería universal; hizo en varias naciones de Europa trabajos de alta importancia para coadyuvar al triunfo de la revolución francesa y extender sus principios, y residió en España durante algunos años. El fué quien implantó en nuestro país el rito llamado de Memphis y Mizraim ó Egipciaco y arrebató al que dirigía el conde de Aranda muchos prosélitos, llamando á sí á los hombres

más exaltados y entusiastas. Fundó de 1783 á 1786 en Madrid logias, á que llamo *Libertad y España* y que llegaron á tener más de quinientos afiliados, y en ellas formuló varias proposiciones teológicas y políticas de que tuvo noticia el Gobierno y que fueron condenadas por la Iglesia. En esas logias hacía ya Bálsamo propaganda francamente republicana, y no fueron infructuosas sus predicciones, pues en 1795 hubo ya en Madrid trabajos y conspiraciones de esta índole, y al año siguiente se formó un proceso en que recayo sentencia condenando á la pena de horca y confiscación de bienes á los conspiradores más comprometidos, que eran D. Juan Mariano Picornell, maestro y socio de varias Corporaciones ilustradas; D. Bernardino Garsa, abogado; D. Manuel Cortés, ayudante del Colegio de Pages; D. Juan Pons, traductor de idiomas, y don José Lax, escritor. En 25 de Julio de 1796 se conmutaron estas penas por la de destierro perpétuo, que los sentenciados sufrieron en varias de nuestras colonias americanas.

Ciertamente este es un hecho aislado, como lo es también el de haber figurado algunos españoles, entre ellos Guzmán, de la aristocrática familia de los Tilly, en la revolución francesa, donde fué individuo del Comité central de Salud pública de la Convención; pero de todas suertes aparece indudable que á fines del siglo pasado no solo existían republicanos en España, sino que se atrevían á tramar conspiraciones como la que queda indicada y que se llamó la *conjuración de*

San Blas, porque debía estallar en Madrid el 3 de Febrero de 1796. La influencia de la revolución francesa y los trabajos de la Masonería determinan estos primeros pasos de la idea republicana en nuestro país.

Sólo en las logias siguió después manteniéndose el fuego de estos principios, mal comprendidos aún y que se predicaban con la exaltación propia de la época y acomodada á las exageraciones que habían caracterizado en Francia el régimen del terror, que retrajo de la defensa de la República á muchos hombres de ideas sinceramente liberales, pero que no acertaban á separar un principio de los excesos que pueden bastardearlo en la práctica. Inútil es hacer notar, por lo sabido, que la revolución de 1808, fomentada por el conde de Montijo contra Godoy, y que dió por resultado la abdicación de Carlos IV, fué debida principalmente á la Masonería y que ésta institución dejó sentir, de un modo muy directo, su influencia así en la obra de los legislados de Cádiz, como en la revolución de 1820, de la que puede decirse que fué esencialmente masónica.

Desde la invasión francesa en 1808 hasta el fin de la guerra de la Independencia y regreso de Fernando VII en 1814, España fué en la práctica una verdadera república federal. No había otro poder legítimo que el de las Juntas provinciales que, de acuerdo con la central, recaudaban impuestos, levantaban ejércitos, daban decretos y ejercían todas las funciones propias de gobiernos regulares. Se completó esta obra de or-

ganización con la convocatoria y elección de las Constituyentes y el nombramiento de la regencia, y es muy de notar, por lo mucho que desautoriza los fingidos temores de los enemigos de la forma federativa, que no hubo un sólo conato de separatismo entre las provincias españolas, á pesar de que entonces no había entre ellas más lazo de unión que su voluntad.

Desde 1814 á 1820 se enseñoreó de España una reacción espantosa, y mal podían propagarse las ideas republicanas cuando los defensores de la monarquía liberal eran condenados á muerte, castigados con el presidio ó aherrojados en inmundos calabozos. Seguía habiendo republicanos en las logias, pero apenas se descubría una de estas asociaciones, los que la constituían eran condenados á muerte. Una vez triunfante la revolución, que obligó al rey á jurar la Constitución de Cádiz, la junta central de los liberales se preocupó seriamente de adoptar medidas para evitar un movimiento republicano, y en la circular que dirigió á las Cortes hacía observar que el aspecto de las provincias levantadas, había inspirado temores de que levantase la cabeza la *hidra del federalismo*. Poco después el gobierno tomó disposiciones contra las logias masónicas y otras asociaciones en que se hacía propaganda republicana, bastante exagerada por cierto, pues en la tertulia llamada de *Lorencini* no solamente había oradores que pedían la repartición de bienes y la guillotina contra los serviles, sino que el diputado Romero Alpuente no hallaba remedio á los males del país

como no se matase en una sola noche á catorce ó quince mil madrileños *para purificar la atmósfera política*. Más lejos iban aún los periodistas Morales y Mejía al sostener que *la guerra civil es un don del cielo*, y sobrepujaba á todos en esta clase de alardes el famoso Regato, polizonte de Fernando VII y que, después de haber ganado fama de terrible demagogo cuando en realidad no era sino un despreciable espía, tuvo grande privanza al restaurarse el régimen absoluto.

Prescindiendo de las exageraciones, sinceras en muchos é intencionadas en otros con que se predicaban las ideas republicanas en este período, importa consignar el hecho de su existencia que se tradujo, á más de estas manifestaciones, en un levantamiento entre popular y militar que á mediados de 1821 estalló en Barcelona y que capitaneaba el coronel Jorge Bessieres. Sofocada esta insurrección, se reprodujo en Zaragoza y Alcañiz, y al siguiente año hubo otro movimiento republicano más serio en Valencia, tomando parte en él gentes del pueblo y varios batallones de la milicia nacional. Para vencerlo fué necesario enviar dos regimientos y una sección de artillería. Hubo también por entonces alguno que otro periódico republicano, siendo el más famoso *El Eco de Padilla*, que se publicaba en Cádiz y defendía la revolución y el socialismo. No es para olvidada en este lugar la suspensión de la potestad real de Fernando VII que votaron las Cortes de 1823 á propuesta de Alcalá Galiano, cuando aquel monarca, alentado por la proximidad de los cien

mil hijos de San Luis se negó á emprender, en compañía de la Asamblea y del Gobierno, el viaje desde Sevilla á Cádiz, ciudad que fué entonces el último baluarte del régimen constitucional.

Desde 1823 á 1833 las aspiraciones republicanas se confundieron con las liberales. No era poco hacer frente al bárbaro absolutismo de aquella situación delirante, que castigaba con la muerte en horca no ya las tentativas constitucionales sino las mismas opiniones. En 1825 fueron ahorcados en Granada todos los individuos de una logia masónica á los que se sorprendió en el acto de recibir á un neófito, y es de suponer que sólo en estas reuniones hallarían eco las ideas republicanas en aquel tristísimo período.

Durante la guerra civil los principios republicanos se difundieron mucho en Cataluña. El barón de Meer hizo fusilar á Xaudaró y Fábregas, autor de un proyecto de constitución federalista y hombre de no común ilustración. Nacieron á poco las asociaciones obreras, que sostuvieron encarnizadas luchas con los gobiernos de Espartero y de los moderados y que defendían la república federal. Además, en las Cortes de 1841 figuraron como diputados cuatro republicanos: los Sres García Uzal, Méndez Vigo, Espronceda y Olavarria (D. Patricio), que en su periódico *El Huracán*, defendía los principios federales. En 1848 se alzaron en armas en Cataluña varias partidas republicanas, y el general Córdoba hizo fusilar á D. Ramón López Vázquez, D. Juan Vakterra y D. Joaquín Clavi-

jo por sospechas de conspirar en este sentido, casi al mismo tiempo que Nouvilas hacía prisioneros á los jefes republicanos Barrera y Altamira, que murieron fusilados en Figueras. Los generales Córdoba y Nouvilas, que con tanto encono perseguían en 1848 á los republicanos, fueron veinticinco años después ministros de la República.

Obsérvese que en esta fecha, cuando los republicanos habían dado ya tantas muestras de su vitalidad y de su fuerza, no solo en Cataluña sino en la mayor parte de España, no había nacido aún la agrupación democrática de que algunos, con evidente desconocimiento de los hechos, pretenden derivar el republicanismismo español.

Triunfante la revolución de 1854 y elegidas Cortes Constituyentes se presentó con fecha 30 de Noviembre una proposición para que se confirmase á Doña Isabel II en el trono. Votaron en contra 21 diputados, pero no en concepto de republicanos sino de antidinásticos, por ser los más de ellos partidarios de la casa de Braganza, que creían podría realizar la unión ibérica. En efecto, entre esos 21 votantes, quizá no había más republicanos que los Sres. Orense, Ferrer y Garcés, Chao, García Ruiz y Figueras.

Desde esta época y merced principalmente á los esfuerzos de Pí y Margall, Castelar, Sixto Cámara y otros republicanos, que no dejaban de propagar en la prensa sus ideales, comenzó en el campo democrático la divergencia entre los monárquicos, los que se decla-

raban indiferentes en punto á forma de gobierno y los que, más lógicos, estimaban que la forma obligada de la democracia es la República. Como órgano del partido apareció *La Discusión*, que hizo campañas muy brillantes, pero evitando siempre toda declaración categórica acerca de las instituciones fundamentales que estimaba preferibles para el gobierno del país, pues de hacerla en uno ú otro sentido la excisión habría sido inevitable. Dirigió este diario desde su fundación D. Nicolás María Rivero, uno de los fundadores de la agrupación democrática y su jefe durante veinte años. El Sr. Rivero no hizo declaraciones republicanas hasta 1857, mas no en su diario, sino en un documento privado, especie de compromiso que hubo de suscribir cuando, en unión de otros caracterizados demócratas, ingresó en una logia ó choza de carbonarios con el fin de tomar parte en un proyectado movimiento popular.

Seguía, pues, fiándose á la Masonería la organización revolucionaria, mas no ya en las proporciones que cuarenta años antes y desde luego sin fijarse gran cosa en la parte doctrinal ni simbólica de aquella secta, de que se aceptaba sólo el secreto y la relativa seguridad que ofrecía á sus afiliados. A estos trabajos se debieron en gran parte el movimiento socialista que estalló en Valladolid, Burgos, Palencia y otras poblaciones en 1857; la sublevación republicana del Arahal, reprimida con bárbara violencia por el gobierno de Narvaez, que hizo fusilar á cerca de cien infelices jor-

naleros que en él habían tomado parte y la desgraciada empresa de Olivenza, que en Agosto de 1859 causó la muerte del infortunado Sixto Cámara y la ejecución en garrote vil de su compañero Moreno Ruiz y de otros dos infortunados. A la misma causa obedeció la insurrección republicana socialista que estalló en Loja en 28 de Junio de 1861 y que llegó á reunir más de ocho mil hombres. El gobierno de O'Donnell hizo ejecutar á varios de los comprometidos en este movimiento y condenó á más de cuatrocientos á presidio.

Desde que en 1856 fueron arrojados del poder los progresistas, merced á la ruptura de la coalición entre O'Donnell y Espartero, no volvieron ya los hombres de aquella agrupación á los consejos de la corona. La reina concedió por el pronto el poder á O'Donnell y á los tres meses llamó á Narvaez. Durante cerca de dos años estuvieron los moderados en el gobierno, y mientras tanto el general O'Donnell organizó el partido llamado de la unión liberal, que se formó en su mayor parte con elementos del moderantismo, mal avenidos con los exageraciones reaccionarias de Narvaez y con progresistas fatigados de esperar inútilmente el poder. A mediados del año 1858 logró O'Donnell formar nuevo ministerio, y consiguió mantenerse al frente del gobierno cinco años, merced á una política bastante hábil para ganar la confianza de la reina, mantenerse en buena armonía con los moderados, llevar la disolución al bando progresista, perseguir con violenta saña al republicanismo y comprometer á la na-

ción en una serie de aventuras que nos proporcionaron alguna gloria, á costa de mucha sangre y de mucho dinero.

Estábase ultimando por entonces la desamortización de los bienes eclesiásticos, y el gobierno unionista pudo contar con varios miles de millones de reales, que bien aplicados habrían podido regularizar nuestra Hacienda; pero que en manos de aquella situación únicamente sirvieron para edificar cuarteles, hacer enormes gastos en honor del ejército y mantener guerras impolíticas y dispendiosas. Fué la primera la de Cochinchina, en que nuestras tropas sirvieron de auxiliares á las francesas y derramaron su sangre para que España no alcanzase compensación alguna á tanto sacrificio, ni siquiera la amistad del egoísta Napoleón III. La segunda guerra fué la que sostuvimos contra los marroquíes desde Octubre de 1859 á Marzo del siguiente año, sin conseguir otro resultado que una ampliación insignificante de nuestras posesiones de Ceuta y Melilla, el establecimiento de misiones católicas en Fez, la cesión de un territorio para factoría en Santa Cruz de Mar Pequeña, determinándose con tal acierto la situación de este territorio, que no ha podido saberse luego á qué punto había de corresponder, y una indemnización de doscientos millones de reales, insuficiente á todas luces para cubrir la mitad siquiera de los gastos de aquella campaña, que costó además algunos miles de bajas á nuestro ejército. Para colmo de habilidad se obligó á Marruecos á otorgar un tratado

comercial tan funesto á este país como á España, pero en que los ingleses quedaban muy favorecidos.

Otra guerra tuvimos con Méjico en 1861, y en ella sirvió España otra vez de instrumento á Francia é Inglaterra, principalmente al emperador Napoleón, que tenía el proyecto de convertir á Méjico en un imperio bajo el protectorado francés, y realizar mientras tanto un negocio de algunos centenares de millones. Por fortuna el general Prim, jefe de la expedición española y que se había hecho muy popular en la guerra de Africa, se puso de acuerdo con la legión inglesa y con los méjicanos, y tomó la feliz iniciativa de abandonar aquella empresa descabellada, dejando solos á los franceses, que no se detuvieron hasta conseguir el establecimiento en Méjico del imperio de Maximiliano de Austria, á quien fusilaron pocos años después sus forzados súbditos, sin que Napoleón hiciera cosa alguna para evitar esta catástrofe, que le cubrió de ridículo y de ignominia. En este conato de lucha con Méjico, perdió España algunos millones, pero afortunadamente nada más, gracias al arranque de Prim que, aun corriendo serio peligro de verse desautorizado por su retirada, supo evitarnos una guerra injusta y bochornosa y ganarnos la simpatías del pueblo mejicano.

Hacía falta una guerra más, y el gobierno de O'Donnell, secundado eficazmente por el entonces capitán general de Cuba, D. Francisco Serrano, promovió la anexión á España de la república de Santo Domingo. Esta república nacida, como la de Haiti, de la

emancipación de los esclavos negros, era y es un semillero de guerras civiles, y contaba con cerca de mil generales para un ejército de tres ó cuatro mil hombres. Ya se había ofrecido la anexión á Inglaterra y Francia por los ilusos de aquella isla, que pensaban hacer negocio viendo reconocidos sus empleos por alguna nación capaz de satisfacer todas esas pensiones, y este fué uno de los móviles principales que impulsaron al presidente dominicano Santana y á su partido á entenderse con el general Serrano que, de acuerdo con O'Donnell, ultimó en poco tiempo el desdichado asunto de la anexión. Por el pronto hubo gran entusiasmo entre los ministros, pero no tardó en ocurrir lo que temían y anunciaban todos los políticos previosores; los muchos dominicanos opuestos á la anexión se alzaron en armas contra España, y después de más tres años de lucha incesante, en que ganamos todas las acciones, pero perdimos trece mil hombres y sobre cincuenta millones de duros, hubo al fin que abandonar la isla por iniciativa del gobierno de Naváez en 1865, siendo esta determinación tristísima la mejor que pudo tomarse en aquel desastroso negocio. Inútil es decir lo mucho que envalentonó este desenlace á los separatistas cubanos, que ya preparaban entonces el alzamiento contra España.

Por último, cuando en 1865 volvió O'Donnell al poder, en que permaneció esta vez poco más de un año, insistió en proseguir su desdichada política de guerras sin objeto contra naciones débiles, y sostuvimos otra

contra Chile y el Perú, sin más consecuencia que comprometer nuestra escasa marina, que á duras penas y gracias á su valor indomable consiguió salir con gloria de la empresa. El resultado fué sobreexcitar la antipatía de los americanos del Sur hacia los españoles, retrasando mucho tiempo la obra de la reconciliación con estos países, que á principios de este siglo eran aún nuestras colonias.

Tales fueron las ventajas que España obtuvo de la política guerrera de la nación liberal. En su gestión interior representó este partido la transacción entre moderados y progresistas, pero con tan mala suerte que lanzó á éstos á la revolución y no evitó que aquellos siguieran siendo los favoritos del trono, pues Narvaez tuvo siempre mucho más ascendiente sobre el ánimo de la reina que el general O'Donnell, á quien nunca se le perdonó el haber sido iniciador de la revolución de 1854.

Mientras tanto la causa republicana seguía haciendo su camino. La mayor parte de los demócratas eran ya antidinásticos y se inclinaban resueltamente á la revolución; otro tanto empezaban á hacer los progresistas, y además había en la misma familia real un germen continuo de conspiraciones, promovidas por la hermana de la reina y por el duque de Montpensier, que deseaban sustituir en España la dinastía de Borbón por la de Orleans, y contribuyeron no poco al movimiento que lanzó del trono á doña Isabel II, si bien sufrieron luego un completo desengaño.

Desde que el partido democrático hubo de verse en la necesidad de admitir elementos republicanos en su seno, fracasó el plan de sus fundadores, que habían en un principio pensado constituir la extrema izquierda de doña Isabel II. En apariencia seguía Rivero al frente del partido; pero en realidad los republicanos eran los que imprimían carácter á la democracia y daban margen á una serie de divisiones y diferencias en su seno. A la distinción entre monárquicos y republicanos se unió pronto la de individualistas y socialistas. Figuraban entre los primeros el mismo Rivero, Orense, Castelar, García Ruiz, Martos y el grupo de los economistas, entre los cuales descollaban Figuerola, progresista aún, Madrazo, Bona, Rodríguez (D. Gabriel), Moret, Carreras y otros. Entre los socialistas estaban Pí y Margall, Garrido, Barcia, Cala, Salvoechea, Ocón y gran número de republicanos. La fracción individualista por su mismo carácter estaba en general formada por hombres que habían dedicado atención especial á los problemas económicos, mientras la socialista, sin dejar de contar defensores de gran valía y competencia, era más popular y formaban á su lado casi todas las masas del partido, sobre todo en Andalucía y Cataluña.

Ya á fines de 1860 estuvo la cuestión económica á punto de producir una seria excisión en la democracia. Los individualistas querían nada menos que excluir del seno del partido á los socialistas; pero al fin se aceptó una proposición de Pí y Margall, en que se

reconocía indistintamente como demócratas á todos aquellos que, cualesquiera que fuesen sus opiniones en filosofía y en cuestiones económicas y sociales, profesaran en política el principio de la personalidad humana ó de las libertades individuales, absolutas é ilegislables y el del sufragio universal, así como los demás principios políticos fundamentales consignados en el programa democrático. Se convino, pues, en separar la cuestión económica de la política; pero esto no fué más que una tregua que el mismo Pí y Margall se encargó de romper cuando, en Abril de 1864, fué nombrado director del diario *La Discusión*, para sustituir á D. Nicolás María Rivero.

Ya se ha indicado anteriormente que el Sr. Rivero era director de *La Discusión* desde que el diputado Bertemati, en unión de otros individuos de la minoría democrática, fundó este periódico en 1856. Ya por negligencias de Rivero, cuya pereza era proverbial, ya por la indeterminación de la política seguida por el diario, es lo cierto que las suscripciones fueron en baja, hubo algunos cambios de empresa, y por fin, habiéndose hecho propietario de *La Discusión* el señor Cañizares, estipuló con Rivero que si el número de suscritores bajaba de mil quinientos, podría encargarse de la dirección á quien le pareciese conveniente. Llegó este caso, hubo desavenencias entre el propietario y el director de *La Discusión*, y fué designado para este cargo D. Francisco Pí y Margall, que comenzó sus tareas el 1.º de Abril de 1864. Desde principios de

este año existía ya otro diario francamente republicano: *La Democracia*, dirigido por D. Emilio Castelar, y que hizo muy buena campaña periodística.

El marqués de Santa Marta venía consagrando á estos acontecimientos suma atención y se resistía á entrar en la vida activa de la política, porque simpatizaba poco con la vaguedad del programa de la democracia, á la que hubiera querido ver repulicana en su totalidad, y más inflamada por el espíritu revolucionario. No hay para qué decir, teniendo en cuenta la gran fortuna del Marqués y la inflexible energía de su carácter, cualidad esta última muy necesaria á todos los políticos, que no había dejado recibir excitaciones, así de los moderados como de los unionistas, para que figurase en sus respectivos bandos. Los primeros le ofrecían no poner traba alguna á la influencia política de D. Enrique Pérez de Guzmán en la provincia de Cáceres, donde poseía cuantiosos bienes y es muy querido y respetado; prometíanle su más resuelto apoyo, no sólo para que fuera diputado y senador, sino para que colocase en su provincia á los amigos políticos que más convinieran con sus propósitos. Con los unionistas le esperaban idénticas ventajas materiales, y en esta agrupación habría podido elevarse tanto más fácilmente, cuanto que le unía desde la infancia entrañable amistad con el marqués de la Vega de Armijo, que gozaba de la mayor influencia en aquel partido y fué ministro varias veces con el general O'Donnell. Ni en una ni en otra agrupación quiso afiliarse el

marqués de Santa Marta, y así renunció deliberadamente á todas las posiciones que pueden halagar la vanidad dentro del régimen monárquico, todo pompa y ostentacion. Nunca asistió á las recepciones palaciegas, no obstante profesarle la reina, que conocía sus avanzadas ideas políticas, verdadera estimación.

Cuando, en Abril de 1864, suscitó nuevamente el periódico *La Discusión* el problema económico, no pudo menos el marqués de Santa Marta de expresar su conformidad con los valientes artículos en que Pí y Margall hacía la defensa de sus ideales. Encontraba al fin dentro de la democracia una tendencia y un sentido ámpliamente revolucionarios y reformistas: su carácter enérgico se avenía muy bien con aquellas afirmaciones francas y rotundas que le recordaban la vigorosa dialéctica de Proudhón, por cuyos escritos había tenido siempre una predilección especial, y así, no satisfecho con expresar su conformidad con aquella campaña, hubo de presentarse personalmente una noche en la redacción de *La Discusión* donde habló con Pí y Margall, quedando sellada así una amistad que había de durar lo que la vida de ambos y hecha la pública profesión de fe republicana de D. Enrique Pérez de Guzmán, que dedicó desde aquel instante á la causa del pueblo todo el vigor de su inteligencia, todo el fuego de su corazón y todas las energías de su firme voluntad.

El ingreso del marqués de Santa Marta en la democracia se verificó en la época en que era más ocasio-

nado á serios peligros el lanzarse en la vía revolucionaria, pues la monarquía de doña Isabel empezaba á ser objeto de rudos ataques y sus gobiernos extremaban los temperamentos de represión. Pero el marqués de Santa Marta ha nacido para la lucha y no vaciló un instante en poner su fortuna y su actividad al servicio de la revolución, figurando desde el primer instante en las avanzadas del elemento republicano y al lado de los elementos de acción, que más se caracterizaban por su radicalismo en las ideas y su valor en llevarlas á la práctica.



SEGUNDO PERIODO



CAPÍTULO IV

Primeros trabajos revolucionarios del marqués de Santa Marta.—
La noche de San Daniel.—El llamado *rasgo* de doña Isabel II.—
Campaña del marqués de Santa Marta contra el Banco de España.—
Impresión que causó esta campaña en la opinión pública.—
Vicisitudes del asunto: abusiva influencia del gobierno en favor
del Banco.—Triunfo del marqués de Santa Marta.

ANA vez afiliado al partido democrático, dió bien pronto D. Enrique Pérez de Guzmán pruebas de la energía de su carácter y del vigor con que imprimía el sello de su personalidad en todas sus empresas. Mandaba á la sazón el partido moderado y ocupaba la presidencia del Consejo el general Narvaez; los progresistas se inclinaban al retraimiento, los ministros amenazaban y la situación de la monarquía era cada vez más difícil; de modo que se extremaban los temperamentos de represión. No podía ocultarse al marqués de Santa Marta que los republicanos esperaban mucho de sus iniciativas; sabía perfectamente que habría de verse obligado no sólo á correr grandes riesgos, sino á hacer cuantiosos sacrificios; que sus correligionarios estaban en la desgracia y no

tenían probabilidades de llegar al poder; pues no ya los progresistas, sino los mismos demócratas consideraban aún la agrupación republicana más bien como una escuela de idealistas que jamás llegarían al gobierno, que como un partido regular. Estas consideraciones no podían en modo alguno retraerle del cumplimiento de lo que estimaba un sagrado deber de conciencia, y así, desde los primeros momentos figuró en los puestos más comprometidos y desde los que podía prestar mayores servicios á su causa. La organización del partido republicano, confundido aún con el democrático, era ya entonces secreta, pues se trataba más bien de pelear que de hacer propaganda, tarea esta última punto menos que imposible dentro del régimen de suspicacia y de fuerza que caracterizó los últimos gobiernos de doña Isabel II. El marqués de Santa Marta figuró desde luego en el Comité de acción que, ya aisladamente, ya de acuerdo con los progresistas, buscaba elementos, allegaba recursos y preparaba fuerzas para el hecho revolucionario. Allí se trabajaba con fe y energía; no se conocían los desmayos ni los desalientos, porque había resolución para todo y no escasearon los recursos, siendo el marqués de Santa Marta, como fácilmente puede suponerse, uno de los que con más frecuencia y en mayor cuantía suministraba fondos para los movimientos. Proyectáronse muchos y algunos llegaron á realizarse; pero así estos últimos como los que no pasaban de la categoría de tentativas, requerrían grandes gastos y siempre se encontró al marqués

dispuesto á hacerlos. Su carácter no le ha permitido nunca hacer las cosas á medias; su fórmula, además, era que cien derrotas no podían acallar los impulsos revolucionarios del país, y en cambio una sola victoria representaba el triunfo, que podría ser definitivo si los hombres de la revolución sabían ponerse á la altura del noble ideal que perseguían.

Los bárbaros atropellos que cometió el gobierno de Narvaez en la célebre noche de San Daniel, el 10 de Abril de 1865, acuchillando á indefensos transeuntes, acrecentaron la indignación del marqués de Santa Marta contra aquella política tiránica y opresora. Se había intentado sorprender la buena fe del país con el célebre *rasgo* de doña Isabel II, que consistía en desamortizar gran parte de los bienes del patrimonio de la Corona para atender con el producto de su venta á los apuros del Erario, pero reservándose la reina para sí el veinticinco por ciento de dicha venta. Era este un negocio verdaderamente injusto y escandaloso; pues doña Isabel II no tenía derecho de ninguna especie al dominio de los bienes citados y sí sólo el de mero uso de los mismos, propiedad de la nación; pero los moderados, que no sabían cómo forzar los ingresos y veían casi inevitable la bancarrota, sugirieron aquella idea á la reina, que la aceptó con júbilo y quisieron realizarla atropelladamente, contando con la complicidad ó el silencio de unionistas y progresistas. A los demócratas cupo la gloria de levantar el velo de este bochornoso despojo á la nación, y D. Emilio Castelar,

con su valiente artículo *El Rasgo*, dió la voz de alarma, consiguiendo que en breves días reaccionase la opinión pública de tal modo, que se hizo imposible la consumación de aquel incalificable abuso. Pretendió el gobierno que se formase expediente académico al señor Castelar, para separarle de la cátedra que en la Universidad central explicaba; negóse á este atropello el rector Sr. Montalbán y fué depuesto de su cargo. En la manifestación de simpatía que los estudiantes y muchas personas amantes de la justicia hicieron al rector destituido, tomó pretexto el gobierno moderado para ensangrentar Madrid, organizando una cacería inhumana y cruel de personas pacíficas, que fueron perseguidas á tiros y sablazos, resultando varios muertos y más de cien heridos. Estos actos de barbarie ahondaban más y más el abismo que existían ya entre la opinión pública y los gobiernos de la reina. Cayó á poco el partido moderado y subió al poder la unión liberal con O'Donnell; pero este general, en vez de adoptar una política expansiva, no hizo sino seguir las huellas de Narvaez, con lo que dió nuevas armas á la revolución en vez de quitarle elementos.

Por entonces, y mientras seguía con la mayor asiduidad y eficacia sus trabajos políticos, realizó el marqués de Santa Marta un acto que tuvo gran resonancia y acreditó una vez más el brío de sus iniciativas y el temple de su carácter.

El Banco de España, á pesar de no tener en aquella época la importancia que alcanzó más tarde, gra-

cias á las funestas complacencias de ciertos hacendistas, pues era sólo un Banco local que limitaba casi á Madrid sus operaciones y compartía con otros establecimientos de índole análoga el privilegio de emitir billetes, desnaturalizaba ya á su sabor la letra y el espíritu de sus estatutos; distaba de responder á su objeto de facilitar el crédito y las transacciones mercantiles y tendía á convertirse exclusivamente en una sociedad de préstamos al Estado. En esto suelen venir á parar los Bancos que alcanzan el privilegio de la emisión, contrario á todos los buenos privilegios económicos y á la esencia del crédito, que es libre y no puede imponerse, aun cuando las sociedades que de él abusen cuenten con el apoyo y aun la complicidad de los gobiernos. El monopolio artificial favorece por el pronto á esas asociaciones, matando toda competencia; además, los servicios que prestan á gobiernos poco celosos de la independencia económica del Estado, permite á sus consejos de administración burlar las leyes, fingir capitales que no existen y hacer grandes emisiones de billetes que no tienen garantía y son, por consiguiente, papeles sin valor; mas al fin los mismos Bancos, apremiados por las crecientes exigencias de los gobiernos, acaban por arrojar todo su haber y todo su crédito en el abismo sin fondo de la deuda pública. Es rara la institución de esa índole que no vive en continuo estado de quiebra, más ó menos disimulada con la publicación de balances engañosos y contenida con suspensiones de pagos que se disfrazan

con más ó menos ingenio. Cualquiera circunstancia que lleve á las cajas del Banco más billetes que de ordinario en cambio de metálico, suele colocar á esas sociedades al borde del precipicio, y entonces se apela á recursos tan pobres como la improvisación de las famosas *colas*, constituídas en su mayor parte por gentes subvencionadas que impiden ejercitar su derecho á los verdaderos tenedores de créditos. Las dificultades y restricciones al cambio de los billetes determinan la depreciación de éstos en el comercio, y de ahí los descuentos que en algunas ocasiones han llegado al 14 y 16 por ciento del valor nominal. Entonces se hacen posibles abusos tan escandalosos como el de que el mismo Banco tome por segunda mano con menosprecio sus propias obligaciones, y gracias si no obtiene que los gobiernos declaren el curso forzoso de los billetes, en cuyo caso, y á pesar de todas las disposiciones fiscales, se ha visto subir el precio de cien pesetas en oro á muchos millares en papel.

A principios del año 1865, en parte por la mala situación de la Hacienda, que necesitando dinero á todo trance lo buscaba en el Banco y en parte también por los abusos que esta sociedad se creía autorizada á cometer, ya que contaba con la aquiescencia de los poderes públicos, la situación de los tenedores de billetes era por todo extremo penosa. En las oficinas del Banco se formaba todos los días en las horas de cambio una cola enorme que daba la vuelta al edificio, prolongándose por las calles inmediatas, y constituía

la desesperación de los que pretendían obtener el valor íntegro de los billetes, que en el comercio sufrían descuentos de no escasa entidad y que iban creciendo de día en día. Escaseaba el metálico para las transacciones; sabíase al mismo tiempo que el Banco acaparaba cuanto oro y plata llegaban á sus oficinas, y ó lo tenía allí estancado en perjuicio del comercio, ó se lucraba con el mayor valor representado por el numerario frente al papel. Semejante situación, al par que motivaba no pocos conflictos y una baja verdaderamente enorme en la fortuna de cuantos tenían billetes del Banco en grandes cantidades, era causa de hondas alarmas así en el comercio como entre los capitalistas y aun en el público en general, ya que á todos, más ó menos gravemente, alcanzaban las consecuencias de aquella crisis.

El marqués de Santa Marta sufría como todos y en mayor escala que muchos los perjuicios de tan anómala situación, que tanto se prestaba á negocios y agios de la peor especie; oía quejarse á todo el mundo, escuchaba los clamores de industriales y comerciantes; le indignaba el creciente abuso de aquella *cola* de falsos cambistas que llegaba ya hasta cerca de la Puerta del Sol, pero no veía que persona alguna tomase iniciativas para remediar tan insufrible estado de cosas. Su carácter enérgico le ha impulsado siempre á adoptarlas cuando las cree obligadas y justas, aunque perjudiquen sus intereses, y en este caso no vaciló en hacer guerra á una potencia como el Banco de España,

sabiendo perfectamente que, aun en el caso de un triunfo improbable, la lucha sería larga y costosísima, pues en asuntos judiciales, por más que muchos crean lo contrario, las personas acomodadas suelen perder siempre, aunque consigan la victoria. Tuvo, pues, la satisfacción de emprender y ganar esta campaña por sí sólo, pues ningún capitalista le ayudó ni secundó sus iniciativas, aunque las elogiaron grandemente cuando vieron su buen éxito. En cambio desde los primeros instantes estuvo del lado del marqués de Santa Marta la opinión pública; pues el asunto, como de interés general, tuvo gran resonancia, motivó la publicación de varios folletos y sirvió de tema preferente por mucho tiempo á los periódicos, de modo que el nombre del marqués de Santa Marta alcanzó gran relieve, tanto más merecido cuanto que representaba la causa de los intereses del pueblo y del comercio contra un establecimiento privilegiado que abusaba de sus altas influencias.

El día 4 de Mayo de 1865 se personó D. Enrique Pérez de Guzmán en el Banco de España y presentó al gobernador de aquel establecimiento, Sr. Santa Cruz, doscientos mil reales en cincuenta billetes de á cuatro mil para que se los cambiase en metálico. El gobernador se negó á hacerlo, manifestándole que las circunstancias por que entonces atravesaba el Banco no le permitían ordenar el cambio de aquella cantidad y que á lo sumo podría entregar en dinero veinte mil reales. Insistió el marqués en su pretensión, dirigiendo

en el curso de la entrevista merecidos reproches á la conducta del Consejo de administración de aquel establecimiento, que se creía autorizado á todo. Como Santa Cruz siguiera excusándose con los apuros del Banco, el Marqués le anunció que él no era hombre para volverse atrás una vez empeñado en un asunto de honra y justicia, y que desde aquel momento consideraba terminadas las gestiones amistosas y comenzaba las judiciales. Santa Cruz, ó por que no creyese al Marqués capaz de atreverse á luchar con el Banco, ó porque fiase en la protección oficial de que gozaba este establecimiento, mantuvo su negativa, que más adelante hubo de producirle grandes contratiempos y amarguras, comprometiendo el crédito del Banco.

Aquel mismo día volvió el apoderado del marqués de Santa Marta, acompañado del notario D. Mariano Demetrio de Ortiz y de dos testigos, é hizo protestar por falta de pago los expresados billetes, de los que se hizo constar la respectiva numeración en el acta del protesto.

Celebróse á los pocos días el juicio de conciliación sin avenencia, y el 13 de Mayo presentó el Marqués un escrito al Tribunal de Comercio, acompañando los cincuenta billetes protestados, cuya legitimidad había sido reconocida y que según las leyes y estatutos por que el Banco se regulaba, debían ser pagaderos al portador y á la vista, teniendo la cantidad que representaban el carácter de depósito voluntario, por lo que pidió, con arreglo al Código, se mandara librar ejecución contra el Banco de España por la indicada suma

de doscientos mil reales, los intereses legales del seis por ciento anual desde el 4 de Mayo y las costas, y se depositaran los billetes á la orden del Tribunal de Comercio ó en el mismo Banco, bajo la responsabilidad de la escribanía.

El protesto de los billetes había causado al Consejo de Administración del Banco tal alarma, por la resonancia que el asunto había de tener, que al día siguiente de la visita del Marqués, obtuvo aquel establecimiento una real orden del Gobierno moderado en que se disponía no se admitieran las demandas ejecutivas que contra el Banco incoaran los particulares por falta de pago de sus billetes, pues en ningún texto legal, según el Gobierno, se fijaba claramente la fuerza ejecutiva de dichos títulos al portador. Esta real orden fué comunicada sin pérdida de tiempo al Tribunal de Comercio que, ateniéndose á la misma, en auto de 18 de Mayo denegó el despacho de la ejecución solicitada por el Marqués, y le devolvió bajo recibo los billetes por carecer de objeto su depósito.

El marqués de Santa Marta apeló de este auto ante la Audiencia, y admitida la apelación en ambos efectos se sustanció en la Sala segunda, dictándose con fecha 7 de Diciembre del mismo año sentencia. En ella se declaró que el Banco de España, no obstante su privilegio, era una Sociedad mercantil anónima sujeta como las demás á las disposiciones legales; que tenía el deber ineludible de pagar sus billetes al portador y á la vista, presentando éstos el carácter de letras de cam-

bio privilegiadas, por cuanto eran pagaderas al portador y en el mismo pueblo de su fecha, debiendo en caso contrario ser de cuenta del Banco todos los gastos que se originasen, por analogía con lo dispuesto por el Código de Comercio respecto del librador. Se añadía en los considerandos que, si se negara la acción ejecutiva al tenedor de los billetes se haría ilusoria la obligación del Banco de satisfacerlos á la vista, perdiendo además las cantidades representadas por esos títulos el carácter de depósito voluntario y privándose á los tenedores de esa garantía. Además se hacía notar que entre el portador del billete y el Banco existe un contrato solemne mucho más eficaz que los reconocidos mediante escritura pública, pues se constituye por ministerio de la ley, que en modo alguno podía ser derogada ni modificada por la real orden de 6 de Mayo. Con arreglo á estas consideraciones y á los preceptos legales, falló la Sala que debía revocar y revocaba el auto apelado; que por consiguiente declaraba haber lugar á despachar la ejecución solicitada por el marqués de Santa Marta contra el Banco de España y en su representación el gobernador del mismo por la cantidad pedida, y que se devolvieran los autos con la oportuna certificación y contraorden al Tribunal de Comercio de Madrid para que haciéndose cargo de los billetes protestados, despachase el mandamiento de ejecución con arreglo á derecho.

Esta sentencia produjo una sensación grandísima en la opinión y valió al marqués de Santa Marta innume-

rables felicitaciones, así del comercio como de particulares. En cambio aterró al Consejo de administración del Banco de España, pues podía traer la quiebra y el descrédito de ese establecimiento. Hiciéronse varias gestiones cerca del marqués de Santa Marta para que renunciase á proseguir el pleito, y se le ofreció particularmente, entre otras ventajas, la de darle toda clase de facilidades para el cambio de cuantos billetes presentara en lo sucesivo. Pero el Marqués no perseguía en aquel asunto un interés exclusivo y personal: su valiente iniciativa le había constituido, con aplauso de todos, en representante de los intereses del público y del comercio de quienes abusaba el Banco, y así no solo rechazó los ruegos y ofertas que por parte de esta Sociedad de crédito se le dirigían, sino que se mostró inflexible también ante otras gestiones que en nombre del Gobierno hizo ante él uno de los ministros, á quien le unían lazos de parentesco y de amistad entrañable y que le pidió abandonara aquel asunto, que estaba promoviendo gran escándalo y alarma y colocaba al Ministerio en una situación difícil; añadiendo que si el marqués de Santa Marta lo deseaba, iría á visitarle con el mismo objeto el general O'Donnell. A la sazón había vuelto al poder el partido de la unión liberal, que tenía con el Banco los mismos compromisos que los moderados.

No modificó el marqués de Santa Marta su propósito, pues ni quería ni necesitaba privilegios de una institución que de tal manera abusaba de los que en

mala hora se le habían concedido. Entonces el Consejo del Banco de España, á quien no se ocultaba la inmensa gravedad de la cuestión y que comprendía perfectamente que ésta podía traer una cola mucho mayor que la formada á poca costa todos los días á sus puertas, invirtió algunos miles de duros en la redacción de un dictamen ó informe, que encargó á catorce abogados de los que gozaban de más reputación en Madrid. Fueron esos abogados D. Manuel Cortina, D. Francisco Cutanda, D. Juan González Acevedo, D. Luis Díaz Pérez, D. José González Serrano, don Ramón Pasarón y Lastra, D. Cirilo Alvarez, D. Nicolás María Rivero, D. José María Fernández de la Hoz, D. Laureano Figuerola, D. Pedro Gómez de la Serna, D. Camilo Muñiz Vega, D. Antonio del Rivero Cidraque y D. Gregorio Miota.

El informe de estos célebres letrados, que lleva la fecha de 10 de Enero de 1866, se imprimió y circuló profusamente. No correspondió, por cierto, ni en su forma ni en su fondo á la reputación del que entre sus firmantes la tuviese más modesta; hubiérase dicho que estaba redactado por cualquier funcionario del Banco de España, y suscrito, sin detenido examen, por los catorce jurisconsultos. De todos modos, es innegable que éstos se mostraron poco felices en su dictamen; verdad es que defendían una causa antipática é injusta. Empezaban haciendo historia de lo ocurrido; trataban de justificar la conducta del Banco, atribuyéndola al desnivel existente en la circulación monetaria y á

razones de alto patriotismo; negaban que los billetes del Banco tuviesen la consideración de letras de cambio, siquiera fuesen privilegiados, y con este motivo se embrollaban en una digresión confusa y llena de sutilezas, tanto más inútiles cuanto que no deducían de ellas definición alguna aceptable del billete de Banco. Tampoco sabían si dar á éste el carácter de título ejecutivo ó negárselo; se limitaban á combatir con escasa fortuna los fundamentos de la sentencia y evitaban toda afirmación categórica, lo que daba al escrito una vaguedad de peor efecto. Abandonando muy pronto el terreno legal, que no podían menos de hallar resbaladizo, entraban los firmantes en consideraciones patrióticas, un tanto declamatorias y sentimentales, para justificar la conducta del Banco. Decían que éste tenía sobrados recursos para pagar cuantos billetes le fueran presentando al cobro, pero que no lo hacía por altas razones de previsión, pues desde el momento en que el oro y la plata pasaran á manos de los particulares sin esas prudentes restricciones, nuestro numerario iría á parar al extranjero. Una argucia tan inútil como de dudoso gusto, se permitían los dictaminadores al fingir sospechas de que el marqués de Santa Marta apremiase al Banco con cincuenta billetes, que podían ser distintos de los que motivaron el protesto. En resumen, opinaban que los medios legales que tenía el Banco para defenderse en la demanda del marqués eran: *primero*, pedir que se declarase nula la ejecución despachada, por no estar bien determinado

el carácter ejecutivo de los billetes; *segundo*, utilizar la excepción de falsedad de éstos, si no fueran legítimos, y *tercero*, alegar la incompetencia de jurisdicción, pues los firmantes se inclinaban á creer que el asunto debía ventilarse ante el Consejo de Estado, por la vía contencioso-administrativa.

Sucede con las cuestiones jurídicas y económicas lo que con el alcance de los proyectiles: así como catorce hondas no llevan las piedras tan lejos como un solo cañón las balas, catorce opiniones respetables, valen menos que una, cuando esta defiende la verdad y aquellas el error. Esos problemas no se han resuelto nunca por mayoría de votos, ni por el peso de la autoridad personal, tan abrumadora para los espíritus débiles; ó se tiene razón ó no, esto es todo. Firme el marqués de Santa Marta en la convicción de su derecho y perfectamente penetrado de lo que había en el fondo del asunto, lejos de arredrarse ante el prestigio de los letrados que suscribían el informe en pro del Banco, publicó para contestarle otro bajo el epígrafe *Cambio de billetes del Banco de España. Consideraciones del marqués de Santa Marta con motivo del informe emitido en esta cuestión á consulta del Banco de España por catorce abogados del Colegio de esta Corte*. En este folleto se planteaba con sencillez y claridad verdaderamente admirables y con verdadero dominio de sus términos el problema pendiente. Como, por desgracia, la cuestión vuelve á ser hoy de actualidad y lo será con mayor motivo antes de mucho tiempo, es in-

interesante reproducir las consideraciones del marqués de Santa Marta:

«Se ha publicado y repartido estos días con cierta profusión un Informe que han emitido catorce abogados de esta corte sobre la cuestión del cambio de billetes del Banco de España que tengo sometida hace tiempo á los tribunales de justicia. Revela, á mi modo de ver, la publicación de ese Informe, en el ánimo de los Directores del Banco, el intento de prevenir el juicio de los que están hoy llamados á fallar el pleito ejecutivo, y también el de disipar la justa desconfianza de los tenedores de sus billetes, cada día más en descrédito. Se habría, de otra manera, limitado á guardar para sí la opinión de sus consultores, y á determinar por ella su conducta.

Está acreditado el doble intento que atribuyo al Banco, aun más que por la publicación del Informe, por los extremos que el mismo abraza y toca, pues habla, no ya tan sólo de las cuestiones jurídicas á que mi demanda puede haber dado origen, sino también de si, atendida la situación económica de esta plaza, y aun la de todo el reino, está ó no justificada la restricción que al cambio de sus propios billetes ha puesto el Banco, dando de paso sobre la próspera situación del Establecimiento seguridades, que, sólo procediendo de personas más competentes en esta materia, podrían calmar algún tanto la fundadísima alarma de los acreedores por billetes. De no ser éste su propósito, ¿cómo

habría podido ni concebir la idea de hacer extensiva á cuestiones y asuntos tales su consulta á letrados, si distinguidos en el foro, de escasísima autoridad como hombres de negocios?

Léjos de mí la idea de imitar al Banco, tratando de ejercer presión de ningún género sobre el ánimo de mis jueces. Sin ejercerla, he obtenido de la Sala primera de la Audiencia un fallo que me favorece; y sin ejercerla espero obtener del Tribunal de Comercio sentencia de remate contra mi adversario. Veo en el billete de Banco un valor comercial superior á los demás valores; una promesa de pago, siempre reconocida y siempre vencida; un documento público, suscrito nada menos que por un representante del Estado; la expresión de un contrato de depósito, creado y determinado por la misma ley de Bancos; un título al portador, pagadero á la vista, en cuanto sea presentado á la caja del que lo ha emitido; y no puedo creer que tan entendido Tribunal le niegue la fuerza ejecutiva que ha de reconocer en la letra de cambio aceptada, y aún en la simple póliza original de un contrato firmado por las partes é intervenido por un corredor de número. Con tan buena causa ¿necesito acaso ejercer sobre el ánimo de mis jueces más presión que la del derecho, que acaba al fin por prevalecer sobre el amaño y la intriga donde quiera que no se haya llegado al mayor extremo de envilecimiento?

Pero, si no trato de imitar al Banco, previniendo con informes de letrados el juicio de los que hoy cono-

cén del negocio, trato sí de imitarle, justificando mi conducta. No tengo ni he tenido jamás contra el Banco animosidad de ninguna especie. He entablado mi demanda, no con el deseo de embarazar su acción ni de crearle un conflicto, sino con el de salir á la defensa de mis intereses. No pudiendo en el pasado año de mil ochocientos sesenta y cinco cubrir en billetes todas las atenciones de mi casa, acudí varias veces al Banco en busca de metálico. El Banco, á pesar de haberse podido convencer de que yo no solicitaba el cambio de billetes con miras de especulación ni de agio, no se prestó á darme ni la tercera parte del dinero que le pedía. Advierto que no presenté nunca al cambio billetes por más de diez mil escudos. Ví con esto lastimados mis intereses, y creyendo indecoroso seguir más tiempo pidiendo por favor lo que por deber había de dárseme, hice presentar á la Caja del Banco billetes por veinte mil escudos, con orden de protestarlos si en el acto no se procedía á su pago. Se los hubo de protestar por haber alegado el Gobernador del Banco que las circunstancias del Establecimiento no permitían que se me cambiaran billetes por más de dos mil escudos, y de aquí la demanda ejecutiva. Creo que nadie puede poner en duda si estuve ó no en mi derecho. Me consideré, no sólo con el derecho, sino también con el deber de adoptar esta conducta. Adoptándola, defendía, al paso que mis propios intereses, los de todos los tenedores de billetes, cuyas amargas quejas se dejaban ya oír en calles y plazas; creí de mi deber,

puesto que mi situación me lo permitía, iniciar y seguir, en defensa del interés de todos, el litigio que sostengo.

Si obré mal, confieso que no lo reconozco todavía, ni ha podido llegar, por lo tanto, la hora de mi arrepentimiento. Ni acierto á ver que me obliguen á retirarme del pleito, el patriotismo ni la deferencia que posteriormente ha tenido conmigo el Banco, ofreciéndose á cambiarme, y cambiándome, billetes por veinte mil escudos, cuando no solicitaba cantidad determinada; ni pueden tampoco tranquilizarme las seguridades que se dan en el Informe. Me tranquilizarían tal vez, si me las diesén personas versadas en la marcha de los negocios del Banco, y me dijesen, no que habían tenido á la vista datos y antecedentes, sino que habían practicado un riguroso arqueo. No puede dar tranquilizadoras seguridades sobre la situación de un Banco sino el que haya visto por sus propios ojos su metálico en caja y los valores en cartera, y haya examinado por qué cantidad figuran en la cartera los efectos á más de noventa días y los de más corta fecha, y haya podido apreciar, por las operaciones hechas durante un largo período, la marcha impresa al Establecimiento, y las ventajas que ésta tenga ó los vicios de que adolezca, y haya sido, por fin, capaz de penetrar hasta en sus más hondos secretos.

Juzgar de la situación de un Banco en descrédito por datos y antecedentes que él mismo facilite, no lo tomen á ofensa los ilustrados autores del Informe, re-

vela una candidez de que ya no hay en este siglo sino muy raros ejemplos. En 1797 suspendió el Banco de Inglaterra el pago de sus billetes. No bien se susurró en Londres que iba á suspenderlo, agolpóse á las puertas de la Caja la muchedumbre, deseosa de cambiarlos por buenas libras esterlinas. Hízose circular al punto entre los ciudadanos una hoja impresa, y en ella se daban también por el Gobernador, el Subgobernador y los Directores del Banco las mayores seguridades sobre la situación próspera del Establecimiento, y lo sólidamente garantizados que estaban los billetes.

No paró aquí el engaño. Conocedora la Cámara de los Comunes de la medida y de la orden del Consejo Particular del Rey, que lo había autorizado, nombró desde luego una comisión de su seno para que se enterase del verdadero estado del Banco. Enterada la Comisión, reiteró las seguridades dadas por el Gobernador, el Subgobernador y los Directores. Aseguró que el pasivo del Banco ascendía tan sólo á 13.770.390 libras, y el activo, eliminada la deuda permanente del Gobierno, que era de 11.686.800 á 17.597.280; hecho que arrojaba, á favor del Banco, un saldo de 3.825.890 libras. Confirmó, sin embargo, la Cámara la autorización del Consejo del Rey, y duró la suspensión del pago de los billetes nada menos que veintidos años.

¿Cómo, siendo la situación de aquel Banco tan próspera, pudo prolongarse tanto ese triste estado de cosas? El Gobierno debía al Banco en 1797, además de

los 11.686.800 libras, que constituían su deuda permanente, otros 10.000.000 de deuda flotante, que figuraban naturalmente en el activo del Establecimiento. Se hallaba en la imposibilidad de restituírseles, y aún le pedía mayores sumas. El Banco no podía, por esta sola razón, hacer frente á sus numerosas obligaciones, y mucho menos á la del pago de sus billetes, cuyas emisiones había ido multiplicando, impelido por las exigencias del Estado y sus crecientes apuros. Esta fué, al fin, la clave para descifrar el enigma. ¿Qué valían, después de todo, las seguridades dadas por el Banco y la Comisión de la Cámara de los Comunes? O esa Comisión fué realmente engañada, limitándose á juzgar por datos y antecedentes, ó se prestó á parecerlo.

¡Próspera la situación del Banco de España! No temo que su activo sea inferior á su pasivo, pero sí que constituyan también gran parte de su activo créditos contra el Gobierno. La deuda del Gobierno acabó con el Banco de San Carlos, sobre cuyas ruinas se levantó el de San Fernando. La deuda del Gobierno puso, á su vez, en 1848, al de San Fernando al borde del abismo. La deuda del Gobierno, es muy de temer que sea la que tenga hoy al de España, sucesor del de San Fernando, en el camino del descrédito y de la bancarota.

No, no puede ser próspera la situación de un Banco que falta al pago de los billetes, su deuda preferente. Hoy las condiciones del Banco de Inglaterra son com-

pletamente distintas de las del año 97. Merced á Roberto Peel, autor de la ley de 19 de Julio de 1844, la emisión de billetes está absolutamente separada de las demás operaciones de la Compañía. Se verifica en un departamento especial, y tiene garantías propias, cuya gran parte consiste en oro amonedado y oro y plata en pasta. Reputa el Banco tan sagrada esa reserva metálica, y tan sagrado el cambio de sus billetes, que, según han declarado sus más altos empleados en las últimas investigaciones parlamentarias sobre la legislación de los Bancos, cree que debe faltar antes al pago de las demás obligaciones que al de sus cédulas al portador, y en ningún caso ni por ningún pretexto dejar de consagrar á su cambio ni un solo penique del departamento de emisión. Uno de esos funcionarios ha llegado á consignar que ni áun á la restitución de depósitos podrían ser jamás aplicados tan cuantiosos fondos.

Los Bancos deben considerar efectivamente el billete como la más privilegiada de sus obligaciones. Solo la confianza que el público les dispensa, les permite la emisión de esos títulos; y es hasta un crimen que la burlen, dejando de cambiarlos por metálico, y pagando al corriente los demás créditos. Gracias á esa confianza, manejan un capital doble y triple del que sus accionistas aportaron, y adquieren una inmensa ventaja sobre las más fuertes casas de banca de su domicilio, cuando no sobre las de toda una provincia ó todo un reino. Gracias á esa confianza, obtienen pingües be-

neficios y reparten anualmente á los asociados crecidos dividendos.

No la burlan, generalmente, nunca los Bancos celosos de su buen nombre. No suspenden ni restringen el cambio de sus billetes sino después de agotados todos los demás recursos. Comprenden, no solo la inmoralidad de la medida, sino también la deplorable perturbación que produce en toda clase de transacciones; y no la adoptan nunca disponiendo de fondos con que recoger sus cédulas. Tienen además presente que su mayor ó menor facilidad en recogerlas es ordinariamente la medida de su crédito.

¿Cómo he de creer que el Banco de España sea la excepción de la regla, y deje de pagar al corriente sus billetes, pudiendo cambiarlos todos con disponer de su reserva metálica, y realizar dentro de un corto plazo sus valores en cartera? Creerlo sería á mis ojos inferirle la mayor de las injurias; sostenerlo, formular contra él la acusación más grave que pudo en ningún tiempo dirigirse á un Banco de emisión y de descuento. ¿Cómo no habría de atribuirle entonces mala fe, al obligarme á protestar sus billetes por falta de pago, y acudir para su cobro á los tribunales de justicia? Para que yo y los demás tenedores los podamos cobrar al presentarlos, le obliga la ley á tener constantemente en caja y en cartera metálico y valores cuyo plazo no exceda de noventa días, bastantes á cubrir sus débitos, no solo por billetes, sino también por cuentas corrientes y depósitos. Y teniéndolos, ¿había de negarse

al pago íntegro de mis cédulas, y obligarme, para cambiarlos por oro, á dar veintitres y veinticuatro pesos por talega? Flagrante violación de la ley sería que hubiese dispuesto de su reserva; pero iniquidad sería, y no menor, que, conservándola y pudiendo con ella cambiar á la vista sus billetes, se negase á satisfacerlos, manteniendo viva una honda y general alarma.

Mas quiero por un momento suponer que sean sobre este punto ciertas las apreciaciones de los autores del Informe. Examinemos los poderosos motivos por que tan dignos letrados suponen que el Banco restringe el cambio de sus billetes, á pesar de tener medios sobrados para recogerlos. Al decir de ellos, el Banco obra inspirado por altas consideraciones de interés público. Pretende evitar por este medio la emigración de la moneda y la consiguiente crisis monetaria, el grave conflicto de muchas casas de comercio, la ruina de la plaza de Madrid, y una profunda perturbación en el crédito de la nación entera.

Quisiera que se me dijese, ante todo, quién ha erigido al Banco en vigilante y custodio de los intereses generales, y en virtud de qué ley está facultado para, tomándolos por motivo según su particular criterio, faltar al cumplimiento de las obligaciones que por la misma ley le están impuestas. Aunque lleva el pomposo título de Banco de España, no es en realidad más que un Banco local, cuyos billetes apenas circulan más allá de las tapias de esta corte. ¿Qué sería entre nosotros de la circulación y del crédito, si cada uno

de los Bancos de provincia se erigiese en árbitro para apreciar los intereses nacionales y determinar por ellos su conducta, independientemente de las leyes? Para estar dispensado de cumplirlas, necesitaría el Banco de España, aun cuando correspondiera á su título, una autorización del legislador, como la que en 1797 obtuvo de la Cámara de los Comunes el Banco de Inglaterra. ¿La ha obtenido? ¿Se ha tomado el trabajo de pedirla?

La moneda, convertida en mercancía, tiene hoy una irresistible tendencia á venderse en los mercados extranjeros, dicen los autores del Informe; urge contenerla. Mas, sin advertir que si el contenerla entrase en las atribuciones ó en los deberes del Banco, y fuese asequible impidiendo que saliera de las cajas del Establecimiento cuanta en ellas entrase, lo lógico sería, no restringir, sino suspender en absoluto el pago de los billetes, ínterin no desapareciesen las causas que llaman á otras naciones el oro y la plata que acuñamos. Esta fué, sobre poco más ó menos, aunque no para evitar la emigración de la moneda, la conducta que, en el mismo año de 1797, siguió el Banco de Inglaterra. La mayor cantidad que daba en metálico era la de una libra esterlina.

Quiero por de pronto conceder que esa tendencia de la moneda á salir del país sea completamente cierta. Concederé, y es más, que la emigración sea ya tan considerable, que constituya un verdadero peligro. ¿Qué adelantamos con que permanezca la moneda en

España, si ha de estar muerta en las arcas del Banco? Que esté en el extranjero, que esté enterrada en la caja del Banco, el resultado será siempre el mismo. En cuanto dejan de pagarse al corriente los billetes, lo enseña la historia del crédito en todas las naciones del mundo, la moneda metálica adquiere al instante premio, y ese premio aumenta á proporción que crecen las dificultades para el cambio de las cédulas. En 1696 pasó el Banco de Inglaterra por su primera crisis. Hubo de ir poco á poco suspendiendo el pago de sus billetes, y el premio del oro fué subiendo al veinte por ciento. Del año 1797 á 1820, período de la crisis tantas veces citada, el oro llegó á valer un veinticinco. Ni la autorización del Parlamento para suspender el cambio, ni la deferencia del comercio de Londres, que se comprometió á no rehusar por ningún motivo los billetes en pago de sus créditos, bastaron á impedir tan grave y perturbador acontecimiento.

Discutióse entonces con calor sobre la causa del fenómeno. Las opiniones todas hubieron de enmudecer al fin ante la del célebre economista David Ricardo, que en un luminoso y enérgico folleto demostró que el encarecimiento de los metales no era sino la prueba del menosprecio en que habían caído los billetes.

¿Qué sucedió en nuestra misma patria el año 1848? El Banco de San Fernando, hoy de España, fué poco á poco dificultando el cambio de sus cédulas, y el premio de la moneda metálica creciendo hasta el catorce por ciento. Hoy mismo el oro está ya al pormenor al

tres por ciento, y al pormayor, como he dicho antes, á veinticuatro pesos por talega. No dejará de llegar otra vez al catorce por ciento, ó más, si el Banco se empeña en ir atornillando sus arcas contra los tenedores de sus billetes.

La moneda es siempre una mercancía; pero hoy, más que en los tiempos normales, es aquí verdaderamente materia de agio. ¿Quién más que el Banco, por su conducta, contribuye á que lo sea? En Barcelona hay, no solo un Banco de emisión, sino también varias Sociedades de crédito, que bajo la forma de abonarés ú otra análoga, han creado un papel, que es en el fondo el billete de Banco. El oro no tiene, sin embargo, premio. ¿Por qué? El Banco no ha pensado aún en restringir ni en lo más mínimo el cambio de sus billetes á la vista.

En la misma causa creadora del mal se busca aquí el remedio. El nudo de la dificultad, añaden los autores del Informe, está en que entre los valores emitidos en papel y el metálico circulante existe una desproporción verdaderamente tristísima. Esa desproporción no ha de cesar, á buen seguro, con la marcha que sigue el Banco. Podría el Banco disminuirla, pero no negándose al pago de sus billetes, sino recogiéndolos; no guardando el oro en sus arcas, sino entregándolo á la circulación, que tan imperiosamente lo reclama. Lo que sin disputa está de más, es el papel; lo de menos, el oro; sólo soltando oro y retirando papel, es natural que se restablezca el equilibrio. ¿Cómo se dominó al

fin la crisis de 1848? El Banco no debería echarlo nunca en olvido. Se la dominó taladrando, no ya simplemente recogiendo, una gran parte de la emisión del Banco. Las emisiones de papel, importa mucho tenerlo en cuenta, están limitadas, más que por la ley, por las necesidades comerciales de su demarcación circulatoria. Cuando las sobrepujan, el desequilibrio y la crisis vienen, por más que no emigre la moneda, ni otra causa los provoque. ¿Qué otro remedio ha de haber entonces que, ó recoger é inutilizar una parte de los billetes emitidos, ó ensanchar, como se hizo, el mismo año 1848, en Francia, la esfera de circulación del Banco?

Los autores del Informe, antes de dar tantas seguridades sobre la situación del Banco de España, tengo para mí que debían haber examinado muy cuidadosamente si para él había ó no llegado este caso. Después de haberse enterado de la verdadera suma por que figurasen en el activo del Establecimiento los créditos contra el Estado á mayor plazo de noventa días, ese examen era lo que más podía ilustrarlos y determinar su juicio. Olvidaron, desgraciadamente, esos dos importantes puntos, y dominados, de una manera casi exclusiva, por la idea de la desaparición de los metales acuñados, se limitaron á darnos por todo dato las cantidades en metálico que dentro de dos cortos períodos habían salido de las cajas del Establecimiento. Como si ese mismo hecho no pudiera reconocer por causa la excesiva emisión de papel, atendidas las necesida-

des de esta plaza, la consiguiente alza en los cambios sobre las demás plazas nacionales y extranjeras, la consiguiente ventaja para éstas en saldar sus cuentas con oro, y no con valores comerciales, y por término de todo, la consiguiente salida de numerario, es decir, esa misma emigración de la moneda que ha preocupado á tan esclarecidos jurisconsultos hasta el punto de hacérsela tomar como la causa inmediata de la crisis que atraviesa el Banco.

No negaré que salga del país una parte más ó menos considerable de numerario; pero sí diré que no es de comparar con la que sale para nuestras mismas provincias, cuyos pedidos de oro pueden contribuir algún tanto á encarecer aquí los metales ámonedados. No todo el oro que ha salido del Banco en los dos citados períodos, ni aún la mayor parte, puedo admitir, además, que haya emigrado de la Corte. En toda crisis, grande ó pequeña, es buscado con afán el oro, si por algunos con objeto de especular, por los más con el propósito de guardarlo, y prevenirse contra los efectos de la crisis misma.

Sea de esto, no obstante, lo que fuere, repito que el remedio no está en la suspensión del pago de los billetes, que desnivelando, como es sabido que desnivela los cambios, no puede menos de mantener y aun fomentar el mal, en vez de destruirlo ni de aminorarlo.

Si por otra parte, para evitar del todo la emigración de la moneda al extranjero, debe negarse el Banco á normalizar el cambio de sus billetes, ¿como cuanto

tiempo les parece á los autores del Informe que habrá de durar ese anómalo estado de cosas? Declaran que han emigrado principalmente ciertas monedas, que han adquirido fuera de España una considerable prima; y revelan con esto que una de las causas de la emigración ha sido á sus ojos la mejor ley del oro ó de la plata que acuñamos, relativamente á la de los otros pueblos. Admitiendo que fuese ésta la causa, ¿había de estar nunca en manos del Banco impedir por sus medidas la exportación de numerario? Una de las verdaderas causas de la emigración de la moneda es sin duda el saldo en contra de España que arroja la importación sobre la exportación; saldo que no podemos pagar sino en metálico. ¿Está tampoco al alcance del Banco hacer que desaparezca?

Después de todas estas consideraciones, dejo al juicio de mis conciudadanos si tengo ó no motivos para seguir contra el Banco mi demanda ejecutiva. Sobre no tener el Banco derecho á faltar al cumplimiento de obligaciones que le han sido impuestas por sus propias leyes, no tiene para suspender ni restringir el cambio de sus billetes, ni aun las razones de conveniencia pública con que se pretende legitimar su extraña conducta, abiertamente contraria al fin por que se la supone inspirada. Con mi demanda, sobre alcanzar la reintegración de mi derecho y del de los demás tenedores de billetes, podré tal vez contribuir á apartar al Banco de tan mal camino.

A mis ojos, como llevo dicho, su situación es falsí-

simá y mala; creo que para vencerla urge apelar á remedios heróicos. Importará poco que acuda al Gobierno ni á las Cortes para conjurar presentes ni futuros peligros; ¿qué podrá pretender de esos poderes públicos, que baste á salvarle, sin agravar las condiciones del mercado? Ni una autorización para imponer á su antojo mayores ó menores restricciones al cambio de billetes, ni una ley declarando forzosa la circulación de esos títulos, podrían detener los tristes efectos de nuestra crisis metálica. Ya que no quepa rechazar los billetes, el productor carga siempre sobre sus artículos el premio del oro. El descuento y menosprecio de las cédulas de Banco se hacen por esta razón inevitables.

Si como hasta aquí no antepone el Banco de España á su propio interés los intereses generales, cuya defensa aparenta tomar á su cargo, debe buscar, no en los poderes constituidos, sino en sí mismo, la solución del conflicto. ¿Depende de que su emisión sea excesiva? Límitela, recogiendo y aun inutilizando parte de sus billetes. ¿Son las necesidades de la Hacienda las que le han obligado á hacer una emisión superior á las necesidades de la plaza? Comprometa á la Hacienda á reiterar las salvadoras medidas de 1848. ¿Está el mal en sus propios desaciertos? Púrguelos, renunciando á sus beneficios, y sacrificando, si es menester, hasta su capital, afecto al pago de todas sus operaciones.

Sería hoy hasta un sarcasmo hacer un llamamiento

al patriotismo de los españoles en beneficio del Banco. Los tenedores de billetes vemos todos los días sacrificados nuestros intereses por el descuento que sufren. ¿Qué pérdidas se han repartido entre los accionistas del Banco?

Repito que no me mueve contra el Banco de España ningún sentimiento de odio. Lamento que, después de haberme confundido, en cierto modo, con los agiotistas del oro y los explotadores de todas las calamidades públicas, haya permitido que sus letrados consultores hayan puesto en duda si tendría aún en mi poder los mismos billetes que acompañé en mi demanda, y presentaría ahora otros para que la ejecución se despachara, sabiendo que los billetes objeto del pleito habían sido protestados, y su respectivo número no podía menos de constar en el protesto; cosa que tampoco debían ignorar, siendo hombres de ley, los autores del Informe; lo lamento mucho más, cuando sabe el Banco que dispongo de otros valores de consideración, y no tengo necesidad de usar de unos billetes que, al serme devueltos por el Tribunal de Comercio, no quise recibir sino á ley de depósito, hecho por el que estaba privado de darlos y realizarlos; pero ni éstos pueden ser motivos de resentimiento para el hombre que, respecto á sus acciones, anteponga á la errada opinión de los demás los fallos de su propia conciencia, ni estoy acostumbrado á determinar por tan frívolas causas mi conducta.

Si abrigara realmente animosidad contra el Banco,

¿qué más podría yo desear que perder mi pleito? El día en que se declarase por sentencia ejecutoria que los billetes carecen de fuerza ejecutiva, tendrían los enemigos del Banco en sus manos las más poderosas de las armas. «¿Creíais tener en los billetes, dirían á sus conciudadanos, un valor equivalente á la moneda, por ser pagaderos á la vista? Sabed que no tenéis en ellos más que un papel, cuyo valor depende de la voluntad del Banco. Si el Banco se niega á pagároslos, no disponéis para realizarlos ni aun de las acciones que os da la ley para cobrar la letra de cambio aceptada, el pagaré reconocido, la póliza de un contrato intervenida por corredor, y la escritura pública. Tenéis en vuestras manos el más despreciable de los valores comerciales.» ¿Necesitaban acaso de más para provocar un alza súbita en el descuento de los billetes, y una honda perturbación en el mercado?

En prueba de que no soy enemigo del Banco, puedo asegurar que deseo de todas veras ganar mi pleito.

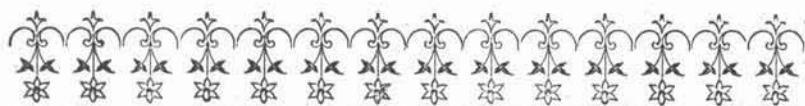
Madrid 15 de Febrero de 1866.

EL MARQUÉS DE SANTA MARTA.»

Este interesantísimo trabajo, que fué leído con avidez y muy comentado en todos los círculos mercantiles y financieros dió, por decirlo así, el golpe de gracia á las pretensiones del Banco y sirvió de confusión á sus defensores. Persuadido el Consejo de aquel establecimiento de que por las vías legales no podía obtener el triunfo, volvió á echarse en brazos de los poderes

públicos, y á poco de caer el gobierno unionista promovió el gobernador civil, D. Carlos Marfori, una competencia á los tribunales ordinarios para conocer del asunto. Esta tentativa no prosperó y se intentaron nuevas dilaciones, hasta que por fin el Banco de España reconoció la justicia de las pretensiones del Marqués, y únicamente le rogó que disminuyese hasta la mitad el interés legal del 6 por 100 que exigía por la demora en el pago de los billetes, quedando, como era natural, de cuenta del Banco todos los gastos y costas que se habían causado. Como el marqués de Santa Marta no había perseguido objeto alguno de lucro personal con este ruidoso pleito, no tuvo dificultad en acceder á aquel ruego. De este modo, y gracias á su entereza y perseverancia, logró vencer á una institución que tenía tras sí á los gobiernos. Verdad es que el marqués de Santa Marta tenía de su parte la razón y representaba la opinión pública.





CAPÍTULO V

El marqués de Santa Marta en el Comité de acción revolucionaria.—Sus trabajos en el partido democrático.—Diversas tendencias de los conspiradores.—Sublevación del 3 de Enero de 1866.—Entrada de los insurrectos en Portugal.—Preparativos de un nuevo movimiento.—Intervención del marqués de Santa Marta en los preparativos del movimiento de 22 de Junio.—Sucesos de este día en Madrid.—Generosa actitud de los demócratas y doblez de sus aliados.



A queda dicho que el marqués de Santa Marta venía desde 1864 coadyuvando poderosamente, con su actividad, su inteligencia y su fortuna, á cuantas empresas revolucionarias intentaban los progresistas, que por entonces se habían ya lanzado al retraimiento, y los demócratas que eran, en su mayoría, franca y decididamente republicanos. Con este sentido en su matiz más avanzado conspiraba el Marqués, y no hay para qué decir que llevaba á esta lucha viril y arriesgada el tesón propio de su carácter y la firmeza de que había dado muestras en su campaña contra el Banco y en los rasgos todos de su vida. Desde luego, los demócratas hubieron de reconocer bien pronto que habían recibido para sus

campañas un refuerzo valiosísimo con la adhesión de D. Enrique Pérez de Guzmán.

Ya en el mismo año de 1864 se había intentado un movimiento, que no llegó á verificarse. Prim, que era el jefe militar de esta conspiración, perdió mucho tiempo y muchas ocasiones, porque no quería ponerse de acuerdo con los demócratas que, según él, armarían enseguida al pueblo y arrojarían el trono por el balcón. No era este aún el fin á que aspiraban los progresistas, pues había entre ellos grandes vacilaciones acerca del carácter que debía imprimirse á la revolución. Olózaga, jefe civil de ese bando, estaba resueltamente en contra de la dinastía borbónica, y sobre todo de doña Isabel II, á la que no podía perdonar la participación que tuvo en la intriga de 1843, cuando guiada por los moderados se avino á declarar que aquel hombre público, á la sazón presidente del Consejo, le había hecho firmar á la fuerza el decreto disolviendo las Cortes. Otros muchos progresistas se inclinaban á la tendencia de Olózaga; pero la dificultad más grave estaba en designar la persona que había de ocupar el trono después de la revolución. Inclinábanse los más al rey de Portugal, ó en su defecto á otro individuo de la familia de Braganza, que pudiese ceñir un día á su frente ó á la de su inmediato sucesor las dos coronas ibéricas. No se ocultaban, sin embargo, á los más encariñados con esta solución las graves dificultades que ofrecía, ya de carácter internacional, ya motivadas por el natural apego de los portugueses á su independencia.

De haber sido posible la unión de España y Portugal por este camino, es innegable que la revolución habría tenido un objeto verdaderamente serio. Poco importaba que por lo pronto hubiese revestido carácter monárquico: no habría tardado en imponerse la República y con ella la federación hispano-portuguesa, fórmula que salvaba en todo lo posible las susceptibilidades del país vecino. Pero es un vano error creer posible la formación de la nacionalidad ibérica, mientras España y Portugal se rijan por la monarquía, pues las dinastías reinantes en uno y otro país y los gobiernos á sus órdenes no dejarán de hacer esfuerzos para ahondar las distancias morales que á ambos pueblos separan.

No faltaban progresistas que creyeran lo más acertado sostener el trono de Isabel II, á condición de que diese el poder á su partido. Mucho tiempo había transcurrido desde que se acordó el retraimiento, y mediaba ya un río de sangre entre ese bando y el trono cuando apareció en *La Iberia* el famoso artículo que terminaba: *Aún es tiempo, señora; mañana será tarde*, y que no era sino un desesperado esfuerzo de conciliación. Madoz y Figuerola eran enemigos del retraimiento, y el último de estos personajes fué diputado á pesar del acuerdo y la reprobación de su partido. La conducta del mismo Prim fué muy oscura hasta un año antes de la revolución de Septiembre; conocidos son los esfuerzos que María Cristina hizo durante el último gobierno de Narvaez para que se formase un

ministerio presidido por aquel general, y en que habría entrado además D. Pedro Egaña; quizá la persecución de que á última hora fueron objeto los unionistas, obedecía al plan de disolver su bando para que se distribuyese entre moderados y progresistas; pero la lógica de los sucesos se impuso á todas las combinaciones. No cabe, por fin, desconocer la influencia de los trabajos, entonces muy activos, del duque de Montpensier, que aspiraba á la corona, contra la opinión de los que querían ceñirla á las sienes de su esposa, doña Luisa Fernanda. De todas suertes, bien fuera esta señora reina, bien lo fuera el duque, el heredero habría de ser forzosamente un Orleans, con lo que se habría consumado en plazo breve el cambio de dinastía.

Entre los demócratas unos se inclinaban á hacer la revolución en beneficio de la casa de Braganza; otros para entronizar la monarquía democrática, cualquiera que fuese el candidato, y los más estaban por la República. El marqués de Santa Marta estaba, como Pí y Margall y Orense, por la República federal.

Dos años de alejamiento del poder habían impacientado al general O'Donnell en tales términos que, después de los sucesos de la noche de San Daniel, se puso en inteligencia con Prim, aunque tal vez con el propósito de despertar temores en Palacio, más bien que con el de reproducir el hecho que con tan buen éxito realizó once años antes. Si se había propuesto sólo hacerse temible, bien pronto alcanzó su ideal,

pues en el mes de Junio de 1865 se le llamó para formar Gabinete. Entonces se avistó con Prim, y mostrándose deseoso de hacer cuanto pudiera en su obsequio, le pidió los nombres de los militares amigos á quienes más interés tuviese éste en colocar ó ver ascendidos. Le facilitó Prim una lista; pero O'Donnell, lejos de favorecerles, creyó más habil dejarles de reemplazo, pues en realidad sólo se había propuesto conocer las fuerzas y elementos de que disponía el que miraba ya como un rival peligroso. Tanto irritó á Prim esta deslealtad que se lanzó á la conspiración con más eficacia que nunca, y en aquel mismo año intentó un movimiento que debía tener por base la ciudad de Valencia, y ser secundado en Zaragoza, Pamplona y Vitoria. Dirigióse á la primera de estas ciudades, donde creía contar con dos regimientos, pero hubo de abandonar su proyecto y se refugió en Francia, no sin correr serios peligros. Penetró á poco en Navarra, disfrazado de carretero; pero supo que tampoco podía iniciar aún el movimiento en Pamplona y volvió á pasar la frontera, esperando mejor ocasión.

Ni él, ni el Comité de Madrid descansaban, y esa ocasión se presentó muy pronto, pues el día 3 de Enero de 1866 logró Prim sacar sublevados de la misma capital de España dos regimientos. La guarnición de la corte era, á la sazón muy escasa, y si Prim, que no tenía inconveniente en recibir para sus empresas subsidios de los demócratas, hubiese consentido en

darles participación en este movimiento, armando al pueblo de Madrid, el triunfo habría sido probable. No quiso en modo alguno hacerlo, pues temía que los elementos populares derribasen la monarquía, y tampoco estaba por la formación de Juntas revolucionarias. Esta preocupación determinó el fracaso de aquella poderosa tentativa; Prim se mantuvo durante algún tiempo á la vista de Madrid, esperando que el resto de la guarnición le secundara, y lejos de resolverse al ataque en el momento oportuno, dió tiempo al gobierno para que se rehiciera y concentrase fuerzas del ejército, con las que formó tres respetables columnas, que al mando de los generales Echagüe, Zabala y Concha, salieron en persecución de los sublevados. Retrocedió entonces Prim esquivando la lucha, á que sus perseguidores mostraban también escaso afán en provocarle, y se dirigió á marchas forzadas hacia Andalucía, donde, al parecer, contaba con elementos; pero al llegar á los montes de Toledo cambió bruscamente de plan y se encaminó rápidamente á la frontera portuguesa, que pasó sin que nadie le molestara, pues las tropas que iban en pos de él, más bien parecieron servirle de escolta que significar para sus reducidas huestes el peligro de un copo seguro. La verdad es que nadie se explicó satisfactoriamente cómo los tres ejércitos perseguidores, capitaneados por generales expertos, no combinaron sus movimientos respectivos para envolver á las fuerzas de Prim. Si esto se debió á un alarde de generosidad ó á una advertencia

de O'Donnell, es lo cierto que el héroe de los Castillejos ni se ablandó, ni se dió por advertido; pues reanudó con nuevo brío sus trabajos, y escarmentado por el aislamiento á que se había visto reducido, entró desde Francia, en relación con los más significados demócratas, y dió instrucciones á los progresistas para que buscaran, bien que con restricciones, el apoyo del elemento popular.

En representación de este elemento y con el sigilo y actividad que las circunstancias requerían, seguía funcionando en Madrid un Comité democrático, de que formaban parte D. Nicolás María Rivero, D. Francisco Cuartero, D. Patricio Lozano, D. Pedro Pallares, don Francisco Pí y Margall y el marqués de Santa Marta. Las reuniones se celebraron en casa del Marqués y bajo su presidencia, que desempeñó con mucho tacto y acierto. La amistad íntima que le unía á Pí y Margall, que era su abogado, su compañero inseparable y el hombre de su completa confianza, hacía que en las juntas estuvieran casi siempre acordes sus opiniones y marcasen rumbo á los debates, no obstante ser las más avanzadas y chocar con los resabios doctrinarios de Rivero, que aun llamándose entonces republicano, tenía poca fe en sus nuevas convicciones. El Comité democrático preparó á costa de grandes esfuerzos y desembolsos la organización del pueblo.

Prim organizaba en tanto desde Francia el movimiento militar. Encomendó á Muñiz los trabajos de conspiración en Castilla la Vieja, y á Moriones los de

Madrid. Era D. Domingo Moriones hombre de valor extraordinario; se había distinguido mucho en el ejército y había sufrido grandes postergaciones por su fe en las ideas progresistas, por cuyo triunfo venía conspirando desde 1846. Preparó el movimiento de Madrid utilizando principalmente el disgusto de los sargentos de artillería que hasta entonces podían ascender en el arma, aun formando sección aparte, hasta comandantes, y que por una disposición reciente se veían privados de ese beneficio. Consiguió la adhesión de cuatro regimientos de esa arma sólo en la capital, con seguridades de apoyo en muchas provincias. Además tenía comprometidos á los oficiales y algunos jefes de dos regimientos de infantería.

Quería Prim que se iniciase el movimiento en Valladolid, donde se contaba con fuerzas de artillería é infantería; seguirían Burgos y Palencia, y entonces marcharía Prim desde la frontera francesa á San Sebastián; de esta plaza á Vitoria, donde había de dirigir el movimiento D. Ramón Nouvilas, y de allí á Burgos y Valladolid. Al mismo tiempo Muñiz ocuparía con un regimiento la ciudad de Avila, y como el gobierno mandaría fuerzas á estos puntos, quedaría Madrid con poca guarnición y no tendría apenas ejército que oponer á Moriones, que se pondría al frente de los regimientos de artillería é infantería comprometidos y se haría fácilmente dueño de la capital de España.

Este plan era muy acertado y su éxito habría sido casi seguro si los progresistas se hubiesen puesto sin-

ceramente de acuerdo con los demócratas para dar intervención al pueblo en la lucha. No lo hicieron así, pues temían más al pueblo que á los gobiernos de doña Isabel; pidieron recursos al Comité democrático y se aprovecharon de ellos; pero á pesar de las protestas que hacían de anhelar el apoyo de los elementos populares, se desentendieron de ellos cuando llegó la ocasión, les negaron las armas que en gran abundancia existían en el Parque, y así los demócratas no contaron con otro armamento que el que pudo darles á costa de grandes sacrificios su Comité y el que cada cual particularmente logró proporcionarse, con lo que, según fácilmente se comprende, no pudieron tomar parte en la insurrección ni la décima parte de los paisanos que en otro caso lo hubieran hecho.

Hasta pocos días antes del movimiento no se decidieron los progresistas á ponerse de acuerdo con los demócratas, y así y todo procedieron en estos tratos con insigne deslealtad. El marqués de Santa Marta fué designado por sus correligionarios para entenderse con el general Prim y los progresistas, así como para organizar las fuerzas populares, y realizó ambas difíciles misiones con mucha actividad y eficacia. Estaban á la sazón divididos por celos de jefatura Rivero y Becerra, y el marqués hizo cuanto estuvo de su mano para que se reconcilasen, lo que se logró al fin.

El movimiento sufrió varias dilaciones, pues no faltaron contratiempos, siendo el principal la traición de uno de los oficiales comprometidos que se presentó á

O'Donnell y puso en su conocimiento cuanto sabía, que por fortuna no era mucho. Se le ascendió, enviándole á Filipinas, y el ministro de la Guerra reunió los coroneles de los regimientos de artillería, que les respondieron del excelente espíritu de sus soldados. Sin embargo de esto se hicieron varias prisiones y traslados y se practicaron algunos registros que no dieron resultado, porque los sargentos estaban sobre aviso y ocultaron las armas. Otro contratiempo grave fué la animosidad que surgió entre Becerra y Moriones: ambos sostenían diversos criterios acerca del plan que debía seguirse para el mejor éxito de la insurrección; el primero amenazó con retirarse si no prevalecían sus ideas, á las que también se inclinaba Sagasta, y habiéndose enterado Prim de esta grave disidencia, optó por sacrificar á Moriones y le separó del mando de las fuerzas de Madrid, enviándole á Valencia para que preparase allí el movimiento. Este acuerdo fué una verdadera desgracia, pues Moriones, á más de tener perfectamente organizadas las fuerzas de Madrid, contaba entre los sargentos grandes simpatías; así es que una vez relevado, fueron Sagasta y Becerra, sobre todo este último, mal recibidos en los cuarteles, y en poco estuvo que se malograra lo hasta entonces conseguido. Al fin, D. Baltasar Hidalgo de Quintana, capitán de artillería, y uno de los más activos agentes de la conspiración, pudo reparar muchos de los desaciertos cometidos por Becerra y aun por Aguirre y Sagasta, que también tomaba parte activa en los tra-

bajos; se acordó que los sargentos sorprendiesen y aprisionaran á los oficiales y jefes de artillería, sin causarles daños, y se fijó definitivamente para el día 22 de Junio la insurrección.

Antes de este último aplazamiento se presentaron en el despacho del marqués de Santa Marta los señores Sagasta, Becerra y Ruiz Zorrilla, el último de los cuales acababa de llegar de Francia en aquellos momentos con instrucciones de Prim. Este general había dirigido varias cartas al marqués de Santa Marta, pidiéndole su cooperación decidida para realizar *el último esfuerzo*, de modo que antes de la visita de los Sres. Ruiz Zorrilla, Sagasta y Becerra ya estaba resuelto el Marqués á prestar su apoyo al movimiento. Llevó principalmente la palabra D. Manuel Ruiz Zorrilla en esta entrevista, cuyo objeto fué manifestar al Marqués que para ultimar los preparativos del movimiento necesitaban imprescindiblemente su valioso concurso; que les constaba que nunca se había apelado en vano al patriotismo, al entusiasmo revolucionario y al amor que por la libertad sentía el marqués de Santa Marta, y que, siendo grande el sacrificio que entonces esperaban de él, no dudaban que lo haría, pues en otro caso podría tener el disgusto de ver fracasar el movimiento y de que se le atribuyera la responsabilidad de esta desgracia. Motivos sobrados tenía ya el Marqués para dudar de la lealtad de los progresistas con los demócratas, pero no quiso que pudiera nunca achacársele con visos de fundamento la responsabili-

dad de un fracaso. Respondió, pues, á sus visitantes que desde antes estaba ya decidido á hacer cuanto de él se exigiera en pro de la causa revolucionaria; concretaron entonces aquellos sus pretensiones, y puso inmediatamente el Marqués á su disposición los medios pedidos. En su mismo despacho hicieron los señores Ruiz Zorrilla, Sagasta y Becerra las distribuciones necesarias, destinando la mayor parte de los recursos al general Prim, y otras á los generales Pierrad, Contreras, Nouvilas y demás jefes comprometidos á intervenir, ya en Madrid, ya en provincias, en la dirección del movimiento.

No hay para qué fijar la cuantía del sacrificio que en esta ocasión hizo el marqués de Santa Marta. Ya antes había hecho otros esfuerzos de consideración, y posteriormente siguió haciendo lo mismo; jamás se apeló en vano á su desprendimiento, y es sabido por todos los que han figurado en esta clase de trabajos revolucionarios, que ningún hombre ha hecho en este punto sacrificios tan grandes como el Marqués, con la circunstancia de que han sido prestados con un desinterés absoluto, pues una vez triunfantes sus ideas, no sólo no ha consentido en recibir indemnizaciones de ninguna especie, sino que ha rechazado toda clase de puestos oficiales. En tiempo de la República pudo haber sido gobernador de Madrid y ministro, no sólo porque sus muchos servicios á la causa y sus condiciones de carácter é inteligencia le hacían acreedor á los más elevados cargos, sino porque representaba en

el poder una garantía para las clases sociales que más interés tenían en atraerse los republicanos, pero declinó estos honores; su única ambición consistía en que se consolidasen las instituciones, á cuyo triunfo había consagrado todas las energías de su espíritu.

Los sacrificios que realizó para asegurar el buen éxito del movimiento de 1866 respondieron, pues, á la misión que se había impuesto al entrar en la vida activa de la política. Ha creído siempre D. Enrique Pérez de Guzmán que el hombre se debe á sus convicciones; ha dado á las suyas cuanto ha podido y no ha buscado recompensa ni premio por lo que estimaba un deber. Si todos los políticos pensarán y procedieran de igual modo, la lucha por las ideas presentaría el elevado y noble carácter de una competencia de abnegación.

Los progresistas no correspondieron á la generosa y franca actitud del Marqués. Debieron haberse puesto de acuerdo con él, como director que era de las fuerzas populares, para que éstas tuviesen en el movimiento la intervención necesaria y justa; pero aunque D. Joaquín Aguirre le visitó con este objeto y le dió seguridades de que se le avisaría con tiempo, á fin de que estuviese prevenido para el combate, no se hizo nada de esto. Se empezó por ocultarle el día en que habían de lanzarse á la calle las tropas; se le dió á entender que la fecha del 22 de Junio no era la definitiva, y á última hora ocurrió un hecho que merece consignarse, porque da la medida de la buena fe que los

progresistas mostraron en aquella memorable ocasión con los demócratas.

El marqués de Santa Marta estuvo esperando en la noche del 21 al 22 de Junio á que se le transmitiera el aviso de que iba á estallar la insurrección, aun creyendo que debían habérselo participado antes. Pasaron las horas, el aviso no llegaba, y persuadido el Marqués de que se había aplazado una vez más el movimiento, se retiró á descansar después de las tres de la mañana. Hacia las cuatro, cuando empezaba á amanecer, llamó á la puerta de la calle D. Bonifacio de Blas, persona de la mayor confianza de Prim, y enterado por el portero de que el Marqués estaba acostado, dijo que no necesitaba verle y sí únicamente al ayuda de cámara, á quien esperó en la calle. Cuando bajó el criado le dijo el Sr. de Blas: «No es necesario que suba á hablar con el señor Marqués, pues he venido únicamente para avisarle que no se moleste en velar esta noche, porque no hay necesidad, pues por hoy no habrá nada.» Al recibir el marqués de Santa Marta este aviso, á que no podía menos de dar crédito por su procedencia, descansó completamente descuidado. A las seis y media de la mañana se presentó en su casa el Sr. Pí y Margall, quien le enteró de que el movimiento había estallado precisamente á la hora en que el comisionado de los progresistas le comunicó la falsa noticia de su aplazamiento.

Fácil es concebir la indignación que se apoderó del Marqués ante tan desleal conducta del partido que

días antes había solicitado y obtenido su apoyo. Si hubiera recibido la noticia del movimiento con solo un día de anticipación, le habría sido fácil dar las órdenes para poner en acción las fuerzas populares del partido republicano; algo hubiera podido hacer aún en las primeras horas de la pasada noche; mas ahora sólo le era dable ofrecer su persona. No vaciló en hacerlo, y en unión de Pí y Margall salió inmediatamente á la calle para agregarse á alguno de los grupos de paisanos que espontáneamente y por inspiración propia, tomaban parte en la desigual lucha. Llegaron ambos hasta cerca de la plaza de Santa Domingo, no sin sufrir algunos disparos; pero las tropas del gobierno ocupaban ya las principales avenidas y les forzaron á retroceder. Marcharon entonces por la ronda en dirección á los barrios bajos, donde suponían se habrían alzado barricadas; mas sólo consiguieron exponer inútilmente sus vidas, pues estaban ya cortadas las comunicaciones, no sólo con los barrios del Sur, sino con la plaza de San Ildefonso, donde se habían hecho fuertes algunos grupos de paisanos, que se defendieron con mucho valor.

El movimiento militar se había iniciado en el cuartel de San Gil por los sargentos de artillería en las primeras horas de la mañana del 22 de Junio. No pudieron sorprender dormidos á los oficiales y jefes, pues se hallaban éstos entretenidos en el cuarto de bandera en jugar al tresillo con el coronel Puig, á fin de pasar más agradablemente la velada, y como les inti-

maran la rendición, apuntándoles al mismo tiempo con las carabinas, uno de los oficiales disparó su revólver y mató á un sargento, pero cayó á su vez, víctima de una descarga. Levantáronse entonces los oficiales y jefes, acometieron sable en mano á los sargentos y se trabó una lucha desventajosa para aquéllos, que eran inferiores en armamento y número, ya que no en arrojo. El coronel Puig murió acribillado á balazos, y un alférez que trató en vano de salvarle la vida, logró salir á la calle y se presentó en el ministerio de la Gobernación, donde dió cuenta de lo que ocurría.

En el cuartel en que estaba el regimiento de artillería montado, fué también imposible sorprender dormidos á los oficiales y jefes, y murieron tratando de contener la sublevación el comandante Cadaval y el oficial Torreblanca. Los sargentos se hicieron dueños en ambos cuarteles de mil doscientos hombres de tropa y treinta piezas de artillería; pero no supieron utilizarla, pues tanto ellos como los soldados necesitaban dirección, y careciendo de ella, procedieron con el mayor desconcierto. Muchos de ellos corrían como locos por las calles, sin plan ni rumbo; los más se encastillaron en el cuartel de San Gil, que podía haber sido defendido por una corta guarnición, mientras el grueso de las fuerzas sublevadas tomaba posiciones, apoyada por la artillería. El general Prim, á quien se esperaba para que se pusiera al frente del movimiento, no se movió de Hendaya, y hubo de quedar al frente de los sublevados D. Blas Pierrad, mariscal de

campo, que había tomado parte en favor de O'Donnell en la contrarrevolución de 1856, y que más tarde se puso al lado de los progresistas. Era el general Pierrad hombre de indudable valor, pero mostró muy pocas condiciones organizadoras, no supo combinar con acierto los elementos de que disponía, y así la jornada del 22 de Junio, en vez de una batalla ordenada, en que los episodios estuvieran subordinados á un plan general, fué una serie de combates parciales muy sangrientos, pero sin verdadera relación entre sí. Casi todas las fuerzas sublevadas permanecieron en el cuartel, y las pocas que se esparcieron por las calles iban en lastimoso estado de desmoralización. El general Contreras, que luchaba al lado de Pierrad, supo exponer su vida, pero no combinar con fortuna los elementos que tenía á sus órdenes.

El general O'Donnell estaba acostado cuando recibió aviso de lo que ocurría; se vistió rápidamente, salió á la calle, seguido de un ayudante y dos ordenanzas, y fué avisando personalmente á los generales que vivían más cerca de su casa, como Serrano, Quesada, Concha, Ros de Olano, Zabala, Novaliches y Narvaez, que acudieron presurosos para combatir el movimiento. Pronto se convenció O'Donnell de que no era difícil dar la batalla á los sublevados, pues éstos habían dejado pasar el tiempo sin posesionarse del Parque, á pesar de que Becerra y Sagasta debían haberlo hecho sin demora para armar al pueblo y evitar que el gobierno utilizara, como lo hizo, las mu-

chas piezas de artillería allí disponibles. El general Zabala, con una columna, se dirigió al Palacio real, que tampoco habían atacado los insurrectos, cuando este ataque les habría dado en los primeros momentos el triunfo; dejó allí una fuerte guarnición y marchó en seguida sobre el cuartel de San Gil. Al mismo tiempo Serrano tomaba posesión del Parque, hacía enganchar todas las piezas de artillería disponibles y se reunía á la columna de O'Donnell, llegando ambos hasta la Puerta del Sol y dispersando al paso á los defensores de algunas barricadas. En la calle de Preciados había dos cañones, que los sublevados ni utilizaban ni custodiaban; las fuerzas del gobierno se apoderaron fácilmente de estas piezas de artillería y llenaron de prisioneros los sótanos de Gobernación.

No se atrevía O'Donnell á formalizar el ataque contra el cuartel de San Gil, sin asegurarse de la actitud de las fuerzas que guarnecían el cuartel de la Montaña. Ofrecióse á desempeñar esta misión el general Serrano, y acompañado sólo de un ayudante y dos ordenanzas llegó al cuartel dando un gran rodeo y se presentó entre las tropas que lo guarnecían cuando aún no se habían insurreccionado, contingencia que logró evitar. Entonces las fuerzas del gobierno organizaron el ataque contra el cuartel de San Gil, abrieron brecha para el asalto y el coronel Chacón penetró por ella con sus tropas, entablándose una lucha terrible, pues los sublevados se defendieron con desesperado valor y hubo que desalojarles sucesivamente de

todos los pisos por cargas á la bayoneta, quedando en el suelo sobre trescientos muertos y heridos. Al fin el cuartel cayó en poder del gobierno á las nueve de la mañana, y pudo considerarse vencida la insurrección militar.

Faltaba dominar la civil, que habría sido imponente si los progresistas hubiesen procedido de buena fe con los republicanos, pero que, limitada á valerosas y aisladas iniciativas, fué sofocada con relativa facilidad. Casi todos los paisanos que tomaron parte en el combate, acudieron á su puesto de honor cuando la insurrección militar estaba ya vencida y se fortificaron principalmente en la plaza de San Ildefonso y en las de la Cebada y Antón Martín, levantando además barricadas en varias calles. El general O'Donnell fué dominando esta insurrección por zonas; primero logró tomar por medio de Serrano y Concha la plaza de San Ildefonso, no sin que los paisanos se defendiesen con gran bizarría; al mismo tiempo los generales Novales y Planas se apoderaron de las piezas de artillería que en la puerta de Bilbao tenían los insurrectos dirigidos por el general Contreras, é hicieron á éstos, después de un reñido combate, más de cien prisioneros, y en las primeras horas de la tarde se había ya apagado la insurrección en la zona del Norte. Dirigió entonces O'Donnell á los barrios del Sur otras tres columnas de ataque, y tras de algunas horas de heroica resistencia fueron desalojados los paisanos de las posiciones que ocupaban en las calles de Toledo y Se-

govia y en las plazas del Progreso, de la Cebada y de Antón Martín. Al anochecer del día 22 de Junio la pacificación de Madrid era completa.

Grandes eran los elementos con que contaba la insurrección; pero se malograron no sólo por la inexplicable ausencia de Prim que llevó á manos inhábiles la dirección militar, sino por la desleal conducta de los progresistas, que lejos de armar al pueblo limitaron en lo posible la intervención de los paisanos en el combate. Así y todo la insurrección civil fué tan formidable como la militar, aunque de igual modo que ésta se resintió de falta de dirección inteligente. Cada cual hizo lo que pudo y supo y esta carencia de plan facilitó mucho el triunfo del gobierno.

Una vez más se perdió la revolución por el miedo que á la libertad tenían los progresistas. Querían el auxilio del pueblo, pero á la vez le temían, eran aún resueltamente monárquicos y antes que transigir con la República habrían renunciado á toda tentativa revolucionaria.

El comportamiento del general Prim en los sucesos del 22 de Junio mereció las más acerbias censuras. Jamás se habían reunido elementos militares tan valiosos para una insurrección y se malogró todo por la incomprensible conducta de aquel jefe, que permaneció en la frontera cuando su puesto de honor estaba en Madrid, al frente de las tropas sublevadas. Pierrad y Contreras hicieron lo que supieron, que fué poco; faltó unidad de acción, plan y estrategia, y encerradas las

fuerzas en los cuarteles no pudieron hacer otra cosa que morir matando.

Respecto de las fuerzas populares hartamente demostrado quedó por su brillantísimo comportamiento luchando aisladas y sin dirección, que si hubiesen sido debidamente organizadas, habrían sabido reproducir con creces las gloriosas jornadas de Julio de 1854. Pero las miraban con recelo profundo los jefes militares de la insurrección; por su parte Sagasta y Becerra parecían fiar el éxito á los sargentos; se perdieron estérilmente algunas horas sin intentar apoderarse del parque, en que había existencias para armar muchos millares de ciudadanos, y así al comenzar la insurrección estaba ya muerta. En provincias apenas hubo sino chispazos sin importancia, y de todos aquellos proyectos tan hábilmente preparados no quedó sino un lago de sangre y una enseñanza que los progresistas se negaban siempre á aceptar; esto es, que el pueblo era republicano y que sería inútil tratar de obtener su concurso para un mero cambio de gobierno dentro de la monarquía borbónica.

A los demócratas republicanos cupo la gloria de lo más noble y heroico que se hizo en la memorable jornada del 22 de Junio. Justo es asignar una buena parte de esta gloria á D. Enrique Pérez de Guzmán, que no perdonó medio para conseguir que aquel movimiento representase el triunfo de la revolución.



CAPÍTULO VI

O'Donnell es lanzado del poder después de su triunfo.—Tendencia absolutista de los últimos gobiernos de doña Isabel II.—Persecuciones sufridas por los progresistas y demócratas.—Nuevos trabajos revolucionarios.—Juntas de Bruselas y Ostende.—Movimiento de Agosto de 1867.—Destierro de varios generales unionistas.—Relaciones entre éstos y el general Prim.—Trabajos de Montpensier.—Preparativos del alzamiento de Septiembre de 1868.—Actitud del marqués de Santa Marta.



La victoria del gobierno unionista sobre los sublevados del 22 de Junio se tradujo muy pronto en una espantosa serie de fusilamientos. Ya sea porque en la corte predominasen los temperamentos de sañuda venganza; ya porque O'Donnell tuviese interés en demostrar que no cedía en ferocidad á Narvaez, es lo cierto que ensangrentó sin piedad su triunfo. El número de prisioneros pasaba de mil; los consejos de guerra funcionaron con gran actividad y dictaron muchas sentencias de muerte. No se ejecutaron todas, pues de haberse hecho así, el gobierno se habría colocado ante el juicio de las naciones civilizadas bajo el nivel de los sanguinarios déspotas asiáticos ó africanos; pero el propósito de O'Donnell era mantenerse implacable, pues en pocos días hizo fusilar á sesenta y seis hom-

bres entre sargentos, cabos y soldados, contándose además entre las víctimas un excoronel carlista y un paisano. Fulmináronse también varias condenas de muerte en garrote vil, figurando entre los sentenciados los Sres. Sagasta, Martos, Hidalgo, Becerra y Castellar, todos los cuales lograron pasar al extranjero, siendo justo reconocer que les ayudaron para este fin, con la reserva propia de los altos cargos que ocupaban, primero el Sr. Posada Herrera y después el señor González Brabo, influyendo mucho al efecto don Carlos Navarro y Rodrigo. Muchos progresistas y demócratas emigraron, unos por eludir el efecto de duras condenas y otros por no exponerse á molestias y persecuciones.

En la misma noche del 22 de Junio recibió el marqués de Santa Marta por medio de personas muy afectas á la situación vencedora, apremiantes excitaciones para que se trasladase inmediatamente al extranjero si quería evitar la deportación á Filipinas ó Fernando Póo, pues el general O'Donnell conocía la participación que había tenido en el movimiento. Contestó el marqués que no era su ánimo salir de España y que únicamente se proponía trasladarse á la Granja con su familia á fin de pasar allí la estación veraniega. Volvieron á comunicarle varios avisos por amigos que le eran muy queridos y que tenían grandes relaciones con el presidente del Consejo; pero insistió en su resolución, prefiriendo ser deportado á expatriarse voluntariamente. No llegó á realizarse aquella amenaza,

y es probable que á ello contribuyera mucho la circunstancia casual de formar parte de la situación personas unidas por vínculos de antigua amistad al marqués de Santa Marta; pero ni él tuvo conocimiento alguno de estas gestiones, si llegaron á existir, ni pudo ocultársele por un instante siquiera que el gobierno había de fijarse en él como uno de los principales agentes del movimiento, ya que en su casa se habían celebrado las reuniones del comité revolucionario.

Se observó, de todas suertes, mucha arbitrariedad en las sentencias, pues personas muy significadas en la insurrección no fueron perseguidas ni molestadas, mientras otras que habían tenido en ella intervención escasa, fueron condenadas á las penas más terribles. Parece hoy fuera de duda que entre todos los sargentos fusilados sólo tres eran conspiradores. Los juicios sumarísimos se han prestado siempre á injusticias horrendas que, no por cometidas sin intención, dejan de ser irreparables.

Debió pesar mucho en el ánimo de O'Donnell para alejarle de toda idea de piedad la consideración de que el movimiento de Enero había sido un verdadero paseo militar de Prim, dando lugar á comentarios desfavorables entre los cortesanos la poco eficaz persecución dirigida contra aquel caudillo. Además, los sucesos del 22 de Junio no honraban mucho, en sentir de los palaciegos, la previsión del jefe de los ministros. Pero si creyó afirmarse en el poder con sus crueldades, bien pronto hubo de sufrir un terrible desengaño, pues ape-

nas habían transcurrido dos semanas desde su sangriento triunfo cuando la reina le pidió la dimisión y llamó á sus consejos al general Narvaez.

Este relevo exasperó de tal modo á O'Donnell que estuvo á punto de costarle la vida. Quejábase amargamente de la conducta de aquellas personas que después de haberle excitado á ser implacable con los insurrectos, suspendían ahora las ejecuciones con el fin de presentarle ante la opinión como único responsable de las ya verificadas; afirmaba que no volvería á pisar los salones del real palacio, y al mes de haber sofocado y castigado la insurrección estaba ya muy cerca de ser insurrecto. Marchó á Francia, desde donde pudo observar la dureza con que el gobierno moderado empezaba á tratar á los ministros, á los que hizo desde luego objeto de sospechas y más tarde de persecuciones. Lanzábase la monarquía de doña Isabel por la senda de una reacción desenfrenada y suicida, al fin de la cual sólo podía hallarse la revolución.

Mientras el marqués de Santa Marta permaneció en la Granja fué objeto de una vigilancia suspicaz y molesta que conllevó muy á disgusto, pues no constituye la resignación el fondo de su carácter. Hízose su acompañante perpetuo el comandante general de aquel real sitio, y bien pronto hubo de persuadirse el marqués de Santa Marta de que aquella amistad, que podría llamarse encarnizada, no era sino una vigilancia poco agradable, que supo burlar en muchos casos para recibir y contestar comunicaciones y avisos de sus co-

rreligionarios. En sus excursiones por los hermosos paseos de la Granja, siempre acompañado de aquel personaje, hubo de conversar en varias ocasiones con la reina doña Isabel á la que, con todos los respetos y toda la galantería debida á las damas, dirigía en tono aparentemente festivo no pocas observaciones graves sobre la situación política, no sin escándalo de su aristocrático vigilante y compañero, poco acostumbrado sin duda á tropezar con caracteres tan enteros y tan ajenos de las serviles complacencias cortesanas. Pasada que fué la temporada de verano regresó el Marqués á Madrid y prosiguió ocupándose con la misma actividad de siempre en su campaña política y revolucionaria.

Algunos de sus antiguos compañeros de Comité se hallaban en la emigración; Rivero continuaba en Madrid y con él conferenciaba en muchas ocasiones el Marqués, si bien le inspiraba poca confianza el republicanismo de aquel hombre, notable por tantos conceptos y que tan brillante papel habría podido desempeñar si sus convicciones revolucionarias hubieran sido más radicales. También contó por entonces entre sus íntimos amigos á D. Estanislao Figueras, hombre de claro talento y gran penetración, pero de carácter no muy firme, circunstancia que le perjudicó mucho más adelante. Era el Sr. Figueras profundo conocedor de los resortes políticos y parlamentarios, tan hábil jurisconsulto como intencionado orador: en los primeros años de su vida pública fué progresista y más tarde

demócrata y republicano; se inclinaba á las ideas federales, pero sin el entusiasmo y resolución de Pí y del marqués de Santa Marta, como años después demostraron los hechos.

Arreciaban entonces las violencias reaccionarias del gobierno de la monarquía y se reanudaban con nuevo empuje los trabajos de conspiración. Los unionistas eran ya tan sospechosos á doña Isabel como los mismos progresistas, y O'Donnell, voluntariamente desterrado en Francia, empezaba ya á inclinarse muy seriamente á capitanear una sublevación que no podía menos de ir dirigida contra la reina. El duque de Montpensier intentó atraérsele, pero O'Donnell, aun transigiendo con destronar á doña Isabel, á quien no perdonaba su ingratitud, no quería un cambio de dinastía y sí solo el nombramiento de un consejo de regencia hasta que se declarase la mayor edad del príncipe D. Alfonso de Borbón. Muchos progresistas trabajaron por conseguir la inteligencia revolucionaria entre Prim y O'Donnell; mas prescindiendo de que había entre ambos agravios muy hondos y muy recientes, iban por muy distintos caminos, tenían aspiraciones incompatibles y no había que esperar llegasen á un acuerdo durable y sincero. Para O'Donnell no era el general Prim sino un protegido ingrato y en demasía ambicioso; para Prim, que se sentía con fuerzas para escalar el primer puesto, O'Donnell no podía ser más que un obstáculo que había precisión de derribar más pronto ó más tarde. Esta diversidad de aspiracio-

nes entre unionistas y progresistas fué uno de los mayores inconvenientes que por entonces se oponían á la revolución.

El gobierno se encargaba, sin embargo, de precipitarla con su imprudente conducta. Creyendo González Brabo, ministro de la Gobernación, que así lisongearía á doña Isabel y á su esposo D. Francisco, les propuso, como medio de evitar para siempre los ataques de la revolución, ir llevando la monarquía hacia el régimen absoluto. Con este plan, que fué aceptado con entusiasmo por los regios consortes, no sólo conseguía González Brabo captarse la simpatía de la reina, sino que se aseguraba la herencia del poder apenas surgiera una crisis. Como en estas maniobras intervenían algunos obispos y no pocos cortesanos, fueron trascendiendo al público las tentativas del ministro de la Gobernación; temióse un golpe de Estado semejante al que á fines de 1852 había ideado Bravo Murillo para cambiar la monarquía de constitucional en absoluta, y el 27 de Diciembre de 1866 se reunieron los presidentes del Senado y del Congreso D. Francisco Serrano y D. Antonio Ríos Rosas y dirigieron á la reina una exposición pidiéndola reuniese las Cortes antes de que terminase el año, en cumplimiento del precepto constitucional violado por el gobierno. Para que la exposición llevase muchas firmas citaron los presidentes de las Cámaras á todos los diputados y senadores á una reunión que debía celebrarse en el salón de conferencias del Congreso, y al saberlo Nar-

vaez, prevaleciéndose de la suspensión de las garantías constitucionales que había decretado O'Donnell y el gobierno mantenía, ordenó al capitán general de Madrid, conde de Cheste, que procediera á la clausura del edificio del Congreso é impidiese á todo trance la reunión facciosa que se intentaba. El conde de Cheste cumplió esta medida haciendo alardes de rudeza que produjeron el peor efecto en la opinión. Protestó Ríos Rosas contra aquel acto, y como insistiera en entregar personalmente á la reina la exposición, que llevaba ya ciento veintiuna firmas, fué preso en unión de los señores Fernández de la Hoz, Martín de Herrera, Salaverría y otros y deportado á las islas Canarias.

Confiando el general Serrano en su influencia personal sobre la reina, tuvo una entrevista con esta señora y le hizo entrega de la exposición, manifestando, entre otras cosas, que se estaba limitando á ser reina de un partido; que la preferencia otorgada á los moderados comprometía el trono, y que los mismos hombres que lo habían salvado el 22 de Junio estaban ya desesperanzados por la marcha de los sucesos y se inclinaban á la revolución. Respondió doña Isabel á Serrano que no dejaría de pensar en cuanto acababa de indicarle, y el general se marchó persuadido de que había herido de muerte al gobierno; pero á los pocos días fué preso y desterrado, lo que acabó de exasperar á los unionistas.

Declaró Narvaez disueltas las Cortes y convocó otras nuevas que habían de reunirse el 27 de Marzo

de 1867 y en cuyas elecciones se retrajeron casi en absoluto los unionistas y progresistas, de modo que la minoría estaba formada principalmente por los neocatólicos. En la reunión de la mayoría indicó ya claramente González Brabo que después de lo ocurrido el 3 de Enero y el 22 de Junio se imponía establecer una línea divisoria entre la monarquía y los partidos que la arrastraban al abismo con sus tendencias peligrosas, y añadió que para defender al trono contra la revolución era preciso rodearlo con todos los elementos conservadores y religiosos. Adquiría, pues, la monarquía un carácter teocrático que amenazaba destruir en poco tiempo las conquistas civilizadoras alcanzadas á costa de inmensos sacrificios desde la muerte de Fernando VII.

Alarmáronse profundamente los liberales ante estos hechos gravísimos: olvidaron los demócratas la deslealtad de que los progresistas les habían hecho objeto el 22 de Junio y estrecharon su alianza con ellos frente al enemigo común, sellándola en un documento en que tuvo intervención el marqués de Santa Marta y que se repartió profusamente en nombre de la Junta revolucionaria de Madrid. A esta circular reservada, que era muy enérgica, pertenecían los siguientes párrafos:

«¿Toleraremos por más tiempo este estado de cosas? No lo piensa así la Junta revolucionaria; es imposible humanamente la persistencia de esta situación, está próximo el fin de esa orgía de libertinos y verdugos que nos ofende, nos mancha y nos infama. Los

miembros de la Junta han jurado por su vida acelerar el momento supremo; poco importa al público saber el modo, baste que sepa los esfuerzos.

»Queremos la expulsión definitiva, completa y perpetua de la familia de Borbón; aspiramos á determinar una sentencia nacional, una resolución solemne del país acerca del régimen que ha de sustituir al que actualmente nos oprime; nos proponemos este fin y declaramos enemigo público y reo de lesa nación á cualquiera que oponga resistencia y aun ambigüedad y restricciones al proyecto de expulsar del país á la familia de Borbón y á todas sus líneas y ramas y apelar á la soberanía nacional para constituir políticamente España. Suena la hora de sacudir el yugo de esa degradación; arrojemos para siempre á esa raza funesta. ¡Abajo los Borbones! ¡Viva la soberanía nacional!»

Esta proclama levantó mucho los ánimos y alarmó no poco al gobierno, que exageró aun más sus persecuciones contra los demócratas y progresistas. Prim seguía en situación difícil, deseando y temiendo á un tiempo la inteligencia revolucionaria con O'Donnell. De las disposiciones de Prim da idea la siguiente carta que á principios de 1867 dirigió á Madrid:

«Me han asegurado que D. Pascual Madoz se ha persuadido ya de que con los Borbones no se va á ninguna parte, y no deja de asegurarlo así á cuantos quieren oírle. Véale usted sin demora y le autorizo á usted para que tome mi nombre para la empresa. Aconséjele usted que eche un viaje á Francia y hable á O'Don-

nell en igual sentido, pues tengo la creencia de que le convencerá. Yo no quiero escribir al duque de Tetuán porque temo un desaire, no es hombre á quien se le olvidan los malos ratos que le he hecho pasar. No le temo; él sabe que puedo confundirle con datos, pero no conviene irritarle, antes bien, es bueno tenerle de nuestra parte. Sé que su enojo contra doña Isabel es casi rabioso. Este convencimiento me suministró la idea de probarle y mandé á Francia á N... para que le explorase; pero el duque respondió que jamás atentaría contra la dinastía, mayormente cuando existía un niño que podría, andando el tiempo, reparar los errores pasados y que, sobre todo, estaba resuelto á no ir con los progresistas ni al cielo. Esta respuesta, amigo mío, puede haber sido accidental ó resultado del poco tacto del explorador. Persuada usted á Madoz para que haga los oficios de N... que yo espero que sacaremos gran partido. Necesitamos la cooperación de ese hombre, porque si no carecemos de prestigio ni de masas, estamos faltos de dinero. Respeto las apreciaciones de usted respecto á Pierrad y Contreras, pero ni el uno ni el otro harán grandes cosas. Más confianza tengo en Moriones, á pesar de ser muy precipitado.»

Practicáronse nuevas gestiones, pero como sucede en algunos casos, ni de una parte ni de otra había verdaderos deseos de llegar á una inteligencia. Prim comprendía que desde el momento en que se pusiera de acuerdo con O'Donnell tendría que cederle la direc

ción de los trabajos, y el duque de Tetuán, á su vez, temía que los progresistas, de acuerdo con los demócratas, pretendiesen tomarle como instrumento.

El acuerdo entre estos dos partidos se imponía por la fuerza de las circunstancias. No podían olvidar los demócratas la deslealtad de sus aliados del 22 de Junio, pero la causa de la revolución era antes que todo. El marqués de Santa Marta, á pesar de las crueles decepciones que en aquel día memorable había sufrido, no vaciló en apoyar calurosamente la conciliación revolucionaria, pues tenía demasiada experiencia y buen juicio para comprender que los partidos más avanzados son siempre los que dan bandera y programa á las insurrecciones y que éstas no se han detenido jamás donde sus iniciadores querían. Recibió cartas de don Juan Prim en que este general, reconociendo la importancia de los anteriores servicios del Marqués, le daba cuenta del estado de las cosas y manifestaba su seguridad de que no había de faltar su concurso en lo sucesivo. Aun cuando estas excitaciones no eran necesarias tratándose de un hombre como D. Enrique Pérez de Guzmán, demostraban al menos que los progresistas hacían justicia á sus sacrificios por la causa de la revolución.

Llevaba la dirección de las gestiones para llegar á un acuerdo con los demócratas D. Salustiano Olózaga, que deseaba la caída de doña Isabel, pero no se avenía con el sufragio universal. Como los demócratas querían la república y los progresistas insistían en la

necesidad de mantener el trono constitucional, fué imposible por entonces llegar á un arreglo en cuestiones de doctrina. En el mes de Julio se celebró en Bruselas una reunión á que concurrieron por parte de los demócratas Orense, Martos y Chao, y en representación de los progresistas Prim y Olózaga. Después de una discusión prolija se convino en que la bandera del movimiento fuese la soberanía nacional y el sufragio universal, dejando á las Cortes Constituyentes que designasen la forma de gobierno. Poco después se celebró en Ostende una nueva reunión á que asistieron, á más de importantes hombres civiles de ambos partidos, los generales Prim, Contreras, Pierrad y Milans del Bosch. Se acordó destruir todo lo existente y elegir enseguida una Asamblea que, bajo la dirección de un gobierno provisional, diese nueva organización al país. Como detalles curiosos de esta última reunión merecen citarse la rivalidad que se observó entre Olózaga y Prim; el calor con que D. José María Orense abogó porque se eligiese un rey de la casa de Braganza, si no se aceptaba la República, y la actitud del general Contreras que no quería el sufragio universal ni que se emprendiese el movimiento antes de tener un rey español, bien fuese Espartero ó bien cualquiera otro. De todos modos se renunció, por entonces, al acuerdo con los unionistas.

Ultimados los preparativos de la insurrección de 1867 creíase que ésta sería formidable, pues había de iniciarla Valencia y responderían Huesca, Zaragoza, Béjar, Tarragona y Barcelona.

La empresa de dirigir el movimiento en Aragón se confió á D. Blas Pierrad, dándole como segundo á Moriones; pero este jefe marchó á disgusto, pues se conceptuaba, y con razón, digno de organizar por sí solo aquella empresa. Acalló, sin embargo, su resentimiento; pasó la frontera en unión de Pierrad y al frente de algunos centenares de carabineros, á los que se agregaron muchos paisanos de los valles de Jaca y Canfranc, derrotó á mediados de Agosto en Llinás de Marcuello á la columna del general Manso de Zúñiga, que murió en el campo de batalla.

Este triunfo daba una excelente base á la insurrección, pero ésta apenas si se manifestó en los demás puntos por chispazos de escasa importancia. El guerrillero Gabriel Baldrich levantó una partida en la provincia de Barcelona, y otro tanto hizo Escoda cerca de Villanueva y Geltrú; el comandante Lagunero sublevó cerca de Tarragona parte del regimiento de Bailén, y por fin, la ciudad de Béjar se alzó el 24 de Agosto, atacando y venciendo los sublevados á la fuerza de la guardia civil que guarnecía la plaza. De todos modos, el éxito de estos movimientos parciales dependía de la sublevación de Valencia, para donde había salido embarcado el general Prim, que llegó á presentarse á la vista del puerto. Los coroneles comprometidos se negaron en el momento crítico á alzarse en armas; el buque en que iba Prim zarpó inmediatamente sin desembarcar pasajeros, pues las autoridades de Valencia, fundándose en que procedía de un punto infestado, se ne-

garon á admitirlo en el puerto y todo se malogró. Aun se sostuvieron las fuerzas sublevadas en Aragón, pero en vista del fracaso de Prim repasaron á los pocos días los Pirineos. Béjar se rindió; las partidas de Cataluña fueron dispersándose, y aquel movimiento en que se fundaban tan grandes esperanzas sólo sirvió para demostrar que no se entibiaba la fe de los revolucionarios.

Por lo demás, ni el gobierno después de vencerlo se sintió más seguro ni se ocultó á nadie que la monarquía estaba herida de muerte á pesar de su victoria, pues hay ocasiones en que la revolución se siente por todas partes y hasta parece que se respira en la atmósfera, siendo vanos los esfuerzos que se hagan para combatirla. No estaba entonces la mayor garantía de esa revolución en los que la aclamaban con las armas en la mano; los moderados eran sus principales promovedores, ya que al atentar descaradamente contra las conquistas liberales se atrevían á plantear el mismo problema que tuvo sangrienta resolución en los campos de batalla durante los siete años de la guerra civil. La ceguera de los moderados y las tendencias despóticas de doña Isabel y de su esposo D. Francisco de Asís, dócil instrumento de la teocracia, habían llevado la situación política á tal extremo, que ya no se luchaba por alcanzar más libertades, sino por evitar la ruina del régimen constitucional.

Suspendidas las sesiones de Cortes y extremando el gobierno el sistema de represión, transcurrieron algunos meses en una especie de calma sombría que no

podía ser duradera. El día 4 de Noviembre murió en Biarritz el general O'Donnell cuando quizá estaba ya cercano á lanzarse á la revolución por su propia cuenta. El presidente del Consejo, Narvaez, pronunció un sentido elogio fúnebre en honor de su antiguo compañero de armas, al que muy en breve había de seguir á la tumba.

La muerte de O'Donnell modificó de un modo muy notable las relaciones de los partidos monárquicos hostiles al gobierno. Quedó el general Serrano al frente de los unionistas, y desde ese instante desapareció la mayor dificultad que tenía Prim para entenderse con esa agrupación. Con O'Donnell había de tratar, si quiera fuese por fórmula, como subordinado; con el duque de la Torre podía proceder no sólo de igual á igual, sino como superior, pues tenía Prim mucho más prestigio y mayores simpatías en el ejército. Además, el carácter de Serrano era mucho más flexible y menos imperioso que el de O'Donnell; podía conformarse con las apariencias de la jefatura, mientras el duque de Tetuán, acostumbrado al poder, trataría tarde ó temprano de deshacerse de los obstáculos que le impedirían ejercerlo por sí solo.

El mismo general Serrano distaba de hacerse ilusiones acerca del porvenir político que podía reservarle su alianza con Prim, y antes de entenderse con él hizo toda clase de esfuerzos para ser ministro con doña Isabel II, á la que visitó en varias ocasiones, pues á fines de 1867 se había alzado su destierro. Estas gestiones,

aunque apoyadas calurosamente por el marqués de Miraflores y otros moderados que veían un peligro serio para el trono en la intransigencia de González Brabo y Narvaez, no dieron resultado alguno. La reina se sentía halagada por las aficiones absolutistas de sus ministros, y ya empezaba á decirse que aquellas Cortes serían las últimas que se convocasen durante su reinado. Esta aserción resultó cierta; mas no en el sentido en que la formulaban los neocatólicos, que esperaban la próxima desaparición del régimen parlamentario.

Disgustado Prim ante la conducta poco franca de Serrano, que al mismo tiempo que se manifestaba propicio á la revolución hacía toda clase de gestiones para alcanzar el gobierno bajo la monarquía de doña Isabel, quiso seguir obrando por su cuenta, y aunque el candidato de su preferencia para ocupar el trono español era el rey de Portugal, llegó siquiera fuese por poco tiempo á pensar en D. Carlos de Borbón y comisionó á D. Práxedes Mateo Sagasta para que le ofreciese la corona, siempre que aceptara explícitamente los principios liberales. El 5 de Diciembre de 1867 llegó con este objeto á Londres el Sr. Sagasta y se dirigió á la residencia del exgeneral carlista Cabrera, donde se hallaba á la sazón el joven D. Carlos. No llegó á conferenciar con éste, mas sí con Cabrera, quien le manifestó que los carlistas podrían aceptar sin grandes inconvenientes una forma especial de sistema representativo y aun en caso necesario el sufragio universal,

pero en modo alguno el principio de la soberanía de la nación, pues esto equivaldría á renunciar á todas las tradiciones del partido. Desde este punto de vista no podía pensarse en un arreglo, y así, aun cuando Cabrera insistió mucho en que Sagasta hablase con don Carlos, no consintió en ello el enviado progresista, juzgándolo inútil. Esta inconcebible negociación demuestra hasta qué punto llevaba á los progresistas su temor al pueblo; antes que una república basada en el voto de la nación, hubieran preferido el gobierno de D. Carlos con una máscara de constitucionalismo, que bien pronto habria desaparecido para ceder el puesto á una reacción furiosa.

Los duques de Montpensier continuaban sus trabajos de conspiración y no les costó mucho atraerse al general Serrano, bien que éste hizo depender su apoyo de que pudiese ó no formar gobierno con la reina. Quiso también Montpensier ponerse de acuerdo con Prim y comisionó á D. Cipriano del Mazo á fin de saber las condiciones que fijaba el jefe de los progresistas para apoyar su candidatura. Prim, según parece, exigió que el duque de Montpensier contribuyese con seis millones de reales al triunfo de la revolución, y el emisario, estimando aceptables estas proposiciones, las puso en conocimiento del duque, quien sólo se prestó á facilitar veinte mil duros. Entonces Prim contestó al Sr. Mazo: «Diga usted al duque de Montpensier que los tronos no se compran tan baratos y que desde este momento no cuente conmigo para nada.»

En efecto, dió orden á sus agentes para que no aceptasen un solo céntimo de aquella procedencia, lo que hizo decir á D. Nicolás María Rivero: *Pues es una candidez del general Prim el privarse de ese elemento: debe tomarse el dinero del duque de Montpensier, y si no sale rey, que no saldrá, se le devuelve con el interés del seis por ciento.*

Aparte de este incidente, conviene tener en cuenta que el general Prim estaba entonces en buenas relaciones con el emperador Napoleón III, que no podía ver con gusto que reinase en España la dinastía de los Orleans.

Eran tan transparentes las gestiones revolucionarias de los duques de Montpensier, que el gobierno creyó deber tomar cartas en el asunto y se cruzaron entre doña Isabel y su hermana comunicaciones muy duras. Por entonces el infante D. Enrique, caracterizado como progresista y aun como republicano, hizo publicar en varios periódicos de París documentos ofensivos para su prima y cuñada doña Isabel, por lo que se le privó de todos sus títulos, empleos y honores.

A mediados de Abril de 1868 cayó gravemente enfermo el general Narvaez y murió á los pocos días. Créase por muchos que la reina encargaría la formación del nuevo Gabinete al marqués de Miraflores, y el general Serrano apoyaba calurosamente esta solución intermedia que podría ser un puente para un gobierno unionista; pero fué elevado á la presidencia del Conse-

jo el Sr. González Brabo, que representaba ya en el anterior gobierno el moderantismo intransigente y la transición al absolutismo y á la teocracia. Así las cosas, era imposible que los unionistas se forjasen ya ilusiones: González Brabo se mostraba más firme que nunca en sus propósitos dictatoriales y llegó á decir que, contando con el clero, no le preocuparía gran cosa la oposición del liberalismo civil ni militar.

Veían riesgos en esta actitud muchos de los moderados que con más lealtad seguían al lado de doña Isabel. El conde de San Luis pronosticó grandes peligros al trono si no se abandonaba cuanto antes aquel camino, pero sólo consiguió hacerse sospechoso.

Las gestiones para un acuerdo entre unionistas y progresistas tropezaban aún con dificultades; pero el gobierno, que seguía siendo por su temeraria conducta el más eficaz agente de la revolución, quiso dar un golpe de efecto, y el 7 de Julio encomendó al capitán general de Madrid, conde de Cheste, la misión de prender á los generales unionistas Serrano, Dulce, Zabala, Córdoba, Serrano Bedoya y Letona, enviándose además á provincias órdenes telegráficas que dieron por resultado entre otras prisiones las de los generales Echagüe y Caballero de Rodas. Aquel mismo día se dictó una real orden mandando salir de España á los duques de Montpensier. Los generales presos fueron trasladados por lo pronto á Cádiz y encerrados en un castillo en donde les visitó el brigadier de marina don Juan Topete, que después de varias conferencias con

Serrano, se comprometió á iniciar el movimiento revolucionario con varios navíos, siempre que se proclamase reina á doña Luisa Fernanda, esposa del duque de Montpensier. Poco después Serrano y sus compañeros fueron desterrados á las islas Canarias.

No hubo ya dificultad alguna para la inteligencia revolucionaria entre progresistas y unionistas; el poder de los hechos se impuso, y aunque la alianza se limitaba al acto de fuerza, lo que creaba grandes complicaciones para después del triunfo, no por esto era menos terrible la amenaza para el trono de doña Isabel.

Convenían los aliados en no aceptar inteligencia alguna con los demócratas, pues sabían que éstos contaban con las masas y darían un matiz muy avanzado á la revolución. Entre los demócratas, unos optaban por abstenerse, mientras otros juzgaban necesario intervenir activamente en el movimiento. El marqués de Santa Marta fué de estos últimos y trabajó sin descanso para que su partido prestase en todas partes el más resuelto apoyo á los trabajos revolucionarios sin condiciones de ninguna especie. «Lo que nos interesa —decía— es derribar el trono; lo demás no debe preocuparnos, pues toda revolución trae en pos de sí una poderosa corriente de ideas que se impone á las habilidades artificiosas de los que pretenden reglamentar el porvenir.» Así en Madrid como en las provincias donde contaba con mayores elementos hizo el marqués de Santa Marta esfuerzos incesantes para que los republicanos se pusieran, sin reservas ni vacilacio-

nes, al lado de cuantos se alzasen en armas contra aquella corrompida monarquía. Esta generosa actitud, que fué seguida por los republicanos en casi toda España, probó en el Marqués y sus amigos, al mismo tiempo que elevación de criterio, gran previsión política ya que, á despecho de las maquinaciones de unionistas y progresistas, la democracia fué el alma de la revolución.





CAPÍTULO VII

Preparativos del movimiento insurreccional de 1868.—Gestiones del duque de Montpensier.—Dificultades que le opuso el general Prim.—Recelos entre progresistas y unionistas.—Actitud resuelta de los demócratas.—Sublevación de la marina.—Regreso de los generales desterrados en Canarias.—Batalla de Alcolea.—Llegada del general Serrano á Madrid.—Censurable conducta de la Junta Suprema.—Actitud del marqués de Santa Marta.



REPARADOS ya todos los elementos militares que habían de iniciar el movimiento revolucionario á fines de Julio de 1868, se telegrafió al general Prim, que respondió inmediatamente, manifestando que estaba dispuesto y tenía ya buque para emprender el viaje á España. La sublevación debía iniciarse en Sevilla por el segundo cabo de aquella capitanía general, D. Rafael Izquierdo; pero éste, que había recibido cartas de algunos de los generales desterrados en Canarias, previniéndole contra los progresistas, dijo que desde el momento en que Prim tomaba parte en el movimiento, él se retiraba. Esta negativa dió lugar á serias dificultades, y se pensó en promover la insurrección en Cádiz el 9 de Agosto, fecha en que había de verificarse en aquella ciudad una co-

rrida de toros, que atraería mucha gente de los pueblos inmediatos. También fracasó esta tentativa; pues aunque los demócratas lograron agitar al pueblo, tomando pretexto de algunos incidentes de la corrida, ninguno de los buques anclados en el puerto gaditano y trabajados ya por Topete dió la señal para el pronunciamiento, y todo quedó reducido á un motín, que se apaciguó fácilmente. Esta nueva dilación obedeció á la desconfianza que sentían los unionistas hacia sus aliados, los progresistas, y sobre todo hacia los demócratas, pues en modo alguno podían transigir con la idea de que el movimiento revistiese carácter popular, comprendiendo que en este caso era imposible que triunfase la candidatura de Montpensier ni otra cualquiera para el trono de España.

Por su parte el duque de Montpensier no sólo tenía conciencia de su falta absoluta de popularidad, sino que temía fundadamente la animadversión de los progresistas, y sobre todo del general Prim, que se negaba de un modo resuelto á aceptar toda cooperación de aquél en sus preparativos revolucionarios. A los agentes que le envió el duque para conocer su pensamiento, hubo de manifestarles que la bandera de la revolución era Cortes Constituyentes, y que el país decidiese libremente de sus destinos. Esta fórmula no pasaba de ser una evasión del general Prim para no servir de instrumento á los unionistas, pues en realidad estaba tan decidido como éstos á oponerse al triunfo de la democracia.

En resumen, durante los últimos meses que precedieron al gran movimiento revolucionario de 1868, todo fueron desconfianzas, recelos y tentativas de deslealtad entre unionistas y progresistas. Los primeros quisieron más de una vez anticipar la sublevación para que sus aliados no participasen de las ventajas del triunfo, mientras Prim, no obstante su animadversión hacia los demócratas, les halagaba, á fin de tener un elemento poderoso en que apoyarse contra los unionistas. La actitud de los republicanos era tan franca como desinteresada; apoyar con todas sus fuerzas el movimiento revolucionario, fiando á la virtualidad de las ideas el triunfo definitivo. Sabían que el pronunciamiento de 1854, limitado en la voluntad de sus iniciadores á un nuevo cambio de gobierno, había llegado hasta las fronteras de la democracia y no podían dudar de que la futura revolución, á despecho de unionistas y progresistas, traería como consecuencia necesaria el triunfo de la República.

El gobierno de doña Isabel había llegado á ese estado de demencia con que al decir de los antiguos perturbaban los dioses á aquellos cuya perdición han decretado. La tormenta rugía en torno suyo, y ni la escuchaba ni creía en su existencia. Nunca se mostró González Brabo más jactancioso que en aquellos días de prueba para la monarquía, cuando era necesario unir la prudencia y la previsión á la serenidad de espíritu. Afectaba desdeñosa compasión hacia los revolucionarios y al mismo tiempo enviaba á todos los goberna-

res civiles una circular en alto grado depresiva para el elemento militar, pues les encargaba que vigilasen cuidadosamente á los capitanes generales. Llegó esta circular á conocimiento de los capitanes generales de Cataluña y Castilla la Nueva, que lo eran el marqués de Novaliches y el conde de Chestre, y ambos dimitieron sus cargos, no sin que antes suspendiera el primero de su cargo al gobernador de Barcelona, invadiendo atribuciones del poder civil, y viniese á Madrid para avisarse con González Brabo á quien increpó duramente. No sin trabajo y á fuerza de excusas logró el ministro que ambos retirasen sus dimisiones, si bien cambiaron de mando, marchando á Cataluña el conde de Chestre y quedando en Madrid el general Novaliches. El presidente del Consejo, que tanto alardeaba de menospreciar los trabajos de los revolucionarios, suplicó á los citados generales que admitiesen aquellos cargos, pues eran puestos de honor y peligro en aquellas circunstancias. Los demás capitanes generales no hicieron reclamación alguna contra la ofensiva circular de González Brabo, pero es indudable que debió predisponerles muy poco en favor de una situación que, lejos de estimularles á la lealtad, les ultrajaba con la nota de sospechosos.

Los marinos que seguían al brigadier Topete estaban desde mediados de Agosto en situación muy violenta, pues las autoridades de Andalucía conocían su actitud y habían dado cuenta de ella al gobierno. Persistiendo González Brabo en su ceguedad, creyó exa-

gerados aquellos informes y no adoptó medida alguna; pero aquel estado de cosas no podía prolongarse sin graves peligros, y así Topete avisó á Prim en los primeros días de Septiembre que iba á mandarle un vapor con fondos facilitados por Montpensier, pero el general se excusó de aceptar ese ofrecimiento y prefirió otro buque fletado con el producto de una suscripción abierta entre los republicanos andaluces. Seguía, pues, D. Juan Prim consecuente con su cómodo sistema de no querer nada con los demócratas, sin perjuicio de aceptar y aun solicitar su apoyo pecuniario.

Para iniciar el movimiento creyó Topete indispensable tener á su lado, además de Prim, á los generales desterrados en Canarias. Se ofreció desinteresadamente á recogerles el capitán mercante D. Ramón Lagier, que ya entonces era un republicano decidido; llevó en su buque *Buenaventura* como sobrecargo á D. Adelardo López de Ayala y llegó el día 13 de Septiembre á Oratava. Al día siguiente por la noche consiguió Ayala que se evadieran los generales y el vapor volvió enseguida el rumbo hacia Cádiz á donde llegó en la tarde del 19 de Septiembre.

El general Prim se había anticipado, pues se embarcó el 12 de Septiembre desde el puerto inglés de Southampton en el vapor *Delta*, fingiéndose camarero de los condes de Bar y llevando á su lado á los señores Sagasta, Ruiz Zorrilla y Merelo. El vapor llegó á Gibraltar en la mañana del 17, y después de permanecer escondidos algunas horas consiguieron embar-

carse aquel mismo día para Cádiz donde llegaron por la noche. Entonces Prim se trasladó en compañía de Sagasta y Ruiz Zorrilla á la fragata *Zaragoza* que mandaba Topete, el cual, contra lo que esperaba Prim, le hizo un recibimiento muy cariñoso, y una vez solos le manifestó que había vacilado mucho antes de resolverse á hacer armas contra la reina, pero que persuadido de que mientras esta señora ocupase el trono era imposible la felicidad del país, tomaba la iniciativa del movimiento; que era partidario de la monarquía constitucional con doña Luisa Fernanda como reina, y que sólo podía reconocer como jefe del movimiento al duque de la Torre. El general Prim dijo que no tenía inconveniente alguno en ocupar en la sublevación un puesto secundario, no sólo por la estimación que Serrano le merecía, sino porque ante la salud de la patria debían ahogarse todos los estímulos del amor propio, y que en lo referente á doña Luisa Fernanda no era opuesto á esa candidatura, pero juzgaba peligroso lanzar ese nombre desde luego, creyendo más acertado dejar su proclamación á las Cortes Constituyentes. Aceptó el brigadier Topete estas soluciones, y en vista de que los generales desterrados no llegaban convino con Prim en realizar desde luego el movimiento, reconociendo interinamente la jefatura de este general.

Al amanecer del 18 de Septiembre formó Topete en orden de batalla los buques sublevados, que eran las fragatas de guerra *Zaragoza*, *Tetuán*, *Villa de*

Madrid y Lealtad; los vapores *Ferrol, Valencia, Isabel II, Edetana, Santa Lucía, Concordia y Ligera*, y los transportes *Santa María y Tornado* y avanzó con esta escuadra hasta el puerto de Cádiz. Después de hacer á los marinos la presentación de Prim, que fué acogida con *hurras*, dirigió Topete una enérgica arenga á los tripulantes de la escuadra; terminó vitoreando á la libertad y veintiún cañonazos anunciaron que la sublevación era un hecho.

Los republicanos de Cádiz realizaron enseguida el pronunciamiento de la ciudad, en que desembarcaron Topete y Prim, en medio de un entusiasmo indescriptible. Merelo se encargó interinamente del gobierno de Cadiz y se difundieron por todas partes las proclamas que Topete y Prim dirigían al ejército y al país. La proclama de Topete se limitaba á afirmar que era necesario restablecer la armonía entre el trono constitucional y el pueblo, normalizar la hacienda y la administración y reunir Cortes Constituyentes que fijaran las bases de la monarquía y hermanasen la libertad con el orden. El manifiesto del general Prim era también muy poco explícito: aclamaba la libertad, la soberanía nacional, el sufragio universal y las Cortes Constituyentes, y terminaba proponiendo los individuos que habían de constituir la Junta revolucionaria de la provincia de Cádiz.

En la tarde del 19 llegó á este puerto el vapor *Buenaventura* conduciendo á los generales deportados en Canarias. El duque de la Torre aprobó que se

hubiese anticipado el movimiento en vista de la gravedad de las circunstancias, y después se reunieron en consejo los generales para acordar el plan de las operaciones, conviniendo en que el general Serrano tomaría el mando supremo del ejército, mientras Prim á bordo de la fragata *Zaragoza* y en compañía de Malcampo iría recorriendo los puertos principales del litoral mediterráneo para sublevar las provincias de la costa.

Para dar bandera al movimiento se encargó al exdiputado unionista D. Adelardo López de Ayala la redacción de un manifiesto que firmaron el duque de la Torre y los generales Prim, Dulce, Serrano Bedoya, Nouvilas, Primo de Rivera (D. Rafael), Caballero de Rodas y Topete. Este manifiesto, fechado en Cádiz el 19 de Septiembre y que circuló muy pronto por toda España, no contenía declaración alguna acerca de la forma de gobierno, limitándose á hacer un caluroso llamamiento á las armas en nombre de la dignidad y del decoro: á pedir la formación de un gobierno provisional y la elección de Cortes por el sufragio universal. Respecto del problema político, las declaraciones eran, pues, escasas y vagas: en cambio se afirmaba mucho la nota de la moralidad en todas las esferas del poder.

Isabel II se hallaba á la sazón con la corte en San Sebastián, después de haber pasado en Lequeitio parte de la temporada veraniega. Apenas tuvo González Brabo noticia de la insurrección de la marina se apre-

suró á dimitir, á pesar de los jactanciosos alardes que había venido haciendo en los últimos meses y de la escasa importancia que afectaba dar á las fuerzas de la revolución. No ocultó á la reina que las circunstancias eran muy graves y le aconsejó formase un Ministerio militar. Se encargó la formación del nuevo gobierno al general D. José de la Concha, muy conocido por su actividad y energía, pero que aceptó aquella sombra de poder como una obligación penosa, comprendiendo desde los primeros momentos que todo estaba perdido. González Brabo ofreció prestar sus servicios allí donde se creyeran de más utilidad, y el general Concha le pidió aceptase como cargo de honor y peligro el gobierno civil de Madrid. Admitió el puesto González Brabo y quedó en dirigirse desde luego á Madrid; pero lo que hizo fué huir á Francia con tal precipitación que se dejó en España la mayor parte de su equipaje. Su conciencia tenía mucho que reprocharle, y en realidad habría sido difícil que aquel tiranuelo escapase á la justa indignación popular si le hubiera sorprendido en Madrid la revolución. Poco tiempo después figuraba González Brabo al lado de D. Carlos.

El primer impulso de doña Isabel fué trasladarse á Madrid; pero todos los cortesanos que la rodeaban la aconsejaron, con buen sentido por cierto, que no diera tan arriesgado paso antes de que el general Concha, que había salido para la capital de España, garantizase que no había peligro. Concha telegrafió en sentido contrario y ni siquiera organizó el ministerio, pues se

contentó con proveer tres carteras encargando interinamente del despacho de las restantes á los subsecretarios ó directores generales más antiguos. Lo más urgente era hacer frente á la insurrección, y para ello formó D. José de la Concha un ejército de operaciones que envió á Andalucía al mando del marqués de Novaliches, confiriendo el mando de los distritos militares á generales de toda confianza. De la capitanía general de Castilla la Nueva se encargó D. Manuel de la Concha.

Todas estas medidas eran ineficaces para hacer frente al movimiento revolucionario que ganaba terreno con pasmosa rapidez. El mismo día 19 se sublevó Sevilla, poniéndose al frente de la insurrección el general Izquierdo; casi al mismo tiempo se alzaron Béjar, Santander y Santoña, y por su parte el general Prim fué sublevando á Málaga, Almería, Cartagena, Alicante y Valencia y se dirigió á Barcelona, en donde parecía dispuesto á resistir el general Pezuela.

En Sevilla se formó una Junta provisional, constituida en su mayoría por demócratas y que dió carácter verdaderamente reformista al pronunciamiento, pidiendo el sufragio universal, la libertad absoluta de imprenta, de enseñanza, de cultos, de comercio y de industria; reforma liberal de los aranceles hasta que se pudiera establecer la libertad de comercio; abolición de la pena de muerte, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, seguridad individual, libertad de cultos, abolición de quintas y matrículas de mar, ejér-

cito voluntario, desestanco de la sal y del tabaco, unidad de fueros y Cortes Constituyentes. Esta briosa proclama de la Junta de Sevilla fué, á pesar de todos los esfuerzos en contrario, la bandera de la insurrección.

El duque de la Torre llegó á Sevilla el 21 de Septiembre y de allí pasó á Córdoba donde organizó su ejército, al mismo tiempo que Novaliches llegaba á Andújar. Las fuerzas de uno y otro ejército eran próximamente iguales: de diez á doce mil hombres. Desde Córdoba y por medio de D. Adelardo López de Ayala dirigió el general Serrano al marqués de Novaliches sentida carta invitándole á que le dejara franco el paso hasta Madrid. Contestó á esta comunicación el marqués de Novaliches con otra en que, como era de esperar, pedía á Serrano que reconociera la legalidad existente para evitar á la patria mayores males. El día 28 de Septiembre á las tres de la tarde comenzó la lucha entre ambos ejércitos, ocupando las tropas de Serrano el puente de Alcolea, situado en la carretera de Madrid sobre el Guadalquivir á dos leguas de Córdoba. La batalla fué muy reñida, jugando en ella gran papel la artillería, y al anochecer dirigieron las tropas de la reina un impetuoso ataque contra el puente, pero el general Novaliches fué herido gravemente en la boca por un casco de metralla y quedó imposibilitado para dirigir la lucha. Se encargó del mando el general Paredes que continuó el fuego hasta cerca de las nueve de la noche, hora en que se suspendió el

combate, conservando ambos ejércitos sus posiciones respectivas. Creía Serrano que la lucha proseguiría al amanecer, pero á las doce de la noche ordenó el general Paredes la retirada de sus tropas hacia el Carpio, dejando libre el camino á los sublevados para seguir su marcha á Madrid. Al siguiente día y previa la oferta de hacer extensiva á las tropas que habían luchado por la reina la gracia general que el gobierno que se crease había de ceder al ejército, se unieron todas las fuerzas que habían combatido en Alcolea y se dirigieron al mando de Serrano hacia la capital de España.

Desde que estalló la sublevación no había dejado de trabajar un momento el Comité revolucionario de Madrid. Al recibirse la noticia de la batalla de Alcolea el pueblo se lanzó á las calles vitoreando la libertad y dando gritos contra la monarquía y los Borbones. Organizóse una Junta democrática que presidió D. Amable Escalante y que, á pesar de la oposición de los progresistas, abrió el parque nacional, distribuyendo al pueblo más de cuarenta mil fusiles. Desgraciadamente aquella Junta, con la que el marqués de Santa Marta estaba perfectamente identificado y que habría debido imitar el noble arranque de la de Sevilla, tomó el desdichado acuerdo de fusionarse con la que habían formado los unionistas y progresistas. Comprendió entonces el marqués de Santa Marta que la revolución iba á empezar á bastardearse antes de vencer y desde aquel momento fué extraño á todos los acuerdos y dis-

posiciones de la Junta, la cual dió un manifiesto dirigido, no contra la monarquía, sino contra los Borbones. El mismo D. Nicolás María Rivero, en quien tanta confianza tenían los republicanos, se mostró en la Junta singularmente tibio y consintió que esa corporación cometiese la inútil bajeza de enviar comisiones á los generales vencedores, que recibieron á los comisionados con notorio desdén.

Doña Isabel II pasó la frontera de Francia en la tarde del 29 de Septiembre, después de haber confiado en vano en que la defenderían los generales moderados que estaban al frente de los distritos. En San Sebastián se le hizo una despedida glacial; apenas había en aquellos instantes un español que deseara la continuación de aquella señora en el trono. Su reinado dejaba al país muchos recuerdos amargos y vergonzosos.

El día 3 de Octubre hizo su entrada triunfal en Madrid el general Serrano y aquel mismo día la Junta de Madrid, abrogándose poderes que no tenía, encomendó á dicho general la formación de un ministerio que se encargase de gobernar el Estado hasta la reunión de las Cortes.

Esta precipitada abdicación de la Junta de Madrid mostró bien á las claras que había ya demócratas dispuestos á renunciar sus ideales á cambio de una participación en el poder. En cuanto á los progresistas y unionistas no cabía esperar de ellos otra conducta. Sus aspiraciones se habían limitado á realizar un pronun-

ciamiento. Los republicanos supieron convertir ese pronunciamiento en una revolución que mereció el nombre de gloriosa, más que por sus hechos, por las nuevas ideas que esparció á todos los vientos y que elevaron el nivel intelectual y político de España.



TERCER PERIODO



CAPÍTULO VIII

Carácter y sentido de la revolución de Septiembre.—Su genuina significación antimonárquica.—Hechos y razones que la demuestran y confirman.—Necesidad de fijar estos antecedentes como datos indispensables para el juicio de la conducta del marqués de Santa Marta.—Criterio de éste en lo relativo á la organización de los poderes provisionales de la revolución, según la exigen los principios democráticos y las tradiciones de nuestro pueblo.—Importancia de esta organización para los fines revolucionarios.—Antagonismo de tendencias en los primeros instantes, reducidos al constituirse la Junta Central.—Desencanto del pueblo al formarse el Gobierno provisional.—Pensamiento del marqués de Santa Marta.—Consideraciones sobre este punto.



La revolución de Septiembre tenía una gran misión que cumplir. Realizada por la conjunción de todos los partidos que representaban algo en la política y en el país, contra el elemento teocrático, único apoyo de la dinastía divorciada por completo de la nación española, aquella revolución no era ni se parecía á ninguno de los pronunciamientos anteriores, en los cuales, por más que en su fondo se agitase, contra la misma voluntad de sus iniciadores, una idea hostil al trono, no se rompían todos los lazos de la tradición y ostensiblemente se dirigían contra los gobiernos. La revolución de Septiembre sin estos emba-

razos, sin compromiso alguno con el trono ni con la monarquía histórica, desautorizada por los mismos monárquicos que tuvieron participación en el alzamiento de Cádiz por el solo hecho de volver contra ella las armas de la nación, demostrando así, á la manera que el filósofo probaba el movimiento, andando, que la inviolabilidad y la irresponsabilidad del trono no eran nada sin la voluntad del pueblo; aquella revolución que al grito de *libertad y honra* fué aclamada con entusiasmo delirante en todos los ámbitos de la Península y no halló adversarios capaces de hacerle frente; aquella revolución que encarnaba las aspiraciones de un pueblo harto de tiranía, cansado de explotaciones indignas y víctima de inícuos atropellos de poderes desatentados, estaba llamada á redimir al pueblo español de la afrentosa servidumbre que nos había constituido como una triste y vergonzosa excepción entre los pueblos civilizados.

Si no revistió el carácter de encarnizada lucha, porque no hubo resistencia ni fué seguida de los sangrientos sacrificios que empañaron la memorable revolución realizada á últimos del pasado siglo por el pueblo francés, por ser otros los tiempos y las costumbres, no por eso significaba en su fondo menos que aquella la lucha entre los sagrados derechos de la nación y los intereses menguados de la monarquía. Atribuirle otro carácter era empequeñecerla, convertir una cosa tan grande y tan noble como el acto solemne por el cual un pueblo reivindica su soberanía en mezquina ven-

ganza de particulares agraviados, ó mejor que agraviados defraudados en sus ambiciosas aspiraciones por un monarca. La revolución de Septiembre significaba el triunfo del pueblo sobre el trono, no el desquite de unos cuantos militares ó de dos partidos desairados contra Isabel II. Esta clase de insurrecciones tienen en nuestro idioma un nombre clásico y tradicional: se denominan pronunciamientos; los pronunciamientos habían sido el precedente, la premisa; el movimiento revolucionario de Septiembre fué la consecuencia inevitable y lógica. Aquellos significaban la imposición de soluciones políticas determinadas á la corona; la revolución era el triunfo definitivo de la justicia, la sustitución de la convencional soberanía del rey por la legítima soberanía del pueblo. Así lo estimaron los españoles y por ello dieron su ayuda á los sublevados de Cádiz, así lo dieron á entender también los mismos iniciadores del alzamiento llamándole desde luego revolución, evitando confundirla con los movimientos insurreccionales encaminados únicamente á sustituir un gobierno por otro gobierno.

Se trataba de algo más que de un cambio de gobernantes; se trataba de un cambio de instituciones, de una transformación completa del régimen de gobierno. Cualquiera, sin embargo, que fuese el propósito de los militares sublevados al frente del ejército y de la escuadra—y debe tenerse en cuenta que en ninguno de sus actos se descubre el deseo de conservar la monarquía borbónica, contra la cual levantaron el grito

de *España con honra*—cualquiera que fuese su propósito, el hecho es que la revolución de Septiembre derribó el trono secular en España y que toda soberanía levantada sobre sus ruinas que no fuese la soberanía del pueblo sin limitaciones, era un poder ilegítimo, nacido de una usurpación, contra la que era lícita toda resistencia. Por mucho que quiera cohonestarse el despojo llevado después á efecto por los jefes de la revolución, usurpando derechos y poderes que no podían ejercer legítimamente mientras el pueblo no se los confiriese ó los confirmase; por mucho que se quiera excusar el desviamiento deplorable de aquella revolución, reduciéndola á un mezquino cambio de personas, arrojando del trono al representante de una dinastía para sentar en él una nueva rama dinástica, traída del extranjero y otorgada como limosna por una familia de reyes á la importunidad de nuestros políticos por-dioseros, no puede tener justificación nada de lo que contribuyera por parte de unos y de otros á tan funesto resultado.

Repetimos que no se puede quitar á la revolución de Septiembre su genuíno carácter antimonárquico sin empequeñecerla y sin empequeñecer al mismo tiempo los móviles de los que con la espada, la pluma ó la palabra combatieron por ella. Verdad es que doña Isabel II se hizo incompatible con la libertad y con los españoles; cierto que las torpezas de su reinado fueron las causas determinantes de aquel grandioso alzamiento nacional; pero ¿acaso los males que se trataba de

combatir y de estirpar nacían únicamente de su persona? No ciertamente. Ni Fernando VII ni Carlos IV habían sabido mantener á mayor altura el brillo de la monarquía ni gobernar mejor; ella no fué más que la continuadora de aquella política que entregaba el gobierno y los destinos del país á merced de la venalidad y de la corrupción, viviendo en lucha constante con el pueblo, que es su víctima, la víctima despojada de su derecho y mirada como rival por los reyes, de cuyas faltas tal vez es más responsable que ellos la institución, que lo mismo puede poner el cetro en las manos de un sabio como de un idiota, que lo mismo reviste de la autoridad suprema á una persona digna que á un ser sin pudor; que tan pronto coloca á los pueblos á merced de un hombre virtuoso como de un mónstruo abominable.

Las revoluciones y los revolucionarios que derriban al rey conservando el trono son ilógicos, puesto que el idiota no tiene la culpa de serlo, ni el malvado muchas veces es el más responsable de su maldad, sino la institución en cuya virtud se abroga la soberanía, son á la vez esos políticos los perturbadores más peligrosos, puesto que por su sistema de reemplazar violentamente los reyes y las dinastías hereditarias cuando no respondan á su misión, las naciones vivirían en conmociones perpetuas y no habría estabilidad ni normalidad en el gobierno.

Fué, por consiguiente, una falta de lógica pensar que la revolución contra la dinastía borbónica se diri-

gía únicamente contra la persona y la familia de doña Isabel II y que debía respetar las instituciones á cuya sombra se habían perpetrado, con el derecho nacido de ellas, las iniquidades acumuladas contra el pueblo durante siglos por los depositarios del poder real; pero fué más que falta de lógica, deslealtad imperdonable, incurrir en el mismo delito de lesa nación contra el que se acababa de fulminar la espada revolucionaria, apenas obtenida la victoria, los mismos que en nombre de la honra, de la libertad y de la soberanía de la patria dieron el grito *Abajo los Borbones*.

Conviene recordar todos los antecedentes de aquellos hechos, no sólo por la intervención que en prepararlos tuvo el marqués de Santa Marta, según se ha dicho antes, sino también para dejar perfectamente establecida la filiación de sus ideas y conducta durante el período de desencantos que siguió á los irreflexivos entusiasmos de los primeros instantes, que ni siquiera fueron días, porque los caudillos no desperdiciaron ni un momento para demostrar con su conducta que no eran menos detentadores de los derechos populares que los reyes expulsados, ni había que fiarse más de su vanidad endiosada que de las intrigas palaciegas y de la soberbia de los monarcas.

Revolucionario de convicción y de sentimientos, el marqués de Santa Marta creyó que el pueblo quedaba entera y absolutamente dueño de sus destinos y que mientras no se diese un gobierno regular debía provisionalmente regirse con entera independencia de todo

otro poder extraño. Si en los meros pronunciamientos, sin otro alcance que un cambio de ministros, el primer acto de los pueblos había sido constituir sus juntas de gobierno, con más razón debían constituirse entonces que derrumbado el trono y en fuga la reina, faltaba toda representación del poder, y no podía á su juicio, sin una grave contradicción y sin constituir un gran peligro, sustituirse el gobierno de la monarquía por el de la espada, que no era después de todo más que el instrumento y el ejecutor de la justicia popular. Delante del pueblo, pensaba el Marqués, puesto que él es origen y fuente de todos los poderes políticos, debe someterse la representación de la fuerza, que es el brazo. Consecuente con esta opinión, con esta creencia firmísima tan en armonía con los procedimientos democráticos, trabajó con todas sus fuerzas para hacer que se constituyeran en todas sus partes Juntas que fuesen la representación y las depositarias de la autoridad del pueblo, único soberano siempre, y más si cupiese en esto gradación, cuando los poderes tradicionales abandonaban cobardemente la defensa de sus pretendidos derechos y la nación quedaba huérfana de toda autoridad.

Responde la creación de las juntas de gobierno, no sólo á la lógica de los principios democráticos, sino también, como queda indicado, á nuestras tradiciones, pues esa ha sido siempre en la nación española, amante como ninguna de la autonomía municipal, el procedimiento seguido para constituir el poder en momentos

difíciles de su historia. Desde la época del absolutismo de la casa de Austria hasta la guerra de la Independencia, y más adelante en todos los movimientos contra los partidos apoderados del gobierno en la época constitucional, el pueblo español ha dado testimonios de su gran instinto encomendando el ejercicio del gobierno á las colectividades elegidas por los municipios, considerando á éste, no sólo como la forma fundamental del Estado político, sino como el Estado mismo.

El pensamiento del marqués de Santa Marta en materia tan vital tenía en su apoyo la razón, la historia y el mismo instinto popular, siendo tan llano y elementalísimo este principio, que cuesta trabajo comprender cómo pudieron olvidarlo y pasar en silencio su transgresión notoria, absurda y funesta en el movimiento revolucionario de Septiembre, hombres que de antiguo profesaban sinceramente las doctrinas democráticas.

Hubo en los primeros momentos cierto antagonismo entre la tendencia democrática y la monárquica, revelado en el hecho de haberse constituido dos Juntas en Madrid: una formada por los elementos que no obstante haber derrumbado un trono se aferraban en sostener la monarquía como forma de gobierno; otra compuesta por los demócratas. Ya queda dicho que los demócratas estaban entonces absorbidos por los republicanos, que el mismo Rivero defendía con aparente calor la República y no cabía esperar la apostasía realizada más tarde por este político y secun-

dada por Martos y otros elementos democráticos pasándose á la monarquía. Debía, pues, suponerse en los primeros instantes que la Junta formada por los demócratas mantendría en frente de las detenciones que meditaban los monárquicos, el derecho absoluto del pueblo á gobernarse á sí mismo, y no era extraño que creyéndolo así se abrigasen halagüeñas esperanzas, ó mejor, seguridad completa en el triunfo de la buena doctrina democrática, que había de ser indudablemente apoyada por todas las Juntas de España.

Grande fué el desencanto de los verdaderos demócratas, de los republicanos de convicción y de abolen-gó, entre los cuales se contaba el marqués de Santa Marta, al ver fusionarse las dos Juntas en una y erigirse desde luego, no en Junta meramente local ó municipal, sino en Junta suprema que asumió, aunque interinamente, todos los poderes y los entregó poco después á la Junta definitiva elegida en votación por distritos y por barrios, en la cual quedaron muchos ó casi todos los que formaban la anterior, y cuya presidencia honoraria fué conferida á los generales Serrano y Prim.

Aún podía aceptarse que para atender en los primeros instantes á las necesidades urgentes de la vida nacional, que no puede interrumpirse, la Junta de Madrid asumiese provisionalmente el poder, pero á condición de convocar sin demora la representación de toda España para restablecer la normalidad resignando sus poderes en un gobierno de legítimo origen po-

pular, y que así se haría lo garantizaban aparentemente los nombres de los demócratas que no habían dejado de ser republicanos fervorosos, cuyos nombres aparecían autorizando, entre los de los demás, todas las resoluciones de la Junta. No obstante, la decisión de ésta de enviar comisionados á los generales vencedores, acto de verdadero vasallaje por parte de quien ejercía autoridad en nombre del pueblo, fué motivo de alarma para los republicanos; pero este pueblo, siempre sufrido hasta el heroísmo y confiado, porque el serlo es condición de la lealtad, confiado hasta la candidez, aún esperaba en la Junta, aún no creía amenazados sus derechos, cuando en realidad habían sido ya hollados escandalosamente. Y mientras el pueblo así se entregaba confiadamente á la lealtad de sus caudillos, Prim recibía con desdén á la comisión de la Junta en Cartagena, dirigía embozadas amenazas á los pueblos en nombre de un gobierno *legal* amañado en Alcolea, contestando á la felicitación que le dirigían, tomando abusivamente el nombre del pueblo, manifestando la necesidad de *hacer á toda prisa una monarquía*, es decir, de usurpar sin pérdida de tiempo la soberanía al único soberano de derecho, y Serrano á la vez se dirigía apresuradamente á Madrid para poner en ejecución sin demora el plan liberticida fraguado apenas habían vencido en nombre de la libertad.

El primer acto del duque de la Torre al llegar á Madrid fué, como ya queda dicho, recibir el pleito homenaje de la Junta y pedir á ésta una autorización

para constituir ministerio, consumando así el despojo de la soberanía. La Junta se lo concedió sin dificultad y sin protesta en los siguientes términos:

«Consumada felizmente la gloriosa revolución que se inició en Cádiz, y llegado el caso de organizar la administración pública, esta Junta revolucionaria de Madrid encomienda al capitán general de ejército don Francisco Serrano, duque de la Torre, la formación de un ministerio provisional que se encargue de la gobernación del Estado hasta la reunión de las Cortes Constituyentes. Madrid 3 de Octubre de 1868.—El presidente, Joaquín Aguirre.—El vicepresidente, Nicolás María Rivero.—Pascual Madoz.—Amable Escalante.—Ricardo Muñiz.—Manuel Merelo.—Laureano Figuerola.—José María Carrascón.—Mariano Azara.—Facundo de los Ríos Portilla.—Félix de Pereda.—Vicente Rodríguez.—José Cristóbal Sorní.—Manuel García y García.—Francisco Romero y Robledo.—Cristino Martos.—Juan Moreno Benítez.—Mauricio López Roberts.—Nicolás Calvo Guayti.—Ventura Paredes.—Camilo Labrador.—Miguel Morayta.—Bernardo García.—Tomás Carretero.—Ruperto Fernández de las Cuevas.—Francisco Carratalá.—Antonio Vallés y Pablo.—Eduardo Chao.—Manuel Ortiz de Pinedo.—Manuel Pallares.—José Abascal.—Ignacio Rojo Arias.—Secretarios: Antonio Ramos Calderón.—Mariano Vallejo.—Francisco Jiménez de Guinea.

Excmo. Sr. D. Francisco Serrano, duque de la Torre.»

No cabe en los estrechos límites de un trabajo exclusivamente biográfico la crítica amplia de los hechos, crítica, por otra parte, de la jurisdicción de la historia; pero no se puede prescindir de juzgarlos sumariamente en la medida necesaria para apreciar los actos de la persona objeto de la biografía, y esta necesidad nos obliga á decir que el acto de la Junta, incomprensible é injustificable de suyo, lo era más, atendida la aquiescencia de algunos de sus miembros, cuyos antecedentes y deberes políticos les obligaban á formular por lo menos enérgica protesta, ya que hubiesen sido vencidos por el número de los contrarios, y á retirarse de la Junta, negando sus firmas á aquel documento que era una humillante abdicación ante los generales victoriosos. La historia podrá tener en cuenta las razones de cierta índole que á realizar semejante acto les impulsaran, razones hasta ahora ignoradas por todo el mundo: la lógica les condena desde luego en nombre de la nación entregada á un nuevo despotismo apenas emancipada de la antigua tiranía.

Grande fué la indignación del marqués de Santa Marta al conocer aquella comedia representada por un general pidiendo con hipócrita mansedumbre el mando, y una Junta delegando en él poderes que no tenía, porque aquella Junta, elegida sólo por los vecinos de Madrid, no tenía la representación ni había recibido poderes de la nación española, cuyo derecho quedaba detentado por la autorización, que no podía ser origen legítimo de ningún gobierno; porque este

origen legítimo sólo podía darlo la representación de todas las Juntas provinciales, formadas á su vez por las de las respectivas Juntas locales. La de Madrid no era más que una de estas últimas; por consiguiente, para el marqués de Santa Marta, aquel gobierno se fundaba en una usurpación contra la cual eran legítimas todas las acciones populares. Así lo pensaba y así lo proclamaba sin rebozo, opinando que debía negarse la obediencia á un poder constituido con tan notoria y vergonzosa detentación del derecho, y faccioso por lo tanto por su origen. Abundaban en esta misma opinión casi todas las Juntas provinciales, que se negaron en un principio á reconocer el gobierno provisional; pero en el ánimo de ellas y en el de las personas que, como el marqués de Santa Marta, se pronunciaron en favor de la resistencia, influyó la consideración altamente patriótica de no debilitar la revolución con disturbios sin resultado cuando los corifeos tenían la fuerza material y el gobierno provisional era un hecho consumado, que si se pudo impedir al principio con una actitud de digna y enérgica resistencia, no podía ahora combatirse con las armas sin riesgo de que los enemigos de la revolución se aprovecharan de estas discordias para restaurar la monarquía derrocada en Alcolea. En la esperanza, pues, de que respetados los derechos individuales la representación en las Cortes Constituyentes de la nación española establecería sobre bases de justicia la definitiva organización de los poderes en armonía con las aspiraciones del pueblo, y

de que la usurpación constituiría sólo una interinidad pasajera, las Juntas cedieron dejando nombrados los Ayuntamientos que habían de encargarse de la gestión de los intereses municipales hasta las elecciones; y los que con tanta previsión como lógica opinaban que los atentados contra el derecho no son más tolerables en un caudillo que en un monarca y que no merecería más consideraciones uno que otro, cedieron á las instancias de sus propios correligionarios que les aconsejaban la aceptación de lo hecho en nombre de la patria y por el mismo interés de la República.

Los acontecimientos confirmaron más tarde estas prudentes previsiones demostrando con qué facilidad suele engañarse la noble candidez de los pueblos en beneficio de los ambiciosos y cuán difícil y delicada llega á ser la situación de los políticos prudentes y previsores, obligados siempre, á pretexto de patrióticos intereses, á modificar su conducta, inspirada en los consejos de la sana razón, con arreglo á las pautas de los partidos que suelen reconocer casi siempre tarde y cuando no tienen remedio sus equivocaciones.

Si en armonía con el criterio del marqués de Santa Marta, que era el predominante entre los republicanos, las Juntas locales y provinciales hubiesen mantenido con energía sus derechos y su jurisdicción, formando con sus representaciones la Junta central, el poder, legítimo desde el primer instante, no hubiera salido de las manos del pueblo, y aquella revolución no se hubiera desviado de sus fines ni caído como

cayó cediendo el paso á la dinastía expulsada en 1868, después de pasar por la vergüenza de implorar á pueblos extraños un monarca que ocupase el trono restablecido por los mismos revolucionarios.

No puede negarse con todo que aquella revolución, aun á pesar de sus mismos iniciadores, produjo no pocos bienes, desterrando los despotismos tradicionales, pero no dejó como debiera bien afirmadas sus conquistas para hacer imposibles retrocesos que hoy mismo nos amenazan, y esta fué la culpa de los que por ambición ó debilidad contribuyeron á desviarla de su camino. Pero cuando la historia haga efectivas con su eficaz sanción las responsabilidades de aquel fracaso, no las exigirá seguramente á los políticos previsores que, como el marqués de Santa Marta, no se dejaron seducir por cándidas esperanzas y señalaron el verdadero camino para coronar dignamente la obra revolucionaria.





CAPÍTULO IX

Patriótica abdicación de las Juntas.—Correspondencia de los monárquicos.—Influencia decisiva que tuvo la opinión republicana en el éxito del alzamiento de Cádiz.—Prim y Serrano se apoderan del gobierno.—Causas de que quedasen excluidos de él los demócratas que se habían declarado monárquicos.—Apostasía de Martos.—Hostilidad manifiesta de Prim contra los republicanos.—Tendencias favorables á la monarquía en el gobierno.—Manifestación de demócratas, progresistas y unionistas.—Declaraciones del gobierno con este motivo.—Influencia y trabajos del marqués de Santa Marta en la organización del partido federal.—Brillantes resultados y manifestaciones de esta organización, que demostraban la seguridad del éxito si las Juntas se hubieran negado á resolverse.—Proceder generoso del marqués de Santa Marta ante esta justificación de sus opiniones y criterio.—Su intervención en los actos y manifestaciones del partido frente á las arbitrariedades y provocaciones del gobierno.—Es elegido diputado de las Cortes Constituyentes.



Los primeros actos de los monárquicos estuvieron muy lejos de corresponder á la lealtad con que las Juntas habían procedido, entregándoles por completo la suerte de la nación y el porvenir de las conquistas revolucionarias. Prim y Serrano constituyeron inmediatamente el gobierno provisional, excluyendo de él á los republicanos, no obstante el gran apoyo prestado por éstos á la revolución, cuyo éxito era dudoso, y tal vez hubiera cambiado á no ser por la actitud de los pueblos y de las masas republicanas,

que determinaron con su hostilidad la fuga de la reina, á quien sus consejeros dictaron esta determinación, después de haber perdido ellos toda esperanza de resistencia por parte de la opinión, á la que en vano apelaron repetidamente.

Esta actitud del pueblo, republicano en su mayoría, decidió el éxito de la empresa, pues la victoria quedó indecisa después de la batalla de Alcolea, y realmente nadie podía atribuirse: los dos ejércitos conservaron sus posiciones, y se hubiera hecho preciso empeñar nuevo combate á no haberse sabido antes la noticia de la marcha de doña Isabel. El triunfo de Serrano, por consiguiente, fué debido al triunfo moral de las ideas republicanas, que haciendo el vacío alrededor del trono, determinaron su caída.

Los que se apropiaron aquella victoria, que no era en realidad suya, como se lo apropiaron todo después, pagaron con la más negra ingratitud al pueblo, usurpándole en primer término su soberanía y enagenándola después al vincularla en el trono, para lo cual era lógico que prescindieran, como prescindieron, de los legítimos representantes de la soberanía popular. Llevaron á tal punto su hostilidad á todo lo que representase los intereses ó los derechos populares, que quedaron excluidos del gobierno provisional los demócratas que se habían unido á los monárquicos. Temían éstos, sin duda, que los antiguos resabios ó la fuerza del hábito en los apóstatas de la democracia, les llevase más lejos de lo conveniente, y les fué negada

otra participación que la entrada de Rivero, el cual rehusó para no aparecer como traidor á sus amigos, quedando por tanto árbitros de la situación progresistas y unionistas. Debe señalarse el hecho de que quien más hostilidad mostró hacia republicanos y demócratas fué el general Prim, á quien el marqués de Santa Marta no pudo perdonar nunca la intransigencia con que procuró desviar la revolución de sus legítimos derroteros.

El desaire sufrido por los demócratas, gracias á la obstinación de Prim, no les detuvo en el camino de su apostasía; perseveraron en ella, aceptando Rivero la alcaldía de Madrid y se humillaron, aprovechando todas las ocasiones para aparecer como servidores fieles del gobierno provisional, que por todos los medios procuraba ir preparando los ánimos en favor de sus planes.

A este fin respondió una manifestación verificada en el mes de Noviembre, presidida por Martos, Olózaga y Vega Armijo, en representación de demócratas, progresistas y unionistas, respectivamente, en la cual se acentuó más y más el exclusivismo de aquella política, en mal hora tolerada por los republicanos, los cuales la habían podido aniquilar en los primeros momentos.

La manifestación, cuyos fines aparecieron ostensibles en los discursos pronunciados, se dirigió á la esplanada de Caballerizas, en donde hablaron desde el primer descanso de la escalinata adosada al muro de

Palacio, los presidentes de la manifestación. Olózaga comenzó así su discurso: «Los progresistas, los demócratas y los unionistas, hemos expulsado de España á los Borbones.» En estas frases se hacía deliberada preterición de los republicanos, excluidos tácitamente de aquella ficticia legalidad, creada por un acto de traición al pueblo, verdadero autor y causante de la caída del trono. Habló después Martos, encareciendo la unión de todas las fuerzas que habían coincidido en el alzamiento de Cádiz, haciendo caso omiso de los que no formaban en la pandilla monárquica. Como quiera que en aquellas circunstancias Martos tenía allí el mínimo de representación, pues ni la suya personal era grande, ni numerosos los elementos que les siguieron en la apostasía, el discurso del amigo y discípulo de Rivero fué únicamente un acto de adhesión á los unionistas y progresistas. Declarada por Olózaga, en nombre de aquella coalicción, la exclusión de los republicanos, faltaba dar la nota monárquica, y de hacerlo estaba encargado el marqués de la Vega de Armijo, quien en su discurso abordó naturalmente la cuestión, haciendo patente la conveniencia de consolidar la obra revolucionaria, estableciendo una monarquía *popular y hereditaria*.

Al llegar aquí, levantóse gran clamoreo entre los manifestantes. «*Hereditaria no*, gritaron mil voces á la vez; *hereditaria no; electiva.*» El marqués de la Vega de Armijo conoció que había ido demasiado lejos y que había muchas prevenciones contra la monarquía

aun entre sus mismos partidarios, y procuró salir del atolladero diciendo: «Electiva será, puesto que la elegirá el pueblo.» Con este sofisma, que no podía considerarse ni aun como promesa y que además no se cumplió, pues la monarquía fué hereditaria y no elegida por el pueblo, sino por una mayoría de empleados; con este sofisma, decimos, se calmaron las terribles incertidumbres de los cándidos progresistas, pues lo eran casi en su totalidad los componentes de la manifestación, y ésta se dirigió al ministerio de la Gobernación y á la presidencia del Consejo, dando ocasión á los individuos del gobierno para hacer, en nombre de éste, declaraciones monárquicas, añadiendo así á la usurpación el alarde de su odioso delito. De este modo quedó solemne, pública y definitivamente consagrada la apostasía de algunos demócratas y señalada la línea divisoria entre los que después de traicionar al pueblo se disponían á recoger los beneficios de la traición, y los que se conservaban fieles acatadores de su soberanía.

Como si las palabras de un individuo y del jefe del gobierno no tuviesen importancia para cohibir los ánimos cuando se pronuncian desde un balcón y no se imprimen en la *Gaceta*, los individuos del gobierno provisional buscaron el pretexto de la manifestación para ser más explícitos que lo habían sido en el manifiesto oficial dado al país el 25 de Octubre. En este documento se limitaban á hacer una especie de análisis crítico de las formas de gobierno, á la manera que

el pintor de aquel cuadro representando un león vencido por el hombre, es decir, presentando la monarquía como manantial de venturas y prosperidades, y la República como forma apropiada á pueblos sin tradiciones, haciendo protestas de acatar, á pesar de todo, la resolución de las Cortes Constituyentes. Protesta sin valor alguno, puesto que las Cortes habían de ser su hechura, pero que revelaba cierto pudor y cuando menos cierto temor, de que prescindieron en el acto antes referido, declarándose paladinamente partidarios de la monarquía.

Inmediatamente después se publicó el manifiesto llamado de *conciliación liberal*, haciendo declaraciones en favor de la *monarquía popular*, encomiada por Vega de Armijo en la manifestación de Caballerizas, y queriendo explicar la apostasía de los demócratas de Rivero, Becerra y Mártos, con el sofisma de que las formas de gobierno eran accidentales, y lo importante destruir el derecho divino, que no podía por cierto invocarse lógicamente en el reinado de doña Isabel II, levantada por las bayonetas de los liberales contra el derecho divino de su tío D. Carlos.

Bastardeada de este modo la revolución por los hombres puestos á su frente, sin tener en cuenta que contrariaban las legítimas aspiraciones del pueblo, los republicanos no podían permanecer inactivos ni desaprovechar el excelente espíritu de los pueblos que acogían con entusiasmo las ideas republicanas, única esperanza del país después de la vergonzosa defección

de los monárquicos. Procedieron á dar organización á sus fuerzas y á realizar, en frente de las mezquinas manifestaciones de los monárquicos, que sólo en Madrid se atrevieron á hacer alarde de tales ideas, aborrecidas del pueblo, imponentes manifestaciones republicanas que llenaron de pavor á los monárquicos, demostrando de un modo palpable que la opinión del país era decididamente republicana. En Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Sevilla, en Murcia, en Alicante, en Oviedo, en todas partes se celebraron brillantísimas exhibiciones de las innumerables fuerzas con que contaba la República federal, idea que llegó á ser la fórmula suprema de la revolución española, y que en pocos meses pudo contar por millones sus prosélitos y levantar en armas ejércitos superiores á los del gobierno. Los viajes de los propagandistas y de los jefes federales eran como carreras triunfales; su presencia despertaba entusiasmos delirantes, indescriptibles, de que tal vez no se hallen ejemplos en la historia; se contaban por miles las publicaciones republicanas, surgían por todas partes comités, y cualquier acto del gobierno contra los derechos populares motivaba simultáneamente manifestaciones en todos los pueblos en favor de la República federal.

El marqués de Santa Marta contribuyó con todas sus fuerzas y por todos los medios á esta brillante y poderosa organización, y entonces pudo verse de un modo indudable cuán desacertados anduvieron los que se arredraban dos meses antes por las consecuencias

de una oposición enérgica á los planes de los monárquicos. Al primer grito, la obra deleznable de la coalición monárquica hubiera caído estrepitosamente al empuje irresistible de aquella inmensa fuerza de opinión, pronunciada por todas partes en favor de la República.

Ante una prueba tan evidente hubieran tenido razón en quejarse los que, como el marqués de Santa Marta, opinaron siempre por la resistencia, en la racional confianza de un éxito seguro, garantizado por todas las condiciones y circunstancias de la lucha, hubieran tenido razón sobrada para hacer responsables á los tímidos y á los *prudentes* de la pérdida de la República que la tenían en las manos; pero no es esa la conducta que cuadra á las almas varoniles y á los espíritus generosos, y en vez de entregarse á recriminaciones perjudiciales ó á estériles lamentaciones, se consagraron por entero al servicio de la causa, organizando sus huestes, levantando los ánimos y despertando la esperanza en todos los corazones.

En contestación al anodino manifiesto de Martos, Becerra y Rivero, publicó otro el Comité de Madrid declarando que «la República es la forma esencial de la democracia y que sólo podían llamarse legítimamente demócratas los republicanos; que la monarquía es una institución injusta y absurda que donde existe sólo existe para conservar algún privilegio ó para sostener alguna iniquidad.» A este documento siguió la primera manifestación republicana en Madrid, cuyas

calles principales fueron recorridas por más de treinta mil republicanos, llevando escrito el programa de la federación en numerosos estandartes, y la agitación de los ánimos inmensa. La convocatoria de las Cortes Constituyentes, que debían reunirse en Madrid el 11 de Febrero de 1869, aumentó el movimiento de propaganda y organización, constituyéndose en Madrid un Comité nacional, encargado de la dirección de los asuntos del partido. De él formaba parte el marqués de Santa Marta, en unión de los prohombres del partido republicano. Con motivo de las elecciones el Comité nacional dirigió un notable manifiesto á los republicanos, del cual transcribimos los párrafos más importantes, en los que resplandece la más sana doctrina democrática y el espíritu de fraternidad que inspiraba todos sus propósitos.

Decían así:

«La elección de la Asamblea es uno de esos actos supremos, una de esas ocasiones singulares en que un pueblo puede salvarse por un grande esfuerzo ó perderse por su propia culpa...

»El partido democrático ha creído siempre que la esencia de su doctrina es la consagración de los derechos individuales, la forma de su gobierno, la soberanía del pueblo y la manera única de que los derechos individuales puedan afianzarse y la soberanía del pueblo ejercerse, es la República...

»No olviden nuestros correligionarios la necesidad de la unión. Una sola candidatura republicana en cada

distrito. Sacrificio mutuo de rivalidades y ambiciones. Los individuos del Comité serán los primeros en dar este ejemplo, resueltos sus individuos á anteponer á todo interés particular ó personal el bien de nuestro partido y el interés de la unidad con que debemos ir á las urnas.

»El Comité nacional no quiere imponer candidaturas. Desea que la opinión pública las designe; que los pueblos, los municipios, los distritos, los electores formulen su voluntad, y que luego los Comités de circunscripción formulen las candidaturas decisivas y que todos los republicanos las voten. Ciudadanos, mucho orden, mucha cordura, mucha agitación moral; esfuerzos supremos para hacer triunfar las candidaturas republicanas, y tened por cierto que si la República sale de las urnas, como tenemos derecho á esperar, habreis concluido con los restos del antiguo régimen y habreis salvado á España.

»Salud y fraternidad.

»Madrid 27 de Diciembre de 1868.—José María Orense.—Estanislao Figueras.—Emilio Castelar.—José Cristóbal Sorní.—Miguel Ferrer y Garcés.—Blas Pierrad.—Roque Barcia.—Enrique Pérez de Guzmán.—Ramón Rúa Figueroa.—Eduardo Chao.—Francisco García López.—Fernando Garrido.—Pedro Pruneda.—Justo Zabala.—Benito Losada y Astray.—Simón García y García.—Mariano Vázquez Reguera.—Manuel Lapizburu.—Modesto Pacheco.—Teodoro Sainz y Rueda.—Nicolás Aravaca.—Juan José de Paz.—Julían Arrese.—Ceferino Tresserra.»

Era natural y preciso que los republicanos acudiesen á las urnas con su propia y bien definida representación: así se había resuelto en una reunión celebrada en el circo de Price á raíz del triunfo, por más que en ella el Sr. Salmerón expuso su parecer de que se acudiese con carácter indefinido é independiente, no votando en favor de la monarquía ni de la República. Tan extraña proposición fué combatida por todos y no pudo prevalecer. La lucha electoral tenía la ventaja de servir como de recuento y organización de las fuerzas, ya que no hubiera motivos para confiar gran cosa en la neutralidad del Gobierno, que había ya mostrado su parcialidad en favor de la monarquía y anunciado con su conducta de lo que era capaz para conseguir la victoria.

Pero esta desconfianza por un lado, por otro el pesar de haber desaprovechado los poderosos elementos de triunfo para detener en su obra destructora á los falsos revolucionarios, por parte de los demócratas, y principalmente el temor del gobierno ante la gran fuerza y las simpatías que gozaban en el país los republicanos fueron causa de que no se llegase pacíficamente á la reunión de las Cortes. La fuerza de los republicanos era tan grande que el Gobierno se convenció de que á pesar de las coacciones y amañes al alcance del poder, su causa estaba verdaderamente comprometida y había de ayudar á la falsificación de las elecciones por otros caminos. A este fin procuró cautelosamente excitar á los republicanos para tener oca-

sión de darles la batalla, imponiéndose por el terror en unas partes, inutilizando en otras gran número de votos, y finalmente procurando por este medio introducir la discordia entre los republicanos.

Lo que en el mes de Octubre quisieron evitar los espíritus prudentes, la temida lucha contra los usurpadores monárquicos en condiciones favorables para la República, ocurrió poco después, provocada por éstos cuando se consideraron bastante fuertes, cuando en nombre de una legalidad de hecho podían darse aire de pacificadores. ¡Cuán distinto hubiera sido el resultado dos meses antes! ¡Cuánta sangre se evitaría muchas veces si lo que ha dado en llamarse prudencia y no es sino una falta de carácter y de fe, desconocimiento de las cosas, no se opusiese á la acción decidida de los espíritus varoniles!

El triunfo obtenido por los republicanos en capitales y pueblos importantes en las elecciones municipales, precipitó los planes del gobierno. Este dispuso entonces la reorganización de la milicia nacional en varias poblaciones de Andalucía, con el verdadero propósito de desarmarla si no podía desalojar completamente de sus filas á los republicanos.

Esta fué la señal del combate. El Puerto de Santa María y Cádiz negáronse á cumplimentar la orden del gobierno; acudió el pueblo á las armas y sostuvo en la última de las citadas poblaciones una lucha encarnizada que duró tres días, teniendo al fin que rendirse al general Caballero de Rodas por no haber sido secun-

dado inmediatamente por otras poblaciones aquel movimiento sostenido al grito de *Viva la República federal*. La agitación tuvo eco en otras provincias, donde al cabo de más ó menos resistencia el gobierno se impuso con la fuerza del ejército; pero en Málaga la lucha fué terrible y produjo muchas víctimas.

El Comité nacional republicano, de que formaba parte como vicepresidente el marqués de Santa Marta, publicó un enérgico manifiesto de protesta contra las tropelías del gobierno.

Copiamos de él los más salientes párrafos, que merecen ser conocidos por constituir una prueba irrecusable del acertado criterio de nuestro biografiado y demostración de sus opiniones:

«Concurrieron á aquella gloriosa revolución (la de Septiembre) todos los partidos liberales que habían sufrido últimamente la persecución de la menguada y dilapidadora pandilla que escudada y protegida por el trono, había esquilado toda la riqueza del país, conculcado todas las leyes y exterminado por el patíbulo ó relegado á las cárceles, á los presidios y á la emigración todo cuanto de noble y generoso abrigaba el país

«La marina, que tanto había enaltecido el pabellón español en las costas del Pacífico, inauguró la revolución en Cádiz, y esta culta y heroica ciudad que secundó con enérgico entusiasmo aquel alzamiento, que tres veces fué cuna de nuestras libertades, se ve postrada y ensangrentada como atleta herido y todo en ella es luto y tristeza, desolación y ruina.

»El ejército en Sevilla y Alcolea, guiado por varios generales, secundó también aquel alzamiento, y como Alcoy, Béjar y Santander, lo selló con su sangre. El partido de la unión liberal, el progresista y el republicano, todos con nuestras fuerzas contribuimos á establecerlo y consolidarlo.

»La Junta de Madrid, que no representaba á la nación ni á la provincia, sino meramente á esta localidad, confirió al vencedor de Alcolea, rodeado entonces de gran prestigio, más quizá que por su victoria por haber firmado el célebre manifiesto de Cádiz, la ardua y trascendental misión de constituir un gobierno provisional que se encargara de regir el país hasta la reunión de las Cortes Constituyentes.

»Apenas constituido el Gobierno provisional, no pudiendo en su pequeñez é ineptitud llenar la alta misión que se había impuesto y proponiéndose ya sin duda adoptar una marcha contraria al espíritu de la revolución, creyó encontrar un obstáculo en las Juntas revolucionarias, y entrando en un desatinado camino, del que desgraciadamente no se ha apartado todavía, exigió su inmediata disolución.

»En vano se les hizo presente la inconveniencia de esta medida; en vano se le demostró que en las Juntas había de encontrar todo el apoyo que su autoridad necesitaba; en vano, al exponer los individuos del Gobierno provisional como motivo para la disolución de las Juntas la importancia de la personas que componían aquel gobierno, se les recordaba que no lo había

sido menor la de los generales Espartero y O'Donnell, que en 1854 formaban el Gobierno provisional, y sin embargo, lejos de considerarse embarazados por la existencia de las Juntas revolucionarias como consultivas, fundaban en ellas su principal apoyo. Todo fué en vano; el Gobierno provisional exigió á toda costa la disolución de las Juntas, y éstas con marcada repugnancia, previendo los fatales resultados que su disolución había de acarrear, pero deseando, sin embargo, no oponer obstáculos á la marcha del Gobierno provisional que creyeron revolucionario, por un acto de patriotismo de que hoy deben estar arrepentidas y cediendo á influencias que entonces parecían legítimas, se disolvieron.

»Desde entonces el Gobierno no ha hecho más que contrariar dictatorialmente la revolución para imponer al país lo que el país rechaza... A pesar de sus formales promesas de resolver todas las cuestiones con el criterio democrático, se sigue el mismo sistema que hizo necesaria la gran revolución nacional.

»Descendiendo el Gobierno provisional de la gran altura en que se hallaba colocado, prefirió ser el gobierno de un partido á serlo de la nación y se declaró monárquico, cambiando así las condiciones de la lucha legal de los partidos y arrojando en la balanza el peso de su opinión oficial cuando no tenía otra misión ni otro poder que el de juez de campo para asegurar la libertad, la legalidad y la verdad del sufragio. Así se explica que se haya desposeído á la juventud, en su

mayoría republicana, del derecho de votar, exigiendo como condición de capacidad la de haber cumplido veinticinco años. Y es que todo esto y más se necesita para imponer á la noble nación española un monarca rechazado por el voto unánime de todos los pueblos que se levantaron al grito de *Abajo los Borbones*.

»A este desatentado propósito se atribuyen los conflictos que con indignación y espanto estamos presenciando todos los días.

»Ayer fué la liberal y hermosa Cádiz la que vió sus calles barridas por la metralla y á sus hijos predilectos fugitivos ó gimiendo en las mazmorras y sujetos al fallo de un consejo de guerra.

»Hoy es la democrática, la industriosa Málaga, cañoneada y ametrallada con mengua de la civilización, la que yace postrada y casi exánime después de tremenda y heroica lucha bajo la planta del vencedor...

»Ha llegado, pues, el momento de que cuantos se han consagrado con buenos fines á la santa obra de regenerar la patria en la revolución de Septiembre, salgan á detener en su insensata carrera á cuantos pretenden por insidiosas artes y violentos medios reducir este gran movimiento nacional, admiración de Europa, á las menguadas proporciones de un raquítico pronunciamiento.

»En otra ocasión quizá os aconsejaríamos que recogierais unánimes la provocación que se os dirige y el escarnio que se hace al gran principio de la Soberanía nacional, que el país ha proclamado. Pero en las

circunstancias actuales, llamado el pueblo en breve plazo á decidir de sus destinos en las urnas electorales, no queremos que se diga que apelamos á las armas para hacernos justicia cuando podemos y debemos esperarla del fallo de la opinión y por medio del sufragio.

»Nada de vanos alardes, pero nada tampoco de abatimientos, y sigamos todos el ejemplo de Cádiz, más heróica quizá cuando ha ido resuelta á los colegios electorales, á pesar del terror que querían infundirle sus procónsules, que cuando respondía denonada y victoriosa á las bárbaras agresiones de la unión liberal.

»Prescindiendo, pues, del Gobierno provisional, marchemos todos en apretada falange con fe y decisión bajo la bandera republicana á ejercer el derecho de votar que hemos conquistado á fuerza de abnegación y perseverancia para que salga triunfante de las urnas la República, que consagra la libertad y la justicia y con ella el juicio imparcial y severo de los tristes acontecimientos de Cádiz y Málaga.

»Madrid, 5 de Enero de 1869.» (Siguen las firmas de los individuos del Comité nacional que autorizan el otro manifiesto antes copiado.)

No podía pedirse testimonio más paladino de la triste equivocación de los que, fiados en la lealtad de aquellos revolucionarios de ocasión, habían hecho prevalecer los temperamentos de templanza cuando las Juntas eran árbitras de la situación y tenían á su lado

las simpatías del país, las fuerzas de la nación y seguramente la mayor parte de las del ejército.

Muchos de aquellos mismos hombres que creyeron más patriótico y más práctico entregarse á merced de los generales vencedores firmando aquella autorización al general Serrano, por la cual abdicaban no sólo su derecho y su soberanía sino la soberanía del pueblo que no era de ellos, declaraban en el manifiesto que antecede la inutilidad de tan bochornoso sacrificio y la difícil situación por él creada, pues habían de resignarse, vencidos, á aceptar la lucha electoral en las condiciones en que la presentaba el enemigo, cuando de seguir oportunamente otra conducta, se hubieran hallado en el caso de imponer condiciones como vencedores.

Si las desgracias de la patria, y aquella lo fué grande, pudieran alguna vez ser compensación para las amarguras de los que se vieron contrariados por haber querido evitarlas, al venir los hechos á darles la razón, nada pudo haber envanecido más á los partidarios de los temperamentos enérgicos que el de ver al lado de sus firmas en aquel documento las de los que con su debilidad habían hecho posible y necesaria aquella protesta, condenación terminante de aquella gran debilidad de disolver las Juntas.

Pero el marqués de Santa Marta, que perteneció siempre, como queda dicho, al número de los primeros, tenía demasiada elevación de sentimientos y mucho amor á la República para aprovecharse de aquel

desquite, y así en vez de engreirse con aquel triunfo de sus opiniones respecto de la conducta, unió sus esfuerzos á los de sus correligionarios para reparar en lo posible las consecuencias de imprevisiones en que no tuvo parte y que además había condenado y combatido.

Tal fué el fin en que inspiró su conducta, lo mismo en los trabajos electorales y de organización que en el ejercicio de su cargo, cuando favorecido por la confianza de sus correligionarios de Barcelona formó parte de la Asamblea Constituyente que inauguró sus sesiones el 11 de Febrero de 1869.





CAPÍTULO X

Política del gobierno provisional.—Las Constituyentes de 1869.—

Actitud de la minoría republicana.—Sublevación federal.—Política del marqués de Santa Marta en las Constituyentes y en el seno de su partido.—Se niega á firmar la Constitución de 1869.—Regencia de Serrano.—Tentativas para la elección de un monarca.—La guerra franco-prusiana como consecuencia de esas gestiones.—Actitud enérgica del marqués de Santa Marta para evitar la constitución de una República dietatorial, presidida por el general Prim.—Elección de D. Amadeo de Saboya para rey de España.—Borrascosas sesiones de Cortes.—Proposición Romero Robledo.—Asesinato del general Prim.—Condiciones en que terminaron su existencia las primeras Cortes de la Revolución.



MANTENER la libertad del cuerpo electoral, conseguir la unión de todos los liberales para salvar la obra revolucionaria y levantar un trono rodeado del necesario prestigio, tales eran los propósitos de que se declaró animado el gobierno provisional en un manifiesto que dirigió al país desde la *Gaceta* el 11 de Enero de 1869, cuatro días antes de verificarse las elecciones de la Asamblea Constituyente. A nadie pudo extrañar la nueva profesión de fe monárquica hecha por aquel gobierno al que la prudencia vedaba tales declaraciones, porque ya las había hecho más de una vez con escándalo de los que creían que la revolución simbolizaba el gobierno del pueblo por el pue-

blo; en cambio todos supieron á qué atenerse respecto de la imparcialidad que aquel poder de hecho había de observar en las elecciones.

Estas fueron realmente escandalosas y acreditaron al ministro de la Gobernación, Sr. Sagasta, de aprovechado imitador de los procedimientos electorales que en tiempos de doña Isabel habían utilizado los gobiernos moderados y unionistas. Enviáronse circulares reservadas á todos los gobernadores de provincias para que hiciesen guerra á las candidaturas carlistas, isabelinas y republicanas, y como era de esperar, el gobierno alcanzó la victoria. Los progresistas obtuvieron mayoría; la tendencia de Prim alcanzó muchos más diputados que la de Olózaga, y convencido éste de que no podría obtener la jefatura que codiciaba, renunció á toda intervención activa en la política y se atuvo á la embajada de España en Francia. Los unionistas consiguieron también muchas actas, pero desde luego quedaban supeditados á sus colaboradores en la obra de la revolución, lo que representaba un golpe de gracia para la candidatura del duque de Montpensier al trono y hacía inevitable para un plazo más ó menos breve la ruptura de la coalición con los progresistas. Algunos distritos se concedieron á los demócratas monárquicos capitaneados por Rivero y que obtuvieron pronto el refuerzo, más importante por su calidad que por su número, de la fracción economista, representada principalmente por los Sres. Moret, Rodríguez y Echegaray. Los carlistas tenían sobre veinte diputa-

dos y ninguno los partidarios de doña Isabel, aunque entre los unionistas se contaban bastantes alfonsinos.

Los republicanos alcanzaron el triunfo de setenta de sus candidatos, y este número, ya respetable, habría sido mucho mayor si el gobierno no hubiese extremado las coacciones en todas las provincias. Entre todos los diputados republicanos solamente dos, los señores García Ruiz y Sánchez Ruano, defendían el unitarismo; todos los demás eran partidarios del sistema federal.

La federación republicana, defendida ya muchos años antes de la revolución de Septiembre por los más avanzados demócratas, entre ellos por el marqués de Santa Marta, había ganado la opinión del pueblo con tan pasmosa rapidez, que sus mismos propagandistas quedaron llenos de asombro. La idea federal fué la bandera de la revolución de 1868 después de la caída de los Borbones: las masas necesitaban atenerse á una afirmación rotunda y vigorosa que permitiera sustituir con ventaja y para siempre lo que se había destruido, y acogieron la nueva fórmula de la libertad con manifestaciones de entusiasmo delirante. En las ciudades más importantes, donde no podía ejercerse de un modo tan descarado como en las localidades pequeñas la presión del gobierno, obtuvieron los federales votaciones grandísimas y su triunfo fué completo en Barcelona, Gerona, Zaragoza, Lérida, Huesca, Córdoba, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante y Valencia. Fueron elegidos diputados como republicanos federales, á más

de D. Enrique Pérez de Guzmán, que vino por Barcelona, Pí y Margall, Figueras, Castelar, Orense, Paul y Angulo, Soler, Bové, Gil Berges, Rio y Ramos, Garrido, Ferrer y Garcés, Benavent, Ruiz y Ruiz, Villanueva, Tutau, Hidalgo y Caballero, Noguera, Serraclará, Soler y Plá, Castillo, Carrasco, Joarizti, Guerrero, Guzmán y Manrique, Alsina, Moxó, Sánchez Yago, Pierrad, Palau y Genovés, Compte, Paul y Ricardo, Gastón, Díaz Quintero, Guillén, Jimeno, Castejón, Llorens, Caymó, Ametller, Roberto Robert, Sorní, La Rosa (D. Adolfo), Santa María, Rubio (D. Federico), Cabello de la Vega, Fantoni, Moreno Rodríguez, Albors, Pastor y Landero, García López, Rebullida, Pruneda, Castejón (D. Eladio), Bori, Salvany, Benot, Palanca, Abarzuza, Blanc, Maissonave y Suñer y Capdevila.

Inauguraron las Cortes Constituyentes sus sesiones el 11 de Febrero de 1869 y el día 22 se eligió la mesa definitiva, alcanzando la presidencia D. Nicolás María Rivero contra los votos de los republicanos. En el mensaje que leyó el general Serrano como presidente del gobierno se hacía una breve reseña de las dificultades con que el poder revolucionario había luchado antes de la reunión de las Cortes, contando entre aquellas la insurrección republicana de Andalucía, el motín carlista de Burgos, que había costado la vida al gobernador, la insurrección separatista que á raíz de la revolución estalló en la isla de Cuba y que estaba tomando alarmantes proporciones, y la penosa situación de la Hacienda.

No hay en la brillante historia legislativa de nuestra patria ejemplo de una Asamblea en que la elocuencia de los oradores y la majestad de los debates hayan alcanzado tanta elevación como en las Cortes Constituyentes de 1869, y todos reconocen que á la minoría republicana cupo principalmente la gloria de iniciar y sostener aquellas discusiones, comparables por su solemnidad y grandeza con las de la Asamblea inmortal que abolió en Francia los privilegios de la nobleza y el clero y formuló la declaración de los derechos del hombre. Manifestáronse en la tribuna de las Constituyentes oradores sin rival en el mundo, jurisconsultos, economistas y reformadores, cuyos nombres meses antes eran poco menos que ignorados, porque la suspicaz y cautelosa reacción borbónica había amordazado sus labios y tachado con el lápiz rojo del fiscal sus escritos. Los más grandes oradores de las fracciones monárquicas aparecían como empequeñecidos ante aquellos nuevos luchadores que se erguían como atletas invencibles en la tribuna parlamentaria. Combatieron los republicanos la política general del gobierno y le dejaron quebrantadísimo, sobre todo al censurar su ruinosa gestión financiera.

Las Cortes procedieron con gran actividad en sus trabajos. A principios de Marzo se eligió la comisión que había de redactar las bases constitucionales y que estaba formada por los Sres. Rios Rosas, Posada Herrera, Silvela (D. Manuel), marqués de la Vega de Armijo y Ulloa, en representación del partido unionista;

Martos, Moret, Becerra, Godínez de Paz y Romero Girón, como demócratas monárquicos, y Olózaga (don Salustiano), Aguirre, Mata, Valera (D. Cristóbal) y Montero Ríos, por el partido progresista. Los republicanos no quisieron intervenir en la comisión constitucional. Organizóse ésta bajo la presidencia de Olózaga, teniendo por vicepresidente á Rios Rosas y por secretarios á los Sres. Romero Girón y Moret, y dió por terminadas sus tareas en veinticinco días. La consignación de los derechos individuales luchó con la oposición resuelta de los unionistas y de algunos progresistas, mas se impuso al fin gracias á la energía con que la defendieron los demócratas. En la cuestión religiosa había varias tendencias; Montero Ríos y Aguirre, no obstante ser católicos, pasaban por la separación de la Iglesia y del Estado, pero los unionistas estaban decididamente por la unidad católica, y llegó á creerse inevitable la ruptura; pero al fin y mediante la intervención del gobierno se aceptó la Iglesia católica como privilegiada y mantenida por el Estado y al mismo tiempo se concedió una libertad condicional de cultos. También hubo divergencias acerca de la organización del poder legislativo; Martos, Valera y Mata querían la Cámara única; Becerra y Rivero que el Senado fuese elegido por los Ayuntamientos y Diputaciones de provincia, mientras Rios Rosas y Moret estaban por un Senado de clases. Todas estas fórmulas se desecharon al fin y se estableció un Senado que ni representaba intereses colectivos ni de la corona,

ni era elegido directamente por el pueblo; de modo que vino á ser un cuerpo inútil y embarazoso.

El 6 de Abril empezó á discutirse el proyecto constitucional y esta discusión motivó magníficos discursos, sobre todo al tratarse de la cuestión religiosa, en que Castelar pronunció una oración de elocuencia incomparable. Distinguiéronse mucho en el curso de este debate el canónigo Manterola, Pí y Margall, Echegaray y Montero Ríos. Pasóse luego á discutir la forma de gobierno, haciendo la minoría republicana una campaña brillantísima, y al fin se votó la monarquía por 181 votos contra 64 en pro de la República federal y dos en favor de la unitaria. Por entonces abandonó el ministerio de Ultramar D. Adelardo López de Ayala que aprovechó esta ocasión para pronunciar un discurso violentísimo contra la democracia y el pueblo. Era el Sr. Ayala uno de los más caracterizados unionistas, y su agresivo discurso, que trató de neutralizar el presidente del Consejo dirigiendo á los republicanos frases de elogio, fué una demostración palmaria de que la unión liberal empezaba á renegar de la revolución al ver que iba adquiriendo un matiz mucho más avanzado del que se proponían imprimirle los generales desterrados en Canarias. Aún subsistió la conciliación entre unionistas y progresistas, pero todo indicaba que había de durar poco tiempo.

La Constitución fué aprobada el 1.º de Junio de 1869 por 214 votos contra 55. El marqués de Santa Marta, que hizo como diputado en estas Cortes una campaña

enérgica, de que en el siguiente capítulo se da cuenta detallada, se negó á firmar la Constitución y lo mismo hicieron D. Francisco Pí y Margall y D. Adolfo Joarizti, oponiéndose al acuerdo, en que no tomaron parte, de sus compañeros de minoría, que haciendo la salvedad de que procedían, no como republicanos, sino como individuos de la Asamblea, autorizaron con sus firmas el Código fundamental.

Tuvo en cuenta el marqués de Santa Marta razones de gran peso para negarse á firmar la Constitución. No desconocía que ésta marcaba un progreso de entidad con relación no sólo á la de 1845, sino al proyecto presentado diez años más tarde á las Cortes progresistas; apreciaba como grandes conquistas en sentido liberal la consignación de los derechos individuales y el artículo que declaraba reformable el Código fundamental cuando así lo acordasen las Cortes; pero en primer lugar no se creía él, ferviente y convencido republicano, en el caso de firmar ni como representante del país, ni en otro concepto cualquiera, una Constitución monárquica, y por otra parte, siendo federal, no podía en modo alguno estar conforme con el espíritu centralizador de esa Constitución que reducía las provincias y los municipios á sucursales del gobierno, siguiendo las corrientes del doctrinarismo francés. Antes que realizar un acto del que no estuviese plenamente satisfecho, habría renunciado cien veces la investidura de diputado, que es el cargo que estima más honroso de cuantos pueden ejercerse en la vida pública.

Desde el momento en que existía una Constitución ya no tenía razón de ser el gobierno provisional creado á raíz del movimiento revolucionario. Por otra parte, las gestiones realizadas hasta entonces por Prim y sus amigos en busca de monarca, no habían dado resultado; al duque de Montpensier le defendían solo los unionistas, y la situación era de hecho una República unitaria á pesar de todas las ficciones legales. Se pensó en nombrar un directorio formado por Serrano, Prim, Topete, Olózaga y Rivero; pero esta idea presentaba grandes inconvenientes, no siendo el de menos monta el artículo 33 de la Constitución. Se optó al fin por la regencia única, y el 15 de Junio se nombró regente del reino al general Serrano sin concedérsele los derechos de veto ni el de sanción de las leyes. Pasó el general Prim á la presidencia del Consejo, conservando el departamento de la Guerra, y hubo modificación ministerial, aunque manteniéndose aún la conciliación, no obstante los esfuerzos de Rivero, que deseaba romperla, para que se diese intervención en el gobierno al elemento democrático.

Mientras tanto el naciente partido federal, que era á la sazón el más fuerte y poderoso de España, comenzó á organizarse de acuerdo con la lógica de sus principios en comités municipales y provinciales, de los que se pasó enseguida á los pactos para constituir grandes regiones, que pudieran un día ser Estados de la federación. El primer pacto fué el celebrado en Tortosa el 18 de Mayo de 1869 por los representantes

de los comités federales de Aragón, Cataluña, Valencia y las Baleares con objeto de reconstituir democráticamente la antigua coronilla de Aragón. Siguió á este pacto el de Córdoba, constituido por las actuales provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia el día 12 de Junio; á este, tres días después, el pacto de Valladolid, firmado por representantes de todas las provincias de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, León y la provincia de Albacete. El 25 de Junio se celebró el pacto de las provincias Vascongadas y Navarra en la villa de Eibar, y por fin el 18 de Julio se firmó en la Coruña el de Asturias y Galicia. Quedaba, pues, el partido federal organizado en toda España por medio de comités locales y provinciales y por cinco pactos regionales. Esta organización era aún bastante defectuosa, pues no sólo había gran desproporción entre los cinco Estados, sino que las provincias agrupadas en cada uno distaban de tener comunidad de aspiraciones é intereses.

El marqués de Santa Marta apoyó calurosamente este movimiento organizador, pero sin darle más alcance que el que tenía en realidad; el de preparativo para la lucha contra la monarquía y no el de bosquejo ó demarcación de los futuros Estados de la federación española. Sólo desde aquel punto de vista encontró aceptable la unión en el mismo pacto de Andalucía y Extremadura, regiones ambas en las que con incansable actividad había trabajado para la organización de los elementos federales. En Córdoba, su ciudad natal,

el partido republicano era poderoso y grande, y esto se debía en mucha parte á los esfuerzos del Marqués, quien además había agitado mucho la opinión en Extremadura, principalmente en Cáceres, promoviendo reuniones públicas, organizando y presidiendo meetings y excitando incesantemente á las masas populares para que formasen las huestes de la República federal. No hay para qué decir que el marqués de Santa Marta, aun contando con el apoyo de otros resueltos propagandistas, hubo de luchar con serios inconvenientes para organizar el partido, pues nada hay tan difícil de vencer como la inercia de las muchedumbres; pero en su carácter se han unido siempre á la energía y la fogosidad una constancia á toda prueba, y bien pronto el partido federal de Cáceres tuvo los elementos necesarios para contrabalancear la influencia de los gobiernos de la monarquía.

Preocupaba seriamente á los generales Serrano y Prim el imponente alarde que de sus fuerzas venía haciendo el partido federal, y no queriendo transigir con la idea de que el movimiento que ellos habían hecho en sentido monárquico viniese á convertirse en una revolución republicana, buscaron medios para dar un golpe de gracia á los elementos avanzados antes de que el creciente oleaje de su propaganda anegase aquella debil é indefinida situación. Encontró el gobierno el pretexto que buscaba en el hecho de haberse alzado en armas algunas partidas carlistas, y obtuvo de las Cortes la suspensión de las garantías indivi-

duales y la aplicación de la bárbara ley de orden público de 1821.

Fué triste el espectáculo que dió aquel gobierno publicando la ley marcial á los tres meses de haberse votado una Constitución democrática que garantía en su título primero los derechos inherentes á la personalidad humana; pero más lamentable aún fué la aplicación que hizo de esas facultades, que en mala hora le fueron concedidas. Sagasta, que tuvo el poco envidiable valor de manifestar que los derechos individuales le pesaban como una losa de plomo, dejó entonces, á pesar de su significación progresista, muy atrás á los hombres de la unión liberal en materia de arbitrariedades y atropellos: Prim, como si se mostrara deseoso de emular las crueldades de O'Donnell y Narvaez, hizo fusilar en Montealegre á todos los individuos de una partida carlista, algunos de los cuales ni aun siquiera llevaban armas, y esta serie de ejecuciones produjo impresión penosísima. Los republicanos, contra quienes principalmente se había obtenido la suspensión de las garantías individuales, fueron en todas las poblaciones en que tenían alguna fuerza, objeto de vejámenes y atropellos que les exasperaron, forzándoles á acudir á las armas. Ni en Madrid podían organizarse ni expresar sus ideas con la libertad garantizada en las leyes, pues el gobierno puso á las órdenes del señor Sagasta una banda de desalmados, que fué bautizada con el gráfico nombre de *partida de la porra*, y cuyo objeto era apalear á los enemigos de la situa-

ción, especialmente á los republicanos, cuando faltaban medio legales para perseguirles. Cometió esta partida verdaderos crímenes; lo fué muy grave el asesinato del infeliz Azcárraga, acto odioso, á pesar del cual siguió en pie aquella partida de facinerosos policiacos, y merecieron general reprobación los asaltos dados á redacciones de periódicos federales, que tuvieron necesidad de rechazar á tiros á los agresores, y la clausura violenta de un teatro de Madrid, en que se representaba una alusión á la peregrinación del gobierno en busca de candidatos para el trono.

Creía el marqués de Santa Marta que no era aquella la ocasión más oportuna para que el partido federal respondiese á las provocaciones del gobierno de la regencia, apelando á las armas, pues faltaban medios para organizar la lucha en buenas condiciones, y era preferible ir acumulando elementos para el momento favorable. Por desgracia los republicanos, exasperados hasta el último límite del sufrimiento por los atropellos del gobierno y temerosos de que la suspensión de las garantías constitucionales fuera el primer paso en la senda de una reacción intolerable, se lanzaron á la pelea casi sin plan, levantándose hoy en un punto, mañana en otro, según lo aconsejaban las circunstancias locales, y así dieron facilidades al gobierno para que fuese apagando la insurrección allí donde se presentaba, utilizando sucesivamente las pocas tropas de que á la sazón disponía. Empezó la insurrección en los primeros día de Octubre de 1869 en la provincia

de Barcelona, y se fué extendiendo por el resto de Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía y la provincia de Salamanca. Ya iniciada la insurrección mucho antes y en condiciones más desfavorables de lo que se creía, Orense la defendió calurosamente, Castelar y Figueras la apoyaron primero y trataron de eludir responsabilidades después; Pí y Margall estimó que no era oportuna, pero la defendió, y el marqués de Santa Marta, que á la sazón se hallaba en el extranjero, no obstante su convicción de que el momento había estado mal escogido, porque era el gobierno el que deseaba y aun necesitaba la lucha en aquellas circunstancias, no escatimó simpatías de toda especie para el movimiento, que defendió luego en las Cortes con verdadera energía, y habría tomado parte en el mismo organizando y dirigiendo fuerzas, si no se hubiese persuadido bien pronto de que el desacierto que se observó desde los primeros momentos en la insurrección y la falta de simultaneidad de las sublevaciones de ciudades, malograban aquel gigantesco cuanto desordenado esfuerzo del partido federal.

Aquella insurrección, formidable por los elementos que puso en juego, pero débil por la falta de dirección y de plan, reunió en pocos días cerca de cincuenta mil combatientes, lo que llenó de terror y asombro al gobierno, que jamás hubiera podido creer en la posibilidad de tan tremendo alarde de fuerza en un partido que acababa de hacer su aparición en la arena política. En Zaragoza y Valencia los federales dieron prue-

bas de un valor que rayaba en heroismo, rechazando victoriosamente muchos ataques de las tropas; las partidas que se alzaron en Alicante y en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga dieron mucho que hacer al ejército y otro tanto ocurrió con las fuerzas federales alzadas en armas en Cataluña. La victoria del gobierno fué relativamente fácil, pues sólo hubo de luchar con movimientos aislados y sucesivos y con partidas que, aun siendo muchas en número, tenían cada una escaso número de hombres. Entre los muchos abusos que cometían las tropas, excitadas por el gobierno, se contó el cruel martirio del diputado federal D. Rafael Guillén que mandaba una partida, y que después de hecho prisionero fué sacrificado á bayonetazos; y la muerte de Froilán Carvajal que capitaneaba algunas fuerzas federales en la provincia de Alicante y que después de haber entregado las armas bajo las seguridades que, mediando su palabra, le dió el jefe de la columna enemiga de que el gobierno indultaba á todos, fué inmediatamente fusilado.

Una vez terminada la insurrección, Prim reconoció públicamente la gran vitalidad y fuerza del partido republicano al que poco antes afectaba negar importancia; pero lejos de sentirse inclinado á la República, que iba siendo ya una solución necesaria por los continuos fracasos que se experimentaban en la ingrata tarea de buscar rey, alegó que el último movimiento había enemistado al ejército con las soluciones republicanas, en las que ya no cabía pensar. En cambio se

mostró muy deferente con los diputados federales, pues no obstante saber á ciencia cierta que muchos de ellos habían tomado parte activa en la insurrección con sus excitaciones, sus recursos y aun sus personas, no mostró empeño en perseguirles y aun saludó con frases afectuosas á la minoría cuando, á poco de vencido aquel gran movimiento, volvió á presentarse en las Cortes. Esta conducta honrosa para Prim y que atestiguaba su gran sagacidad política, contrastó con su funesto empeño de provocar la lucha por darse la triste satisfacción de postrar las fuerzas de un partido generoso y viril que era la mejor garantía y el más firme sostén de la obra revolucionaria.

No se hacía, con todo, el gobierno ilusiones sobre lo decisivo de su triunfo; sabía que los republicanos tenían fuerzas bastantes para rehacerse de su pasajero quebranto y volver de nuevo al combate, y redobló sus gestiones en busca de un rey. Los progresistas y principalmente Olózaga seguían teniendo por candidato á D. Fernando de Portugal, mas este señor no aceptaba la corona sino á condición de que se votase una ley que hiciera imposible la fusión de los reinos de Portugal y España, y como desde ese momento á ningún objeto respondía su candidatura, se desistió de ella después de no pocas tentativas. Entonces se hicieron trabajos para que aceptase el trono D. Amadeo de Saboya, hijo segundo de Víctor Manuel, rey de Italia; mas por lo pronto no tuvieron éxito las negociaciones, y así Prim como Ruiz Zorrilla, atendiendo á

indicaciones del mismo Víctor Manuel, pensaron ofrecer la corona al duque Tomás de Génova que tenía á la sazón quince años y que pareció dispuesto á aceptar, si bien su candidatura fracasó por la oposición resuelta de los unionistas. Seguían éstos patrocinando al duque de Montpensier y aun el mismo Sagasta llegó á inclinarse á este candidato; pero el ingreso de Rivero y Martos en el gobierno de la regencia á fines de 1869 como representantes de la democracia, fué un serio obstáculo para este proyecto, que fracasó al fin de un modo definitivo en la célebre sesión del 19 de Marzo de 1870, en que Prim rompió la coalición de progresistas y unionistas con la frase *¡Radicales, á defenderse! El que quiera que me siga*. Poco después se efectuó el desafío de Montpensier con el infante don Enrique de Borbón que le había dirigido algunas ofensas; murió éste en el duelo, y la impresión que la desgracia produjo fué causa de que entre los mismos unionistas perdiese terreno la candidatura del duque.

La ruptura de la conciliación no impidió que el general Serrano continuase al frente de la regencia, no obstante ser ya de hecho una figura decorativa. La fuerza y el prestigio estaban en aquella situación de parte del general Prim á quien sus compañeros de gabinete llegaron á autorizar para que buscase rey; de modo que llegó á desempeñar el extraño papel de proveedor del trono de España. Aún pensaban algunos diputados, entre los que se contaban el general Contreras y D. Francisco Salmerón, en que se ciñese la

corona el general Espartero, pero este respetable caudillo de las libertades públicas, que contaba ya cerca de ochenta años, dió una muestra de buen sentido apresurándose á desautorizar su candidatura. El día 11 de Junio hizo el general Prim ante las Cortes una historia de las gestiones que había hecho en busca de monarca, confesando que era muy difícil hacer un rey; pero al observar que los republicanos sacaban partido de esta frase, añadió que era aún más difícil hacer República. En esta afirmación se mostraba un tanto irónico el general Prim, pues lo cierto era que si tanto él como el Sr. Ruiz Zorrilla hubieran tenido entonces inclinación á esta forma de gobierno, la hubieran impuesto sin luchar por lo pronto con graves dificultades. Lo difícil habría sido determinar quién iba á ser el presidente; pues el general Serrano, acostumbrado á desempeñar desde la revolución los primeros puestos, desearía la presidencia de la República, y como por su parte el general Prim no había de cederle con gusto tan elevada magistratura, que por su misma naturaleza presentaba un carácter en cierto modo definitivo, no parece aventurada la aserción de que el principal obstáculo para que los hombres del gobierno de la regencia se inclinasen á la República, fué el antagonismo entre Prim y Serrano.

Poco importa que ese antagonismo estuviera disfrazado entonces con muestras de amistad cariñosa; esos dos generales simbolizaban las dos tendencias que más adelante habían de alternar en el poder, con ó sin mo-

narquía. Estaban de parte de Serrano muchos unionistas y no pocos progresistas de lo que pudiera llamarse la derecha del partido; entre ellos Sagasta, que no podía ver con gusto la predilección que mostraba Prim hacia Ruiz Zorrilla á quien había elevado á la presidencia del Congreso á principios de 1870, cuando Rivero pasó al ministerio de la Gobernación. De parte del general Prim estaban los elementos avanzados del progresismo y los demócratas que habían aceptado la monarquía.

Dentro de una situación monárquica el contrapeso entre ambas tendencias era posible, mas no habría ocurrido lo propio en la República, porque aquí había necesidad de contar con un factor poderosísimo: el partido federal. Por esto el marqués de Santa Marta, lejos de acomodarse á la corriente que seguían hombres influyentes de su agrupación, creyó siempre que era un error gravísimo apoyar la candidatura de Prim para la presidencia de la República é hizo á este general una ruda campaña dentro y fuera de las Cortes. Creía el marqués de Santa Marta que ceder á Prim la jefatura del partido republicano equivaldría á una vergonzosa confesión de impotencia en los propagandistas de los nuevos ideales, traería como resultado práctico el caudillaje militar de que se resienten algunos países del nuevo continente y supondría además la renuncia de los principios federales con que Prim no transigía y que el Marqués estaba resuelto á no abandonar jamás, convencido de que una República unitaria no es más

que una monarquía con rey electivo y amovible. El partido federal era entonces el más poderoso de España, y una República centralizadora habría provocado inmediatamente la guerra civil. Por otra parte, no cabía dudar de que en el momento en que Prim fuese elevado á la presidencia de la República, así el general Serrano como los elementos que tenía de su parte y otros muchos que se le agregarían habían de trabajar por la restauración borbónica.

La dificultad principal del problema, en sentir del marqués de Santa Marta, estaba en cuestiones de personas. Todo parecía invitar al establecimiento de la forma republicana; pero los hombres que habían iniciado con tendencias monárquicas el movimiento insurreccional de Septiembre de 1868 y que habían visto con disgusto y con asombro convertirse á poco ese movimiento en una gran revolución, no tenían el patriotismo ni el desinterés necesarios para ceder el gobierno á los representantes genuinos de la democracia. Habían conseguido atraer á algunos demócratas con los halagos del poder, y en más de una ocasión se propusieron comprar la apostasía de los más caracterizados federales al precio de algunas carteras; pero estas tentativas, que se estrellaron ante la rectitud de los hombres del federalismo, no habrían resuelto la cuestión en el sentido que deseaban Prim y los suyos, porque las masas hubieran seguido á quien enarbolase la bandera federal y no habían de faltar propagandistas.

Quizá pesando estas dificultades ó ya por arraigadas convicciones monárquicas, es lo cierto que Prim, usando de las atribuciones que le habían conferido sus compañeros de gabinete con el asentimiento de la mayoría de las Cortes, siguió buscando rey para España en diversas naciones y creyó encontrar candidato apetecible en el príncipe alemán Leopoldo de Hohenzollern Sigmaringen que, aunque católico, estaba en muy buenas relaciones con el rey protestante Guillermo de Prusia. Aceptó el príncipe Hohenzollern y entonces surgió el conflicto entre Prusia y Francia, pues Napoleón declaró que jamás permitiría la reconstitución del imperio de Carlos V.

Muchos creyeron ver en la candidatura del príncipe Hohenzollern una habilísima combinación diplomática de Prim para abatir á Francia; pero ningún fundamento serio autoriza esta idea y todo induce á creer que el conflicto estalló contra la voluntad de Prim y por inadvertencia suya; pues no sólo había marchado de acuerdo con Napoleón mientras hizo trabajos revolucionarios, sino que en todas sus gestiones en busca de monarca después de la revolución de Septiembre buscó siempre la aquiescencia del emperador, quien abusó de un modo harto molesto en esa especie de intervención en nuestros asuntos que se le pedía por los hombres del gobierno provisional. Ciertó es que la retirada de Prim en la empresa de Méjico le había granjeado en 1862 la enemistad de Napoleón, pero después hizo toda clase de esfuerzos para ganar su simpatía, y por

otra parte ningún objeto serio podía proponerse al plantear con la candidatura de Hohenzollern una guerra europea de éxito muy difícil de prever. Bien puede asegurarse, por consiguiente, que en esta ocasión pecó más el general Prim de temerario é irreflexivo que de hábil.

Sea como quiera, la guerra franco-prusiana, que se consideraba ya muy probable desde 1866, se hizo inminente por las gestiones de Prim cerca del príncipe Hohenzollern y estalló merced á las arrogantes imposiciones de Napoleón, que parecía muy seguro de la superioridad militar de los franceses sobre los prusianos. Planteado el conflicto, el príncipe Hohenzollern renunció su candidatura al trono de España, pero las relaciones entre Francia y Prusia se habían agriado de tal modo que la guerra, deseada por ambos países, estalló el 19 de Julio en que la declaró el Parlamento francés. Los Estados alemanes hicieron enseguida causa común con Prusia, y harto conocidos son los detalles de esta lucha tremenda que dió al traste con el imperio de Napoleón y costó á la Francia la pérdida de dos provincias y una indemnización de cinco mil millones de francos á sus vencedores.

Proclamada en Francia la República el 4 de Septiembre de 1870 y distante aún de su término la guerra con Prusia, interesaba mucho á los franceses procurarse el apoyo de nuestro país, y con este objeto trabajaron cerca del gobierno español para que les auxiliase con algunos cuerpos de ejército, y más tarde

con el general Prim en el sentido de que estableciese la República en España como base de aquella alianza ofensiva y defensiva. Prim rechazó estas proposiciones, y entonces uno de los comisionados franceses, que era el conde de Keratry, quiso ponerse de acuerdo con los hombres más caracterizados del partido federal ofreciéndoles el resuelto apoyo de Francia para una insurrección que acelerase el triunfo de la República española; pero estas negociaciones no tuvieron resultado.

La interinidad era ya insostenible; el ministerio Prim estaba seriamente expuesto á una derrota parlamentaria si no se resolvía pronto la situación en sentido monárquico ó republicano; multiplicáronse, pues, los esfuerzos en busca de rey, y por fin consiguió el gobierno que aceptase la candidatura para el trono de España el príncipe D. Amadeo de Saboya, que un año antes había rechazado este ofrecimiento. El día 3 de Noviembre el general Prim hizo la presentación de esa candidatura á las Cortes, manifestando que las sesiones se suspenderían por algunos días á fin de que los diputados monárquicos tuviesen tiempo para adoptar una resolución, y añadiendo por su cuenta que la candidatura citada contaba con el apoyo del ejército y del pueblo. La minoría federal presentó una proposición de censura al gabinete, pero esa proposición fué desechada por 142 votos contra 44, lo que en cierto modo prejuzgaba ya la cuestión. Durante los días en que estuvieron cerradas las Cortes dedicáronse Prim, Sagas-

ta y Ruiz Zorrilla con extraordinaria actividad á la tarea de zurcir voluntades en favor de aquel candidato, á quien nadie conocía, ni aun sus mismos patrocinadores, y lograron la adhesión de unionistas muy significados. La votación de rey se verificó el 16 de Noviembre; los diputados votantes fueron 311 y los votos en favor de D. Amadeo de Saboya 191, bastante menos de las dos terceras partes. Por la República federal votaron 60 diputados; por el duque de Montpensier 27; por el duque de la Victoria 8; por la República unitaria 3; por la duquesa de Montpensier 1; por D. Alfonso de Borbón 2, que fueron los Sres. Otero y conde de Iranzo, y en blanco 19, entre los que figuraban Cánovas del Castillo, Elduayen, Alvarez Bugallal, Silvela (D. Francisco) y Lasala.

Quedó, pues, elegido rey de España D. Amadeo de Saboya y se nombró una comisión de veinticuatro diputados que en unión del presidente, vicepresidentes y secretarios de las Cortes debía pasar á Italia para ofrecer la corona al duque de Aosta. Enseguida el presidente de la Cámara, Sr. Ruiz Zorrilla, pronunció un discurso manifestando que España era eminentemente monárquica, que el elegido era buen hijo, buen padre y buen esposo, y que sólo se le achacaban dos defectos: el primero ser extranjero y el segundo no ser católico. En cuanto á la primera tacha manifestó el orador que varios países debían su prosperidad á reyes extranjeros, y en cuanto á la segunda, afirmó que don Amadeo era profundamente católico, pero sin fanatis-

mo. Como interrumpiesen al Sr. Zorrilla varios diputados federales, llamó al orden á toda la minoría republicana por primera vez, y añadió: «El presidente hará su discurso porque tiene el deber de hacerlo; yo debo este puesto á la mayoría de la Cámara, y no es ciertamente la minoría republicana en el día que hemos elegido rey la que me ha de echar de este sitio á mí, que soy monárquico.»

Prosiguió el Sr. Ruiz Zorrilla su discurso, afirmando que más habían contribuido á derribar la tiranía y salvar la libertad en Italia, Hungría y Francia los hombres que fueron á la tribuna para defender sus doctrinas, que los que permanecieron en la emigración, protestando y buscando medios de fuerza, y terminó haciendo un llamamiento á todos los partidos para que reconociesen la legalidad.

Suspendiéronse las sesiones de Cortes; marchó á Italia la Comisión parlamentaria, presidida por don Manuel Ruiz Zorrilla, y obtuvo de D. Amadeo la aceptación de la corona de España. La minoría federal que venía haciendo una campaña brillantísima contra la elección de rey, la reanudó con nuevos bríos cuando volvieron á abrirse las Cortes á mediados de Diciembre. El gobierno deseaba que las Constituyentes terminasen cuantos antes sus tareas, y como faltaban varias leyes importantes que discutir y aprobar, inspiró al Sr. Romero Robledo una proposición, en virtud de la cual debían celebrarse dos sesiones diarias, incluso en los días festivos, hasta el 30 de Di-

ciembre, y que en el caso de que en esta fecha no estuviesen discutidos los proyectos de ley, el gobierno podría plantearlos y hacerlos respetar como leyes, sin perjuicio de presentarlos á la aprobación de las Cortes inmediatas. Esta proposición era una verdadera enormidad, sobre todo en su última parte, en que violaba abiertamente las disposiciones constitucionales; pero el gobierno estaba resuelto á imponerla y fueron de ver los esfuerzos que ministros demócratas como Rivero y Echegaray hicieron para que se consumara á toda prisa aquel golpe de Estado, llegando hasta el inconcebible extremo de decir que aun cuando lo propuesto no fuera estrictamente legal, se justificaba en nombre de la salvación de la patria. El presidente de las Cortes, Sr. Ruiz Zorrilla, hizo por su parte cuanto pudo, á fin de que las minorías no pudiesen ejercitar sus derechos, y se mostró intolerante en grado sumo con los republicanos, á quienes negaba arbitrariamente la palabra, interpretando á su manera el reglamento, y cuando esa intencionada interpretación no era posible, les interrumpía á cada instante y aprovechaba toda coyuntura para llamarles al orden por primera, segunda y tercera vez, á fin de reducirles al silencio. El marqués de Santa Marta, tanto por su modestia, que le ha aconsejado siempre huir de exhibiciones parlamentarias, no obstante la fluidez, elegancia y facilidad de su oratoria, como por su afición á las soluciones prácticas y al aprovechamiento útil del tiempo, no pronunciaba discursos sino cuando creía

de todo punto justificada su intervención en los debates, y estimándolo así en esta ocasión, en que tocaba á la minoría republicana salir á la defensa de las leyes y de los principios liberales atropellados por el gobierno, pidió varias veces la palabra y aun exigió, apoyándose en el Reglamento, que se le concediese el uso de su derecho; pero ya no había en el último período de unas Cortes que se iniciaron con tanta brillantez, más reglamento que el capricho del gobierno y de la presidencia, y como sabían que el Marqués no retrocedía nunca en su propósito de decir verdades y era hombre que hablaba con energía y sostenía con igual entereza lo dicho, ahogaban su voz contra toda prescripción reglamentaria, como ocurrió en la sesión de 21 de Diciembre. La misma conducta se siguió con los Sres. Figueras, Castelar, Díaz Quintero, García López y otros diputados republicanos. En cambio daba cierta latitud á la oposición conservadora, pues se esperaba que más ó menos pronto reconociese la monarquía de D. Amadeo. Fué de verdadera sensación el discurso que en la sesión del día 23 pronunció el brigadier Topete, manifestando que los hombres del gobierno seguían la misma conducta que los moderados, pues violaban los fueros del Parlamento y se proponían hacer jurar á D. Amadeo una Constitución que habían rasgado á trueque de elevarlo al trono quince días antes. Ríos Rosas, Cánovas del Castillo, Silvela, Calderón Collantes y los demás conservadores, no podían menos de convenir con los republicanos en que

la proposición Romero Robledo era un verdadero golpe de Estado; pero al fin se aprobó por 137 votos contra 14, que fueron de los conservadores, absteniéndose los republicanos.

Poco después, el 27 de Diciembre, fué víctima el general Prim de un atentado infame, que ha quedado impune y á consecuencia del cual falleció á los tres días. La opinión pública reprobó con horror aquel crimen, acerca de cuyos autores no hay sino presunciones más ó menos fundadas, y sobre las cuales no hay para qué decir cosa alguna, toda vez que aquellos á quienes la conciencia popular acusaba, no pertenecían ya al mundo de los vivos. El marqués de Santa Marta, que había combatido con energía y decisión la política de Prim, al que no obstante profesaba gran estimación personal, censuró con indignación profunda aquel bárbaro asesinato, que privaba á la patria de un servidor valeroso y á la revolución de una de sus primeras figuras y de sus más firmes garantías.

Tristemente se inauguraba, pues, la monarquía democrática votada por las Cortes. Tenía en su contra á los republicanos, á los carlistas y á muchos de los hombres de la unión liberal; además, la muerte del jefe militar del partido progresista, le privaba de su principal apoyo. Las Cortes Constituyentes, que comenzaron sus tareas con debates de importancia incomparable, merced á las cuales se tradujeron en leyes muchos principios democráticos, las terminaba votando una monarquía raquíta, sin condiciones de

arraigo y que no podía menos de ser una transición ó para la República ó para la restauración de los Borbones.

De todas suertes, tuvieron aquellas Cortes la gloria de llevar por primera vez á nuestras leyes el espíritu inmortal de la democracia, y de consignar de un modo explícito los derechos individuales en la Constitución que votaron, y que á despecho de sus restricciones, basta para justificar y ensalzar la revolución de Septiembre.





CAPÍTULO XI

Campaña parlamentaria del marqués de Santa Marta en las Constituyentes de 1869.—Interpelación acerca de un atentado contra los derechos individuales.—Interpelación al ministro de Marina sobre un atentado contra la libertad de conciencia de los operarios del arsenal del Ferrol.—Discurso combatiendo el presupuesto de la Guerra.—Interpelación sobre los malos tratamientos sufridos por los republicanos presos en la Carraca.—Discurso combatiendo la consignación de fondos secretos.—Preguntas al ministro de Hacienda.—Intervención en el proyecto de ley electoral.—Cuestión sobre incompatibilidades de empleados públicos.—Nuevas interpretaciones y preguntas: incidente parlamentario con los Sres. Prim y Rivero.—Nuevas preguntas é interpelaciones.—Resumen.



EL marqués de Santa Marta, hombre práctico por excelencia y enemigo resuelto de las corruptelas del parlamentarismo que extreman hasta un punto desastroso la preponderancia de la palabra en la dirección de las sociedades, se ha mostrado siempre refractario á los discursos, por más que las exigencias de la vida política le hayan obligado muchas veces á dirigir su voz, ya á las muchedumbres, ya á los Parlamentos. No le impulsan ciertamente á esa su esquivez hacia la oratoria y los oradores, deficiencias de expresión ni falta de condiciones personales para brillar en las lides de la elocuencia: hijo del Mediodía, concibe

con rapidez y habla con extremada soltura y facilidad; su temperamento vivo é impresionable, unido al calor de sus convicciones, da á sus discursos un carácter impetuoso; además, no sabe ni quiere decir las cosas á medias; de suerte que más bien le sirve de traba la vehemencia de su temperamento que esa frialdad y timidez que imposibilitan á muchos hombres para exponer sus ideas con lucimiento ante el público. Cuando cree inspirados en la razón y la justicia sus ataques, los formula sin contemplaciones, porque es de los que estiman que el mal debe combatirse con energía y á cara descubierta; pero no habla sino movido por el sentimiento de una necesidad imperiosa y jamás ha buscado por este camino exhibiciones, aun cuando tiene condiciones poco vulgares para lograrlas con más éxito que otros muchos. Para él la oratoria no es fin, sino un medio que requiere mucha prudencia y circunspección; pues cree difícil que la palabra que innecesariamente se prodiga sea sincera ni honrada, y nunca ha encontrado verdaderos caracteres entre los que lo fian todo á la elocuencia.

En las primeras Cortes de la revolución hizo una campaña parlamentaria de verdadero mérito en defensa de sus ideales y de su partido y se dió á conocer como político de elevadas miras. A sus discursos contra la conducta del general Prim se debió en gran parte que muchos elementos republicanos no efectuaran el movimiento de aproximación á la regencia que fué de temer á mediados de 1870 y que habría debilitado

grandemente al partido federal. A continuación se da una idea de la intervención que en los debates parlamentarios de las Constituyentes tuvo el marqués de Santa Marta, y se le encuentra siempre en la brecha, trabajando por el bien de su patria y por el triunfo de sus principios, con la firmeza, la constancia y el desinterés que ha mostrado en su larga historia política.

Se opuso resueltamente á firmar la Constitución discutida y aprobada por las Cortes por establecerse en ella la monarquía y la centralización del poder. En esta enérgica decisión sólo tuvo dos compañeros: don Francisco Pí y Margall y D. Adolfo Joarizti.

INTERPELACIÓN DE UN ATENTADO

CONTRA LOS DERECHOS INDIVIDUALES

Las autoridades subalternas, inspirándose en la conducta del gobierno y en la seguridad de que sus atropellos siempre que fueran contra los republicanos habían de quedar impunes, cometían toda clase de arbitrariedades. Al marqués de Santa Marta le escribieron varios de sus correligionarios de la provincia de Cáceres, en que tantos esfuerzos había hecho para organizar las fuerzas republicanas, rogándole elevase su voz en las Cortes para denunciar un grave atentado contra los derechos individuales cometido por el alcalde de Villa del Rey. Con este motivo pronunció en la sesión del 12 de Junio las siguientes frases:

«He pedido la palabra para preguntar al señor ministro de la Gobernación si tiene conocimiento de un hecho escandaloso, de un atentado contra los derechos individuales y contra la libertad de reunión. En el pueblo de la Villa del Rey, en la provincia de Cáceres, se presentaron, hace ya algunas semanas, individuos del comité de aquella villa á pedir permiso al alcalde para hacer una manifestación pacífica. El alcalde les pidió que se lo manifestaran por escrito, y cuando volvieron á hacerlo ya no encontraron en su casa al alcalde.

A las doce de la noche se presentó éste con el secretario del Ayuntamiento y la fuerza de carabineros que allí había, cercaron la casa del presidente del comité, que se llama D. Juan Tejado, le hicieron levantar de la cama y lo llevaron preso. En aquel momento de atolondramiento natural en la familia, se abrasó un niño de dos años que está sufriendo grandes dolores. A los dos días se puso en libertad al referido presidente del comité; pero el alcalde ha conservado en su poder la bandera y los carteles que tomaron también de casa de dicho presidente, y el señor ministro de la Gobernación comprenderá que el modesto ciudadano de que se trata no ha de encontrarse con fuerza bastante para hacer que se castigue al alcalde monárquico por el abuso de autoridad que con aquel ha cometido.

Ruego, pues, á S. S. se fije bien en esto, y que si no tiene conocimiento del hecho, se informe y haga que se castiguen, como merecen ser castigados hoy,

los abusos de autoridad con mucho más rigor que los excesos de la libertad.»

Contestó el ministro de la Gobernación, Sr. Sagasta, que el poder ejecutivo no tenía conocimiento del hecho y que se enteraría del mismo para oponer al alcalde el oportuno correctivo si los hechos habían ocurrido del modo indicado por el marqués de Santa Marta; pero no obstante esta promesa, ó no se cuidó el Sr. Sagasta de averiguar cosa alguna, ó los hechos expuestos eran perfectamente exactos y no se quiso imponer al alcalde el correctivo que era de justicia; pues, á pesar de la insistencia del Marqués, no hubo medio de poner en claro la cuestión. Verdad es que lo ocurrido en Villa del Rey no era sino un débil reflejo de la conducta que en la mayor parte de las poblaciones rurales seguían los mandatarios del poder con el fin de exasperar á los republicanos.

PREGUNTA SOBRE UN ATENTADO

CONTRA LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

En la sesión del 19 de Junio dirigió el marqués de Santa Marta una pregunta al ministro de Marina acerca del abuso que se cometía en el arsenal del Ferrol con los jornaleros á quienes se obligaba á jurar la Constitución so pena de despedirlos si no lo hacían, lo que era un grave atentado á la libertad de conciencia. Insistió en sus preguntas en las sesiones del 22 y del 26

sin obtener tampoco respuesta del ministro, que rara vez ocupaba el banco azul antes de que se entrase en la orden del día. Por fin, en la sesión del 9 de Julio, habiendo reproducido su pregunta D. Enrique Pérez de Guzmán, aprovechando la circunstancia de estar en el Congreso el Sr. Topete, éste le contestó manifestando que los obreros del arsenal del Ferrol habían tenido que jurar la Constitución como dependientes del Estado, y que los que daban vivas á la República habían sido ya despedidos porque promovían disturbios. Como se ve, el gobierno se anticipaba á establecer la división de los ciudadanos en legales é ilegales, teoría que más tarde explanó con singular aplomo el Sr. Cánovas del Castillo.

Vencida la insurrección federal se había hecho gran número de prisioneros, muchos de los cuales eran de todo punto ajenos al movimiento. Se les trataba con extraordinaria dureza y los diputados republicanos recibían á cada paso relaciones verdaderamente conmovedoras acerca de los sufrimientos de aquellos infelices. El marqués de Santa Marta trató de este asunto en la sesión del 22 de Enero de 1870 en los términos siguientes:

«He pedido la palabra para preguntar al señor presidente del Consejo de ministros por qué, después de lo que nos han dicho aquí hace algunas semanas, continúan todavía presos en la Carraca los republicanos federales, alimentados infamemente y durmiendo, aun

los que están enfermos, sobre un pedazo de estera.»

Contestó el general Prim que había indudable exageración en los informes del Marqués y que se habían comunicado órdenes al juez encargado del proceso para que cumpliese lo más pronto posible su cometido. El marqués de Santa Marta no se dió por satisfecho y anunció una interpelación sobre este asunto.

DISCURSO COMBATIENDO EL PRESUPUESTO DE LA GUERRA
EN LA SESIÓN DEL 4 DE FEBRERO DE 1870

Antes de explanarla, combatió en la sesión del 4 de Febrero el presupuesto de Guerra, consumiendo un turno en contra de la totalidad en el siguiente enérgico y razonado discurso:

«Señores diputados: Voy á hablar en contra del presupuesto de la sección cuarta, ó sea del ministerio de la Guerra, y siento tener que hacerlo esta noche por el mal estado de mi voz.

Procuraré ser lo más breve posible en tan interesante punto. El importantísimo presupuesto de gastos va pasando tal como lo presenta la comisión, y la mayoría de esta Cámara, que se llamó democrática y que ahora se llama radical, no da muestras de hacer en él reforma alguna que justifique el radicalismo de su nombre; sin embargo, nuestro deber es pedir las y proponerlas, aunque ya estamos casi convencidos de que no

se ha de admitir ninguna. Esta mayoría cree, seguramente, que teniendo los nombres lo tiene todo y lo ha hecho todo. Ya que no habeis querido separar la Iglesia del Estado, como hace días os pedía el elocuentísimo Sr. Castelar, separad la fuerza pública del terreno candente de la política.

Creo que puede y debe suprimirse el ministerio de la Guerra. Y yo voy á presentar esta cuestión desde el punto de vista republicano, para que no podais decir que la presento bajo un punto de vista exclusivo; yo creo que lo que voy á proponer puede hacerse, no sólo por progresistas y radicales, sino hasta por los moderados; para hacerlo no falta más que querer. Fácil es comprender la paz que resultaría de separar la fuerza pública del seno del gobierno; para conseguir esto deben reglamentarse los ascensos en la clase de subalternos y hacerlos efectivos en la de jefes.

Me parece que esto es muy posible; porque sabemos por la experiencia de la vida y de todos los tiempos que toda colectividad, cuando ha tenido que elegir en sí misma, dar ascensos, nombrar jefes ó superiores, no lo ha hecho jamás entre los peores, ni en los que inspiraban menos confianza, ni en los que valían menos. Creo, pues, que deberían reunirse los coroneles, por ejemplo, para nombrar al brigadier, y me parece que no habrían de elegir el peor. Debía crearse á la vez en sustitución del ministerio un centro directivo, compuesto de todos los oficiales generales excedentes del servicio activo, auxiliados por los subalternos que

se hallan en igual estado y retribuidos únicamente con lo que perciben sin hacer nada. Este centro no ocasionaría gastos al Estado y se ocuparían en algo las personas que lo compusieran, no estando completamente ociosas como lo están hoy.

No es mi ánimo hablar de números, pero voy á recordar algunos, aunque creo que todos los conocemos bien. Los señores diputados recordarán que el ejército pasivo en el año último ha costado 125 millones; este año llega á 114 millones y es de esperar que pase también algo de esa cifra, como sucedió el año anterior; pero yo no creo posible que esta Asamblea soberana en la discusión presente deje por lo menos de señalar el número que ha de tener la plana mayor del ejército.

Existen hoy en la *Guía Oficial* siete capitanes generales, cuando según las disposiciones legales no debieran ser más de cuatro. Hay 68 tenientes generales; esto ya asusta. Hay 114 mariscales de campo y 269 brigadieres. No quiero detallar lo que ocurre con las clases pasivas del ejército; me contentaré con hacer notar que hay un gran número de oficiales que cobran sueldos que pasan de treinta mil reales y pertenecen á la clase pasiva.

Excuso decir á los señores diputados que con esa plana mayor hay para un ejército de dos millones de hombres. Por otra parte, no concibo que esta Asamblea soberana no fije siquiera cuál es el límite de esa plana mayor, si se va á seguir haciendo lo que se ha

hecho hasta aquí. Todo el mundo sabe que cuando ha venido la actual situación no tenía plana mayor, y el presidente del Consejo, ministro de la Guerra, ha tenido que hacerla, porque aquí cada gobierno ha tenido la suya; naturalmente, ha venido éste, y como no había sido gobierno hasta ahora y no la tenía, se ha visto en la necesidad de crearla.

Los señores diputados saben hasta qué punto se ha aumentado el número de esa plana mayor, incluso la clase de subalternos; hasta qué punto se han prodigado los grados en los primeros días de la revolución.

Quiero que conste (para no tener que pedir la palabra contra el presupuesto de Marina cuando se discuta) que todo lo que manifiesto del ministerio de la Guerra es exactamente aplicable, en mi juicio, al ministerio de Marina; que creo puede y debe suprimirse lo mismo que el de la Guerra.

Con un presupuesto como este se pueden hacer grandes obras, obras de lujo, como las que se han hecho en el ministerio de la Guerra, cosa que yo no quisiera calificar, pero que me parece escandalosa. Yo creo que teniendo en cuenta el estado actual del país no se deben hacer obras de lujo en ninguna parte, y en el ministerio de la Guerra se han hecho. Con presupuestos como este pagan los españoles muchísimos carruajes que yo considero innecesarios, y solo citaré un caso relativo también á la milicia. Yo he sabido que el capitán general de Madrid tiene coche y me parece que no le sirve de nada como no sea para ir

todas las tardes á dar un paseo por la Fuente Castellana.

Yo creo que el capitán general si alguna vez necesita ir de prisa irá á caballo, pero no en coche. Yo quisiera que antes que las Cortes determinasen algo sobre ese particular pudiéramos hacer distinciones honrosas en esa mayoría, renunciando á estas comodidades las personas que innecesariamente las disfrutaban. En este momento recuerdo una cosa que hace mucho honor al actual presidente de esta Cámara, que ha renunciado la asignación que le está señalada; yo quisiera que las personas á quienes aludo se anticipasen al acuerdo de las Cortes, porque estamos en el caso de economizar todo cuanto sea posible y suprimir por tanto los gastos inútiles. (*El Sr. Izquierdo*: Pido la palabra para una alusión personal.)

Señores, comprendo bien que al Gobierno debe molestarle el que se le haga la oposición y se le diga la verdad de ciertas cosas; pero al decirla yo se comprenderá que no hago más que cumplir con mi deber. Yo creo que los grandes enemigos que tiene la revolución no son ni la libertad religiosa, ni el sufragio universal, ni el matrimonio civil, ni otras reformas de esta tendencia; creo que de los dos grandes enemigos que tiene la revolución es el primero la falta de orden en la administración pública.

No hay que hacerse ilusiones; en este punto estamos lo mismo ó poco menos que antes de la revolución.

Aquí se oye por todas partes y se dice que no falta

más, absolutamente más que la gente aquella, y no toda, que vivía en la casa grande que hay en la plaza de Oriente. Esto se dice por todas partes y yo creo que se dice con alguna razón; porque la verdad es que el asunto que estamos discutiendo es tan importante ó más si cabe para algunas personas que la cuestión constitucional. Esto llega á todos los partidos y lo sienten todas las personas de todos los partidos políticos; y como ven que desde los primeros días no se han hecho las economías que debían hacerse y que van pasando los presupuestos y no se hacen y que pasarán y no se habrán realizado, creo que este hecho es el principal enemigo de la revolución.

Luego hay otro enemigo, y lo voy á decir con toda franqueza dirigiéndome al señor presidente del Consejo de ministros, porque sabido es que el presidente del Gabinete personifica siempre la situación. Señores, yo estoy oyendo fuera de aquí, fuera de Madrid, en Madrid y aun fuera de España y en todas partes donde he estado desde hace algunos meses: he oído decir, repito, *todo menos esto*.

Francamente, me ha dolido y lo he sentido, porque creía ver entonces alguna exageración en esa frase *Todo menos esto*; y al preguntar por qué, me contestaban que el presidente del Consejo de ministros no es bien recibido por la opinión, no gusta, como no gusta tampoco que no se hagan economías. Si yo hubiera de decir toda la verdad no acabaría nunca. En una palabra: el señor presidente del Consejo de ministros no

inspira gran confianza á esas personas de todas opiniones á quienes aludo, porque dicen, refiriéndose seguramente á su modo de ser de antes de ahora, que es aficionado á gastar y despilfarrar y eso no les gusta, lo cual nada tiene de extraño. Por consiguiente, yo creo que este es otro enemigo que tiene la revolución.

He olvidado decir, señores diputados, que aquí se me va á argüir diciéndome que hay Repúblicas donde existe el ministerio de la Guerra. Pero á esto contestaré que estoy conforme con que haya ese ministerio en las Repúblicas que lo necesiten, pero que se reduzca á una sección del Interior donde no sea indispensable. Aquí estamos muchos convencidos de que no es necesario el ministerio de la Guerra y que apenas sirve sino para ser un germen constante de disgustos y origen de casi todos los pronunciamientos que hemos tenido hasta ahora y que podamos tener en adelante.

En cambio tenemos otras cosas que no tienen en ese país donde me van á decir que existe el ministerio de la Guerra. Aquí tenemos una Constitución democrática con monarquía hereditaria, y tenemos en esa Constitución unos capítulos en que se habla del poder judicial y no se dice donde reside este poder. Y en cambio la Constitución de ese país que se me va á citar dice: «El poder judicial reside en el Tribunal Supremo» y no hay ministerio de Gracia y Justicia, el cual existe en España. Por eso digo que tenemos aquí otras cosas inútiles que no tienen en esos países, aunque allá exista ministerio de la Guerra.

En resumen, señores diputados, yo creo que aquí el lema de *España con honra* no se lleva bien; yo creo que España no va con honra hasta ahora, porque para tener honra no debe gastarse más de lo que se puede. Yo creo que debía y podía nivelarse el presupuesto este mismo año y que en los ministerios de la Guerra y de Marina podían haberse hecho casi tantas economías como en todos los otros presupuestos reunidos. Yo creo que España, gastando más de lo que tiene, como hacen los tramposos, y buscando amo y amo extranjero, no está muy honrada.

Creo que la revolución ha nacido muerta; pero que aunque así no fuese, si aquí no se establece algo completo llevando los principios á sus últimas consecuencias, la revolución muere en manos de los radicales.

Pero en fin, señores, ¿á qué cansarse en proponer estas reformas y estas mejoras? Si después de todo el gobierno insiste, como la mayoría de la Cámara, en su obcecación de querer dar al país una institución que el pueblo español no cree conveniente y por consiguiente rechaza, creo que al cabo de un año estaremos absolutamente lo mismo que estábamos algunos meses antes de la caída de doña Isabel. He dicho.»

En este discurso, que produjo bastante impresión en la Cámara, expuso el Marqués sus convicciones favorables á la reducción de los ministerios, en que más bien por rutina que por seguir un orden racional, viene dividiéndose en nuestro país el poder ejecutivo. Esti-

maba el marqués de Santa Marta que para simplificar la administración debían reducirse á tres los ministerios, quedando uno para el régimen interior del Estado, en que se refundirían los que hoy se llaman de Gobernación, Fomento, Guerra y Marina y que pasarían á ser otras tantas secciones subordinadas; otro ministerio para las Relaciones extranjeras, pasando al mismo el de Estado y la sección de Colonias, impropriamente llamada hoy de Ultramar, y otro ministerio para la Hacienda. En cuanto al ministerio de Gracia y Justicia, siendo como es el marqués de Santa Marta partidario de la división de poderes y de la separación de la Iglesia y del Estado, estima que la sección eclesiástica no tiene razón de ser, y la de Justicia debiera pasar íntegramente á los tribunales, principalmente al Supremo, que tomaría el nombre de Federal y entendería en los asuntos jurídicos de la nación, dejando su independencia necesaria á los organismos judiciales de los organismos y regiones, si éstas llegasen á formarse con el carácter de Estados. Respecto de sus duros ataques al general Prim, aparte de expresar las convicciones personales del marqués de Santa Marta, tenían un gran alcance político, que era distanciar de la minoría federal á aquel caudillo que, en caso de aceptar la República, sólo la habría querido dictatorial y centralizadora.

El general Prim contestó al discurso del marqués de Santa Marta desentendiéndose de la parte técnica del mismo y limitándose á la personal para decir que

gastaba de su patrimonio cuanto creía oportuno, y que cuantos diputados le trataban con alguna intimidad sabían que era un verdadero padre de familia. No lo había puesto en duda el Marqués, ni creía que tales detalles hubieran de llevarse á las Cortes; de modo que siguiendo estos rumbos el debate, quedaron incontestados sus argumentos.

INTERPELACIÓN AL GOBIERNO EL 5 DE FEBRERO DE 1870

ACERCA DE LOS MALOS TRATAMIENTOS

SUFRIDOS POR LOS FEDERALES PRESOS EN LA CARRACA

En la siguiente sesión (5 de Febrero de 1870) explanó el marqués de Santa Marta la interpelación que había anunciado acerca de los malos tratamientos de que eran víctimas los republicanos federales presos en la Carraca con motivo de la última insurrección. Véase su discurso:

«Señores diputados: El que ha de hablar desde estos bancos de la izquierda, si tiene poca costumbre de hacerlo en público y mucho menos delante de un público tan respetable como este, faltándole además recursos oratorios, difícilmente puede tener razón.

Yo estoy, sin embargo, convencido de que en todo lo que voy á decir sobre los presos que están en la Carraca tengo razón; conozco también que no basta tenerla para alcanzarla; para alcanzarla se necesitan

tres cosas: primera, tenerla; segunda, saber pedirla, y tercera, que se nos quiera dar.

Según los artículos 2.º, 3.º y 4.º de la Constitución, no puede tenerse preso á ningún ciudadano español más de tres días sin auto de juez competente. El mismo día en que se levantó la suspensión de las garantías constitucionales, ha debido hacerse marchar á cada uno de esos presos al sitio en que habían cometido el delito para que allí fuesen juzgados por el tribunal competente.

Y yo pregunto al gobierno; ¿por qué están todavía en la Carraca esos presos? Tengo numerosas cartas de allí y un parte telegráfico del que voy á leer solo algunas palabras: «Enrique de Guzmán: situación la misma, tratamiento peor, presos 383.» Por este despacho y por dichas cartas creo poder afirmar que lo que he dicho antes y voy á decir ahora es muy cierto; que la condición de los presos es peor que en los primeros días; que según se me asegura, están peor alimentados; que aún los enfermos duermen sobre un pedazo de estera, en un piso bajo y con solo una manta; que están padeciendo horriblemente de reuma; que parece que sólo se trata de matarles en aquel sitio. Debo recordar al señor ministro de la Guerra lo que dijo hace tres semanas; me acuerdo muy bien de que convino S. S. (no me acuerdo con qué señor diputado, ni si fué tratando de estos ó de otros presos, para el caso es igual) que entre los presos había algunos inocentes, como no podía menos de haberlos.

Comprenderán los señores diputados que entre esos presos los puede haber que no tengan delito ó le hayan cometido muy leve y puedan ser sentenciados en todo caso á un mes de prisión. ¿Les parece justo á los señores diputados que un hombre que debía ser condenado á lo sumo á un mes de prisión sufra cuatro ó cinco meses de presidio, que presidio es el punto donde están?

Todo el mundo sabe que en todas las leyes justas y racionales conocidas hasta ahora se ha considerado que valía más que cualquier delito pudiera quedar impune, que no el que se castigase á un inocente. Esos presos están allí muriéndose del mal trato que reciben y se da lugar á que sus familias se arruinen y perezcan también en la miseria. Están contemplando en aquel presidio cosas que no son tampoco muy agradables: los malísimos tratamientos que dan á los presos los cabos de vara. Se me dice que están viendo constantemente azotar á los marineros con manojos de cuerdas llenas de nudos, y que á esos mismos republicanos se les prohíbe hasta cantar himnos patrióticos.

Yo no pido perdón para los presos de la Carraca, lo que pido es justicia; y voy á recordar la declaración que hizo aquí hace pocos días el señor ministro de la Gobernación. Dijo S. S. terminantemente que estaba dispuesto á castigar con más severidad á las autoridades que faltaran á su deber, que no á los particulares. Y yo le digo á S. S.: principie, pues, por castigarse á sí propio y por castigar á los individuos del Ministerio por haber infringido la Constitución ó permitido que

otras autoridades falten á ella. ¿Por qué este lujo de ilegalidad y este ensañamiento con los republicanos? ¿No conocen los señores ministros que haciéndonos daño se lo hacen ellos á sí propios también? ¿Quién sostiene y quién ha de sostener en último término el espíritu de la revolución más que los republicanos?

Pero, señores, al hablar de insurrectos parece que debe decirse algo de la insurrección. Voy á hacer notar al Congreso lo que sucede aquí con la insurrección federal. Cuando no hablamos nosotros de ella, como sucedió en el último discurso del Sr. Pí y Margall sobre Hacienda, que nada tenía que ver con la insurrección, el señor ministro de Hacienda, para contestar al elocuentísimo discurso del Sr. Pí, repitió quizá ocho ó diez veces y nos echó en cara la insurrección federal; es decir, que casi fué el argumento que más usó en todo su discurso; y cuando nosotros hablamos sobre ella, como sucedió el sábado anterior hablando mi amigo el Sr. Benot sobre la destitución del Ayuntamiento de Cádiz, se nos dice, como entonces se nós dijo por el señor ministro de la Gobernación, que no hay que hablar más de la insurrección federal; que si el ministerio pudiera echaría un velo sobre ella. Pues yo digo á los señores ministros: ¿quereis echar ese velo? ¿Por qué no lo habeis echado ya? ¿Por qué no habeis dado una amnistía?

¿Quién ha perdido más por el momento en la insurrección federal? Nadie ha perdido más que los mismos republicanos federales.

Pero en el poder se debilita la memoria y voy á recordar al señor presidente del Consejo de ministros algunos hechos de nuestra historia contemporánea para justificar la conducta de los republicanos federales.

Al llegar á este punto deseo que consten dos cosas. La primera, que el señor ministro de Estado ha declarado aquí hace muy pocos días que el gobierno había provocado la insurrección federal; y la segunda, que los derechos individuales no han sido hasta ahora una verdad.

Recordando, pues, algunos hechos de nuestra historia contemporánea, diré que en el año de 1866, sin provocación alguna del gobierno, en un período que seguramente fué el de más libertad que hubo en esos años, sin provocación alguna, repito, por parte del gobierno, una parte militar del partido progresista, y á su cabeza el señor presidente hoy del Consejo de ministros, se sublevó porque lo creyó conveniente.

Al llegar aquí haré notar también que entonces el hoy presidente del Consejo de ministros no era antidinástico. Se sublevó, salió en la dirección que tuvo por conveniente é hizo también el daño que tuvo necesidad de hacer, porque S. S. recordará que se cortó algún puente colgante. Si hubiera tenido necesidad de hacer más daño, lo hubiera hecho. Recordaré además á S. S. que la persecución que entonces le hizo el gobierno no fué tan terrible como la que se ha hecho á los federales; recordaré que en aquella insurrección, cosa que me chocaba entonces y no he podido olvidar,

oía repetidamente á los amigos de S. S. que no se quería para nada á los paisanos, que podían estarse en sus casas, porque el movimiento lo habían de hacer los militares. Excuso decir lo que esto significaba.

Antes del 22 de Junio se nos decía lo mismo. Sucedió, como recordará también S. S., que por no venir á ponerse al frente del movimiento que tuvo lugar en Madrid, á pesar de contarse con tantos y tan buenos elementos, no se triunfó; cuando si, como era fácil, se hubiera triunfado, no se habría dado lugar á que hubiera sido el partido moderado ó el partido conservador ó una parte de él quien iniciara la revolución, ni á que hoy estuviera dentro de esta Cámara sirviendo, según se dice, de rémora para llevar adelante la revolución.

En cambio, señores, el partido republicano federal sabe todo el mundo, está en la conciencia de todo el mundo, que hacía muchos meses que se le provocaba y que se buscaba un pretexto para que saliera á la calle y se lanzara á las vías de fuerza. ¿Quién habrá podido olvidar el hecho clarísimo sucedido en Tarragona, que no necesito recordar, pero sobre el cual no puedo menos de decir mi juicio?

Yo creo que el gobernador se fué de allí premeditadamente, sabiendo que el secretario, que aquel inocente funcionario, llevado seguramente del mejor deseo de servir á la situación, se prestaría voluntariamente á ir al matadero, como suele decirse, pues que no podía considerarse sino como una temeridad el presentarse una sola persona á impedir que tuviera lugar una ma-

nifestación de la importancia de aquella, cuando en Madrid, en el centro de la nación y á la vista del gobierno, se estaban haciendo todos los días manifestaciones como la que se iba á verificar en Tarragona. Esto confirma lo que nos ha dicho el Sr. Sagasta, es decir, que se provocaba la insurrección hacía mucho tiempo y que no se había hecho más por haber sido más prudentes que S. S. los demás ministros.

Señores, yo estoy conforme con lo que dijo respecto á la sublevación mi íntimo amigo el Sr. Pí y Margall cuando el Sr. Figuerola nos echó en cara la otra noche la insurrección federal. La verdad es que no hubo ni ocasión ni tiempo material para ponernos de acuerdo; que si lo hubiese habido, la sublevación habría sido mucho más formidable de lo que fué.

El señor presidente del Consejo de ministros está siempre dispuesto á defender á los militares, y yo quisiera verle dispuesto también á defender á los paisanos; porque S. S. debe conocer que el presidente del Consejo de ministros y el ministerio entero no es ministerio de los militares, sino de todos los españoles y debe amparar y defender á todos los españoles igualmente.

Concluyo, pues, pidiendo justicia para los presos que están en la Carraca, y entiendo por justicia que se les juzgue por tribunales competentes, y si esto ha debido hacerse y no se ha hecho, que se castigue á las autoridades que hayan faltado, no privando á estos individuos por más tiempo de la libertad, ni haciendo que perezcan sus familias. He dicho.»

En este discurso, como se ve, además de abogar por una causa justísima, apreciaba con gran acierto el marqués de Santa Marta que cometían un verdadero suicidio los que llamándose revolucionarios trataban de quebrantar la fuerza más poderosa de la revolución, defendía enérgicamente el alzamiento federal y juzgaba con severidad y energía las contradicciones del general Prim. La respuesta de éste fué la que acostumbraba dar en casos tales: esto es, que los presos de la Carraca estaban mucho mejor atendidos de lo que el marqués de Santa Marta pretendía, y que se había nombrado un juez especial para esta causa porque así se había acordado en Consejo de ministros. En cuanto á lo ocurrido en los pronunciamientos de 1866 manifestó el general Prim que él había deseado siempre el auxilio de los paisanos, pero que éstos se habían retraído de tomar parte en la insurrección de Enero. Del movimiento de Junio no dijo una palabra, á pesar de que hubiera sido de gran interés que explicase las causas de no haber pasado la frontera en aquella ocasión.

El marqués de Santa Marta rectificó en los siguientes términos:

«Voy á rectificar por el mismo orden con que me ha contestado el señor presidente del Consejo de ministros. Lo primero que ha dicho S. S. es que no ha comprendido la conexión que pueda tener la sublevación de los federales con la insurrección de 1866. He tratado de probar y creo haber probado que había

conexión entre uno y otro acontecimiento; que lo que había que ver era si el partido republicano federal había seguido ó no la conducta establecida por el partido progresista. Esta es la conexión: que en 1866 las ideas progresistas eran respecto al gobierno de aquella época lo que son hoy las ideas del partido republicano federal respecto al gobierno; y que así como entonces pudo sublevarse el partido progresista, lo ha podido hacer con más razón el republicano federal siguiendo las huellas de los radicales.

Tampoco entendió el señor presidente del Consejo lo que dije respecto á los paisanos. Algún amigo tiene S. S. muy cerca de sí que el 22 de Junio tuvo no poca parte en que el pueblo de Madrid no tomara las armas, porque sólo esa persona sabía el número de fusiles que había en el cuartel de San Gil y tuvo, sin embargo, á bien guardar el secreto. Todos sabemos lo que pasó el día 22 de Junio: muchos centenares de paisanos fueron de un lado á otro de Madrid sin encontrar armas, ignorando las que existían encerradas en el cuartel de San Gil. El señor presidente del Consejo sabe ó debía saber quién era ese sujeto que no quiso que los paisanos tomaran parte en aquel movimiento.

Ha dicho también S. S., y esta es la parte principal de mi interpelación, que yo no entendía de leyes. Podré entender poco ó nada de leyes, pero creo que tengo razón en lo que he dicho; y como prueba incontestable de ello, voy á leer á S. S. el art. 11 de la Constitución. Dice así:

«Art. 11. Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó tribunal á quien en virtud de leyes anteriores al delito competa el conocimiento y en la forma que estas prescriban.

No podrán crearse tribunales extraordinarios ni comisiones especiales para conocer de ningún delito.»

Como este artículo deroga las leyes anteriores á la Constitución que citaba el señor presidente del Consejo de ministros, digo que cae por su base todo lo que S. S. ha dicho contestando á mi interpelación. Y espero, por lo tanto, que tenga S. S. la bondad, después de haber oído el artículo constitucional, de decir qué es lo que se piensa hacer con los presos de la Carraca.»

El general Prim rectificó, pero sin decir cosa alguna acerca del artículo constitucional citado por el Marqués y que demostraba palmariamente la ilegalidad de la conducta adoptada por el gobierno. Se limitó á manifestar que nunca había creído que las revoluciones pudieran hacerse sin el auxilio de los paisanos. El marqués de Santa Marta rectificó de nuevo en la siguiente forma:

«Yo rogaría al señor presidente del Consejo de ministros que tuviera la bondad de contestarme acerca del art. 11 que he leído; porque si no, no hemos adelantado nada con mi interpelación y las cosas quedan como estaban. Creo, repito, que cae por su base todo

lo que ha dicho S. S. respecto de los presos de la Carraca, porque según el art. 11 de la Constitución, que he leído, ha quedado derogado el artículo que ha citado S. S. del reglamento provisional.»

Realmente esto no tenía respuesta posible; de modo que el general Prim se limitó á responder que á la sazón se hallaban en suspenso las garantías constitucionales, que en el gobierno había hombres de ley muy competentes, y sobre todo, que si aquello no era legal, ya trataría el juez de inhibirse. Esto no era responder; era sencillamente decir algo por salir de aquel mal paso; de modo que el marqués de Santa Marta se vió en el caso de añadir aún las siguientes frases:

«Dos palabras tan solo para decir que niego la competencia de los individuos del Gabinete á que ha aludido el señor presidente del Consejo de ministros, porque creo que no podía obrarse sino con arreglo al artículo 11 de la Constitución, que declaro y afirmo que no ha sido observado.»

Así terminó aquella interpelación en que el marqués de Santa Marta obtuvo un indudable triunfo moral sobre el gobierno.

DISCURSO PRONUNCIADO

EN LA SESIÓN DEL 16 DE FEBRERO DE 1870

COMBATIENDO LA CONSIGNACIÓN DE GASTOS SECRETOS

En la sesión del 16 de Febrero de 1870 y con motivo de estarse discutiendo el presupuesto del ministerio de la Gobernación, usó de la palabra el marqués de Santa Marta para combatir la consignación de fondos secretos, que se elevaba á 300.000 pesetas. Realmente esta partida de gastos se presta á grandes immoralidades y ha dado siempre lugar á muchos abusos, pues no se emplea sólo en gastos de policía y espionaje, sino en procurar subvenciones ilícitas á periódicos y á personajes bien avenidos con los gobiernos, y aparte de esto es una tentación continua para los funcionarios que, sin responsabilidad de ninguna especie, pueden disponer á su antojo de gran parte de esa cantidad. El marqués de Santa Marta no quiso, sin embargo, entrar sino indirectamente en estas delicadas apreciaciones, que habrían podido ocasionar incidentes desagradables. Véase el sentido que dió á su discurso:

«Diré pocas palabras, señores diputados, empezando por declarar que me es algo enojoso levantarme á pedir economías, porque parece que la mayoría y el gobierno consideran esto como cosa de mal tono y de mal gusto. Yo, que no estoy conforme con semejante apreciación, voy á decir algo sobre este artículo.

Creo que la cantidad que aquí se consigna para

gastos reservados no tiene razón de ser en un gobierno democrático, y que el señor ministro de la Gobernación debe renunciar á ella desde luego.

El señor ministro de la Gobernación sabrá, como sabemos todos, que esta cantidad se consume casi siempre; como sabrá también que aunque es verdad, y yo me complazco en reconocerlo, que ha habido ministros que no han tocado á ella, en cambio otros en dos ó tres meses que han sido ministros la han gastado toda.

Yo quisiera, por tanto, que el señor ministro de la Gobernación tuviera la bondad de decirnos si cree necesaria la consignación de esta cantidad, hoy que no debe haber policía secreta; y S. S. no debe oponerse á suprimirla, porque creo que no pensará ser eterno en el ministerio y á todos nos conviene que se borre del presupuesto esa partida.

Para terminar he de dirigir á la comisión un ruego, y es que manifieste si continúa el gobernador de Madrid disfrutando la cantidad de 16.000 reales mensuales, también para gastos secretos, como tenía antes.»

Contestó al marqués de Santa Marta el ministro de la Gobernación, D. Nicolás María Rivero, para decir que los fondos secretos eran un medio de gobierno indispensable y que no podía suprimirse, aun cuando él, por su buena reputación, procuraría gastar lo menos que pudiera. Añadió que de su bolsillo particular habían salido algunos cuartos por no sacarlos del prespues-

to, y que de ello debía tener conocimiento el Marqués. Por parte de la comisión recibió el marqués de Santa Marta una respuesta semejante, y hubo de rectificar en los siguientes términos:

«He dicho alguna vez que me complazco en reconocer los hechos que honran á las personas; según mis noticias, el ministro que no ha tocado á esa cantidad que tenía en el presupuesto, ha sido el Sr. Posada Herrera: el señor ministro de la Gobernación puede enterarse, si gusta, de si es ó no cierto.

No tengo noticia de que S. S. se haya gastado su dinero en el Ayuntamiento de Madrid.

Insisto en que me parece escandalosa la cantidad de 300.000 pesetas para gastos reservados del ministro de la Gobernación.»

Ningún otro diputado terció en este debate, mucho más interesante que otros que provocaban empeñadas discusiones, pues al fin los gastos secretos no son sino un instrumento de corrupción puesto en manos de los gobiernos poco escrupulosos, y se aprobó la consignación de 300.000 pesetas para constituir lo que en Alemania llaman el *fondo de los reptiles*. Pero el marqués de Santa Marta quedó con la satisfacción de haber cumplido un deber de conciencia al protestar contra esa inmoralidad que se conserva aún como resto de los procedimientos tortuosos de la vieja política.

PREGUNTAS AL MINISTRO DE HACIENDA

En las sesiones del 11 y 12 de Marzo preguntó el marqués de Santa Marta al ministro de Hacienda qué parte había realizado del empréstito de cien millones de escudos, autorizado por la ley de 1.º de Abril de 1869, y con qué interés había hecho la operación. El Sr. Figuerola respondió que faltaban 14 millones de escudos y que el interés era el estipulado en la ley del empréstito. Amplió el Marqués su pregunta en la sesión del 26 de Marzo para conocer el destino que se iba á dar á la cantidad realizada, toda vez que las Cortes habían votado aquel empréstito para saldar el déficit del ejercicio de 1868 á 69. A esto repuso el Sr. Figuerola que serviría para ir saldando los descubiertos del ejercicio siguiente, y que la emisión de bonos se había hecho á un tipo altamente favorable.

ARTÍCULO TRANSITORIO

PROPUESTO POR EL MARQUÉS DE SANTA MARTA

AL PROYECTO DE LEY ELECTORAL

Y APROBADO POR LAS CORTES

En la sesión del 6 de Abril presentó el marqués de Santa Marta al proyecto de ley electoral el siguiente artículo transitorio:

«Los procedimientos de la ley electoral quedarán en suspenso respecto á la elección de diputados á Cortes para esta Asamblea Constituyente hasta su disolución. Las vacantes que ocurran se llenarán por la ley del ejercicio del sufragio universal que ha regido hasta aquí, por no ser regular que haya dos procedimientos distintos de elección para una misma Asamblea.»

Firmaban este artículo, además de D. Enrique Pérez de Guzmán, los Sres. Moreno Rodríguez, Soler y Plá, Pi y Margall, Guzmán y Manrique, Ruiz y Alcantú.

La comisión y las Cortes aceptaron este artículo transitorio en la sesión del 27 de Abril.

CUESTIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES

Intervino además muy activamente el marqués de Santa Marta en la discusión de la ley electoral con motivo de la cuestión de incompatibilidades, en que seguía cometiéndose toda clase de abusos, pues no obstante disponerse en la ley que los empleados públicos no podrían ser diputados, ni que éstos podrían recibir mientras durase su cargo pensiones, comisiones ó sueldos del gobierno, se confería á éste la facultad de hacer excepciones que venían á traducirse en el hecho escandaloso de que apenas hubiese diputado ministerial que no cobrase en uno ú otro concepto; de modo que bien pudo decirse que aquella era una mayoría de empleados. En la sesión del 21 de Abril pidió

el marqués de Santa Marta que se presentara una nota de los diputados que cobraban sueldo del Tesoro en cualquier concepto que fuera, y como el presidente respondiese que ya se había traído á la Cámara esa nota, el Marqués le hizo observar que en las listas presentadas no aparecían sino los que cobraban como empleados, y no en todos conceptos.

Desde luego comprendió que su petición molestaba y comprometía al gobierno, que precisamente por aquellos días echaba el resto, como suele decirse, para inclinar á los diputados unionistas á que se pusieran de su parte en la cuestión de candidatura para el trono. En efecto, pasaron bastantes días sin que la lista se presentase, y en la sesión del 29 hubo de insistir, obteniendo por toda respuesta que aún no estaba la nota en secretaría y que se leería tan pronto como se recibiese.

Estando en pie este asunto y como consecuencia del mismo hubo de hablar para alusiones personales en la misma sesión, pues el Sr. Damato pareció dar á entender que el marqués de Santa Marta era contratista de obras públicas.

«Señores—dijo el Marqués—hallándome fuera del salón parece que el Sr. Damato ha pedido que se traiga á las Cortes una nota de los contratistas de obras públicas, así como yo pedí, en uso de mi derecho, que la Mesa pidiera al gobierno una lista de todos los diputados que cobran del Tesoro. Al ver que el

Sr. Damato hacía su petición nombrándome y como en contraposición á la mía, yo, que si soy bien conocido en Madrid y en otros puntos no lo soy en toda España, deseo que se sepa que no soy ni he sido contratista de obras públicas; nada me toca, pues, de la alusión que pueda haber querido hacer el Sr. Damato.

Pero en mi concepto, nada importa que haya diputados que á la vez sean contratistas de obras públicas si cumplen con su deber votando lo que es conveniente al país y en contra del gobierno.»

Los diputados aludidos por el Sr. Damato, quien por cierto no lo hizo notar así como parecía obligado, eran los Sres. Gomis y Bové, que al efecto hablaron sobre este incidente.

En la sesión del 30 de Abril usó el marqués de Santa Marta la palabra en los términos siguientes:

«He pedido la palabra para hacer varias preguntas al señor presidente del Consejo de ministros y ministro de la Guerra y al señor ministro de la Gobernación.

¿Sabe el señor presidente del Consejo que hace ya muchos días que pedí á la Mesa para que lo hiciera al gobierno, que trajera éste aquí una nota de todos los señores diputados de las Cortes Constituyentes que cobran sueldo del Tesoro en cualquier concepto, y ahora que hablo de esto diré que esa nota deseo se amplíe también á los delegados del gobierno en las sociedades de ferrocarriles ú otras en que pueda haber-

los y que aunque no cobran sueldo del Tesoro son nombrados por el gobierno?

¿Sabe el señor ministro de la Guerra que al día siguiente de pedirse esa nota se estaba poniendo ya en limpio en algunos ministerios y que todavía no ha llegado á esta Secretaría?

¿Sabe también el señor presidente del Consejo de Ministros que el público malicioso, y con razón en mi juicio, puede creer que se detiene el envío de esta nota hasta que pase la escandalosa cuestión de las incompatibilidades?...»

Al llegar aquí hubo de interrumpirle el presidente, diciendo que no podían calificarse de ese modo los proyectos de ley.

«Señor presidente—prosiguió el Marqués—creo que está en el ánimo de todos los señores diputados y que estará también en el ánimo del país, que á esa cuestión se la puede llamar escandalosa; pero si á S. S. le parece de mal efecto esta palabra, no tengo inconveniente en sustituirla con la de ruidosa, aun cuando en mi juicio lo que ha pasado ayer en las Cortes, creo que me da derecho para llamarla escandalosa, porque ha sido un gran escándalo parlamentario.

NUEVAS PREGUNTAS DEL MARQUÉS DE SANTA MARTA

INCIDENTE CON LOS SEÑORES PRIM Y RIVERO

Continuando mis preguntas os digo: ¿es cierto que S. S. ha vendido el solar llamado del Carmen en la

calle del Alcalá, esquina á la del Barquillo, y el cuartel del Soldado? Y si esto es cierto, ¿tiene á bien S. S. manifestar en virtud de qué ley ha hecho esas ventas? Y, por último, ¿tiene á bien el señor presidente del Consejo de Ministros traer á las Cortes el expediente y condiciones para la subasta referente á este asunto?

Al señor ministro de la Gobernación le pregunto: ¿recuerda S. S. que hay muchas provincias en España que no han contribuido aún con su contingente ni en hombres ni en dinero para la quinta de 1869? Ya comprende S. S. el efecto que hará en el país el agradable desorden que se nota al hacer, como se ha hecho, el sorteo para la quinta de 1870 á cañonazos en Barcelona y en Sevilla, cuando todavía hay muchas poblaciones en España que no han contribuido con su contingente para la quinta de 1869.»

El Sr. Rivero contestó á esta pregunta que, en efecto, quedaban residuos de la quinta de 1869, pero que se realizarían en soldados ó en dinero, y que en todo caso ya estaba hecha la quinta de 1870. En cuanto al general Prim se limitó á decir, un tanto airado, que contestaba en cumplimiento de su deber, no por otra cosa: que los solares á que aludía el Marqués se habían vendido porque había derecho para ello, y que tan pronto como estuviese redactada por los ministros la lista de diputados que el Marqués había pedido, se enviaría á las Cortes con la adición correspondiente

á los delegados de ferrocarriles y otras sociedades análogas. El marqués de Santa Marta prosiguió sus preguntas en esta forma:

«El señor ministro de la Gobernación ha dicho que la prueba de que estaba bien hecha la quinta de 1869, era que se ha hecho la de 1870. (*El Sr. Rivero*: No he dicho eso.) Es muy parecido lo que he oído á su S. S. (*El Sr. Rivero*: Ni parecido.)

Ruego al señor ministro de la Gobernación que traiga á las Cortes una nota en que consten las poblaciones que no han cubierto aún el contingente de la quinta de 1869.

Respecto al señor ministro de la Guerra, debo decirle que no sabía que S. S. estuviera autorizado por las Cortes para vender esos solares; creía que no era el ministro de la Guerra el que podría realizar estas ventas; pero S. S. me lo dice y debo creerlo, sin embargo de enterarme de esta autorización, y veré el expediente si S. S. lo trae. Por lo demás, diré al señor presidente del Consejo que he hecho esas preguntas porque tengo el deber de hacerlas; por el gusto de dirigir la palabra á S. S. no las hubiera hecho.

Como el ministro de la Gobernación, Sr. Rivero, manifestase que no comprendía la argumentación del Marqués, éste que no se sentía con resignación para tolerar conatos de chiste, respondió que no era extraño que el Sr. Rivero no le entendiese, pues pocos días antes había declarado que había muchos momentos en que no sabía lo que se hacía. Las risas con que la ma-

yoría de los diputados acogieron esta frase, pusieron fuera de sí al Sr. Rivero, quien hubo de contestar con alguna destemplanza; pidió la palabra el Marqués, y como el presidente se creyera en el caso de consultar á las Cortes sobre si la concedía, el acuerdo fué afirmativo. Entonces el Marqués dirigió al Sr. Rivero ataques durísimos y se promovió un incidente ruidoso, que ocupó gran parte de la sesión, y que no cortó el Sr. Ruiz Zorrilla, ya por distracción ó tal vez porque llevando la peor parte el Sr. Rivero, le causaba cierta complacencia la confusión de su rival. En efecto, desde el instante en que el Sr. Ruiz Zorrilla empezaba á figurar al frente de los progresistas avanzados, la posición del Sr. Rivero dentro de la monarquía era embarazosa; uno ú otro estaba de más en aquel grupo y en el caso de ponerse de acuerdo, todo parecía indicar que no sería del Sr. Rivero la jefatura. De todas suertes, el marqués de Santa Marta lanzó al ministro de la Gobernación apóstrofes violentos, que podían y así lo creía el Marqués, dar motivo á un lance personal, aunque por fortuna no llegó la cuestión á este terreno. Tantos sus compañeros de minoría como otros muchos diputados, felicitaron calurosamente al marqués por la energía y habilidad que mostró en este incidente, en que logró descomponer al ministro de la Gobernación y aun al mismo presidente del Consejo, y afirmó con resolución y entereza el derecho del diputado frente á los desplantes autoritarios que solían usar los ministros.

MÁS SOBRE LA CUESTIÓN DE INCOMPATIBILIDADES

En la sesión del 7 de Mayo insistió el marqués de Santa Marta en que se presentase la lista de los diputados que por cualquier concepto recibían sueldos del gobierno ó de empresas dependientes del mismo, y lo hizo en estos términos:

«Estando ya en la Mesa la lista de los señores diputados que hay en estas Cortes Constituyentes y que son empleados, he visto que no se hallan incluidos en ella todos los señores diputados que cobran sueldo del Tesoro, ni los que tienen empleos dados por el gobierno, aunque no cobren de éste, y sin embargo, en la lista que se ha recibido hay noventa y dos.

Ruego, pues, á la Mesa, que reclame del gobierno la ampliación que tengo pedida, pues además de no haberse remitido todo lo que se ha pedido, no es justo que en esa lista se encuentre el nombre del Sr. Castellar, que tiene su cátedra por oposición, y no esté el de muchos señores que son nombrados por el gobierno, de los cuales habrá algunos quizá fuera de Madrid; pero hay otros tres ó cuatro aquí, en la Cámara, que, como he dicho, son nombrados por el gobierno delegados ó comisarios regios de algunas sociedades, y pido á la Mesa que esa ampliación venga, puesto que en esa lista de 92 individuos de todos los ministerios, no están los empleados nombrados por el gobierno.

Pido también á la Mesa se sirva disponer que la lista que hasta ahora se ha recibido de los señores diputados empleados, se publique en el *Extracto* de la *Gaceta* y en el *Diario de Sesiones*, poniendo á su final que se continuará.

Con respecto á otra nota que había pedido al señor ministro de la Gobernación, (la de los pueblos en que no se ha cubierto el cupo de la quinta de 1869), debo manifestar que después de lo que dije aquí el sábado último, no tengo ya interés alguno en que S. S. la traiga, ya que no ha creído seguramente de buen efecto para S. S. el traerla hasta ahora.»

El vicepresidente, Sr. Madrazo, contestó que la Mesa cumpliría con gusto las indicaciones del Marqués, y el Sr. Rivero manifestó á su vez que se apresuraría á mandar á las Cortes los datos relativos á las quintas, por más que en su sentir el asunto no revestía importancia. El hecho es que esos datos no se presentaron. La lista de los diputados que cobraban pensiones ó sueldos, se insertó en el *Diario de Sesiones*, correspondiente al 7 de Mayo.

NUEVAS PREGUNTAS DEL MARQUÉS DE SANTA MARTA

En la sesión del 28 de Mayo dirigió el marqués de Santa Marta al ministro de Hacienda una pregunta acerca de unas minas de sal gema, existentes en la provincia de Alicante, término de Cabeza del Pinoso,

y que explotaban sin derecho varios particulares. El Sr. Figuerola empezó por negar que explotase nadie aquellas salinas, y al fin terminó por declarar, incurriendo en una grave contradicción, que no tenía noticias exactas acerca de este asunto.

Intervino también el marqués de Santa Marta en la discusión del proyecto de ley municipal, y en la sesión del 30 de Mayo combatió un artículo adicional, por el que se otorgaba una especie de indulgencia plenaria á los Ayuntamientos en cuanto á los acuerdos y disposiciones que, en virtud de las circunstancias anormales del país, hubiera adoptado desde 29 de Septiembre de 1868. El marqués de Santa Marta opinaba que ni por las circunstancias revolucionarias ni por otras de ninguna especie, cabía echar un manto protector sobre ciertas irregularidades que se habían observado así en el Ayuntamiento de Madrid como en otros de España, y en este sentido y en nombre de la moral administrativa combatió aquel artículo, que al fin se aprobó por la mayoría de las Cortes.

Las sesiones de las Constituyentes se suspendieron en Junio y solo volvieron á reanudarse para la elección de D. Amadeo de Saboya, sufriendo una nueva suspensión hasta el 15 de Diciembre, con motivo del viaje de la comisión parlamentaria á Italia. Después el gobierno se propuso atropellar las discusiones para que en dos semanas quedasen votados todos los proyectos de ley pendientes, y solicitó además una autorización abusiva y contraria á toda doctrina constitu-

cional, para que rigiesen interinamente como leyes los proyectos que por falta de tiempo no pudieran ser aprobados. El marqués de Santa Marta pidió varias veces la palabra para combatir esa autorización; pero se le prohibió hablar, y la misma suerte tuvieron otros diputados de la minoría, hasta que aprobado al fin el absurdo que patrocinaba el gobierno, terminaron sus tareas aquellas Cortes con una violación del mismo Código fundamental que habían votado.

La campaña parlamentaria del marqués de Santa Marta en las Constituyentes fué, pues, como puede apreciarse por el extracto que de la misma queda hecho en este capítulo, tan activa como enérgica. En ella demostró una vez más la firmeza de sus convicciones republicanas y su ardiente deseo de que la revolución llegase, en bien de la patria, á ser una verdad en todos los órdenes de la vida política.





CAPÍTULO XII

Reinado de D. Amadeo de Saboya.—Vanas tentativas de conciliación entre unionistas y progresistas, bajo la jefatura del general Serrano.—División del partido progresista en dos grupos, capitaneados por Ruiz Zorrilla y Sagasta.—Encarnizada lucha entre estas fracciones.—Oposición exajerada del grupo radical ó zorrillista.—Inestabilidad de los gobiernos y los parlamentos.—Actitud del partido federal frente á la monarquía de D. Amadeo: pensamiento del marqués de Santa Marta: sus triunfos electorales.—Luchas entre benévolos é intransigentes.—El marqués de Santa Marta es elegido individuo del Directorio ó jefatura del partido federal.—Sublevación del Ferrol.—Disolución del cuerpo de artillería.—Renuncia del trono de España por don Amadeo de Saboya y proclamación de la República.



EL 2 de Enero de 1871 entró en Madrid don Amadeo de Saboya, elegido rey de España por las Cortes Constituyentes. Fué recibido sin la menor muestra de entusiasmo, aunque produjo buena impresión el valor con que recorrió á caballo las principales calles de Madrid, cuando podía temer que se le hiciese objeto de un atentado como el que acababa de costar la vida al conde de Reus, á quien principalmente debía el trono. Oró D. Amadeo ante la tumba del general Prim y luego se presentó á las Cortes y prestó el juramento de observar fielmente la Constitución.

En malas circunstancias entraba á regir los destinos de España el hijo de Víctor Manuel. El asesinato de Prim había privado al partido progresista de su jefe militar; Olózaga, antiguo jefe civil de ese partido, no contaba ya con las simpatías ni el prestigio necesario para dirigirle; los hombres en boga á la sazón eran Sagasta y Ruiz Zorrilla, y como ambos aspiraban al primer puesto, fácilmente se comprendió que la división de los progresistas era inminente. Se contuvo por el pronto encomendando la tarea de formar el primer gabinete de D. Amadeo al exregente D. Francisco Serrano, quien formó un ministerio de conciliación entre unionistas, progresistas y disidentes, encomendando la cartera de Estado á D. Cristino Martos, la de Gobernación á D. Práxedes Mateo Sagasta; la de Gracia y Justicia á D. Augusto Ulloa; la de Fomento á D. Manuel Ruiz Zorrilla; la de Hacienda á D. Segismundo Moret; la de Marina al general Topete, y la de Ultramar á D. Adelardo López de Ayala.

Este ministerio no representaba sino un compás de espera, que Sagasta y Ruiz Zorrilla aprovecharon para irse atrayendo elementos; el primero con objeto de ir formando un partido conservador, y el segundo para agrupar en su torno á los radicales ó progresistas avanzados que seguían antes las inspiraciones del general Prim.

Dos hombres de gran significación y valía quedaban sacrificados en esta combinación. Era el primero el duque de la Torre, que sólo tenía á su lado á una

parte de los antiguos unionistas y que, á pesar de dirigir el primer ministerio de D. Amadeo, sólo podía aspirar en el porvenir á capitanear un partido de reserva dentro de aquella monarquía en el caso de que se consolidara lo bastante para que se aproximasen á ella de un modo franco los elementos conservadores. Era el segundo D. Nicolás María Rivero, que empezaba á ver con profundísima contrariedad que le abandonaban los llamados cimbríos, esto es, los demócratas que habían aceptado la forma monárquica á raíz de la revolución y que ahora se apresuraban á engrosar la fracción más liberal del progresismo, capitaneada por D. Manuel Ruiz Zorrilla. No era difícil prever que así el general Serrano como el Sr. Rivero, bien que por motivos distintos, habían de tardar poco tiempo en mostrarse hostiles á D. Amadeo de Saboya.

Dispuso el gobierno que se jurase por todas las autoridades al nuevo rey, y como algunos militares se negaran á hacerlo, fueron dados de baja, figurando entre ellos el duque de Montpensier, que en su calidad de infante venía figurando en la *Guía* como capitán general del ejército español. Desde entonces Montpensier volvió á entrar en inteligencias con doña Isabel á cuyo destronamiento había contribuido con tanta eficacia, y se mostró dispuesto á trabajar en favor de su sobrino el príncipe D. Alfonso, en quien aquella señora había abdicado sus derechos al trono y al que apoyaban resueltamente muchos de los antiguos generales

isabelinos y de un modo condicional Cánovas del Castillo y varios unionistas.

A mediados de Marzo se verificaron las elecciones para las primeras Cortes de D. Amadeo. Dirigiendo Sagasta la máquina electoral no hay para qué decir que los abusos fueron verdaderamente escandalosos y que se cometieron principalmente contra los federales; pues el gobierno tenía vivísimo interés en que el rey no comprendiese la inmensa fuerza que tenían en el país los republicanos. Resultaron, sin embargo, elegidos los principales campeones del federalismo, entre ellos Pí y Margall, Figueras, Castelar y Salmerón, que vino por vez primera al Parlamento é hizo su reputación con un hermoso discurso en que defendió la legalidad de la asociación de trabajadores titulada *La Internacional*, colocándose á la altura de los más grandes oradores. La minoría republicana no llegó á contar en aquellas Cortes con cincuenta diputados, cuando había tenido setenta en las Constituyentes.

El marqués de Santa Marta estaba convencido de que la monarquía de la casa de Saboya nacía sin condiciones de arraigo en nuestro país y tenía la persuasión de que los republicanos no habrían de hacer grandes esfuerzos para derribarla, porque llevaba el germen de una rápida disolución en su seno. El pueblo se oponía decididamente al nuevo rey, la aristocracia le miraba con desvío, los elementos conservadores estaban á la expectativa, los demócratas al lado de la República; de modo que D. Amadeo no se apoyaba más

que en el partido progresista, que no ha sido nunca un pedestal estable y que además se hallaba profundamente dividido desde la muerte del general Prim.

Eran muchos los federales que deseaban el retraimiento y la insurrección; pero el marqués de Santa Marta, de igual modo que los demás hombres de verdadero prestigio entre los republicanos, creía que la insurrección, sobre ser innecesaria, tomada en cuenta la debilidad de aquella monarquía, resultaría contraproducente si no se realizaba en condiciones de alcanzar un rápido triunfo. Esto era improbable, porque el fracaso de 1869 había debilitado los elementos guerreros del partido, y marchar á sabiendas á un nuevo desastre por el solo objeto de mantener la alarma era, en sentir del Marqués, un verdadero absurdo. Quería que el partido federal se preparase al combate aprovechando la confusión que reinaba entre las fuerzas dinásticas; pero no que procurase á éstas el placer de una victoria lanzándose á la pelea en condiciones desfavorables, y esta fué su actitud en las Asambleas federales y en las juntas de su partido, donde su nombre era cada día más respetado.

Al verificarse las elecciones para las primeras Cámaras de la monarquía, los republicanos de Córdoba presentaron la candidatura de D. Enrique Pérez de Guzmán para la diputación á Cortes. Las muchas simpatías que el Marqués tenía en su ciudad natal hicieron que esta designación fuese acogida allí con el más vivo entusiasmo en todas las clases sociales y por personas

de todos los matices políticos. Suplicaron al Sr. Pérez de Guzmán con verdadera insistencia los individuos del Comité que se presentara en Córdoba; pero vaciló mucho antes de resolverse á hacerlo, porque en medio de la satisfacción que le causaban las muestras de cariño de sus paisanos, experimentaba una contrariedad; la de que se presentara candidato frente á él un pariente y amigo entrañable, quien marchó á aquella ciudad sobre un mes antes de la elección, decidido á hacer toda clase de esfuerzos para obtener la victoria. Cuando D. Enrique Pérez de Guzmán, apremiado por las instancias de sus correligionarios, se decidió al fin á marchar á su ciudad natal, faltaban cuatro días para la elección y él no había hecho trabajos de ninguna especie para allegarse elementos. El recibimiento que obtuvo en Córdoba fué en extremo halagüeño; más de seis mil republicanos seguían al Marqués, quien en aquel día era el verdadero dueño de Córdoba, y para evitar alteraciones del orden público, muy fáciles dada la exaltación de los ánimos y el carácter impresionable de aquel pueblo, pidió encarecidamente no se le diesen vivas ni se hiciesen demostraciones de entusiasmo. Solo á medias consiguió su objeto; pero de todas suertes la manifestación revistió un carácter imponente y serio, que desconcertó á los monárquicos. En los cuatro siguientes días el marqués de Santa Marta recorrió, acompañado de comisiones del partido, toda la ciudad de Córdoba, y aquella serie de excursiones á los distritos, revistió las

proporciones de una carrera triunfal; el pueblo le vitoreaba con entusiasmo delirante; las señoras le saludaban desde los balcones agitando sus pañuelos y arrojaban flores á su carruaje; las campanas fueron lanzadas á vuelo; hendían los aires vítores y aclamaciones de júbilo, y las muestras de simpatía y cariño al paisano, al amigo y al republicano federal eran tan vivas é intensas, que el marqués de Santa Marta, no obstante hallarse acostumbrado en su ya larga vida política á presenciar el desbordamiento de los entusiasmos populares, refrenaba á duras penas las lágrimas que se agolpaban á sus ojos. Obtuvo el triunfo con una formidable mayoría de votos, y lo habría alcanzado asimismo en el distrito de Montilla, donde también presentaban los federales su candidatura, si, persuadido como estaba de que era segura su victoria en Córdoba, no hubiese renunciado á la diputación por aquella localidad con el fin de que la obtuviese, como en efecto sucedió, otro republicano que aportase con su campaña y su voto un nuevo elemento á la minoría federal del Congreso.

No pensaba el marqués de Santa Marta en presentar su candidatura por más distritos; pero los republicanos de Madrid le pidieron reiteradamente que aceptase la designación como candidato federal por el distrito del Hospicio-Universidad, donde el Marqués tenía gran popularidad y muchas simpatías por ser vecino del mismo desde muchos años antes, y á pesar de que declinó varias veces tan honroso ofrecimiento, hubo de

aceptarlo al fin ante la consideración de que el candidato ministerial por el indicado distrito era D. Práxedes Mateo Sagasta, ministro de la Gobernación y que dirigía, con la falta de escrúpulos que tanto hubo de caracterizarle en este sentido, la máquina electoral. Porque no pudiera creerse que temía la lucha en estas condiciones, aceptó al fin la designación de los republicanos el marqués de Santa Marta, quien no pudo trabajar su candidatura por haber salido en aquellos días para Córdoba. A pesar de esto y de las escandalosas maniobras de los agentes del gobierno, que á presencia de los mismos criados y dependientes del Marqués compraban públicamente votos y repartían dinero, sin perjuicio de romper urnas en las secciones y atropellar á los electores republicanos; no obstante estas coacciones punibles, que habían de extremarse tratándose de sacar á flote la candidatura del ministro de la Gobernación, el triunfo fué indudablemente del marqués de Santa Marta, pues aunque el escrutinio oficial le daba 2.842 votos contra 3.484 obtenidos por el Sr. Sagasta, es indudable por los resultados parciales de las secciones, desfigurados luego en el escrutinio, que el Marqués alcanzó la victoria por muchos centenares de sufragios.

En el distrito de Arenas de San Pedro, provincia de Avila, salió triunfante la candidatura del Marqués; de suerte que en rigor debió haber venido á las Cortes representando cuatro distritos. De todas suertes hubo de verse precisado á optar entre el de Córdoba y el

de Arenas, y como había algunos diputados republicanos en las mismas circunstancias, acordaron que la minoría en conjunto decidiese el distrito que había de representar cada uno, teniendo en cuenta el interés del partido. En virtud de esta resolución, hubo el Marqués de optar por Córdoba, y para satisfacer la justa susceptibilidad de los que espontáneamente le habían votado en Arenas de San Pedro, les dirigió la comunicación siguientes:

«Electores del distrito de Arenas de San Pedro.

Designado para candidato por el partido republicano federal de los distritos de Córdoba y de Arenas de San Pedro, he merecido en los dos la alta honra de ser elegido para representarlos en las Cortes, habiendo sido aprobadas sus actas por las mismas.

Esta doble elección, que es una de las mayores distinciones que puede obtener el hombre público, ha sido en el presente caso, por muchas consideraciones, un motivo de grave disgusto para mí, obligado por la ley á optar en un breve plazo por el distrito que he de representar.

Siendo el uno mi país natal, donde la elección ha sido muy reñida y el triunfo de grande importancia y trascendencia; y habiendo sido presentado por el otro, con una espontaneidad que solo puede compararse con los grandes esfuerzos que han tenido que hacerse para conseguir el triunfo, que también ha sido de

grande interés para nuestro partido, me era enojoso dar la preferencia á ninguno; y en esta situación ví con gusto el acuerdo de mis dignos compañeros de minoría para que ésta fuera la que, consultando únicamente el interés del partido, resolviera los distritos por que había de optarse.

La resolución de la citada minoría ha sido que opte por el de Córdoba, según resulta del acuerdo que transcribo, y al cumplir con el desagradable deber de participarlo á todos los que me han favorecido con sus votos en el de Arenas de San Pedro, os aseguro mi reconocimiento y la seguridad de que si la ley me priva de ser vuestro representante de derecho, lo seré con el mayor gusto de hecho.

Os desea salud y República federal.—Madrid 19 de Mayo de 1871.—ENRIQUE P. DE GUZMÁN.

El infrascrito, secretario accidental de las minorías republicanas del Congreso y del Senado reunidas.—Certifico: Que en el libro de actas se encuentra la de la reunión celebrada el dieciocho del corriente, bajo la presidencia del ciudadano Orense, y haciendo veces de secretario el infrascrito, y habiéndose procedido, conforme á lo acordado en sesiones anteriores, á deliberar sobre los distritos por que deberían optar, atendiendo al bien general del partido, los diputados que han obtenido elección doble ó triple, se acordó:—Que el Sr. Figueras optase por Falset; el Sr. Castelar, por Aracena; el Sr. Orense, por la Bisbal; el Sr. Guzmán, por Córdoba; el Sr. Joarizti, por Tarrasa, y el

Sr. Pí y Margall, por Villafranca.—Asimismo se acordó expedir á cada uno de los diputados electos por más de un distrito, las certificaciones de la presente acta que crean convenientes para acreditar que la opción se ha hecho por la minoría reunida, teniendo en cuenta la conveniencia general del partido más que la libre voluntad de los electos. Y en cumplimiento de lo acordado expido la presente para entregar al Sr. D. Enrique P. de Guzmán, marqués de Santa Marta, con el V.º B.º del Presidente, en Madrid á 19 de Mayo de 1871.—V.º B.º—*El Presidente*, JOSÉ M. DE ORENSE.—*El Secretario*, FRANCISCO DIAZ QUINTERO. »

Inauguraron las Cortes sus tareas el 3 de Abril, y D. Amadeo dió lectura al mensaje de la Corona, en que era notable la declaración de que nunca trataría de imponerse á la voluntad nacional. Fué elegido presidente del Congreso D. Salustiano Olózaga.

No tardaron en manifestarse de un modo franco las discordias que devoraban al gobierno, en que vanamente trataban de unirse tendencias irreconciliables. No cabía resolver ninguna cuestión importante, pues enseguida se manifestaban opiniones diversas que hacían inevitable el aplazamiento ó la crisis, y cada nombramiento de altos empleados motivaba un conflicto. Durante más de tres meses estuvo en crisis el ministerio; pero el rey se negaba á admitirle la dimisión fundándose en que no era constitucional la renun-

cia de un gobierno que tenía mayoría en las Cortes. El 14 de Julio abandonó la cartera de Hacienda el Sr. Moret, desautorizado por la Cámara y por sus mismos compañeros con motivo de una contrata de tabacos que autorizó como ministro, y pocos días después le siguió en su caída todo el ministerio.

El 24 de Julio formó gabinete D. Manuel Ruiz Zorrilla, quien se encargó de la presidencia y de la cartera de Gobernación, dando la de Estado á Martos, la de Gracia y Justicia á Montero Ríos, la de Fomento á D. Santiago Madrazo, la de Hacienda á D. Servando Ruiz Gómez, la de Guerra al general Córdoba, la de Marina á Beranger y la de Ultramar á Mosquera. En este ministerio quedaban eliminados los unionistas; Sagasta no quiso tampoco aceptar cartera alguna, por no quedar supeditado á su rival, y por el contrario, desde aquel momento se consagró con una actividad pasmosa á reunir en torno suyo elementos de la mayoría. Ocupaba, pues, el poder la fracción avanzada del progresismo, en que se habían refundido ya de hecho los demócratas, y frente á esa fracción iba reuniendo el Sr. Sagasta fuerzas de la derecha progresista y de la unión liberal.

Suspendidas las sesiones de Cortes se consagró el gobierno del Sr. Ruiz Zorrilla á normalizar la administración é introducir economías en Hacienda, y es justo reconocer que logró en parte sus buenos propósitos. Durante aquel verano se disfrutaron los beneficios de la libertad y se mantuvo sin alteración el orden públi-

co; el rey D. Amadeo, por consejo de los ministros, realizó un viaje á varias provincias y fué recibido sin entusiasmo, pero con deferencia; una emisión de ciento cincuenta millones de pesetas anunciada por el gobierno se cubrió en España y en el extranjero con éxito satisfactorio, y de haber continuado así las cosas es indudable que el nuevo reinado habría respondido por el pronto á las esperanzas y deseos de los que pretendían sustituir la dinastía de Borbón con la de Saboya. Este risueño panorama se desvaneció, sin embargo, en cuanto reanudaron las Cortes sus sesiones el día 2 de Octubre. Presentaba el gobierno como candidato á la presidencia de la Cámara popular á D. Nicolás María Rivero; pero Sagasta, que no había cesado de trabajar para allegarse elementos dividiendo la mayoría, presentó su nombre frente á la candidatura del gabinete. En la elección presidencial obtuvo el triunfo Sagasta, auxiliado por los conservadores; Ruiz Zorrilla presentó entonces su dimisión y D. Amadeo hubo de admitirla para no verse en el caso de disolver unas Cortes que sólo llevaban seis meses de duración.

Diffícil era la resolución de aquella crisis con tanta importunidad suscitada. Pensó D. Amadeo en un ministerio de conciliación que presidiría el general Serrano; pero los odios que separaban á los progresistas eran ya demasiado profundos y había que resolverse por una ó por otra tendencia. Entonces llamó para que formase ministerio al Sr. Sagasta; pero éste no tenía aún partido ni programa, había debido su triun-

fo contra Ruiz Zorrilla á una coalición de diversos grupos é ignoraba si podía tener mayoría en las Cortes. De modo que aconsejó al rey que formase un ministerio intermedio cuya presidencia se encomendó al brigadier de Marina Sr. Malcampo, personaje de significación escasa, que constituyó el gabinete con los Sres. De Blas, para Estado; Candau, para Gobernación; Alonso Colmenares, para Gracia y Justicia; Montejo, para Fomento; Bassols, para Guerra, y Balaguer, para Ultramar. Todos estos ministros lo eran por primera vez.

El incomprensible gabinete Malcampo pareció una burla á la opinión, ya por la insignificancia política de sus individuos, sobre todo de su presidente, ya porque al exponer su programa en las Cortes manifestó que seguiría la misma línea de conducta que el gobierno anterior, afirmación extraña que causó hondo enojo á los radicales. En realidad, aquel ministerio era solo un puente para que Sagasta formase algo parecido á un partido que turnase en el poder con el que reconocía ya la jefatura de Ruiz Zorrilla. Este político y los que le seguían combatieron al ministerio Malcampo con verdadero encarnizamiento y para ello no vacilaron en hacer causa común con las minorías republicana y carlista, con lo que el gobierno se vió en situación tan difícil que hubo de pedir á D. Amadeo el decreto de suspensión de las sesiones parlamentarias. Extendió el rey ese decreto y entonces la ira de los radicales llegó á su colmo, se consideraban desairados y no escasea-

ron las amenazas contra el trono, llegando á decir que con la revolución de Septiembre no había quedado bien oreado el palacio real. La exaltación de las pasiones era tan grande que dos meses de alejamiento del poder bastaban para que los hombres que más habían trabajado para traer al monarca, amenazasen con hacerse antidinásticos.

El breve período en que aquel gobierno intermedio había mantenido abiertas las Cortes, estuvo principalmente consagrado á una discusión en alto grado interesante, relativa á si la sociedad internacional de trabajadores podía organizarse ó no al amparo de la ley. La minoría republicana hizo con este motivo una campaña muy brillante.

Nada conocedor aún el rey D. Amadeo de las costumbres políticas de nuestro país y menos todavía de las personas con quienes había de entenderse, dirigió á mediados de Diciembre una carta al general Malcampo, excitándole á que apresurase la reunión de las Cortes, sin el concurso de las cuales no encontraba posible regir con acierto los destinos del país. El gobierno, que confiaba en obtener el decreto de disolución tan pronto como lo pidiese, creyó entonces llegado el caso de dimitir, y el día 20 de Diciembre se encargó de la presidencia del Consejo D. Práxedes Mateo Sagasta, quien conservó en sus cargos á la mayor parte de los ministros y dió al Sr. Groizard la cartera de Fomento, á Topete la de Ultramar y al general Gaminda la de Guerra.

La formación de este ministerio fué una nueva decepción para los radicales, que empezaron á inclinarse ostensiblemente hacia la República. Las sesiones de Cortes se reanudaron el día 22 de Enero de 1872, y en la primera sesión fué derrotado el gobierno del señor Sagasta, que se apresuró á ir á palacio para que D. Amadeo le diese el decreto de disolución ó presentarle en otro caso su dimisión y la de sus compañeros. Vaciló el rey, pero al fin dió á Sagasta el decreto que le pedia y que fué leído en la sesión del día 24. Promoviése entonces un escándalo terrible: así los radicales como la minoría republicana lanzaban al gobierno y á la monarquía violentos apóstrofes; Ruiz Zorrilla dió vivas á la libertad y á la soberanía nacional, pero no al rey; algunos diputados republicanos hacían apelaciones á la revolución; los carlistas, que tenían ya preparados grandes elementos para la lucha armada, fomentaban el desorden, y es seguro que D. Amadeo hubo de comprender que había echado sobre sí una tarea muy superior á sus fuerzas al querer inaugurar una nueva dinastía en un país en que cada día tenían más empuje los elementos revolucionarios.

Ni aun cerradas las Cortes pudo gobernar tranquilamente el Sr. Sagasta, pues de día en día le exigían los hombres de la unión liberal que adoptase una política de mayores restricciones, y hubo de modificar el gabinete el día 20 de Febrero dando entrada á cuatro conservadores, que fueron el Sr. Romero Robledo para la cartera de Fomento, el Sr. Camacho para Ha-

cienda, el Sr. Martín de Herrera para Ultramar y el general Rey para Guerra. Entonces empezaron á aproximarse á la situación los elementos genuinamente conservadores, capitaneados por Cánovas del Castillo, y que adoptaron el nombre de *fronterizos*, porque parecían resueltos á hacer pública adhesión á la dinastía de Saboya en cuanto viesen afirmadas las soluciones doctrinarias. Bien hubiera querido D. Amadeo atraerse á los conservadores; pero temía á los radicales que con una precipitación sólo explicable por la influencia del espíritu revolucionario, más fuerte entonces que nunca, amenazaba con ingresar de un momento á otro en las filas republicanas.

Desde luego convocó el nuevo gobierno elecciones generales de diputados y senadores. Los radicales, que daban muestra de una exasperación casi sin ejemplo en las luchas políticas, sin echar de ver que estaban haciendo imposible la monarquía que habían creado, propusieron á los demás partidos contrarios al gobierno una coalición para la lucha electoral. Entraron en esa coalición los moderados, los radicales, los carlistas y los republicanos.

El marqués de Santa Marta veía confirmado su pensamiento acerca de la inestabilidad de aquella monarquía. En poco más de un año se habían sucedido ya cinco ministerios y convocado dos Parlamentos; toda la base política de la situación se reducía á los elementos de Ruiz Zorrilla y Sagasta; pero las agrupaciones que capitaneaban ambos, en vez de entenderse para

alternar en el poder, no pensaban sino en exterminarse, y en el desarrollo de los sucesos determinados por esta guerra, más personal que de principios, había cierta sencillez tosca que imprimía á aquella política un sello de precipitación y de falta de seriedad, como si hombres, gobiernos y parlamentos fueran improvisaciones para vivir al día y sin base ni talla.

En circunstancias tales, cuando el partido radical se había comprometido con los republicanos mucho más de lo que la prudencia y las conveniencias políticas le aconsejaban y cuando la proclamación pacífica de la República era ya para los hombres observadores cuestión de poco tiempo, no comprendía el marqués de Santa Marta la febril impaciencia que se apoderó de una parte de los federales, que empezaron á predicar la necesidad de la insurrección, para la cual no se contaba con elementos serios. Veía claramente el Marqués que en el aislamiento, cada día mayor, á que estaba reducida la monarquía de D. Amadeo, no era ya más que un punto de espera para la restauración borbónica ó para la República. Todo favorecía entonces esta última solución, pero podía malograrse si una sublevación mal preparada de los republicanos daba fuerza y prestigio á los elementos conservadores. Por esto el marqués de Santa Marta, juzgando aunque bien intencionada, torpe y suicida la actitud de los que se llamaban intransigentes, no les alentó en sus pretensiones, y antes por el contrario, hizo cuanto estuvo de su parte para convencerles de que marchaban por mal

camino. Tampoco figuró entre los llamados benévolos, y aunque algunos periódicos llenos de pasión y encono, le tildaron con ese calificativo, es lo cierto que el marqués de Santa Marta, deplorando en el fondo de su corazón aquellas excisiones artificiales, tan funestas como inmotivadas, trató solo de armonizar las opuestas tendencias del partido federal, que sólo podía ser una fuerza incontrastable á condición de estar unido. En el odio que separaba ya á las fracciones de Sagasta y Zorrilla, confundidas pocos meses antes, veía el Marqués un claro ejemplo del porvenir que esperaba á sus amigos si insistían en dividirse en grupos.

También se opuso resueltamente á la coalición con los carlistas para combatir en las elecciones al partido llamado entonces conservador, y vulgarmente *calamar*, que dirigía el Sr. Sagasta. Ciertamente, los atropellos y coacciones de este político, justificaban la odiosidad de que era objeto entre los demócratas y republicanos; pero el marqués de Santa Marta, que aceptaba y creía muy plausible la inteligencia electoral con los radicales, conceptuaba como una funesta inmoralidad política el unirse, siquiera fuese por el momento, á los eternos enemigos de la libertad y de la civilización moderna. En cambio el Sr. Castelar, hoy á las órdenes de Sagasta, creía entonces que contra Sagasta era lícito y plausible todo, y en este sentido se mostró ardiente partidario de la coalición electoral con moderados y carlistas. La Asamblea federal aprobó, bien que por pocos votos de mayoría, esta línea de conducta,

nada digna de aplauso. De todos modos se hizo justicia á la actitud seria y lógica de D. Enrique Pérez de Guzmán, y fué elegido individuo del Directorio republicano federal, en unión de los Sres. Pí, Figueras, Castelar, Sorní, Estévanez y el general Contreras, que desde el advenimiento de D. Amadeo, á quien no quiso jurar, figuraba entre los republicanos federales.

Elevado el marqués de Santa Marta al organismo representativo de la jefatura del partido federal, siguió manteniendo con energía su criterio favorable á una política de expectación, que era en aquellos momentos la más revolucionaria, pues la insurrección sin elementos para el triunfo, podía comprometerlo todo y determinar la conciliación y armonía de los elementos monárquicos. Los ataques dirigidos con este motivo por algunos periódicos intransigentes al marqués de Santa Marta, no le hicieron cambiar en un ápice la línea de conducta que se había trazado con arreglo á las inspiraciones de su conciencia y por el mismo amor que profesaba á la causa de la República federal. Hombre político de convicciones arraigadas y severas, aquilatadas por su absoluto desistérés, no podía tomar como norma de sus opiniones esa popularidad pasajera que solo se alcanza poniéndose al lado de los que alzan más la voz y que suele traducirse en prontos y sensibles desengaños. Bien pronto le hicieron justicias los mismos que le censuraban y hubieron de reconocer su previsión y el acierto de sus juicios.

Las elecciones generales convocadas por el ministe-

rio Sagasta fueron las más arbitrarias y escandalosas que se hayan realizado jamás en nuestro país. Tenía que luchar aquel gobierno contra una formidable coalición de partidos, y no hubo atropello á que no apelase ni escándalo ante el cual retrocediera para lograr el triunfo. Lo consiguió al fin, pues en las Cortes no tomaron asiento sino cuarenta republicanos: los partidarios que el Sr. Ruiz Zorrilla tenía antes en las Cámaras vinieron á reducirse á una mitad; triunfaron poquísimos carlistas y tomaron pretexto de las ilegalidades cometidas con sus candidatos para lanzarse á la lucha armada. En Madrid la coalición derrotó en todos los distritos al gobierno; pero éste falseó el resultado de las elecciones en provincias.

Las nuevas Cortes, desprestigiadas ya ante la opinión antes de iniciar su vida, que había de ser muy breve, se abrieron el día 24 de Abril, cuando los carlistas estaban ya en armas y el país todo presa de la más viva agitación. Fué elegido presidente del Congreso D. Antonio Ríos Rosas, hasta entonces caracterizado como montpensierista y que escogía mal la ocasión para ingresar en el campo del primero y único rey de la dinastía de Saboya. En efecto, apenas constituidas las Cámaras y después de tempestuosos debates sobre las elecciones, un diputado federal, el señor Moreno Rodríguez, interpeló el 13 de Mayo al gobierno sobre una transferencia de crédito que contra las prescripciones de la ley había realizado, aplicando á gastos electorales dos millones sacados de la Caja de

Ultramar. El gobierno se defendió de este cargo lo peor que supo; confesó que había hecho esa transferencia, pero trató de justificarla diciendo que se había aplicado el dinero á gastos secretos para destruir los manejos de los enemigos del orden público. Presentó el expediente de aquellos gastos, que eran un verdadero despojo á la nación, y dió lectura á una serie de documentos tan absurdos y repulsivos, que España en masa protestó contra aquel gobierno que ante nada retrocedía para imponerse á la opinión pública. Los radicales tomaron pretexto de este escandaloso incidente para apelar al retraimiento, y entonces el señor Sagasta, convencido de su fracaso y de su merecida impopularidad, presentó al rey su dimisión y la de sus compañeros de gabinete el día 22 de Mayo.

La insurrección carlista, iniciada en el mes de Abril, tenía ya bastante importancia en las provincias del Norte. El pretendiente D. Carlos entró en España el 2 de Mayo, y al frente de unos cuatro mil hombres se dirigió por la provincia de Navarra hacia la de Guipúzcoa; pero fué atacado y batido á los tres días por el general Moriones, que estuvo á pique de hacerle prisionero y le obligó á repasar la frontera. No por esto acabó la insurrección, y para terminarla con rapidez envió el gobierno al Norte al general Serrano con el carácter de jefe del ejército y con autorización para hacer un convenio con los carlistas. Ultimó el duque de la Torre este convenio en Amorevieta el día 24 de Mayo, indultando á los levantados en armas, recono-

ciéndoles los empleos que antes tenían y otorgándoles otras condiciones ventajosas; mas no por esto acabó la lucha, pues los carlistas se proponían únicamente ganar tiempo para desembarcar armas y acopiar recursos, de modo que la guerra siguió de igual modo que antes.

El rey D. Amadeo, comprendiendo el peligro de cambiar bruscamente de política cuando no hacía más de un mes que se habían realizado elecciones generales, telegrafió al general Serrano para que consintiese en formar gobierno; aceptó el encargo el duque de la Torre y se constituyó la nueva situación bajo la presidencia interina del general Topete, entrando en Estado, el Sr. Ulloa; en Gobernación, el Sr. Candau; en Gracia y Justicia, el Sr. Groizard; en Fomento, el señor Balaguer; en Hacienda, el Sr. Elduayen, y en Ultramar, el Sr. López de Ayala. Preponderaba en este gabinete el elemento unionista y entraron en él algunos de los llamados *fronterizos*, pues precisamente en aquellas circunstancias, cuando había fracasado la política conservadora, es cuando los alfonsinos creyeron llegado el momento de hacer la prueba de su ingreso en la monarquía de D. Amadeo, siendo la entrada de D. José Elduayen en Hacienda una especie de experimento en este sentido.

Desde el punto de vista del interés de la nueva dinastía, era muy favorable esta evolución; pero los radicales estaban verdaderamente cegados por la impaciencia, mostraban una prisa exagerada por ser po-

der y una desenfrenada ansia de monopolizarlo, y era imposible que en condiciones tales arraigase la monarquía, de que se creían de buena fe los principales sostenedores. Apenas se constituyó el ministerio Serrano, la oposición radical presentó una proposición, en que se pedían explicaciones acerca del convenio de Amorevieta; uno de los firmantes pidió la palabra para defenderla antes de que se hubiera leído, y como el presidente, Ríos Rosas, se la negase, todos los diputados radicales abandonaron el salón. Además, el Sr. Ruiz Zorrilla dirigió el día 31 de Mayo una comunicación al presidente del Congreso, renunciando el cargo de diputado á Cortes. Explicaba esta resolución gravísima, diciendo que había perdido la fe necesaria para seguir en la política y al frente de un partido, pues se hallaba en situaciones excepcionales superiores á sus fuerzas, por lo que se retiraba á la vida privada.

El duque de la Torre llegó á Madrid el 1.º de Junio; dió en las Cortes toda clase de explicaciones sobre el ineficaz convenio que había celebrado con los carlistas, y los diputados ministeriales presentaron una proposición en que se le felicitaba, y que le sirvió de voto de confianza para ponerse de hecho al frente del gobierno. Querían los conservadores nombrar por su jefe al general Serrano, que tenía á su juicio mucha más significación y personalidad política que Sagasta, y es indudable que en este caso la dinastía hubiera tenido una base más ámplia que la que podían darle las

rivalidades de Sagasta y Zorrilla. Pero la actitud de los radicales hacía de todo punto imposible el turno de los dos partidos: el 12 de Junio el gobierno hizo dimisión, y el rey, que estaba muy impresionado por la retirada del Sr. Ruiz Zorrilla, la admitió desde luego y entregó el poder á los radicales. En veinte días se habían sucedido dos gabinetes conservadores y además iban á disolverse unas Cortes al mes y medio de constituidas. Jamás se había presenciado en España semejante inestabilidad en los gobiernos y en los Parlamentos, y esto consistía en que, habiéndose querido oponer un dique á la corriente revolucionaria, ésta salvaba tan debil barrera y se imponía á todo.

El 13 de Junio se reformó el ministerio radical bajo la presidencia interina del general Córdoba, entrando Martos en Estado, Montero Ríos en Gracia y Justicia, Echegaray en Fomento, Ruiz Gómez en Hacienda, Beranger en Marina y Gasset en Ultramar. Como el Sr. Ruiz Zorrilla había manifestado formal resolución de retirarse á la vida privada, su situación era difícil, pues se interpretaría su propósito sólo como deseo de volver al gobierno; de modo que hubo que emplear grandes esfuerzos para que abandonase su retiro de Tablada, pero al fin consintió en aceptar la presidencia del Consejo y la cartera de Gobernación.

Fácil es comprender la irritación de los elementos conservadores. Calificaron de golpe de Estado la conducta de D. Amadeo; muchos de ellos se hicieron antidinásticos y se pasaron con armas y bagajes al partido

alfonsino, y otros, entre ellos el duque de la Torre y Sagasta, sin llegar á romper abiertamente con la monarquía, adoptaron una actitud de hostil reserva. En Julio se dió el decreto disolviendo las Cortes y á fines del mes siguiente se eligieron otras, no sin que el gobierno extremase su influencia hasta tal punto, que ni aun permitió triunfase el Sr. Sagasta por ninguno de los distritos en que presentaba su candidatura; acto altamente impolítico, máxime teniéndose en cuenta que en países como España los ministros de la Gobernación dirigen casi á su arbitrio las elecciones. No era semejante conducta la más apropiada para calmar los ánimos ni para conciliar los elementos de la naciente y moribunda monarquía de D. Amadeo. El 21 de Julio había sido este monarca objeto de una tentativa de asesinato, que por fortuna quedó frustrada.

En las nuevas Cortes figuraban poquísimos conservadores dinásticos, algunos alfonsinos y más de ochenta republicanos federales. No necesitaron éstos de la protección ministerial, pues sus ideas alcanzaban creciente predominio en el país; de todas suertes, ya entonces estaban los radicales mucho más cerca de los republicanos que de los conservadores y parecían dispuestos á todo antes que consentir en que volviese al poder Sagasta. Presentó el marqués de Santa Marta en estas elecciones su candidatura por Córdoba y salió elegido por enorme mayoría de votos, obteniendo una votación muy nutrida.

El advenimiento al poder de los radicales volvió á

plantear en el partido federal con más violencia que nunca la división entre benévolo y intransigente. Ya queda dicho que en realidad no había verdaderos benévolo con el gobierno entre los federales, ninguno deseaba la continuación de la monarquía; pero mientras los llamados intransigentes querían derribarla por la fuerza de las armas, los tildados con el nombre de benévolo partían de dos puntos de vista, á saber: que en aquellas circunstancias no había elementos bastantes para una insurrección que pudiera alcanzar el triunfo, y que, por otra parte, esa insurrección era inútil, puesto que la monarquía se venía abajo por sí sola, y todo, hasta sus mismos defensores, parecían conjurarse para su ruina.

El marqués de Santa Marta mantenía esta opinión, de igual modo que Pí y Margall, Castelar, Figueras y Sorní. Formaban también parte del directorio los señores Estévanez y Contreras; pero se pusieron del lado de los intransigentes y de hecho dejaron de formar parte del organismo que por la autoridad de la Asamblea dirigía el partido federal.

En estas circunstancias se recibió el 11 de Octubre la noticia de haberse sublevado en el Ferrol sobre mil quinientos hombres de marinería y guardias de arsenales á las órdenes del coronel de marina retirado don Braulio Montojo, proclamando la República federal. Procedía este movimiento de la fracción intransigente del partido; lo desautorizó Pí y Margall en las Cortes, y esto dió motivo á una serie de protestas y recrimi-

naciones tales por parte de los intransigentes, que pareció inevitable la división de los republicanos federales en dos partidos destinados á combatirse encarnizadamente. La insurrección se sofocó al poco tiempo, pero abrió un abismo entre las dos tendencias del partido federal, pues los llamados intransigentes, exasperados por aquel fracaso que venía á demostrar la sinrazón de su política, se deshicieron en invectivas contra los individuos del directorio. Los intransigentes de Barcelona pretendieron destituir á Pí y Margall del cargo de diputado y celebraron con este fin algunas reuniones públicas. Además, esta fracción constituyó un directorio aparte, confiriendo la presidencia al general Contreras, que acababa de llegar del campo de la monarquía, y la vicepresidencia á D. Francisco García López, que más adelante figuró entre los republicanos conservadores que seguían al Sr. Castelar. Este directorio publicó un manifiesto llamando á los federales á las armas y organizó una insurrección que, en sentir de sus iniciadores, iba á eclipsar á la de 1869, pero que se redujo al levantamiento de algunas partidas en Murcia, Despeñaperros y Béjar y á una ligera alarma en Madrid en la noche del 11 de Diciembre.

Pocos días después el gobierno se declaró en crisis con motivo de haber acordado la mayoría de los ministros presentar á las Cortes el proyecto de la abolición inmediata de la esclavitud en la isla de Puerto Rico. Salieron del ministerio por esta causa el Sr. Gasset y Artime, ministro de Ultramar, y el Sr. Ruiz Gó-

mez, que lo era de Hacienda, y fueron sustituidos respectivamente por D. Tomás Mosquera y D. José Echegaray, pasando á Fomento D. Manuel Becerra. Este proyecto luchó con la oposición furibunda de los conservadores, que llegaron á calificarlo de la mayor de las calamidades que podían caer sobre el país, y aprovecharon la ocasión para manifestarse públicamente distanciados de la monarquía de D. Amadeo.

Ya por entonces era grande el desaliento de este monarca, que había llegado á persuadirse de que no contaba con otro apoyo que el partido radical, el que á su vez no tenía otro medio de vida que ir haciendo incesantes concesiones á los republicanos. Un llamamiento á los conservadores habría sido ocasionado al desvío de éstos, ó en caso de que consintiesen en formar poder, á la deserción de los radicales. Esta conciencia de su triste situación en España y algunos desaires de que le hizo objeto una parte de la nobleza, venían inclinando el ánimo de D. Amadeo á la abdicación de la corona. Dos acontecimientos que se verificaron casi á la par vinieron á convertir esa tendencia del rey en firme propósito.

El día 29 de Enero dió á luz la esposa de D. Amadeo de Saboya un niño. Varios personajes importantes, entre ellos los duques de la Torre, á quienes los reyes invitaron sucesivamente para que apadrinasen al príncipe, declinaron la invitación, y aun el clero opuso algunas dificultades para la ceremonia del bautizo, que al fin se celebró por el procapellán mayor de palacio,

siendo padrinos el representante de Portugal y su esposa. No hay para qué decir lo que este desaire afligiría á los monarcas.

Surgió además un conflicto serio con motivo de la resistencia que los jefes y oficiales del cuerpo de artillería mostraron á servir á las órdenes del general don Baltasar Hidalgo, á quien el gobierno había ya admitido por esta causa la dimisión de capitán general de las Vascongadas y al que acababa de nombrar para el mando de una división en Cataluña. Tomaron pretexto de este nombramiento muchos jefes y oficiales del cuerpo de artillería para hacer renuncia de sus empleos; la cuestión adquirió un carácter muy grave, pues la hizo suya todo el cuerpo, y en tales condiciones no podía el gobierno ceder sin quedar humillado ante la imposición de los oficiales de artillería. Con este motivo se promovió en las Cortes un debate de gran interés; el Sr. Zorrilla y el general Córdoba se mostraron resueltos á dar el retiro ó la licencia absoluta á cuantos jefes ú oficiales la solicitaran, y al fin se decretó la disolución y reorganización del cuerpo de artillería que firmó el rey después de algunas vacilaciones.

A los pocos días de resuelto este conflicto manifestó el rey D. Amadeo al Sr. Ruiz Zorrilla la firme resolución que había adoptado de dimitir la corona de España. Ya había consultado el monarca este propósito con su padre Víctor Manuel, que aprobó su resolución, fundada seguramente más que en el acuerdo adoptado con el cuerpo de artillería, en el aislamiento á que se veía

reducido D. Amadeo, á la actitud de la nobleza y de los conservadores y á los progresos de la guerra civil mantenida á la vez por carlistas y republicanos. Tampoco podía el rey fiar enteramente en los radicales, pues muchos elementos de este partido, instigados por el presidente de la Cámara popular D. Nicolás María Rivero, preparaban desde algunos meses antes la evolución á la República,

Es indudable que Rivero había sufrido un sensible desengaño al verse pospuesto á Ruiz Zorrilla durante el último período de la regencia y principalmente en el reinado de D. Amadeo. El partido radical había aceptado la jefatura de Zorrilla con un entusiasmo que no dejaba lugar á la esperanza de reemplazarle; el programa de los demócratas conversos á la monarquía estaba adoptado sin reservas por los radicales, y no cabía ya para el Sr. Rivero otra situación que la de segundo, que se avenía mal con sus merecimientos y con las condiciones de su carácter, que no pecaba de modesto. Prescindiendo de esta clase de móviles, de gran fuerza en política, el Sr. Rivero estaba decidido á que el poder no volviese á los conservadores, y antes de pasar por esta contrariedad se hallaba dispuesto á reunir en una las dos Cámaras, de acuerdo con el presidente del Senado Sr. Figuerola, y recabar para las Cortes la total representación de la soberanía nacional, lo que equivalía á destronar al rey. Comunicó sus planes á D. Estanislao Figueras, que guardó cuidadosamente el secreto, y apenas se recibió la noticia de

la abdicación del rey en la sesión del 10 de Febrero, interpeló el diputado republicano al gobierno, que por boca de su presidente Sr. Zorrilla y después de alguna resistencia manifestó la gravedad de la situación, bien que haciendo notar que oficialmente no se había recibido aún la dimisión del monarca. Merced á la insistencia de Figueras y al apoyo de Rivero se declaró el Congreso en sesión permanente; acudieron al palacio de la representación popular los senadores, y las dos Cámaras constituyeron una especie de Convención nacional que recibió en la tarde del 11 de Febrero la renuncia que por sí y sus hijos hacía D. Amadeo de Saboya de la corona de España, y proclamó la República.

Así terminó su breve y agitada existencia aquella monarquía en mala hora votada por 191 diputados de las Cortes Constituyentes. En dos años se habían sucedido ocho ministerios y tres Parlamentos, se habían destrozado mutuamente las dos fracciones del partido progresista y todas las agrupaciones revolucionarias, incluso la republicana, estaban hondamente divididas. La revolución llegaba al fin á su última y natural consecuencia, pero con muchas energías perdidas en la vana tarea de dar á España un rey democrático, siendo así que monarquía y democracia son términos incompatibles.



CUARTO PERIODO



CAPÍTULO XIII

Advenimiento de la República.—Condiciones en que fué proclamada.—Compromiso entre republicanos históricos y radicales.—Antinomia entre la posición real y la aparente de cada uno de estos partidos.—Los monárquicos vencidos son los árbitros; los republicanos vencedores aparecen como sometidos.—Lealtad de los republicanos.—Se reproduce el conflicto de las Juntas revolucionarias.—Su disolución.—Intervención del marqués de Santa Marta en los acontecimientos.—Sus trabajos para encauzar la política republicana.—Fracaso de la candidatura de Rivero para presidente del Poder Ejecutivo.—Significación de este fracaso.—Trabajos del marqués de Santa Marta en el nombramiento del Poder Ejecutivo.—Situación de los republicanos después de constituido aquél y elegido el Sr. Martos presidente de la Asamblea.



NADIE ha acabado con la monarquía, ha muerto por sí misma; nadie trae la República; la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la historia. Señores, saludémosla como al sol, que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria.»

Con estas frases, más poéticas que exactas, saludó el Sr. Castelar el advenimiento de la República que, á despecho de todos los optimismos, aparecía, no como astro radiante en un cielo diáfano, sino como sol oscurecido por nubes preñadas de tormenta.

Al votarse la República por la imposición de las circunstancias, en aquellas Cortes formadas por mayoría de monárquicos, se reprodujo la misma situación de 1868, con la desventaja de sustituir á la independencia en la acción, el embarazo y las dificultades del compromiso contraído con los monárquicos, que en aquella ocasión, como siempre, supieron sacar partido de sus ventajas, más aparentes que reales, pues apareciendo en aquella noche memorable como árbitros, en realidad se veían irresistiblemente empujados por la fuerza de las cosas.

Efectivamente, el problema planteado respecto de ellos por la renuncia de D. Amadeo, se encerraba en esta disyuntiva: ó seguir siendo monárquicos, ó hacerse republicanos. Pero lo primero era imposible porque habían de elegir entre D. Alfonso ó D. Carlos, rompiendo con toda su tradición liberal ó traicionando escandalosamente el espíritu de la revolución de Septiembre. No tenían ante sus ojos más que una senda digna: la aceptación de la República. Siguieron, pues, el único camino que se les abría, porque cualquiera otra conducta les colocaba en frente del pueblo.

Los republicanos, procediendo con su lealtad acostumbrada, no quisieron aprovecharse de la situación de los radicales, y éstos la aprovecharon pretendiendo ser los que traían la República, cuando la verdad es que la República venía con ellos, sin ellos y contra todos, porque era la única salida posible, dada la situación del país.

Eran, pues, los republicanos aquella noche los amos, los dueños, los árbitros: la República se hubiera organizado entonces como ellos hubieran querido, á poca insistencia y á poca energía que se hubiese empleado; pero se contentaron por de pronto con la República, sometiénndose á las exigencias de los radicales. En esto, como en todo, obedecieron á su lealtad proverbial y no negaremos que se inspiraron en cierto sentido práctico, esperando ganar para la causa republicana el apoyo y las simpatías de aquellos monárquicos de la víspera, entonces republicanos de ocasión y por fuerza.

No es esta la ocasión ni es tampoco nuestro propósito juzgar ahora la conducta de los jefes republicanos en aquel día; pero el hecho es, como decimos antes, que la situación de 1868 se reprodujo aunque en circunstancias distintas y bien difíciles por cierto.

El Congreso y el Senado se reunieron para recibir la renuncia del rey y deliberar sobre ella; habiendo sido aceptada adoptaron el acuerdo de fundirse en un solo cuerpo constituyendo Asamblea nacional, acto que vulneraba la ley fundamental del Estado. Por consiguiente, si pudo decirse que la República había venido pacíficamente, no podía sostenerse que había sido proclamada por un acto legal, puesto que para realizarlo hubieron de prescindir de la Constitución, procediendo contra sus terminantes dictados. La proclamación de la República fué un acto, aunque pacífico, esencialmente revolucionario.

Entendiéndolo así los pueblos se apresuraron á constituir juntas, procedimiento que esta vez estaba tan conforme con la opinión general, que las mismas autoridades locales y aun las corporaciones provinciales se apresuraron á deponer su autoridad en manos de las juntas, poniéndose á sus órdenes. Pudieron muy bien aquellos Ayuntamientos y Diputaciones, formados en su mayoría por hombres del partido radical, que continuaba al frente del gobierno en unión con los republicanos, alegar esta circunstancia para negarse á su disolución, ó al menos para resistirse á ella; no lo hicieron, demostrando así que en los republicanos residía á su juicio el derecho á ejercer las funciones del gobierno dentro de la República, y con muy buen juicio, demostrando tenerlo mucho mejor que sus jefes, entendían que en el fondo, ellos, monárquicos, estaban entre los vencidos, y que no podían ofrecer garantías bastantes á los ojos del pueblo, cuando solo una circunstancia accidental, la desaparición de la dinastía, no la convicción ni las ideas, les llevaba á aceptar la República. Y dicho sea en honor de la verdad: tal vez no se haya visto nunca caso semejante de fraternidad en la historia de nuestras agitaciones políticas, como el que ofrecieron en casi toda España monárquicos y republicanos en aquellos días difíciles; esta fraternidad fué indudablemente la causa de que á aquella salida del sol saludada por el elocuente tribuno desde el Congreso, no sucedieran inmediatamente espantosas tormentas en nuestra patria. Puede decirse que no se dió

el caso de un Ayuntamiento que pusiera en duda el derecho de los republicanos, no sólo á apoderarse del mando, sino á contar con la ayuda de los que se desprendían de él por un acto casi instintivo de sentido político.

Secundado ó consentido tan solo este movimiento de fraternidad por los de arriba, hubiese sido fecundo en bienes para la República y la patria; pero como si este país estuviese condenado á vivir perpetuamente en tutela, sin disponer de su libertad, también en aquella ocasión surgieron en las esferas del poder dificultades para que aquella inmejorable disposición de los pueblos diese los debidos frutos.

El compromiso con los radicales exigía á juicio de los republicanos del gobierno la disolución de las Juntas, como garantía de la lealtad y sinceridad de sus propósitos, única razón que podía alegarse, puesto que los motivos de legalidad no debían ser tenidos en cuenta tratándose de un hecho esencialmente revolucionario, ni podían invocarse los de orden público, que no existían, dado el inmejorable espíritu de los pueblos y la dócil adhesión de los únicos que pudieran haberlo perturbado con su negativa á entregar la autoridad que tenían. Por otra parte, no necesitaban los republicanos dar garantías de sinceridad, porque la misma candidez con que procedían en sus relaciones con los nuevos aliados debía ser para éstos prueba bastante de que no podían temer deslealtades.

Pero sea como quiera, se creyó casi compromiso de

honra disolver las Juntas, y al cabo de tiempo y después de algunas resistencias se disolvieron, ni más ni menos que sucedió en 1868. Quedaba, pues, constituida una legalidad revolucionaria, sin Juntas ni nada que acusase semejante carácter, y confundiendo lo pacífico con lo legal, se encerró aquella revolución, si quiera fuese interinamente, en los moldes de una legalidad monárquica sin monarca. Tal era el absurdo estado constituido á raíz de la desaparición de D. Amadeo de Saboya.

El marqués de Santa Marta, que tuvo en aquellos sucesos la intervención que correspondía á su posición en el partido federal y á su carácter de diputado, dentro de los forzados límites que á la acción de todos imponían entonces las circunstancias, vió desde luego que la República venida en tales condiciones, lejos de nacer pujante y poderosa como pudo creerse, nacía debilitada y con el vicio de origen de haber sido aceptada por los partidos no republicanos como una imposición de los acontecimientos. Pero se estaba delante de un hecho consumado, contra el cual nada podían la previsión de los hombres ni la voluntad de éstos. No era, pues, ocasión de discurrir ni de discutir sobre lo que debiera haber sucedido, ni era digno ante la angustiosa premura de las circunstancias, perder lastimosamente el tiempo en estériles lamentaciones: lo que interesaba y urgía sobre todo era buscar los medios de fortalecer en lo posible aquella República, poniéndola en condiciones de seguridad, no solo contra

los enemigos exteriores, por decirlo así, ó sea del campo monárquico, sino también contra los que desde dentro de ella podían combatirla, desviándola de su camino, y ya que no se hubiera logrado realizar por de pronto el ideal completo del partido republicano histórico, facilitar su realización en término breve.

Para este fin era de influencia decisiva las condiciones en que había de constituirse el nuevo gobierno y el carácter de las personas llamadas á formarlo. Había que trabajar en aquella obra con un pie forzado, el de la coexistencia de los dos partidos, el radical y el republicano, y, por consiguiente, con la aquiescencia y aprobación de los radicales. Entre éstos, quien á juicio del marqués de Santa Marta podía responder mejor por sus antecedentes y sus prestigios al fin deseado, era Rivero, hombre de abolengo democrático, y en quien su breve contacto con la monarquía no fué bastante á despojarle de su significación, y tenía además el mérito de haber impuesto con su autoridad en la obra legislativa de los monárquicos las soluciones de la democracia. Y como Rivero, si había transigido con la monarquía democrática, obra suya por decirlo así, no podía transigir con ninguna otra, y para él la República había de ser como el ideal definitivo, de aquí que su nombre fuese aceptado por los federales como una especie de garantía contra las veleidades de abolengo, procedentes del partido radical, que formasen parte de la nueva situación. El marqués de Santa Marta, no obstante haber combatido enérgica-

mente las apostasías que cometió Rivero al ingresar en el campo monárquico, según hemos visto al tratar de su campaña en las Cortes Constituyentes, fué de los que con más fe trabajaron por esta solución, que no podía ser sospechosa á los radicales y que para los republicanos era, por las razones dichas, muy aceptable y tal vez la única conveniente para la pacífica solución del problema planteado el día 11 de Febrero. Dentro de la forzada situación creada á los republicanos, éstos encontrarían con Rivero más facilidades que con cualquier otro, siquiera para garantizar la libertad en los comicios y sostener la interinidad, sin dificultades graves, hasta la reunión de la Asamblea.

Pero como si la República estuviese condenada á pasar por toda clase de pruebas, el mismo Rivero, con uno de los arrebatos propios de su vehemente temperamento, se encargaba de echar por tierra todos los cálculos y de frustrar los trabajos hechos con el mejor éxito, desbaratando una solución aceptada ya por todos.

Rivero, presidente del Congreso, continuó siéndolo de la Asamblea después de fusionarse en ella los dos Cuerpos colegisladores. Como observara que el señor Ruiz Zorrilla intentaba demorar la votación de la proposición proclamando la República, y pedía al efecto que se nombrase un gobierno que respondiera del orden público, Rivero dijo que él respondía de ese orden con la cooperación de los ministros dimisionarios del último gabinete de D. Amadeo. Ruiz Zorrilla, como

presidente que había sido de aquél, se negó á ir al banco ministerial, aunque así lo acordase la Asamblea. Rivero entonces, depositario del Poder Supremo, como presidente de la Asamblea, que revestía el carácter de Convención Nacional, *mandó* á los ministros salientes, en nombre de ésta y de la patria, que ocupasen el banco azul para ejercer las funciones del gobierno mientras elegía otro la Asamblea. Pidieron Zorrilla y Martos la palabra en son de protesta; negósele el presidente al principio, se la concedió luego ante la actitud y los murmullos de desaprobación de la Asamblea, no sin declarar antes que si ésta no quería escuchar sus explicaciones, abandonaría el sitio, y después de pedir en tonos más suaves á los ministros que ocupasen el banco azul, habló el Sr. Martos. Dolióse éste de la resistencia que opuso el presidente á que usase de su derecho como diputado, «resistencia indebida—dijo—porque no está bien que contra la voluntad de nadie parezca que empiezan las formas de la tiranía el día que la monarquía acaba». Aplaudió la Asamblea estas frases, y Rivero, juzgándose desautorizado, abandonó la presidencia y el Congreso, negándose resueltamente á admitir cargo alguno.

Este incidente, que interrumpió el debate de la proposición proclamando la República, y que pudo evitarse sin la prisa de Ruiz Zorrilla por ser sustituido y sin la vidriosa ó calculada susceptibilidad de Martos, descompuso la combinación acordada, por la cual se hubiera constituido un gobierno bajo la presidencia de

Rivero y con menos elementos radicales, pasando el Sr. Figueras á la presidencia de las Cortes. Los que trabajaron en este sentido sufrieron una dolorosa sorpresa, y temieron desde luego por las consecuencias de lo que, en definitiva, no fué más que un triunfo personal de Martos sobre Rivero, tal vez nada más que un desquite del amor propio.

El marqués de Santa Marta vió desde luego lo que esto significaba y los peligros que traía envueltos esta preponderancia del antiguo discípulo de Rivero, y creyó que la mejor manera de conjurarlos era impedirle llegar á la encumbrada posición en que quizá tenía ya puestos los ojos, y trabajar en el sentido de alejarlo de la presidencia de la Asamblea y de un puesto importante en el gobierno, á lo cual ayudaba el hecho de encontrarse en la presidencia el Sr. Figuerola, al que por su carácter de presidente del Senado y el prestigio que disfrutaba en su partido no se podía negar el derecho á suceder á Rivero. Así ocurrió, siendo poco después aprobada la proposición pendiente y acordada como forma de gobierno la República, dejando á unas Cortes Constituyentes la tarea de organizarla y formado el Poder ejecutivo en esta forma:

Presidente, D. Estanislao Figueras; Estado, Castellar; Gobernación, Pí; Gracia y Justicia, Salmerón; Fomento, Becerra; Hacienda, Echegaray; Guerra, Fernández de Córdoba; Marina, Beranger, y Ultramar, Salmerón (D. Francisco).

Ocupado el banco ministerial por los elegidos, Fi-

guerras, como presidente, usó de la palabra para dar gracias á la Asamblea por la confianza que había depositado en él y sus compañeros y manifestar su firme resolución de ocurrir á todas las necesidades del orden público, añadiendo lo siguiente respecto de la situación especial de los antiguos republicanos:

«Los miembros de este gobierno nacional que pertenecemos al antiguo partido republicano, tenemos sobre esta forma de gobierno y de la manera como ha de desarrollarse, ideas que todos vosotros conoceis.

«Por necesidades del momento hemos hecho el sacrificio de estas ideas, dejando á las próximas Constituyentes que desarrollen la forma definitiva de la República, y para que esto se pueda verificar de una manera estable y para que el voto de la nación nunca pueda ser falseado, es preciso ante todo una gran sinceridad y una gran libertad electoral, y nosotros estamos resueltos, todos mis compañeros y yo, á hacer que la más amplia libertad reine en las próximas elecciones.

«Si el resultado de estas elecciones no fuera completamente conforme con nuestros principios, en relación á la manera como creemos nosotros que debe constituirse la República, todos vosotros teneis testimonio de la consecuencia de nuestra vida política, y hablo solo en nombre de mis antiguos compañeros del partido republicano, podeis estar seguros que de este banco pasaríamos inmediatamente á aquellos (señalando á los bancos de la izquierda) donde tantos años hemos permanecido.»

De esta manera tenían que presentarse los únicos vencedores en aquel acontecimiento. Excepto ellos, los demás, cada cual por diferentes causas, todos eran vencidos; la República se impuso á todos; la victoria correspondía de derecho á los republicanos. Y á pesar de todo, los republicanos se presentaban como dóciles auxiliares, sometidos incondicionalmente á las contingencias de un porvenir que abandonaban á manos ajenas, pudiéndolo tener en las suyas. No se puede presentar ejemplo mayor de nobleza, de desinterés, y forzoso es decirlo, de debilidad, ya que la debilidad fué su pecado, pues por debilidad se estableció primero en malas condiciones la República y se perdió después.

El marqués de Santa Marta veía con profundo dolor cómo iban fracasando por fortuitas complicaciones de las circunstancias todos los planes elaborados por el patriotismo y el interés de la República, cual si pesase una maldición sobre este desventurado pueblo. Para que todo se complicase más fué elegido presidente de la Asamblea Martos, que tuvo siempre la desgracia de llevar consigo á todas partes la discordia, y que no era por sus condiciones de carácter el más á propósito para suavizar los rozamientos que necesariamente habían de surgir, dado el dualismo de la situación, así como tampoco era Figueras, por la misma condición apacible de su carácter, el más á propósito para mantener con la debida energía los fueros de la República y los derechos y la autoridad de los republicanos en aquellas difíciles circunstancias.

Por eso la labor que el interés supremo de la República, que era el de la patria, imponía á los republicanos llamados, como el marqués de Santa Marta, á influir en la política republicana, era el de suplir con sus iniciativas las deficiencias del Poder ejecutivo y contrarrestar las demasías que en el legislativo pudieran surgir á causa de las especiales condiciones de carácter de su nuevo presidente.





CAPITULO XIV

Dificultades de la situación por causa de las condiciones en que se proclamó la República, á juicio del marqués de Santa Marta.— Modo de apreciar éste el estado de cosas durante el gobierno de coalición.—Aclaraciones acerca del verdadero concepto de aquella transacción en armonía con el criterio del marqués de Santa Marta y del compromiso con los radicales.—Consecuencias de la exagerada lealtad de los republicanos.—Conducta de los radicales.—Concepto mantenido por el marqués de Santa Marta sobre el carácter de la política republicana en aquel período.—Su actitud.—Situación difícil que se le creaba por la conducta del gobierno.—Su resolución de mantener la independencia de sus opiniones.—Conducta prudente y previsora ante la gravedad de las circunstancias.—Su intervención en los sucesos del 23 de Febrero.

AN cuanto se constituyó el primer ministerio de la República se ofreció al marqués de Santa Marta el gobierno civil de Madrid. Los republicanos antiguos veían en este nombramiento una garantía, así para la buena marcha de la administración de la provincia, como contra las asechanzas de la reacción. Por su parte los radicales, aunque viesan con recelo la significación avanzadísima del marqués de Santa Marta, no podían menos de reconocer que su nombre era altamente simpático al pueblo y muy respetable para las clases conservadoras.

Por su parte, D. Enrique Pérez de Guzmán, recono-

ciendo que el puesto que pretendían desempeñarse era altamente honroso, y sintiéndose con sobradas energías y buenos deseos para ejercerlo dignamente, resolvió no aceptarlo, pues comprendía que era un puesto al que seguiría bien pronto su entrada en el ministerio, y como en modo alguno quería ser poder, opuso rotundas negativas á los cariñosos ruegos así de Figueras y Pí y Margall, como de las muchas personas que le hubieran visto con verdadera satisfacción al frente de tan delicado cargo.

A un hombre como el marqués de Santa Marta no había de halagarle el poder por las ventajas materiales que pudieran irle anejas, pues su posición personal ha sido siempre de las más brillantes, y en cuanto á las satisfacciones de la ambición satisfecha, tampoco podían atraerle, porque no es ambicioso. Quería ver triunfantes las ideas á que desde su juventud venía rindiendo ferviente culto; pero en su sincera modestia no se creía llamado á lograr por sí ese triunfo y prefería dejar íntegra á los demás la satisfacción y la gloria de ser los fundadores de la República española. Hombre de lucha, no habría rehusado los puestos de más peligro cuando el oleaje de la revolución y los ataques y perfidias de los reaccionarios hicieran preciso desplegar extraordinarias energías para llevar á puerto seguro la nave de la República; pero nada de esto se observaba en aquella situación tranquila y calmada en demasia, y al Marqués no podía halagarle aquella paz que tenía algo de siniestra, tal vez porque la fe revo-

lucionaria se debilita en los pueblos cuando no ven grandes arranques en sus caudillos.

Este singular aspecto que ofrecía la República al aparecer sobre el horizonte de nuestra patria, no como un sol lleno de fuego y vida, sino como un satélite resquebrajado y yerto, impresionó mal al marqués de Santa Marta, y como no estaba ni podía estar conforme con la alianza entre republicanos y radicales, creyó que en conciencia debía dejar á otros hombres colocados en situación de espíritu más optimista, cargos que él habría desempeñado siempre con la rectitud, energía y celo propios de su carácter, pero en aquellas circunstancias con muy poca fe. Otra hubiera sido su actitud ante una situación francamente republicana: el peligro de gastarse y perder su popularidad no le habría impedido intervenir en la dirección de los negocios públicos con la autoridad que le daban su historia, sus sacrificios y su experiencia.

Pero, teniendo en cuenta la situación de las cosas, no era el marqués de Santa Marta de los que se forjaban ilusiones acerca del porvenir de la República, pues de sobra conocía que en las condiciones en que se planteaba el problema de su existencia, y en la situación de mútua desconfianza y de recíprocos celos en que vivían forzosamente ligados hombres y agrupaciones que el día anterior se miraban como enemigos y eran en realidad incompatibles por sus ideas, no podía esperarse ningún resultado feliz. Aun prescindiendo de la federación, manteniéndola como un ideal

lejano, ó si se quiere, como una esperanza sostenida y asegurada por la proximidad de un triunfo probable, aun en este caso, los futuros destinos de la nación se presentaban cubiertos de sombras; el establecimiento de un sistema asentado sobre sólidas bases democráticas, se ofrecía rodeado de dificultades y peligros á los ojos de todo el que, como el marqués de Santa Marta, llevase el escalpelo de su análisis al fondo de las cosas, sin detenerse en la superficie.

Desde los primeros instantes hubo empeño en hacer pasar como axioma indiscutible que la República había venido por una transacción entre los antiguos y los nuevos republicanos, lo cual estaba muy distante de ser cierto. Hay transacción cuando las partes interesadas ceden en poco ó en mucho de sus ideas ó de sus derechos respectivos; pero no puede decirse que se transige cuando la cesión es de una parte voluntaria y de la otra impuesta por las circunstancias; cuando una de las partes, pudiendo mantener la integridad de su derecho, cede en algo, y la otra no cede sino en lo que de todos modos ha de ceder, con acuerdo ó sin acuerdo, porque entonces falta la reciprocidad y falta la voluntad.

Los republicanos históricos, que habían sido siempre federales, hasta el punto de ser entre nosotros sinónimos república y federación, abdicaron de principios fundamentales de su doctrina, mientras los radicales, sin trono y sin rey, no tuvieron que ceder en nada; en vez de transacción hubo un verdadero con-

trato leonino, en el que los republicanos de abolengo, no sólo sacrificaron lo fundamental de sus doctrinas, sino que se dejaron imponer las soluciones doctrinarias de los monárquicos, que á falta del monarca, simbolizaron la autoridad real en el Estado, encubriendo el fondo de su organización monárquica con el nombre de República: ni más ni menos. Lo único en que hicieron como que transigían los monárquicos fué en el cambio de nombre, impuesto contra su voluntad por la fuerza de las cosas, y si esto llevaba consigo el procedimiento esencialmente revolucionario de la proclamación de la República por las dos Cámaras reunidas, violentando la ley fundamental, debieron aprovecharse de ello los republicanos, y al no hacerlo así faltaron á lo más elemental de los procedimientos políticos, sin que bastaran á cohonestar semejante falta de previsión, que fué la sentencia de muerte de la República, los compromisos contraídos anteriormente con algunos elementos para acelerar la caída de la monarquía.

En este sitio conviene dejar consignado que aparte el buen deseo y la intención de los republicanos que entraron en aquellas inteligencias, no merece tanto aplauso su conducta, con la que se acreditaron de imprevistos políticos.

No se necesitaba ser muy lince ni tener extraordinaria perspicacia para comprender que aquel trono, caía inevitablemente, y siendo así, el contraer compromisos con sus partidarios era sencillamente atarse

de manos ante sucesos que debían encontrar á los republicanos en completa independencia de acción por el interés de la República.

Pero colocadas las cosas en la situación en que quedaron por torpezas anteriores y por debilidades del momento, la situación de los republicanos era la de sometidos, á juicio del marqués de Santa Marta, y aquella situación era tanto más grave cuanto que los monárquicos recién convertidos por la fuerza de los hechos, procuraban explotar habilmente los menores incidentes, propios de circunstancias semejantes, y en aquellas muchas veces ó casi siempre provocados por la poca energía de los jefes republicanos. Así, no contentos los radicales con la increíble concesión obtenida y con el inverosímil triunfo conseguido cuando ellos eran los derrotados, no desperdiciaban ninguno de los pretextos ofrecidos por la actitud de los pueblos, que se llamaban á engaño ante aquel simulacro de República; no desaprovechaban ocasión para pedir, y lo que es más triste, para obtener, no concesiones nuevas, porque después de la completa abdicación realizada no cabía más, sino verdaderos actos de sumisión humillante, que sellaran más y más la vergonzosa dependencia en que tenían á la República. La lealtad caballeresca é impropia de esta época de positivismo práctico, de que hacían gala los republicanos, no les permitía distinguir el abismo adonde caminaban, arrastrando hacia él las instituciones democráticas aun antes de tomar éstas forma en las leyes de la nación, llevando

su ceguedad hasta el punto de desoir las excitaciones de los verdaderos amantes de la República, que veían más claro el fondo de aquella política, verdadera conspiración desde el principio hasta el fin por parte de nuestros aparentes aliados contra las instituciones republicanas. Ya que los hombres del Poder Ejecutivo prescindieran de las pretensiones formuladas con más ó menos vehemencia, incitándoles á concluir con aquella situación insostenible desde su primera hora, estableciendo por un golpe de mano y sin consideración á nada ni á nadie una verdadera situación republicana; ya que resistieran tenazmente estos estímulos, conducta que no vituperamos siquiera estuviese poco conforme con los anhelos de la patria, porque, sea como quiera, se habían contraído compromisos y debían respetarse, al menos debieran haber escuchado las sensatas amonestaciones y las sanas advertencias de los espíritus sinceramente republicanos para no ir tan lejos en la docilidad ni en las concesiones, pues la lealtad á la palabra empeñada no excluye la previsión ni la cautela en la conducta, máxime cuando la fidelidad de los aliados no estaba, ni mucho menos, garantizada por su historia.

El marqués de Santa Marta creía que dentro de las condiciones impuestas por los hechos consumados, contra los cuales es inútil toda rebelión y contraproducente toda porfía, la política de los republicanos dentro del gobierno debía girar sobre el principio de mantener á toda costa la República, resistir toda pretensión

que tuviese por objeto desviarla de su camino, sostener el *statu quo* hasta la reunión de las Cortes, pero aprovechar todas las coyunturas para revestir la organización política de las garantías de la democracia, preparando hábilmente el terreno para hacer fácil la tarea de las Cortes Constituyentes.

El sistema de la transacción en todo llevaba irremisiblemente al abismo, y á él se caminaba. El marqués de Santa Marta, que con laudable previsión rehuyó participaciones activas en el gobierno, cuando no solo le era fácil obtenerlas, sino que había sido solicitado por sus amigos para aceptarlas, queriendo conservar su independencia de criterio y aun la de acción si fuera preciso, tuvo el disgusto de ver desatendidos los saludables y prudentes consejos que su patriotismo le inspiraba y el de verse cohibido por consideraciones políticas muy atendibles en la independencia con tanto afán conservada en medio de tantos y tan diversos estímulos.

En efecto, solo un carácter excepcional podía salir airoso de la crítica situación creada por el tímido proceder de los jefes á los republicanos, y muy especialmente á los que asumían las delicadas responsabilidades que su autoridad y cargo en el partido imponían al marqués de Santa Marta. Ciertamente que él y los que en sus condiciones se encontraban habían sido ajenos á los compromisos causa de cuanto sucedía, y esto les colocaba en posición de gran desembarazo; pero por otra parte les contenía la grave responsabilidad de

contribuir con sus actos á debilitar las fuerzas de su representación en el gobierno, necesitando tantas para luchar sin perder terreno, ya que no se ganase, con los elementos advenedizos. No cuadraba á hombres de la altura del marqués de Santa Marta provocar excitaciones, que hubieran sido graves dada su autoridad en el partido y la actitud de las masas; antes por el contrario, el patriotismo y la prudencia imponían el deber de calmar los ánimos para no aumentar con nuevas dificultades las que á cada paso surgían; pero esta actitud prudente favorecía los planes de los monárquicos, que no encontrando resistencia en sus compañeros de gobierno y viendo que éstos se apresuraban á desvanecer con energía las que suscitaba fuera el entusiasmo generoso y las nobles impaciencias populares, se atrevían ya á todo y osaban imponer condiciones al vencedor.

En este conflicto, el marqués de Santa Marta resolvió irrevocablemente rechazar toda participación oficial en la política mientras durasen aquellas circunstancias, para ser más útil á su partido desde su situación independiente, porque como ha dicho en muchas ocasiones, para servir y favorecer la causa republicana, no ha necesitado ejercer cargos de más ó menos dignidad; le ha bastado y le basta con su inextinguible amor á la idea, con su fervoroso entusiasmo para sacrificar en sus aras cuanto el interés de su causa exija y necesite.

Muchos republicanos imitaron la conducta del Mar-

qués, y se dió el espectáculo de ver cómo los más activos propagandistas, los más fieles soldados, los más decididos defensores de la República huían como de lugares apestados de los centros oficiales, precisamente cuando hallándose sus amigos en el poder, á ellos correspondía, no ir á aprovecharse de las ventajas de de los empleos, sino ocuparlos para dirigir y defender desde ellos la política republicana; y mientras esto sucedía, los representantes del partido que formaban parte del gobierno, en vez de solicitar la ayuda de sus correligionarios, de exigirla, casi veían con gusto este apartamiento, porque era una dificultad menos para las exigencias de los radicales, que se repartían entre tanto el presupuesto como pan bendito y se parapetaban en las más importantes posiciones, haciendo de cada nombramiento una cuestión de gabinete y provocando una batalla para cada credencial.

La excesiva caballería de los republicanos fué por ellos considerada como debilidad de éstos, como síntoma de poca confianza en sus fuerzas y en el apoyo de la opinión, y como por otra parte la actitud de reserva ó en apariencia hostil de otros elementos republicanos les servía de pretexto para exigir nuevas concesiones en nombre del interés social y del orden público, que suponían gravemente amenazados, no es maravilla que se creyesen los más fuertes.

Ellos sabían demasiado bien que el advenimiento de la República no había producido hasta entonces más que un mero cambio de nombres, y como el nombre

no es lo esencial, y como mientras la organización política no cambiase era posible restaurar la monarquía, tenían interés en que el *statu quo* se mantuviese indefinidamente, y para conseguirlo lo primero era apoderarse del gobierno, excluyendo de él á los republicanos.

Estos, por su parte, se preocupaban principalmente de mantener el pacto con los radicales hasta llegar á las Constituyentes, y así se explica que suponiendo en el adversario la sinceridad propia, juzgando el corazón ajeno por el propio, se dejasen sorprender por ellos, cosa que no hubiera sucedido de seguir la conducta que el marqués de Santa Marta había formulado muchas veces, glosando un pasaje del Evangelio: «Con los radicales debemos ser sencillos como las palomas en cuanto al cumplimiento de los compromisos ya adquiridos; pero también debemos mostrar la cautela de la serpiente respecto de cuanto digan, propongan ó hagan.»

Y en efecto, poco tardó en verse de una manera palpable que esta era la única fórmula de la política con aquel partido para no vernos sujetos por los lazos de su astuta audacia. Habían visto que las Juntas revolucionarias se habían disuelto en su mayoría á la primera indicación del gobierno; que las más reacias habían sido conminadas con la violencia por los ministros republicanos y habían cedido; que habían sido repuestos todos los Ayuntamientos radicales cuando ellos mismos no se habían considerado con derecho á ejer-

cer la autoridad dentro de la República; que las cosas, en una palabra, habían vuelto al ser y estado que tenían antes de renunciar Amadeo la corona. Tenían suyos los Ayuntamientos, las Diputaciones, los cargos públicos más importantes; suyos el ministro de la Guerra, los generales con mando, y ¡oh colmo de la previsión! para no tener ni un solo lado débil, habían obtenido el relevo del general Moriones, que mandaba el ejército del Norte, suponiéndole en actitud poco segura; habilidad con que lograron traer á Madrid á este general de toda su confianza, para los fines que se verá más adelante. Lo creyeron todo en su punto para dar el golpe de Estado que había de hacerles dueños absolutos y únicos árbitros del poder, y el 23 de Febrero, aun no cumplidos diez días de la proclamación de la República, plantearon la cuestión en el Consejo los ministros radicales, diciendo que no podían seguir en el gobierno sin saber cuál era el grado de federalismo de los republicanos, triste recurso que prueba la lealtad de éstos, pues no pudieron hallar otro motivo que esa especiosa excusa y la deslealtad con que correspondía. Se les contestó, como era natural, que el grado de federalismo de los republicanos no hacía al caso, puesto que no se trataba de aplicarlo por aquel gobierno; que esto pudo ser cuestión antes de formarse, pero no cuando se constituyó con la única misión de llegar hasta la reunión de las Cortes, que eran las llamadas á resolver en todo caso. Los radicales no se dieron por convencidos y la crisis quedó

planteada desde aquel instante. ¿Cómo habían de darse por convencidos si ese era el pretexto para llevar á cabo la mayor deslealtad que registran nuestros anales políticos?

En una reunión celebrada pocos días antes á espaldas de los republicanos, se había acordado constituir un gobierno republicano unitario de radicales y sagastinos, bajo la presidencia del general Serrano, creando una situación de fuerza, para lo cual Martos, presidente de la Asamblea, nombró ilegalmente, sin conocimiento del gobierno, capitán general de Castilla la Nueva á Moriones, que para eso había venido á Madrid.

Al tener noticias de la crisis ministerial se produjo la agitación consiguiente en aquellas circunstancias, y los conspiradores se previnieron, ocupando secretamente el ministerio de la Gobernación por 400 guardias civiles, y el Congreso por tropa á las órdenes del general Moriones. Preguntada por los ministros á Martos la causa de aquel aparato de fuerzas, el presidente de la Asamblea, no se sabe por qué causas, se turbó, y en vez de mantener sus decisiones con entereza correspondiente á la audacia de aquel proceder, se deshizo en disculpas, asegurando que no había sido él, sino el ministro de la Guerra quien había dispuesto la ocupación militar del ministerio de la Gobernación y del Congreso. Pero un diputado entró entonces en el salón de la presidencia, donde se efectuaba esta escena y leyó la orden de la plaza, nombrando al gene-

ral Moriones capitán general de Castilla la Nueva. Con semejante prueba Martos quedó anonadado, descubierta la trama y convictos de deslealtad los radicales. Ante los justísimos cargos que se le hicieron, lo confesó todo y se prestó á proponer á las Cortes que se nombrase aquella misma tarde un ministerio homogéneo republicano, como lo hizo, dejando estupefacta á la mayoría radical, que iba dispuesta precisamente á lo contrario: á salir de la Asamblea dejando el poder en manos de un gabinete homogéneo de su partido.

Los motivos que movieron á Martos á proceder de aquel modo contra lo decidido en aquella conjuración, se traslucen en estas palabras del discurso pronunciado aquella tarde en la Asamblea: «Las circunstancias son bastante extraordinarias para que yo explique lo extraordinario de lo que estoy diciendo aquí. Yo digo que el partido radical solo en el poder acaso simbolizaba una batalla en Madrid esta misma noche; batalla breve, que estábamos seguros de ganar prontamente; pero batalla sangrienta y terrible, que debíamos evitar por bien del país, por humanidad, por amor á la libertad...»

Los radicales de la Asamblea hicieron esfuerzos para evitar la caída; pero esta era inevitable desde que la conspiración quedaba al descubierto. Se constituyó, pues, un gobierno homogéneo de republicanos, que obtuvieron por el instante aquel triunfo, que no se debió ciertamente á nuestra previsión, puesto que nadie conocía la conjura de los radicales, ni se había

hecho nada para sofocar aquella rebelión, ni los mismos ministros escaparon de ser presos sino por la excesiva confianza que se tenía en la pueril candidez de que tantas pruebas habían dado los republicanos. A estos hubo de añadirse después la falta de valor en el presidente de la República y el miedo de los radicales, que temerosos de ser todos sacrificados en aquella batalla de que habló en su discurso el presidente, por la justa indignación popular, cedieron ante aquel temeroso peligro y consintieron en aquel efímero triunfo de los republicanos, sin perjuicio de utilizar los elementos que aún les quedaban para nuevas tentativas en el porvenir.

El marqués de Santa Marta fué uno de los pocos que llegaron á tener alguna noticia de lo que se tramaba, y á su energía debió no ser preso cuando se dirigía á la Cámara á dar cuenta á sus correligionarios, y cuando vió que los hechos venían en confirmación de sus previsiones, una vez más alzó su voz para aconsejar á sus amigos aquella enérgica prudencia que debe ser la cualidad eminente de todo buen gobernante, y cuando vió terminado el conflicto de la manera dicha sintió verdadera alegría, creyendo en su buen juicio que aquella lección sería debidamente aprovechada por sus correligionarios y que la República entraría en una nueva fase de su existencia, más desembarazada, más libre, más enérgicamente democrática.





CAPÍTULO XV

Estado de la República después del 23 de Febrero.—Conducta de los radicales.—Proceder del gobierno.—Decepción del marqués de Santa Marta por la política de contemporizaciones.—Su oposición á ella.—Es nombrado delegado del gobierno de la República para administrar el antiguo Patrimonio de la Corona.—Sus manifestaciones favorables á procedimientos de energía.—Su intervención para evitar conflictos peligrosos para la suerte de la República.—Sus opiniones respecto de la disolución de la Asamblea y de la Comisión permanente.—Grave situación del país al suspenderse las sesiones de Cortes.—Sucesos posteriores.—Antecedentes de la conspiración del 23 de Abril.—Intervención del marqués de Santa Marta en los acontecimientos de aquellos días.—Disolución de la Comisión permanente.—Renacen las esperanzas de los republicanos.



ESGRACIADAMENTE fué muy poco duradera la satisfacción del marqués de Santa Marta por la victoria parlamentaria del 24 de Febrero, pues la conducta de los radicales vino á demostrar enseguida que no se reconocían definitivamente vencidos. La agitación producida en Barcelona por la deslealtad de algunos jefes del ejército, que estuvo á punto de provocar graves sucesos, conjurados por fortuna, pero que habían reconocido precisamente por causa la inercia dominante en las regiones del gobierno por la obstinada lealtad de sus hombres en cumplir el pacto roto

por los radicales, sirvió á éstos para hostilizar el Poder Ejecutivo, haciendo á sus individuos blanco de enconados ataques, y pidiendo á cada paso explicaciones acerca del concepto que tenían de la República, para saber si los radicales debían arrepentirse ó no de su propia obra. Demasiado demostraban con su conducta su pesar por no haber podido conducir á término dichoso sus maquinaciones, y daban á la vez testimonio de su impenitencia, entorpeciendo de todos modos la marcha del Poder Ejecutivo en las Cortes, haciendo oposición á cuantos proyectos se presentaban, creándole fuera todo género de conflictos, promoviendo organizaciones particulares de defensa, como si la sociedad se viese amenazada de inminente ruina, y añadiendo á esta conducta desleal la conspiración, no ya con los monárquicos de la revolución, sino con los partidarios de D. Alfonso.

El gobierno, con la mejor buena fe, contribuía á aumentar las dificultades y peligros de semejante situación, porque creyéndose obligado á encerrarse en una legalidad estricta, creyendo desarmar de este modo á los enemigos, encrespaba las olas populares, cada día más impacientes al ver la atonía que reinaba en las esferas oficiales.

El marqués de Santa Marta, á quien colocaban en muy difícil situación las solicitudes de sus correligionarios, tenía que violentarse constantemente para no ser germen de discordia en aquel revuelto torbellino de pasiones y de deseos. Comprendiendo la justicia

con que pedían los unos, se esforzaba en calmar sus ímpetus para evitar que fuesen los mismos republicanos un nuevo ariete contra la República, y creyendo por otra parte que en aquellas circunstancias se imponía una política de energía y resueltamente democrática, sin aplazamientos ni contemplaciones, contemporizaba con los hombres del gobierno, esperando aun de su amor á la República un rasgo que salvase á todos del abismo abierto á nuestras plantas.

Apenas se hubo constituido el gobierno homogéneo, se fijó la opinión de los republicanos en el marqués de Santa Marta para la representación de España en París, cargo diplomático el más importante de todos, que estaba vacante por la diinisión de D. Salustiano Olózaga. No pensó en ocupar aquel puesto el marqués de Santa Marta, principalmente porque deseaba estar á la mira de los acontecimientos que habían de desarrollarse en su país, convencido como estaba de que fuera del gobierno podría prestar á la República tantos servicios como siendo embajador ó ministro.

Entonces se le rogó aceptase la delegación del antiguo Patrimonio de la Corona, cargo que exigía una actividad infatigable y un celo á toda prueba, pues comprendía una serie de asuntos, para el buen despacho de los cuales apenas habría bastado el personal de dos ó tres ministerios. Se le pidió al Marqués admitiese la delegación por el buen nombre de la República española, pues eran terribles las inmundidades administrativas que se habían cometido en la gestión del

Patrimonio desde la revolución de Septiembre, y hacía suma falta el carácter tan escrupulosamente severo y la competencia administrativa del marqués de Santa Marta, unidos á la confianza absoluta que su honradez y su posición le habían granjeado en todas las esferas sociales, para que la administración del Patrimonio entrase en orden.

Después de resistirse mucho tiempo y vencido, más que por los ruegos de sus amigos, por las reflexiones, harto motivadas por desgracia, que le hicieron en nombre de la moralidad que debía ser la enseña de la administración republicana, aceptó al fin el marqués de Santa Marta tan difícil y penoso puesto, mas con la condición de no admitir sueldo ni emolumento de ninguna especie y de tener amplia libertad para corregir con mano dura toda clase de abusos. La delegación del Patrimonio fué, pues, para el marqués de Santa Marta un durísimo sacrificio, pero que acrisoló su honradez ejemplar y puso de relieve sus brillantes condiciones de hombre de administración. Como más adelante hemos de consagrar á la gestión del Marqués en ese alto puesto un capítulo especial, nos limitamos aquí á estas breves indicaciones.

Poco después de haber aceptado la delegación del Patrimonio y antes de que tomara posesión de ese cargo, se le indicó por el gobierno que aceptase la presidencia de la Comisión española en la Exposición Universal de Viena, cargo el más brillante y elevado de que á la sazón disponía el gobierno y que aspiraba

á ejercer el duque de Osuna. El marqués de Santa Marta lo renunció sin vacilación alguna, y entonces el capitán general D. Manuel de la Concha, que en nombre del duque de Osuna esperaba la resolución del marqués, participó ésta al citado duque, el cual fué nombrado para aquel puesto.

Para renunciarlo tuvo en cuenta el marqués de Santa Marta, no sólo la razón de delicadeza de que habiendo ya aceptado la delegación del Patrimonio podría creerse que tomaba el nuevo cargo por parecerle mejor, sino también la conveniencia para su partido de no abandonar Madrid en aquellas difíciles circunstancias.

Llegó un instante en que el gobierno, convencido de la imposibilidad de subsistir con aquella Asamblea enemiga, decidióse á proponer la suspensión de las sesiones y la convocatoria de la Constituyente; mas para conseguirlo transigió de nuevo, aceptando e nombramiento de una Comisión permanente revestida de poderes y atribuciones que le convertían en una Asamblea más pequeña y por lo mismo más tiránica, por cuanto el menor número de sus individuos facilitaba su unidad de acuerdo y de acción. No era esta, ciertamente, la conducta que esperaba el marqués de Santa Marta de la resolución con que al parecer tomaba el gobierno este asunto; y como creía que los republicanos estaban en situación de imponerse y no de someterse, se manifestó profundamente contrariado, pero su amor á la República y su confianza, aparte de todo,

en la buena fe y en la lealtad de los hombres puestos al frente de los destinos públicos, le hicieron limitarse á demostrar que semejante conducta acreditaba de políticos inhábiles á los republicanos; y si la lealtad podía aún defender el sostenimiento de compromisos escandalosamente violados por una de las partes en perjuicio de la que los cumplía lealmente, no debía llegar esta lealtad mal correspondida hasta el punto de desacreditar, con una conducta incierta y vacilante, el prestigio de un sistema y la opinión de un partido, pues ambas cosas padecían con la política seguida.

Tener la Comisión permanente era, á juicio del marqués de Santa Marta, tener la Asamblea, con las agravantes que hemos dicho, y nadie imaginaba lo que podía resolverse en buen sentido para la República con este cambio; era prolongar, agravándola, una lucha peligrosa para la paz y la suerte de la patria, aplazar, con riesgo de que recayera en daño de la República, una resolución que las circunstancias habían de hacer indispensable al fin y al cabo y que en aquellos instantes tenía asegurado el éxito.

La división surgida entre los radicales vino á facilitar la resolución solicitada por el gobierno, pero también á hacerla desventajosa, porque la Comisión permanente se constituyó toda ella, aparte de la minoría federal de radicales intransigentes, excluyendo de su seno á los amigos de Martos, dispuestos á última hora benévolamente hacia el gobierno.

Si éste se creyó, una vez suspendidas las sesiones,

dueño de la libertad de acción indispensable, bien pronto pudo convencerse de la razón que asistía á los que, como el marqués de Santa Marta, se pronunciaron por los temperamentos de energía, para salvar la República de aquel parlamentarismo enojoso y perjudicial que la ahogaba, teniendo al Poder Ejecutivo en perpetua y no interrumpida tutela.

El estado del país revestía caracteres de extremada gravedad. Los monárquicos de todos matices, unidos en su odio común á la República, y señaladamente hacia aquella situación que no habían podido monopolizar, conspiraban en todas partes y tenían en la Comisión permanente un auxiliar poderoso. El gobierno necesitaba, por tanto, completa libertad de acción para proceder sin cortapisas contra los conspiradores y desembarazadamente en el desarrollo de una política en armonía con las aspiraciones populares para calmar el disgusto de los republicanos y contar con su incondicional apoyo, que no le hubiese faltado seguramente al convencerse todos de que el gobierno no sacrificaba el interés capital del partido á un compromiso contraído por la fuerza de las circunstancias y solo por él respetado, cuando los radicales habían dado repetidamente motivos para considerarlo roto con justicia. Pero precisamente se sentía el gobierno ó se consideraba, juzgando equivocadamente, más ligado en aquella ocasión por el hecho de haber apoyado los radicales el voto particular de Primo de Rivera, que vino á resolver el conflicto de la disolución de la

Asamblea, venciendo las dificultades opuestas por la mayoría á la aprobación del proyecto del gobierno.

Obedeciendo á este criterio, que solo se explica por una depresión del ánimo ante la gravedad de las circunstancias, se veía el gobierno compelido contra su voluntad y violentando seguramente los sentimientos fraternales que le debían inspirar sus correligionarios, á oponerse á las justas pretensiones de éstos, que veían á cada aplazamiento perdida la federación, con lo que se creaba un estado de tirantez que á poco se convertía en hostilidad, concluyendo por luchar abiertamente republicanos contra republicanos, dando gusto á los monárquicos y proporcionándoles ocasiones para llevar adelante sus planes.

Así se dió el caso, nunca visto en la historia, de un gobierno en pugna constante con sus partidarios, que le pedían únicamente la realización de sus ideales, de que había hecho profesión solemnísimá al ocupar el poder, mientras los enemigos de las instituciones conspiraban descaradamente. ¿Cómo no habían de contristarse ante semejante estado de cosas los hombres amantes de la República? ¿Cómo no había de sentir indignación el hombre ilustre que con tanto desinterés y tanto ardor había servido la causa republicana? Para el marqués de Santa Marta aquello venía á ser lo que sería para un laborioso cultivador la pérdida del fruto de los afanes de su vida por la incuria de sus administradores. No valía la pena, pensaban los más impresionables, de tanto esfuerzo y tanto sacrificio, una Re-

pública humillada á los pies y sometida á discreción de sus eternos enemigos. «No, decían los republicanos animosos como el marqués de Santa Marta: ante la angustia de la nación, en presencia del desengaño sufrido, no cumplimos nuestros deberes cívicos abandonándonos al desaliento ó mostrándonos arrepentidos. Este fracaso, pues tal era para los espíritus reflexivos, no demuestra sino que la República necesita mayores esfuerzos y nuevos sacrificios; realicémoslos, pues, en la medida necesaria.» Pero cada cual apreciaba de distinto modo los deberes impuestos por esta situación. Unos creían que debían suplir las iniciativas y las energías que faltaban en lo alto, organizando desde luego la República que no organizaban desde el gobierno, sin atender á las consecuencias de semejante proceder. Otros, atendiendo á los peligros que entrañaba el debilitar á los hombres encargados del poder desautorizándoles, restando fuerzas y creándoles mayor suma de dificultades, manteníanse en actitud enérgica y decidida, pero sin rebasar los límites de la prudencia. Gracias á éstos, en cuyo número se contó el marqués de Santa Marta, pudo conjurarse la actitud de los malagueños y el gravísimo conflicto de la proclamación del Estado Catalán. Los pueblos, cansados de tiranía y de opresión burocrática, no acababan de ver el remedio á sus males; los republicanos no veían tampoco manera de llegar á la federación: aquellos aceptaban toda solución que acabase con los abusos tradicionales: éstos apelaban en su desesperación á la violencia,

y de esta conjunción fueron originándose aquellas tempestades, que se hubieran evitado con una poca de actividad y decisión en las esferas oficiales.

¿Cómo no veían esto las grandes inteligencias encargadas de dirigir la política en aquel azaroso período? Esta era la pregunta que todos se hacían. Ellos, sin embargo, tan poseídos y dominados se hallaban por sus escrúpulos de legalidad, de una legalidad derogada de hecho al violar la Constitución, de donde emanaba, reunidos en uno los dos Cuerpos colegisladores; tan abstraídos se hallaban por esta preocupación, que no vieron lo que todo el mundo veía claro, lo que se les presentaba patente á su consideración por las personas más significadas del partido, ni aun al ser hostigados sin tregua por la Comisión, que un día y otro les llamaba á su seno para pedirles cuentas y censurar sus actos: fué preciso que se colocaran en abierta rebelión contra el gobierno, para que éste se decidiese al fin á proceder con energía, movido por el instinto de la conservación, disolviendo la Comisión permanente de la Asamblea; medida, que según el marqués de Santa Marta pronosticara al disolverse la Asamblea, había que tomar un día ú otro, pero había que adoptarla inevitablemente. Si en vez de hacerlo el 23 de Abril se hubiese hecho un mes antes, la causa republicana hubiera ganado una gran fuerza y sus enemigos habrían sido impotentes. Lo contrario de lo que ocurrió, pues tenían ya fuerzas y elementos que podían utilizar como en son de protesta

contra lo que ellos llamaban golpe de Estado, como si no lo hubiese sido también el 11 de Febrero la proclamación de la República.

Merecen ser conocidos los antecedentes de aquel acto, único de energía con que se señaló, aunque tarde, la conducta del gobierno y las razones en que fundaba la disolución de la Permanente, porque son la prueba más categórica de cuanto venimos diciendo.

La Comisión, que desde el 3 de Abril estaba demostrando su animosidad contra el Poder Ejecutivo, supo utilizar la agitación natural de los pueblos y la indisciplina que los mismos radicales habían fomentado en el ejército, para tener en constante entredicho á los depositarios del poder, convirtiendo cada una de sus sesiones en verdaderas batallas, acordando por fin, después de acaloradísimos debates, en los cuales pusieron de manifiesto sus intenciones, que el día 20 se celebrase una reunión extraordinaria, con asistencia de todos los ministros. El plan era reunirlos á todos en la Cámara para prenderlos, contando con la cooperación del general Pavía, que ofreció dispersar al pueblo empleando la fuerza, y entendidos con Serrano, reunir de nuevo la Asamblea para que sancionase el golpe de Estado que meditaban. La sesión no pudo verificarse por causa del fallecimiento de la esposa del Sr Figueras, difiriéndose hasta el día 23, aplazamiento aprovechado por los radicales para concluir las inteligencias con los partidos monárquicos y para disponer sus fuerzas.

Afortunadamente el Gobierno recordó lo sucedido el 23 de Febrero; tuvo la previsión, que nunca debía de haber abandonado tratándose de tales gentes, de prepararse á su vez, y en la noche del 22 quedó militarmente ocupado Madrid, posesionándose la fuerza de orden público y la milicia ciudadana de los sitios estratégicos y de los edificios públicos. Pero al mismo tiempo que se sabía que el alcalde radical de Madrid había citado á los batallones de voluntarios monárquicos á la plaza de toros para el día siguiente con el pretexto de pasar revista, acudieron algunos monárquicos, amigos particulares de los ministros, para disuadirlos de toda resistencia, porque según decían, la conspiración estaba perfectamente organizada en el ejército, aconsejándoles que se pusiesen en salvo, pues corrían riesgo sus personas. Esto era una extratagema que no obtuvo resultado, porque conocida á tiempo por el marqués de Santa Marta y otros republicanos, se procuró por medio de emisarios de toda confianza desvanecer tal ardid dando conocimiento á todos los centros y corporaciones del partido.

A las doce de la mañana del día 23 se hallaban reunidos en la plaza de toros los batallones monárquicos de la milicia en completo estado de insurrección con el general Letona á la cabeza, y en el palacio de Medinaceli el batallón mandado por Martínez Brau. El Gobierno, en tanto, mientras se dirigía al Congreso, donde esperaba la Comisión permanente entendida con los sublevados, encargó al general Car-

mona el mando de las fuerzas que habían de atacar á los de la plaza de toros, quedando el ministro de la Gobernación en su despacho para atender á las necesidades del orden público.

El marqués de Santa Marta, que durante aquella noche de terrible ansiedad apenas había descansado recorriendo los Comités y acordando medios de resistencia por si las tropas se unían á los rebeldes, visitó acompañado de amigos leales al jefe del Gobierno para ofrecer su incondicional apoyo y se dirigió á la Asamblea á fin de hallarse al corriente de los acontecimientos.

Entretanto discutíase en la Comisión permanente la convocatoria de la Asamblea, cuando se recibió aviso de que las fuerzas rebeldes de la plaza de toros habían hecho fuego al brigadier Carmona que las llamaba á la obediencia. En vista de esto, se retiraron los ministros, recibiendo al salir la noticia de que el Congreso estaba ocupado por hombres armados, introducidos allí sigilosamente, hecho de que se enteró por sus propios ojos el marqués de Santa Marta, apresurándose á dar aviso cuando ya el Gobierno se retiraba al ministerio de la Gobernación á celebrar Consejo. Se envió un general de confianza á cada cuartel y se dió la orden de romper el fuego contra los rebeldes, que dieron un nuevo testimonio de aquella rara mezcla de osadía y cobardía que era la característica de los monárquicos, entregando las armas en cuanto se convencieron de la actitud resuelta del

Poder Ejecutivo y de las tropas. La Comisión permanente se obstinó en permanecer reunida después de esta derrota; los diputados federales que pertenecían á ella se retiraron después de protestar y de haber exhortado inutilmente á sus compañeros para que siguieran su ejemplo. Ante la pertinacia de los monárquicos, el pueblo se soliviantó y agrupándose en la plaza de las Cortes, amenazó ya á la Permanente, cuyos individuos pudieron salvar sus vidas de la justa indignación popular, gracias á la diligencia con que el Gobierno acudió á ampararlos y á los buenos oficios de algunos republicanos que, como el marqués de Santa Marta, protegieron con su prestigio la retirada de los representantes.

La Comisión estaba disuelta por el pueblo y el Poder Ejecutivo no tenía más que sancionar aquel acto de legítima soberanía. Al día siguiente apareció en la *Gaceta* un decreto concebido en estos términos:

«Considerando que la Comisión permanente de las Cortes se ha convertido por la conducta y por sus tendencias en elemento de perturbación y desorden;

Considerando que ha tratado ostensiblemente de prolongar la interinidad en que vivimos.....

Considerando que con sus injustificadas pretensiones contribuyó á provocar el conflicto de ayer, aun prescindiendo de la parte directa que en él tomaron sus individuos;

.

Considerando, por fin, que era un constante obstáculo para la marcha del Gobierno de la República, contra el cual estaba en maquinación continua,

El Poder Ejecutivo decreta:

Artículo 1.º Queda disuelta la Comisión permanente de la Asamblea.

Art. 2.º El Gobierno dará en su día cuenta á las Cortes Constituyentes de lo resuelto en este Decreto ».

Tal fué el fin de aquel conflicto, y tal la confirmación oficial de lo que había previsto el marqués de Santa Marta al declararse desde el primer día partidario de los procedimientos enérgicamente revolucionarios en armonía con lo exigido por el carácter de la política desde el momento en que los mismos radicales se declararon incapacitados para ejercer el Gobierno en nombre de unas ideas que jamás profesaron sinceramente, dejando á los republicanos la tarea de continuar la obra revolucionaria de la Asamblea al decretar la República, prescindiendo de la Constitución del Estado monárquico.

La disolución de la Permanente, aplaudida por todos los republicanos de buena fe, abría á la República nuevos horizontes: el triunfo del Poder Ejecutivo le colocaba en una situación de grande independencia y el marqués de Santa Marta creyó ganada entonces la causa democrática para el bien de este desgraciado país.

Desgraciadamente, bien pronto se convenció de que eran infundadas sus esperanzas.



CAPITULO XVI

Nuevas contrariedades suscitadas por la conducta del gobierno.—

El marqués de Santa Marta proclama la necesidad de una política revolucionaria sin contemplaciones.—Fundamentos de esta opinión.—Coincidencia de este criterio con la opinión republicana y con las aspiraciones del país.—Facilidades para el ejercicio de la política de acuerdo con este sentido.—Consecuencias de no haberla realizado.—Reacción favorable producida por el triunfo electoral y la reunión de la Asamblea.—Trabajos del marqués de Santa Marta para aprovechar este triunfo.—Proclamación de la República federal.



UEVAS contrariedades esperaban al marqués de Santa Marta con la conducta del gobierno. Creía el ilustre republicano que después de aquella victoria decisiva sobre una conspiración que había roto los débiles lazos existentes entre los antiguos y los nuevos republicanos, no había más camino que el de los procedimientos decididamente revolucionarios; que no había consideraciones que guardar con rebeldes tan pertinaces ni respetos que detuviesen la acción del gobierno ni el cumplimiento de la justicia; que aquel día debió proclamarse, sin miramientos, la federación española. Para opinar así, aparte de los motivos de carácter general que aconsejaban dar á la política

republicana ese sentido desde la primera traición de de los aliados, tenía en cuenta razones muy poderosas, nacidas de las circunstancias é impuestas por la lógica de los hechos. Eran éstas la imposibilidad, declarada por el gobierno mismo en el decreto de disolución, de entenderse con los radicales ni de atraerse por de contado á las demás agrupaciones monárquicas, en conspiración permanente con los primeros, por lo cual la República debía apoyarse exclusivamente en los republicanos y, por tanto, unir á éstos, satisfaciendo la aspiración general, proclamando desde luego la República federal: la precisión de acabar con una situación interina, que quitaba fuerza y autoridad al poder y era ocasionada á conflictos frecuentes; el desprestigio del gobierno si no se apresuraba á realizar una política propia, una vez desaparecida la coalición que podía estorbarle ó detenerle, por ser impropio de políticos serios prescindir de sus doctrinas en la gobernación del país, cuando no tienen otro compromiso que el de las ideas, y sobre todo, y aparte de otras razones de índole secundaria, la imprescindible necesidad de demostrar al pueblo con trascendentales resoluciones que la República era algo más que uno de tantos nombres como encubre la torpe política tradicional de opresión y de explotaciones.

Dueños de la situación los republicanos, disponiendo de la fuerza armada, usaban de un derecho legítimo, utilizando el inmenso poder que tenían en sus manos para realizar una política que no significaba solamente

el triunfo de un partido, sino la realización de la justicia y la satisfacción de las aspiraciones del pueblo, ansioso de ver el coronamiento de la obra revolucionaria, que era para él el término de sus desdichas. Las simpatías del pueblo, la fuerza del ejército, el apoyo leal de todos los republicanos, contra menguadas parcialidades, sin arraigo ni fuerza, derrotadas sin esfuerzo y odiadas por el país; con todo eso contaba la revolución si el gobierno se hubiese decidido á ser revolucionario; todo eso se perdía si continuaba la política de indecisión y vacilaciones, causa de todas las dificultades suscitadas hasta entonces.

Otras razones de prudente previsión influían en el ánimo del marqués de Santa Marta para opinar que no debía detenerse ni un instante el establecimiento de la federación después del 23 de Abril, siendo la principal de todas la conveniencia evidente de hacerlo así para simplificar la misión de la Asamblea.

Establecida la República federal, las Cortes hubieran tenido el carácter de delegación de las provincias constituidas, para confirmar el pacto de alianza, organizando la nación sobre la base inmovible de la voluntad popular; por tanto, su tarea se hubiese ceñido á discutir la Constitución federal. Evitábase con esto el peligro de las divisiones sobre los procedimientos de gobierno, si se sometían á su jurisdicción como depositaria de la soberanía suprema, que solo en el pueblo reside. La división de los poderes, esa suprema garantía de la democracia, debía empezar á prac-

ticarse en la elección de la primera Asamblea encargada de organizar democráticamente al país, impidiendo la intervención funesta del poder legislativo en el nombramiento de los gobiernos, y así las Cortes, en vez de gastar su tiempo y sus actividades en hacer y deshacer gabinetes, se habrían consagrado exclusivamente á su tarea legislativa. La empresa era tanto más fácil cuanto que el gobierno no necesitaba para cumplirla debidamente realizar actos que hubieran podido interpretarse como usurpación de atribuciones: no eran precisos alardes de dictadura para establecer la federación por medio de disposiciones ministeriales; bastaba con que el Poder Ejecutivo, consagrándose á mantener la nación y el orden público, dejase á las provincias reunir sus congresos regionales para formar las constituciones de los organismos de la federación, que de este modo se habría realizado sin violencias, sin dificultades ni trastornos.

Tal era el pensamiento del marqués de Santa Marta, á quien no puede alcanzarse la responsabilidad de los errores cometidos al no seguir esta conducta en las esferas gubernamentales, porque, excepto la insurrección, que en su conciencia creía vedada contra sus correligionarios, utilizó todos los recursos para llevar á los ánimos de sus amigos y para que llegasen á todas las esferas, el convencimiento y la necesidad de practicar aquella política. No fué culpa suya, si, á pesar de todas sus gestiones y de todos sus esfuerzos, secundados por las excitaciones que diariamente lle-

gaban de las provincias, deseosas de oponer con la federación una valla á todas las contingencias, se siguió otra conducta muy distinta.

El Gobierno, impulsado por una equivocada buena fe, no creyó conveniente aprovechar aquel momento propicio y favorable para realizar sus ideas, satisfaciendo las aspiraciones de la opinión. Inútilmente reclamaron las provincias; inútilmente se esforzaban los republicanos influyentes, enérgicamente apoyados por el marqués de Santa Marta, en convencer á los encargados del Gobierno de que los más rudimentarios deberes políticos les aconsejaban aprovecharse de las circunstancias propicias que ningún gobernante ha desaprovechado nunca, porque ese es el ejemplo que ofrecen los verdaderos hombres de Estado de todos los tiempos y de todos los países; que el único escrúpulo que podían sentir había desaparecido con la conducta rebelde de los radicales, que contra la voluntad de los republicanos habían traído aquella situación favorable para nuestras miras; en vano se apeló á todas las consideraciones, á todas las reflexiones, á todos los argumentos y se adoptaron todas las actitudes, desde la de enérgica amenaza hasta la de humilde ruego: los republicanos no escuchaban más contestación que ésta: «hay que atenerse á la ley de la Asamblea de 11 de Marzo, dejando íntegra á las Constituyentes la definición y organización de la República.» Cuando la argumentación se extremaba, la respuesta era amenazar con la fuerza, y si amistosamente se pe-

día, entonces se contestaba que la federación saldría inevitablemente de la Asamblea. Indudablemente el partido republicano español, con una excepción tan solo, era federal; el país estaba á su lado; las provincias deseosas de recabar su autonomía; la Asamblea había de ser forzosamente federal, y una Asamblea federal no podía decidirse por otra forma de Gobierno que por la federación. Precisamente por esto, el proceder de los gobernantes era incomprensible y de todo punto inexplicable, pues conocida tan evidentemente la opinión del pueblo, dilatar su realización era contrariarla y exponerla á un fracaso si en adelante surgían obstáculos, siempre posibles en los períodos de transición, y más en aquel, rodeado de tan extrañas circunstancias. Pero á esto el Poder Ejecutivo callaba, y encerrándose en su respeto á una legalidad destruída por sus mismos autores, persistió en su neutralidad, dándose en España el rarísimo y singular espectáculo, sin semejante en la historia de las naciones, de que el único obstáculo para realizar inmediatamente la federación, ardientemente deseada y pedida por el país, era un gobierno formado de federales, elevados á tal altura precisamente por su consecuencia en estas ideas, y por los trabajos y sacrificios realizados en obsequio de ellas.

«Si perdemos esta ocasión, decía el marqués de Santa Marta, los republicanos estamos perdidos para mucho tiempo. Cuando la dictadura se viene á las manos sin pedirla, por la fuerza misma de las cosas, es

torpeza no aprovecharla, pero la torpeza se convierte en verdadero crimen si esa dictadura se rechaza en daño de la justicia de que la nación está sedienta, porque es hacer á sabiendas la causa de la injusticia.»

Todo en vano: el gobierno perseveró obstinadamente en su conducta suicida y sucedió lo que con tanto acierto como verdad había temido y anunciado el marqués de Santa Marta. Mientras que por consecuencia de tan anómala situación desmayaban los republicanos y se debilitaban con sus divisiones, los monárquicos, anonadados é impotentes hasta entonces, veían renacer sus esperanzas y recobraban fuerzas, máxime cuando todas las energías del poder se gastaban en reprimir las generosas impacencias de los federales. Se reprodujo en Barcelona la tentativa de constituir el Cantón Catalán, turbóse la paz y el orden en casi todas las provincias andaluzas; cundió el disgusto entre los batallones de la fuerza ciudadana, y las manifestaciones de la agitación general llegaban á Madrid ó se producían en la capital misma en forma de protestas y de peticiones en favor de la federación; los monárquicos, alentados por estas divisiones se atrevieron á levantar la cabeza; los individuos de la Comisión permanente, callados y temerosos ante la omnipotencia del gobierno después del 23 de Abril, protestaron del decreto disolviéndola y se aventuraron á atacar al Poder ejecutivo al ver á este preocupado únicamente en reprimir las manifestaciones de la opinión republicana; atizaron la discordia en nuestras

filas; favorecieron el incremento de la insurrección carlista y fué un verdadero milagro, debido solo á la poderosa pujanza del partido federal que se llegase á reunir el 1.º de Junio la Asamblea sin haberse perdido la República.

Las elecciones generales habían sido un verdadero triunfo para la causa de la federación: la derrota de los monárquicos fué espantosa, y si bien éstos procuraron atenuarla haciendo creer que se habían retraído, no lograron su objeto, pues todo el mundo vió claramente que los monárquicos hicieron cuanto les fué posible para obtener el triunfo y no lo desdeñaron en los distritos donde lo obtuvieron y que lo sucedido fué que habían sido derrotados en casi todas partes. Aquel triunfo palpable y completo reanimó las decaídas esperanzas de los federales, nuevamente en posición de hacer triunfar definitivamente su causa sobre las ruinas de la política doctrinaria. Reunida la Asamblea, desaparecían los obstáculos opuestos hasta entonces por la timidez y la escrupulosa lealtad del Gobierno y parecía que nada podía ya impedir que la federación fuese un hecho inmediato.

El marqués de Santa Marta, cuyos sacrificios se vieron premiados con la honrosa investidura de representante en la Asamblea por el distrito de Cáceres, en que tanto había trabajado para organizar las fuerzas republicanas, comprendió que era necesario aprovechar aquellos instantes y durante los siete días transcurridos desde la primera sesión de la Asamblea hasta

su constitución definitiva, consagróse sin descanso, en unión de otros ardientes republicanos, á preparar el terreno para que el primer acto de la Asamblea fuese el establecimiento de la República federal. Algo tarde era, mas por lo mismo no debía perderse un instante. El éxito coronó por aquella vez sus esfuerzos y tuvo la satisfacción de ver que el primer acuerdo unánime y sin discusión de la Asamblea, fué declarar como forma de Gobierno de la Nación española la República democrática federal.

No podía inaugurarse bajo mejores auspicios aquella nueva etapa de la República española. Pero el marqués de Santa Marta no creía que esto era sino el principio de una labor realizada de consuno por el pueblo y la Asamblea, y este fué en adelante el objeto de sus trabajos.





CAPÍTULO XVII

Verdadero alcance del acuerdo de la Asamblea proclamando la República federal como forma de gobierno.—Lo que significaba y las consecuencias que debían seguirlo en opinión del marqués de Santa Marta.—Urgencia de coronar la obra con resoluciones inmediatas.—Nuevo desencanto producido por la conducta de la Asamblea.—El parlamentarismo en la República.—Esfuerzos del marqués de Santa Marta para vencer los obstáculos que se oponían al planteamiento de la federación.—Obstinación de los prohombres en la política doctrinaria.—Serenidad de fortaleza de ánimo mostrada por el marqués de Santa Marta en la difícil situación de la República.—Consecuencias del doctrinarismo.—Insurrección Cantonal.—Oposición del marqués de Santa Marta á la política de represalias del gobierno del nuevo gobierno.



EL acto realizado por la Asamblea al proclamar como forma de gobierno la República federal, no era precisamente todo lo que, según el pensamiento del marqués de Santa Marta, debía haberse hecho antes de las elecciones. Entonces era posible dejar á la iniciativa de las provincias la constitución de los Estados particulares, cuyos representantes hubiesen venido á sellar el pacto de unión en la Asamblea federal; pero elegida ésta como representación nacional, no podía hacerse sin colocarse en estado de verdadera rebeldía; no cabía más que el respeto á su autoridad y á sus decisiones y esforzarse por obtener

de ella lo más rápidamente posible el resultado apetecido.

El hecho de quedar acordada la federación como forma de gobierno de la patria española, no bastaba para organizarla: era el principio del que habían de derivarse después, como su consecuencia, las leyes de organización del Estado federal, cuya competencia no podía arrebatarse á las Cortes, que eran por su carácter depositarias omnímodas del poder. Con el primer acuerdo, en que tan activa parte tomó el marqués de Santa Marta, se había hecho cuanto era posible hacer en aquella situación, pero distaba mucho de satisfacer sus anhelos y sus aspiraciones la simple declaración acordada, que no pasaría de una vana fórmula si no iba seguida inmediatamente de su planteamiento, porque se ganaba bien poco dando á la República española el nombre de federación, si no se la organizaba federalmente. Para llegar á este resultado, para convertir la federación en un hecho práctico, era indispensable hacer sin pérdida de tiempo la Constitución federal, pues mientras ésta no existiese, la nación estaría bajo el régimen del unitarismo.

El entusiasmo y la decisión de que la Cámara había dado elocuente prueba en su primer acuerdo, parecía ser una garantía de que no iban á defraudarse las esperanzas puestas en el patriotismo de los diputados; pero, desgraciadamente, el júbilo que embargó el ánimo del Marqués, viendo á la Asamblea responder con sus primeros actos tan en armonía con las necesi-

dades del país, creyendo segura y próxima la definitiva regeneración de los españoles, fué solo momentáneo. Aún no se habían extinguido los ecos de entusiasmo y de gozo, provocados por la declaración de la República federal como forma de gobierno, cuando apenas se trató de elegir el Poder Ejecutivo que había de reemplazar al presidido por el Sr. Figueras, que había presentado, como era natural, su dimisión al constituirse la Asamblea, vióse surgir de pronto el fantasma del parlamentarismo, que debiendo quedar desterrado para siempre desde la hora de proclamarse la República, resucitó con todo su séquito de intrigas, de torpes manejos y de ambiciones, agravado todo esto por la inexperiencia de representantes que por primera vez habían recibido la investidura de legisladores, y que no teniendo por lo general, forzoso es decirlo, porque la verdad lo exige, un alto grado de cultura, eran arrastrados fácilmente contra su voluntad por los prohombres curtidos en las arteras lides de la política tradicional.

Otra cosa hubiera sido si la prudencia no hubiese abandonado á los jefes, si éstos, penetrados de su difícil misión, no hubieran desvirtuado desde el primer momento el carácter de la política, dejando en pie y contribuyendo con su inacción á fomentarlos, los vicios de donde procedían todos los males. Cayeron en el contrasentido de querer combatir la enfermedad con la enfermedad misma, y el resultado fué, como todo el mundo sabe, que despertadas las ambiciones, enco-

nándose las rivalidades y convertida la Asamblea desde su constitución en teatro de sus contiendas, llegó á hacerse poco menos que imposible la formación de un gobierno, y la República se encontró en una crisis gravísima el día en que Figueras abandonó la presidencia del Congreso y el país, huyendo de aquella encarnizada lucha, con la que no parecía sino que la Asamblea había traído la misión de desacreditar la política republicana y hacerla para siempre imposible en nuestro pueblo.

En aquellos días de luto para los buenos republicanos, el marqués de Santa Marta trabajó mucho para calmar las pasiones y los odios nacidos en el furor de la lucha, con el propósito de facilitar la formación de un gobierno que hiciese frente á la necesidad urgentísima de defender las instituciones contra las asechanzas de sus enemigos. Demasiado sabía que aquello era la consecuencia inevitable de la torpe política anterior, pero no pudo creer ni podía esperar que tan pronto se desencadenase aquel huracán de ambiciones, ni por grande que fuese el pesimismo causado por las defecciones y desengaños, pudo imaginar que de la misma Asamblea naciese el principal peligro para la República. Desgraciadamente era así: á los tres días de constituirse la Asamblea estaba dividida en fracciones, que se hostilizaban mútua y encarnizadamente y se subdividían al menor pretexto, sin que por eso se llegase á un deslinde racional de campos, por la diferencia de principios y de procedimientos: la disgrega-

ción obedecía únicamente á cuestiones personales, á motivos de amor propio, á recelos y á suspicacias. Así sucedía que los hombres nuevos, venidos con gran pureza de intenciones y rectitud de propósitos, caminaban desorientados, sin objetivo y sin dirección conocida. El desaliento volvía indiferentes á unos; indignados otros ante aquel espectáculo, adoptaban actitudes hostiles, y á ellos se unían los que, impulsados por la generosa impaciencia de ver realizada la federación en breve plazo, ponían su confianza en los más resueltos y animosos. La gangrena del parlamentarismo, aquella herencia funesta con tanto esmero conservada por el gobierno republicano, vengaba á los monárquicos de sus derrotas, envenenando en su origen la República.

Convertida la Asamblea en un campo de Agramante, parecía olvidar la situación gravísima del país, que reclamaba urgentes y salvadoras resoluciones. Celosa de su poder, lo regateaba constantemente á los gobiernos; pero impotente por sus divisiones, se entregaba por otra parte á discreción del más osado, siendo á la vez señora y esclava, imprimiendo á todas las delegaciones de su autoridad la confusión y el desconcierto que dominaban en ella. Así, cuando la necesidad de la propia conservación se impuso, ya no se cuidó de establecer la unidad en las esferas del gobierno. Los gabinetes se componían de elementos discordes, sin otra misión que la de atender exclusivamente á mantener aquel nombre de República que,

continuando de aquella manera, pronto llegaría á ser solo un recuerdo, y ciertamente no muy grato.

Habían resultado, pues, estériles los esfuerzos del marqués de Santa Marta y de cuantos coincidían con él en el modo de apreciar la situación para imprimir á la política una marcha conveniente; se habían desvanecido, apenas nacidas, las esperanzas en la Asamblea, que llamada á resolver el grave problema de la definitiva organización de la República, lo complicaba, y no podía por tanto extrañarse que el desaliento invadiera aun á los más optimistas, ni que vacilase la fe de los espíritus más firmes. Pero el marqués de Santa Marta, templado en las enconadas luchas políticas, posee lo que pudiera llamarse la tenacidad incontrastable de la convicción que le fortalece ante las contrariedades, y no le permite perder la esperanza en los mayores fracasos como él esté poseído de la verdad y de la justicia de una causa. Así se explica que no desmayase, ni decayera su ánimo, ni variase su resuelta actitud después de los desengaños sufridos en el período anterior á la Constituyente, ni del doloroso desencanto sufrido al constituirse ésta, ni de la obstinación con que se perseveraba en seguir por la funesta pendiente. Como el celoso médico lucha hasta el último instante con la enfermedad y ensaya todos los recursos de la ciencia mientras nota en el enfermo un soplo de vida, así el marqués de Santa Marta seguía luchando por la existencia de la República mientras la veía vivir, esperando reanimar y salvar á aquel mori-

bundo, antes de que cayese muerto á los pies de sus enemigos. Por lo mismo que éstos eran muchos y la República se había debilitado por sus divisiones, creía más obligatorio para sus partidarios ser pródigos de todo genero de sacrificios, desde el sacrificio del amor propio hasta el de la vida, para robustecerla y afirmarla. Por eso, en aquel revuelto caos en que no era posible entenderse, él midió serenamente la gravedad de la situación, y apreciándolo todo, opinaba que si era urgente, indispensable á todo trance proveer á la conservación de la República, podía y debía hacerse sin abandonar por un instante la tarea de reorganización, tan urgente como la otra, y la única esperanza que había quedado para el porvenir.

Sus esfuerzos dirigiéronse entonces no ya solo á prestar el apoyo debido al gobierno, olvidando los errores cometidos, pues al fin se componía de republicanos de historia, dispuestos á defender la República, sino también á procurar con ardor y con éxito que se acelerase la obra constituyente, concluyendo sin grandes dilaciones la Constitución federal, que organizando definitivamente la República, infundiera nuevos alientos y rodeara del prestigio y las garantías necesarias las conquistas democráticas.

Esas parecían ser también las ideas dominantes en el gobierno del Sr. Pí, que á la sazón ocupaba el poder, y justo es reconocer que rehechos un tanto los ánimos, después de la confusión de los primeros días se pensó seriamente en consagrarse á la principal

tarea de las Cortes, resultado en que no influyó poco el esfuerzo y la intervención del marqués de Santa Marta. Como un nuevo triunfo de sus ideas, consideró éste el nombramiento de la Comisión que había de redactar el proyecto Constitucional.

La actividad con que esta Comisión llevaba sus trabajos, parecía indicio de que se caminaba con resolución y apresuradamente al término de la funesta interinidad en que se vivió hasta entonces, pero por causas inexplicables, si el trabajo se terminó pronto, tardó en ser presentado casi el doble tiempo del que se empleó en hacerlo, dando ocasión á nuevas zozobras é incertidumbres y á que renaciesen las dudas nacidas con el nombramiento de la Comisión. Mientras ésta, desatendiendo excitaciones del marqués de Santa Marta y de otros republicanos influyentes dejaba dormir su proyecto en el pupitre, la Asamblea continuaba siendo teatro de las luchas entre las fracciones, que no teniendo mejor ocupación que dar á sus fuerzas, las empleaban combatiéndose entre sí. El resultado de aquellas luchas fué primero la retirada de la izquierda y poco después la insurrección de Cartagena, que venía preparada por los intransigentes desde el 23 de Abril y estalló cuando empezaron á perderse las esperanzas en el próximo establecimiento de la República federal, por causa de la intencionada inercia á que la Comisión constitucional se había entregado, y cuando se sospechó, fundadamente, que la demora en presentar el proyecto obedecía á intrigas de republicanos im-

portantes, mal avenidos á última hora con sus antiguos ideales y temerosos de los imaginarios peligros á que podía ser ocasionado el inmediato planteamiento de la federación.

El 18 de Julio hubo nueva crisis ministerial y fué elegido jefe del Poder ejecutivo el Sr. Salmerón, con cuya subida vino á coincidir un levantamiento casi general de las provincias para constituir la federación, en vista de la inactividad de la Asamblea. Presentóse á ésta el proyecto de Constitución cuando se vió el peligro, como un medio de conjurarlo; pero era tarde porque las provincias no se dejaron engañar por esta artimaña, hartas ya de escuchar ofrecimientos que nunca se cumplían y de ser juguete de las maniobras del poder central. Así es que ni el recurso de leer el proyecto, ni las declaraciones de ardiente federalismo del nuevo gobierno lograron desarmar la insurrección, de la cual dijo pública y solemnemente el marqués de Santa Marta que era una cosa triste y por todo extremo lamentable, pero una lógica é inevitable, consecuencia de la torpe política seguida hasta entonces, con obstinación propia sólo de ciegos ó de insensatos.

A sus ojos era una gran desgracia el movimiento cantonal, pero no eran tan culpables los que lo hicieron dejándose llevar de los vehementes impulsos de su fe, como los que lo provocaron por adulterar la República. El país había esperado inútilmente desde el 11 de Febrero la realización del principio federati-

vo, presentado durante largo período de propaganda como el único remedio de sus males y la única garantía de su prosperidad. Ansiando las reformas y sabiendo por experiencia cuan difícil es implantarlas después del primer momento revolucionario, vió pasar días y meses sin que la República fuese otra cosa más que un nombre.

La última esperanza, la Constitución federal, se había perdido, y antes de resignarse con tal engaño, el país hizo el último esfuerzo para salvarse. No de apresurado, sino de paciente, podía tildársele cuando esperó tanto tiempo.

A pesar de la grave situación creada por estos sucesos, aún creía el marqués de Santa Marta que podía conseguirse, si no que dejaran las armas los pueblos, incrédulos ya á fuerza de desengaños, al menos que esperasen tranquilamente, aunque prevenidos, empezando desde luego los debates constitucionales y llevándolos con la rapidez posible.

Pero el gobierno hizo empeño de amor propio el acabar con la insurrección, y desatendiendo lo que no fuese esto, dedicóse á esta tarea con verdadera cólera y con una energía de que no se había dado muestra contra los carlistas, llegando á dictar aquella imprudente é irreflexiva declaración de piratería, que puso nuestros mejores barcos á disposición de las naciones extranjeras y abrió un abismo entre el gobierno central y los insurrectos.

El marqués de Santa Marta tuvo para aquella

desatentada determinación las más acres censuras, conformes en un todo con la enérgica protesta firmada por casi todos los diputados federales, y las consecuencias que él anunció fueron cumpliéndose poco á poco, según tendremos ocasión de ver en los siguientes capítulos.





CAPÍTULO XVIII

El marqués de Santa Marta, el gobierno y los cantonales.—Tenacidad del gobierno.—Consecuencias de su política.—Esfuerzos del marqués de Santa Marta para encauzarla y perseverancia en sus trabajos después de la suspensión de las sesiones de la Asamblea.—Actitud del marqués de Santa Marta en frente de la dictadura de Castelar.—Sus trabajos para organizar la defensa de las instituciones democráticas.—Sus consecuencias.—Protestas de los republicanos.—Intervención del marqués de Santa Marta en los trabajos preparatorios para la continuación de los trabajos de la Asamblea.—Sesión del 2 de Enero de 1874.—Fin de la República.

EIEL á su sistema contradictorio y vacilante, el gobierno, que al iniciarse la insurrección cantonal pudo haberla contenido haciendo discutir el proyecto de Constitución, y había resistido tenazmente toda concesión á los insurrectos, decidióse á dar este paso cuando habían crecido las dificultades; pero como si luego se arrepintiese de esta conducta, temeroso tal vez de que se achacase á debilidad, suspendió de hecho á los dos días los debates, que no se reanudaron ya. A esta torpeza, que envolvía algo de arrogancia, precedió otra muy grave al empezar á discutir el proyecto. Uno de los individuos de la Comisión, el señor Martín de Olías, contestando al Sr. León y Casti-

llo, declaró que había dos clases de federales; unos partidarios de organizar la federación de abajo á arriba, y otros de arriba á abajo; inexactitud notoria, puesto que lo que sucedió fué que, conformes todos en organizar la federación, cediendo á la fuerza de las circunstancias por las Cortes Constituyentes, los verdaderos federales al ver que éstos luchaban con obstáculos insuperables en su tarea, se decidieron á hacerlo de la única manera posible, constituyendo los Estados.

Así entendía y juzgaba la situación el marqués de Santa Marta, cuyas amarguras en aquellos tristes días de defecciones y desencantos, sólo se puede comparar á los esfuerzos que realizó para contener al gobierno en la peligrosa pendiente por donde caminaba ciego y obstinado. Pero los ministros, y con ellos la derecha de la Cámara, considerándose como dueños del país, estaban dispuestos á transigir con todos, menos con sus correligionarios. Grande era en verdad su delito: no quisieron ser comparsas en la comedia que los prohombres intentaban representar; no habían querido ser burlados, y los burladores, puestos en evidencia, los hicieron blanco de sus odios más acerbos.

Decididos á dividir á toda costa la Asamblea, echaron mano del triste recurso de separar á los federales en dos campos por razón de los procedimientos, como si el procedimiento adoptado desde el principio, que no se ajustaba rigurosamente á la lógica de los principios, hubiera sido otra cosa que una transacción im-

puesta por el modo de plantearse la República; transacción que solo pudo aceptarse después del 23 de Abril por una exagerada lealtad á los compromisos con los radicales, y después de elegida la Asamblea por respeto á la misma legalidad de la República, pero que nunca podía invocarse como bandera de un partido federal, por ser contradictorio con la esencia misma de la doctrina.

La división que se trataba de realizar á toda costa no obedecía, por consiguiente, á ningún interés doctrinal; tenía por objeto hacer imposible la federación, porque si se combatía á sangre y fuego por una parte á los cantonales, que la organizaban constituyendo los Estados particulares, y con pretexto de la insurrección se aplazaba indefinidamente la discusión y aprobación del proyecto constitucional, ¿qué significaba esto, sino el propósito de renunciar á organizarse federalmente, á menos de no esperar que por arte de encantamiento, de la noche á la mañana apareciese concluido el edificio federal, á la manera que aparecían los encantados palacios de los cuentos de *Las mil y una noches*?

Con aquella declaración del Sr. Martín Olías quedaba desautorizado el dogma del partido, y todo induce á creer que el iniciar los debates constitucionales fué sólo el pretexto para realizar semejante acto, que imposibilita en lo sucesivo toda concordia. La suspensión del debate á los dos días fué signo evidente de que la derecha de la Asamblea no estaba ya por la República federal y lo que se pretendía era ir derechamente,

sin detenciones ni rodeos, á una situación de fuerza, en que los cantonales, es decir, los federales constantes, fuesen los rebeldes, y los arrepentidos y apóstatas los guardadores de una legalidad imaginaria, puesto que la única legalidad de aquella República, la Constitución federal, había sido repudiada antes de nacida.

Como obedeciendo á un plan preconcebido, se fué acentuando gradualmente aquella actitud, de todo punto hostil á las rápidas soluciones federales por parte de la derecha y el centro de la Asamblea, capitaneados por Castelar y Salmerón, oponiéndose aquél á que se consagrara un tiempo determinado en cada sesión á los debates del proyecto constitucional, defendiendo el aplazamiento para después de dominadas las guerras, y oponiéndose el último á conceder amnistía á los cantonales, á quienes calificó de criminales, marcando aun más esta actitud con la presentación de un proyecto prohibiendo la gracia de indulto.

Así, mientras se discutía en algunas sesiones la proposición presentada por el castelarino Sr. Olías sobre la clausura de las Cortes, se aprovechaba el tiempo en adelantar la labor reaccionaria de la mayoría y del centro, presentando como término de esta campaña liberticida, el proyecto restableciendo la pena de muerte para los delitos de insubordinación militar, que aprobado motivó el cambio de puestos entre los señores Castelar y Salmerón, pasando éste á la presidencia de las Cortes desde la del Poder Ejecutivo, ocupando este cargo el primero, y suspendiéndose las se-

siones de la Asamblea hasta el 2 de Enero de 1874, quedando el Sr. Castelar investido de la dictadura para refrenar la *demagogia* y el absolutismo.

El marqués de Santa Marta, cuyos nobles esfuerzos por contener á los gobiernos de la República en aquel camino de perdición habían sido inútiles, consideró que aquel golpe era el decisivo para la vida de la República, y que ésta quedaba herida de muerte con la suspensión de las sesiones. Otro tal vez, considerando aquello como una causa perdida, se hubiese encerrado en una actitud pasiva, limitándose á lamentar silenciosamente en su retiro los desaciertos de los hombres colocados al frente de la política republicana; quizás en algún instante pasó por su mente este propósito, que no hay carácter por enérgico y resistente que sea á quien no fatigue la penosa labor de una lucha incessante sin resultado, por estrellarse todos los esfuerzos ante la invencible obcecación de espíritus desorientados; pero al ver cómo la conducta del gobierno envalentonaba á los monárquicos, al ver á éstos volver de la emigración para aprovecharse de las torpezas de los republicanos y para explotar sus rivalidades y desaciertos, apoderándose de los cargos con que les brindaba aquel desatentado poder; cuando vió á Castelar echarse en brazos de los monárquicos para combatir á los republicanos, creyó que no merecía tal nombre quien en circunstancias tan críticas se hiciese sordo á los lamentos de la patria y dejase indiferente marchar los acontecimientos. Poseedor de las cualida-

des que distingue á los espíritus convencidos, hombre de fe republicana á prueba de contrariedades y desengaños, creyó que su deber le ordenaba permanecer combatiendo en la brecha, y que si era siempre una cobardía la deserción ante el adversario pujante, era un crimen en aquellas circunstancias en que se iba á decidir, tal vez para mucho tiempo, la vida de la República.

Cerrados el Parlamento, ejercida por el Sr. Castelar la dictadura con verdadero frenesí reaccionario, entregada la política á los monárquicos y apoderados de la fuerza armada los más recalcitrantes enemigos; puestos en entredicho los republicanos de más limpia historia, que venían á ser los únicos proscriptos dentro de la República, por la cual tanto habían trabajado, era ciertamente superior á las fuerzas de un hombre, sin más armas que su influencia personal y su prestigio entre los correligionarios, encauzar debidamente á los hombres desatentados que utilizaban los poderosos recursos del poder para asesinar la República. Pero esta consideración no puso miedo en el carácter varonil del marqués de Santa Marta, quien previendo el inevitable término de tan torpe dictadura y quizá con el último convencimiento de que todo sería ya inútil, redobló su energía para oponer con una poderosa organización de las fuerzas republicanas el dique, débil é insuficiente sí, pero el único que podría oponerse ya á aquella vertiginosa caída por la pendiente de la reacción. Empujado el gobierno de Castelar por la sober-

bia y el amor propio, dos fuerzas de suyo poderosas y entonces incontrastables por ir auxiliadas por los impulsos de todos los enemigos conjurados contra la República, se necesitaba una fuerza inmensa para contrastar este poderoso empuje, fuerza que no podían oponer desgraciadamente los republicanos por sí solos, abandonados de sus jefes y perseguidos sañudamente por los antiguos correligionarios que formaban la corte de los gobernantes.

Era, sin embargo, preciso no abandonarse á la inacción. Como el soldado que seguro de la derrota, busca en último y desesperado esfuerzo la muerte gloriosa del héroe en compensación del triunfo que la desgracia ó las torpezas del jefe han hecho imposible, el marqués de Santa Marta creía que los republicanos, aun con la seguridad de ser vencidos, debían morir luchando si era preciso.

Ya eran inútiles consejos y advertencias. Ciego y desalentado el gobierno, no escuchaba más que la voz de odio, ni se dejaba llevar más que por los impulsos de la soberbia; tan hostil á toda concesión al espíritu republicano, como dócil á las sugerencias y exigencias de los monárquicos, aparecía sometido á éstos de manera que la República bajo el mando de Castelar vino á ser una monarquía despótica, en que el rey no era constitucionalmente sagrado, pero era de hecho irresponsable.

Ante una ostentación tan audaz de tiranía, no podía menos de sentirse lastimado é indignado hombre

de tan sinceras convicciones democráticas como el marqués de Santa Marta, y consagróse con afán á la tarea, difícil siempre y en aquellas circunstancias sobre difícil, peligrosa, porque los únicos enemigos eran para el gobierno los republicanos, de organizar la resistencia para el día de la reunión de la Asamblea y poder pedir cuentas de su política suicida al Sr. Castelar. Al efecto, el marqués de Santa Marta figuró entre los que hicieron trabajos para procurar la unión de todos los republicanos no sometidos á Castelar por vínculos de gratitud ó de personales afectos, y los Centros del partido federal, los Comités y las Corporaciones populares fueron testigos de sus esfuerzos por la salvación de la República.

Fruto de estos trabajos fueron muchas protestas de autorizados centros y de influyentes republicanos formuladas en aquellos días; las imponentes manifestaciones realizadas; las juntas de resistencia que se organizaron ante aquella tiranía disfrazada, que por combatir á los republicanos entregaba completamente el país á las sanguinarias hazañas del carlismo y á la escandalosa voracidad de los monárquicos. Fuera de éstos, á quienes interesaba impulsar al gobierno por aquellos caminos de perdición, á cuyo fin se hallaba su desquite contra los republicanos, la política de Castelar escandalizó á todo el mundo, le atrajo la animadversión de todos los políticos sinceros y no tuvo otros títulos para halagar su orgullo que la adhesión interesada de los monárquicos, resueltos á prescindir de él

en el instante que les dejara bien preparada el terreno para sus fines.

El mismo Salmerón, que tuvo no pequeña responsabilidad en aquella política, y que por lo menos puede acusarse de haberle dado el primer impulso después de sentado por él el precedente durante su corto gobierno, el mismo Sr. Salmerón se asustó ante la temeraria pertinacia de su antiguo aliado y se separó de él, esquivando las tristes y tremendas responsabilidades que contraían los factores y cooperadores de la bochornosa dictadura del último gobierno republicano.

Así es que al llegar el 2 de Enero, Castelar, aparte del exiguo grupo de sus amigos personales, no contaba con la simpatía ni con la adhesión de ningún republicano: no tenía á su lado más que á los monárquicos, apoderados de la fuerza y dispuestos á utilizarla contra él mismo para aprovecharse de su inconcebible apostasía.

En la primera sesión de la Asamblea los republicanos debían dar la batalla decisiva á aquel gobierno de tráfugas, y el marqués de Santa Marta se dispuso á emplear todas sus energías para intentar el último esfuerzo de salvación, última esperanza también de los republicanos.

El 31 de Diciembre y el 1.º de Enero los periódicos federales publicaron una proclama al frente de sus números, recordando al ejército que la República federal era la forma de gobierno votada por las Constituyentes, y por lo tanto la única legalidad que debían

defender, tratando sin compasión á todo faccioso que de algún modo intentase destruirla.

El 2 de Enero de 1874, á las cuatro de la tarde, reanudaron las Cortes sus sesiones. Después de leer el Mensaje, en que el gobierno daba cuenta del atentado modo con que había ejercido la autorización conferida por la Asamblea, los amigos particulares del jefe del gobierno presentaron un voto de confianza, contra el que se presentó enseguida una proposición de *no ha lugar á deliberar*. En el curso del debate de ésta, el Sr. Salmerón, presidente de la Cámara, habló para manifestar que no podía estar conforme con el gobierno desde el instante en que éste había traspasado la órbita, dentro de la cual debió haberse ejercido la política, forzándola á salir de los principios y de los procedimientos republicanos y haciendo que preponderasen las fuerzas reaccionarias. Estas declaraciones motivaron aquel triste y vergonzoso espectáculo que dió el Sr. Castelar en su discurso, contestando al Sr. Salmerón. El presidente del Poder ejecutivo renegó entonces de todo, de la federación, de los más esenciales principios democráticos, de los republicanos y hasta de la República democrática, puesto que la República para él no era desde entonces sino la monarquía con otro nombre. Apostasía tan descarada imposibilitó toda avenencia, y al verse derrotado y expuesto quizá á responder inmediatamente de sus actos ante el inexorable tribunal del pueblo, consintió en la vergonzosa disolución de la Asamblea, de ante-

mano preparada, con la complicidad de los generales monárquicos.

Al proceder en aquella sesión, que es página de oprobio en nuestra historia, á elegir el nuevo Poder ejecutivo, recibió el presidente, Sr. Salmerón, recado ú orden del capitán general Pavía, intimándole por medio de dos ayudantes para que los diputados desalojasen el edificio. Al dar noticia de esto á la Asamblea, se produjo un verdadero estallido de indignación y se levantó una tempestad de protestas contra la osadía del soldado rebelde que utilizaba contra la República las armas que se le habían entregado para defenderla, y contra la criminal complicidad del gobierno en aquel horrible atentado.

Inútil era pensar en la resistencia; solamente la Milicia republicana habría podido intentarla con esperanzas de éxito, y sean las que fueren las causas, nada se hizo para hacer frente al atropello que consumó el general Pavía.

No hay para qué describir una vez más el triste espectáculo de la violenta disolución de la Asamblea. Desde que el Sr. Salmerón dirigió su voz á los diputados, manifestándoles la orden que del capitán general había recibido, hasta la entrada de las tropas en el salón de sesiones y los disparos hechos en el mismo, transcurrieron breves minutos de confusión, apóstrofes y alardes, más generosos que fáciles de realizar. El salón fué desalojado en breves momentos y el marqués de Santa Marta, que fué de los últimos en aban-

donar el Congreso, pudo observar al general Serrano que se dirigía precipitadamente á ese edificio para recoger aquel poder faccioso, que por un acto incalificable se le venía á las manos.

El marqués de Santa Marta pudo decir con orgullo que él cumplió hasta el último instante sus deberes de buen republicano; que con aquella gran vergüenza fué uno de los vencidos por la traición, y que si la República, tan cruelmente vendida al enemigo, se perdió, no fué porque le faltaran el apoyo, los consejos y las previsiones del ilustre republicano, que veía llegar el término anunciado con el acerbo dolor del padre cariñoso que recoge entre mortales angustias el último suspiro del hijo adorado.





CAPÍTULO XIX

Gestión del marqués de Santa Marta como delegado de la República al Patrimonio que fué de la Corona.—Plan de alta política que perseguía al aceptar este cargo.—Alcance de sus proyectos desamortizadores.—Idea de los principales actos de su administración.—Su discurso en 2 de Julio de 1873 ante la Cámara Constituyente, exponiendo su gestión al frente del Patrimonio.—Elogios que esta gestión ha merecido á todos los políticos, así republicanos como monárquicos.—Dimisión del marqués de Santa Marta y consideraciones acerca de su campaña administrativa.



RESEÑADOS ya, bien que á la ligera, los principales acontecimientos del breve y azaroso período de los diez meses de la República española, pues aunque esta forma de gobierno se mantuvo un año más fué solo nominalmente, cumple ahora dar una idea de la campaña administrativa del marqués de Santa Marta al frente del Patrimonio que había sido de la Corona y que después, por la imprevisión y torpeza de muchos revolucionarios, ha vuelto á serlo.

La actitud política del Marqués en aquellos diez meses de ilusiones generosas y tristes decepciones, queda ya claramente determinada en los anteriores capítulos. No quiso tener participación alguna en el gobierno y está libre de toda responsabilidad en la

débil, torpe ó suicida conducta de los gabinetes que se sucedían en el poder, y cada uno de los cuales representaba un nuevo desengaño para los republicanos de corazón. Siempre fiel á sus compromisos, siempre cumplidor austero de su deber y siempre persuadido de *que solo en procedimientos francamente radicales* estaba la salvación de la República, figuró constantemente en la izquierda; prestó firme y desinteresado apoyo al gobierno de Pí y Margall, único que en su sentir quería sinceramente el triunfo de las ideas federales y combatió á los gabinetes de Salmerón y Caslar, sobre todo á este último, que no solo llegó á renegar de la federación, sino aun de la misma democracia. La desastrosa caída de la República causó una amargura inmensa al marqués de Santa Marta, pero no pudo sorprenderle, pues ninguno de los hombres que llegaron al poder supo aprovechar el momento revolucionario, y por el contrario todos se encerraban en los escrúpulos nimios de una legalidad sin base, como si tuviesen miedo de que la revolución se desbordara del cauce en que los conservadores deseaban contenerla.

Se ha indicado ya que en el momento de proclamarse la República le fué ofrecido al marqués de Santa Marta con gran insistencia el Gobierno civil de Madrid, que no aceptó; después algunos puestos diplomáticos de la mayor importancia y la presidencia de la Comisión española en la Exposición de Viena, cargo este último que no tenía carácter político y que

el Marqués habría desempeñado gustoso si á la sazón no se hubiese ya decidido á aceptar la delegación de Patrimonio que fué de la Corona, puesto sumamente penoso, delicado y que exigía una laboriosidad infatigable y un escrupuloso celo.

El nombramiento de D. Enrique Pérez de Guzmán con el carácter de delegado del gobierno al Patrimonio que fué de la Corona, se publicó en la *Gaceta* con fecha 2 de Marzo de 1873. Dió posesión del cargo al marqués de Santa Marta D. José Cristóbal Sorní, ministro de Ultramar, y el empleado D. Gregorio Carrasco le hizo solemne entrega de la llamada *llave de los reyes*, con la que podían abrirse las puertas de todas las habitaciones del Palacio de la plaza de Oriente. Durante los primeros días, el Marqués se hizo cargo del inventario, lo comprobó con la mayor escrupulosidad, trabajo verdaderamente enorme como apreciarán las personas inteligentes en estos asuntos, y encontrando en el mismo grandes errores y deficiencias, á pesar de que su coste había sido de más de seis mil duros, habiéndose hecho en los primeros tiempos de la revolución de Septiembre, procedió sin demora á formar otro nuevo, encomendado el trabajo al notario del ministerio de Hacienda Sr. Guerrero Brea y otros, con los que hizo una tarea verdaderamente acabada y á un precio muy económico, con inmensa ventaja para los intereses del Estado.

El marqués de Santa Marta aceptó el penosísimo cargo de la Delegación de la República al Patrimo-

nio que fué de la Corona, sin aceptar sueldo de ninguna especie y guiado por móviles que han de asegurar para siempre á su persona y á su memoria el respeto y simpatía de todos los ciudadanos que aman la libertad y el bien de la patria.

Sabido es que la administración de lo que había sido real Patrimonio dejó mucho que desear en los primeros años de la revolución. No hay para qué citar nombres y casos, sobre todo tratándose de un libro de esta índole; precisa también reconocer que nunca faltaron funcionarios honrados de todas gerarquías en esta como en otras secciones de la administración pública; pero el hecho es que se habían cometido abusos ó torpezas que rebasaban los límites ya harto ámplios de la triste tradición de las llamadas *irregularidades* é interesaba al honor y al buen nombre de la naciente República, dar el ejemplo de gestiones probas é inmaculadas, acerca de las cuales no cupiese ni sombra de duda. El marqués de Santa Marta, poseedor de una fortuna más que suficiente para que no pudiesen halagarle bajo el aspecto material las más altas posiciones políticas, no entendió hacer sacrificio alguno al trabajar sin sueldo por el bien de su partido y de su país, y aunque sacrificio y grande hizo al descuidar forzosamente durante los meses en que ejerció la Delegación sus intereses particulares, conllevó este perjuicio sin contrariedad ante la magnitud del plan que había bosquejado al encargarse de dirigir lo que fué Real Patrimonio. Para esta clase de tareas, que exigen

paciencia ilimitada y asiduidad infatigable, ha tenido siempre el Marqués no sólo gran aptitud, sino verdadera vocación, y ha dado el ejemplo en la administración de su casa y estados; pero no abunda esta clase de caracteres.

El plan que principalmente perseguía el Delegado de la República al aceptar tan difícil puesto, era de una trascendencia inmensa y de un gran alcance político. Persuadido como estaba D. Enrique Pérez de Guzmán de que era necesario de todo punto crear intereses revolucionarios para oponer un dique á la creciente atonía del pueblo y evitar el peligro de la restauración borbónica, que iba reuniendo de día en día elementos de más importancia, era partidario ardiente de que se ultimase la gran obra de Mendizábal y se hiciera con el Patrimonio real lo que treinta y siete años antes se había hecho con las inmensas propiedades de la comunidades religiosas. Tenía el marqués de Santa Marta la convicción de que, una vez enagenados en lotes más ó menos extensos los bienes usufructuados por los reyes de España, se haría punto menos que imposible la restauración de la monarquía, que requiere para su ostentación y fausto la existencia de esas vastas posesiones. Desde el momento en que las tierras enclavadas en el Patrimonio real en Aranjuez, el Pardo, San Ildefonso, San Lorenzo del Escorial y otros puntos fueran distribuidas entre gran número de propietarios, inscritas en los registros y objeto de gravámenes y trasmisiones, la restauración habría de resolverse

por uno de los extremos de este dilema: ó no tener patrimonio alguno que ofrecer á los monarcas ó declarar nulas todas las ventas realizadas, como ocurrió después de la intervención francesa en 1823. Esto era absurdo, pues semejante atropello habría bastado para provocar una revolución. Quedaba el recurso de crear un nuevo Patrimonio para la Corona, pero esto era sumamente difícil; pues dadas las actuales condiciones de la propiedad territorial, esta clase de improvisaciones habría de luchar con obstáculos punto menos que insuperables.

Había reflexionado el marqués de Santa Marta muy detenidamente acerca de esta cuestión, y hasta tal punto estaba encariñado con su idea que la miraba como el acto más revolucionario que hubiera podido realizarse desde 1868. Las Caballerizas, el Campo del Moro y la Casa de Campo, inmensas fincas situadas en los alrededores de Madrid y que limitan su desenvolvimiento por la parte del Oeste podían, al menos en gran parte, urbanizarse, con lo que la capital de España adquiriría el desarrollo de las grandes ciudades europeas, y todos los fertilísimos terrenos dedicados hoy á paseos ó jardines, tan inútiles como costosos, en los llamados sitios reales, entregarse á las clases trabajadoras en concepto de censo enfiteútico ó en cualquiera otra forma que permitiese crear gran número de nuevos propietarios ó poseedores é impidiese que las tierras sirviesen como medio de lucro á unos cuantos agiotistas. No creía el Marqués que debiera bus-

carse ante todo el medio de llenar las arcas del Erario público, sino el de conseguir la prosperidad de gran número de familias laboriosas, con lo que se resolvería en parte el problema social y se ganarían muchos elementos para la causa de la República. Los edificios que fueran susceptibles de apropiación individual, debían venderse á particulares más bien que permanecer á disposición del Estado, pues lo importante era dificultar la vuelta de la monarquía. «Parece—decía el marqués de Santa Marta—que los republicanos aspiramos al papel de custodios del Patrimonio de la Corona, y que estamos interesados en que no sufran esos bienes menoscabo alguno, como si los reyes nos hubiesen confiado un depósito, que debiéramos entregarles íntegro á la primera reclamación.»

Para que el plan del marqués de Santa Marta pudiera realizarse, era necesario que hubiese en los gobiernos y en la Asamblea verdadera decisión revolucionaria y además se necesitaba algún tiempo, pues debía procederse con gran medida y cautela para evitar en lo posible los abusos que afearon la gran obra desamortizadora de 1836, y que fueron causa de que aquella briosa reforma no dieran todos sus frutos. Siempre que fuese hacedero encontraba el Marqués preferible que las tierras del Patrimonio real se dividieran en pequeños lotes, con lo que algunos millares de obreros podrían convertirse en propietarios ó al menos lograr las ventajas de la propiedad á poca costa ó sin desembolsos previos, mediante una combina-

ción que fuese igualmente provechosa á los trabajadores y á los intereses del Estado.

Por lo pronto el marqués de Santa Marta procedió con la más escrupulosas formalidades de subasta y con toda clase de garantías á la venta de aquellos objetos que eran de más difícil conservación ú ocasionaban mayores gastos, entre los que figuraban en primer término los semovientes, que entre caballos y mulas ascendían á más de quinientas cabezas y ocasionaban un gasto enorme al Estado para su mantenimiento.

Estas ventas se hicieron á precios bastante altos, con gran ventaja para el Tesoro, pues la procedencia de aquellos bienes hacía que se elevaran mucho las pujas.

También trabajó mucho el marqués de Santa Marta, hasta que consiguió llevar á cargo del ministerio de la Gobernación todos los patronatos y fundaciones de carácter benéfico que dependían de Palacio. Sobre veintinueve millones de reales había en caja como propiedad de estos patronatos y pasaron á la dirección general de Beneficencia, pues el proyecto de Pí, á quien auxilió con gran eficacia el marqués de Santa Marta, era constituir con todas las fundaciones de beneficencia privada, ramo complicadísimo en nuestro país, donde bien puede decirse, á despecho de las apariencias en contrario, que la caridad es muy grande, una gran beneficencia pública, con lo que se llenaría mejor los deseos de los fundadores y se evitarían enormes abusos, como los que el marqués de Santa

Marta tuvo ocasión de ver se habían cometido. Personas de elevadísima categoría aparecían deudoras por cuarenta mil duros en una sola fundación, la del Hospital de la Princesa, de cuyos fondos se había hecho sin justificación alguna esa transferencia ó préstamo de tanta importancia. Pero sería interminable esta reseña y por otra parte este libro tomaría un carácter que no hay para qué darle si hubiésemos de hacer mención de los abusos que con verdadera indignación contempló el marqués de Santa Marta y que se habían realizado en épocas anteriores á su administración.

El trabajo que exigía este cargo bien podía compararse al de dos ó tres ministerios reunidos, por ser muy variadas y extensas las secciones en que forzosamente había de dividirse la gestión del Patrimonio. El personal era inmenso y en gran parte embarazoso é inútil, sin embargo de lo cual recibía á cada momento el Marqués muchas cartas de elevados personajes, ya recomendándole el nombramiento de nuevos dependientes, ya interesando la permanencia de los que existían. No atendió recomendación de ninguna especie y firmó en poco tiempo sobre quinientas cesantías de funcionarios, en su mayor parte criados de los reyes y que, con sueldos pequeños ó grandes, gravaban sin objeto los intereses del país. También lanzó inexorablemente de centenares de habitaciones, que indebidamente ocupaban, á una porción de familias que sin tener cargo alguno que les permitiese vivir en Palacio, habían ido aposentándose desde los pri-

meros tiempos de la República, gracias á influencias ilegítimas, llegando hasta el extremo de reclamar muebles pertenecientes al Patrimonio. No hay que decir la energía y constancia que tuvo necesidad de emplear el Marqués para que saliese del Palacio de la plaza de Oriente y de otras fincas que fueron de la Corona aquella muchedumbre que encontraba cómodo albergarse y aun reclamar muebles, sin pagar alquileres y sin justificación alguna.

Uno de los proyectos del marqués de Santa Marta fué la fundación de una gran escuela de equitación, que no existía ni existe en España. Al efecto, alquiló el picadero de Palacio y una cuadra cercana de capacidad para más de cien cabezas, y hubo que sacarlo tres veces á subasta por falta de postores. Lo adquirió al fin un antiguo empleado en el picadero, hombre de gran competencia en el asunto y que dispuso bastante bien el servicio, haciendo no pocos gastos; pero al segundo año y cuando empezaba á sacar partido de sus esfuerzos, llegó la restauración y el contratista fué lanzado de allí, á pesar de los derechos que había adquirido.

Entre los detalles de la gestión del marqués de Santa Marta en el Patrimonio, merece consignarse, como dato curioso, el desmonte del trono regio. Hasta entonces había permanecido el trono en su sitio y el Marqués llamó á unos sirvientes y lo hizo trasladar á una habitación de poca importancia, en donde, confundidos entre multitud de bártulos, reposaron durante varios meses los que un ingenioso escritor, monárqui-

co por cierto, llamó más tarde *los chirimbolos de la monarquía*. En cuanto á los cuatro leones de bronce macizo que custodian dicho trono, los hizo arrastrar hasta un cuarto de segunda luz, donde se dejaron llevar sin morder y sin protesta, al igual de algunos valerosos cortesanos que, no obstante sus ardorosos alardes de realistas, nada saben hacer en los momentos supremos para evitar la caída del trono. Bueno es se observe que el marqués de Santa Marta ha sido el primer español que materialmente ha echado abajo el trono de los monarcas godos, castellanos, austriacos franceses é italianos, que han reinado en nuestra nación. En sustitución del trono hizo colocar un cuadro de mérito, que representaba la llegada de Cristóbal Colón al puerto de Palos. Por cierto que el hecho de ser el trono y sus cuatro inofensivos guardianes no de oro, sino de bronce, parece una alegoría sarcástica del aparato teatral de que se rodean las instituciones monárquicas, amigas de deslumbrar con lo que brilla, aun cuando sea vano oropel.

El marqués de Santa Marta hubo de luchar desde los comienzos de su administración con la escasez de fondos, pues el gobierno, agobiado por necesidades muy urgentes, no podía en modo alguno destinar á la conservación de los edificios del Patrimonio ni al personal del mismo los seis millones de reales que se consagraban á estas atenciones en el presupuesto, y se entregaban al rey D. Amadeo además de la lista civil. Con este motivo se vió precisado á acelerar la

venta de caballos, de alhajas, cubiertos y otros bienes semovientes ó muebles, á fin de procurarse recursos, y al efecto hubo de anunciar las subastas unas tras otra escalonadas, con muy pocos días de intervalo, y no hay que decir si esto le procuraría un trabajo incesante, pues examinaba escrupulosamente las tasaciones, elevando mucho todas ellas, no obstante lo cual aún obtenía el Estado gran ventaja en las posturas. Estas continuas tareas, capaces de quebrantar la salud de quien no tuviese el temperamento infatigable del Marqués, no habrían bastado á dominar su energía si no hubiese tenido serios motivos de descontento, y como por otra parte veía imposible, dadas las circunstancias, que se pudiera realizar su vasto plan y además veía mal correspondidos sus sacrificios y afanes, resolvió presentar la dimisión de su cargo. Así lo hizo en comunicación dirigida al gobierno el 29 de Junio, sin lograr que le fuese admitida. Esto, no obstante, habría insistido en su propósito si un incidente, hijo de la precipitación de los que lo promovieron, no hubiese obligado al Marqués á continuar aún, mal de su grado, en la administración del Patrimonio.

En la sesión que celebró la Asamblea Constituyente el 1.º de Julio se presentó una proposición, firmada por los Sres. La Rosa (D. Adolfo), Sánchez Yago, Almagro, Somolinos, Palanca, González Valledor y Miranda, en que se pedía el nombramiento de nueve diputados, elegidos en una sola papeleta, para que se encargasen de los bienes del Patrimonio, debiendo

quedar á las órdenes de éstos los encargados de la Delegación para darles toda clase de informes.

Esta proposición, acerca de cuyos móviles y fines sería aventurado tratar, era ya no poco depresiva en su forma, pero resultó más depresiva aún por los términos en que el Sr. La Rosa hubo de apoyarla. En efecto, habló de la conveniencia de que brillase á la debida altura la moralidad, hizo referencia á grandes abusos, sin indicar la época en que se habían cometido, y del tono general de su breve discurso parecían desprenderse censuras veladas para la Delegación de la República.

El marqués de Santa Marta no había asistido aquel día á las Cortes, pero al siguiente día se enteró de lo ocurrido, y en la sesión del mismo, 2 de Julio, hizo uso de la palabra en los siguientes términos:

«Ciudadanos representantes: Ayer, cuando no me encontraba en este edificio, se presentó una proposición referente á los bienes que fueron últimamente del Patrimonio de la Corona, de la cual no tenía conocimiento. Lo tuve al llegar aquí y me alegro, porque sentía hace tiempo gran deseo de dejar la delegación del gobierno en el Patrimonio, como había manifestado repetidas veces. Pero después he visto las cuartillas que habían de ir al *Diario de Sesiones*, y habiendo leído en ellas las frases con que el Sr. La Rosa apoyó la proposición, he creído y creo que no debía dejar de hablar hoy sobre este particular.

Se ha lanzado aquí por el Sr. La Rosa la palabra *moralidad*, y yo tengo interés en que se sepa que ha habido moralidad en el tiempo que llevo en este puesto de confianza.

Saben los señores diputados que no soy aficionado á hablar; hago lo que puedo, tengo la costumbre de trabajar y hablo lo menos posible; pero ahora tengo el sentimiento de verme precisado á usar de la palabra con más extensión de lo que yo quisiera, si bien procuraré concretar todo lo posible mis observaciones, diciendo únicamente lo necesario para que la Cámara y el país puedan tener conocimiento de lo ocurrido durante mi administración en el Patrimonio y el estado en que éste se encuentra.

El Sr. La Rosa, hacia quien no tengo prevención de ninguna clase y que creo debe conocerme, nada me ha preguntado acerca del Patrimonio que fué de la Corona, y ayer se hizo aquí eco de las groseras calumnias que se han publicado últimamente en algunos repugnantes periodicuchos. He procurado averiguar el origen de esas noticias groseras y he podido saber que lo tenían, permítaseme la frase, en un estercolero, ó sea en hablillas de funcionarios ínfimos, que por sus cargos están con frecuencia en sitios de esa especie.

El periódico titulado *El Noventa y Tres* se ha hecho eco de ese estercolero, y *La Justicia Federal* se ha hecho también eco de ese periódico calumniador llamado *El Noventa y Tres*, al mismo tiempo que de un empleado realista, cesante del Patrimonio, que

quedó en esta situación al encargarse de los patronatos el ministerio de la Gobernación, por no necesitar el señor ministro de este empleado. Este sujeto ha inspirado al director de *La Justicia Federal*, dándole falsas noticias, que si bien no atacaban directamente á mi persona, lo hacían al ministro de la Gobernación y á empleados de la Delegación.

Después de esto el Sr. La Rosa, con una ligereza que yo no esperaba de los amigos, y haciéndose eco de esas especiotas, ha venido con esta proposición, y al apoyarla confunde lastimosamente mi administración con las anteriores. Si el Sr. La Rosa me hubiera preguntado algo sobre esto, yo le hubiera dado todas las explicaciones convenientes, como deseo darlas aquí, sin que se me pidan, respecto al tiempo que llevo de estar encargado de los bienes del Patrimonio.

Antes de encargarme de la Dirección especial del Patrimonio, que fué últimamente de la Corona, traje una proposición de ley á las Cortes anteriores, y de la que creí conveniente antes de presentarla dar conocimiento al gobierno, de que entonces formaba parte el Sr. Tutau, el cual me manifestó que el gobierno la hacía suya y la presentaría, siendo así más cortos los trámites para su aprobación. Esta proposición decía que se autorizaba al gobierno para que nombrara comisión ó comisiones que pudieran informarle acerca del destino que pudiera darse á los bienes que fueron últimamente del Patrimonio de la Corona, pudiendo disponer de estos bienes en el más breve plazo posible.

La Comisión, de que yo formaba parte, dió su dictamen, y éste no pudo discutirse por estar suspendidas las sesiones. Después de esto y habiéndoseme ofrecido por el gobierno algunos cargos importantes, y últimamente la Delegación, me negué á aceptar ninguno de ellos. Se me rogó repetidas veces que me encargara del Patrimonio de la Corona, y lo resistí por espacio de quince días, pero al fin creí que tenía el deber de aceptar este puesto de confianza y lo acepté con bastante sentimiento. No pude pensar que tratándose de una persona decente pudiera haber alguien que dudara de su moralidad en la gestión de los asuntos de este cargo: veo, con profundo desdén, que no ha sucedido así.

El Sr. La Rosa ha confundido ayer todo lo relativo á la administración del Patrimonio desde la revolución de 1868. No me haré cargo de lo que ha pasado en administraciones anteriores, sino en la mía: cuando yo he cometido la torpeza de aceptar ese cargo en este desdichado país, he encontrado el Patrimonio en la siguiente situación:

Las trescientas y tantas actas notariales de que se componía el inventario formado en la interinidad revolucionaria y que se había tardado dos años en hacerlas, estaban desde aquella época en la Dirección de Propiedades y Derechos del Estado.

Vino D. Amadeo de Saboya y se le entregó Palacio, pero no las actas notariales, ó sea la lista de lo que se le daba. Como es natural, D. Amadeo reclamó

los inventarios. Estaba detenida la operación más interesante que había de practicarse en el Patrimonio en la rectificación de los inventarios, pues no existían los originales y la Dirección de Propiedades se estuvo burlando de D. Amadeo durante todo su reinado, no entregándole aquellos documentos. Mi antecesor, señor Sorní, los reclamó también, aunque en vano.

Yo exigí con toda resolución que se me entregaran, manifestando que en caso contrario estaba decidido á hacer público el hecho en las Cortes. Se me ofreció enviarlos en el plazo de cuatro días, y aun cuando hubo alguna demora, al fin se me enviaron, si no dentro del plazo, al día siguiente. Enviados que fueron se empezó la rectificación por cuatro notarios, con quienes ajusté el trabajo en un tanto alzado y á plazo fijo, y tengo el gusto de decir que en este tiempo se han concluido, y que habiendo tenido que hacer algunos trabajos nuevos, hoy se están concluyendo, no solo las rectificaciones, sino las nuevas actas. De estos trabajos resulta que en lugar de faltar nada, han aparecido cosas que no constaban en las primeras actas. Por consiguiente, es completamente falso cuanto acerca de esto se dice, habiendo adquirido yo el triste convencimiento de que esas calumnias infames y groseras no salen de nuestros adversarios, sino de algunos que, llamándose republicanos, son los peores enemigos de la República y están empeñados en desacreditarla, empezando por desacreditar á los hombres decentes de este partido, que tienen hechos por él grandes sacrificios.

Adopté desde luego en Palacio disposiciones, no solo para evitar que salieran muebles y efectos de ninguna clase, sino también para impedir que entrasen, en términos que ni ha salido nada sin un previo y escrupuloso reconocimiento, ni ha entrado tampoco nada, á lo menos sin mi permiso. Para lanzar de ciertas dependencias á algunos canónigos modernos cesantes, que querían seguir cobrando sueldo del Estado sin hacer nada y ocupando el edificio sin derecho alguno, tuve que colocar parejas de orden público, á fin de impedirles la entrada, comunicándoles con sus familias. Esto me valió el que se me amenazase hasta con asesinarme, y de ahí salen todas esas infamias y calumnias de que se ha hecho eco el periódico *El Noventa y Tres* y después *La Justicia Federal*.

Me he negado á entregar algunos efectos de poco valor, que han venido á reclamar como de su propiedad apoderados de los reyes de la dinastía de Borbón, como escopetas de caza y ropas, manifestando que no lo haría sin una intervención, sin publicidad, y esto solo cuando se concluyesen los inventarios.

Cuando algunos empleados me han dado motivo para recelar de su moralidad, los he separado, sustituyéndoles con republicanos honrados.

En la situación aflictiva en que se encuentra el Tesoro, no ha podido darme el gobierno lo que estaba consignado en los presupuestos para la conservación de los edificios, y si no hubiera vendido oportunamente y con todas las formalidades de subasta los caba-

llos, las mulas, los cubiertos, colchones y otros efectos, no hubiera podido contar con los recursos necesarios para ir pagando á los empleados y jornaleros.

En este estado llegó la situación actual, y encontrándose mi salud quebrantada, sabe el Sr. Pí que en el penúltimo cambio ministerial hice dimisión, por el motivo que acabo de indicar y por considerar, además, que mi misión debía quedar terminada.

Ocupado el gobierno, seguramente, con la cuestión de orden público y con otras atenciones más urgentes, no había tenido tranquilidad ni tiempo para presentar un proyecto como el que yo había formulado en las Cortes anteriores. El ministro de Hacienda anterior al Sr. Carvajal, me pasó una comunicación como delegado del gobierno de la República, diciéndome que con la Comisión ó sin la Comisión clasificadora, emitiera mi dictamen acerca del destino que debiera darse á todos los bienes que fuesen del Patrimonio. Esta confianza me honraba, pero en lugar de prescindir de la Comisión la convoqué, no sólo por conceptuarlo así mi deber, sino también porque en esa Comisión había personas de las que verdaderamente honran á su país y que merecen, no solo á mí, sino á los hombres de todos los partidos, la más profunda estimación. Me apresuré, pues, á reunir las, y en dos sesiones acordamos dar un dictamen, en que á propuesta mía se suprimía la presidencia, manifestándose que dividida la Comisión en dos secciones, pudiera depender una de ellas de Hacienda y la otra de Fomento, y continuar sus

trabajos bajo la dirección de estos dos centros. Esto pasó hace ya tres días y mis dimisiones como Delegado y como Presidente de la Comisión, llevan la fecha del 29 y dicen así:

«EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PODER EJECUTIVO.

Madrid 29 de Junio de 1873.

A consecuencia de la comunicación que el señor ministro de Hacienda me ha dirigido, con fecha 25 del actual en que, como delegado y con el auxilio ó sin el auxilio de la Comisión nombrada para clasificar los bienes del Patrimonio, me pedía ciertos datos, sin tener en cuenta la importancia de los trabajos encomendados á la misma, y que era imposible que en el plazo de dos días diera por terminados, he reunido dicha Comisión, y á propuesta mía como presidente, ha acordado unánime en 28 del actual dar un dictamen en que se proponen al gobierno varias medidas que hacen inútil su continuación en la forma en que está constituida é innecesaria la presidencia que de la misma se me confirió por decreto de 27 de Abril último.

En virtud de lo expuesto, tengo el honor de presentar á V. E. la dimisión del expresado cargo.»

«EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PODER EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA.

Madrid 29 de Junio de 1873.

Excmo. Sr.: La necesidad de atender á mi quebrantada salud, me impide continuar desempeñando

el cargo de Delegado para la dirección del Patrimonio que fué últimamente de la Corona, y que por decreto de 2 de Marzo me confió el gobierno de la República. Lo admití en la fundada creencia de que uno de los primeros acuerdos de las Cortes Constituyentes sería declarar la incompatibilidad absoluta, y que en consecuencia cesaría en el mismo, aunque no es destino retribuido, por preferir sin vacilación el cargo de diputado y porque creí un deber de patriotismo y de consecuencia política, aceptar el puesto de confianza que se me designaba. Por esto he demorado presentar mi dimisión, pero no habiendo tomado aún las Cortes dicho acuerdo y no permitiendo el estado de mi salud ni mis convicciones en favor de la más absoluta incompatibilidad continuar en este puesto, ruego al gobierno de la República se sirva admitirme la dimisión que del honroso cargo de Delegado del gobierno de la República para la Dirección especial del Patrimonio que fué últimamente de la Corona, respetuosamente presento.»

Los señores ministros de Hacienda y de Fomento tienen en su poder este dictamen y yo una copia de él, que está á disposición del que quiera verla.

Después de esto me encuentro con la proposición de ayer, y los señores diputados comprenderán que yo debía dar estas explicaciones. Se equivocan los que creen que con la venta de los bienes del Patrimonio se puede salvar la situación financiera; esa venta es muy

conveniente al país, pero desde otro punto de vista más amplio que el puramente fiscal; se trata de algo que importa más que nivelar un presupuesto, cosa que, por otra parte, no sería posible, pues muchos de los bienes que actualmente constituyen el Patrimonio, no se pueden vender, y los vendibles no son para sacar de apuros al Erario, que obtendría cuatro ó seis millones de reales por el primer plazo dentro de algunos meses.

He olvidado decir, al hablar de los inventarios, que todo lo de mayor valor, como el relicario, todo el cuarto principal y la plata, está rectificado y asegurado.

En prueba de la ligereza con que se expresan ciertas calumnias, diré que no hace mucho se anunció que había desaparecido en el monasterio del Escorial un Códice muy estimado. Se mandó á los tribunales el periódico que lo anunciaba; se ofició al administrador del Escorial y su contestación fué que se había presentado el juez con un notario, ante los cuales se hizo constar que el Códice estaba en su sitio. Pues por este estilo son todas las demás noticias de que se hacen eco algunos periódicos.

Deseo que la Comisión que se nombre se componga de las personas más severas, de más confianza y más caracterizadas de la Cámara, para que se incaute de los bienes del Patrimonio y me pida los datos y explicaciones que guste. Yo se los daré; pero tengo derecho á exigir que cuando esa Comisión adquiriera el

convencimiento de que no ha faltado nada en mi tiempo lo manifieste en este sitio, donde se ha pronunciado la palabra *moralidad*, dando lugar á que pueda ponerse en duda mi conducta. Ya he manifestado que el papelucho titulado *El Noventa y Tres* ha sido llevado á los tribunales, y si no ha rectificado todavía la *Justicia Federal* se debe á que su director no se encontraba en Madrid. Este último periódico publicó un artículo, inspirado por el cesante de patronatos, á cuyo artículo se contestó con otro, pidiendo á la *Justicia Federal* se sirviese reproducirlo. Así ofreció hacerlo el director, pero no lo ha cumplido y yo tengo esta queja contra él. Me veo en la necesidad de defenderme, porque no se ha tenido en cuenta que las personas á quienes se podía ofender eran republicanos decentes y se ha dado palo de ciego, alcanzándome á mí uno de los que dió ayer el Sr. La Rosa, confundiendo las administraciones de la interinidad con la mía. La cuestión ha debido tratarse concretamente, pero no en los términos en que se ha hecho.

Voy á concluir manifestando que los que pongan en duda mi moralidad, no pueden hacerlo sin exponerse á que les conteste con el más profundo desprecio. Tengo bienes propios, los tiene mi mujer, y de mis ahorros siempre ha estado una buena parte á disposición de mis amigos los republicanos. Mi bolsillo ha estado siempre abierto para los que lo han necesitado, y por cierto que desde la proclamación de la República han disminuido algo estas demandas. Es

verdad que por otro lado me han pedido centenares de destinos que no he podido dar, porque en lo que fué Patrimonio de la Corona lo que había que hacer eran economías, y por consiguiente, yo he tenido que arrostrar la impopularidad de suprimir gran número de empleos, disgustando á muchas personas, lo cual creo que puede ser otro origen de las calumnias que contra mí lanzan algunos desventurados. Pero yo estoy tranquilo y seguro de que muy pronto se ha de saber lo que acontece y los móviles que han impulsado á esas personas que lanzan especies sin fundamento alguno.

Anhelo, pues, vivamente que la Comisión se encargue pronto de esos bienes, de cuya administración deseo verme libre hace tiempo.»

Este discurso, tan sentido como enérgico, produjo honda sensación en la Cámara; los diputados felicitaron al marqués de Santa Marta por su digna actitud; el ministro de Hacienda se hizo cargo de sus palabras y le dirigió frases en extremo lisonjeras, haciendo justicia á su delicadeza y á su severa honradez, y el Sr. Sorní, que interinamente había ocupado la Delegación del Patrimonio, defendió su breve gestión y la del Marqués, afirmando que mal concepto tendr ía de su propia honra quien tratase de poner en duda la de los que habian ocupado la Delegación en tiempo de la República. Terminó este incidente con las explicaciones leales que en la siguiente sesión dió el Sr. La Rosa, manifestando que nada había estado tan lejos

de su ánimo como lanzar cargos contra la administración republicana del Patrimonio y que en modo alguno había tratado de ofender ni molestar al marqués de Santa Marta.

Con motivo de este debate parlamentario y de las manifestaciones del marqués de Santa Marta, el gobierno le instó de tal manera para que continuase en su puesto, que hubo de resignarse á hacerlo así, aunque muy contra su voluntad y haciendo un verdadero sacrificio, pues el Sr. Pérez de Guzmán no es de los que aceptan los puestos para ejercerlos nominalmente y sus subordinados tienen en él no sólo un jefe experto, sino un vigilante incansable.

El 18 de Julio cayó del poder el Sr. Pí y Margall, y entonces el marqués de Santa Marta, que compartía las opiniones y la política de su amigo de siempre, basada en la conciliación leal de todos los federales, hizo dimisión con carácter irrevocable del elevado cargo que ocupaba en el Patrimonio, y en que había procedido con facultades discrecionales, pero con un espíritu tal de rectitud, severidad y justicia que su gestión ha sido unánimemente alabada por republicanos y monárquicos, y los mismos reyes cuando la restauración les volvió al trono, sólo tuvieron palabras de simpatía, elogio y respeto para la administración de D. Enrique Pérez de Guzmán. En vano el gobierno del Sr. Salmerón hizo esfuerzos reiterados para que el marqués de Santa Marta continuase ejerciendo la Delegación; en vano pasaron días y más días sin

proveer el cargo; en vano el ministro de Hacienda Sr. Carvajal visitó en su casa al Marqués para rogarle prosiguiese su acertada gestión al frente del Patrimonio; la resolución del Marqués era inquebrantable y al fin se le admitió la dimisión, nombrándose para sustituirle, bien que no ya como Delegado, sino como un funcionario dependiente de Hacienda, al Sr. D. José María Maury, á quien el marqués de Santa Marta hizo entrega de todos los efectos existentes en las habitaciones de Palacio, Armería, Caballerizas y ministerios de Estado y Ultramar y de todas las actas notariales, en que estaban inventariados todos los bienes que fueron del Patrimonio de la Corona. Catorce días se invirtieron en la comprobación, levantándose las correspondientes actas notariales, y el 21 de Agosto de 1873 ante el notario D. José Guerrero Brea, se hizo constar que no faltaba efecto alguno y que las habitaciones cerradas y selladas estaban en el mismo estado, encontrándose los sellos sin alteración. Esta acta, honrosísima para el Marqués, figura en el protocolo de 1873 de la notaría del Sr. Guerrero Brea con el número 466.

El marqués de Santa Marta, que pudo haber ejercido durante el período de la República los cargos que más lisonjean la vanidad y más enaltecen en el concepto de las personas superficiales, que son por desgracia, la mayoría; el marqués de Santa Marta que pudo haber sido ministro ó embajador, no quiso desempeñar otro puesto que una Delegación que le imponía trabajos abrumadores, sin remuneración alguna

y con grandes responsabilidades. En esa Delegación sirvió á su país y á la causa de la República como bueno y dió un ejemplo más de probidad intachable, de laboriosidad modesta y de acendrado patriotismo. Demostró que precisamente los hombres que rechazan los cargos públicos, son los verdaderamente merecedores de ejercer los más altos.



QUINTO PERIODO



CAPÍTULO XX

Situación de los republicanos después del 3 de Enero de 1874.—

Medidas adoptadas por el gobierno usurpador.—Planes de persecución propuestos por el ministro García Ruiz.—Conducta del marqués de Santa Marta ante las tropelías gubernamentales.—Amenazas contra su persona.—Arrostra las iras de los enemigos de la República.—Su actitud ante el giro que tomaban los asuntos públicos y la situación de las agrupaciones republicanas.



CONSUMADO el inícuo atropello en virtud del cual se apresuraron los monárquicos y los apóstatas á repartirse los despojos del poder, como los sayones la túnica de Cristo, la actitud de los republicanos estaba desde luego indicada por la dignidad y el decoro; pero, desgraciadamente, no todos los que se adornaban con aquel nombre tuvieron noción clara de sus deberes ni el pudor de ocultar sus complicidades en aquella infamia; antes al contrario, como si les apremiase el hacer gala de su traición, se apresuraron á entenderse con los monárquicos para restablecer un gobierno, que solo irrisoriamente podía titularse republicano. En honor de la verdad, debe reconocerse que entre los que ostensiblemente intervinieron en las negociaciones y en la política de la dictadura de 1874,

no figuraba ningún verdadero republicano, sino todos los que habiendo sido monárquicos hasta el 11 de Febrero, volvieron á serlo después con la dinastía de Borbón. Demostraron así que su republicanismo no tuvo más móvil que la necesidad, y que su conducta dentro de la legalidad creada al abdicar Amadeo de Saboya, propendió constantemente á precipitar las instituciones republicanas por el camino de su perdición. Los que de buena fe habían aceptado la República en el memorable día de su proclamación y han seguido hasta aquí siéndole fieles, aparecían en cierto apartamiento de la situación, como avergonzados del proceder de sus antiguos amigos, abandonándoles á sus propias fuerzas y dejando que les arrojasen ignominiosamente del poder en la primera ocasión los amigos del duque de la Torre. Si los radicales que permanecieron fieles á la causa republicana hubieran tenido la energía de rechazar más adelante de su organización á tales elementos, factores peligrosos en todo partido, se habrían ahorrado seguramente las perturbaciones originadas por sus apostasías en el reinado de D. Alfonso y facilitádose tal vez la inteligencia en tiempo oportuno.

No es necesario decir que el marqués de Santa Marta se contaba entre los vencidos, como ardiente republicano que hacía título de orgullo y timbre de gloria el serlo y el estar decidido á vivir y morir en su creencia. Político serio y honrado, mostró su indignación ante la odiosa comedia política, que amparán-

dose de mentido patriotismo venía á continuar las tradicionales explotaciones interrumpidas por el alzamiento de Cádiz; republicano de corazón y de firmes convicciones, no podía transigir con los asesinos de la República, ni con la dictadura que era el prólogo de la restauración; carácter integérrimo y enérgico, condenaba las debilidades ó las apostasías, causa de la vergonzosa derrota; lejos de amilanarse en la desgracia, encontró en ella estímulos y alientos para desafiar sus rigores y arrostrar todos sus peligros.

No eran pocos los que amenazaban á los republicanos históricos, blanco preferente de los odios de aquel gobierno detentador é ilegal, nacido de un golpe de fuerza, y del cual formaba parte para eterna mengua de su nombre—que los republicanos, más piadosos con él que lo será indudablemente la historia, han querido olvidar—un politiquillo, D. Eugenio García Ruiz, que pasó su vida predicando la democracia, la libertad y la República unitaria, para concluir por emular desde el ministerio de la Gobernación las glorias de Calomarde, igualando á éste en la crueldad de sus procedimientos. Nada le parecía bastante para castigar el delito de republicanismo, y á no estorbarlo sus compañeros de gobierno, es posible que sus sanguinarios instintos le hubiesen granjeado un lugar en la historia como un grotesco Nerón del siglo XIX. Arcaísmo viviente, ajeno del todo á su época, ignorante de lo más elemental de la ciencia política y del arte del gobierno, y sobre todo, poseído de la más ne-

gra envidia contra las grandes figuras del republicanismo, sus iniciativas se inspiraban en el odio y sus actos solo respiraban rencor y ferocidad. Aun contenido por sus compañeros, que únicamente se servían de él como de un disfraz para engañar á los incautos con un espantajo de República, porque no tenía más representación que la de su persona, y ésta era bien escasa, aun contenido por los otros gobernantes, que al fin y á la postre, aunque doctrinarios y monárquicos, eran hombres de otra talla y de otra educación política, exageró cuanto pudo las medidas reclamadas por el instinto de conservación de aquel gobierno, en daño de los más fieles adictos á la causa republicana, demostrando especialmente su encono contra los federales. Expatrió á centenares de honrados hijos del pueblo, á pretexto de que habían tomado las armas para defender la República, y ya que no le dejaron parodiar grotescamente el terrorismo de la Revolución francesa, como quería, deportó á las inhospitalarias islas del Pacífico á muchos infelices, cuyo único crimen, en la mayor parte, había consistido en ser fieles á su causa. Pero, sin duda, no era esto bastante para satisfacer sus rencores, y propuso al gobierno la adopción de medidas rigurosas contra los jefes y las personas más ilustres y significadas de la democracia española, entre las cuales estaba llamado á ser objeto preferente de los furores dictatoriales el marqués de Santa Marta, con tanto más motivo cuanto que éste no se ocultaba para manifestar en todos sitios, con la vehe-

mencia de su enérgico carácter, la repugnancia que le producían las indignidades cometidas contra los republicanos, como si fuera poco el haber hecho tan escandalosa traición á la República, y el espectáculo vergonzoso de apostasías y arbitrariedades, tan desfavorables para el prestigio del nombre español.

Si habían sido toleradas y aun vistas con cierto agrado las levas de oscuros y modestos patriotas, no se atrevía el gobierno, no obstante hallarse en él políticos de proverbial desenfado, á proceder abiertamente contra las personas de cierta altura y representación, temeroso de incurrir en arbitrariedades demasiado escandalosas, que habrían cedido en daño del propio interés de la dictadura pseudo republicana; pero al mismo tiempo la permanencia en la Península de los hombres de influencia y valía en el campo republicano era un peligro permanente, una amenaza constante para los fines que se perseguían. En esta perplejidad los gobernantes buscaron en ardides impropios de una política seria, el medio de conseguir su propósito, sin correr los riesgos de una conducta de franca represión. Apelóse, pues, al sistema de las insinuaciones más ó menos veladas, de las indicaciones significativas y de las amistosas advertencias, procurando por estos medios convencer á cuantos estorbaban en España el desarrollo de la política del gobierno, de la conveniencia de un viaje voluntario al extranjero. Estas burdas maniobras llegaron á causar efecto en algún espíritu impresionable, que se inclina-

ba á expatriarse voluntariamente, y quizás lo hubiera hecho de tener quien le siguiera. El marqués de Santa Marta, además de las advertencias más ó menos embozadas, de ciertos amistosos y al parecer desinteresados avisos, llegó á recibir anónimos de todo género, advirtiéndole en unos, cualquier amigo que ocultaba cuidadosamente su nombre, los riesgos que corría en Madrid, conminándole en otros, enemigos igualmente ocultos, con destruir su casa primero y asesinarle después, si á pesar de tan suaves y cariñosas exhortaciones, no abandonaba el suelo español.

Estos recursos fueron contraproducentes, porque en presencia de tanta indignidad, el marqués de Santa Marta declaró que sería insigne cobardía mostrar flaqueza ante semejantes amenazas, y que no solo exigía la dignidad permanecer en España, arrostrando cada cual las consecuencias de su posición, sino que debía darse á cada paso fe de vida, sin rehuir peligros ni esquivar contingencias, fuesen las que fuesen. En consonancia con este modo de pensar ajustó su conducta, frecuentando los sitios más públicos y concurridos, realizando con solo su presencia un verdadero y patriótico alarde de varonil y firme constancia en sus ideas, y demostrando en todas ocasiones su adhesión á la causa vencida, pero que vencida y todo era la única esperanza para el pueblo.

¡Digna y plausible conducta que contrastaba con la de los espíritus apocados ó con la de los hombres sin fe, que doblaban la cerviz ante la procaz rebelión triunfante!

Pero con ser grande la indignación producida en el ánimo del marqués de Santa Marta por los arteros y arbitrarios procederes ministeriales, no llegó á tanto como la que le produjo la inconcebible actitud de don Emilio Castelar, el hombre funesto para la República.

El antiguo y fervoroso defensor de los más extremados radicalismos, después de renegar de la federación, renegaba también de la República, ofreciendo su benevolencia al gobierno usurpador, de quien había dicho á raíz del 3 de Enero en la prensa que «le separaba su conciencia y su honra,» y llevaba su despreocupación al extremo de trabajar con un ahinco que no empleó nunca en concertar á los republicanos desavenidos, para impedir la ruptura entre radicales y fusionistas en la crisis de Mayo, á raíz del regreso de Serrano del Norte. Luego le pagaron engañándole, negando á sus amigos la cartera que le habían ofrecido para D. Buenaventura Abarzuza; pero ni este engaño fué bastante para entibiar su benevolencia, cuyo término inevitable todos hemos visto.

Era verdaderamente para indignar aun á los espíritus más frios la conducta de aquel hombre que no hacía seis meses se declaraba inhabilitado en plena Asamblea Nacional para ser en adelante hombre político y que volvía á la política activa, ofreciendo amistad y aceptando la limosna de la protección de un gobierno que debía su origen á medios reprobados por la conciencia universal. El marqués de Santa Marta, en quien la impetuosidad de su sangre meri-

dional y los impulsos de sus generosos entusiasmos no debilitan el dominio de sí propio ni estorban la serenidad del juicio, es hombre que no se para en la superficie de las cosas, ni se contenta con observarlas exteriormente, sino que no se satisface hasta haber llevado su análisis á las más oscuras profundidades del fondo. Convencido de que en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño cabe la variedad inmensa del universo, no ve en la superficie, en lo exterior, más que la cubierta, casi siempre engañosa, de los grandes misterios, y llevado de estas convicciones, es en él un hábito el escudriñar lo escondido, ir siempre al fondo de las cosas.

La conducta de Castelar, mostrándose públicamente afecto al gobierno del duque de la Torre, produjo la más honda pena al marqués de Santa Marta. Todo el mundo tenía indicios y sospechas contrarios á la lealtad del último jefe del gobierno republicano; pero al hacer Castelar pública su adhesión, con escándalo de todas las conciencias republicanas, la opinión pública relacionó estos hechos con las promesas no realizadas del tribuno, primero de castigar la osada y criminal rebelión de Pavía, después de retirarse absolutamente de la vida pública y con la conducta de sus parciales, que no habían dimitido cargos importantes en el extranjero y habían procurado conservarlos, felicitando á los autores del golpe del 3 de Enero. La consecuencia de esto era evidente: en el 3 de Enero, ese hecho aun no bien explicado para la generalidad, hubo una

deslealtad más grande, más negra, más horrible que la del capitán general de Madrid; la del jefe de la República, que cayó al filo de las mismas armas prevenidas contra sus correligionarios, para obtener la supremacía incontestada é indiscutible en el gobierno.

Así es que, antes de que Castelar, curándose en salud y sabiendo que su proceder abría para siempre un abismo entre él y sus correligionarios, dijese que jamás se uniría con ellos; ya los republicanos verdaderamente dignos de este nombre, habían pensado, y no se ocultaron para decirlo, que se podía ir con confianza á la reconquista de la República con los que hubiesen sido sus más irreconciliables adversarios; pero que con Castelar no se podía ir, porque con hombres así no se va bien, ni se está nunca seguro.

Puede imaginarse cuan triste sería el desencanto del marqués de Santa Marta, teniendo en cuenta la dolorosa impresión que en pechos leales producen siempre las defecciones de las personas á quienes se profesa afecto sincero, y tan sincero como grande era el profesado á Castelar por el marqués de Santa Marta en la época revolucionaria, durante toda la cual tenía la satisfacción de ver frecuente y periódicamente sentados á su mesa, reunidos por el vínculo de una sincera amistad, á los jefes del antiguo republicanismo. Considerando el profundo desaliento que los desengaños políticos producen aun en las almas bien templadas, se puede concebir las grandes tristezas que inundarían el ánimo del marqués de Santa Marta y los

amargos presentimientos que asaltarían su ánimo á la vista de la difícil y comprometida situación creada por el mónstruo de la guerra civil, cada vez más potente, gracias á la debilidad con que se la combatía, en la esperanza de que justificase la restauración de D. Alfonso.

Pero sobreponiéndose á todo el marqués de Santa Marta, no vaciló siquiera en sus convicciones ni se entregó á desalientos, impropios de corazones esforzados. Otro quizá, viéndose envuelto entre los horrores de naufragio tan espantoso de instituciones, de ideas y de hombres, no hubiera vacilado en retraerse de toda lucha política, que solo ofrecía un presente lleno de peligros ciertos y un porvenir azaroso, para entregarse al regalo de la apacible y cómoda existencia que le aseguraba su posición, al abrigo de toda contingencia; pero él cerró los oídos á toda sollicitación egoísta, para atender únicamente á los estímulos de su conciencia y de su acrisolado patriotismo. De esta manera pensó, y pensó bien, que enaltecía los gloriosos timbres de su apellido, que tuvieron origen en el desinterés y en la lealtad.

Tal se hallaba la República en aquel período, y un descendiente de Guzmán el Bueno no podía seguir más que una conducta: la de la lealtad; seguir su suerte, sacrificándole cuanto un hombre puede sacrificar por una causa; desde las ventajas de la posición social hasta la vida, si preciso fuera.

La del marqués de Santa Marta se halla tan estre-

chamente unida con las vicisitudes del partido republicano español, que causa verdadero asombro, dado el grosero utilitarismo de nuestra época, la constante y no interrumpida adhesión durante una vida entera á una causa que ha sometido á prueba constante la lealtad de sus defensores, sin otra recompensa que la satisfacción de haberla servido lealmente.

Por eso, porque el servidor leal nunca es interesado, por lo mismo que no aspira á otro galardón que al de la propia conciencia, el marqués de Santa Marta supo con verdadera satisfacción que cuando unos desmayaban y otros se aprovechaban de la traición, entraba resueltamente en el campo republicano D. Manuel Ruiz Zorrilla. No venía éste—es cierto—á engrosar las filas federales; pero venía á aumentar el número de defensores de la causa común; había sido leal hasta lo último con la monarquía de Saboya, y esta misma lealtad garantizaba la que guardaría á la República, y si era por una parte hombre de antecedentes monárquicos, era también de ideas profundamente liberales, que le habían granjeado gran popularidad. Representaba, por consiguiente, un refuerzo importante en la lucha por levantar el espíritu público y sacar del retraimiento á muchos hombres retirados á sus hogares ante el triunfo descarado de la apostasía.

Algo contribuía con todo á debilitar la satisfacción del reconocimiento de la República, por decirlo así, de parte del Sr. Ruiz Zorrilla, el desacuerdo iniciado á la sazón entre importantes federales que, en repetidas

ocasiones y por diferentes motivos, habían procurado llegar á una fórmula de avenencia, sin lograrlo.

Sin embargo, la grave situación creada al país por la indefinida política del gobierno, la torpe gestión de éste, y sobre todo, los anuncios de una próxima tentativa de los alfonsinos, preocupaban en general los ánimos y contribuyeron á acallar por entonces las diferencias que habían de estallar más adelante.

Mientras tanto la situación facciosa, creada á raíz del golpe del 3 de Enero, había consumido ya tres ministerios: el del general Serrano, el general Zabala y el de D. Práxedes Sagasta, quedando el duque de la Torre como presidente del Poder Ejecutivo de la titulada República. La guerra civil, lejos de terminar, había crecido en proporciones verdaderamente terribles; cerca de cuatrocientos infelices prisioneros, hechos en Cataluña á la columna de D. Eduardo Nouvilas, habían sido fusilados por el infame cabecilla Savalls; Bilbao se había visto seriamente comprometido por los carlistas; el general D. Manuel de la Concha, jefe del ejército del Norte, había sido muerto en la batalla de Montemuro y todo era indecisión y zozobra.

Para dar algún carácter á aquella situación inconcebible, se pensó por algunas personas muy allegadas al general Serrano en investir á éste con la presidencia de la República por siete años, á imitación de lo que se había hecho en Francia con Mac-Mahón; pero al fin se fueron inclinando los ministros á consentir en la restauración de los Borbones, pues aparte de esta

solución no veían otra que la República dirigida por los mismos republicanos, y no transigían con esto en modo alguno. Con el fin de dar algunos visos de seriedad á la indigna farsa que se preparaba, nombraron al general Serrano jefe del ejército del Norte para que estuviese á corta distancia de la frontera y pudiese pasar fácilmente á Francia, una vez que se realizase la sublevación alfonsina. Cánovas del Castillo, creyendo expuesta semejante combinación, prefería que el gobierno convocase Cortes Constituyentes, procurando traer una enorme mayoría de alfonsinos, pero los hechos se precipitaron.

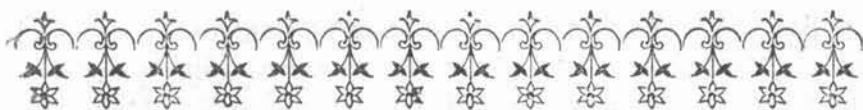
El 29 de Diciembre de 1874 Martínez Campos, Dabán y Jovellar se sublevaron con las tropas que mandaban para combatir á los carlistas, proclamando á D. Alfonso XII. Al recibir las primeras noticias, los republicanos, entre los cuales se contaba ya, como hemos dicho, D. Manuel Ruiz Zorrilla, procuraron organizar fuerzas para resistir la insurrección y se ofrecieron al gobierno para salvar la libertad, amenazada por la restauración borbónica. Fácil hubiera sido impedirla si aquel hubiese aceptado los ofrecimientos de hombres sinceramente liberales y el apoyo popular. Pero aquellos ministros tan impopulares, sintiendo alarmada su conciencia, antes que apoyarse en el pueblo, á quien habían agraviado tanto, prefirieron someterse á D. Alfonso y se rindieron vergonzosamente, después de haber calificado en la *Gaceta* el movimiento de acto incalificable, que nos deshonoraba ante los ojos de

Europa, y ofrecido cumplir con su deber de gobierno.

Para cohonestar aquella traición dijeron luego los individuos de aquel gobierno que no habían querido desencadenar sobre España una nueva guerra civil; pretexto á la vez cobarde, indigno y falso, pues aquel movimiento militar, no secundado por el ejército del Norte ni el de Cataluña, se habría apagado fácilmente y en muy pocos días con solo oponerle resistencia. La verdad es que los ministros vieron con júbilo aquella rebelión que les permitía alejar del poder á los republicanos y reconciliarse con los Borbones. La condenación que del movimiento hicieron en la *Gaceta*, fué pura broma.

Hubiera sido la primera vez que esos hombres dejaran de burlarse del país.





CAPÍTULO XXI

El golpe de Sagunto confirma las previsiones del marqués de Santa Marta.—Su actitud ante el nuevo estado de cosas creado por la restauración.—Su juicio acerca del breve reinado de la República.—Sus opiniones acerca de las causas de su rápida decadencia y desaparición.—Antecedentes de estos juicios.—Su criterio y norma de acción respecto de la organización republicana.—Dificultades opuestas á su realización por el Sr. Ruiz Zorrilla.—Razones que determinaron la conducta del marqués de Santa Marta en las negociaciones para llegar á un acuerdo entre los grupos republicanos.



No participaba el marqués de Santa Marta del estupor producido en muchos republicanos por la proclamación de D. Alfonso, consecuencia inevitable, último término lógico de la serie comenzada con el infame atentado del 3 de Enero. La restauración era un hecho previsto, temido y anunciado por el marqués de Santa Marta desde la disolución de la Asamblea, cuyas protestas no fueron mantenidas como debiera para ser eficaces: el silencio, el anonadamiento en que parecían haber caído las poderosas fuerzas republicanas ante la insolente dictadura de Sagasta, auxiliado y excedido en el rigor de los procedimientos por un republicano que había tenido á gala ser el mayor enemigo de la República, eran suficiente causa

para alejar toda esperanza de una reivindicación próxima. Solo un acto de entereza y de valerosa energía pudo impedir el 30 de Diciembre de 1874 el triunfo de una insurrección, vencedora por la traición del gobierno, que estando ya decidido á someterse á Martínez Campos, representó una triste comedia para engañar una vez más al pueblo. Pero el acto de energía no se realizó.

En aquellos tristes días fueron muchos los desalentados y no fueron pocos después, en las diversas etapas de la restauración, los que desmayaron y claudicaron, ofreciendo el tristísimo espectáculo de la cobarde indiferencia ó de la vil apostasía: creyeron, sin duda, los apóstatas y desertores, eclipsado en nuestra tierra el sol de la democracia y la República perdida para siempre.

No era esta actitud la que correspondía á ánimos enteros y varoniles que en el peligro se crecen y fortifican su fe en la desgracia, consagrando al estudio sereno de los hechos las horas empleadas por los débiles y apocados en esquivar riesgos probables y colocarse en actitud de aprovechar las ocasiones de seguros medros. La triste situación á que vino el país y la no más halagüena de los republicanos, no pudieron entibiar el entusiasmo ni quebrantar la entereza del marqués de Santa Marta; antes por el contrario, la desgracia arraigó más en él sus convicciones republicanas y fortaleció su fe en la federación, siendo, más que causa de desaliento, estímulo y acicate para su activi-

dad, dirigida preferentemente desde entonces á preparar el porvenir, limpiando el camino de los obstáculos en que había ido la República de tropiezo en tropiezo, hasta su desastrosa y traidora muerte.

Meditando con espíritu de certero análisis sobre la complicada trama de los acontecimientos que constituyen la historia de la República en nuestro pueblo, el marqués de Santa Marta vió con claridad en el caos de aquel confuso período, aun hoy para muchos un enigma, y formó juicio acabado de los hechos y sus causas, vislumbrando el único camino abierto á las esperanzas de los republicanos.

La República de 1873 fué una sorpresa primero, una gran obcecación después y siempre una injustificable debilidad. Es necesario, es indispensable decirlo, porque con reconocer los males no se agravan, antes bien, se les procura el remedio, y la imparcialidad, que debe resplandecer en la biografía como en la historia, obliga á todo hombre de recto juicio á elegir el punto de vista desde donde se ve la verdad por encima de las pasiones y de los prejuicios de todo género. No es el mejor médico el que por halagar los caprichos del enfermo aplica paliativos á la úlcera gangrenosa, exponiéndole á una muerte segura por no exacerbar el padecimiento, sino el que cauteriza despiadadamente, asegurándole la existencia á costa de pasajeros dolores. Del mismo modo no es mejor ni más fiel paladín de una causa quien niega los males evidentes para halagar las pasiones de bandería, sino quien reconocién-

dolos, á la vez que los denuncia ante la conciencia pública, escudriña sus causas para aplicar el remedio. No por ser republicano había el marqués de Santa Marta de cerrar los ojos á la evidencia, ofreciendo la verdad como en sacrificio estéril en aras del amor entrañable á la idea, lo cual hubiera sido perniciosa adulación á inconscientes pasiones; precisamente por ser republicano, por llevar en su alma el amor de la República, se consideraba en la obligación de no ocultar á nadie ni ocultarse á sí mismo, haciéndose á sí propio víctima de pueril engaño, los peligros y los desastres del pasado, como fructuosa enseñanza para lo futuro.

Pensaba el Marqués que la República había sido una sorpresa, porque provocada por el inesperado arranque de D. Amadeo de Saboya, nadie la esperaba, á excepción de dos ó tres políticos, que tuvieron buen cuidado de no comunicar con nadie el secreto; fué una gran obcecación, porque venida como vino, en vez de esforzarse los republicanos en consolidarla por medio de afirmaciones y actos comunes, se consagraron á la inconcebible tarea de establecer en el período de gobierno las diferenciaciones, es decir, hicieron todo lo que podía debilitar una institución naciente, rodeada de irreconciliables enemigos, y fué, por último, una constante debilidad, porque solo hubo energía en los de arriba para afirmar los intereses de bandería ó para realizar una política en pugna abierta con los principios democráticos: es decir, que á través de las afirmaciones parciales de las fracciones, todo fué

entonces una gran negación, de que la historia pedirá cuentas en su día á los que debieron convertir aquel período en una época gloriosa de fecundas afirmaciones de libertad y democracia.

No hay entendimiento á quien se oculte la razón de las anomalías de 1873. Sorprendió la República, imponiéndose como una necesidad ineludible del instante á los republicanos, sin darles tiempo para establecer entre ellos las debidas distinciones. La política opresora de los gobiernos anteriores á la revolución de Septiembre, había sido para las ideas republicanas lo que las nieves del invierno para los gérmenes de las plantas: la semilla de la democracia germinó lentamente bajo el sudario de la opresión, brotando con incontrastable fuerza en aquel despertar del pueblo español al ruido de los cañones de Alcolea, como brota erguido y fuerte el tallo del seno de la tierra al influjo del sol primaveral.

El pueblo, víctima por tantos siglos de la opresión de los monarcas, y tan enamorado de sus tradiciones municipales, en las que veía vinculadas sus libertades todas, la bandera de la democracia republicana federal había de ganarse todos los corazones. Apenas desplegada, todos los republicanos sinceros se agruparon á su sombra: á raíz de la victoria de Serrano en Alcolea, se congregaba el pueblo en todas partes en nombre de la República federal; á los seis meses llevaba á las Cortes Constituyentes la más brillante y numerosa minoría de que guardan memoria nuestros anales par-

lamentarios, y pocos meses después la idea federal ponía sobre las armas más de cincuenta mil combatientes, produciendo una conflagración que puso en peligro la vida del gobierno que había usurpado el poder á raíz de la revolución y había formado unas Cortes monárquicas, valiéndose de los abominables medios tantas veces condenados en los gobiernos de la monarquía secular.

No hay quizás ejemplo en la historia de partido tan numeroso, tan entusiasta y tan bien organizado como lo era el partido republicano federal de España en aquel período. Pero al escribir sus anales, porque ese partido ocupará una página preferente en la historia de la España moderna, no podrá ocultarse al historiador, como no se oculta actualmente á ninguna persona de buen sentido, que en medio de aquel fervoroso entusiasmo, de aquella ardiente fe, que eran y siguen siendo la característica de los federales españoles, había entonces un germen peligroso, por fortuna extirpado hoy, origen de todos los males que después hubo de lamentar el pueblo, y con el pueblo el partido federalista español.

La historia, ante los acontecimientos relacionados con la vida y desarrollo de las ideas federales, habrá de formular necesariamente esta pregunta: ¿eran efectivamente federales, dispuestos á aceptar la idea con todas las consecuencias de su desenvolvimiento lógico, cuantos figuraban en el gran partido federal español?

En justicia habrá de contestarse afirmativamente

respecto de la inmensa mayoría del partido; pero á la vez es forzoso confesar que en las alturas, entre los elementos directivos había divergencias, si no manifestadas abiertamente, determinadas en actos de indudable trascendencia en la marcha del partido. Eran pocas, en verdad, las personalidades, contando el número de sus secuaces, pero su calidad y su influencia compensaban sobradamente la escasez del número. El primer chispazo de esta divergencia se vió en la famosa *Declaración de la prensa*, firmada por representantes de periódicos federales y unitarios, en la cual aparecían unidos unos y otros, comulgando en principios que no eran los proclamados por la Asamblea del partido. Desautorizada aquella *Declaración* por el Directorio y por un manifiesto de los diputados de la minoría federal, reforzados con la adhesión de los comités de España, conjuróse por de pronto el conflicto, aun cuando se comentaba al oído la participación que en él se atribuía á individuos del Directorio, firmantes de la desautorización. Pero las diferencias no desaparecieron y la prueba de que las había y hondas, pues afectaban á la esencia de los principios, la ofrecen los hechos posteriores, ocurridos precisamente en las circunstancias más críticas para el partido y la nación, viniendo también esos hechos á confirmar ó á dar apariencias de razón á los que afirmaba la connivencia de los Sres. Castelar y Figueras, miembros del Directorio federal, con los directores de los periódicos firmantes de la famosa *Declaración* ya mencionada. El

Sr. Castelar declaró en las Cortes republicanas, siendo presidente del Poder Ejecutivo, que la federación era únicamente cuestión de procedimiento, de organización provincial y municipal, y años después el señor Figueras hizo alarde de sus tradiciones antipactistas, á pesar de haber firmado, con los Sres. Pí y Castelar, la desautorización de la prensa, afirmando que de conformidad con las declaraciones de la Asamblea, á la que debían sus poderes, al proclamar como forma de gobierno de su partido la República democrática federal, aspiraba á constituir la nación española en un grupo de verdaderos Estados, unidos por un *pacto federal*, expresión de su unidad, salvaguardia de sus intereses y la más sólida garantía de los derechos del individuo.

No es esta la ocasión de discutir las complejas cuestiones que entrañan los principios federales ni de anticipar el juicio de la historia sobre estas contradicciones en la conducta de hombres políticos que figuraron en primera línea en su partido y ejercieron después las más altas funciones en la gobernación del país; pero conviene á nuestro objeto explicarlas como antecedente de la conducta y opiniones mantenidas con viril entereza por el marqués de Santa Marta en períodos difíciles, en circunstancias graves de la política y no menos graves y difíciles para su partido.

¿Cómo se explica la aquiescencia de hombres de tanta altura á principios que pugnaban con sus convicciones? Este problema deja de serlo si se estudia á

fondo la historia del partido federal español y el carácter de nuestro pueblo, enamorado de cuanto fuese autonomía, es decir, independencia de Municipios y provincias para gobernar su vida interior, hartos como estaba de la esclavitud centralizadora. Repugnaban los federales cuanto implicase la más leve limitación de la autonomía, porque el instinto popular veía los peligros de toda concesión al poder absorbente del Estado fuera de la órbita de sus derechos peculiares y consideraba el pacto federal como el principio necesario y la condición indispensable de esa autonomía. Negar aquel principio era colocarse en frente del partido y no hubo quien se atreviera á tanto, no por espíritu de ambición, no impulsados por móviles que no fuesen generosos y nobles, sino obedeciendo á conveniencias políticas, equivocándose, con propósitos honrados, pero equivocándose lastimosamente, prefiriendo sacrificar temporalmente sus opiniones á debilitar las fuerzas del partido, provocando excisiones, creyendo llevarlo así más pronto á la tierra de promisión de la República, como ideal inmediato, dejando para más adelante y como fin más lejano, la práctica de los principios federales.

Y esta fué su equivocación más dañosa, digámoslo salvando la rectitud de sus intenciones honradas y puras, porque aquella unión ficticia entre hombres que profesaban, no ya principios contrarios, sino antitéticos, no sirvió para acelerar el advenimiento de la República, venida por motivos ajenos de todo punto á la

actitud de los republicanos, sino por imposición de las circunstancias; no sirvió, decimos, para apresurar el triunfo de la República y fué obstáculo insuperable primero y causa más tarde de la ruina de todos.

Aquellas figuras salientes y venerables de la causa republicana, que creyeron hacer un bien con el sacrificio de sus ideas en aras del interés político inmediato, tienen sobre sí esa gran responsabilidad: si les salva su intención, si les absuelve la rectitud de sus propósitos, la lógica les condena y la crítica histórica no podrá perdonarles. Si hicieron el sacrificio en la oposición, debieron continuarlo hasta afirmar de un modo inconvencible la República, ya que los compromisos impuestos por las circunstancias y la forma de su planteamiento, les favorecían para hacerlo sin desprestigio y les ayudaba con su buen sentido el pueblo, que sólo exigió el cumplimiento de las promesas y procuró realizarlas por sí mismo cuando se convenció de que miserablemente engañado por los que en nombre de las amadas ideas le habían enviado más de una vez á buscar la muerte en la lucha desesperada con los poderes monárquicos. En vez de proceder así, como á una demandaban la conveniencia y la lógica, eligieron aquella ocasión para establecer las diferencias, para dividirse y volver contra sí mismos las poderosas fuerzas que la República y la patria necesitaban para su defensa. Justa y merecida habría sido la pena de perder la República, si no hubiese alcanzado al pueblo, que es en definitiva quien siente y sufre las con-

secuencias de los errores cometidos por los hombres en quien pone su confianza.

Tan ruda lección de la experiencia no podía ser desatendida por hombre tan amante de su partido, tan constante en sus convicciones y tan leal á su causa como el marqués de Santa Marta, quien conociendo que la debilidad de la República había sido efecto de la división de los republicanos, y la división y la lucha, consecuencias indeclinables de la confusión en un solo partido de tendencias contrarias, señaló como el único remedio para evitar en el porvenir más ó menos próximo, reservado por la suerte al triunfo de las ideas republicanas, la diferenciación de esas tendencias distintas, y como condición para llegar á ella la determinación concreta de los respectivos dogmas políticos en todas las agrupaciones republicanas. Tal fué el principio capital que informó su conducta durante el primer período de la restauración. Ninguna de las objeciones que se hiciesen á este racionalísimo criterio podían tener fuerza, porque no podían sustentarse sobre base seria. Los peligros de la lucha consiguiente á esta diferenciación necesaria, exigida por los principios más rudimentarios del sentido común, no eran tales peligros en la situación de los republicanos, alejados entonces del gobierno, aparte de que la lucha en este sentido no había de revestir los caracteres que reviste cuando se combate á la vez por la personalidad política y la posesión del gobierno, como sucedió en 1873, ni había de ser obstáculo para las inteligencias nece-

sarias y convenientes, y aparte también de que no había peligro tan grande como el de repetir el pasado y reciente ensayo en las mismas condiciones.

La lucha de hoy, pensaba con gran lucidez de espíritu y fuerza de lógica el marqués de Santa Marta, la lucha de hoy, necesaria y precisa para el deslinde de campos, es el triunfo incontrastable de mañana y la inteligencia leal para robustecer y perpetuar la República; el *statu quo*, la indeterminación en las ideas, la confusión en la organización es el peligro para el porvenir de la República, peligro tanto más grave cuanto que una nueva caída por idénticas faltas, por las mismas torpezas, implicaría no solo la muerte, sino el descrédito de la democracia para mucho tiempo.

A pesar de todo, el partido federal era el único que podía ofrecer un programa definido, porque los demás, ó no habian podido formularlo por militar hasta entonces en las filas federales, ó tenian que reformarlo, como los recién venidos á la República, para ponerlo en concordancia con los nuevos principios aceptados. Pero distaba de estar bastante definido para justificar un deslinde, como lo demuestra el seguir entonces llamándose federales muchos de los separados después, y el que éstos mismos pretendiesen justificar lo extraño de su conducta con interpretaciones sofísticas de los principios antes aceptados. Era evidente y se imponía por razones de seriedad, de conveniencia y de política, la necesidad de definir de modo concreto y categórico las doctrinas, para ponerlas á cubierto de

adulteraciones y de sutilezas, y como corolario una adecuada organización de las fuerzas federales.

No se ocultaba á la penetración del marqués de Santa Marta la necesidad de unir las fuerzas de los republicanos todos para el combate contra el enemigo común, pero también conocía la imposibilidad de hacer fructífero ese concurso de energías, sin darle la organización de fuerzas regulares que peleasen sostenidas por la disciplina, con arreglo á un plan preconcebido debidamente combinado.

Estas ideas, que á decir verdad, se abrieron pronto camino entre los federales, llegando á constituir su norma de conducta, encontraban un obstáculo poderoso en la actitud del jefe de los radicales, D. Manuel Ruiz Zorrilla, el cual, juzgando por un error indisculpable que los moldes de los partidos republicanos estaban rotos, como si pudiese afirmarse tal cosa de los partidos que no han tenido ocasión, como no la tuvo el federal, de aplicar sus ideas á la gobernación del Estado, y como si hubiera podido agotarse una doctrina fecunda, informada en los principios de la ciencia política moderna, juzgando erróneamente en este punto y equivocándose también al apreciar las fuerzas y los elementos disponibles á la sazón, llamaba á todos los republicanos bajo su bandera de una república innominada para dar á la monarquía, cuando ésta iba cobrando fuerzas, la batalla que no se había dado en los instantes en que, reducida á la sublevación de un pequeño cuerpo de ejército, una gran parte de éste, el

gobierno y el pueblo hubiesen ayudado con buen éxito la resistencia.

Siguiendo una táctica muy diversa de la del señor Ruiz Zorrilla, el marqués de Santa Marta, sin dejar de convenir que debía darse la batalla á la monarquía, porque la actitud de los republicanos no podía ni debía ser otra que la de una intransigente actitud revolucionaria ante la detentación sistemática de la soberanía popular, pensaba también que no es de hábiles estrategias, sino de torpes generales dar la batalla sin tener la mayoría de las probabilidades de éxito feliz, y que el atolondramiento y la temeridad irreflexiva del combatiente bisoño, que arriesga solo su persona, no sientan bien en el caudillo, de quien dependen las vidas de muchos hombres y el honor de una bandera y debe proceder con la prudencia que imponen tan graves responsabilidades.

Vió claramente en los propósitos del Sr. Ruiz Zorrilla, inspirados en la buena fe, pero prescindiendo de los dictados de la razón y de las enseñanzas de la experiencia, de una experiencia reciente y dolorosa, el peligro de colocar á los republicanos en la situación misma de 1873 y de que se repitiesen los hechos de aquel período; pero por de contado no juzgó prudente oponerse abiertamente á esa tendencia. Lógico con sus propias opiniones y como hombre de partido, se sometía á la disciplina porque su modestia le hacía creer, por grande que fuese la fuerza de sus convicciones, que después de exponerlas lealmente, el insistir sobre ellas

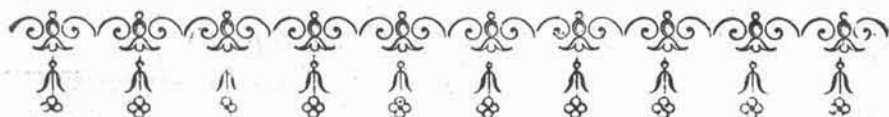
parecía imposición incompatible con su carácter y con los temperamentos democráticos, olvidando que esta modestia excesiva, si por un lado le enaltece mucho, puede llegar á ser una falta en ocasiones, y que no hay imposición cuando se trata de hacer triunfar la verdad por la virtud de su propio poder. Se corre además el riesgo de que esta delicadeza no sea siempre estimada como se debe. Creyó el marqués de Santa Marta que el dilatar algo la realización de lo que estimaba indispensable para el porvenir de la República, serviría quizá para robustecer sus argumentos con los resultados de la política del Sr. Ruiz Zorrilla, y no creó el más pequeño obstáculo á las negociaciones para establecer la unión con que aquel soñaba y para la que apremiaba á todos después de hallarse en París, á consecuencia de haber sido desterrado por el gobierno del Sr. Cánovas del Castillo.

Las circunstancias porque entonces atravesaban los partidos republicanos imponían esta actitud. Preocupados los federales en la ardua empresa de su reorganización, no habían podido intentar esfuerzos de otro género; los elementos que dirigía el Sr. Castelar se iban aproximando á la monarquía, y únicamente el Sr. Ruiz Zorrilla aseguraba entonces hallarse en disposición de combinar con buen éxito planes revolucionarios.

Tenía además para observar esta conducta el marqués de Santa Marta altas razones de delicadeza. A nadie se oculta que por sus circunstancias especia-

les, él era el principalmente llamado á realizar cierta clase de sacrificios, si aquellas negociaciones hubiesen acabado en una inteligencia que se determinase por algún acto trascendental en la política española, y la más leve oposición por su parte, cualquier dificultad suscitada por él, hubieran podido interpretarse en desfavorable sentido, pareciendo que obedecía á móviles interesados y poco generosos; al deseo de ahorrarse sacrificios que nunca ha esquivado y que en todas ocasiones ha sabido hacer con largueza cuando el interés de la patria ó de su causa lo han exigido.





CAPITULO XXII

Confirmaciones de las opiniones y criterio del marqués de Santa Marta respecto á la política republicana por el fracaso de las gestiones del Sr. Ruiz Zorrilla y por las disidencias de los señores Salmerón y Figueras.—Publicase el manifiesto de París.—Disidencia del Sr. Figueras.—Propaganda en favor de la unión democrática.—Todos los actos y la conducta de los republicanos convergían á realizar el fin de la diferenciación.—Triunfo del criterio sostenido por el marqués de Santa Marta en esta materia.—Determinación del dogma federal.—Su intervención en esta tarea.—Publicación de *Las Nacionalidades*, determinada en gran parte por las excitaciones repetidas del marqués de Santa Marta.



CONSIGNADO queda el criterio del marqués de Santa Marta relativamente á la conducta de los republicanos en los comienzos de la restauración. Los hechos vinieron á confirmar bien pronto todas sus previsiones y á ser testimonio del certero golpe de vista con que había sabido apreciar la situación desde el primer instante. No tuvo por cierto que arrepentirse ni de haber pensado como pensaba, ni de haberse conducido con la caballerosidad de que dió repetidas muestras, absteniéndose de procurar ningún tropiezo á las repetidas y laboriosas negociaciones, tan laboriosas como estériles, entabladas para conseguir una in-

teligencia, que carecía de base desde el momento en que faltaba la personalidad de los partidos, llamados á establecer la alianza, inteligencia ó concordia republicana.

Pretendía el Sr. Ruiz Zorrilla que todos los republicanos se organizaran, teniendo como programa la Constitución de 1869, suprimiendo el artículo 33, relativo á la forma de gobierno; pretensión absurda, pues equivalía á exigir á los republicanos de siempre el sacrificio de sus doctrinas y de su historia, imponiéndoles una actitud en pugna con su significación y aspiraciones, pues como republicanos no podían aceptar una Constitución que, aun despojada del precepto relativo á la forma de gobierno, era un organismo legal acomodado á la monarquía, y como revolucionarios sinceros tampoco podían imponer anticipadamente una legalidad que, llegado el caso, había de la libre acción del pueblo.

Como era de esperar, no prosperaron semejantes pretensiones, porque después de todo, los antiguos republicanos repugnaban someterse á quien por muchos que fuesen sus méritos, acababa de llegar al campo de la República, y consideraban más natural que el neófito se subordinase al interés del partido republicano. Además, había una razón poderosísima, una razón lógica que se oponía á que prosperasen aquellas tentativas de unión republicana, bajo una bandera innominada y la hegemonía del antiguo partido radical con su jefe, cuando en el seno del antiguo partido republicano

palpitaba la disidencia, buscando ocasión de manifestarse ostensiblemente. Si la gran comunión que atravesó con la bandera federalista la agitada época de la revolución y el azaroso período de 1873, venía de antes minada por la discordia, y esto no se le podía ocultar á nadie, porque estaba confirmado repetidas veces por los hechos, era un verdadero contrasentido intentar la reunión de nuevas fuerzas, que en tales condiciones y cuando las circunstancias favorecían, ó mejor dicho, imponían la diferenciación, solo hubieran sido nuevos y más poderosos elementos de discordia. La disidencia tardó poco en manifestarse. El señor Salmerón, que como Figueras, seguía entonces denominándose federal, halló coyuntura propicia en la convocatoria del gobierno conservador para las Cortes de 1876, de hacer la causa de la lucha legal en los comicios, rechazada unánimemente por los exministros y diputados federales. Derrotado en este terreno, el Sr. Salmerón provocó nuevas reuniones, con el fin de ponerse de acuerdo en lo relativo á la organización de la República. ¡Ponerse de acuerdo sobre la organización de la República! ¿Qué prueba más concluyente de que los tiempos y las circunstancias no eran propicias para confundirse, sino para distinguirse, como necesidad previa para entenderse después en condiciones dignas y favorables? Si los que habían formado dentro del mismo partido durante tanto tiempo se creían en el caso de concertar fórmulas de avenencia, no se hallarían muy convencidos de que estaban de acuerdo.

Y ya se vió después. Al cabo de muchas reuniones, de conferencias repetidas, de negociaciones prolijas, en que intervenían unas veces los representantes del señor Zorrilla, desterrado hacía meses en París, y otras solo elementos caracterizados del antiguo partido republicano, el Sr. Salmerón presentó una fórmula tan descarnada en oposición con lo fundamental del credo del partido, que no pudo ser aceptada por el mismo Figueras, más inclinado á las tendencias de aquél que á las puras doctrinas federales, y en aquella ocasión sobrevino la ruptura, marchando el Sr. Salmerón á París. Logró ponerse de acuerdo con el Sr. Ruiz Zorrilla, y ese acuerdo se tradujo en un manifiesto que lleva la fecha de 25 de Agosto de 1876, manifiesto circulado clandestinamente y que hicieron público en sus columnas los diarios del gobierno conservador, sin duda con el propósito de que, como sucedió, los tribunales procediesen contra sus autores. A consecuencia del proceso incoado con tal motivo, el Sr. Salmerón hubo de abandonar á España, refugiándose en París. El antiguo partido radical cambió este nombre por el de *reformista*, en virtud del manifiesto de París, cuyo principal objeto, según aparece clara y precisamente en su contenido, era declararse en discrepancia del antiguo partido federal, rechazando la doctrina de que el pacto entre las provincias fuese el fundamento del Estado nacional. Esta era, y no era poca, su importancia: la de ser una obra de distinción, un paso hacia la diferenciación entre las tendencias confundidas antes

bajo la denominación federal por consideraciones que ya repetidas veces hemos expuesto. Por lo demás, el hecho no venía á aumentar, sino en la calidad de unas cuantas personas, las huestes del Sr. Ruiz Zorrilla, quien, como era natural, al declararse republicano pocos meses antes de verificarse la restauración, volvió á tomar la jefatura de sus parciales, dispersos y sin organización desde que sus aliados, los sagastinos, les expulsaron del poder recogido de manos de Pavía. El partido federalista quedó como antes, fuera de la defección de Castelar, porque éste en realidad estaba ya descartado desde que consintió ó reclamó el vergonzoso asesinato de la Asamblea Constituyente, y después de sus declaraciones de legalidad prescindieron de él en absoluto los demás republicanos. Con Salmerón no salieron del partido federal los gérmenes de las disidencias, pues aunque Figueras se manifestaba conforme con el manifiesto de París y mostró gran empeño, cuando Salmerón regresó á España antes de ser procesado por aquel documento, en que fuese discutido por los hombres caracterizados de la comunión federal, propósito que no hubo de cumplirse por la cordura de los federales, no se atrevió con todo á manifestarse abiertamente disidente, tal vez por no considerar apropiada la coyuntura ó recelando del éxito. Limitóse á consentir que sus amigos hiciesen la causa del desterrado de París y la defensa de su manifiesto, simulando defender la *Unión democrática*, en una hoja publicada con el título *El 11 de Febrero*, poco después

de conocida la circular dirigida por el Sr. Pí á las provincias, recordando la verdadera doctrina del partido definida y declarada por las Asambleas y en oposición á las afirmaciones contenidas en el manifiesto antes mencionado. La hoja de los amigos de Figueras no alcanzó éxito alguno; la idea de la *Unión democrática* no fué simpática á nadie, ni logró interesar en su favor á los elementos del partido federal, estrellándose ante la inquebrantable firmeza de sus individuos cuantas tentativas se hicieron más ó menos veladamente por elementos adictos á Figueras y más francamente por el Sr. Salmerón y sus parciales para hacer prosélitos al nuevo partido reformista. Tal vez por estos fracasos ó por otras causas, Figueras, que sin decirlo francamente aparecía en discordancia y en ostensible apartamiento de los asuntos del partido federal, siguió ostentando este nombre hasta 1881, en que á pretexto de las declaraciones hechas por el Sr. Pí en una carta leída en la gran reunión celebrada por los federales valencianos, marchó á Barcelona y en la reunión del teatro del Tívoli hizo resueltamente francas declaraciones antifederales, y prosiguió defendiendo desembozadamente la famosa idea de *Unión democrática*, utilizada como una amenaza al trono por los constitucionales del duque de la Torre cuando llegaron á perder la esperanza de ser llamados por D. Alfonso al gobierno.

Nótese cómo á pesar de los disfraces con que deliberadamente velaban sus autores los verdaderos fines

de todas estas tentativas de organización y concentración de fuerzas, por no incurrir en la nota de apostasía, marcaban constantemente con toda claridad el fin principal de la diferenciación, de la distinción, lo mismo en el manifiesto de París, bandera del partido reformista, unitario por sus tradiciones y sus antiguas creencias; que en las declaraciones favorables á la Unión democrática por parte de los amigos de Figueras, que en el manifiesto de Abril, en virtud del cual los reformistas, los antiguos radicales, confirmaron á su partido con el nombre de democrático progresista. Toda la labor, todos los esfuerzos, todas las tentativas de los llamados á dirigir las fuerzas republicanas, una vez convencidos de la inutilidad de las tentativas para debilitar á los federales, se encaminaban á un deslinde de campos, como si á porfía compitiesen en demostrar con la lógica incontrastable de los hechos la razón con que el marqués de Santa Marta pedía ese deslinde necesario, previa la determinación categórica de las doctrinas de cada partido.

Y aquí surge naturalmente de nuevo la cuestión de si estaban ó no suficientemente determinadas las doctrinas del partido federal, y resueltamente puede asegurarse que no, desde el momento en que se vió á hombres que no eran federales ampararse de esos principios, interpretándolos á su modo. Desde el momento en que cabía la interpretación, era señal de que no estaban suficientemente definidos. Y así era lo cierto, pues en realidad, bien porque no se creyera indis-

pensable en aquellas circunstancias ó por considerarlo peligroso para la cohesión de las fuerzas en frente de la monarquía restaurada, (conducta que no juzgamos ahora), se limitó por entonces todo el esfuerzo á fijar el principio, la esencia de la doctrina. Faltaba deducir de aquel principio fundamental sus consecuencias racionales, ó sea la suma de afirmaciones concretas que constituyen el credo político de una agrupación que aspira al gobierno del país, y á esta necesidad se ocurrió primero en las circulares y documentos emanados de la jefatura del partido, y después en las Asambleas posteriores, cuyas tareas estuvieron preferentemente consagradas lo mismo en 1882, que en 1883, que en 1888, á llenar esos vacíos, provenientes de la indeterminación del programa primitivo.

Se sentía, pues, la necesidad lógica, imprescindible de esa determinación concreta de doctrinas, que imponiéndose á todos les llevaba, aun contra su voluntad y sus propósitos, á trabajar por ella, y el marqués de Santa Marta fué su intérprete desde el primer momento, porque desde el primer momento tuvo la serenidad suficiente para no sentir su razón oscurecida ni turbado su juicio en medio de la violenta tempestad desencadenada contra los hombres y los ideales republicanos. Fueron escuchadas, como no podían menos de serlo, sus patrióticas excitaciones, y á principios del año 1877, mientras los adversarios del partido federal intrigaban inútilmente para quebrantar su fe y sus fuerzas, daba á la estampa el Sr. Pí y Margall

Las Nacionalidades, admirable exposición del sistema federal. Según declara el mismo Sr. Pí y Margall en la cariñosa dedicatoria que de su gran obra hace á don Enrique Pérez de Guzmán el Bueno, éste, en el seno de la intimidad y la confianza le instaba incesantemente para que condensara y concretara en un libro las ideas federales, por las que tanto tiempo venían luchando juntos, y fruto de estas continuas excitaciones fué la publicación de *Las Nacionalidades*, que el Marqués hubo de costear espléndidamente y que llamó de un modo extraordinario la atención de todos los políticos, así de España como del extranjero.

La dedicatoria al marqués de Santa Marta de *Las Nacionalidades* y el concepto en que va colocado su nombre al frente de aquellas inmortales páginas, sirven de testimonio imperecedero de la gran parte que hubo de corresponder á nuestro biografiado en la gloriosa y difícil empresa de la reorganización del partido federal.





CAPÍTULO XXIII

Dificultades con que luchaba la organización de los republicanos.—Participación que en este ingrato y laborioso cuanto patriótico empeño tuvo el marqués de Santa Marta.—Sus esfuerzos para impedir que tuviesen éxito en nuestro campo las excitaciones del Sr. Zorrilla.—Su actitud serena, resuelta y enérgica ante las perturbaciones pasajeras, propias de todo período de reorganización.—Disidencia de D. Estanislao Figueras.—Nueva confirmación por los hechos realizados en el campo republicano de las teorías y criterio del marqués de Santa Marta sobre la política de los republicanos.



o era empresa fácil en aquellas circunstancias la reorganización de un partido como el partido federal, que sosteniendo las soluciones más radicales del republicanismo, había de despertar graves recelos en las alturas del poder y atraer todas las iras de un gobierno desatentado, que no contento con amordazar á la prensa con arbitrarios procedimientos y leyes calificadas de draconianas en plena representación nacional por los mismos monárquicos, llevó su soberbia hasta el punto de excluir de la legalidad á los republicanos. No sólo se había proscrito este nombre de la publicidad: ni siquiera el de autonomista se consentía y sólo el de demócrata á secas era tolerado, ni más ni menos que sucedía en la época de infausta me-

moria del despotismo moderado durante doña Isabel II. Pensar en la organización pública de un partido, cuyo solo nombre caía de lleno dentro del Código, según la interpretación de la novísima y famosa Constitución interna de Cánovas, era pensar en imposibles, máxime cuando no existía el derecho de reunión ni se consentía en los contados órganos de publicidad subsistentes entonces, convocatorias de ninguna clase. No se pierda de vista que entonces continuaba aún en pie la dictadura de Cánovas, á pesar de la Constitución de 1876, para formarse idea de las dificultades con que había de luchar por aquellos días la organización de nuestras fuerzas, precisadas por un lado á hacer frente á la opresión gubernamental, prevenir sus suspicacias, burlar su vigilancia, y forzadas por otro á resistir los ataques combinados de las agrupaciones afines, deseosas de levantarse sobre nuestras ruinas. Es necesario estudiar detenidamente aquel primer período de la restauración para formarse idea de la obra de perseverancia, energía y fe que supone la reorganización del partido bajo la recelosa mirada de un poder débil, y por lo mismo iracundo, inseguro de su posición y en consecuencia arbitrario, temeroso del porvenir y necesariamente desatentado y ciego: obra admirable, en la que el marqués de Santa Marta tuvo, como era natural, dada su importancia en el partido, su posición y su criterio, la participación que su modestia procura desvirtuar, pero que á pesar suyo la gratitud de sus correligionarios enaltece, como es debido.

No se ocultaron á su perspicacia, conociendo como conocía á los adversarios, los peligros de una organización realizada en tan desfavorables condiciones. Los nacidos de la situación política, no le arredraban, porque hombres de su temple no se amilanan ante las arbitrariedades ni las persecuciones del poder, y éstas antes servirían para avivar el patriotismo de los correccionistas que para hacerles vacilar en la empresa. Pero había peligros más temibles y eran los procedentes de los mismos que, llamándose republicanos, habían demostrado muy á las claras su interés por introducir el desconcierto y las desconfianzas entre los federales, para que no insistieran en sus trabajos, impelidos no solo por su enemistad de siempre, sino por el probable fracaso de sus esfuerzos para formar núcleos de organización, con el fin de atraerse la mayor suma de elementos de nuestro partido. Temía, con razón, que una vez convencidos de que en el campo federal no se dejaba nadie seducir por el señuelo de las reformas sociales, enumeradas en el manifiesto de París, copia de las aprobadas por la Asamblea federal de 1871, los autores de aquel procurarían conseguir su propósito por otros procedimientos, que cuando menos perturbarían la marcha regular de la organización de las fuerzas federales, y así sus consejos, sus advertencias y sus previsiones se dirigieron siempre en sentido de conjurar esos riesgos: en aquellas por tantos conceptos graves circunstancias, fué, puede decirse, el centinela avanzado, el ojo vigilante y previsor

que acudía á las necesidades y á los peligros de la obra á que el partido estaba consagrado.

Que sus temores no eran infundados, lo demostraban á cada instante los hechos. No pasaba mes sin que con cualquier motivo, con noticias de haberse agrupado numerosos elementos alrededor del señor Ruiz Zorrilla, con el anuncio de reivindicaciones próximas, con la seguridad de inmediatos acontecimientos trascendentales, no se pudiese á prueba la constancia y la fe de los federales. Solicitados incesantemente, á pretexto de cooperar para la acción común, debían poner más esfuerzo para triunfar de aquel asedio sin tregua, que para sustraerse á las persecuciones oficiales.

El manifiesto de 1.º de Abril de 1880 fué la más palmaria confirmación de los propósitos que el marqués de Santa Marta había adivinado. Con dicho manifiesto reformaron Salmerón y Ruiz Zorrilla el del año de 1876, prescindiendo de las reformas sociales y enriqueciéndolo con el caudal del doctrinarismo de todas las épocas, para lo cual pusieron á contribución el ingenio poético de Echegaray, el criterio jurídico de Montero Ríos y la dialéctica sofista de Martos. Se pidieron adhesiones y lograron recoger algunas firmas de diputados que habían figurado en la intransigencia federal de los años 1872 y 73, los cuales justificaban su apostasía, que el partido federal ni siquiera les tomó en cuenta, diciendo que su firma al pie del tal documento sólo significaba que eran partidarios de la revolución, que por cierto no se afirmaba allí tan cate-

góricamente como en el manifiesto anterior, sino al contrario, con tales compensaciones, que precisamente en él se fundaron para acudir por primera vez á los comicios los progresistas, llamados así desde 1.º de Abril de 1880, fecha en que se hizo público aquel llamado gran plan de concentración republicana, que más pareció ó mejor pudo calificarse de reconcentración de fuerzas para proveer la monarquía, pues del partido que aceptó por bandera el manifiesto de Abril, salieron para aceptar carteras de la monarquía muchos de los que hoy están como leales defensores, ó queriendo pasar plaza de tales, al lado de D. Alfonso XIII.

No debieron satisfacer gran cosa aquellas conquistas á los iniciadores de semejante plan, esperanzados, sin duda, con adhesiones más numerosas é importantes, cuando les faltó tiempo para provocar rupturas parciales, que acabaron por extenderse á los de la misma procedencia radical; y si hoy el partido progresista conserva su nombre, no tiene á su lado ni á Salmerón, ni á Montero Ríos, ni á tantos otros de cuantos contribuyeron á su formación. Como á la obra de deslinde se unían por parte de los unitarios las intrigas para agregar fuerzas del partido federal, la perturbación consiguiente á semejante labor aparecía agravada en sus proporciones, llegando á determinar miedo y vacilaciones en espíritus de convicciones poco arraigadas y sirviendo á otros de pretexto y motivo para pedir la paz en nombre del interés común de la democracia.

En hombre de carácter más débil que el marqués de Santa Marta, quizá hubiera hecho mella el clamoreo de ciertos espíritus apocados ante la perturbación natural á toda reorganización de fuerzas; pero el efecto producido en él fué el de afirmar más y más sus opiniones, resueltamente favorables al deslinde inmediato y completo si había de ser, como debía, definitivo entre las agrupaciones republicanas

«Supongan ustedes—solía decir á sus íntimos y á los que sostenían con él frecuente trato—supongan ustedes esta perturbación en que parece que nadie se entiende y presenta á la democracia como entre las convulsiones de la agonía, amenazada de próxima muerte; supóngase este estado de perturbación dentro de la República, y no hay necesidad de decir cuales serían sus desastrosas consecuencias. Pues eso sucederá inevitablemente el día próximo ó lejano del triunfo, como sucedió en 1873, agravado ahora por la aparición de nuevas tendencias y también—debe decirse—por las rivalidades nacidas en el gobierno. Sólo hay un medio de evitarlo, medio sencillo, de buen sentido: hacer ahora lo que había de hacerse entonces. Esta perturbación es pasajera; desaparecerá una vez establecidas y determinadas con toda precisión las diferencias que á pesar nuestro nos dividen, porque no son hijas de la voluntad, sino indeclinable consecuencia de los principios profesados, y entonces habrá desaparecido el riesgo de ese porvenir pavoroso y á la vez quedaremos en condiciones propicias para enten-

ernos, no sobre lo que nos separa y distingue, pues sobre eso jamás podremos ni deberíamos como políticos serios llegar á una inteligencia, sino sobre lo que nos une en la suprema aspiración común. Lo que debe lamentarse no es que esto se prolongue demasiado, pues la perturbación no pasará de donde no deba pasar, sino que se detenga en la mitad del camino, y por eso me parece patriótico contribuir á que la tarea de deslinde una vez comenzada llegue hasta el fin. Entonces podremos tranquilamente proseguir juntos el trabajo común, sin temor de fracasos para el presente ni de complicaciones en el porvenir.

Pensando y hablando de este modo aparecía el marqués de Santa Marta como la personificación de la lógica, viendo con toda claridad dónde estaba el peligro, y temeroso de que el propósito perseguido por los unitarios en daño de los federalistas, desvirtuase el fin principal y perpetuase el estado de perturbación, manteniendo latente la discordia en el seno de los partidos.

Opinando de este modo era natural que le preocupase en aquellos momentos la actitud del Sr. Figueras, que por su proceder reservado semejaba una esfinge llena de misterios indescifrables. Pero el expresidente del Poder Ejecutivo meditaba ya el pretexto para su deserción y se apercibía para la primera ocasión favorable al logro de sus propósitos. No tardó ésta en presentarse ni él se descuidó en aprovecharla; por la prisa y el enconado brío con que se lanzó al

combate, se conocía lo profundo de sus resentimientos y cuánto le pesaba el disfraz con que se vió obligado á encubrir sus verdaderas ideas durante un largo período.

Los demócratas históricos de Valencia, pues sólo con ese nombre consentía la política conservadora á los antiguos federales reunirse públicamente, celebraron un banquete para hacer pública ostentación de sus fuerzas, derecho que les garantizaba de la ley de reuniones, votada por las Cortes conservadoras.

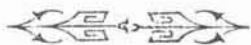
En aquel acto, que resultó solemnísimó, dióse lectura á una carta del Sr. Pí, que era una exposición acabada de las doctrinas federales en toda su pureza. Vino casi á coincidir este acto con la subida de los fusionistas al poder, con lo que se inició una política más expansiva, y aprovechándose de ella, el Sr. Figueras formuló sus declaraciones contrarias al pacto en la reunión del Tívoli de Barcelona, y aunque todavía no se atrevió á despojarse del dictado de federal, su conducta posterior hizo patente su absoluta separación del partido, pues no habiéndose adherido más que algunos amigos particulares á su política, rechazada por todos los federales, enarboló por su cuenta la bandera de la Unión democrática, sin mejor fortuna que el Sr. Ruiz Zorrilla, de quien vino á ser auxiliar hombre que habia alcanzado tan gran prestigio y tan elevados puestos entre los republicanos. La separación del antiguo individuo de los Directorios federales, facilitó en gran manera la reorganización del partido, de-

purado ya de todo elemento de perturbación, manifestándose entonces la gran fuerza de las ideas federales, que conservaron casi en su integridad el contingente respetable de sus defensores.

Claro es que la actitud de Figueras no podía encontrar apoyo en el marqués de Santa Marta que, federal de siempre, estuvo en esta ocasión como en todas, al lado de la pureza é integridad de las doctrinas tal como venian definidas desde 1870 por nuestras Asambleas; pero si algo pudo esperar el disidente del afecto personal que le unió siempre al ilustre prócer republicano en el sentido de una reconciliación con sus antiguos correligionarios, lo hizo de todo punto imposible al levantar de nuevo la desacreditada bandera de la confusión de ideas, al trabajar por la desaparición de las diferencias, porque esto ya implicaba la negación de todo el sistema de política general que el marqués de Santa Marta estimó fundadamente como capitalísima para el porvenir de la democracia.

Lo racional del criterio, lo fundado de las opiniones sustentadas por éste sin vacilar un instante respecto de la reorganización de los partidos, quedaron una vez más demostradas cuando en aquel mismo año, perdida por los progresistas toda esperanza de absorber, según proyectaban, á los federales al ver la rapidez con que recobraron su personalidad afirmándola sobre una robusta organización, empezó entre ellos el movimiento de reconstrucción y depuración, desprendiéndose de elementos perturbadores y diferenciándose entre sí los

que permanecían fieles á la República. Si, contra lo que creía y aconsejaba el marqués de Santa Marta, hubiese continuado el *statu quo* y por miedo á disensiones nos hubiéramos engañado á nosotros mismos, creyendo que se mataban las disidencias ocultándolas y que era posible reunir en paz bajo una misma bandera hombres de ideas antitéticas, se hubieran realizado dos males: el de dejar el partido entregado á la discordia y á las intrigas de los adversarios y el de impedir que éstos, entretenidos en la tarea de destrozarnos lentamente, hubiesen separado de su campo la cizaña y llevado á efecto el deslinde. De esta manera, el día en que la acción común se hubiese impuesto por la necesidad de las circunstancias, nos habríamos encontrado con organismos débiles é impotentes en vez de las poderosas fuerzas indispensables para empeñar el combate definitivo entre la monarquía y la democracia.





CAPITULO XXIV

Organización de las fuerzas federales.—Dichoso término de ésta.— Necesidad de un concierto entre los partidos para una acción común.— Dificultades de la situación de los progresistas por haber retrasado su organización.—Carácter que este concierto ó coalición debía tener, según el criterio del marqués de Santa Marta.—La coalición, según él, había de ser exclusivamente revolucionaria.—Razones que aconsejaba esta actitud como impuesta por la dignidad á los republicanos.—Dificultades opuestas por el partido progresista.—El marqués de Santa Marta es nombrado individuo del Consejo federal.—Fundación del periódico LA REPÚBLICA.



MIENTRAS los republicanos progresistas luchaban con las dificultades propias de todo período de organización, aumentadas entonces por haber retrasado la suya, esperando refuerzos de las filas federales; mientras discutían acaloradamente en Biarritz sobre la mayor ó menor eficacia de los procedimientos pacíficos y de los revolucionarios y hacían la última tentativa para contener un inevitable rompimiento, concertando la fórmula vulgar, anodina y contradictoria de no ser el partido republicano progresista, federal, ni unitario, obstinándose en convertir aquella agrupación de fuerzas antagónicas en una especie de banderín de enganche; mientras, no obstante eso, se-

guía trabajando al partido la lucha sorda entre los defensores de los procedimientos de fuerza y los partidarios de la lucha legal, primer paso en la evolución premeditada hacia la monarquía, la organización del partido federal marchaba desembarazadamente á su término, alcanzando feliz remate en la Asamblea reunida en Madrid el mes de Mayo de 1882, la cual ratificó y confirmó en definitiva los principios del partido y estableció bases regulares para la organización futura de sus huestes. Señalado triunfo, conseguido por la entereza y perseverancia de los federales, y en el cual tuvo el Marqués la participación legítima que le correspondía, así por el eficaz concurso prestado, digno de sus merecimientos, como por el racional criterio que había sostenido desde el primer día en punto á cuestión tan importante

No bastaba esto, con todo, á las generosas impaciencias del marqués de Santa Marta, ni á los nobles afanes de sus correligionarios. Las organizaciones políticas no señalan el fin venturoso de una lucha sostenida por más ó menos tiempo, ni el término de la actividad como descanso sobre los laureles de la victoria: el fin de la organización de todo partido es el comienzo de un período de actividad sin paréntesis enervadores, hacia los fines para que la organización ha sido realizada, y en el caso y en las circunstancias aquellas el interés de la causa exigía al patriotismo redoblar los esfuerzos por las condiciones especiales de la época.

Fuerte y poderoso nuestro partido, hasta el punto de inspirar temores serios á los adversarios que explotaban arteramente y sin fundamento racional la unidad de la patria en contra nuestra, no reunía, sin embargo, en sí todos los elementos indispensables para la desventajosa lucha á que era provocado: á los ojos de todo el mundo era evidente la necesidad de un concierto de las fuerzas republicanas, caso previsto desde el primer día por el marqués de Santa Marta, y en previsión del cual se había apresurado la organización en nuestras filas. Fuerte y unido, con su bandera desplegada, afirmada y robustecida su personalidad como nunca, estaba dispuesto al combate; pero la situación de los demás republicanos, y especialmente la del partido progresista, entonces en el período de su última transformación, retrasaba el instante deseado de devolver al pueblo su detentada soberanía: nueva prueba del error cometido por nuestros afines al desatender las amistosas y sanas advertencias que se les dirigían desde nuestro campo, aconsejándoles que prefiriesen la cohesión de sus huestes por la comunidad de ideas bien definidas, al número, si éste se formaba de fuerzas unidas solo por necesidades del momento ó por conveniencias circunstanciales.

De todos modos y mientras llegaba la oportunidad de sumar las fuerzas con la debida distinción y de aunar las actividades para los fines comunes á todas las agrupaciones republicanas, se estaba en el caso de reflexionar acerca de las condiciones en que había de

verificarse el acuerdo. Para el marqués de Santa Marta esta no era cuestión ni podía ser materia de largas meditaciones: bastaba para resolverla y formularla deducir la norma de conducta del criterio general á que obedeció todo el desenvolvimiento de la política del partido, como se deduce la consecuencia de la premisa. Ni siquiera había que pensar en elegir el campo de batalla: nos lo daban señalado las intransigencias mismas de los gobiernos de la monarquía, excluyendo de la legalidad á los republicanos y persiguiéndolos con saña, comparable solo á la lenidad con que eran distinguidos los representantes de la reacción.

El derecho traidoramente hollado en la madrugada del 3 de Enero no había prescrito ni podía prescribir por un acto de fuerza, que ni siquiera había sido coronado por el triunfo en buena lid, sino por virtud de artera emboscada. La dignidad y el derecho señalaban á la democracia la única actitud compatible con su decoro; la de intransigente protesta en frente de un estado de hecho, creado por la fuerza contra el derecho constituido por la voluntad popular, y proceder en consecuencia con esta actitud obligada. De modo que el carácter de la democracia republicana había de ser la revolución.

En lo tocante á las relaciones con los partidos coligados, el compromiso de proceder de acuerdo y unidos para el fin común y la libertad y el respeto mútuos para lo peculiar de cada uno. Tales eran las únicas bases lógicas, racionales, dignas y posibles de toda inteligencia.

Cuanto á los detalles de realización, eso no podía establecerse á priori. Habían de determinarlos las circunstancias de la ocasión y del momento y debían acordarse en vista de ellas, aparte de que es impropio de generales prudentes publicar para conocimiento del enemigo el plan con que se piensa combatirle. Tal era en síntesis el pensamiento del marqués de Santa Marta, consecuencia de las opiniones mantenidas por él desde el nuevo rumbo que imprimieron á los partidos republicanos los acontecimientos lógicamente encadenados con el golpe brutal del 3 de Enero.

Desgraciadamente no fué tan rápido el acuerdo como deseaban cuantos de buena fe querían el triunfo de la República. La inteligencia, antes tan solicitada y tan encomiada, cuando podía refluir en detrimento de los federales, llegó á ser cuando podía producir resultados prácticos, objeto de sospechas y de temores, aun para muchos que se mostraban ardientes partidarios de ella.

Sin duda contribuyó mucho á esto la actitud del señor Ruiz Zorrilla, halagado por la idea de reconquistar por el solo esfuerzo de su partido la República, ó engañado sobre el número é importancia de las fuerzas que podría reclutar entre los federales, ó tal vez para no verse forzado á aceptar el concurso del pueblo por temor de que el movimiento fuese más allá de lo que á sus intereses políticos convenía. Entonces, como siempre, la tradición, los hábitos de mucho tiempo surgían como un grave obstáculo á la acción popular,

porque ni los directores acababan de ser revolucionarios, ni los dirigidos sabían como demócratas imponer á los de arriba el criterio del partido, sometiéndose por el contrario al jefe, como se subordina el siervo á su señor. La obstinación mostrada por el Sr. Ruiz Zorrilla de asumir en su persona la jefatura de todas las fuerzas y la dirección absoluta de los trabajos, hacía sospechar que se atendía á reunir fuerzas, más que para hacer la revolución para dar la batalla á los revolucionarios si el movimiento traspasaba los límites prefijados, según las conveniencias políticas de una parcialidad. Estas sospechas, robustecidas después por la sistemática oposición, fundada en los más fútiles pretextos, á todo conato de inteligencia, y los mismos antecedentes de los progresistas, cuyo proceder durante la breve denominación de la República, no se había aún borrado del todo en la memoria de los federales, contribuyeron á fomentar las desconfianzas y á enfriar los entusiasmos por la coalición. No era ciertamente para alentar ni levantar los ánimos el espectáculo ofrecido por los progresistas, dispuestos según decían, á firmar en blanco la coalición y no conformándose con ninguna de las fórmulas propuestas para realizarla; haciendo gala de su actitud de extrema intransigencia, como la única verdaderamente revolucionaria, y acudiendo presurosos á las urnas; para disputar los puestos en los Municipios, en las diputaciones provinciales, y sobre todo en las Cortes, en las que convenía su presencia á los monárquicos para dar

á sus leyes la autoridad que da siempre á la obra del legislador el concurso de todos los partidos. No habían procedido así ellos con los republicanos.

Debe reconocerse en justicia que el buen sentido de las masas populares dió siempre poca importancia á las luchas electorales, pero sometidas casi incondicionalmente, con una sumisión no muy conforme con los principios democráticos, acababan por acudir á las urnas, sin pensar que cada paso en ese sentido les alejaba mucho trecho de la verdadera ruta impuesta por las doctrinas y por la dignidad á los republicanos.

Existía una verdadera contradicción, que no podía verse sin pena en la conducta de los republicanos progresistas, y más aún en la de su jefe, el cual, mientras se mostraba autoritario hasta el extremo para contener las impacencias de sus correligionarios, que de buena fe estaban por la coalición y para imponer su particular criterio á la revolución misma, toleraba que sus amigos malgastasen y agotasen sus energías en las estériles luchas electorales, sin perjuicio de intentar de vez en cuando movimientos de fuerza, prescindiendo en absoluto de los demás republicanos, después de exhortarles inútilmente á que abandonasen su organización y su partido para ponerse bajo las órdenes suyas, sin que lograsen convencer al mal aconsejado jefe de la necesidad de una sincera unión de fuerzas, lo inútil de sus repetidas tentativas cerca de los elementos republicanos que no querían hacer traición á su

partido, ni los dolorosos fracasos de Badajoz y Santo Domingo de la Calzada.

No hay que decir cuan hondamente lamentaría el marqués de Santa Marta ver malogrados tantos esfuerzos por la tenacidad del Sr. Ruiz Zorrilla, á quien ya se le llegó á considerar por los federales como enemigo declarado de toda inteligencia ó acuerdo que no fuese la sumisión absoluta á él. El empeño de resucitar, si bien con otro nombre, la antigua y desprestigiada bandera de la unión democrática, apenas profundamente al ilustre republicano, que veía alejarse cada vez más el anhelado triunfo, preparado á costa de continuos esfuerzos y de grandes sacrificios, por la obstinación incomprensible é inexplicable del jefe progresista.

Espíritu sinceramente revolucionario el marqués de Santa Marta, solo con este carácter concebía la coalición republicana, cuya significación genuina desvirtuaban, á su juicio, las contiendas electorales, con las que á los ojos del observador desapasionado, más parecía buscarse la aproximación á los monárquicos, que levantar el espíritu de los republicanos. No podía estar conforme por lo mismo con las limitaciones y cortapisas á la acción popular, ni menos transigir con los pueriles temores á que parecían obedecer ciertas resistencias á una concordia amplia, leal y sinceramente revolucionaria. Verdad es, por otra parte, que toda su conducta no obedecía á otro móvil que el supremo interés de las ideas: no ambicionaba medro alguno, y

esperando de la revolución tan solo el bien del pueblo, no necesitaba someter á sus personales conveniencias la política republicana, y no de todos desgraciadamente podía ni puede decirse lo mismo. El programa común, aspiración formulada para sustituir á la unión democrática, le pareció siempre una verdadera puerilidad, si se proponía con sinceros propósitos ó una estratagemas de lealtad bastante dudosa en otro caso. Para pensarlo así, atendía á una sencilla razón: la de que semejante programa lo dan naturalmente hecho los principios comunes á todos los republicanos, base suficiente para una concordia fuerte, duradera y eficaz, y el procurarla por otros caminos y en otras bases equivalía á buscar obstáculos por el placer de hacer imposible, ó cuando menos de difícilísima realización lo que se tenía sin esfuerzo ni discusiones, ni inconvenientes, al alcance de la mano.

Así opinaba, consecuente con sus ideas, cada vez más firmes y más comprobadas por la experiencia, que esos principios comunes constituían la base obligada y única de toda inteligencia, mejor dicho, de la coalición; que ésta, por lo mismo que había de basarse en esos principios incompatibles con la esencia de la monarquía y no realizables por ningún procedimiento legal, había de tener forzosamente sentido exclusiva, y si no exclusiva, preferentemente revolucionario, y que si para el triunfo se imponía la inteligencia sobre lo que era común, para la marcha regular del gobierno, después del triunfo, imponíase con igual necesidad la existencia

de partidos deslindados, con sus doctrinas peculiares, su organización y sus jefaturas propias, y deslindados antes del triunfo para evitar la repetición de las dolorosas experiencias de 1873.

Logrado este último fin por el partido republicano federal, según queda dicho, y en camino de realizarse por el progresista, que á pesar de su deseo de prevalecer sobre todos los demas, obedecía á las leyes lógicas de la existencia, debía acometerse por todos los medios la empresa de llegar, á costa de todo, al anhelado é indispensable acuerdo.

El entusiasmo por la organización de su partido, de que el marqués de Santa Marta dió testimonio en todos sus actos, lo mismo en los asuntos de capital importancia que en los de detalle, pues lo mismo se le veía alentando á los tímidos, ayudando con toda clase de recursos la acción de los iniciadores ó facilitando por todos los medios su trabajo, que cooperando con su voto á la elección de los organismos locales en su distrito; el interés y el celo mostrados en todas ocasiones así por la pureza de las doctrinas como en perfeccionar la organización, fueron parte á que sus correligionarios le considerasen como suprema garantía de sus intereses políticos y en la Asamblea celebrada en Zaragoza en 1883 le eligiesen individuo del Consejo federal, cargo que aceptó, á pesar de tener sus ideas propias sobre el modo de organizar la jefatura del partido, por deferencia á sus correligionarios y porque es de los que creen que esos cargos tan

honrosos no deben solicitarse ni rehuirse cuando no lo reclaman así motivos de interés capital ó deberes políticos imperiosos.

Ya tendremos ocasión de ver cómo supo corresponder dignamente á la confianza de su partido en el desempeño de tan importante cargo.

A fines del año 1883 el partido federal se vió amenazado de quedarse sin representación en la prensa de Madrid por la desaparición del único órgano que en ella tenía. La publicación de los periódicos de partido ha exigido siempre en España, por razones de todos conocidas y de que tendremos ocasión de hablar en el capítulo siguiente, recursos suficientes para no depender exclusivamente de las suscripciones. Por desgracia los partidos republicanos no cuentan con elementos para constituir empresas poderosas que ocurran á esta necesidad y sus periódicos han de sostenerse por el sacrificio de los afiliados

El marqués de Santa Marta, que había contribuido siempre á la vida de los órganos del partido, conoció que éste necesitaba de él este gigantesco esfuerzo. Era un nuevo sacrificio más, y no de los menores, que le imponía su devoción á las ideas federales. Si se hubiese tratado de recoger lauros ó provechos, hubiera rehusado modestamente; se trataba de un sacrificio de cuantía y, también según su costumbre cuando llegaba el caso de demostrar su decisión y su desinterés, no vaciló un instante. El 30 de Diciembre de 1883 desaparecía *La Vanguardia* que, á pesar del auxilio

prestado en su última época por el marqués de Santa Marta, no pudo prolongar su existencia, y el 1.º de Febrero de 1884 aparecía el primer número de *La República*, fundado por el marqués de Santa Marta para ser órgano del partido federal español.





CAPÍTULO XXV

Calidad é importancia del hecho de la fundación del periódico LA REPÚBLICA por el marqués de Santa Marta.—El periódico de empresa y los periódicos de partido.—Sacrificios que éstos representan para sus fundadores y sostenedores.—Propósitos del marqués de Santa Marta para el porvenir de su periódico.—Su conducta en la preparación de éste y al formar el cuadro de redacción.



PARA comprender la importancia y extensión del sacrificio impuesto por la fundación de un diario, órgano de su partido, al marqués de Santa Marta y realizado por éste con el desinterés propio de sus patrióticos sentimientos, debe tenerse en cuenta la índole de las publicaciones periódicas y el carácter que las necesidades y gustos de la vida moderna les imponen, transformando radicalmente sus condiciones.

El periódico suplía antes al libro, cuya adquisición no estaba al alcance de la generalidad y exigía cierto grado de cultura, poco común entre las masas populares. Era, por decirlo así, el encargado de difundir las ideas por todas partes, de infiltrarlas en el ánimo del pueblo, infundiendo con ellas los entusiasmos, que son la poderosa palanca del progreso.

Bastaba, por consiguiente, á la misión del periodista la necesaria cultura científica y literaria para exponer y propagar las ideas en armonía con los fines del periódico, puesto á devoción de una escuela ó de un partido.

Actualmente el periódico, convertido en hoja de información diaria, si ha rebajado el nivel del periodista en cuanto á condiciones intelectuales, exige en él otras de actividad, unidas á cierto barniz de ilustración general. Por otra parte, la necesidad de una información rápida y completa en todos los órdenes de la vida pública, así en el país como en el extranjero, reclama cuantiosos desembolsos, el sacrificio de enormes cantidades, que solo es dado exponer á condición de que sean reproductivas.

El presupuesto de un periódico en tiempos ya algo apartados de nosotros, se reducía al capítulo de personal de redacción, no muy numeroso, y á los de gastos puramente materiales de la composición, tirada, papel, correo y reparto. Un periódico á la moderna exige no sólo personal numerosísimo de redactores para la información completa del momento, no solo especialistas encargados de tratar á fondo las materias económicas, militares, diplomáticas, etc., para lo que no bastan los conocimientos de una cultura general, sino también numeroso contingente de corresponsales en el interior y en el exterior, retribuidos con largueza, y un servicio de comunicaciones á todo coste, única manera de corresponder á la ansiedad publica y á

las exigencias cada día mayores del lector. El lanzar á la voracidad pública una ó dos veces al día treinta, cuarenta ó cien mil ejemplares con la noticia del momento, con el rumor palpitante de la última hora, exige el empleo de poderosas máquinas y la aplicación de todos los adelantos de la industria y del arte, á costa de sacrificios pecuniarios enormes. Todo esto supone el gasto de la fortuna más redondeada, y sería una locura exponerla con el único fin de satisfacer la pública curiosidad. De aquí la necesidad de constituir verdaderas empresas industriales para hacer un periódico á la moderna. No puede negarse que esto es un progreso, una preciosa conquista de la época actual, pero desgraciadamente no puede aprovecharse de ella el periodismo de partido, por ser todavía muy deficiente la educación política de nuestro pueblo.

Por más que se diga y por lamentable que sea, forzoso es reconocer cuan poco hemos caminado en materia de tolerancia, á despecho de lo mucho que se alardea de ella. Influidos todavía por la tradición de nuestra historia, aún se mira como enemigo en muchas partes al adversario político y cuesta trabajo hasta el reconocerle para profesar y exponer sus ideas el derecho y la libertad que se reclama para las propias. Consérvase todavía en nuestros programas políticos cierto dogmatismo que los asemaja algo, por la influencia del hábito, á una religión cerrada á toda influencia renovadora y progresiva. Por eso muchas veces se confunde lastimosamente la consecuencia en

las ideas con el quietismo al extremo de glorificar como firmeza de carácter la obstinación, y como alta virtud el estancamiento de hombres y partidos que se han petrificado, adheridos, como el fósil á la roca inmóvil, á una fórmula sin contenido, por haberse éste agotado en la sucesión del tiempo. De aquí también la intolerancia que todavía divide á los ciudadanos en correligionarios y enemigos, es decir, en fieles y en herejes, heterodoxos, fuera del dogma y de la doctrina de verdad absoluta que cada cual atribuye á sus creencias, intolerancia de que no se ha podido prescindir del todo en nuestro país ni aun al profesar las doctrinas del libre pensamiento, pues ó por no entenderlo bien, ó por no poderse sustraer á esa influencia del medio tradicional, el mismo apostolado del racionalismo ofrece fases de intransigencia mal hallada con el espíritu liberal de la doctrina y propias del fanatismo que no argumenta, ni discute, ni reconoce en nadie el derecho de discurrir y pensar por su cuenta.

Estos defectos del carácter nacional han hecho imposible la filiación de los periódicos de empresa en determinada parcialidad política, pues necesitando para cubrir sus grandes dispendios una gran masa de lectores que no existe en el estrecho círculo de las agrupaciones políticas, han de buscarlos en todas las clases y partidos.

Periódico de esta clase que se declare abiertamente por las soluciones de cualquier agrupación, es periódico muerto: los que no pertenecen á ella le vuelven la

espalda, y como un solo partido no puede aportar la suma de lectores indispensable para sostener la costosa publicación, el periódico va derecho á la ruina.

El periódico de partido ha de renunciar forzosamente, por lo apuntado, á exponer capitales de importancia en gastos que no llegarían á ser reproductivos; no puede aspirar, por tanto, á ser periódico de información general; ha de limitarse á girar dentro de la más ó menos amplia, pero siempre limitada esfera que su partido le ofrece, y dentro de ese mermado límite buscar, no ya compensaciones á los esfuerzos que origina, sino un pequeño auxilio para subsistir.

Parece que un partido, por poco arraigo que tuviese en la opinión, contaría con elementos suficientes para sostener sin angustias un órgano de sus ideas, porque ¿qué partido, merecedor de tal nombre, no cuenta en toda la nación con veinte mil individuos, número triple del de suscritores necesarios para una publicación modesta? Pero no hay nada tan equivocado como este supuesto.

A cualquiera se le alcanza que el periódico de una parcialidad capaz de reunir siete ú ocho mil adeptos en la capital de España, puede contar con una suscripción nutridísima en Madrid. Pues bien, resulta que el órgano de ese partido no cuenta en la capital de España, donde los candidatos de sus ideas han obtenido 25.000 votos, más que 250 suscripciones. ¿Dónde están, se pregunta, aquellos millares de entusiastas que aplaudían á rabiar en sus reuniones los discursos

de sus jefes; que al regreso de una excursión de propaganda les recibían con imponentes y grandiosas manifestaciones, llegando á inspirar serios temores al gobierno? ¿Dónde aquellos incontables partidarios que durante el viaje del jefe le hacían en todos los pueblos ovaciones continuadas, con un entusiasmo delirante? ¿Dónde aquellos mil comités, que sólo con la quinta parte de su contingente, sin contar con los electores que les nombraron, darían de sobra para la vida próspera de un periódico? Estarán de seguro en alguna parte, puesto que las manifestaciones no han sido de fantasmas; se ha podido contar su número, pero en las listas de suscripción del periódico no aparecen. Esta es la verdad, demostrada por la experiencia constante de los periódicos políticos, no de esta ni de la otra agrupación, sino de todas; pero en las republicanas, á que pertenecen los desheredados de esta sociedad, trabajadores privados de medios de subsistencia, sin recibir del poder más que persecuciones, este fenómeno se ha de manifestar en proporción inmensa. Cada suscriptor representa una masa enorme de lectores, porque en cada localidad se hace en común la lectura de un solo número, pagado por el comité, ó por un grupo de amigos. Una suscripción para cien correligionarios. Por consiguiente, la cifra de adeptos puede ser enorme, pero la suscripción de todo periódico político no pasa nunca de un límite dado, que suele ser el número de cabezas de distrito judicial donde existe un comité; ni más ni menos.

Y es inútil esforzarse en ensanchar ese límite. Ni estímulos, ni recomendaciones, ni excitaciones de ningún género bastan para llevar á los ánimos refractarios el convencimiento del deber político, que impone el pequeño sacrificio de sostener el órgano que defiende en la prensa la causa común; el que más y el que menos se considera con derechos por su representación en el partido, ó en el comité de provincia ó en la junta de barrio, á recibir gratuitamente la suscripción, y nunca faltan pretextos para eximirse de contribuir á su sostenimiento; si el periódico consagra espacio preferente á los asuntos del partido, porque descuida la información noticiara; si prefiere ésta, porque para eso ya tienen otros diarios que lo hacen mejor, y el suyo descuida los asuntos políticos y no da cuenta de las sesiones interesantísimas del comité, en que el dicente figura como secretario.

Al hablar así nos concretamos únicamente á establecer un hecho que han podido observar, y de seguro han observado todos los que han tenido alguna participación en lo que se llama prensa periódica de partido, y nada esta más lejos de nosotros que consignarlo en son de censura. Tan lejos, que sin dificultad reconocemos la razón al secretario del comité, quejoso por las pretericiones de su órgano en la prensa, ó del personaje importante de la localidad, resentido por negligencias involuntarias acerca de sus méritos muy discutibles, aunque jamás discutidos ni contradichos, porque no merecen la pena de discutirlos

ni de contradecirlos; pero tienen razón desde su punto de vista nada más, porque en último caso, el periódico de un partido no tiene *per se*, ni siquiera *per accidens*, jurisdicción para vincular los intereses generales de la agrupación, únicos que le obligan, en los intereses puramente individuales de los afiliados de cualquier categoría. En esto, como en muchísimas cosas, están subvertidas las ideas, por lo cual no es maravilla que se forme el equivocadísimo concepto de que el órgano de un partido político debe ser el portaestandarte, ó cuando menos el portavoz, y siempre el *botafumeiro*, que dicen allá en la apacible región gallega, de cada uno de los correligionarios, que se consideran con perfectísimo derecho á tener, por la ínfima suma de una ó una y media pesetas mensuales, según vivan en Madrid ó en provincias, un órgano de sus personales aspiraciones.

En nada como en esto hace falta aquel sexto sentido que un ilustre pensador y publicista echaba de menos en las relaciones humanas; el sentido de hacerse cargo de las cosas, para que todos se hicieran el de la imposibilidad física de que el periódico, consagrado á la defensa de los altos intereses de una causa política, se dedique á curador de tantos individuos cuantos son sus correligionarios, todos mayores de edad y con altivez bastante para rechazar en cualquier otro orden de la vida esa curatela humillante, tan solicitada en el orden político; para revestir de importancia hechos ó asuntos de la vida privada, casi

siempre ajenos á todo interés político, que á nadie importan, y menos que á nadie al partido. Este es un mal que no puede atribuirse á ninguna agrupación determinada: alcanza á todas y no puede verse alusión á nadie al reconocer un estado nacido de causas que están en la masa de nuestra sangre, de nuestro modo de ser, y cuyas raíces profundísimas no pueden extirparse en poco tiempo.

Pero sea lo que quiera, el hecho evidente, incontestable y casi incontrastable es que el fundador ó el propietario de lo que se llama periódico de partido, obligado por las circunstancias á renunciar á toda idea industrial que permita al periódico hallar en sí mismo recursos propios para su sostenimiento, ha de resignarse á un sacrificio de mayor ó menor cuantía para conseguir ese fin, sin derecho á exigir de sus correligionarios, ni á recordarles siquiera, el cumplimiento de los deberes recíprocos, sopena de incurrir en su desagrado, y pudiendo abrigar únicamente la esperanza de que le dispensen el favor de aceptar su sacrificio, por el tiempo que Dios ó la fortuna decreten y consientan.

Tal era la empresa acometida por el marqués de Santa Marta, á quien no se puede culpar de no haberla acometido antes, porque desde hacía muchos años, desde su pública filiación en la democracia abrigaba y había manifestado en repetidas ocasiones su propósito de costear un periódico que llevase y sostuviese dignamente la representación de la democracia.

española. Si las circunstancias no hicieron entonces de absoluta necesidad este sacrificio, aplazado á la vez por consideraciones muy dignas de respeto, no dejó sin embargo de cooperar á la vida de las publicaciones existentes. Cuando llegó el caso, quiso dar al órgano de las doctrinas federales toda la autoridad y el prestigio reclamado por la importancia del periódico y la del partido, formando la redacción con escritores conocidos, probados republicanos que habían sido directores de publicaciones del partido y ofreciendo la dirección al presidente del Consejo federal, de que el Marqués formaba parte, reservándose él como único derecho el de costear los gastos de la publicación.

No se hacía ilusiones, siendo como es profundo conocedor de nuestras costumbres sociales y políticas, acerca del éxito, pero hasta en este punto manifestó su nobleza de propósitos.

Aunque parece inútil advertirlo, conociéndome como me conocen ustedes—dijo á los redactores reunidos en su casa,—quiero dejar sentado que no se trata de la creación de una empresa periodística industrial, ni me ha pasado por las mientes, no digo lucrarme, pero ni siquiera resarcirme de los desembolsos que exija la publicación de *La República* si, contra lo que es de esperar, estuviera algún día en condiciones de tener vida propia. Llegado este caso todo el remanente se consagraría por entero á la mejora del periódico. Como se trata de un deber impuesto por el interés de nuestra comunión política en el que

todos hemos de poner de nuestra parte lo que podamos, y esta clase de deberes yo no los he discutido nunca ni he vacilado jamás en cumplirlos, me daría por muy satisfecho con que llegase un día en que, á costa de lo que fuese, la administración del periódico cerrase sus cuentas con exceso. Repito que en este caso las ganancias de *La República* serían íntegras para el periódico y para sus redactores. A mí me bastaría siempre la satisfacción de haber contribuido con todas mis fuerzas á dotar á mi partido de un diario digno de la importancia de la agrupación federal española.»

Desgraciadamente no hubo ocasión para que se cumpliesen los generosos propósitos expresados en estas nobles palabras del ilustre republicano, pues *La República* corrió la suerte de todo periódico de partido. Vivió dignamente durante los ocho años de su publicación, cumpliendo todos sus compromisos y sin dejar tras de sí nada que pudiese deponer en lo más pequeño contra el crédito y la respetabilidad de su fundador que, como último rasgo de la nobleza de sus sentimientos, dejó cubiertas todas las atenciones del personal del periódico hasta un mes después de la suspensión de éste. Pero esta vida de desahogo y de seriedad solo pudo conseguirse á costa de los sacrificios no bien apreciados del marqués de Santa Marta, quien, á pesar de todo, hubiera continuado adelante si las circunstancias de que á su tiempo y en su ocasión hablaremos, no le hubieran impulsado á reali-

zar aquel rasgo de nobleza sin ejemplo, despojándose de sus armas ante el enemigo, que le suplicaba una tregua.

Pero no está dicho todo cuanto la imparcialidad y la justicia exigen que se haga patente respecto de la publicación de *La República*, con haber demostrado la importancia del sacrificio material, pues acostumbrado, muy acostumbrado á los de esta clase el ilustre demócrata, no cree por realizarlos contraer mérito alguno. Hubo en este hecho, que sin incurrir en exageración puede decirse que forma época en la historia del partido, algo muy importante en el orden moral, que pone de relieve las condiciones del marqués de Santa Marta como político y la gran elevación de sus ideas. Pero esto merece ser tratado aparte con la detención debida.



SEXTO PERIODO



CAPITULO XXVI

Opiniones del marqués de Santa Marta respecto á las relaciones entre los partidos y á la organización de las jefaturas.—Precedentes históricos sobre este particular.—La tradición en la política española.—Actitud correcta del marqués de Santa Marta en el Consejo del partido federal.—Generosidad y nobleza de su desinteresado proceder al fundar el periódico LA REPÚBLICA.



EL marqués de Santa Marta tenía, como se ha visto, opiniones y criterio invariables acerca de la política republicana y de la organización de los pueblos. Hombre de juicio profundo y de gran sentido práctico, no fía sus opiniones al capricho ni á la impresión del momento; sus convicciones son siempre hijas de madura reflexión y el resultado lógico de un concienzudo análisis. Así es que todas ellas aparecen racionalmente encadenadas con el orden inflexible y riguroso de un sistema. Por consiguiente, su criterio acerca de la organización interna de los partidos estaba en armonía, ó mejor dicho, era una consecuencia de su criterio sobre la política general de los republicanos. Exigiendo imperiosamente los fines capitales de esta política el concurso de todas las fuerzas y de todos

los elementos republicanos, conformes en los principios esenciales de la democracia, aunque discordes en la organización del gobierno, se imponía como primera necesidad la distinción, constituyéndose agrupaciones organizadas con arreglo á los principios peculiares de cada tendencia, y después el concierto para realizar los fines comunes por el único camino posible.

Siempre opinó que dentro de la legalidad monárquica los republicanos no tenían medio para hacer prevalecer sus ideas. Siendo irreformable la Constitución, aún el mayor triunfo imaginable en la lucha legal, el de tener mayoría en las Cortes, sería completamente ilusorio para los efectos prácticos; es más, en el mero hecho de ser elegidas unas Cortes republicanas, estarían en una situación incompatible con la ley fundamental, y ajustándose á ella, podría el monarca disolverlas antes de reunirse. No habían creado los republicanos esta situación, pero eso precisamente les imponía una línea inflexible de conducta: proscritos del campo de la legalidad monárquica, donde á lo sumo solo podrían concurrir á dar autoridad á la misma ley que les excluía de la participación efectiva en el gobierno, las responsabilidades todas de esta situación excepcional eran de los que la habían creado con torpeza inexcusable y la sostenían contra los más elementales principios de gobierno. Los que gobiernan dentro de los sistemas parlamentarios, disponen sobradamente de recursos para impedir ó disminuir las victorias electorales de los enemigos; pero no contentos

aún, circundan la esfera del poder con tal lujo de defensas, que la convierten en fortificación inaccesible por los caminos legales para el que no esté unido por algún interés común con los defensores.

Por esta razón el marqués de Santa Marta estimó siempre como puerilidades impropias de políticos serios ó como argucias para distraer la actividad de los republicanos, haciéndoles malgastar sus fuerzas en inútiles y ridículos empeños, las declamaciones en favor de la lucha electoral, que más que levantar el espíritu de los republicanos, enervaba sus energías. Y por otra parte, el retraimiento, adoptado desde el principio como cuestión de dignidad y aconsejado en todos los instantes por la índole misma de la lucha entre la monarquía y la democracia, no podía significar para hombres serios un estado indefinido de inercia: ó era otra puerilidad ridícula, ó significaba la lucha sin tregua y sin transacciones.

Todo, pues, conspiraba á determinar de una manera indudable el único procedimiento para la política de los republicanos, y tanto el carácter de la inteligencia necesaria entre todos ellos, como la índole de las luchas que estaban llamados á sostener, aconsejaban y exigían imperiosamente en los organismos directivos la mayor sencillez, á fin de reunir en ellos la unidad de pensamiento y la rápida acción, condiciones indispensables para el éxito afortunado.

El marqués de Santa Marta no estaba porque los supremos organismos directivos de los partidos repu-

blicanos fuesen pluripersonales. El criterio de confiar la representación á muchas personas, muy lógico y muy democrático tratándose de Asambleas deliberantes, cuyos miembros tienen representación y responsabilidad propias y peculiares, resulta ilógico, antide-mocrático y contrario á la naturaleza de las cosas cuando se trata de la dirección suprema, representante de la unidad colectiva, porque repartiéndola entre muchos, hace ilusoria la responsabilidad y difícil, si no imposible, la amovilidad, cuando una y otra son las condiciones del poder en la democracia, en cualquiera forma y con cualquiera representación que se constituya. Y si esto exigen la lógica y la consecuencia de las ideas en circunstancias de normalidad, lo exigen más imperiosamente en los casos excepcionales.

Así cuando se trata de concertar, como de dirigir las fuerzas en el combate, las jefaturas colectivas tienen que depositar su confianza en una persona, ya en la más caracterizada, ya en quien los preside, ya en quien los dirige, delegando en él sus atribuciones, y en tal caso resulta un cuerpo inútil é ilusoria su ficticia garantía, ó han de discutir como cuerpo deliberante, y entonces las soluciones se embarazan ó se hacen imposibles, cuando no perjudiciales, sobre todo tratándose de cierta clase de asuntos. La experiencia en nuestro propio partido y en las agrupaciones extrañas, ha confirmado muchas veces, y el sentido común comprueba á cada paso, la razón con que el marqués de

Santa Marta se inclinaba en pro de la forma más sencilla para organizar las jefaturas políticas.

Por razones que no examinamos en este instante, siquiera no fuesen todas igualmente respetables, la práctica de otros partidos y el predominio en el nuestro de determinadas teorías, que pasaron sin grande ni profundo examen á formar parte de los procedimientos del partido federal, no concordaban del todo con el criterio más racional y más democrático del marqués de Santa Marta. Pero éste no había de provocar excisiones por una cuestión de mera forma ó simplemente de procedimiento para el régimen interior, ni quería tampoco dar pretexto á torcidas ó malévolas interpretaciones, ni que pudiese tomarse, dada su legítima influencia, como imposición de su criterio, cuando el partido creía, equivocadamente, que garantía mejor su derecho y daba testimonio de costumbres democráticas, creando una dirección pluripersonal.

Fácil hubiera sido combatirla con fortuna desde el primer instante, solamente con alegar el testimonio de los hechos, pues la experiencia de los partidos en nuestra patria ofrece esta verdad palpable: que independientemente de todos los formalismos, la dirección efectiva la ejercen los jefes, dirección algo más que unipersonal, puesto que concluye siempre por ser exclusiva y autoritaria. Resabio de que no han podido curarse del todo nuestros partidos, aun los que más alardean de democracia y de hostilidad al personalismo, es el de vincular la suerte y el nombre de las

agrupaciones políticas en una personalidad, instituyendo una especie de pontificado que además de dirigir, define, consagra y excomulga, pontificado que ejerce de por vida el jefe aceptado ó impuesto. Contradicción flagrante en los partidos democráticos, negación de su propia esencia, pero difícil de extirpar en poco tiempo por tener sus raíces en nuestro carácter y hacer por lo mismo peligrosa toda tentativa en contrario fuera de sazón

No lo era, ciertamente, el período histórico de que tratamos para intentar semejante empresa, que suponía no sólo una reorganización profunda, sino una verdadera depuración en las ideas en el partido federalista, máxime cuando el mismo partido, cegado por el absurdo de convertir en sacerdocio ó en dictadura lo que solo debe ser dirección ó presidencia, incurría, cual si instintivamente tendiese á cohonestarlo, en el error de las direcciones colectivas, como si el absurdo se neutralizase con el absurdo, ó el error pudiera cohonestarse con un error más craso. Hay cosas superiores á la voluntad de los hombres, y entre éstas deben contarse principalmente las preocupaciones de las muchedumbres y sus simpatías más ó menos conscientes por las personas. Es inútil esforzarse en contrariarlas, porque contra toda razón de conveniencia y de lógica, persistirán en ellas y el ídolo se afirmará más en el pedestal á cada nueva contradicción. Como la humanidad es débil, el que más y el que menos descubre en toda observación dirigida á redimir

á las masas del servilismo político un ardid para su-plantar al objeto de las idolatrías populares.

Testimonio de lo que decimos nos ofrecen los antiguos progresistas. Fanáticos por el general afortunado que concluyó en Vergara la primera guerra civil, vincularon en él sus destinos, considerándole el único hombre capaz de llevarles al logro de sus ideales, como había conducido á los soldados á la victoria. En vano se esforzaban los políticos experimentados, los hombres previsores que formaban en aquella agrupación por convencer á sus correligionarios de que la fortuna en los combates no supone las dotes necesarias al buen estadista, y de que la solución de los graves y complejos problemas que entraña la dirección de los partidos, deben hallarse en manos hábiles, confiarse á hombres idóneos para no malograr el éxito. El partido progresista no se convenció ni después de haber visto que su ídolo no lo llevaba á ninguna parte, y siguió haciendo bandera suya del nombre de Espartero, cuya pericia militar era grande, pero cuyas condiciones de estadista eran reconocidamente muy deficientes.

Los que conocían esto y procuraban conjurar el peligro con sus advertencias, no consiguieron más que dividirlo y colocarlo al borde de la ruina, en la que de seguro hubiera caído si otro prestigio militar, como fué el de Prim, no lo hubiera evitado.

Conviene tener en cuenta este carácter de las idolatrías políticas, que en los partidos populares suelen llegar á veces hasta el fanatismo, para que se com-

prenda hasta qué punto puede ser puerilidad temeraria el atacarlas, comprometiendo quizás la existencia de lo mismo que se quiere defender.

No necesitamos decir, por ser un hecho que está en la conciencia pública, que el partido federal no pudo sustraerse del todo á esta condición de nuestro modo de ser, siquiera cohonestase el hecho proclamando abiertamente la independencia individual y el carácter amovible y responsable del poder, lo mismo en su organización interna que en la esfera pública de la vida nacional y procurase como aplicación del principio en lo que á él tocaba, revestir de ciertas garantías el ejercicio de la jefatura, rodeándola de una especie de cuerpo deliberante, con la obligación de discutir y acordar sus resoluciones, aunque nunca las discutiera ni opusiese á su gestión obstáculo alguno, como en realidad sucedía. El partido, como todos los partidos españoles, estaba personificado en el jefe, que si era discutible en ley de buena y pura doctrina, no fué jamás en la práctica ni discutido ni responsable.

En este punto no hacemos también sino consignar un hecho innegable, sin otro fin que el de dejarlo establecido; por consiguiente, ni tratamos de discutir este hecho, por ser cosa ajena á esta ocasión, ni de juzgarlo, porque no es de nuestra competencia, dada la índole de este libro. Era un hecho, y de los que hemos incluido en la categoría de superiores á la voluntad del hombre, por originarse en la tradición nacional, que el jefe del partido federalista ejercía con

más ó menos amplitud, aunque en justicia debe reconocerse que procuró no extremarla ni abusar de ella, la autoridad que aquí se atribuyen generalmente los jefes de partido, apareciendo consubstancial con los partidos mismos, y, por consiguiente, aunque á la luz de los principios el carácter de la jefatura no se conformase con lo que éstos exigían, el hecho es que la del partido federalista, aunque en la forma pluripersonal, era de hecho unipersonal, pues ante la opinión del jefe cedían las demás por respetos debidos á la autoridad y prestigio de la persona, y en cuanto al ejercicio y á la acción, aparte de todo, tenía las ventajas que, en opinión del marqués de Santa Marta, debían reunir para ser eficaces las jefaturas de los partidos, especialmente las de los partidos de acción como eran los republicanos, y entre ellos especialmente el partido federal, cuya conducta fué siempre la de una digna intransigencia respecto de los poderes monárquicos.

Hubiera sido imperdonable torpeza en político de la elevación de miras del marqués de Santa Marta provocar excisiones con motivo de una cuestión puramente formal y que en realidad no influía gran cosa en lo esencial acerca de la organización de la jefatura; hubiera tenido tanta mayor autoridad para ello cuanto que al proclamar la unidad de la jefatura se despojaba él de la que le correspondía como individuo del Consejo federal; pero no en todas las ocasiones es dable abandonar cargos que pueden ofrecer peligro, ni en

todos los hombres hay la suficiente rectitud de juicio para juzgar imparcialmente los actos de las personas, ni en aquellas circunstancias hubiera sido conveniente ahondar disidencias cuando todo exigía acabar con las existentes en bien de la República y de la patria, los dos grandes amores de nuestro biografiado.

Pero si por la adhesión política y personal de los miembros del Consejo á la respetable persona de su presidente, no podían ser en ninguna ocasión obstáculo para el desembarazado ejercicio de las funciones propias de la jefatura, tal como entendía que debían serlo el marqués de Santa Marta, aparte consideraciones de principios entonces excusadas, por inútiles y contraproducentes, en cambio no dejaba de ofrecer sus dificultades la complejidad del organismo directivo en lo referente á las relaciones con los demas partidos republicanos, porque ésta, como todas las cuestiones de interés ó de importancia eran sometidas á deliberación en el Consejo, y no todos sostenían en este punto el mismo criterio que el marqués de Santa Marta, quien creyó desde el primer día que la coalición debía tener el carácter exclusiva y eminentemente revolucionario y no convertir el concierto de las fuerzas republicanas en disfraz de otros procedimientos que desviasen la coalición de su principal objetivo.

Una vez más se ponía á prueba el patriotismo del marqués de Santa Marta, y una vez más dió él con actos, según acostumbró á hacerlo siempre, prueba solemne de que nunca se apeló en vano á estos senti-

mientos arraigados en su alma como herencia dichosa de su preclara estirpe. Otro en su caso, en sus circunstancias y con su influencia hubiera procedido de diferente modo, haciendo valer y prevalecer sus opiniones, porque tenía medios sobrados para conseguirlo, y añadiendo á sus timbres y prestigios personales el de haber sido quizás el único que desde el principio vió claro la línea de conducta que debía ser para los republicanos el camino de un triunfo cierto y brillante.

Pero él procedió como se conducen siempre los hombres que tienen conciencia de sus deberes políticos y que saben desprenderse de todo interés personal, sobreponiéndose á todos los móviles del amor propio para servir á su patria y á su idea. Pudiendo tener un periódido órgano de sus peculiares opiniones y de sus personales intereses, se arrojó al sacrificio que se le exigía sin medir su importancia y se colocó con él incondicionalmente al servicio de su partido. Por eso llamó al diario por él fundado *La República*, nombre simbólico en las circunstancias aquellas; por eso le apellidó órgano del Consejo federal, indicando que los sacrificios que en todos los órdenes representaba aquel acto, todos los había hecho, todos estaba dispuesto á realizarlos por la República y la federación, ideales en que él ha creído siempre vinculada la felicidad de la nación española.





CAPÍTULO XXVII

Primeras campañas del diario LA REPUBLICA.—Sucesos promovidos con motivo de los abusos cometidos por la empresa del teatro de la Ópera.—Energía y resolución mostradas por el marqués de Santa Marta.—Situación de los republicanos al sobrevenir los sucesos de 1884 y 1885.—Causa de que no pudiesen aprovecharlos en beneficio de la República.—El partido republicano progresista: sus disidencias: causas que las determinaron.—La coalición electoral de 1885 y el marqués de Santa Marta.—Sus resultados.—Relaciones entre los republicanos después de aquella coalición.—Calamidades públicas que sobrevinieron.—Actos caritativos del marqués de Santa Marta.

AL aparecer el diario *La República* en el campo de la prensa vino á dar nuevos bríos al partido federal, que había carecido hasta entonces de un periódico de tanta importancia. Rudas fueron las discusiones que en los primeros meses de su publicación hubo de sostener *La República* con los órganos que en la prensa tenía el partido progresista, toda vez que éste, alardeando de que su jefe estaba resuelto á firmar en blanco cualquiera fórmula de concordia, se mostraba en la práctica opuesto á todo acomodo que no significara la entronización de D. Manuel Ruiz Zorrilla á la suprema jefatura de la democracia. Una inmotivada y extemporánea discusión que iniciaron

algunos periódicos progresistas acerca de los respectivos méritos del Sr. Ruiz Zorrilla y del marqués de Santa Marta y de sus servicios á la causa republicana, dió margen á que la prensa federal recordase muchos actos de abnegación del Marqués, cuya vida entera había sido muestra evidente de su desinterés político, de su amor á la libertad y á la República y de su ejemplar modestia. Resultó de esta discusión lo que estaba en la conciencia de todos; esto es, que si los servicios de D. Manuel Ruiz Zorrilla á la causa de la libertad eran muy grandes, no podían compararse dentro de la agrupación republicana á los prestados por el marqués de Santa Marta, que era republicano ardiente en la época en que el Sr. Ruiz Zorrilla no veía solución posible para España sino en la monarquía. Grande era, sin duda, el merecimiento contraído por el expresidente del Consejo de D. Amadeo al declararse republicano, pero el Marqués lo había sido siempre, esto aparte de que las circunstancias en que el Sr. Ruiz Zorrilla hizo su declaración de fe republicana, más bien influyeron para que este acto representase una gran perturbación, que un positivo beneficio.

Ocupó también muy detenidamente la atención general durante los primeros meses de la fundación del diario *La República* un hecho, que si bien no pertenecía propiamente á la política, tenía no escasas relaciones con abusos gubernamentales. La intervención del Estado en el régimen del teatro llamado, no se sabe por qué, Real ó Nacional, cuando debiera bastar-

le el título de teatro de la Opera, ha dado siempre margen á grandes abusos, pues ha bastado que los empresarios fueran personas gratas al ministro de Hacienda para que se hayan creído autorizados á faltar escandalosamente á todos sus compromisos, abusando de los abonados y de todo el público.

El marqués de Santa Marta figura entre los primeros abonados del teatro de la Opera, y es quizá el más antiguo de todos, pues desde que se fundó en tiempos del conde de San Luis ese coliseo, viene figurando constantemente en la lista de abono, por lo que ha merecido siempre grandes consideraciones á todos los empresarios, alguno de los cuales ha llegado á decirle que con las cantidades que ha entregado podría fundarse un teatro de verdadera importancia. En más de una ocasión ha defendido el Marqués con entereza los derechos que le asistían como abonado, negándose á abandonar palcos que creían de su exclusiva pertenencia los reyes y sólo cuando por éstos se ha reconocido aquel derecho y la pretendida imposición se ha trocado en ruego de los empresarios, ha cedido el Marqués por mera galantería; pero en ningún caso ha llevado con resignación los irritantes abusos de las empresas, que después de cobrar á los abonados sumas enormes, presentan compañías inadmisibles.

Esto ocurrió en gran escala durante la época en que real ó aparentemente dirigía la empresa del teatro de la Opera el Sr. Rovira, quien bajo el pretexto de haber hecho crecidos gastos en reformas innecesarias,

que verdaderamente carecían de importancia y eran además del peor gusto, aumentó de un modo extraordinario el precio de los abonos y quiso crear nuevos turnos para cercenar los que ya existían, sin perjuicio de presentar artistas tan baratos como poco á propósito para complacer á los inteligentes.

Según suele ocurrir en estos casos, los abonados murmuraban y era general el descontento, pero nadie se atrevía á tomar iniciativa alguna. El marqués de Santa Marta, que no teme dar el primer paso ni asumir responsabilidades cuando está persuadido de que le asiste la razón, supo dar esta vez, como tantas otras, impulso al movimiento de protesta, y una noche en que se *ejecutaba* en la acepción penal de la frase, una hermosa ópera por artistas que no estaban á la altura de sus papeles, avanzó hasta la orquesta dando voces para que bajaran el telón, que fueron secundadas por el público, y como la representación proseguía, no pudiendo contenerse y en un rasgo de su impetuoso carácter, arrojó una silla al escenario. La representación se suspendió enseguida; bajó el telón aun cuando se estaba en la mitad de un acto; los abonados aplaudieron calurosamente al Marqués, y esta fué la señal de la lucha que desde entonces entablaron contra la empresa del Sr. Rovira, apoyada por el gobierno.

Celebraron los abonados á mediados de Septiembre de 1884, en el Circo de Rivas, una junta muy numerosa, de que por aclamación unánime fué nombrado Presidente el marqués de Santa Marta. Se acordó, á

propuesta de éste, no pasar por transacción alguna de las que, ya aterrada, proponía la empresa y no descansar hasta que abandonase dicha empresa el Sr. Rovira: la inauguración de las funciones se retrasó muchos días y la primera representación, á que por cierto asistieron los reyes, fué un escándalo, en que tomó parte principalísima el Marqués, que rechazó con desdén las amenazas que de ponerle preso le hacía el gobernador civil, y silbó durante gran parte de la representación á los artistas que destrozaban la partitura. Suspendiéronse las funciones, siguió el conflicto, de que se ocuparon extensamente los periódicos durante más de dos meses, y al fin se vió obligado el Sr. Rovira, no obstante la protección del gobierno, á abandonar la empresa del teatro, con lo que los abonados, presididos por el marqués de Santa Marta, alcanzaron el éxito más completo en sus pretensiones.

Hecha mención de este incidente, que merecía citarse por el mucho ruido que dió y como nueva muestra de la energía de carácter del marqués de Santa Marta, reanudaremos la exposición de los principales acontecimientos políticos en que hubo de intervenir en el período que nos ocupa.

Para el hombre sincero que profesa por convicción las ideas y busca de buena fe en su práctica el bien público, no puede ser motivo de satisfacción el fracaso de otras ideas si por él se lastiman de algún modo los intereses del pueblo. Por esta razón no podían causar alegría al marqués de Santa Marta las tristes expe-

riencias que en los años sucesivos vinieron á demostrar cuan útil hubiera sido para la democracia republicana organizarse y concertar sus fuerzas en la forma que él estimó lógica y conveniente desde un principio; antes al contrario, vió con dolor profundo que por no haber procedido en armonía con los preceptos de la sana razón y del más elemental sentido político, los republicanos tenían que asistir inactivos al desarrollo de los sucesos más propicios para el logro de sus fines, cuando hubieran estado en condiciones de aprovechar la indignación pública contra el desatentado poder de los conservadores, cada día más odiosos al pueblo español.

Pero habían podido más hasta entonces en el ánimo de nuestros afines los empeños del egoísmo. Les sorprendieron medio desorganizados y á todos desunidos, cuando no empeñados en reñida batalla por defender la propia existencia contra las obstinadas solicitudes de la agrupación progresista para desorganizar á los federales, sucesos como el acuchillamiento de los estudiantes por el famoso jefe de orden público, Oliver, acto que levantó un grito de universal protesta; la misma coalición de todos los partidos contra Cánovas en las elecciones verificadas en Mayo del año siguiente, en que los republicanos fueron los árbitros, decidiendo en todas partes el triunfo de las candidaturas coalicionistas; los sucesos de las Carolinas, que colmaron la irritación popular, y por último, la muerte de D. Alfonso, hecho que habría decidido de la existen-

cia del trono si, como temían los monárquicos, los republicanos hubieran tenido la prudente previsión de unir sus fuerzas ante un acontecimiento esperado desde hacia meses por todo el mundo. ¡Todas estas ocasiones perdidas por no haber sabido aprovecharlas ni preverlas! No podía culparse por este estado de impotencia en que parecían encontrarse las agrupaciones republicanas, á quien, como el marqués de Santa Marta habia visto y aconsejado con tiempo lo que convenia al porvenir de la República, pero no por eso dejaba de lamentar esta situación que tan poco decía en favor de todos, porque todos, previsores é imprevisores, se confundían en el triste concepto que tales antecedentes engendrarians de seguro en el ánimo del pueblo acerca de la capacidad de los llamados á dirigirle por rumbos ciertos á la deseada tierra de promisión.

Debe confesarse, en medio de todo, que aquella parecía una época excepcional, en que las torpezas eran comunes y general el desconcierto, como si la atmósfera que envolvía á todos los partidos no les consintiese proceder con cordura. Un observador imparcial se hubiese creído, si vale la frase, en presencia de un verdadero fenómeno de patología política. Los mismos conservadores, que estaban en el gobierno, parecían obedecer en su conducta á la influencia y la dirección de sus más encarnizados enemigos: de tal manera supieron concitar contra sí todas las antipatías, todos los intereses, todos los ódios.

Pero esto, que ofrecia coyunturas favorables á cada

paso para adelantar las conquistas republicanas, era un nuevo motivo para deplorar la inacción á que nos condenaban errores y torpezas de los afines, los cuales, sin prever las consecuencias inevitables de la política conservadora, y cerrando los oídos á los llamamientos que se les dirigian desde el campo federal, en vez de contribuir á la aproximación de los partidos, se consagraban á ahondar las diferencias entre los suyos.

A principios de 1885 se inició una disidencia en el partido progresista, cosa que, no por ser natural y prevista, dadas las circunstancias de aquella conjunción de tan heterogéneos elementos como la verificada por el manifiesto de Abril, que dió vida al partido progresista; no por ser consecuencia necesaria de aquel extraño maridaje, dejaba de ser lamentable, por venir á dificultar los trabajos encaminados á la coalición.

Si en vez de proceder de ligero y con tan poca perspicacia, pretendiendo reunir á todos los republicanos, sin pararse en procedencias ni antagonismos de doctrina, bajo la jefatura del Sr. Ruiz Zorrilla, se hubiese procurado constituir partidos, los resultados hubieran sido diferentes. El partido progresista no fué más que una aleación formada sobre la base de algunos principios comunes á los antiguos radicales y á los republicanos históricos que seguían al Sr. Salmerón, y estas inteligencias de momento no pueden alcanzar, por su naturaleza y carácter, la duración de los partidos fundados sobre la comunidad de principios.

que forman un cuerpo completo de doctrina. No se tuvo ó no se quiso tener esto presente, por causas ó razones que no hemos de examinar ahora, y sucedió lo que sucede siempre que se hacen las cosas al revés. En vez de verdaderos partidos que por la unidad de sus principios ofrecieran unidad de organización y de fuerza y podrían haber establecido inteligencias entre sí, en previsión de acontecimientos inevitables é inmediatos, no había de una parte más que el partido federal, único debidamente organizado, y de otra varios grupos confundidos en una coalición indeterminada, que era un obstáculo y se hacía indispensable deshacer para realizar otra más seria y más poderosa.

Ocupados en estos trabajos de deslinde y reorganización, que pedían ya con urgencia desde las columnas de *El Liberal* los elementos del republicanismo histórico, que formaban entre las huestes progresistas, no atendieron éstos las excitaciones que la representación del partido federal les dirigía con insistencia para coligarse, cumpliendo el mandato de la Asamblea federal, reunida en Zaragoza en el año de 1883. Fué necesario para atraer la atención de los progresistas hacia las desgracias de la patria, que los mismos monárquicos les advirtiesen y solicitasen su concurso para combatir al partido conservador, que acababa de coronar su obra de persecución contra las corporaciones municipales, destituyendo al Ayuntamiento de Madrid. Los progresistas, que habían rehusado constantemente llegar á una transacción con los partidos afines, imbui-

dos por la idea de absorberlos á todos, arrastrados por la fuerza de la opinión, se pusieron en contacto con ellos por el intermedio de los monárquicos de la fusión y la izquierda, que dieron á los conservadores a batalla en las elecciones municipales, unidos á todos los republicanos. Con este motivo se ahogaron por entonces los gérmenes de discordia que asomaban por el campo progresista, bien que quedó sentado, por las públicas declaraciones de los amigos del Sr. Salmerón en los periódicos, especialmente en *El Liberal*, que en el partido progresista existían dos jefaturas, representantes de las dos tendencias distintas que lo formaban, antecedente poco favorable para abrigar esperanzas acerca del porvenir de dicha agrupación política, que en realidad no llegó á obtener verdadero y definitivo deslinde hasta dos años después.

La coalición electoral de 1885, muy semejante en su forma á aquella otra iniciada por el partido radical, y á la que concurrieron todos los partidos, así monárquicos como republicanos, contra Sagasta en el reinado de D. Amadeo de Saboya, no podía satisfacer los anhelos patrióticos del marqués de Santa Marta; pues en realidad no se ocultaba á nadie que el resultado inmediato de ella sería favorecer los intereses de los fusionistas, únicos herederos de los conservadores en el poder. Podía, pues, muy bien decirse de ella, por parte de los republicanos, lo que de la otra coalición anteriormente mencionada dijo el alfonsino Sr. Esteban Collantes, refiriéndose á los radicales, que fueron

los que verdaderamente se aprovecharon del triunfo de aquella coalición: «Hemos hecho carambola, villa y palos y... á casa.»

Pero la de 1885 ofrecía una ventaja, y era la de aproximar á los republicanos, discordes hasta aquella fecha, pudiendo ser, por consiguiente, si no una garantía, una esperanza respecto de la coalición republicana en el porvenir. Lo era tanto más cuanto que una de las dificultades opuestas por el Sr. Zorrilla para entrar en la coalición propuesta por los federales, era la negativa del Sr. Castelar á concurrir á ella con sus amigos, y el jefe progresista ponía como condición indispensable la concurrencia de todos los republicanos. Claro se ve, con solo enunciar tan extraña y absurda pretensión, que era solo un pretexto para rehusar la inteligencia con los federales, pero hasta este pretexto desaparecía en aquel caso, puesto que el señor Castelar era uno de los que con más decisión entraron en la coalición electoral de 1885. Si se conseguía que después de las elecciones y al separarse, como era natural, los monárquicos, una vez cumplido el fin de aquella inteligencia, los posibilistas continuasen unidos por el vínculo común á los republicanos, se habría facilitado mucho el camino para llegar á un concierto completo, pues el Sr. Ruiz Zorrilla se vería obligado á entrar en ella ó á declarar abiertamente que no la quería.

En este sentido la coalición electoral de 1885 era aceptable, y así la aceptó el marqués de Santa Marta,

como un atajo en el camino de la coalición, bien que hubiese de recorrerlo en parte en compañía de monárquicos, á quienes los republicanos hacían merced de su ayuda contra los conservadores, á cambio del servicio que ellos les prestaban, sirviendo de medio para aproximarlos entre sí. Pero en este sentido solamente, porque ni el triunfo electoral podía ser verdadero objetivo de la política coalicionista, ni servir gran cosa á los intereses de la democracia el triunfo de cualquiera de los partidos monárquicos sobre el otro.

Concluidas las elecciones, los fusionistas creyeron terminado su compromiso y abandonaron la coalición, seguidos de Castelar, quien desde 1874 se encontraba siempre mejor hallado entre los monárquicos que con sus antiguos correligionarios; pero los republicanos creyeron que, siquiera por el buen parecer, debían continuar, si no verdaderamente coligados, en comunicación constante y en inteligencia por lo menos, proponiéndose seguir los trabajos para completarla, convirtiéndola en verdadera coalición.

No podía considerarse como tal todavía, porque en honor de la verdad, las bases con que se había concertado para las elecciones, habían sido puramente electorales, sin otro fin que el de derrotar al gobierno en los comicios: no cabía, pues, coalición sin nuevas bases de mayor permanencia entre los elementos que continuaron en inteligencia después de separarse los monárquicos, comprometidos solo para un fin inmediato ya realizado, y el Sr. Castelar, á quien tampoco


atraían ni interesaban más que los asuntos electorales. Pero existía además la razón poderosa de que el carácter predominante, ya que no podía ser el exclusivo, de la coalición, era el revolucionario. No fueron, ciertamente, las circunstancias propicias para los trabajos políticos por causa de la invasión colérica, que se cebó aquel año en España con espantoso rigor, ocasionando cerca de cien mil víctimas durante el verano, y ofreciendo nueva ocasión para que el marqués de Santa Marta diese muestra de sus generosos sentimientos, realizando actos de filantropía, que llevaron el consuelo á muchos hogares y dieron quizá la existencia á muchos infelices, víctimas de la miseria, que remedió en muchas ocasiones, ocultando la mano protectora. Mas á pesar de las difíciles circunstancias creadas por el mal estado de la salud pública, creía que no debían abandonarse de ningún modo los trabajos para conseguir la coalición, máxime cuando veía las dificultades que había que vencer por parte de los progresistas en un plazo perentorio para que no viniesen de sorpresa los acontecimientos, como antes había sucedido y como sucedió poco despues. Se confirmaron sus previsiones al ocurrir la ocupación de las Carolinas por los alemanes y la muerte de Alfonso XII, hechos que encontraron á los republicanos, muy amigos, es verdad, pero sin plan alguno, y que fueron por consiguiente desaprovechados para el interés de la causa republicana.





CAPITULO XXVIII

Consideraciones sobre la situación de los republicanos á la muerte del rey D. Alfonso.—Dificultades para la coalición.—Debilidad que resultó de ese estado de discordia.—Se acuerda al fin la inteligencia en Marzo de 1886.—Carácter electoral de esa coalición.—Designación del marqués de Santa Marta para candidato á diputado á Cortes por Madrid.—Sus opiniones sobre la coalición pactada se confirman por los escasos resultados de ésta.—Sucesos del 19 de Septiembre de 1886.—Actitud que en vista de los mismos adoptaron los diversos partidos republicanos.—Nueva excisión en el bando progresista.—Ruptura de la coalición.

A indignación que los conservadores habían despertado en todos los espíritus con su torpe conducta, sus incesantes provocaciones á la opinión y su palmaria debilidad con los alemanes, que habían pretendido apoderarse del archipiélago español de las Carolinas, se prestaba admirablemente á una tentativa en sentido revolucionario, pues la República habría aparecido unida entonces á la causa de la integridad y de la dignidad de la patria; nada se hizo, sin embargo, en este sentido. Los progresistas, que seguían diciéndose dispuestos á firmar en blanco cualquiera fórmula de inteligencia con los demás partidos republicanos, no hicieron gestión alguna encaminada á la coalición,

y por su parte los federales tampoco dieron un paso para entenderse con sus afines; nada se oponía ya á una concordia establecida sobre sólidas bases, pues el movimiento de diferenciación había delineado claramente las aspiraciones del partido federal y del unitario, y aun marcado en cada uno de ellos tendencias distintas; pero quedaba el personalismo, inseparable de la actual organización antidemocrática de las jefaturas, y que bastó á esterilizar los esfuerzos de los pocos hombres que, libres de bastardas pasiones, veían clara la necesidad de unir la acción de todos en un supremo esfuerzo para el triunfo de la República.

Dos grandes ocasiones se habían perdido, pues, en la empresa de reivindicar la soberanía del pueblo: la del cierre de tiendas en Madrid en Junio de 1885, y la ocupación de Yap por los alemanes; mas aún se perdió otra, la que ofrecía la confusión y debilidad de los monárquicos en las primeras horas de la muerte de D. Alfonso XII. Si entonces hubieran tenido los republicanos algunos elementos de acción resueltos á dar el grito, la situación de la vacilante monarquía se habría agravado en términos de hacerse facilísima su definitiva desaparición. Los conservadores estaban completamente desconcertados y sin medios de defensa; alguno de sus periódicos dejó asomar la idea de una intervención alemana para defender el trono; los fusionistas amenazaban; todo el mundo esperaba que los republicanos se uniesen para la lucha, y esa unión, con un poco de resolución y de buen deseo habría sido

empresa de una hora; pero, con gran asombro de los mismos monárquicos, Pí, Salmerón y Ruiz Zorrilla, ó la representación de su partido, se mostraron indiferentes y como ajenos á los graves acontecimientos que se desarrollaban antes sus ojos. Cada uno de ellos, respondiendo á las excitaciones apremiantes de sus correligionarios, se excusaba con que los otros jefes no habían tomado iniciativa alguna para celebrar siquiera una entrevista, como si esos vanos detalles de etiqueta no debieran ceder en aquellos momentos al supremo interés de la patria y de la República; quién protestaba que nadie había ido á verle, á pesar de indicaciones en contrario; quién se escudaba con tener que asistir necesariamente á una junta de letrados para evacuar una consulta; quiénes se contentaban con indicaciones transparentes y engañosas acerca de proyectos que debían realizarse de un momento á otro, y que en realidad no estaban bosquejados siquiera. El hecho es que se dió un espectáculo verdaderamente lastimoso con tan incalificable inacción; los monárquicos, llenos de sorpresa y de gozo, al ver que los republicanos nada intentaban, sacudieron el estupor de que parecían estar poseidos; Cánovas atajó la sublevación antidinástica que se temía hicieran los fusionistas, entregando precipitadamente el poder á Sagasta, cuyas gentes parecían dispuestas á todo á trueque de no seguir en la oposición; pasaron los momentos propicios para intentar con buen éxito la caída de la monarquía, y solo quedó en la mente de los republicanos

el triste recuerdo de aquella gran ocasión desaprovechada, un profundo desaliento por la impotencia é imprevisión de que todos habían dado muestra en aquellos instantes decisivos y una apreciación poco favorable á la conducta de los jefes, que sean cuales fueren las causas que alegasen en abono de su actitud, no estuvieron en modo alguno á la altura de las circunstancias, ni hicieron ó intentaron siquiera algo de lo mucho que de ellos había derecho á esperar.

Pasaron días y más días en el quietismo los republicanos, si bien las masas llevaban con gran disgusto esa inacción; porque es lógico que los partidos que dan á sus jefes grandes facultades y atribuciones, esperen de ellos grandes actos é iniciativas poderosas. Este es el inconveniente de las dictaduras: requieren de parte de quien las acepta mucha resolución y mucha actividad; en otro caso se convierten en una ironía.

La inacción de los republicanos dió margen al establecimiento y consolidación de la regencia; los monárquicos se unieron mientras seguían divididos los republicanos, y se dió el caso curioso de que el Sr. Sagasta dirigiese una situación en que era presidente de las Cortes D. Antonio Cánovas, para el efecto de recibir el juramento á la Regente. En tanto los Sres. Pí, Salmerón y Ruiz Zorrilla no se entendían, y por doloroso que sea confesarlo, ese apartamiento de toda inteligencia se debía en gran parte á la pésima organización interior de los partidos republicanos, que profesan en teoría la democracia, y en la práctica de su vida

íntima el absolutismo más funesto, el de las personas; pues sus jefes no se renuevan mientras vive el que una vez logró alcanzar esa dignidad, de modo que sean los que fueren sus desaciertos, siempre creen llevar consigo la legitimidad y siempre encuentran gentes que incondicionalmente les siguen y que llaman rebeldes y díscolos á cuantos de su lado se apartan, aunque estos disidentes representen las verdaderas tendencias del partido. Como, por otro lado, cada agrupación se considera capacitada para ejercer por sí y para sí exclusivamente el poder, resulta que no hay jefe que no mire su cargo como título bastante para ejercer en su día la presidencia de la República; sus favoritos se consideran como los ministros del porvenir, y á unos y á otros les duele toda fusión en que peligre su exclusivo predominio. Los jefes se dan clara cuenta de esta situación: quizás deploran como pensadores y filósofos el atraso de las masas, que siguen á personas más bien que á ideas; pero saben perfectamente que en el caso de coligarse, alguno de ellos y no importa cual, ha de figurar quiérase ó no, á la cabeza de los otros, y de aquí la resistencia de los que se consideran menos populares á dejarse absorber, perdiendo la soñada supremacía. Esta es la triste verdad y esto se halla en la conciencia de todos, pero no está de más que se diga en voz alta.

Si lamentable y doloroso fué que no se unieran los jefes republicanos cuando debían haberlo hecho, esto es, á la hora de conocida la muerte de D. Alfonso,

más lamentable fué que después de transcurridos cuatro meses no sólo en la inactividad más absoluta, sino dirigiéndose por medio de sus periódicos mútuos cargos, se apresuraran á pactar una coalición apenas se acercaron las elecciones de diputados á Cortes. Todo lo que había parecido insuperable cuando se trataba de conseguir algo serio y decisivo, resultó entonces llano y hacedero; las montañas que cerraban el paso á la coalición se convirtieron en granos de arena, y en muy pocos días se convino en una fórmula, en que se hacían algunas afirmaciones de principios, comunes á todos los partidos demócratas, una vaga insinuación de recurrir á procedimientos revolucionarios en casos extremos y se dejaba á las Cortes Constituyentes, elegidas después del triunfo de la República, la organización que á ésta había de darse. Tal fué la coalición pactada en Marzo de 1886; era resueltamente unitaria, pues dejaba la forma de la futura República á la voluntad de las Cortes, y sus bases se redactaron por el Sr. Salmerón, con ligeras modificaciones hechas por sus compañeros; pero todo pareció bueno porque era necesario animar á las gentes, no para que se alzasen en armas, sino para que acudiesen á depositar su voto en las urnas. Resultados prácticos: el Sr. Pí y Margall fué elegido diputado por el sistema de acumulación; pronunció un solo discurso en las Cortes y se retiró á poco del Congreso para no volver á tomar parte en los debates: el Sr. Salmerón, elegido por Madrid, abandonó también el Congreso, después de haber interve-

nido algún tiempo en las discusiones, y en resumen, apenas obtuvieron la investidura de diputados á Cortes una docena de republicanos, que distaron de hacer campañas infatigables ni ruidosas. Otro aspecto ofreció la coalición, pero ya trataremos de esa fase nueva más adelante.

El marqués de Santa Marta vió con profunda contrariedad el carácter puramente electoral de aquella conjunción de fuerzas republicanas. Desde luego se le designó como candidato á la diputación á Cortes por Madrid, y aceptó la designación sin el menor entusiasmo, pues la lucha legal distaba de satisfacer sus aspiraciones. Al presentarse en el Casino progresista, donde dirigieron su palabra á los republicanos los candidatos de la coalición, el Marqués pronunció un discurso de tonos muy enérgicos, en que hizo constar el carácter que en su sentir debía tener la inteligencia pactada en Marzo. «Yo—dijo—el Marqués, soy coalicionista porque soy revolucionario.» En esta frase había todo un programa, que el auditorio acogió con muestras del entusiasmo más ferviente, pues á la verdad condensaba los deseos del pueblo, nada amigo de vaguedades metafísicas y persuadido de que la lucha legal representaba el tácito reconocimiento de la monarquía restaurada en Sagunto.

No se avenían estas francas y enérgicas declaraciones del marqués de Santa Marta con los verdaderos propósitos de muchos de los que intervenían en aquella coalición; pero ni el Marqués había sido nunca de

los hombres que velan su pensamiento ante consideraciones de cierta índole, ni le halagaba gran cosa su designación como candidato á la diputación por Madrid. Nada hizo por alcanzar un triunfo, que más bien que lisonjearle habríale servido de contrariedad, y á pesar de todo estuvo muy cerca de ser elegido, pues obtuvo un centenar de votos menos que el Sr. Salmerón, que fué el que logró la victoria en el puesto de las minorías.

Bien mezquino fué el éxito de la coalición en cuanto á la lucha legal, pues, como ya queda indicado anteriormente, alcanzaron el triunfo muy pocos diputados republicanos. El gobierno dispensó su protección á los posibilistas y trajo al Congreso casi tantos diputados de ese matiz como habían logrado sacar á flote los coaligados. Fué ruidoso el triunfo del Sr. Pí, merced al gran número de votos que obtuvo por acumulación; pero de todos modos la campaña de aquella minoría fué pobre y débil, pues los diputados republicanos no podían menos de sentirse como divorciados de la tendencia predominante entre sus correligionarios, que desconfiaban de los procedimientos llamados legales y esperaban con impaciencia que la coalición marchase por otros rumbos.

Quizá obedeciendo á este estado de la opinión republicana, se pensó en emprender una campaña de propaganda por varias provincias, á fin de mantener viva la fe de las masas en la alianza que se había pactado. El Sr. Salmerón que, oficialmente al menos,

figuraba aún en las filas del bando progresista, hizo con buen éxito una excursión por varias ciudades de importancia, fué acogido con entusiasmo en Barcelona y pronunció en Vigo un discurso de tonos muy enérgicos, en que algunos creyeron ver explícitas manifestaciones revolucionarias. También había pronunciado en el Congreso un discurso que produjo sensación entre los que pensaban que la coalición tenía un carácter revolucionario, aceptado por todos.

Por su parte el Sr. Pí y Margall había hablado en el Congreso contra la monarquía y hecho algunas indicaciones acerca del exagerado coste de la lista civil, aludiendo á la gran fortuna dejada por el difunto monarca; pero sea porque las interrupciones intemperantes de la mayoría le hiciesen perder un tanto el aplomo que siempre había mostrado en los debates del Parlamento, ó porque se sintiese muy herido por las desatenciones de que fué objeto por los diputados monárquicos, y que no es contumbre usar contra hombres de su representación y de su talla, es lo cierto que no volvió á pronunciar más discursos en aquellas Cortes, que duraron más de cuatro años.

Mientras tanto los republicanos de acción preparaban un movimiento revolucionario que estalló en Madrid el 19 de Septiembre de 1886. Desde luego se comprende que la opinión republicana había de acoger muy bien esta actitud, pues los ánimos no estaban por la infecunda lucha dentro de la pretendida legalidad; además, el pueblo juzga por lo que ve y enton-

ces vió que se tendía á realizar algo práctico, mientras otros elementos se dedicaban á pronunciar discursos ó á condenar el movimiento vencido, y esta última clase de manifestaciones fueron muy mal recibidas.

Están demasiado recientes los sucesos y son harto delicados para que entremos ahora á dilucidar si el movimiento del 19 de Septiembre fué obra de todos los republicanos coligados ó sólo de los progresistas; si en el caso de que estos fueran sus iniciadores contaron en la medida necesaria con las representaciones de los demás elementos, sobre todo del federal, y les dieron cuenta con la anticipación que es de rigor en estos casos, de lo que se preparaba y de los elementos con que podía contarse. Algo, y quizá más de lo debido, se ha escrito ya sobre el particular: se ha dicho que todos sabían á qué atenerse y con este motivo se ha censurado mucho la conducta de los que á raíz del fracaso se manifestaron dolorosamente sorprendidos por el hecho; mas sería preciso oír con atención á todos los interesados para juzgar con probabilidades de acierto en el fallo, y ni somos nosotros los llamados á dirimir la cuestión, ni sería oportuno intentar semejante empresa en esta obra. Por lo que hace al marqués de Santa Marta, haremos notar que una terrible desgracia de familia, de que más extensamente tratamos en el capítulo inmediato, la muerte muy reciente á la sazón, de una hija á la que idolatraba y que era digna de la admiración y estima de todos por sus excepcionales prendas de virtud y belleza, había postra-

do su ánimo y contribuido á retraerle en gran manera de los trabajos políticos, si bien este retraimiento no influyó, ni podía influir tenidas en cuenta las arraigadísimas convicciones del Marqués, en que desatendiese el cumplimiento de sus deberes como amante de la federación y de la República.

Hemos de limitarnos, pues, á hacer breves indicaciones acerca de los resultados que el movimiento del 19 de Septiembre tuvo en la política general y en las relaciones mútuas de los partidos republicanos. Desde luego el gobierno extremó los temperamentos de resistencia, los periódicos estuvieron sometidos muchos días á la censura del capitán general, pareció inminente el fusilamiento del general Villacampa y de los oficiales y sargentos aprisionados cerca de Madrid, si bien se conmutó luego esa pena por la de presidio con deportación á Fernando Póo primero y luego á Ceuta. Se creyó inevitable la caída de los fusionistas y la vuelta al poder de los conservadores, pero hubo de temerse que esta medida ocasionara mayores males que los que se trataba de prevenir, y por su parte los llamados liberales tuvieron buen cuidado de mostrar que sabían ser tan reaccionarios como los canovistas.

Entre los republicanos fué grande la agitación. Tiempo hacía que el Sr. Salmerón y sus amigos estaban á disgusto en el partido progresista, y se apresuraron entonces á exponer su opinión resueltamente desfavorable al movimiento realizado y vencido el 19 de Septiembre. El partido federal creyó que no debía

desautorizar aquel acto, y cualesquiera que fuesen las quejas que pudiera tener con los progresistas, guardó silencio.

Reunióse á poco una Asamblea del partido republicano progresista y en ella se consumó la ruptura entre el Sr. Salmerón y sus antiguos correligionarios al cabo de diez años de una alianza que tal vez nunca fué íntima y sincera. Como el Sr. Salmerón debía el cargo de diputado á Cortes á la coalición pactada en Marzo y se consideraba desligado de esa inteligencia, se creyó en el caso de renunciar su representación parlamentaria, y lo hizo así. El Sr. Pí y Margall no dió por entonces muestra alguna de disenso con el Sr. Ruiz Zorrilla en cuanto á la coalición, por el contrario, apareció indiferente á la ruptura ocurrida con los salmeronianos, pero dejó también de asistir á las sesiones del Congreso, si bien no renunció la diputación ni dirigió á sus correligionarios manifiesto ni circular de ninguna clase para manifestarles que se retiraba de las Cortes, ni explicarles las causas de esa retirada, lo que no dejó de causar extrañeza.

Con motivo de la renuncia que hizo el Sr. Salmerón de su cargo de diputado y de la retirada del Sr. Pí y Margall, la minoría republicana del Congreso vino á organizarse como una agrupación especial, que convino en una especie de programa muy indeterminado y en que no había indicación alguna de carácter revolucionario. Púsose al frente de la citada minoría el señor Pedregal, pero los diputados estaban poco menos que

en incomunicación con sus respectivos partidos y así hubieron de comprenderlo y decirlo aun los mismos monárquicos, pues en las discusiones que sostenían con la minoría republicana le negaban personalidad. Como esta falta de compenetración entre representantes y representados era un hecho evidente, la situación de la minoría llegó á ser muy embarazosa y esto influyó mucho en que su campaña careciese de vigor y de eficacia.

Así las cosas, en los últimos meses de 1887, y sin que ocurriese hecho alguno de importancia que viniese á imponer un cambio en las posiciones respectivas de los partidos, dió el Sr. Pí y Margall un manifiesto, declarando rota la coalición entre federales y progresistas. No causó asombro esta actitud del Sr. Pí, ya que la coalición no existía de hecho desde el movimiento del 19 de Septiembre; pero fueron muchos los que pensaron que habría sido más lógico romperla meses antes, cuando el Sr. Salmerón, verdadero autor de la fórmula, se apartó del campo progresista. De todos modos la ruptura causó, en general, deplorable efecto, pues desde el momento en que los partidos republicanos estaban perfectamente deslindados y definidos, se imponía entre ellos una inteligencia ó alianza de carácter permanente para luchar contra la monarquía, que no podía menos de cobrar vigor frente á enemigos dispersos. El proceso de diferenciación entre las agrupaciones republicanas podía considerarse terminado, y era un verdadero suicidio político insistir en un estado

de tirantez y hostilidad que á ningún fin práctico respondía y que regocijaba á los monárquicos. Empezaba á tomar cuerpo el movimiento de disgusto contra el exclusivismo de los jefes; los demócratas comprendían la necesidad de organizarse democráticamente. Faltaba solo un hombre de verdadera autoridad y talla política que diese la señal de la emancipación, y este hombre había de aparecer al fin, pues no hay aspiración interna de la opinión pública que no tenga su representante genuino.





CAPÍTULO XXIX

La ruptura de la coalición produce marcado descontento en las masas republicanas.—Justificación de este disgusto.—Empieza á bosquejarse la tendencia de buscar una concordia sincera entre los republicanos, ya con aquiescencia de los jefes, ya contra la voluntad de éstos.—Funestas consecuencias de la organización personalista y autocrática en los partidos democráticos.—Relativo apartamiento del marqués de Santa Marta de la política activa en este período.—Dolorosas causas de este retraimiento.—Convocatoria de la Asamblea de 1888.—El marqués de Santa Marta es elegido representante por Madrid.—Muestras de simpatía de que fué objeto por parte de los federales.



AUNQUE la coalición pactada en 1886 dejaba mucho que desear en lo relativo al más importante—por no decir el único—de sus fines, su ruptura produjo general descontento entre los republicanos. El hecho de haber realizado unidos actos importantes en la política general del país, desvanecía las esperanzas que los monárquicos fundaban en la imposibilidad de dicha inteligencia, y constituía para las instituciones un serio peligro la probabilidad de que las relaciones por la coalición engendradas se consolidasen cada vez más, constituyendo una fuerza avasalladora é incontrastable. Así es que aunque no llenase

completamente las aspiraciones de la mayoría de los republicanos, la coalición era mirada aun por los más impacientes como la base de otra coalición más práctica y de verdadero sentido revolucionario. Pero al desaparecer aquella concordia, procurada con tanto ahinco y conseguida después de laboriosas negociaciones, amenguábase también la fuerza y el prestigio de los republicanos. Se había dicho tantas veces y en todos los tonos por los republicanos mismos que aislados éramos impotentes, que la unión se imponía como una necesidad de la lucha y como condición para el triunfo; se había aceptado esta idea con carácter tan indiscutible que era lógico renaciesen las esperanzas de los monárquicos al ver demostrado por los hechos que los republicanos no se entendían, que no podían entenderse ni marchar unidos mucho tiempo y se les considerase por lo tanto impotentes para luchar contra la monarquía, ante cuyos intereses sabían deponer sus rivalidades y acallar sus odios, uniéndose todos los monárquicos

A las esperanzas de éstos, resucitadas por la ruptura de la coalición, correspondía el desaliento de los republicanos, absortos y desorientados ante el inexplicable fenómeno de que, deseando todos vivamente la común inteligencia, apareciese ésta poco menos que como cosa imposible. No hay quizás partido político que en su historia presente paradoja semejante á esta que han ofrecido los republicanos españoles. Se explica que entre partes, á cuyo interés conviene evidente-

mente un contrato, surjan dificultades invencibles por la oposición de una de ellas, equivocada en la apreciación de sus propios intereses; se comprende perfectamente que entre personas ligadas por vínculos é intereses comunes y llamadas á proceder de común acuerdo, no se llegue á él por resistencias nacidas de cualquier causa, ó una vez realizado se rompa por haber desaparecido el interés común ó por entibiarse el entusiasmo de los pactantes; lo que no se ha visto nunca ni se verá probablemente, ni en el terreno político ni en ninguna esfera de la vida es que, subsistiendo el motivo y la necesidad que dieron vida á un contrato y con ellos el deseo, enardecido en vez de disminuir por los resultados prácticos, se rompa violentamente, y después de roto continúen los interesados sosteniendo á voz herida la necesidad y enalteciendo á grito pelado la conveniencia y protestando con la mayor seriedad de sus deseos vehementísimos y jamás apagados en favor del lazo que acaban de romper cuando la necesidad, la conveniencia y el deseo habían precisamente recibido la sanción más solemne y concluyente; la sanción del éxito.

Era este un hecho tan incontestable que no podía menos de herir vivamente la inteligencia del pueblo, el cual comprendió con su buen sentido que no realizándose en la vida el absurdo, aquel hecho que lo parecía, era un fenómeno, cuyas causas debían buscarse para extirparlas.

Si los republicanos conocen la necesidad de vivir y

proceder en inteligencia, si todos anhelan vivamente realizarla y todos convienen en el interés común que ha de servir de lazo entre ellos, ¿por qué no se efectúa, ó si se realiza no se hace en condiciones de estabilidad? Esta pregunta, que durante doce años se formulaba constantemente, determinó al romperse la coalición de 1886 un cambio en la dirección de las ideas dentro de los partidos republicanos, en lo referente á cuestión de tan vital importancia.

Antes de convenirse en una fórmula concreta y precisa de coalición, como había sucedido en la de 1886, fué fácil que los unos descargasen sobre los otros las responsabilidades de no llegar á entenderse, á lo que ayudaba mucho la vaguedad con que solía tratarse el asunto en público, contribuyendo también bastante el amor propio inherente á la naturaleza humana y que en las colectividades alcanza proporciones gigantescas; de modo que fué fácil conseguir que unos republicanos, muy deseosos de la coalición y muy convencidos de su necesidad y conveniencia, creyesen de buena fe que la resistían ó la rechazaban los otros, no menos convencidos y deseosos que los demás. Y como todos la deseaban con igual vehemencia y á todos los ánimos se imponía con el mismo imperio la necesidad de realizarla, y como cuando dos quieren y necesitan una cosa no hay razón que explique satisfactoriamente su obstinación en no ponerse de acuerdo, cada grupo republicano juzgaba lógicamente que la dificultad para entenderse nacía de los otros. Pero cuando se formuló

en conclusiones escritas la coalición y fueron conocidas las causas determinantes del rompimiento, cuando hubo datos suficientes para juzgar con más conocimiento de causa, empezó á adquirir caracteres de certidumbre lo que hasta entonces sólo había sido una sospecha, y aunque por de contado no se determinasen individualmente las responsabilidades, se adquirió la evidencia de que las dificultades, las incompatibilidades, los obstáculos, no estaban en las masas republicanas, que jamás dieron una sola nota discordante cuando se trataba de la inteligencia y del acuerdo común, por todos tan preconizados.

Considerada desde este punto de vista, la ruptura de aquella coalición, que por otra parte no bastaba á satisfacer por completo las aspiraciones de los republicanos, ni respondía fielmente al sentido revolucionario de su política, produjo el beneficio de esclarecer punto hasta entonces tan embrollado y oscuro para la generalidad, y como resultado de esto la tendencia á realizar una concordia sincera entre los republicanos, con el propósito de prescindir de los obstáculos, fueran los que fuesen, tendencia que sin concretarse en conclusiones escritas, puede decirse que quedó formulada en el ánimo de la inmensa mayoría de los republicanos en estos términos: «A la coalición con los jefes, si los jefes quieren seguir este movimiento; sin los jefes, si se oponen á él ó le suscitan dificultades.»

En esta decisión, confirmada más tarde por los hechos, resplandecía el levantado propósito de realizar a

toda costa el acto patriótico de la inteligencia republicana, y con ella se caminaba á restablecer en la organización la pureza de los procedimientos democráticos, olvidada, y lo que es peor, contradicha en el largo período de composición y reorganización de los partidos después del triste fracaso de 1873. Venía, efectivamente, falseada la verdadera doctrina democrática por el personalismo que dominaba en los partidos republicanos, sometiéndolos á una verdadera autocracia que ni aun podía justificarse durante los períodos de más dura opresión, en que se hacía indispensable la organización clandestina y, por tanto, una especie de disciplina militar. Más que como ésta, llegó á considerarse la jefatura en los partidos democráticos, incurriendo en un contra sentido monstruoso, como una dignidad vitalicia y hasta hereditaria, como una especie de función sacerdotal, como un pontificado augusto, cuyas definiciones y decisiones debían ser acatadas sin discutir las, sopena de excomunión absoluta, que los jefes sabían fulminar á maravilla contra todo rebelde, con el aplauso de los fieles incondicionales, hoy por fortuna en tan escaso número que casi podrían contarse por los dedos.

Esta desviación incomprensible de los organismos directivos de todos los órdenes, que también se atribuían la jefatura indiscutible como reflejo de la suprema, en los límites de las respectivas jurisdicciones, vino á desnaturalizar de tal suerte el carácter de la organización de los partidos republicanos que más pa-

recían éstos mesnadas de señores feudales que agrupaciones de hombres libres, ligados por las emancipadoras ideas democráticas, imitando el servilismo de los partidos monárquicos y llegando á ser conocidas más que por la característica de la doctrina, por los nombres de los jefes.

Las jefaturas impuestas por las necesidades del momento en situaciones difíciles, convirtiéronse en representaciones de un poder autocrático, que usurpando la autoridad y el poder dentro de los partidos, anuló en ellos toda independencia y toda iniciativa, y de esta manera las relaciones entre los grupos republicanos quedaron reducidas á las relaciones entre los jefes. Si éstos se entendían, aparecían en inteligencia los partidos; si no llegaban á entenderse, desacordes andaban aquellos, acabando por no ser más que un espejo en el que se reflejaban con exacta fidelidad la actitud y las relaciones de los jefes respectivos. Por eso la coalición, que hubiera sido un hecho inmediato confiada á representaciones elegidas expresamente para este fin por la iniciativa de los partidos, tardó tanto en hacerse, todo el tiempo que los jefes necesitaron, no para ponerse de acuerdo sobre los principios comunes, de antemano conocidos y determinados por la opinión general, sino para poner cada uno á cubierto su autoridad y su jefatura; por la misma causa la coalición se pactó desnaturalizando el sentido esencial de la política republicana, inclinándola á la participación en la lucha legal, ó sea á juego de los partidos monárquicos;

por la misma razón aquella inteligencia, que descansando en la voluntad de los republicanos hubiese continuado perfeccionada y robustecida, se rompió inopinadamente, sin motivo bastante: se hizo cuando á los jefes convino, y acabó cuando éstos se cansaron de ella. Pero ya los republicanos no aplaudieron como antes ni se sometieron del todo gustosos á aquella decisión, en la que no habían tenido parte. Lamentaron el hecho y meditaron sobre él, pudiendo señalarse esto como el primer paso en el camino de la emancipación de un yugo no justificado por ninguna necesidad y reñido en absoluto con las ideas y las costumbres democráticas.

El marqués de Santa Marta, que tan activamente y con tanto entusiasmo trabajó primero para que los partidos republicanos, y especialmente el federal, se colocasen en condiciones de coligarse con resultado y después en la aproximación de los mismos, veía con amargura la postración á que la autocracia de los jefes había conducido á las fuerzas democráticas, enervadas por la pasividad ante el enemigo y gastando sus energías en devoradoras luchas intestinas, y con no menos pena la incompatibilidad que poco á poco, pero de una manera enérgica y definitiva se iba marcando entre los generosos anhelos de los partidos y la tardía y enervadora acción de los jefes. No puede el corazón humano prescindir en absoluto de sus afecciones, y para un espíritu tan noble como el del marqués de Santa Marta, debía ser muy doloroso ver defraudada

su confianza en las dotes y aptitudes de hombres que había mirado siempre como los salvadores de su partido; pero ante la evidencia de los hechos no había más remedio que reconocer la verdad, no por desalientos, que nunca ha sentido tratándose de sus convicciones, sino por elevados móviles de delicadeza, y abrigando aún la esperanza de que al reunirse en Asamblea las legítimas representaciones del partido, entrase éste por nuevos rumbos y se encontrase el remedio para los males que preveía de continuar la conducta seguida hasta entonces, hizo una vez más el sacrificio de su iniciativa, sacrificio tanto más estimable cuanto que disponía de su periódico *La República*, arma poderosa que cualquier ambicioso vulgar hubiese utilizado en provecho de sus egoismos, y que él consagró generosamente á procurar el restablecimiento de la armonía, que empezaba á turbarse por las causas mencionadas, entre el partido y la jefatura. A esto obedeció lo que, equivocadamente, pudiera interpretarse como relativo apartamiento de la política activa durante el breve período comprendido desde la ruptura de la coalición hasta el año siguiente, apartamiento que no fué real sino en algunos meses, por una causa bien dolorosa, por la prematura muerte de su adorada hija Enriqueta, joven angelical en la que el cielo había parecido complacerse adornándola con todas las cualidades y virtudes que pueden acercar á la perfección á un sér humano. Verdadero encanto y alegría del hogar, al desaparecer del mundo la hija

menor del marqués de Santa Marta, llevóse consigo cuanto podía hacer grata la vida á su padre, siendo preciso que éste desplegara las indomables energías de su espíritu para sobreponerse á su acerbo cuanto legítimo dolor y no realizase el propósito, concebido en los primeros instantes de su acerbísima pena, de retirarse completamente á la vida del hogar, consagrándose en absoluto á la memoria del ser adorado, perdido en la flor de la juventud, y á consecuencia de un acto que, poniendo una vez más en relieve la hermosura de su angelical corazón, hacía doblemente sensible aquella inmensa desgracia.

Habiendo enfermado gravemente una nieta del marqués de Santa Marta, atacada por la difteria, esa terrible dolencia que tantos estragos causa entre la infancia y ante la cual se estrellan todos los recursos científicos, la jóven Enriqueta se consagró al cuidado de su sobrina, á la que quería entrañablemente, asistiéndola con el amor y el desvelo de una madre cariñosa. No hubo consideraciones ni súplicas que lograsen separar á la adorable Enriqueta del lecho en que la tierna enferma luchaba, desde que cayó en él, con la muerte. Serena, con la serenidad con que los ángeles custodios deben velar la vida de sus protegidos, no bastó á separarla del lado de su moribunda sobrina la consideración del riesgo que corrian su salud y su existencia; antes al contrario, para economizar sufrimientos á la tierna criatura, convirtió en lecho su virginal regazo, creyendo que á su contacto hallarían alivio los dolores supre-

mos de la agonía. En sus brazos exhaló la enferma su último aliento, y solo abandonó el cadáver para caer ella á su vez herida de muerte por el contagio de la traidora enfermedad que se cebó en aquella florida existencia, como en venganza de haberle disputado con tanto tesón la tierna víctima á quien fué después á hacer compañía.

Con tan triste motivo se pusieron de manifiesto las grandes y merecidas simpatías que inspiraba el Marqués á los republicanos españoles, teniendo el periódico *La República* que consagrar diariamente y durante algunos meses gran espacio de sus columnas para hacer públicos los testimonios de afectos al Marqués que de todas partes enviaban individuos, comités, juntas y corporaciones de los partidos republicanos, y en especial de los federales. Nada menos se necesitaba para confortar el ánimo del marqués de Santa Marta, amargado por el mayor infortunio que puede afligir á un padre cariñoso.

Aquella manifestación unánime de consideración y cariño, se repitió al mostrarse en público el marqués de Santa Marta, con motivo del regreso del viaje del Sr. Pí á la Exposición de Barcelona en Septiembre de 1888. Acompañaba el Sr. Pí al marqués de Santa Marta en el coche de éste, y al paso de la comitiva por las calles de Madrid, desde la estación de Atocha, fué una verdadera marcha triunfal entre ruidosas y no interrumpidas ovaciones, en que á las aclamaciones por la República, se unían los *vivas al Marqués demó-*

crata; adquiriendo tales proporciones el entusiasmo de la muchedumbre, que hizo temer á las autoridades monárquicas una grave alteración del orden público.

Pocos días después debía reunirse en Madrid la Asamblea del partido federal, convocada para el 1.º de Octubre de 1888. Se llegaba por fin, al cabo de más de cinco años de interregno, fecundos en acontecimientos de importancia para el partido federal, al instante anhelado por el Marqués, quien, confiado en las iniciativas de aquella representación, abrigaba el íntimo convencimiento de que la Asamblea abriría nuevos caminos á las legítimas esperanzas revolucionarias, hasta entonces defraudadas ó por lo menos no satisfechas en la proporción que merecían los grandes entusiasmos del partido más popular entre los republicanos.





CAPÍTULO XXX

Asociación benéfica para socorro de emigrados y presos republicanos.—Causas que determinaron su creación.—Proyectos del marqués de Santa Marta en este sentido.—Su intervención en la Junta benéfica.—Sacrificios que le imponía.—Pensamiento y bases de la Asociación.—Éxito favorable de la misma, debido en gran parte á la gestión del marqués de Santa Marta.—Su favorable influencia para la coalición republicana.—Sus resultados.



ANTES de tratar con la detención que merecen los trabajos de la Asamblea federal de 1888 y las consecuencias que de ellos se derivaron, hechos todos de gran importancia en la historia de los partidos republicanos, debemos hacer la debida mención de dos hechos no menos importantes en que intervino como factor principal el marqués de Santa Marta. Son estos hechos, la «Asociación benéfica,» creada para el socorro de los presos y emigrados políticos republicanos á consecuencia de las insurrecciones anteriores y de la del 19 de Septiembre de 1886 y el ejercicio de la *Acción popular* en la famosa causa de la calle de Fuencarral, acontecimientos que por su importancia y trascendencia merecen cada uno de por sí capítulo separado.

No eran pocos los republicanos que por consecuencia de sucesos anteriores al levantamiento de 1886, arrastraban en el extranjero la amarga y difícil vida de la emigración, pero después del 19 de Septiembre aumentó el número de emigrados y presos en proporciones tan extraordinarias, que el atender al auxilio de ellos exigía sacrificios incalculables á las pocas personas de posición desahogada que podían hacer desembolsos pecuniarios entre los partidos republicanos. Venían haciéndolos, cada cual en la medida de sus fuerzas, de mucho tiempo atrás, pues, desgraciadamente, desde el atentado del 3 de Enero, nunca faltaron en nuestras filas infortunios que pusieran á prueba el generoso desprendimiento de los correligionarios pudientes y los nobles sentimientos de los que vivían en la medianía ó en la pobreza. Pero acumuladas á estas necesidades las de los proscriptos y encarcelados en masa después de aquella fecha memorable, que dejaban tras de sí gran número de familias en la miseria ó en muy precaria situación, y á las que no podían abandonar á su triste suerte los partidos por cuyo triunfo se habían sacrificado desinteresadamente los jefes de ellas, todos los esfuerzos individuales resultaban insuficientes para acudir en auxilio de tantos desgraciados. Siendo difícil de suyo la situación, lo era más por la penuria creada aun á los más pudientes por el continuado esfuerzo durante el largo período de desgracia, en favor de los muchos correligionarios necesitados de auxilio por unas ó por otras causas.

La coyuntura era propicia para realizar un proyecto de suma trascendencia, acariciado tiempo hacía por el marqués de Santa Marta, quien preocupado constantemente con el interés y el bienestar de los defensores de la República, consideraba necesario, viendo en ello un testimonio grandioso de la fraternidad y á la vez de la pujanza de los partidos republicanos, la formación de un fondo común, al que todos contribuyeran sin esfuerzo ni sacrificio, destinado exclusivamente á aliviar la situación de los que por su constancia en la defensa de la idea republicana ó por sus actos en favor del triunfo hubieran perdido su libertad ó sus intereses, y para el sostén de las familias de los que por la República hubiesen arriesgado su existencia, y cuyo amparo era punto de honor y deber indeclinable para cuantos profesaran la fe republicana. Calculaba el marqués de Santa Marta que una cuota mínima mensual por parte de cada individuo, el importe de cualquiera insignificante privación al cabo de treinta días, acumulada al fondo común por todos los republicanos españoles, constituiría una cantidad sobrada para los benéficos fines indicados, y quedaría un sobrante, aumentado de mes en mes, para acudir á otra clase de necesidades. Abrigaba la seguridad en el grandioso éxito de semejante proyecto, contando con el gran número de republicanos que hay en España y con el ejemplo de otras suscripciones en países como la gran República norteamericana, donde han llegado á reunirse cantidades fabulosas, contribuyendo cada individua-

lidad con la cuota máxima de cinco céntimos. Abonaba además este proyecto el gran prestigio y la inmensa fuerza moral que su realización traería para los partidos republicanos, sin contar la suma de recursos, difíciles de reunir, y cuya falta en determinados instantes es causa de que se malogren esfuerzos y resulten inútiles sacrificios generosos. Pero el temor de que pudiera interpretarse en aquellos momentos como proceder egoísta, nacido del deseo de rehuir sacrificios, contuvo al marqués de Santa Marta y desistió de tomar la iniciativa de tan levantado proyecto por esta razón de delicadeza, prefiriendo reservar para sí, llegado el caso, todo ó la mayor parte del esfuerzo exigido por las circunstancias y las necesidades de sus correligionarios, á que pudieran ponerse en duda sus nobles propósitos.

Mas como lo difícil y grave de la situación no podía ocultarse á nadie y mucho menos á los hombres que tenían la dirección de los partidos, y al mismo tiempo era patente la imposibilidad y la injusticia de imponer á unas cuantas personas, con gravísimo y tal vez irreparable quebranto de sus intereses, una carga que correspondía á todos, llegó á pensarse en la conveniencia de buscar un medio que hiciese práctica y hacedera, sin perjuicio de nadie, esta obligación de los republicanos.

El marqués de Santa Marta tuvo la satisfacción de ver que sus ideas sobre el particular coincidían con las de las personalidades más conspicuas de las agrupaciones republicanas, y sobre todo con las del Sr. Sal-

merón, que trabajó en primer término por la realización del pensamiento, y vió con júbilo que la dirección de éstas aceptaba como único medio salvador en aquellas críticas circunstancias el de acudir al patriotismo y á la generosidad de los correligionarios en condiciones que permitían á todos contribuir á la realización de tan vasto proyecto. No respondía este en absoluto, es cierto, al ideal perseguido por el Marqués, que quería darle carácter permanente y destino menos limitado, pero podía ser base sólida para realizarlo por entero, tal como él lo había concebido y como lo creía conveniente al interés patriótico de asegurar en el porvenir el triunfo de la República. Demasiado comprendía que las grandes ideas no se han realizado nunca en la historia de golpe y sin preparación, y por lo mismo le parecía de gran interés el planteamiento de la Asociación, que limitada por de contado y obedeciendo, por las necesidades del momento, á fines puramente benéficos dentro de la gran comunión democrática, podía ser el precedente de la más vasta asociación con que había soñado.

Unánimes todos en realizar desde luego lo acordado, ya que la situación no admitía dilaciones, lo estuvieron igualmente en nombrar presidente tesorero de la *Asociación benéfica* al marqués de Santa Marta, quien por más que agradeciera tan inequívoca muestra de confianza, hubo de declinar resueltamente ambos cargos, cuyo desempeño le imponía un exceso de trabajo difícilmente compatible con la ocupación ince-

sante reclamada por la gestión de sus intereses, que él ha dirigido siempre personalmente. Pero su resistencia fué inútil: á las fundadas razones, á los legítimos motivos expuestos por él en apoyo de su negativa, se le contestó que la *Asociación benéfica* se fundaba con la condición de que él fuese el depositario de los fondos: si se negaba, se desistía decididamente del proyecto, porque en esta clase de asuntos, decían—y no se equivocaban—lo más esencial para su buen éxito y para su solidez, era una administración formal y severa, y que su nombre y su justificada fama eran la garantía de esto. Ante semejante alternativa vióse obligado á ceder para no malograr por su resistencia la *Asociación*, perjudicando á los que habían de obtener sus beneficios y sacrificando una vez más su personal interés en aras del interés de la causa republicana, aceptó la Tesorería de la *Asociación*, con lo cual acumuló á sus muchos trabajos particulares y políticos el penosísimo de administrar los intereses que de allí en adelante debían constituir algo así como el patrimonio de los partidos republicanos.

A poco más de un mes de ocurrido el movimiento de Septiembre, los periódicos de la coalición publicaron la circular invitando á la suscripción. La publicamos, así como las bases que la seguían, porque en ella aparecen perfectamente determinados su fin y sus alcances.

Decía así:

«Á los republicanos españoles.

El estado de honda perturbación en que el país se encuentra, es causa de la encarnizada lucha entre los partidos que ha arrojado de la patria y priva de la libertad á muchos republicanos, algunos de los cuales viven doblemente afligidos por las privaciones y tristezas propias, y por el desamparo y la miseria en que han dejado á sus familias.

Menor que lo es hoy el número de presos y emigrados, han podido hasta ahora socorrerlos unos cuantos hombres entusiastas y caritativos; pero en tales términos han aumentado los necesitados de auxilio, á consecuencia de sucesos recientes, que ya ni es posible ni justo que unos pocos lleven sobre sus hombros la carga que debe pesar sobre todos los republicanos. Ni es decoroso para las masas que las personas que las dirigen sean las que costeen los gastos, adquiriendo por tal medio, si no el derecho de presidirlas, las presidencias de hecho; hasta el extremo de no poder aceptar muchas veces los primeros puestos en la organización local de los partidos las personas de modesta fortuna. Si han de ser fecundos y fructuosos los principios democráticos, es indispensable que se preparen y eduquen las clases populares, tanto en la gestión de los negocios comunes, como en el sostenimiento de los gastos que ocasionen los actos que los partidos realicen; es necesario que sepan prácticamente lo que vale

y cuesta la restauración de la República; es forzoso que la acción y la responsabilidad residan en todos, si todos hemos de dignificarnos. Ni necesitan, ni deben vivir las naciones de los recursos ni de la limosna de algunos, ni siquiera de la limosna de sus hijos, sino del trabajo de todos los ciudadanos; y los partidos democráticos no pueden admitir, como norma, lo que ni sería correcto ni digno en la vida de la nación que aspiran á gobernar y dirigir. Lo equitativo es que los republicanos, sin excepción, socorran á los correligionarios, que por ser los más animosos sufren las consecuencias de la suerte adversa. Que debemos mirar como sagrado deber el no abandonar en la desgracia ni negar nuestra ayuda á quienes, en aras de los ideales democráticos, no vacilaron en sacrificar generosamente su libertad ni en poner en gravísimo riesgo sus vidas.

Lo que no sería posible, ni justo, ni digno, que hicieran unas cuantas personas, lo conseguiremos todos los republicanos sin grandes esfuerzos, sin gravosos y violentos desembolsos. En los países que van á la cabeza de la civilización, nada se hace costoso ni insuperable á los partidos populares: vencen las dificultades económicas por la difusión de las suscripciones. Pedimos á los republicanos, y aun á los que profesan ideas liberales, que contribuyan á la suscripción que abrimos, cada uno con una cantidad, por pequeña que sea. Exiguo es el jornal de los obreros de la industria y de los braceros del campo; pero la pequeñez de la

suma que solicitamos para el socorro de nuestros correligionarios, permite al más pobre unirse en comunión contributiva con los que ya lo está y vive en comunión de ideas. Lo que mucho vale mucho cuesta, y grandes esfuerzos exige para su realización; y tratándose de la causa republicana y de auxiliar á los que padecen por la democracia, no parecerá á nadie excesiva la pretensión de esta Junta, de que los republicanos se priven al mes de beber una COPA DE VINO ó de fumar un CIGARRO cada semana para socorrer con DIEZ CÉNTIMOS mensuales á los correligionarios que sufren los rigores de las leyes vigentes.

Si contribuye la masa republicana en su totalidad, podrá reunirse la cantidad suficiente para cubrir las atenciones necesarias de nuestros amigos desgraciados; el aumento de donantes superará los rendimientos de los cuantiosos donativos que hasta ahora se recaudaban. Aspira esta Junta á reunir en un haz, para fin tan benéfico, á los republicanos que se hallan ya unidos en una misma aspiración política; quisiera que no faltara ni uno solo; que esta suscripción fuese el símbolo de la más estrecha y sincera coalición.

Las circunstancias son apremiantes. Es indispensable alimentar á nuestros correligionarios presos y emigrados y proporcionarles abrigo. La perentoriedad de estas necesidades orgánicas exige que no desperdiciemos un solo día. No basta ser caritativo, es necesario serlo á tiempo. Del mismo modo que rogamus á todos los republicanos que acudan en auxilio de sus correli-

gionarios necesitados con una cantidad grande ó pequeña, según lo permita la posición de cada uno, rogamus y excitamos el celo y la actividad de los comités provinciales y locales y de los periódicos republicanos para que, sin perder momento, organicen y promuevan suscripciones entre los correligionarios, y no descansen en el trabajo de allegar recursos.

Los fondos recaudados deben girarse al Tesorero de esta Junta, señor marqués de Santa Marta, San Bernardo, 78.

Madrid 29 de Octubre de 1886.—*El Presidente*, LAUREANO FIGUEROLA.—*El Tesorero*, EL MARQUÉS DE SANTA MARTA.—*El Contador*, JULIO VIZCARRONDO.—MANUEL PEDREGAL Y CAÑEDO.—JOSÉ CRISTÓBAL SORNÍ.—FERNANDO ROMERO GIL SANZ.—TELESFORO OJEA, *Secretario*.

A continuación se publican las siguientes

“Bases de la Asociación Benéfica

para el socorro de presos y emigrados políticos republicanos.

1.^a Son miembros de esta Asociación todos los que se suscriban en ella, contribuyendo con una cantidad mensual, por pequeña que sea.

2.^a El objeto de esta Asociación es reunir medios para atender en lo posible á las necesidades de los emigrados y presos republicanos por motivos políticos.

3.^a Los fondos que se recauden para este fin, no podrán, bajo pretexto alguno, dedicarse á otro distinto.

4.^a Todo emigrado que necesite socorro lo solicitará del Presidente de la Junta, manifestando su profesión y estado, el tiempo que lleva de emigración, el punto en que reside, y si recibe ó no auxilio del gobierno del país en que se encuentra.

5.^a Todo preso lo solicitará de la misma manera, expresando su estado y profesión, el hecho causa de su condena y el tiempo que ha de durar ésta.

6.^a Emigrados y presos harán constar si han solicitado indulto ó si no reúnen las circunstancias exigidas para obtenerlo.

7.^a No recibirá socorro alguno el que, pudiendo solicitar indulto, no lo hiciere en el término de un mes, á contar desde el día que así se le comunique.

8.^a Para organizar la Asociación, recaudar los donativos y administrarlos, se constituye una Junta con residencia en Madrid, compuesta de *siete* vocales, que elegirán de entre ellos un Presidente, un Tesorero, un Contador y un Secretario.»

Por el éxito que alcanzó el pensamiento apenas fué la circular conocida en la península, puede juzgarse de la bondad del proyecto, que no era, como hemos dicho, más que un esbozo del que el marqués de Santa Marta tenía de una gran asociación, encaminada á hacer efectivo, fecundo y eficaz el esfuerzo de todos

los republicanos españoles, unidos por la comunidad de ideas, al mismo tiempo que por la comunidad de intereses, de manera que cada republicano tuviese una participación real y práctica en la obra común á todos exigida por la salud de la patria, y de modo también que en esa obra fuese de todos el sacrificio en proporciones justas.

Las suscripciones y los recursos llegaron de todas partes, y al ver las importantes sumas que llegaban á formarse por la acumulación de pequeñas suscripciones, que por punto general fluctuaban entre *una peseta y diez céntimos*, se formaba idea del inmenso poder de la Asociación para todos los fines humanos. Efectivamente, lo que para unos cuantos hubiera representado un sacrificio enorme, sin llegar por eso á ser suficiente para las necesidades que se trataba de remediar, se vió reunido en poco tiempo casi sin esfuerzo y por de contado sin verdadero sacrificio de interés para ninguno de los asociados. Los más optimistas dudaban de que llegase la suscripción á veinte mil pesetas, y sin embargo, se reunieron sobre veinticinco mil duros, con los que se enjugaron muchas lágrimas y se aliviaron grandes desgracias.

El marqués de Santa Marta correspondió dignamente, como él sabe corresponder en estos empeños de honor y seriedad, con la misma escrupulosidad que le ha distinguido siempre en cuestión de intereses ajenos. Organizó á su costa y dentro de sus oficinas particulares las de la *Asociación benéfica*, repartiendo

el tiempo entre el despacho de sus asuntos propios y la fatigosa tarea que le imponía la Administración de aquellos fondos destinados al socorro de los emigrados y presos y de sus familias, y que le absorbía la mayor parte del tiempo, llegando muchas veces á descuidar sus asuntos particulares de mayor interés, por su propósito, que no dejó de realizarse ni en un solo momento de tener al día los de la *Asociación benéfica*, llevando tan escrupulosamente la contabilidad, que en cualquier momento podía enterarse quien quisiera del estado de la Caja y hacer el balance, pues no satisfecho el Marqués con la publicación casi diaria de las cuentas en el periódico *La República*, tenía constantemente á disposición de todos los asociados los libros, los documentos y los comprobantes de todos los asientos, según se hizo saber desde el primer día. De modo que durante las horas ordinarias de las oficinas del Marqués, estaban estas abiertas, no solo para la entrega de suscripciones, sino para la fiscalización de las cuentas. Claro es que nadie hizo uso de este derecho, porque el nombre y el crédito del marqués de Santa Marta era segura garantía del sagrado depósito confiado á su honor y á su formalidad.

Puede formarse idea del ímprobo trabajo que representaba la administración de aquellos fondos, con solo tener presente que cada suscriptor, aun el que lo era por *diez céntimos*, tenía su cuenta particular, de igual modo que cada uno de los socorridos: calcúlese cual no sería el cúmulo de asientos que representaban los

centenares de donativos que á diario publicaba *La República* y el trabajo para hacer diariamente el balance, como se realizó constantemente, á fin de estar en disposición de rendir cuentas en cualquier momento en que se considerase conveniente ó necesario.

Pero el cargo llevaba consigo dificultades de otro género, que sólo es dable soportar á un patriotismo tan acrisolado como el del marqués de Santa Marta. Por esa propensión natural en todo hombre á creerse con derecho al apoyo incondicional de los demás y por la impaciencia bien excusable de la necesidad apremiante, el Marqués se veía continuamente solicitado con peticiones de socorros, que él por sí no podía acordar independientemente de sus compañeros de Junta, ni entregar, aún después de acordados, sin libramiento del presidente, por personas cuya situación no estaba comprendida en las condiciones de las bases de la *Asociación benéfica*; y puestos de este modo á prueba sus sentimientos, no estando autorizado para aplicar los fondos de la *Asociación* á fines distintos de los allí determinados precisamente, ni pudiendo por otra parte dejar que abandonasen su casa sin consuelo republicanos en quienes se cebaba la desgracia, tenía muchas veces que suplir con su socorro particular la deficiencia de las bases de la *Asociación*, cuyo exclusivo fin era el socorro de los emigrados y presos por causas políticas y de las familias de estos. De esta manera, su respetabilidad, que le constituía en alma de la benéfica *Asociación*, y su patriotismo, obli-

gándole á aceptar cargo tan delicado, vinieron á imponerle, sobre el trabajo excesivo de la administración, nuevas ocasiones de demostrar su largueza con los muchos que sin derecho al socorro de la *Benéfica* lo reclamaban en la creencia de que estaban comprendidos en sus estatutos. De suerte, que lejos de encontrar, como los demás, alivio en la carga contributiva, tuvo que aumentar sus sacrificios, todo lo cual no fué obstáculo para que continuase soportándola, y subsistiese por él, aun después de rota la coalición, la comunidad de sentimientos entre los republicanos cuando ya cada partido había recobrado su independencia y luchaba cada uno por sus doctrinas contra los demás.

Puede decirse que, gracias al marqués de Santa Marta, no llegó á ser completa la ruptura entre los partidos republicanos, á los cuales quedaba aquel vínculo que les unía en la comunidad de sentimientos; hecho que por sí solo demuestra la bondad de la idea y convence de que si la *Asociación* se hubiera establecido sobre las bases más amplias y generales en que el Marqués quería verla establecida, la ruptura de la coalición hubiera sido poco menos que imposible. Hombre práctico, el marqués de Santa Marta sabía demasiado cuan fuerte sería el vínculo de los intereses comunes, de que no se prescinde tan fácilmente como se puede hacer en el terreno de las puras ideas, pudiendo oponerse á éstas los principios diferenciales de cada agrupación. Por eso aspiraba á que los republi-

canos, unidos por ciertas ideas comunes, lo estuviesen también por los intereses para hacer indestructible y fructuosa su inteligencia. Si no sucedió así no fué por culpa suya, toda vez que él llevó su esfuerzo para lograrlo hasta los últimos límites del sacrificio personal por todos conceptos.

De cualquier modo, su cooperación en aquella obra es un título perdurable á la gratitud de los republicanos, y aun puede asegurarse, contra lo que tal vez acusen las apariencias, casi siempre engañosas, que ha sido de suma importancia para el porvenir de la causa republicana, como lo fué para los intereses de la justicia el ejercicio de la acción popular en la causa por el asesinato de doña Luciana Borcino, que por su importancia y trascendencia merece detenido y especial examen.





CAPITULO XXXI

El marqués de Santa Marta se pone al frente del movimiento de opinión determinado por la acción popular.—Entrega la fianza exigida á la acción popular por los Tribunales.—Alta significación y trascendencia de esta campaña.—Su influencia en la administración de justicia. — Consecuencias beneficiosas de la iniciativa del Marqués en esta cuestión.

La gestión del marqués de Santa Marta al frente de la *Asociación benéfica para el socorro de presos y emigrados* había sido de inmensa utilidad para los intereses de la democracia, no sólo por demostrar de un modo patente que era posible y aun fácil reunir grandes sumas con el modesto apoyo de todos, sin que nadie en particular hiciera cuantiosos sacrificios, sino también, y muy principalmente, por el gran desarrollo que podía darse á la idea de la asociación económica de los republicanos para otros fines. Si á pesar de las azarasas circunstancias porque se atravesaba entonces, cuando la coalición se había roto inopinadamente y la discordia sucedía en todas partes á la inteligencia cordial que el pueblo deseaba, se había podido reunir una suma que casi llegaba á veinticinco mil

duros, era fácil calcular que cabría reunir en poco tiempo algunos millones si se ampliaba más la idea, sacándola de los modestos límites de un empeño puramente benéfico, toda vez que los republicanos contaban con absolutas garantías en el punto más delicado y difícil, en el de la escrupulosa y severa gestión de los fondos. Desgraciadamente los acontecimientos se atropellaron y la actitud que por el dictado de su honrada conciencia, hubo de adoptar más tarde el marqués de Santa Marta, fué causa de que fija su atención en más vastas empresas políticas, hubiera de renunciar al pensamiento de fomentar una nueva suscripción de los republicanos, que sirviera de base á la creación de una hacienda ó patrimonio de todo el partido.

Bien pronto, sin embargo, se ofreció ocasión al marqués de Santa Marta para demostrar que estaba al lado de todas las ideas generosas, ya nacieran éstas en el seno de su partido ó ya fueran alentadas por esas corrientes avasalladoras de la opinión pública, que son la clave de todas las grandes empresas de nuestros tiempos.

A mediados de 1888 habíase cometido en Madrid un crimen terrible, que por las misteriosas circunstancias que lo rodeaban y por las personas sobre que recaían sospechas, excitó vivamente los ánimos y tuvo absorta la atención de España entera durante largos meses. Nos referimos al asesinato de doña Luciana Borcino, á quien se creyó víctima de un hijo desnaturalizado, que á la sazón estaba cumpliendo condena en

la cárcel y que según se dijo por entonces había amenazado de muerte más de una vez y aun herido á su madre, por negarle ésta dinero para sus vicios.

Justo es decir que no se confirmaron en absoluto al menos tan horribles suposiciones, pero la opinión se alarmó de una manera extraordinaria porque concurrían en aquel delito caracteres muy singulares. En primer lugar se supo con entera evidencia que el hijo de la asesinada, José Vázquez Varela, salía muchas veces de la Cárcel Modelo y concurría á fiestas y diversiones. Este hecho, nada extraño si se tiene en cuenta la mala organización de nuestros establecimientos penales, vino á coincidir con declaraciones de Higinia Balaguer, criada de la víctima, y que manifestó que su señorito, José Vázquez Varela, era quien había dado muerte á doña Luciana. La acusación era monstruosa y repetimos que no se demostró luego, pues en sucesivas declaraciones desmintió la criada cuanto había afirmado en las primeras; mas lo cierto es que en los primeros meses la dió crédito casi todo el mundo, como lo prueba el hecho de que el Sr. Rojo Arias, que fué el abogado del presunto reo José Vázquez, se negó en un principio á aceptar su defensa por creer, como la generalidad de las gentes, que era el autor de aquel espantoso atentado, no sin precedente, por desgracia, en la triste historia de la criminalidad.

De todos modos, la cuestión tomó bien pronto un carácter más ámplio que el que pudiera haber tenido desde el mero punto de vista de un delito ruidoso. La

prensa empezó á consagrar atención al hecho por los vicios que revelaban en nuestro sistema penitenciario; y como se habló, quizá sin fundamento, de visitas de un elevado personaje al director de la Cárcel Modelo, con el propósito de que se apagase lo antes posible la sospecha acerca de las salidas del preso y se creyó, por otra parte, que el Juzgado instructor, lejos de seguir la pista verdadera, embrollaba por torpeza ó tenacidad una cuestión que parecía clara, el asunto adquirió proporciones enormes. Empezaron á combatirse las rutinas y los abusos de la justicia histórica, se adujeron datos de importancia, y en resumen, se hizo, por primera vez en España, una crítica despiadada de los procedimientos judiciales, que así en lo civil, como en lo criminal y en lo canónico, dejan en nuestro país hartos que desear. Nuestras leyes de procedimientos son de fecha reciente, por más que en materia civil ocurra la extraña contradicción de ser anteriores en ocho años á la ley sustantiva, pero no está aquí el más grave vicio de la administración de justicia, sino en la preponderancia que en ella tienen los agentes inferiores de la curia, que en muchas ocasiones llevan á su arbitrio la gestión de los negocios, redactan á su gusto providencias, autos y resoluciones definitivas, y en la práctica hacen el papel de verdaderos magistrados. El mal se agrava en aquellos tribunales en que es grande la afluencia de negocios, pues se dan casos en que el juez, no pudiendo atender todos los asuntos, concluye por acomodarse á esa especie de constitu-

ción interna de la curia, en virtud de la cual los escribanos de actuaciones hacen y deshacen, presentando después sus decisiones, razonadas ó sin razonar al superior que las firma, sin poder enterarse de las mismas con más datos que los que el actuario le proporcione. Los actuarios á su vez no pueden desempeñar por sí solos tan ardua tarea y dejan buena parte de la misma á sus oficiales y escribientes, que sin los necesarios conocimientos, sin la circunspección y modestia propia de los hombres estudiosos, y no siempre con intenciones loables, vienen á convertirse de agentes casi mecánicos, en señores de haciendas y de honras y libertades, por no decir de vidas.

En resumen, lo que ha dado en llamarse *la curia* está hoy, salvo las excepciones que es de rigor se hagan al tratar de estos asuntos, en las mismas condiciones en que la presentaban nuestros escritores clásicos, sobre todo el inimitable Quevedo, que con tanto donaire describía las rapiñas y la pasmosa voracidad de escribanos, escribientes y alguaciles. La literatura se había ya apoderado de estos tipos, menos interesantes que los héroes de las leyendas: el vulgo, representante del común sentir, ha mostrado siempre verdadero terror hacia la gente de justicia, frase que en su acepción verdadera se refiere solo á los agentes subalternos de la curia. En la práctica los jueces y magistrados suelen ser los menos responsables de ese desbarajuste, lo más impotentes para remediarlo y los que ningún provecho sacan de los abusos oficinescos,

manantial inagotable de amarguras y ruinas para los que pleitean, y de ganancias ilegítimas para los aprendices de actuario. En general puede afirmarse que los jueces apenas ganan la mitad ó la tercera parte de la cantidad que reúnen fácilmente por sus derechos los escribanos de actuaciones, y fácil es comprender la situación extraña en que se halla un superior jerárquico cuando los funcionarios á sus órdenes perciben mayor remuneración que él por sus servicios. No hace mucho tiempo se trató de poner remedio á este mal y á otros muchos de que adolece la administración de justicia, fijando un sueldo para los escribanos y sus oficiales y suprimiendo los derechos que hoy pagan los pleitistas, y que dan lugar á que en la mayor parte de los negocios se practiquen multitud de diligencias enteramente inútiles; el clamoreo que promovieron los perjudicados con este proyecto fué tal, que nada se hizo y todo sigue como antes.

Otro de los achaques de que adolece la justicia tradicional es su resistencia á seguir las corrientes de la opinión pública y su empeño de aparecer como una corporación sagrada, formada por iniciados que guardan fórmulas y secretos impenetrables para la curiosidad de las muchedumbres. Durante la defectuosa instrucción del sumario formado con motivo del asesinato de doña Luciana Borcino, se observó como nunca esa propensión de los jueces y de los más ínfimos dependientes de la curia á mirar al común de las gentes como á profanos que no tienen derecho alguno á inmiscuirse

en los misterios sacerdotales. En nuestra época de discusión y crítica, sientan muy mal esas pretensiones exclusivistas, semejantes á las de la clase patricia de la antigua Roma, cuando se resistía á consentir se escribiesen las leyes á fin de conservar el monopolio del derecho. Este fué uno de los puntos más interesantes que sirvió de tema á las discusiones periodísticas en el año largo en que la opinión pública estuvo interesada en las peripecias del proceso á que dió lugar el crimen de la calle de Fuencarral. Se veía por una parte que los jueces iban poco menos que á ciegas en la instrucción del sumario, y por otra que afectaban menospreciar y desdeñar la intervención de la prensa y aun miraban como una intromisión intolerable las activas gestiones de los redactores de varios periódicos para aclarar los hechos y aportar al sumario nuevos datos. El divorcio entre la justicia oficial y la opinión se acentuó mucho; hubo periódicos que se colocaron al lado de los jueces y defendieron sus procedimientos, fundándose en que era necesario conservar los prestigios de los tribunales, mientras otros sostenían que debían salvarse ante todo los fueros de la justicia absoluta y hacer que resplandeciera la verdad, defendiérala quien quisiera. Vino de aquí una división de la prensa en *sensata* é *insensata*; calificativo este último que aplicaron á los periódicos que censuraban los procedimientos de la justicia oficial los defensores incondicionales de ésta, y que fué aceptado en aquellas circunstancias como título de honor. Esta división llegó á ser bastante en-

conada y persistió durante todo el tiempo que duró la instrucción y vista de aquella causa; es decir, más de un año. Figuraban entre los llamados *sensatos* principalmente *El Imparcial*, *El Día*, *La Correspondencia* y *El Globo*; y entre los tildados de *insensatos* *El Liberal*, *El Resumen*, *El País*, *La Justicia*, *El Motín* y *La República*.

El marqués de Santa Marta había figurado desde los primeros momentos en la tendencia avanzada, persuadido como está de que el orden judicial necesita reformas profundas que le constituyan en un verdadero poder del Estado, en directo contacto con la opinión pública y que alcance el necesario prestigio, no por vanas fórmulas, sino por su alta representación y por la eficacia de su acción social. Profundo conocedor no solo de los problemas de la ciencia del Derecho, sino de los procedimientos judiciales, cuyas imperfecciones, antiguallas y lentitudes le han ocasionado más de una vez serios perjuicios en sus vastos negocios particulares, dotado además de la necesaria firmeza para hacer frente á instituciones poderosas cuando se siente alentado por la razón y la justicia, como había sabido mostrar veinte años antes en su memorable lucha contra el Banco de España, vió desde luego que se preparaba un combate rudo en el que, fuesen cualesquiera los primeros resultados, siempre saldría ganando la causa de la justicia absoluta. Nunca había comprendido la razón que podía existir para que en un siglo de discusión y libre examen apareciesen en la práctica

como inviolables y fuera de los embates de la crítica los procedimientos y sentencias de los tribunales, y que en una época acostumbrada á residenciar y poner en tela de juicio así lo humano como lo divino, si aparece en pugna con los dictados de la ciencia y de la razón, se estimase punto menos que como un sacrilegio discutir la administración de justicia. Como el crimen de la calle de Fuencarral había dado margen á esas discusiones, comprendió desde luego el Marqués que esto serviría de precedente útil para la mejora de nuestras costumbres públicas y apoyó con todas sus fuerzas el movimiento iniciado por los periódicos.

El juzgado instructor oponía cada vez más resistencia á la intervención oficiosa de la prensa en el sumario: llovían denuncias sobre los diarios más importantes, y entonces nació entre estos la idea de mostrarse parte en la causa ejercitando la acción popular para el descubrimiento de los autores del crimen. Al efecto, el 9 de Agosto de 1888 se celebró en la redacción de *El Liberal* una reunión á que concurrieron representantes de más de cincuenta periódicos de todos los partidos; los había carlistas, conservadores, independientes, fusionistas y republicanos, pero dominaba esta última tendencia. Acordóse por los reunidos el ejercicio de la acción popular, pero era una dificultad grave la cuestión de la fianza que habían de exigir los tribunales y que seguramente habria de ser crecida. Para solventar este inconveniente se habló ya de una sus-

cripción pública, ya de cuotas puestas á prorrata por los periódicos, y como no se llegaba á un acuerdo, el representante del diario *La República* hubo de manifestar que el marqués de Santa Marta no tenía inconveniente en prestar la fianza que fijasen los tribunales, cualquiera que fuese su cuantía. Este generoso ofrecimiento fué acogido con entusiasmo por todos y orilló muchos inconvenientes: entonces se procedió á la elección de un Comité ejecutivo y fueron designados para formarle los directores de *La Iberia*, *El Resumen* y *La República*. Tratóse enseguida de la designación de letrado y circularon muchos nombres, Salmerón, Pí, Romero Girón y aun Romero Robledo; hasta que el director de *El Motín*, D. José Nakens, con gran oportunidad y hábil intención hizo notar que nadie mejor para el caso que D. Francisco Silvela, el hombre del *sentido jurídico*, que por aquellos días había fulminado terribles cargos contra la usual administración de justicia, y esta propuesta fué aceptada, aunque muy á disgusto de los fusionistas y reformistas. Además, varios periódicos de los adheridos al ejercicio de la acción popular, designaron letrados que auxiliasen al principal en su trabajo.

El Sr. Silvela había sometido á consulta de su jefe, D. Antonio Cánovas, la aceptación del encargo de la acción popular, y como los representantes de la prensa fusionista habían visto con malos ojos aquella designación, que era sin duda la más acertada, amenazaron con retirarse de la acción si no se relevaba del cargo

al Sr. Silvela, y así se acordó. Cometióse con esto un error grave, aparte de que la retirada de los fusionistas y reformistas más bien hubiera despejado que embarazado el camino de los ejercitantes de la acción popular. Dió la coincidencia de que el telegrama en que se relevaba al Sr. Silvela de su cargo, se cruzó con otro en que este señor lo aceptaba agradecido, y una hora después se recibió otro, muy atento por cierto, en que el Sr. Silvela daba explicaciones de su conducta: reconocía que era justa la conducta de la prensa asociada y se daba por relevado, considerando como la mayor de las honras que había recibido en su carrera su anterior designación. Así quedó privada la acción popular, merced á la intransigencia de los periódicos fusionistas del concurso, muy valioso en aquella ocasión, del Sr. Silvela, y desde entonces perdió proporciones, y sobre todo intención política el asunto; pues aun cuando se solicitó el concurso de letrados de fama, entre ellos Salmerón, Pí, Azcárate, Romero Girón, Gamazo, Maura y otros, fueron todos excusándose. Quedaron como abogados de la acción popular D. Joaquín Ruiz Jiménez y D. Antonio Ballesteros, que realizaron su cometido con actividad é inteligencia.

Como fianza para el ejercicio de la acción popular se pidió por los tribunales la cantidad de quince mil pesetas, que el marqués de Santa Marta entregó inmediatamente. Se inició una suscripción popular que estuvo abierta muchos meses, pero no obstante la an-

siedad con que la opinión pública acogía el asunto, no se recaudaron más que ocho mil y pico de pesetas.

El marqués de Santa Marta fué nombrado por unanimidad depositario de todas las cantidades que se recaudasen, pero en realidad no se le hizo entrega definitiva de suma alguna, pues aunque *El Liberal*, *La Correspondencia Militar*, *La República* y algún otro periódico entregaron al Marqués sus recaudaciones, que ascendían en total á unas tres mil ochocientas pesetas, el marqués de Santa Marta entregó á mediados de 1889 y bajo recibo, cuatro mil pesetas al director de *El Liberal*, que se las pidió para investigaciones y gastos de la causa. Los demás periódicos que habían abierto suscripciones, no las entregaron al Marqués, sin duda porque las aplicaron cada uno de por sí á esclarecer hechos oscuros del proceso; de suerte, que el marqués de Santa Marta no fué realmente depositario de los fondos recaudados para cubrir los gastos de la acción popular.

De todos modos conviene hacer notar, por lo muy elocuentemente que revela la falta de verdaderas costumbres cívicas en este país, que á pesar de la inmensa expectación motivada por el crimen de la calle de Fuencarral y la importancia del problema planteado, esto es, que la justicia oficial se compenetrase con la opinión pública y perdiese el carácter de una raza aparte, entrando en las corrientes modernas, á pesar del interés vivísimo que todos los ciudadanos

tienen en que se haga luz en los procedimientos judiciales, si no hubiera sido por el generoso desprendimiento del marqués de Santa Marta, no habría sido posible, según todas las probabilidades, entablar la acción popular. La suscripción pública cubrió poco más de la mitad de la fianza exigida y su producto se aplicó á necesidades independientes de esa fianza; de modo que el Marqués perdió toda la cantidad que pidieron los Tribunales, y habría perdido diez veces más con gusto, á condición de que se realizase el fin primordial á que se tendía; esto es, á criticar inexorablemente las defectuosas condiciones de la administración judicial y á conseguir por esto medio la pronta desaparición de sus rutinas y abusos, introduciendo una gran publicidad en la esfera de la justicia y garantizando así eficazmente los intereses, la honra y la vida de los ciudadanos.

Como el resultado inmediato de la cuestión concreta, planteada para la averiguación de los verdaderos autores del crimen de la calle de Fuencarral, era sólo un detalle en esta campaña, no hay para qué detallar las peripecias que hubo en el ejercicio de la acción popular. La justicia histórica hizo ruda oposición á los ejercitantes, pero en resumen vino á quedar hondamente quebrantada, y hoy empiezan ya á tocarse los resultados de aquel brioso arranque de una parte de la prensa, de aquella fecunda iniciativa de que fué el alma el marqués de Santa Marta y que ha traído consecuencias altamente moralizadoras. Desde entonces

la opinión se fija mucho más que antes en las decisiones de los tribunales y aun en los detalles de la tramitación judicial, la crítica fustiga vigorosamente todo cuanto en este sentido parece irregular é injusto; periódicos de importancia, que en la época de la acción popular condenaban este movimiento, hacen hoy esfuerzos para figurar á la cabeza de esa noble y digna actitud, que entonces calificaban de insensata é irrespetuosa: no sorprende ni se mira ya como inusitado el hecho de ver escribanos y jueces procesados y en la cárcel; el recurso de responsabilidad contra jueces y magistrados irá siendo más frecuente y eficaz de día en día y se irá cegando el abismo que parecía existir entre los que ejercían la justicia oficial y los que á esa justicia estaban sometidos. En estas condiciones, generalizado el concepto del derecho, podrá llegarse, en bien y con ventaja para todos, á la verdadera independencia del poder judicial, y este poder no será un instrumento de gobierno, sino la realización de la necesidad moral más imperiosa que sienten los hombres constituidos en sociedad, la de regirse por principios de justicia igual para todos.

A esta beneficosa transformación, de que hay ya muchos indicios á los seis años de ejercitada por primera vez la acción popular por medio de la prensa, ha contribuido en primer término el marqués de Santa Marta, que consagró gustoso á tan alto fin una suma respetable y mucha perseverancia y energía, y que estaba resuelto á sacrificar cuanto en este sentido hu-

biera podido exigir la justicia histórica. Han de apreciarse estos esfuerzos por las circunstancias en que se hacen, y cuando el Marqués dió la batalla á la justicia histórica, su actitud carecía de verdaderos precedentes y era en extremo arriesgada. El fué, por tanto, quien desbrozó el terreno para que otros pudieran seguirlo después con paso firme, y su obra es honrosísima, pues sale de los moldes de un partido para convertirse en gran iniciativa de carácter nacional y social, por lo que figura entre los actos de más importancia entre los muchos enaltecedores que dan relieve á su vida. La prensa alabó este magnánimo rasgo del marqués de Santa Marta, dándole el calificativo honroso de ilustre patricio, y la posteridad, siempre agradecida á los hombres de grandes cualidades que han trabajado con e por la causa de la verdadera justicia y del progreso, sabrá confirmar esos merecidos elogios.





CAPÍTULO XXXII

La Asamblea federal de 1888.—Su actitud decididamente favorable á la coalición republicana.—Necesidad de dirigir por nuevos derroteros la inteligencia y acción común de los partidos republicanos, según el criterio del marqués de Santa Marta.—Intervención de éste en los trabajos de la Asamblea federal.—Identidad de criterio y propósitos entre el Marqués y los representantes de la Asamblea.—Triunfa en ésta el criterio del primero acerca de la conducta del partido en sus relaciones con los afines y en el sentido predominante que debía tener la coalición.—Determinación de los términos en que este asunto quedaba planteado después de los acuerdos de la Asamblea.—Decidida actitud del marqués de Santa Marta respecto de la coalición.



GRANDES esperanzas despertó en el marqués de Santa Marta la Asamblea del partido federal, reunida en Madrid el 1.º de Octubre de 1888. Después de cinco años de interregno, que formaban un período fecundo en importantes acontecimientos para nuestra comunión, y durante el cual la política española había atravesado por graves crisis y sufrido transformaciones de alguna monta, se veían nuevamente reunidos los representantes de las provincias para completar la obra de la Asamblea reunida en 1883 en Zaragoza, y decidir en definitiva acerca de la ulterior conducta del partido, especialmente en lo to-

cante á sus relaciones con los demás partidos republicanos. Este punto y el de la intervención en la lucha electoral, una vez abolido el censo de los conservadores, eran realmente los dos de mayor importancia y que más interesaron la atención pública, por ser cuestiones que, saliendo de la esfera de la vida interior de partido, se relacionaban estrechamente con el interés general. Las resoluciones que sobre ellos se adoptasen habían de determinar para lo sucesivo el grado de influencia de la comunión federal en los destinos de la política española.

El aspecto de ésta había cambiado desde la celebración de la última Asamblea, si no radicalmente, al menos en proporciones que demandaban la adopción de una línea de conducta adecuada á las circunstancias. La monarquía, representada por un menor, bajo la regencia de su madre, por fallecimiento de D. Alfonso, había confiado el poder al partido de Sagasta, quien quiso halagar al pueblo con algunas reformas políticas, tales como el sufragio universal, que desnaturalizado y todo, como tenía que serlo forzosamente, permitía á los partidos populares una intervención mayor y más directa en la vida pública; el partido conservador, que en su anterior etapa se había sostenido únicamente por la simpatía que inspiraba al rey difunto, cayó envuelto en el mayor de los descréditos, abandonando cobardemente el cadáver aún caliente de su monarca, temeroso del odio popular concitado por su desatentado proceder, comprometiendo la se-

guridad y el decoro de la nación. Esto y las profundas disidencias surgidas en su seno, parecían incapacitarle en absoluto para el gobierno, anulándole definitivamente como fuerza política. Fuera de juego, por decirlo así, este partido, imposibilitado de rehacerse, poniéndose en condiciones de gobernar, la monarquía puede decirse que por entonces, y probablemente durante un largo período, sólo podía apoyarse en el partido fusionista, cuya lealtad dinástica no estaba muy probada, y cuyas simpatías en el país no eran por cierto suficientes, aunque no fuese tan mal visto como los conservadores, para inspirar grandes seguridades al trono. Habíase creado, por consiguiente, una situación semejante á la de la dinastía de Saboya en el último período de su fugaz reinado; pero no había que esperar, como entonces, la solución del conflicto en un acto de desprendimiento, reñido con el carácter y las tendencias de los poderes históricos.

En tal estado las cosas, la acción de los partidos populares estaba solicitada por las necesidades y los anhelos del país, indicada por las conveniencias políticas y favorecida por la misma situación de los republicanos, que tenían su personalidad propia, y estaban por tanto en condiciones de efectuar la fructuosa inteligencia, dificultada por múltiples obstáculos antes de deslindar sus campos respectivos; inteligencia ó concierto ensayado en la coalición de 1886, á la sazón rota, pero de la que no podía renegarse aunque fuera solo por las enseñanzas que de ella se deducían acerca

del modo más conveniente de reanudarla con probabilidades de éxito seguro é inmediato. Los que por el fracaso de aquella primera coalición desesperaban ó desconfiaban de poder realizarla en condiciones debidas, y de su ruptura hacían un argumento contra ella, daban menguado testimonio de sus aptitudes políticas. Toda obra humana es por naturaleza imperfecta, y ninguna alcanza al realizarse por primera vez en la práctica su completo desarrollo, que solo se consigue después de labor incesante y de reiteradas y á veces infructuosas tentativas.

En el terreno político, las dificultades que malogran en muchas ocasiones los más nobles esfuerzos son más numerosas, por lo mismo que en él se busca siempre un fin inmediato y se ponen en relación multitud de intereses distintos y opuestos; por eso también solo logran descollar en esta esfera los espíritus superiores, capaces del esfuerzo y la perseverancia necesarios para vencer tamañas dificultades.

En su gran altura de miras, el marqués de Santa Marta había examinado serenamente la situación, y lejos de desmayar, sentíase cada vez más confiado en el porvenir, pues el desarrollo y la suerte de la primera coalición arrojaban, á su juicio, datos bastantes para trazar una acertada línea de conducta en lo sucesivo respecto de cuestión tan capital para el interés de la República, y no dudó ni un solo momento en que el patriotismo y el buen sentido de la Asamblea federal trazaría, de acuerdo con las enseñanzas que se des-

prendían de todos los hechos anteriores, el rumbo más conveniente para acelerar la realización de las aspiraciones del pueblo, cuyo único puerto de salvación era la República, enfrente ya de un enemigo al que podía vencerse con solo quererlo.

Y á la verdad, la actitud de los representantes del partido federal parecía venir en confirmación de tan halagüeñas esperanzas. Lejos de mostrarse desalentados por la ruptura de la coalición, de ver en ello el término de toda esperanza para ulteriores inteligencias, afirmaban de nuevo con mayor entusiasmo sus propósitos de reanudar las relaciones con los demás partidos republicanos, estableciéndolas sobre más firmes bases y dándoles como inconvencible fundamento la identidad de aspiraciones. Estos propósitos tuvieron expresión en el primer acuerdo de la Asamblea, que inauguró sus tareas con nota tan patriótica y tan conforme con los deseos generales del partido, como era el de procurar y conseguir á toda costa el concurso de las fuerzas republicanas para hallar el término de los males del pueblo, mediante la acción combinada de todas ellas.

El partido federal se reveló en esta última Asamblea, en la que tuvieron representación, no solo las provincias de la Península, sino también las de Ultramar, con una organización poderosa, digna de su historia y de sus altos destinos, lo que era nuevo motivo de satisfacción y de esperanzas para los que, como el marqués de Santa Marta, fiaban el no lejano triunfo de

los ideales democráticos á la estrecha alianza entre los organismos robustos y fuertes de los partidos republicanos.

El marqués de Santa Marta había sido elegido por sufragio universal representante en aquella Asamblea por la provincia de Madrid, en unión del Sr. Pí, obteniendo el cargo de primer Vicepresidente de aquella, distinciones mercedísimas con que la provincia donde reside y el partido en su más alta representación premiaban los servicios del ilustre republicano. Correspondió el marqués de Santa Marta á tan estimables demostraciones de la alta consideración que á su partido merecía, presidiendo con sumo acierto varias sesiones en ausencia del Presidente del Consejo federal, y proponiéndose en otro orden de acción marcar concretamente á su partido la norma de conducta que se imponía como deber inexcusable, en vista de lo sucedido durante los seis años que próximamente mediaron entre una y otra Asamblea. La de 1883 había dado en una Constitución la fórmula práctica del credo federal: la de 1888 estaba llamada á completar la obra, resolviendo sobre las enmiendas presentadas por las provincias al Código Constitucional y armonizando con él las Constituciones aprobadas en las Asambleas regionales. Realizado esto, que podía considerarse como la última determinación doctrinal del partido y completado con la rectificación de algunos defectos en la organización, era forzoso resolver, sin pérdida de tiempo, sobre la conducta del partido como

fuerza activa en la política general del país, ejerciendo la legítima influencia que correspondía de derecho á las numerosas y bien organizadas fuerzas federales. De nada hubiera servido la prolongada labor de nuestras Asambleas y el esfuerzo empleado en organizarse, si no se procuraba dirigir racionalmente toda aquella suma de fuerzas á la consecución del ideal perseguido con tanta perseverancia. En este sentido estuvo siempre inspirada la valiosa intervención del marqués de Santa Marta en los trabajos de la Asamblea federal de 1888, mereciendo especial mención el proyecto de Bases para la organización del Ejército y Armada de la Federación Española, redactado por una Comisión, presidida por el marqués de Santa Marta, cuya pericia en las cuestiones de organización y táctica militares es bien conocida y había él acreditado al discutirse los presupuestos de Guerra y con otros motivos en las memorables Constituyentes de 1869.

El proyecto de que hablamos, aprobado por la Asamblea sin reforma de importancia, es quizás una de las obras de que más puede ufanarse nuestro partido, y de mérito tanto más estimable cuanto que fué presentado á la discusión en la Asamblea á los cuatro días de nombrada la Comisión. Este hecho por sí solo acredita el profundo conocimiento y dominio del asunto que se necesitaba para formular las bases orgánicas en materia tan delicada é importante, dentro de plazo tan perentorio; tarea imposible de todo punto para personas que no reuniesen la competencia del mar-

qués de Santa Marta y de sus compañeros de Comisión, Sres. Carrasco Romero y Palma, no sólo acerca de las cuestiones militares, sino también en lo referente á los principios federales, que aparecen en las Bases mencionadas, perfectamente armonizados con el supremo interés de la defensa y seguridad de la patria, á la vez que con los intereses legítimos creados por el ejercicio de la noble profesión de las armas.

El servicio forzoso, que pugna con la idea de libertad y no cabe en un programa federal, aparece allí limitado al caso de defensa, motivada por una agresión ó ataque á la independencia nacional; establecido el ejército en tiempos normales por el alistamiento voluntario, respetados los derechos de los que pertenecen á la profesión militar y garantizada su existencia, á la vez que se abren amplios horizontes á cuantos al servicio de la patria se hayan consagrado. Claro es que las *Bases*, cuyo desarrollo debía estar en las leyes, no formaban un cuerpo completo de legislación, cuyos preceptos hubieran exigido semanas enteras simplemente para la tarea material de escribirlos; pero se puede asegurar que en ellas no falta ni uno solo de los principios sobre que debe establecerse la organización armada dentro del sistema federativo, ni la debida garantía para ninguno de los importantes fines á que debe responder el ejército en las modernas sociedades, influidas, á pesar de los poderes históricos, por el espíritu de la democracia.

Ya hemos dicho que la Asamblea expresó terminan-

temente en su primer acuerdo, á la vez que aprobaba la conducta del Consejo federal, del que formaba parte el marqués de Santa Marta, su deseo de realizar la coalición republicana: conviene ahora precisar bien el sentido y alcance de este acuerdo, por referirse á lo que podía considerarse como el fin más trascendental de todas sus deliberaciones y por hallarse íntimamente relacionado con la conducta política ulterior del marqués de Santa Marta, cuyos actos, en este como en todos los períodos de su vida pública, revelan el proceso lógico de un espíritu que sólo determina sus resoluciones por motivos muy fundados. El acuerdo de la Asamblea federal de 1888, á que nos referimos, era en su redacción bastante explícito para que dejase lugar á dudas. Al aprobar la conducta del Consejo, se le daba un voto de gracias, ESPECIALMENTE *por haber llevado á cabo la coalición republicana* en Marzo de 1886, sin que esta terminante declaración pudiera quedar desvirtuada al hacer extensivo el voto de gracias á la conducta del Consejo cuando suspendió la coalición, puesto que se aceptaba como causa de esta suspensión «los obstáculos que por las disensiones surgidas entre los progresistas, se oponían á su organización y regular funcionamiento.»

Téngase en cuenta que después de los acontecimientos de Septiembre, estalló entre los republicanos progresistas una excisión, quedando éstos divididos poco después en dos bandos, capitaneados respectivamente por los Sres. Salmerón y Ruiz Zorrilla.

A las dificultades nacidas de esta disidencia se referían así el Consejo al exponer los motivos de la suspensión de la coalición, como la Asamblea al estimarlos causa bastantes para justicar la conducta de aquel, en cuyos medios no estaba el de impedir la división de los progresistas. Claro es que cuando tan explícitamente se justificaba la decisión, dolorosa pero impuesta por las circunstancias, del Consejo federal, es porque la Asamblea no hubiera aprobado su conducta si el rompimiento hubiese solo obedecido á móviles caprichosos é infundados.

Por eso hemos dicho, y repetimos, que aquel reconocimiento de las causas legítimas de la suspensión de las relaciones entre los partidos republicanos, no desvirtuaba en modo alguno la expresiva significación del voto de gracias dado al Consejo federal por su acertada conducta, PERO ESPECIALMENTE *por haber hecho la coalición*. A mayor abundamiento, en la segunda parte de la proposición, aprobada unánimemente por la Asamblea, se decía textualmente:

«Declara (la Asamblea) que desea la coalición republicana y que autoriza al futuro Consejo federal para que desde luego gestione lo necesario, á fin de reanudarla.» «Sin perjuicio, se añadía después, de acentuar, así con coalición como sin ella, cada día MÁS ENÉRGICAMENTE *la resuelta actitud* que del partido federal demandan los crecientes males de la patria.»

No hay, como se ve, en los diversos puntos comprendidos en este importante acuerdo, demasiado im-

portante para no ser explícito en el más alto grado, ambigüedades que autorizasen interpretaciones sofisticas para alterar ó desvirtuar su significación. El partido se mostraba decididamente favorable á la coalición republicana, y había de llevar á ella forzosamente aquel espíritu y significación de irreductible intransigencia, que quería acentuar de día en día, ante los males constantemente agravados de la patria; espíritu y significación que solo podían determinarse en el sentido eminentemente revolucionario que el marqués de Santa Marta creyó siempre debía tener todo concierto entre los republicanos, y que él supo expresar en la célebre reunión del Casino Progresista con aquella frase feliz, compendio de todo un sistema en pocas palabras: «Soy coalicionista porque soy revolucionario.»

Su criterio en esta materia consiguió, como se ve, un completo y brillante triunfo por el primer acuerdo de la Asamblea federal de 1888. El espíritu, las tendencias y los propósitos del partido federal, se manifestaban de tan solemne modo en conformidad absoluta con las ideas que él había sostenido siempre: véase si había motivo para acariciar las esperanzas que la actitud de la Asamblea había despertado en el ánimo del ilustre repúblico, cuya influencia entre sus correligionarios, siempre grande y legítima, acreció entonces en proporción inmensa.

Como precedente necesario para la debida explicación de los acontecimientos posteriores, importa mu-

cho consignar los términos en que la coalición quedaba planteada después y por virtud de este acuerdo. El Consejo federal, para cumplir los mandatos de anteriores Asambleas, aprovechó la coyuntura que había juzgado propicia para llegar á una inteligencia con los demás partidos republicanos, realizándola en las condiciones que estimó convenientes: cuando las circunstancias cambiaron y los obstáculos con que la coalición tropezaba dificultaron su desenvolvimiento regular, la suspendió porque así lo consideró necesario, atendiendo al interés del partido. El Consejo, autorizado en términos generales para llevar á efecto la coalición, estaba dentro de su derecho lo mismo al hacerla que al declararla en suspenso mientras no lesionase el interés del partido: la aprobación por parte de éste era lógica y justa, toda vez que el supremo organismo directivo había sabido mantener incólume la pureza de la doctrina y la personalidad de la agrupación. Pero el voto de aprobación no significaba que se hubiese de seguir el mismo derrotero; por el contrario, el buen sentido aconsejaba cambiar de procedimiento, puesto que el anterior había sido defectuoso, según demostraba la experiencia.

«El Consejo, venía á decir la Asamblea, se ha conducido dignamente, lo mismo al pactar la coalición que al suspenderla, por creer que las circunstancias no eran favorables para continuarla en las mismas condiciones. La Asamblea, abundando en ese parecer, pero deseosa de continuar la coalición, encarga á la direc-

ción del partido, sea cual fuere, las gestiones necesarias para conseguirlo, y se reserva el señalar las condiciones.»

Así es que el encargo se refería solo al primer punto, y en cuanto al segundo, guardaba en el acuerdo público el silencio aconsejado en cuestiones de índole reservada entre la Asamblea y la dirección del partido, y que solo entre ésta podían y debían ser tratados.

Quedaban, pues, establecidos con toda claridad estos extremos: el partido quiere la coalición y se reserva el derecho de resolver sobre las condiciones en que haya de realizarse, condiciones que habían de variar forzosamente de las anteriores, pues hubiera sido contradictorio, queriéndola sinceramente, establecerla sobre las mismas, que habían sido insuficientes para darle estabilidad y fuerza.

Una vez desembarazada la Asamblea de los trabajos concernientes á la determinación de sus principios en fórmulas de aplicación práctica, y acordado, como precedente indispensable, la participación en las luchas electorales cuando fuese preciso, pero sin contradecir ni atenuar siquiera por esto el sentido revolucionario de su política, era llegada la ocasión de abordar resueltamente las cuestiones relativas á los procedimientos más adecuados para que la coalición republicana diese sus naturales frutos.

Entonces puede decirse que comenzó la inolvidable y gloriosa campaña del marqués de Santa Marta, que tanto nombre, prestigio é influencia le conquistó, no


solamente entre su partido y los republicanos en general, sino también entre la gran masa del país, que sin estar sujeta por intereses de parcialidad ó bandería, aspira únicamente á la regeneración de la patria y presta sus simpatías y su auxilio á los que ponen en este sagrado empeño el desinterés y el entusiasmo que resplandecieron en la generosa y patriótica empresa acometida briosamente por el marqués de Santa Marta.





CAPÍTULO XXXIII

Situación de los ánimos al celebrar sus sesiones la Asamblea federal de 1888.—Tendencia á la adopción de soluciones prácticas.—Creciente influencia del marqués de Santa Marta en el partido federal.—Su discurso defendiendo la jefatura unipersonal.—Efecto producido por ese discurso.—Intrigas contra el marqués de Santa Marta.—Conducta del Sr. Pi y Margall.—Ruptura de relaciones entre el marqués de Santa Marta y el Sr. Pi.

a actitud de los representantes de la Asamblea de 1888 indicaba, bien claramente, que el partido federal estaba ya cansado de la inacción de quince años, á que en parte las circunstancias y en parte también el carácter poco batallador de su jefatura le habían reducido, y que pugnaba en sus bríos y enérgicas tradiciones. El objeto aparente de aquella Asamblea era discutir las Constituciones regionales y acomodarlas al proyecto de Constitución federal, votado cinco años antes en Zaragoza, pero casi todos los representantes acogían con impaciencia estos debates, poco prácticos y acaso un tanto pueriles; asomaban por todas partes opiniones diversas y se llega-

ba con facilidad á divergencias de principios, como ocurrió al discutirse el proyecto de Constitución de Cataluña, que estuvo á pique de ocasionar una excisión en la Asamblea, por ser muchos los que veían en la tendencia de aquella Constitución graves ataques á la autonomía de los municipios. En cambio, cuando se trataba de la línea de conducta que había de seguir el partido federal para llegar más fácilmente á lo que interesaba á todos, esto es, al triunfo de la República, no había discrepancia, y puede decirse que las opiniones eran unánimes; los representantes estaban resueltamente porque se adoptasen los temperamentos revolucionarios y porque se hiciese la coalición con los progresistas, que no sólo mostraban tendencias belicosas, sino buen deseo de traducirlas en hechos. Los más ardientes querían que, bien reanudándose la coalición, bien sin ella, se lanzase el partido á la pelea. Recordaban que veinte años antes por el sólo esfuerzo del partido federal se habían sublevado Málaga y Cádiz, y aún habían quedado elementos para promover una insurrección que en tres semanas puso sobre las armas cincuenta mil hombres, y no veían sin honda pena que en cerca de quince años de restauración borbónica no hubiese hecho esa agrupación, antes tan poderosa, tentativa alguna para un movimiento serio. No podían explicarse aquel enervamiento tan lastimoso, y desde luego preveían el pronto descrédito del partido federal ante la opinión, siempre inclinada á sancionar el éxito, si no se daba una nueva muestra de

que había elementos dispuestos á intentar seriamente el restablecimiento de la República. Los más templados empezaban á decir que el período de reorganización estaba terminado hacía mucho tiempo y que era llegado el caso de que el partido afirmase de algún modo su existencia, pues hasta entonces ni daba fe de vida en la lucha revolucionaria, ni influía tampoco en los destinos del país por medio de la lucha legal. En suma, casi todos los representantes de la Asamblea estaban por la adopción de una política francamente revolucionaria; pero no sólo en el terreno de las ideas y las afirmaciones, sino en el de la acción. Creían, y no se recataban para decirlo, que de poco serviría continuar diciendo en todos los tonos que se quería la revolución y que ésta era la única actitud digna para el partido, si en los hechos nada se intentaba para realizar este fin. Pasar seis años discutiendo proyectos de Constituciones, que no se aplicarían jamás, pues llegada la revolución, aun cuando se impusiera la corriente federalista, se formularían otras nuevas, parecían una broma demasiado pesada y que se prolongaba más de lo debido. «Ahora, se decían unos á otros, se nombrará una Comisión que estudie y formule proyectos de leyes orgánicas, y dentro de seis años ó de más tiempo se nos llamará otra vez para que los discutamos y aprobemos, á la par que nombramos nuevas Comisiones que propongan reglamentos para la ejecución de esas leyes: de modo que nos pasaremos toda nuestra vida entretenidos en el inocente juego de hacer

de legisladores de mentirigillas.» Y aumentaba el descontento y se patentizaba la necesidad imperiosa de acordar algo práctico.

No dejó de preocupar seriamente al Sr. Pí y Margall esta poderosa corriente de opinión que tan avasalladora se mostraba, no sólo en la Asamblea, sino en toda la masa del partido. Ya un mes antes, en el viaje que hizo á Barcelona con objeto de visitar la Exposición Universal, y realizar al mismo tiempo alguna propaganda política, tuvo ocasión de observar hasta qué punto llegaban las impaciencias revolucionarias de los federales. El discurso que pronunció en la capital de Cataluña había versado sobre los abusos de la monarquía y además había combatido en él con alguna dureza el regionalismo, que presentó como una teoría tradicionalista y anticuada, pero nada había dicho en concreto acerca de la conducta que debía seguir el partido federal en sus relaciones con los afines, y esto produjo en el auditorio cierto desencanto, pues los federales, aun dando por motivada y buena la ruptura de la última coalición, esperaban y querían que se pactase sin demora otra de carácter más francamente revolucionario. Así es que al día siguiente de la conferencia del Sr. Pí y Margall presentáronse en su alojamiento los más significados federales de Barcelona, para manifestarle que el discurso, aunque muy elocuente, no había satisfecho las aspiraciones de los correligionarios ni disipado sus dudas acerca de la marcha que el jefe del partido pensaba seguir en sus relacio-

nes con los progresistas. El Sr. Pí contestó que reservaba para un nuevo meeting, que debía celebrarse en Zaragoza, aquellas declaraciones de actualidad. No podían resolverse las dudas de los federales barceloneses con esta respuesta, y aunque en vista de las manifestaciones del Sr. Pí nada podían oponer á su resolución, hiciéronle saber que el partido estaba resueltamente por la coalición y que urgía que el Sr. Pí y Margall en persona se avistase con D. Manuel Ruiz Zorrilla, á fin de pactar una alianza revolucionaria. Ya que el jefe del partido federal explicaba la ruptura de la última coalición por la discordia que había estallado en el seno del bando progresista, dividiéndole en dos agrupaciones, una á las órdenes del Sr. Ruiz Zorrilla, que estaba por la revolución, y otra dirigida por D. Nicolás Salmerón, que prefería la lucha legal, creían los federales barceloneses que el Sr. Pí debía entenderse precisamente con el Sr. Zorrilla, y con tanta fuerza le instaron en este sentido, que al fin el Sr. Pí hubo de darles su palabra de que iría á París con tal objeto apenas terminasen las sesiones de la Asamblea. Al pasar después por Zaragoza pronunció el Sr. Pí un discurso, en que efectivamente trató del problema del día, esto es, de las relaciones que en su sentir debían entablarse entre el partido federal y los afines, y pudo observarse que el Sr. Pí mostraba gran predisposición á que siguiera el partido en la misma actitud de independencia ó aislamiento, pues acriminó mucho la conducta que habían seguido los progresistas con los

federales durante la coalición, acusándoles de que trabajaban exclusivamente por su cuenta y defendió la alianza sólo á condición de que se nombrase una junta en que estuvieran igualmente representados los partidos que se unieran, indicando de paso que la coalición tendríá pocas garantías de estabilidad mientras el Sr. Ruiz Zorrilla permaneciese en París. Como los más impacientes porque la coalición se reanudase desde luego, creyeron ver en estas afirmaciones del Sr. Pí y Margall un mal augurio para nuevos pactos con los progresistas, y por otra parte opinaban que sin coalición no había de intentar el partido federal por su cuenta empresa alguna revolucionaria, la agitación era grande y no escaso el descontento.

De aquí la importancia que no pudo menos de dar el Sr. Pí á la actitud de los representantes de la Asamblea de 1888. Por primera vez desde la época de la restauración comenzaba á marcarse con mucha claridad una notoria discrepancia en materias de procedimiento entre el partido y su jefe, á quien empezaban á mirar todos como irreemplazable en materias de doctrina, pero como muy poco á propósito para dirigir la acción revolucionaria.

El medio de que echó mano el Sr. Pí para acallar este clamoreo de los delegados á la Asamblea fué, á la verdad, contraproducente. Les citó á una reunión secreta en su casa, y una vez allí les manifestó que, como se hablaba tanto de la necesidad de acudir desde luego á la lucha armada y se daba por seguro que el

partido tenía elementos sobrados para intentar algo serio en este sentido, era necesario que los representantes de las provincias fuesen exponiendo los recursos con que se contaba para un movimiento en sentido federal. Enseguida fué concediendo la palabra á los delegados de cada provincia, siguiendo el orden alfabético. Tristeza nos causa recordar esta escena deplorable. Los representantes fueron haciendo sucesivamente la enumeración que se les pedía y hubo allí de todo; revelaciones amargas, abstenciones severas, entusiasmos generosos y alardes cómicos. Quién ofrecía poner sobre las armas una partida de cien hombres, medianamente equipados; quién, improvisando ejércitos imaginarios, exponía un vasto plan, que comprendía sublevaciones simultáneas de importantes capitales, alzamiento de centenares de partidas que ocupasen las llaves de vastas comarcas y se posesionaran de las vías de comunicación; quiénes, más atentos á la verdad de los hechos y á la imposición de las circunstancias, consideraban imprescindible la coalición antes de entrar en este género de empresas; quiénes declaraban francamente que no podían hablar en nombre de la provincia porque venían como representantes ya que no eran naturales de ella ni la conocían, toda vez que en esta clase de Asambleas son pocos los que hacen el sacrificio de venir directamente del país representado y muchos los que deben su designación á relaciones puramente amistosas con algunos individuos de los Comités que les designan.

El resultado de esta exposición, que duró varias horas, fué triste: mientras unos habían expresado opiniones pesimistas, otros habían fantaseado á su capricho, y los más avezados á este género de empresas habían guardado significativo silencio, probablemente por creer que no es así como se ventilan y resuelven asuntos de tan excepcional gravedad, y que para llevarse á la práctica han de ser tratados entre pocos y con mucho sigilo. En resumen: si el Sr. Pí había pretendido por este medio acallar las impaciencias de los que pedían que el partido se alzase á las vías de acción, no pudo conseguirlo, pues seguramente la mayoría de los representante saldrían preguntándose unos á otros: ¿Para esto hemos vivido quince años sometidos en nuestra organización interior á un régimen de dictadura? ¿Para esto hemos otorgado al jefe ámplias atribuciones y poderes ilimitados? ¿Este es el uso que se ha hecho de las facultades que se nos pedían para realizar toda clase de esfuerzos para el triunfo de nuestros ideales? Nada se ganó, pues, con semejante escena y no pocos de los que en ella intervinieron como representantes salieron de allí con la amargura que sigue á las grandes decepciones, habiendo perdido en pocas horas más ilusiones y más fe en los grandes prestigios que en muchos años de rudo batallar mal recompensado y de incesantes sacrificios y desvelos, poco tomados en cuenta.

Siguió la Asamblea discutiendo los proyectos de Constituciones regionales, pero con marcado disgusto

y con no poco desconcierto, pues los regionalistas, capitaneados por el Sr. Vallés y Ribot se oponían al paso de todo dictámen en que no se diese por afirmada la existencia de los antiguos reinos de la época de la Reconquista y consiguieron, aprovechando la indiferencia de la Asamblea, que se rechazase un dictámen notabilísimo suscrito por el Sr. Benot y en que se proponían algunas enmiendas al proyecto de constitución catalana. Fueron necesarias toda la firmeza y aplomo del marqués de Santa Marta, que presidía las sesiones por indisposición del Sr. Pí y Margall, para que los representantes no se dividiesen en aquella sesión en bandos inconciliables.

Con objeto de zanjar las diferencias no menos graves que pudieran surgir al tratarse de la organización de la jefatura, se pensó, con muy buen acuerdo, tratar este asunto en sesión privada, á fin de concertar opiniones y voluntades para que en la sesión pública consagrada á aquel objeto no apareciera la Asamblea dividida tratándose de la aceptación de personas. El Sr. Pí, aunque ya restablecido, no asistió por razones que estimaba de delicadeza, á aquella sesión preparatoria celebrada el día 12 de Octubre por la mañana, y hubo de presidir el marqués de Santa Marta, quien al exponer el objeto de la reunión, manifestó sus opiniones sobre tan delicada materia.

«Señores representantes—dijo;—algunos de nuestros compañeros han creído, y con mucha razón á mi juicio, que después del brillante espectáculo que ha

ofrecido la Asamblea en sus sesiones, debíamos poner especial émpeno en cerrarlas dignamente, procurando que en la cuestión de jefatura, única que debemos ya resolver y que por su índole suele prestarse á contiendas, apareciésemos con la misma unidad de pensamiento que ha resplandecido por punto general en nuestras deliberaciones. Para conseguir este acuerdo, que se impone por motivos de varias clases, presentes á vuestra clara inteligencia, se os ha convocado á esta reunión, y es de esperar del patriotismo de todos que no haya sido en vano. Os invito, pues, á que manifestéis vuestras opiniones sobre la organización de la jefatura que ha de dirigir en adelante al partido; que despues de debatir el punto, lo votéis, comprometiéndonos todos á aceptar el acuerdo de la mayoría y elijais despues la persona ó personas, según sea el acuerdo en el primer punto, á quienes hayais de investir con tan honrosa distinción.»

Los representantes asintieron á las palabras del marqués de Santa Marta, y éste continuó en estos términos:

«Pero ya que tengo el honor de presidiros, estimo de mi deber plantear los términos de la cuestión y para ello me habéis de permitir que exponga brevemente mis opiniones.

»Entre nosotros, señores representantes, aparecen tan estrechamente ligadas la cuestión de organización de la jefatura y la personal inherente á ella, que es casi imposible tratarlas por separado si se han de tra-

tar y resolver debidamente. La ilustre personalidad del Sr. Pí tiene entre nosotros tal prestigio y autoridad tanta que, cualquiera que sea la forma de organizar nuestra jefatura, el jefe para propios y extraños es él; no solo jefe de derecho, sino de hecho, pues si bien es verdad que es bastante respetuoso con la ley de su partido y con sus compañeros para no tomar jamás acuerdo alguno á espaldas de éstos y sin discutirlos previamente con la mayor amplitud, también es innegable que todos hemos preferido siempre, lo hemos hecho gustosos, deferir á sus opiniones, aun siendo las nuestras contrarias, á crear el conflicto de un disenso en el Directorio, que llevaba irremisiblemente aparejadas graves perturbaciones para nuestro partido. Así es que por ese tributo de consideración y acatamiento que todos rinden al Sr. Pí, él es el verdadero jefe, y siendo esto así, me parece lo más conveniente al interés del partido la jefatura unipersonal, confiriéndola al Sr. Pí, que en esto creo que no habrá un solo parecer discordante.

• Me diréis que la jefatura pluripersonal parece más en armonía con los principios democráticos; pero sobre que esto no es un dogma y el ejemplo de federaciones tan poderosas como los Estados Unidos demuestran que las organizaciones más democráticas no son incompatibles con las jefaturas unipersonales, os diré que en las condiciones de nuestro partido, eso constituye una hipocresía, que hace poco honor á nuestra seriedad y que no engaña á nadie, ni de dentro

ni de fuera, porque todos, todos, federales y no federales, saben á qué atenerse respecto de esas apariencias de jefatura, que en el partido federal será seria y respetable ejercida por el hombre prestigioso que viene estando á su frente por tanto tiempo y puede degenerar en ridícula adicionada con consejos, con los que parece queremos hacer una parodia de gabinetes constitucionales.

»Si después de todo, solo se tratase de cubrir ciertas apariencias, no diría nada; pero el Directorio ó la jefatura pluripersonal, inútil como freno á la dictadura del jefe, puede ser perjudicial y peligrosa para el partido mismo. Suponed que llegan momentos en que con urgencia se impone una resolución inmediata. Cuanto más graves sean las circunstancias, menos desligado se creará el jefe del deber de consultar á su Consejo, y figuráos que para decidir en horas, el jefe se ve en el caso, como seguramente se ha visto, de consultar á un consejero que está en Barcelona y á otro que se hallaba en Cádiz. Basta enunciar esto, sin entrar en más pormenores y sin reforzar el argumento con recuerdos de fechas memorables, como el 19 de Septiembre, para que adquirais la convicción de que la jefatura pluripersonal, aparte todos sus inconvenientes, puede llegar á ser un grave obstáculo para la unidad y rapidez de acción, necesaria siempre en partidos como el nuestro, y causa de que se malogre en un instante el triunfo preparado á costa de grandes sacrificios.

»¿Creeis que estamos en condiciones de crear obs

táculos á la marcha de nuestro partido, en vez de embarazar su acción? Lo sentiría, pero yo, que abrigo sobre este particular un profundo convencimiento, combatiré la jefatura pluripersonal, y defenderé y votaré la unipersonal, confiriéndola á D. Francisco Pí y Margall.»

A las muestras de asentimiento con que acogió la Asamblea aquella franca, leal y decidida actitud del marqués de Santa Marta, siguió prolongado silencio, prueba de que no habían quien tuviese razones que oponer. El Marqués preguntó entonces, en vista de que nadie pedía la palabra, si se votaba acerca de la organización de la jefatura, y en aquel momento, dos ó tres representantes se opusieron, no alegando otra razón, sino la de que no habían acudido algunos señores, cuya opinión debía ser escuchada; argumento especioso, puesto que todos habían sido citados y conocían el objeto de la reunión; pero el marqués de Santa Marta, para evitar toda clase de interpretaciones malévolas, dió tiempo á que llegase el Sr. Vallés y Ribot, quien habló larguísimo contra la jefatura única, haciendo elocuentes variaciones sobre el peligro que se corría de dejar huérfanos á los federales el día en que falleciese ó se incapacitase el jefe.

Pasó la mañana sin llegar á un acuerdo, y como la sesión pública debía celebrarse en aquella noche, se suspendió la privada al mediodía, reanudándose por la tarde. Jamás pudo con más razón aplicarse el proverbio de que nunca segundas partes fueron buenas,

que en aquella reunión. Enardecidos los ánimos, pero al mismo tiempo fatigados por estériles y enojosos debates, la sesión ofreció un lamentable espectáculo. Ya no parecía debatirse lo que interesaba al partido: la discusión degeneró en disputa, en un pugilato personal, en que solo se procuraba sacar á salvo puestos en la nueva jefatura del partido. Espectáculo triste que formaba contraste con el desinterés mostrado por el marqués de Santa Marta al proponer la jefatura unipersonal de Pí, pues de aquella manera renunciaba, no á los sacrificios, sino á compartir los honores de la jefatura, de que hasta entonces había participado con el Sr. Pí y sus compañeros.

Acordóse al fin por mayoría, pero reservándose los mismos la libertad de su voto, la jefatura pluripersonal y una candidatura, en la cual el Sr. Pí figuraba como presidente del partido.

Llegada la hora de la sesión pública y cuando los representantes y el público esperaban en el Casino Federal al Sr. Pí, llegó un recado de éste, diciendo que deseaba celebrar una sesión previa en su domicilio.

Apresuráronse los representantes de la Asamblea á acudir al llamamiento del Sr. Pí, bien ajenos del deplorable espectáculo que allí se preparaba. Comparadas con él, habían sido en extremo agradables las tristes escenas de las dos sesiones privadas de aquel día. En aquella reunión, celebrada en el domicilio del presidente, se consumó el rompimiento de relaciones entre el Sr. Pí y el marqués de Santa Marta; hecho

que fué la causa ocasional del gran movimiento de concentración iniciado y realizado después con éxito asombroso en el campo republicano, y acerca del cual nada diríamos si no hubiera afectado, como afectó desde los primeros momentos, carácter esencialmente político.

Antes, sin embargo, de referir los detalles de la agresión moral que motivó la ruptura, y que presenciaron con profunda pena gran número de federales distinguidos, debemos consignar algunos antecedentes que estimamos indispensables.

La amistad personal y política de los señores marqueses de Santa Marta y Pí Margall, databa del año 1864, y esa amistad fortalecida por la identidad de opiniones, se fué estrechando de día en día y sobrevivió á todas las divisiones del período revolucionario, sin que jamás fuera utilizada por el Marqués para alcanzar posiciones políticas, pues en la única ocasión en que las pudo obtener, en 1873, no aceptó cargo alguno, pudiendo haber sido ministro, gobernador de Madrid, ó digno representante de la República ante cualquier potencia, con tantos títulos para ello como el que más reuniese.

En todas las vicisitudes por que atravesaron los partidos republicanos, tuvo el Sr. Pí á su lado, incondicionalmente, al marqués de Santa Marta, con abnegación que llegaba casi hasta la renuncia de su personalidad. Se consideraba el marqués de Santa Marta algo así como un complemento del Sr. Pí: tal era la

identidad de sus opiniones, que todo el que entraba en negociaciones con el Sr. Pí, daba desde luego por lógica la conformidad del marqués de Santa Marta y viceversa. Pero esta identidad no indicaba, sin embargo, que para el Marqués pasasen inadvertidas ciertas deficiencias, nacidas quizás del mismo fondo del carácter del Sr. Pí, más contemplativo que activo, más pensador que práctico, más anacoreta que caudillo revolucionario; avanzado, avanzadísimo en teoría, conservador, muy conservador en los procedimientos. No podía ocultarse ni se ocultaba al Marqués este dualismo; pero ni se habían determinado aún conflictos de tal importancia que pusieran al Marqués en lucha entre su conciencia y su amistad, ni estaba dispuesto á renunciar á un afecto sincero y noble que constituía para él un verdadero culto. Procuraba, sí, con la discreción necesaria, que el más estimado de sus amigos tradujese en hechos sus ideas, era un estímulo de su actividad, como el mismo Sr. Pí lo reconoce en la dedicatoria que de su libro *Las Nacionalidades* hizo al marqués de Santa Marta, cuando dice que éste le había excitado muchas veces, en el seno de la amistad y de la confianza, á que formulase y condensara en una obra las ideas políticas que con tanta claridad concebía su privilegiado espíritu.

Dice mucho en favor del marqués de Santa Marta la amistad cordial, franca, respetuosa y sin nebulosidades que durante veinticinco años consagró al Sr. Pí y Margall. Demostró con ella que sabía reconocer y ad-

mirar el talento y que sabía hacer algo más difícil, honrarle. Quiso el Sr. Pí, convencido de que la buena voluntad de empresas poco sólidas no bastaba á sostener con carácter duradero un periódico federal, tener un órgano del partido con vida robusta y asegurada, y el marqués de Santa Marta, á conciencia de que se imponía un sacrificio de centenares de miles de pesetas, puso á disposición del Sr. Pí el periódico *La República*.

En cuanto á sacrificios de otra índole, en cuanto á todo lo que pudiera facilitar el triunfo de los ideales republicanos, sobradamente sabía el Sr. Pí que no había desatendido nunca el marqués de Santa Marta sus indicaciones, como sobradamente saben los republicanos que nadie ha hecho lo que él en este terreno.

Una amistad tan antigua, tan sincera y de que había obtenido y podía obtener en adelante grandes ventajas el partido federal, no parece que había de romperse fácilmente. Se rompió, sin embargo, y no por culpa del marqués de Santa Marta, en un momento de lamentable ofuscación, inspirada quizá por pérfidas y ruines insinuaciones de algunos malaventurados, que por torpes ambiciones han creado á su antiguo jefe una situación insostenible.

En el período transcurrido desde la Asamblea federal de Zaragoza hasta la reunión de la Asamblea de 1888, acaecieron hechos gravísimos, como la usurpación de las Carolinas, que estuvo á punto de promover una revolución; la muerte de D. Alfonso XII, que im-

ponía inteligencias amplísimas, y por fin la coalición de 1886, hechos todos que hacían indispensable la reunión de la Asamblea. No pensó, sin embargo, el Sr. Pí en convocarla, á pesar de haber hecho por sí y ante sí una coalición, rompiéndola después; de haber sido concejal y diputado á Cortes, sin que su partido acordase abandonar el retraimiento, alejándose después de las Cortes y del Municipio, sin decir por qué ni renunciar sus cargos, y cuando en Agosto de 1888, convocó la Asamblea federal, fijó como principal motivo de la convocatoria el examen de unos proyectos de Constituciones regionales, destinados, según todas las probabilidades, á no regir nunca.

No podía, á la verdad, escogerse peor ocasión para que los federales perdiesen el tiempo en entretenimientos tan poco prácticos. Acababa el Sr. Pí de realizar un viaje á Barcelona, y en todas partes encontró á los federales ansiosos de que pusiera á prueba su entusiasmo y sus bríos. Otras cosas, que debieron haberle preocupado mucho, tuvo además ocasión de observar en Barcelona, donde, divididos los federales, se daba el caso extraño de que la fracción que acaparaba los principales cargos del partido, iba falseando á la sordina los principios federales, jactándose de poseer la confianza y las preferencias del Sr. Pí, lo que en el estado de degradante personalismo á que el partido había llegado ya, parecía un título de tan gran valor, que confería facultades pontificales, la de excomunión inclusive. El Sr. Pí no desautorizó las tenden-

cias de los que en Cataluña pretendían anular la autonomía del Municipio, y declarar en cambio la región de derecho divino, cayendo en un tradicionalísimo absurdo y propendiendo á un separatismo más ridículo que peligroso, y de esa extraña benevolencia del señor Pí con los regionalistas se siguieron graves consecuencias. Los que no creían que el partido federal hubiera de suponer una reacción de siete siglos en la historia de España, los que estimaban y estiman que el partido federal debe marchar á la vanguardia de la democracia y no á retaguardia del carlismo, llamáronse desde entonces á engaño en su fuero interno y se apercebieron á la defensa de sus ideales contra los que tendieran á falsearlos, ya por malicia, ya por debilidad funesta ó por complacencias suicidas.

El periódico *La República*, conociendo el peligro, comenzó á adoptar una actitud reservada con el elemento regionalista, que empezaba á arrojar la máscara y á presentarse descaradamente. Intentábase perpetrar un delito de alta traición contra el dogma del partido, y como el marqués de Santa Marta hubo de estar al corriente de lo que sucedía, porque ya este asunto había motivado en Barcelona serias divergencia entre la representación de *La República* y los regionalistas que ocupaban altas posiciones en un partido que no era el suyo, se inauguró la Asamblea de 1888 con malos auspicios.

Otros motivos, no menos serios, daban extraordinaria gravedad á la situación. El marqués de Santa

Marta, individuo del Consejo federal, era, como hemos visto, de los consejeros que creían se imponía un cambio radical en la organización de la jefatura del partido. El Consejo, término medio entre el Directorio y la jefatura unipersonal, venía á ser una corporación meramente consultiva, y que sin embargo, aparecía ante el partido como responsable de todas las inacciones, debilidades y pérdidas de tiempo y de bríos que el partido lamentaba y censuraba. Con este extraño Consejo, como indicó acertadamente el marqués de Santa Marta en su discurso en la sesión privada á que antes nos hemos referido, venía á resultar el Sr. Pí algo así como un monarca, todo lo constitucional que se quiera, pero monarca al fin, que podía no conformarse con las decisiones de los consejeros é invalidarlas *ipso facto*, mientras una nueva Asamblea, reunida al efecto, no resolviese en uno ú otro sentido la contienda.

Era, realmente, anómala y penosa la situación de los consejeros residentes en Madrid, sobre los cuales caía principalmente el descrédito de la inercia á que les condenaba el jefe, que parapetado en su prestigio, era invulnerable.

Llegó la Asamblea de 1888; perdiéronse muchos días en discusiones doctrinales, en que hubo incidentes tan deplorables como la desautorización del dictamen altamente racional y democrático del Sr. Benot, sacrificado en aras del catalanismo tradicionalista que alentado por las complacencias del Sr. Pí, alzaba la cabeza con descaro inaudito, y al fin llegó el momento de

poner sobre el tapete el problema de la organización de la jefatura del partido. Y aquí fué Troya.

El marqués de Santa Marta, que había tocado muy de cerca los inconvenientes del Consejo, abogó, como se ha visto, resueltamente por la jefatura unipersonal del Sr. Pí, quien en caso de necesitar consejos, ya sabría pedirlos á quien creyese oportuno, y lo hizo en términos que hacían honor á su desinterés y á su prudencia. Esta solución, única razonable en aquellas circunstancias, luchaba con una dificultad, y era que una porción de representantes querían engalanarse con el título de consejeros, como si este título fuese una letra á plazo para ocupar una poltrona ministerial, y así, frente á la tendencia defendida por el marqués de Santa Marta, se abrió calle otra, que consistía en aumentar las plazas de consejeros. Hasta se pensó en un Consejo de cuarenta individuos, que otros más modestos redujeron á quince, y que por último bajó á seis, aunque los iniciadores del aumento, que ya tenían adjudicadas las plazas, se quedaron á la luna de Valencia.

Tales disgustos produjo la adjudicación hipotética de los cargos, que llegó un momento en que se impuso la tendencia del marqués de Santa Marta y pareció inevitable el triunfo de la jefatura unipersonal del señor Pí, á quien tal vez no hubiera agradado mucho esta solución, que le imponía graves responsabilidades, pero que desagradó en tan alto grado á los que se creían destinados á ser consejeros, que hubo quien amenazó con retirarse del partido, con lo cual no se hubiera

ganado poco. Su razonamiento era este: si triunfa el criterio favorable á la jefatura unipersonal, se impone el nombramiento de un adjunto al Sr. Pí para suplirle en casos de ausencia, enfermedad ó muerte, y ese adjunto será el marqués de Santa Marta, pues tal era, en efecto, el espíritu de la Asamblea, aunque el marqués no aceptara aquella distinción. Tal fué el motivo determinante de aquella intriguilla fraguada en la sesión secreta para inutilizar al marqués de Santa Marta, enemistándole con Pí, y que preparó la lamentable escena para la cual, según hemos dicho, llamó éste á su casa á los representantes de la Asamblea.

El marqués de Santa Marta, que á la sazón se preparaba á comer, recibió la cita con tal apremio, que se levantó inmediatamente, bien ajeno de cuanto iba á suceder, aunque le sorprendió mucho ver que solo á él se esperaba para abrir la sesión. Apenas llegó y sin entrevista previa de ninguna especie, manifestó el señor Pí á los representantes que, según sus noticias, en la sesión privada de aquella tarde, le había dirigido el marqués de Santa Marta gravísimas acusaciones; que no quería dejarlas pasar por alto y concedía la palabra al marqués para que explicase su conducta.

Júzguese del asombro y de la indignación del marqués de Santa Marta, ajeno en absoluto á la enormidad que se le quería atribuir. Tuvo, sin embargo, la suficiente fuerza de voluntad para contestar, con acento sereno, que no acertaba á comprender lo que ocurría, que observaba en aquella reunión el as-

pecto de una especie de jurado, y que siendo esto así, como de las palabras del Sr. Pí y Margall parecía desprenderse, no descendería á dar explicaciones de ningún género, pues su nombre, su delicadeza y su honrada historia, hablaban elocuentemente por él; que había creído que una amistad lealísima de veinticinco años con el Sr. Pí le daba derecho para ser tratado de otro modo; que no podía creer que un hombre que se llamaba su amigo y que durante tanto tiempo sólo había recibido de él pruebas de lealtad y de adhesión como no las había merecido de nadie, pudiera prestar asenso á chismes tan calumniosos, impropios de la seriedad de ambos y de la dignidad de la Asamblea, y se hubiera creído en el caso de proceder de tan inusitado modo, llevándole á la barra ante ochenta personas, olvidando que las cuestiones entre los buenos se han de tratar á solas, y que dicho esto, y mal repuesto aún de su asombro, deseaba que hablasen franca y categóricamente los representantes que algo tuvieran que decir sobre el asunto.

Entonces pidió la palabra un representante, y después de un preámbulo que nadie comprendió adonde iba á parar, afirmó rotundamente que el marqués de Santa Marta no había dicho una sola palabra de las que se le atribuían. Otro representante, hizo las mismas manifestaciones, y así un tercero, un cuarto y hasta un quinto ó sexto, todos afirmaron que absolutamente nada había dicho el marqués de Santa Marta en contra del Sr. Pí, ni que pudiera interpretarse en menosprecio

ni en daño de éste. Aclarado de este modo el asunto, y colocados los intrigantes en el lugar que merecían, el marqués de Santa Marta, que se sentía y debía sentirse hondamente herido quiso retirarse, declarando que después de la conducta incalificable seguida con él y demostrada palpablemente la hidalguía de sus procederes, su dignidad le ordenaba abandonar aquella casa. El Sr. Pí, desorientado y confundido, sin querer reconocer su ligereza y sin atreverse á imponer en el acto el correctivo á que se habían hecho acreedores los intrigantes de bajo vuelo que habían urdido una trama de los que solo ofrecen ejemplo las camarillas palaciegas del viejo absolutismo, balbuceó algunas palabras invitando al marqués á permanecer allí, pero en el ánimo de éste solo hicieron alguna fuerza los ruegos de los representantes, que cuando ya estaba á la puerta de la escalera y dándole mil muestras de afecto, le hicieron volver casi á la fuerza, invocando el nombre de los federales y de las regiones cuya representación tenían.

Obligado por estas cariñosas muestras de afecto, y mientras el Sr. Pí dejando la presidencia, se retiró á su despacho, volvió el Marqués por algunos momentos á el salón, no sin hacer constar cuando todos manifestaron que era candidato indiscutible para el Consejo, su firme propósito de no concurrir á una sola de sus sesiones.

Este hecho lamentable determinó entre todos los representantes ajenos al burdo complot, vivísimas co-

rrientes de simpatía hácia el marqués de Santa Marta. Fué unánime entre estos la idea de que era indispensable desagraviar al ilustre patricio tan maltratado por quien tenía más motivos que nadie para conocer y estimar sus altas dotes y su nunca desmentida lealtad, así como su inquebrantable consecuencia. Debía haber partido la iniciativa del desagravio de quien en un arrebató inexplicable infirió la ofensa; pero hay quien entiende mostrar firmeza de carácter perseverando en los errores. Nada tan fácil ni tan airoso para el Sr. Pí como haber despejado la situación, poniendo las cosas en su lugar en el mismo momento. Al ver que nadie mantenía la calumniosa acusación, pudo decir estas ó parecidas palabras: «Señores: Personas que yo creía dignas de mi amistad y de mi confianza se han acercado á mí esta tarde y me han hecho afirmaciones rotundas, que creí ciertas, respecto de enconados ataques dirigidos á mi persona por el marqués de Santa Marta. Sólomente la sinceridad que yo atribuí á esa delación y la lealtad con que en mi espíritu adornaba á los que me la han dirigido, han podido ser causa de que haya puesto un momento en tela de juicio una amistad de veinticinco años, tan franca y verdadera como la que entre el marqués de Santa Marta y yo ha existido. Pero en vista de que los mismos que me han arrastrado á este paso guardan ahora silencio y me dejan en situación comprometida y difícil, debo declarar que considero su conducta como prueba de su perfidia y su falsía, que no los cuento ni puedo contarlos

desde este instante en el número de mis amigos, y que no revelo ante la Asamblea sus nombres, que por otra parte están en la conciencia de todos, porque ni aun esta distinción merecen.»

Con lo cual y con una sencillísima explicación al marqués de Santa Marta, que tiene el ánimo demasiado abierto y el corazón demasiado amplio para perdonar, todo hubiera terminado, quedando sólo en mal lugar y entregados al desprecio de sus correligionarios, los iniciadores de la ridícula y mujeril intriga.

No sucedió esto; no hubo explicación alguna; los intrigantes quedaron impunes y alentados indirectamente para renovar sus hazañas, y el marqués de Santa Marta en el alto concepto que merecía, pero con el hondo resentimiento que no puede menos de experimentar toda persona leal y digna que tras una agresión injusta no recibe la inmediata y espontánea satisfacción á que es acreedora.

Sin embargo, ni por un solo momento pensó en tomar represalias: los acontecimientos posteriores demuestran precisamente lo contrario, esto es, que el Sr. Pí no ha perdonado al marqués de Santa Marta el propio é injustificado arrebató suyo, de que había pretendido hacerle blanco.

Los representantes de la Asamblea federal deseaban ofrecer una reparación al marqués de Santa Marta y no creyeron ninguna tan adecuada como votarle por unanimidad individuo del Consejo, y así lo hicieron, no obstante las reiteradas manifestaciones del Marqués

revelando su decidido propósito de no aceptar el cargo.

Esto motivó el incidente de la última sesión pública de la Asamblea, que tanto ocupó la atención de la prensa por aquellos días y que solo podían explicarse de un modo satisfactorio los representantes de la Asamblea, que se creyeron obligados á no divulgar lo que con tan profunda pena habían presenciado la noche anterior.

Apenas terminado el escrutinio y hecha la proclamación de los individuos del Consejo, pidió la palabra el marqués de Santa Marta y manifestó que, agradeciendo mucho la distinción con que le honraba la Asamblea, no podía aceptarla por motivos que conocían los señores representantes, y pedía por tanto, se eliminase su nombre del número de Consejeros. Gran número de representantes suplicaron al Marqués que retirase su renuncia y algunos pidieron la palabra y consumieron turno para que la Asamblea no admitiese la renuncia, encomiando al mismo tiempo los servicios y merecimientos del Marqués. Insistió éste en su determinación, agradeciendo aquellas muestras de cariño y manifestando que puesto que nadie mejor que los representantes sabía cuán fundada era, la admitiesen y no le pusieran en el triste caso de exponer públicamente los motivos á que obedecía; y ante las aclamaciones de la Asamblea, que demostraban la resolución de no aceptarla, declaró solemnemente que estaba decidido á no asistir á una sola de las sesiones del Consejo, respon-

diéndoselo por todos que, á pesar de eso, debía formar parte de la jefatura del partido.

Por unanimidad acordó la Asamblea no admitir la renuncia, y como uno de los Vicepresidentes, que presidía por ausencia de Pí, dijera que el marqués de Santa Marta concurriría al Consejo siempre que los intereses de la patria así lo exigiesen, contestó muy oportunamente el interpelado que nunca, ni dentro ni fuera del Consejo, había desatendido esos intereses y que para servirlos hasta el sacrificio no necesitaba pertenecer al Consejo ni formar parte de jefaturas, declaración que fué recibida con unánime y cerrado aplauso de los representantes y de la numerosa concurrencia que llenaba el local del Casino Federal, en donde se celebró la sesión. Inmediatamente se retiró el Marqués seguido por muchos correligionarios que le daban pruebas cariñosas de su simpatía.

Tal fué el acto que determinó el rompimiento entre los señores marqués de Santa Marta y Pí y Margall. Nadie encontró correcto lo sucedido, y aun los mismos que por exceso de simpatía personal buscaban atenuantes á lo que con justicia se denominó *encerrona*, sintieron muy enfriados los entusiasmos que hacía determinados hombres les arrastraban, y hubieron de comprender una vez más cuánto importa amar con carácter definitivo las ideas y no convertir á hombre alguno en su símbolo.

De cada cien hombres colocados por una agresión injustísima en el caso del marqués de Santa Marta,

noventa y nueve habrían desde aquel instante buscado un pretexto para declarar guerra sañuda al Sr. Pí y Margall. No lo hizo así el marqués de Santa Marta, y este es uno de los rasgos que más le honran, entre los muchos buenos que esmaltan su vida. Supo hacerse superior, no solo á los estímulos del amor propio ultrajado por un atropello sin ejemplo, sino á las sugestiones de más de uno y de más de dos testigos presenciales de la encerrona, que le incitaban á realizar un acto en que diera merecida respuesta á la agresión de que había querido hacérsele objeto, y en que tan airoosamente había quedado.

Cumplió el marqués de Santa Marta su palabra de no asistir á ninguna de las sesiones del Consejo, pero continuó esperando, haciendo un verdadero derroche de abnegación y paciencia, que el Sr. Pí resolviese felizmente los graves problemas que había á la sazón pendientes, y colocando por encima de todo interés el de las ideas, con abstracción de todo móvil personal, apoyo con su periódico *La República*, muy vigorosa y eficazmente al Sr. Pí, nueva prueba de lealtad de que pocos son capaces en un país donde el personalismo y el interés personal lo son todo. Hasta este punto llevó su fidelidad y su patriotismo el marqués de Santa Marta en aquellos instantes en que parecía que iba á decidirse, con la actitud de los republicanos, la suerte y el porvenir de la democracia.

No hay para qué decir que el choque moral que sufrió el marqués de Santa Marta al entibiar sus rela-

ciones personales con el Sr. Pí, fué inmenso. En caracteres como el del Marqués la amistad es un culto y crea lazos cuya violenta ruptura no puede menos de ser muy dolorosa. Quedábale un consuelo, grande á la verdad, el de no haber promovido directa ni indirectamente este choque, debido á una torpe y calumniosa delación, hartamente acogida. De todas suertes, sólo desde entonces comenzó á verse con entera claridad de lo que era capaz como político el marqués de Santa Marta, abandonado á su sola y personal iniciativa. Confundido hasta entonces con la personalidad política del Sr. Pí y Margall en identificación casi absoluta, no había tenido ocasión de desplegar en toda su fuerza sus grandes energías. Reducido á la situación de relativo aislamiento que desde aquel punto por la fatalidad de los hechos se le creaba, mostró que había en su voluntad el vigor y en su inteligencia las grandes ideas necesarias para marcar no solo á su partido, sino á la democracia entera rumbos de salvación. Sólo desde ese instante adquirió la personalidad del Marqués el relieve que su modestia y su abnegación habían velado en parte mientras estuvo como soldado de fila al lado del Sr. Pí y Margall. Bastaron pocos meses para que, abandonado á sus generosos impulsos y en virtud de su propia y personal representación, asumiese dentro de la comunión democrática entera una autoridad y una importancia que jamás tuvieron aisladamente los jefes de los partidos. Y es que el Marqués supo hacerse eco de las opiniones íntimas de

los republicanos todos; fué el hombre en quien tomó realidad el movimiento poderoso de concordia que existía en el seno de los partidos; habló á las masas con preferencia á los jefes y tuvo la fortuna de llevar la democracia á la organización interior de las agrupaciones republicanas, regidas hasta entonces por una autocracia que hacía ilusorios los derechos personales. En este concepto y cualesquiera que hayan sido las contingencias posteriores, su obra ha sido indestructible: señaló el verdadero camino para el triunfo de la República, y todos los demócratas hacen hoy en el fondo de sus corazones plena justicia á la sinceridad y desinterés de sus propósitos y aplauden su regeneradora iniciativa.

Grandes habían sido los merecimientos del marqués de Santa Marta en los primeros veinticinco años de su vida pública; pero es tal la importancia y la magnitud de la empresa que con inmejorable éxito acometió cuando pudo obrar por su cuenta, que bien puede decirse que sólo desde entonces comienza su verdadera biografía. Desligado de todo género de compromisos personales y siguiendo solo las aspiraciones de su corazón y de su conciencia, mostró lo que podía y lo que valía y adquirió títulos á la estimación sincera de todos los amantes de la causa republicana.



ÍNDICE DEL TOMO PRIMERO

	PÁGS.
Retrato del Excmo. Sr. D. Enrique Pérez de Guzmán, Marqués de Santa Marta.....	3
Introducción	5
Plan de la obra.....	13

Primer período.

CAPÍTULO I.—Carácter é inclinaciones de D. Enrique Pérez de Guzmán el Bueno.—Su genealogía.—Primeros tiempos de su juventud.—Sus estudios universitarios y su vocación por la milicia.—Viajes por Europa y afición que en él determinan las Bellas Artes.—Sus estudios y tendencias políticas.....	23
CAPÍTULO II.—Desarrollo de la política española durante el primer período de esta biografía.—La libertad y el absolutismo.—Guerra de los siete años.—Moderados y progresistas.—Convicciones democráticas y republicanas de D. Enrique Pérez de Guzmán.....	43
CAPÍTULO III.—Actitud del marqués de Santa Marta ante el movimiento de 1854.—Origen y vicisitudes de los partidos democrático y republicano.—Influencia de los trabajos masonicos en el desarrollo de las ideas republicanas.—La unión liberal y sus desastrosas empresas militares.—Fusión de los demócratas con los republicanos.—Ingreso del marqués de Santa Marta en la política activa.....	57

Segundo período.

CAPÍTULO IV.—Primeros trabajos revolucionarios del marqués de Santa Marta.—La noche de San Daniel.—El llamado <i>rasgo</i> de doña Isabel II.—Campana del marqués de Santa Marta contra el Banco de España.—Impresión que causó esta campana en la opinión pública.—Vicisitudes del asunto: abusiva influencia del gobierno en favor del Banco.—Triunfo del marqués de Santa Marta.....	83
CAPÍTULO V.—El marqués de Santa Marta en el Comité de acción revolucionaria.—Sus trabajos en el partido democrático.—Diversas tendencias de los conspiradores.—Su	

ÍNDICE

	PÁGS.
blevación del 3 de Enero de 1867.—Entrada de los insurrectos en Portugal.—Preparativos de un nuevo movimiento.—Intervención del marqués de Santa Marta en los preparativos del movimiento de 22 de Junio.—Sucesos de este día en Madrid.—Generosa actitud de los demócratas y doblez de sus aliados.....	117
CAPÍTULO VI.—O'Donnell es lanzado del poder después de su triunfo.—Tendencia absolutista de los últimos gobiernos de doña Isabel II.—Persecuciones sufridas por los progresistas y demócratas.—Nuevos trabajos revolucionarios.—Juntas de Bruselas y Ostende.—Movimiento de Agosto de 1867.—Destierros de varios generales unionistas.—Relaciones entre éstos y el general Prim.—Trabajos de Montpensier.—Preparativos del alzamiento de Septiembre de 1868.—Actitud del marqués de Santa Marta.....	139
CAPÍTULO VII.—Preparativos del movimiento insurreccional de 1868.—Gestiones del duque de Montpensier.—Dificultades que le opuso el general Prim.—Recelos entre progresistas y unionistas.—Actitud resuelta de los demócratas.—Sublevación de la marina.—Regreso de los generales desterrados en Canarias.—Batalla de Alcolea.—Llegada del general Serrano á Madrid.—Censurable conducta de la Junta Suprema.—Actitud del marqués de Santa Marta...	161

Tercer período.

CAPÍTULO VIII.—Carácter y sentido de la revolución de Septiembre.—Su genuina significación antimonárquica.—Hechos y razones que la demuestran y confirman.—Necesidad de fijar estos antecedentes como datos indispensables para el juicio de la conducta del marqués de Santa Marta.—Criterio de éste en lo relativo á la organización de los poderes provisionales de la revolución, según la exigen los principios democráticos y las tradiciones de nuestro pueblo.—Importancia de esta organización para los fines revolucionarios.—Antagonismo de tendencias en los primeros instantes, reducidos al constituirse la Junta Central.—Desencanto del pueblo al formarse el gobierno provisional.—Pensamiento del marqués de Santa Marta.—Consideraciones sobre este punto.....	177
CAPÍTULO IX.—Patriótica abdicación de las Juntas.—Correspondencia de los monárquicos.—Influencia decisiva que tuvo la opinión republicana en el éxito del alzamiento de Cádiz.—Prim y Serrano se apoderan del gobierno.—Causas de que quedasen excluidos de él los demócratas que se habían declarado monárquicos.—Apostasia de Martos.—Hostilidad manifiesta de Prim contra los republicanos.—Tendencias favorables á la monarquía en el gobierno.—Manifestación de demócratas, progresistas y unionistas.—Declaraciones del gobierno con este motivo.—Influencia y trabajos del marqués de Santa Marta en la organización	

ÍNDICE

PÁGS.

del partido federal.—Brillantes resultados y manifestaciones de esta organización, que demostraban la seguridad del éxito si las Juntas se hubieran negado á resolverse.—Proceder generoso del marqués de Santa Marta ante esta justificación de sus opiniones y criterio.—Su intervención en los actos y manifestaciones del partido frente á las arbitrariedades y provocaciones del gobierno.—Es elegido diputado de las Cortes Constituyentes.....	193
CAPÍTULO X.—Política del gobierno provisional.—Las Constituyentes de 1869.—Actitud de la minoría republicana.—Sublevación federal.—Política del marqués de Santa Marta en las Constituyentes y en el seno de su partido.—Se niega á firmar la Constitución de 1869.—Regencia de Serrano.—Tentativas para la elección de un monarca.—La guerra franco-prusiana como consecuencia de esas gestiones.—Actitud enérgica del marqués de Santa Marta para evitar la constitución de una República dictatorial, presidida por el general Prim.—Elección de D. Amadeo de Saboya para rey de España.—Borrascosas sesiones de Cortes.—Proposición Romero Robledo.—Asesinato del general Prim.—Condiciones en que terminaron su existencia las primeras Cortes de la Revolución...	213
CAPÍTULO XI.—Campana parlamentaria del marqués de Santa Marta en las Constituyentes de 1869.—Interpelación acerca de un atentado contra los derechos individuales.—Interpelación al ministro de Marina sobre un atentado contra la libertad de conciencia de los operarios del arsenal del Ferrol.—Discurso combatiendo el presupuesto de la Guerra.—Interpelación sobre los malos tratamientos sufridos por los republicanos presos en la Carraca.—Discurso combatiendo la consignación de fondos secretos.—Preguntas al ministro de Hacienda.—Intervención en el proyecto de ley electoral.—Cuestión sobre incompatibilidades de empleados públicos.—Nuevas interpelaciones y preguntas: incidente parlamentario con los Sres. Prim y Rivero.—Nuevas preguntas é interpelaciones.—Resumen.	243
CAPÍTULO XII.—Reinado de D. Amadeo de Saboya.—Vanas tentativas de conciliación entre unionistas y progresistas, bajo la jefatura del general Serrano.—División del partido progresista en dos grupos, capitaneados por Ruiz Zorrilla y Sagasta.—Encarnizada lucha entre estas fracciones.—Oposición exagerada del grupo radical ó zorrillista.—Instabilidad de los gobiernos y los Parlamentos.—Actitud del partido federal frente á la monarquía de D. Amadeo: pensamiento del marqués de Santa Marta: sus triunfos electorales.—Luchas entre benévolos é intransigentes.—El marqués de Santa Marta es elegido individuo del Directorio ó jefatura del partido federal.—Sublevación del Ferrol.—Disolución del Cuerpo de Artillería.—Renuncia del trono de España por D. Amadeo de Saboya y proclamación de la República.....	285

ÍNDICE

PÁGS.

Cuarto período.

- CAPÍTULO XIII.—Advenimiento de la República.—Condiciones en que fué proclamada.—Compromiso entre republicanos históricos y radicales.—Antinomia entre la posición real y la aparente de cada uno de estos partidos.—Los monárquicos vencidos son los árbitros: los republicanos vencedores aparecen como sometidos.—Lealtad de los republicanos.—Se reproduce el conflicto de las Juntas revolucionarias.—Su disolución.—Intervención del marqués de Santa Marta en los acontecimientos.—Sus trabajos para encauzar la política republicana.—Fracaso de la candidatura de Rivero para presidente del Poder Ejecutivo.—Significación de este fracaso.—Trabajos del marqués de Santa Marta en el nombramiento del Poder Ejecutivo.—Situación de los republicanos después de constituido aquél y elegido el Sr. Martos presidente de la Asamblea..... 317
- CAPÍTULO XIV.—Dificultades de la situación por e usa de las condiciones en que se proclamó la República, á juicio del marqués de Santa Marta.—Modo de apreciar este el estado de cosas durante el gobierno de coalición.—Aclaraciones acerca del verdadero concepto de aquella transacción en armonía con el criterio del marqués de Santa Marta y del compromiso con los radicales.—Consecuencias de la exagerada lealtad de los republicanos.—Conducta de los radicales.—Concepto mantenido por el marqués de Santa Marta sobre el carácter de la política republicana en aquel período.—Su actitud.—Su resolución de mantener la independencia de sus opiniones.—Conducta prudente y previsora ante la gravedad de las circunstancias.—Su intervención en los sucesos del 23 de Febrero..... 331
- CAPÍTULO XV.—Estado de la República después del 23 de Febrero.—Conducta de los radicales.—Proceder del gobierno. Decepción del marqués de Santa Marta por la política de temporizaciones.—Su oposición á ella.—Es nombrado delegado del gobierno de la República para administrar el antiguo Patrimonio de la Corona.—Sus manifestaciones favorables á procedimientos de energía.—Su intervención para evitar conflictos peligrosos para la suerte de la República.—Sus opiniones respecto de la disolución de la Asamblea y de la Comisión permanente.—Grave situación del país al suspenderse las sesiones de Cortes.—Sucesos posteriores.—Antecedentes de la conspiración del 23 de Abril.—Intervención del marqués de Santa en los acontecimientos de aquellos días.—Disolución de la Comisión permanente.—Renacen las esperanzas de los republicanos..... 347
- CAPÍTULO XVI.—Nuevas contrariedades suscitadas por la conducta del gobierno.—El marqués de Santa Marta proclama la necesidad de una política revolucionaria sin contemplaciones.—Fundamentos de esta opinión.—Coincidencia de

ÍNDICE

	PÁGS.
este criterio con la opinión republicana y con las aspiraciones del país.—Facilidades para el ejercicio de la política de acuerdo con este sentido.—Consecuencias de no haberla realizado.—Reacción favorable producida por el triunfo electoral y la reunión de la Asamblea.—Trabajos del marqués de Santa Marta para aprovechar este triunfo.—Proclamación de la República federal.	363
CAPÍTULO XVII.—Verdadero alcance del acuerdo de la Asamblea proclamando la República federal como forma de gobierno.—Lo que significaba y las consecuencias que debían seguirlo en opinión del marqués de Santa Marta.—Urgencia de coronar la obra con resoluciones inmediatas.—Nuevo desencanto producido por la conducta de la Asamblea.—El parlamentarismo en la República.—Esfuerzos del marqués de Santa Marta para vencer los obstáculos que se oponían al planteamiento de la federación.—Obstinación de los prohombres en la política doctrinaria.—Serenidad de fortaleza de ánimo mostrada por el marqués de Santa Marta en la difícil situación de la República.—Consecuencias del doctrinarismo.—Insurrección cantonal.—Oposición del marqués de Santa Marta á la política de represalias del nuevo gobierno.	373
CAPÍTULO XVIII.—El marqués de Santa Marta, el gobierno y los cantonales.—Tenacidad del gobierno.—Consecuencias de su política.—Esfuerzos del marqués de Santa Marta para encauzarla y perseverancia en sus trabajos después de la suspensión de las sesiones de la Asamblea.—Actitud del marqués de Santa Marta enfrente de la dictadura de Castelar.—Sus trabajos para organizar la defensa de las instituciones democráticas.—Sus consecuencias.—Protestas de los republicanos.—Intervención del marqués de Santa Marta en los trabajos preparatorios para la continuación de los trabajos de la Asamblea.—Sesión del 2 de Enero de 1874.—Fin de la República.	375
CAPÍTULO XIX.—Gestión del marqués de Santa Marta como delegado de la República al Patrimonio que fué de la Corona.—Plan de alta política que perseguía al aceptar este cargo.—Alcance de sus proyectos desamortizadores.—Idea de los principales actos de su administración.—Su discurso en 2 de Julio de 1873 ante la Cámara Constituyente, exponiendo su gestión al frente del Patrimonio.—Elogios que esta gestión ha merecido á todo los políticos, así republicanos como monárquicos.—Dimisión del marqués de Santa Marta y consideraciones acerca de su campaña administrativa.	597

Quinto periodo.

CAPÍTULO XX.—Situación de los republicanos después del 3 de Enero de 1874.—Medidas adoptadas por el gobierno usurpador.—Planes de persecución propuestos por el mi-

ÍNDICE

PÁGS.

nistro García Ruiz.—Conducta del marqués de Santa Marta ante las tropelías gubernamentales.—Amenazas contra su persona.—Arrostra las iras de los enemigos de la República.—Su actitud ante el giro que tomaban los asuntos políticos y la situación de las agrupaciones republicanas..	425
CAPÍTULO XXI.—El golpe de Sagunto confirma las previsiones del marqués de Santa Marta.—Su actitud ante el nuevo estado de cosas creado por la restauración.—Su juicio acerca del breve reinado de la República.—Sus opiniones acerca de las causas de su rápida decadencia y desaparición.—Antecedentes de estos juicios.—Su criterio y norma de acción respecto de la organización republicana.—Dificultades opuestas á su realización por el Sr. Ruiz Zorrilla.—Razones que determinaron la conducta del marqués de Santa Marta en las negociaciones para llegar á un acuerdo entre los grupos republicanos..	439
CAPÍTULO XXII.—Confirmaciones de las opiniones y criterio del marqués de Santa Marta respecto á la política republicana por el fracaso de las gestiones del Sr. Ruiz Zorrilla y por las disidencias de los Sres. Salmerón y Figueras.—Publicase el manifiesto de París.—Disidencia del Sr. Figueras.—Propaganda en favor de la unión democrática.—Todos los actos y la conducta de los republicanos convergían á realizar el fin de la diferenciación.—Triunfo del criterio sostenido por el marqués de Santa Marta en esta materia.—Determinación del dogma federal.—Su intervención en esta tarea.—Publicación de <i>Las Nacionalidades</i> ; determinada en gran parte por las excitaciones repetidas del marqués de Santa Marta..	455
CAPÍTULO XXIII.—Dificultades con que luchaba la organización de los republicanos.—Participación que en este ingrato y laborioso cuanto patriótico empeño tuvo el marqués de Santa Marta.—Sus esfuerzos para impedir que tuviesen éxito en nuestro campo las excitaciones del señor Zorrilla.—Su actitud serena, resuelta y enérgica ante las perturbaciones pasajeras, propias de todo período de reorganización.—Disidencia de D. Estanislao Figueras.—Nueva confirmación por los hechos realizados en el campo republicano de las teorías y criterio del marqués de Santa Marta sobre la política de los republicanos..	465
CAPÍTULO XXIV.—Organización de las fuerzas federales.—Dichoso término de éstas.—Necesidad de un concierto entre los partidos para una acción común.—Dificultades de la situación de los progresistas por haber retrasado su organización.—Carácter que este concierto ó coalición debía tener, según el criterio del marqués de Santa Marta.—La coalición, según él, habia de ser exclusivamente revolucionaria.—Razones que aconsejaba esta actitud como impuesta por la dignidad á los republicanos.—Dificultades opuestas por el partido progresista.—El marqués de Santa Mar-	

ta es nombrado individuo del Consejo federal.—Fundación del periódico <i>La República</i>	475
CAPÍTULO XXV.—Calidad é importancia del hecho de la fundación del periódico <i>La República</i> por el marqués de Santa Marta.—El periódico de empresa y los periódicos de partido.—Sacrificios que éstos representan para sus fundadores y sostenedores.—Propósitos del marqués de Santa Marta para el porvenir de su periódico.—Su conducta en la preparación de éste y al formar el cuadro de redacción.	487

Sexto período.

CAPÍTULO XXVI.—Opiniones del marqués de Santa Marta respecto á las relaciones entre los partidos y á la organización de las jefaturas.—Precedentes históricos sobre este particular.—La tradición en la política española.—Actitud correcta del marqués de Santa Marta en el Consejo del partido federal.—Generosidad y nobleza de su desinteresado proceder al fundar el periódico <i>La República</i>	501
CAPÍTULO XXVII.—Primeras campañas del diario <i>La República</i> .—Sucesos promovidos con motivo de los abusos cometidos por la empresa del teatro de la Opera.—Energía y resolución mostrada por el marqués de Santa Marta.—Situación de los republicanos al sobrevenir los sucesos de 1834 y 1835.—Causa de que no pudiesen aprovecharlos en beneficio de la República.—El partido republicano progresista: sus disidencias: causas que las determinaron.—La coalición electoral de 1835 y el marqués de Santa Marta.—Sus resultados.—Relación entre los republicanos después de aquella coalición.—Calamidades públicas que sobrevinieron —Actos caritativos del marqués de Santa Marta...	513
CAPÍTULO XXVIII.—Consideraciones sobre la situación de los republicanos á la muerte del rey D Alfonso —Dificultades para la coalición.—Debilidad que resultó de ese estado de discordia.—Se acuerda al fin la inteligencia en Marzo de 1836.—Carácter electoral de esa coalición.—Designación del marqués de Santa Marta para candidato á diputado á Cortes por Madrid.—Sus opiniones sobre la coalición pactada se confirman por los escasos resultados de ésta.—Sucesos del 19 de Septiembre de 1836.—Actitud que en vista de los mismos adoptaron los diversos partidos republicanos.—Nueva excisión en el bando progresista.—Ruptura de la coalición.....	527
CAPÍTULO XXIX.—La ruptura de la coalición produce marcado descontento en las masas republicanas.—Justificación de este disgusto.—Empieza á bosquejarse la tendencia de buscar una concordia sincera entre los republicanos, ya con aquiescencia de los jefes, ya contra la voluntad de éstos.—Funestas consecuencias de la organización personalista y autocrática de los partidos democráticos.—Relativo apartamiento del marqués de Santa Marta de la poli-	

ÍNDICE

PÁGS

tica activa en este período.—Dolorosas causas de este retraimiento.—Convocatoria de la Asamblea de 1888.—El marqués de Santa Marta es elegido representante por Madrid.—Muestras de simpatías de que fué objeto por parte de los federales.....	541
CAPÍTULO XXX.—Asociación benéfica para socorro de emigrados y presos republicanos.—Causas que determinaron su creación.—Proyectos del marqués de Santa Marta en este sentido.—Su intervención en la <i>Junta benéfica</i> .—Sacrificios que le imponía.—Pensamiento y bases de la <i>Asociación</i> .—Éxito favorable de la misma, debido en gran parte á la gestión del marqués de Santa Marta.—Su favorable influencia para la coalición republicana.—Sus resultados.....	553
CAPÍTULO XXXI.—El marqués de Santa Marta se pone al frente del movimiento de opinión determinado por la acción popular.—Entrega la fianza exigida á la acción popular por los Tribunales.—Alta significación y trascendencia de esta campaña.—Su influencia en la administración de justicia.—Consecuencias beneficiosas de la iniciativa del Marqués en esta cuestión.....	569
CAPÍTULO XXXII.—La Asamblea federal de 1888.—Su actitud decididamente favorable á la coalición republicana.—Necesidad de dirigir por nuevos derroteros la inteligencia y acción común de los partidos republicanos, según el criterio del marqués de Santa Marta.—Intervención de éste en los trabajos de la Asamblea federal.—Identidad de criterio y propósitos entre el Marqués y los representantes de la Asamblea.—Triunfa en ésta el criterio del primero acerca de la conducta del partido en sus relaciones con los afines y en el sentido predominante que debía tener la coalición.—Determinación de los términos en que este asunto quedaba planteado después de los acuerdos de la Asamblea.—Decidida actitud del marqués de Santa Marta respecto de la coalición.....	585
CAPÍTULO XXXIII.—Situación de los ánimos al celebrar sus sesiones la Asamblea federal de 1888.—Tendencia á la adopción de soluciones prácticas.—Creciente influencia del marqués de Santa Marta en el partido federal.—Su discurso defendiendo la jefatura unipersonal.—Efecto producido por ese discurso.—Intrigas contra el marqués de Santa Marta.—Conducta del Sr. Pí y Margall.—Ruptura de relaciones entre el marqués de Santa Marta y el Sr. Pí.....	599

